

Memoria

Cumbre de Jueces sobre Trata de Personas y Crimen Organizado

Prólogo: Dr. Elías Huerta Psihas



PONTIFICIA ACADEMIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES



Ciudad del Vaticano

Edición en Español

— Memoria —

**Cumbre de Jueces
sobre Trata de Personas
y Crimen Organizado**



Título de la Obra

Memoria

Cumbre de Jueces sobre Trata de Personas y Crimen Organizado

Derechos Reservados © 2017

Universidad Ius Semper y la

Pontificia Academia de las Ciencias Sociales

Primera edición, diciembre de 2017

Fotografías proporcionadas por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales

Judge's Summit against Human Trafficking and Organized Crime, original work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

La presente obra literaria es una obra derivada que surge de la adaptación y traducción del texto original "*Judge's Summit against Human Trafficking and Organized Crime*" (la "Obra Original"); publicado originalmente en junio de 2016, en la Ciudad del Vaticano, Extra Series 19 en formato digital y disponible para imprenta por la Pontifical Academy of Social Sciences.

La Obra Original se adaptó por Janet E. Huerta Estefan, el día 24 de julio del año 2016; la traducción de la Obra Original ocurrió el día 22 de septiembre del año 2016 por Julieta Huerta Estefan; cuyos resultados literarios se cedieron a favor de la Universidad Ius Semper, S.C., ambos en calidad de coeditores, mediante acuerdo que por escrito versa en los archivos de las instituciones de referencia, disponibles para posterior consulta. La adaptación y transformación de la Obra Original respeta los términos de la Licencia y se encuentra disponible para consulta a través del vínculo <http://www.pass.va/content/scienze-sociali/en/publications/extraseries/judges.html> visto el 31 de mayo de 2018. La presente obra derivada se realizó con autorización y colaboración de la Pontifical Academy of Social Sciences.

La presente obra está disponible bajo los términos Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) / Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>

Traductor: Julieta Huerta Estefan

Editor: Universidad Ius Semper

Adaptación: Janet E. Huerta Estefan y Julieta Huerta Estefan

Autor de la portada: Mónica Salazar Sánchez

Deberá reportar cualquier impresión, traducción, error o cualquier tipo de sugerencia a través del portal <http://www.iussemper.edu.mx/> o bien, al correo electrónico informes@iussemper.edu.mx. Esta versión se finalizó el 6 de junio de 2018 y se encuentra disponible en línea a través del vínculo <http://www.iussemper.edu.mx/>. En caso de citar o mencionar este libro, por favor, mencionar la URL en comentario, cada ocasión necesaria.

Memoria

Cumbre de Jueces sobre Trata de Personas y Crimen Organizado

Prólogo
Dr. Elías Huerta Psihas



Presentación	13
Prólogo Dr. Elías Huerta Psihas	19
Introducción Obispo Marcelo Sánchez Sorondo	23
Discurso del Papa Francisco	27
Declaración de la Cumbre	35
Relación de Participaciones: Palabras de Apertura Susan Coppedge EEUU	39
<i>Ley y Acuerdos Globales Emergentes sobre la Trata de Personas y Drogas</i> Jeffrey Sachs EEUU	47
<i>Perspectivas Judiciales de los Casos de Tráfico de Personas en Estados Unidos: Gestión Centrada en las Víctimas, Problemas en los Juicios y la Restitución</i> Leslie J. Abrams, Richard W. Story y Beverly B. Martin EEUU	51
<i>El Esfuerzo de los Tribunales Mexicanos en el Ataque a la Trata de Personas</i> Edgar Elías Azar México	63
<i>Juntos por la Defensa de la Dignidad Humana</i> Margarita Popova Bulgaria	73
<i>Combatir la Trata de Personas en México</i> Rodolfo F. Ríos Garza México	81
<i>La Trata de Personas: un Crimen contra la Dignidad Humana</i> Yves Charpenel Francia	85
<i>Causas y Soluciones para la Trata de Personas: Un Problema de Índole Transnacional</i> Miguel Ángel Aguilar López México	93

<i>Enfrentando el Tráfico de Personas en Brasil: Logros y Retos</i> Carlos Haddad Brasil	109
<i>La Perpetuación de la Trata de Personas: Como la Corrupción Pública Erosiona en el Estado de Derecho Facilita la Industria de Abuso</i> Virginia M. Kendall EEUU	115
<i>El Abordaje de las Víctimas de Trata de Personas en el Perú: Un Gran Desafío a Vencer</i> Rosario López Wong Perú	123
<i>Desafíos Actuales en la Investigación del Delito de Trata de Personas</i> Santiago Inchausti Argentina	129
<i>Un Enfoque Holístico de los Esfuerzos Contra la Trata de Personas: Del Estado de Derecho a la Prevención</i> Kevin Hyland Reino Unido	141
<i>Protección de Víctimas y el Proceso Penal</i> Alison Saunders Reino Unido	151
<i>La Ley de la Esclavitud Moderna del 2015: su Impacto en el Poder Judicial de Inglaterra y Gales</i> Ann Elizabeth Butler-Sloss y Christopher Prince Reino Unido	159
<i>La Ley de la Esclavitud Moderna 2015: Evaluando el Efecto</i> Philip Norton de Louth Reino Unido	165
<i>La Ley en un solo Paso. El Rol de los Jueces en la Investigación de los Delitos de Trata de Personas</i> Susana Medina de Rizzo Argentina	171
<i>La Justicia para las Víctimas de los Delitos de Trata y Formas de Explotación de Personas en México</i> María Teresa Paredes Hernández México	175
<i>La Trata de Personas en la Modalidad de Pornografía Infantil</i> Eber Omar Betanzos Torres México	187

<i>Grooming, Cuando tu Depredador, está a Sólo un Clic</i> José Luís Vegas Roche Venezuela	197
<i>La Trata de Personas y la Importancia de la Conciencia de los Jueces</i> Corinne E. Dettmeijer-Vermeulen Holanda	217
<i>El Modelo Sueco: Detener la Prostitución y la Trata de Personas donde Todo Comienza</i> Anna Skarhed Suiza	223
<i>Las Dificultades para Procesar y Tratar Casos de THB en Relación con la Explotación Laboral</i> Ulrich Nachtberger Austria	229
<i>La Justicia, los Trabajadores y la Lucha Contra el Trabajo Forzoso (Trabajo Esclavo)</i> Julio Piumato Argentina	235
<i>Las Dificultades del Procesamiento y Enjuiciamiento de Casos de Tráfico Humano con Respecto a la Explotación Laboral</i> Zélia Luiza Pierdoná Brasil	239
<i>Trata de Personas. La Experiencia en Costa Rica</i> Jorge Chavarría Guzmán Costa Rica	245
<i>La (Mala) Experiencia de Venezuela en la Lucha Contra la Trata de Personas</i> Luis Alberto Petit Guerra Venezuela	251
<i>La Lucha Contra la Trata de Personas. La Experiencia de Grecia</i> Christos Naintos Grecia	261
<i>El Cambio Climático y el Tráfico Humano Posterior al Tratado de París</i> Michael B. Gerrard EEUU	267
<i>Nuestro Desafío: Erradicar la Trata de Personas en el Siglo XXI</i> Gloria Guzmán Duque Colombia	271
<i>Procesamientos de Servidumbre Doméstica: ¿Una Paradoja Para los Buscadores de Datos?</i> Richard S. Moultrie Jr. EEUU	279

<i>El Rol de la Corte Suprema de Argentina en Materia de Narcotráfico</i> Ricardo Luis Lorenzetti Argentina	287
<i>Lo Ordinario y lo Extraordinario en el Crimen Organizado</i> Daniel Eduardo Adler Argentina	293
<i>La Colaboración Internacional en Materia de Criminalidad Organizada: del Dicho al Hecho</i> Dr. Sebastián Casanello Argentina	301
<i>Una Dogmática Penal para el Crimen Organizado o Cómo Imputar Penalmente a las Organizaciones Criminales</i> Marcelo Colombo Argentina	309
<i>Vulnerables y Crimen Organizado: Un Gran Desafío de Nuestro Siglo</i> Julián Ercolini Argentina	319
<i>El Narcotráfico: El Acecho a la Democracia</i> María Romilda Servini de Cubria Argentina	325
<i>Narcotráfico y Lavado de Activos: Necesidad de una Visión Integral</i> Sergio Gabriel Torres Argentina	327
<i>Narcotráfico y Corrupción</i> Zunilda Niremperger Argentina	333
<i>Narcotráfico y Corrupción Institucional</i> Carlos A. Vera Barros Argentina	341
<i>Propuestas para Mejorar la Investigación en los Delitos de Narcotráfico y Trata de Personas</i> Miguel Eugenio Abásolo Argentina	351
<i>La Inclusión Social como Herramienta de Prevención del Crimen Organizado</i> Diego Sebastián Luciani Argentina	357
<i>El Crimen Organizado: Una Amenaza Contra el Sistema de Bienestar Sueco</i> Mari Heidenborg Suiza	365

<i>Casos de Crimen Organizado: Equilibrio entre Justicia y Misericordia</i> William S. Duffey Jr. EEUU	369
<i>Cooperación Internacional en la Lucha Contra la Trata de Seres Humanos</i> Vladimir Aras Brasil	375
<i>Acciones Conjuntas y Cooperación del Poder Judicial. Una Respuesta al Crimen Organizado</i> Branko Hrvatin Croacia	381
<i>Esfuerzos Judiciales para Prevenir el Crimen Organizado en Corea del Sur</i> Sang-jin Oh Corea	387
<i>En Búsqueda de la Eficacia en la Lucha Contra el Crimen Organizado Nacional y Transaccional. Una Propuesta de Investigación</i> Sandra Patricia Ramíres Montes Colombia	393
<i>La Organización Criminal. Tratamiento Penal y Procesal en Brasil</i> Rômulo de Andrade Moreira Brasil	399
<i>La Globalización del Crimen Organizado en Lituania</i> Dr. Aurelijus Gatauskas Lituania	405
<i>Los Peligros que se Enfrentan en la Lucha Contra el Terrorismo y Crimen Organizado</i> Marcel Lemonde Francia	415
<i>La Lucha Contra el Modelo Cultural del Narcotráfico</i> Claudio Rodolfo Kishimoto Argentina	421
<i>La Sociedad como Panóptico del Crimen Organizado</i> Ariel Oscar Lijo Argentina	427
<i>Las Organizaciones Criminales y el Tráfico Ilícito de Migrantes</i> Giovanni Salvi Italia	433
<i>La Mafia y la Corrupción</i> Franco Roberti Italia	439

<i>Migración, Tráfico y Conflicto: Protección de los Derechos Humanos y las Esperanzas Humanas</i> Maria Grazia Giammarinaro Italia	445
<i>Avances y Desafíos en la Persecución Penal Estratégica del Delito de Trata de Personas en Guatemala</i> Mynor Rolando Pinto Sánchez Guatemala	451
<i>Guerra y Trata de Personas en Colombia</i> Gabriel Bustamante Peña Colombia	455
<i>Cumbre sobre la Trata de Personas y el Crimen Organizado</i> David W. Rivkin EEUU	465
<i>Crimen Organizado y la Investigación de la Trata de Personas en Paraguay</i> Francisco Javier Díaz Verón Paraguay	473
<i>Trata de Personas: las Mujeres y los Niños Víctimas</i> Maria Monteleone Italia	479
<i>Buenas Prácticas para Combatir la Trata en el Mundo</i> Guillermina Cabrera Figueroa México	487
<i>La Realidad de la Trata en el Perú</i> Janet Tello Gilardi Perú	493
<i>La Trata de Personas y los Avances Tecnológicos. La Perspectiva de un Fiscal</i> Yonette Sam-Buchanan EEUU	501
<i>Particularidades de la Trata de Personas en el Paraguay</i> Teresa Martínez Acosta Paraguay	507
<i>Crisis Planetaria, Trata de Personas y Crimen Organizado</i> Antonio Herman Benjamin Brasil	511
Programa de la Cumbre Oradores Observadores	517

Presentación

Bajo el impulso del Papa Francisco, el pasado mes de junio de 2016 la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales convocó a jueces, fiscales y académicos de todo el mundo, interesados en la erradicación de la trata y tráfico de personas, a participar en un foro que se denominó *Cumbre de los Jueces sobre la Trata de Personas y el Crimen Organizado*, a la que asistieron aproximadamente 200 especialistas de 50 países de América, Europa, Asia y África, con el propósito central de intercambiar experiencias y conocer las mejores prácticas en la lucha contra el



delito de Trata de Personas y otras formas de esclavitud moderna, como la venta de órganos, los trabajos forzados, la explotación infantil y la prostitución y concientizar a los jueces y fiscales del mundo sobre la necesidad de unirse y sumar esfuerzos y experiencias para combatir globalmente estos delitos y realizar acciones internacionales conjuntas en esta dirección.

El encuentro se realizó durante los días 3 y 4 de junio en la Casina Pio IV, con sede en el Vaticano. Los presidentes de tribunales, jueces, fiscales, procuradores, académicos y activistas que se dieron cita, expusieron sus reflexiones e ideas sobre las acciones de prevención y combate a estas conductas ilícitas que se están llevando a cabo en sus respectivos países. El objetivo fue contrarrestar y erradicar estas conductas delictivas, vinculadas a la delincuencia organizada, que afectan la libertad y la dignidad de cerca de 45 millones de personas en todo el mundo, de mujeres, hombres, jóvenes y niños, sujetos a trata y tráfico de personas, de tráfico de órganos, explotación y trabajo deshumano o prostitución, que según cifras de la ONU, representan en el mundo la tercera actividad ilícita más lucrativa, después del narcotráfico y el tráfico ilegal de armas.

Tomando en consideración el éxito que tuvo la *Cumbre*, las múltiples peticiones que los participantes hicieron a los organizadores del evento sobre las diferentes ponencias que se presentaron durante los dos días de trabajo, y por considerar que se trata de un material de gran utilidad para los esfuerzos presentes y futuros que se hagan en esta materia en todo el mundo, de manera conjunta, la Academia y el Dr. Elías Huerta Psihas, Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho de México y Rector de la Universidad *Ius Semper*, acordamos emprender el esfuerzo de recopilar los textos expuestos en dicha reunión y concretar la Memoria de la misma, con traducción al español de aquellas intervenciones que fueron presentadas originalmente en inglés e italiano.

Después de varios meses de trabajo, la Academia y la Universidad *Ius Semper*, ponen a disposición de los lectores de habla hispana interesadas en este fenómeno, en estas nuevas formas modernas de esclavitud, la primera edición de la *Memoria de la Cumbre de Jueces sobre Trata de Personas y Crimen Organizado* que contienen las reflexiones y ex-

perencias sobre la materia de todos los participantes de los diversos países, quienes acordaron por unanimidad 10 conclusiones del foro en puntos muy precisos —algunas ya asumidos por la ONU—, que deberían ser reconocidos y plasmados en las leyes de todos los países, particularmente porque los delincuentes en la materia se manejan con gran facilidad en nuestro mundo global, y mientras que los Estados tienen espacios no cubiertos, los traficantes los utilizan obteniendo ventaja para la práctica en este tipo de conductas negativas. Creemos que al compartir experiencias como las realizadas en la *Cumbre*, será más fácil para los gobiernos actuar, para los fiscales perseguir y para los jueces sentenciar y reconocer la importancia de apoyar a las víctimas con asistencia civil, médica y legal.

La obra contiene, además de las casi setenta intervenciones que se presentaron en la *Cumbre*, las palabras introductorias del suscrito, el Mensaje del Papa Francisco pronunciado durante la inauguración del evento, dirigido principalmente a los jueces y fiscales de todo el mundo, quienes sufren presiones y amenazas y que “arriesgan el pellejo” en la erradicación de la trata y tráfico de personas y de la criminalidad organizada, y la Declaración de la *Cumbre*, que en 10 puntos presenta las conclusiones del foro, suscritas por todos los participantes de los diversos países, sin importar si eran del sistema Común Law o de Derecho Civil.

Sobresalen de estas propuestas las cuatro primeras, que pugnan por:

- Promover en cada estado el incremento de los recursos y de la colaboración judicial y policial nacional e internacional, con el fin de aumentar las bajas tasas actuales de procesos y de condenas para los crímenes con el fortalecimiento de los organismos supranacionales de la lucha contra los traficantes y de la tutela de los Derechos Humanos.
- Una vez aprobados los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y ratificado el Protocolo de Palermo del año 2000 contra la trata de personas, todas las naciones tienen que reconocer la esclavitud moderna, la trata de personas, el trabajo forzoso y la prostitución como crímenes de la humanidad con penas proporcionadas.
- Los bienes incautados a traficantes y criminales ya condenados deben



Casina Pío IV, sede de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, Ciudad del Vaticano

ser utilizados para la rehabilitación y compensación de las víctimas, y para la reparación de la sociedad. El delito de lavado de dinero debe ser intensamente perseguido, porque consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales.

- Abogar para proporcionar un apoyo adecuado a las víctimas que incluya la asistencia civil y legal, una protección segura de los testigos, la asistencia médica y el sostén a las personas por parte de las agencias de servicios sociales, especialmente en el caso de las víctimas indocumentadas. Favorecer la colaboración con la justicia de las víctimas como testigos, también a través de la protección segura y profesional de los mismos con programas de protección organizados a nivel internacional.

Como lo afirmé al inicio de la *Cumbre*, por primera vez una institución, bajo la directa dirección del Santo Padre convoca a los principales jueces y fiscales del mundo —lo que es ya un hecho histórico—, y que éstos, sin importar idioma, raza, religión o creencias o si pertenecen a sistemas jurídicos diferentes o respondan a las naciones unidas, a países desarrollados o emergentes, fueron coincidentes en buscar fórmulas

para enfrentar juntos, uniendo y compartiendo información, esfuerzos y en forma coordinada a estos nuevas formas de la esclavitud moderna.

Finalmente, agradezco el empeño y la coordinación de la Universidad *Ius Semper* y de su Rector, el Dr. Elías Huerta Psihas, para lograr la recopilación de las ponencias, sistematizarlas y traducir al idioma español aquellas que fueron expuestas en inglés e italiano, y realizar el trabajo editorial para hacer posible esta publicación sobre un tema en el cual el Papa Francisco está interesado en difundir, prevenir y erradicar, porque lo considera una de las principales llagas abiertas de la sociedad contemporánea que son las llagas vivas de Cristo hoy.

Obispo Canciller Marcelo Sánchez Sorondo

PONTIFICIA ACADEMIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES



Prólogo

Dr. Elías Huerta Psihas*

La trata de personas es hoy uno de los más brutales e inhumanos flagelos que afectan la libertad y dignidad de seres humanos en todo el mundo, que no respeta edad, sexo, credo, ideología o condición económica, y que se ha convertido en la tercera actividad ilícita más lucrativa para las bandas de delincuencia organizada en todo el planeta. Según datos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, después del narcotráfico y del tráfico de armas, la trata deja ganancias anuales del orden de los 150 mil millones de dólares y afecta a más de 20 millones de personas en todo el mundo, de personas que tienen rostro y nombre y que contra su voluntad están siendo condenadas a vivir en un infierno moderno por el que nadie debería pasar.

Frente a tan lamentable realidad, resulta inexplicable que los esfuerzos globales para prevenir y combatir este terrible fenómeno sean tan raquíticos y exista tan poco interés en las altas esferas de la mayoría de los gobiernos en esa dirección. Por ello, es de la mayor importancia el interés que su Santidad el Papa Francisco ha mostrado para encontrar un camino, una vía efectiva para erradicar y combatir no sólo el delito de la Trata de Personas, sino todas la formas de esclavitud moderna como la venta de órganos, los trabajos forzados, la explotación infantil y la prostitución.

Este noble interés del Papa Francisco ha tenido su punto más elevado al encomendarle a Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, la convocatoria a los funcionarios, a los expertos e interesados en el tema a nivel mundial, a un encuentro para analizar este fenómeno, compartir experiencias de éxito, unir esfuerzos y buscar juntos soluciones a este lacerante fenómeno mundial. De esta manera, la Pontificia Academia organizó durante los días 3 y 4 de junio de 2016 la Cumbre de los Jueces sobre la Trata de Personas y el Crimen Organizado, a la que asistieron jueces, presidentes de tribunales, procuradores, fiscales, abogados y académicos de más de 50 países, para compartir sus experiencias y reflexiones en la defensa de la vida, la libertad y la dignidad de hombres y mujeres que han sido víctimas de trata, tráfico de personas y las otras formas mencionadas de esclavitud moderna.

La Cumbre fue inaugurada por el Papa Francisco, quien expresó su voluntad para perseguir y erradicar a todas estas nuevas formas de esclavitud y de criminalidad organizada, pidiendo a los jueces y fiscales del mundo que tomen conciencia de este desafío para que juntos, “compartiendo experiencias y buenas prácticas, abran nuevos caminos de justicia en beneficio de la dignidad humana, de la libertad, de la responsabilidad, la solidaridad y la paz”.

Tomando en consideración la relevancia de los trabajos de la Cumbre como una herramienta que sienta las bases para impulsar una efectiva prevención y combate a todas estas nuevas formas de esclavitud que afectan la dignidad y la libertad de millones de personas para difundirlos en todos los países de Iberoamérica, bajo la iniciativa y conducción del Obispo Marcelo Sánchez Sorondo, se elaboró la presente edición de *La Memoria de la Cumbre de los Jueces sobre la Trata de Personas y el Crimen Organizado* en idioma español. El volumen contiene la totalidad de los trabajos y se presentan en el siguiente orden: la Introducción de Monseñor Sánchez Sorondo, el Discurso del Papa Francisco, la Declaración de la Cumbre y la totalidad de las intervenciones de los participantes, incluyendo al final el programa y la relación de los oradores y observadores que asistieron a este importante evento que se realizó en las espléndidas instalaciones de la Casina Pio IV, en la Ciudad del Vaticano.



Me parece interesante señalar algunos datos que se revelaron durante los trabajos de la Cumbre. Por ejemplo, que después de Estados Unidos y Canadá, México es el país de América en el que más sentencias se han dictado condenas a personas que han sido procesadas por delitos de trata y que cuenta con una avanzada ley en la materia, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; que la trata de personas es un delito que representa uno de los retos multinacionales más importantes y el énfasis debe centrarse en su prevención, con mecanismos que inhiban la realización de esta serie de conductas que aniquilan la dignidad humana y que son el rostro de la esclavitud moderna y la necesidad de reforzar actividades orientadas a rescatar y rehabilitar a las víctimas y proporcionarles herramientas para reintegrarlas a la sociedad y que reencaucen su vida con normalidad. También se abordó la necesidad de darle seguimiento a los resultados de la Cumbre y organizar encuentros regionales para cumplir los puntos acordados en la Declaración de la Cumbre, signada por todos los asistentes, encabezados por el Papa Francisco.

Este esfuerzo liderado por el Papa Francisco es de la mayor importancia si tomamos en cuenta que los delitos de trata y todas estas formas de esclavitud moderna son conductas de carácter transnacional y traspasan fronteras y continentes, y para combatirlas, resulta indispensable sumar todos los esfuerzos internacionales posibles y la cooperación de todos los Estados.

Uno de los frutos visibles de la Cumbre ha sido sin duda la Cumbre de Malta, celebrada recientemente, el 13 y 14 de junio de 2017 en ese país, con el objetivo central de compartir experiencias de éxito con modelos de apoyo para acabar con prácticas de esclavitud moderna y restaurar la dignidad a sus víctimas, en el que se contó, con la participación, entre otros, de la Presidenta de Malta Marie-Louise Coleiro Preca, quien es también Presidenta del Consejo de Mujeres Líderes de Naciones Unidas, del Obispo Marcelo Sánchez Sorondo, Kevin Hyland, Comisionado Antiesclavitud Independiente del Reino Unido, Raza Jafar y Rosi Orozco, destacada activista de México, presidenta de la ONG *Unidos contra la Trata*, quien presentó un protocolo para rehabilitar a las víctimas de tráfico sexual, con importantes experiencias de éxito en colaboración con autoridades ejecutivas y judiciales en la lucha contra la trata.

Otra interesante actividad en Malta fue la participación de la fotógrafa humanitaria Lisa Kristine, quien presentó la exposición denominada “*Esclavizado*” (*ensla-*

ved), historia visual de la esclavitud moderna, y la proyección de la película titulada “*Vendido*” (*soled*) del director Jeffrey Brown, que muestra el tráfico que afecta a millones de niños y niñas de aproximadamente 13 años en todo el mundo. Estas acciones se inscriben en las estrategias de denuncia, difusión y concientización sobre la prevención y combate de estas formas de esclavitud.

En suma, la Cumbre de Jueces celebrada en el Vaticano ha sido un parteaguas, un punto de partida para sumar los esfuerzos internacionales encaminados a reforzar las estrategias legales, judiciales, económicas y sociales para prevenir, inhibir y combatir estas formas de esclavitud y, paralelamente, tutelar la defensa de los derechos humanos de las víctimas. Es también un serio llamado para concientizarnos globalmente a no seguir “sentados en nuestros laureles”, mientras organizaciones criminales de la trata avanzan y mutan sus métodos y acciones para evitar su detección, afectando a cientos de miles de seres humanos, particularmente a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Reconocemos y aplaudimos al Papa Francisco por esta iniciativa y este llamado para sumar y redoblar esfuerzos entre autoridades, organizaciones internacionales, académicos y sociedad civil, para frenar y combatir estas despiadadas y deleznales formas de esclavitud, deseando que en un futuro no muy lejano, celebraremos juntos el Día del Fin de la Trata y que la difusión de los materiales contenidos en esta *Memoria* constituyan una modesta semilla para alcanzar este noble propósito.

* Dr. Elías Huerta Psihas, Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho de México y Rector de la Universidad Ius Semper.



Introducción

Marcelo Sánchez Sorondo

Canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales

Como ya profetizaba Isaías: «La paz es fruto de la justicia» (*Is. 32,17*). Desde el comienzo de los tiempos, la tarea principal que la sociedad humana ha encomendado a los jueces es la de establecer la justicia en cada caso en particular: a cada uno lo suyo (*unicuique suum*). Sin ello, no hay verdadera paz en la sociedad. El deseo del Papa Francisco es empoderar a los jueces para que tomen cabal conciencia de su insustituible misión frente a los desafíos de la globalización de la indiferencia, respondiendo a este llamado de la sociedad independientemente de la presión de los gobiernos, de las instituciones privadas y, naturalmente, del crimen organizado.

La sociedad global que busca la ganancia por sobre todas las cosas y que produce la cultura del descarte, como lo ha denunciado el Papa Francisco en la *Evangelii Gaudium* y en la *Laudato si'*, ha generado un número infinito de marginados y excluidos. En un mundo basado en el puro provecho, el producto interno bruto mundial declarado incluye las ganancias informales obtenidas por las organizaciones mafiosas internacionales y el crimen organizado, las cuales se estima que representan alrededor de un 10%. En los últimos años algunos países todavía no han reconocido en forma oficial esas ganancias provenientes de la actividad mafiosa, sin embargo las han considerado en el cálculo de su producto interno bruto.

Es sabido que hay 40 millones de personas que sufren de las nuevas formas de esclavitud y de la trata de personas, ya sea como en figuras de trabajos forzados, prostitución, venta de órganos o narcotráfico. Asimismo, como consecuencia de las guerras, del terrorismo y del cambio climático, hay 60 millones de desplazados y 130 millones de refugiados que son el caldo de cultivo de los traficantes. Las instituciones de bien y el sistema internacional no cuentan por el momento con los instrumentos jurídicos adecuados para afrontar el desafío de la indiferencia global ante las formas extremas indicadas. Mientras tanto, el narcotráfico y las mafias se aprovechan de esos vacíos de gobernanza y de leyes internacionales para jugar globalmente con «es-

estructuras de pecado», internacionales y nacionales, muy eficaces para hacer dinero esclavizando a los más vulnerables.

El camino de la justicia ha sido importante pero no suficiente en el mundo globalizado. Para medir el alcance de esta afirmación, basta con tomar conciencia de la extensión del fenómeno de la violencia en la sociedad contemporánea. Nos equivocáramos si redujésemos la violencia a la sola agresión física. Las nuevas formas de esclavitud, las heridas profundas en el cuerpo y en el alma de las personas, el tráfico de órganos, el trabajo forzado, el secuestro de personas, la muerte propiciada, el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y las guerras por intereses espurios muestran ulteriormente las manifestaciones más tenaces de violencia: la venganza y la prepotencia, en otras palabras, la pretensión de determinados individuos o grupos de hacer justicia por sí mismos y de poseer al otro o a los otros como cosa propia.

Esencialmente, la justicia se opone no sólo a la violencia *tout court*, a la violencia disimulada y a todas las sutiles formas de violencia a las que hemos hecho alusión, sino también a estas simulaciones trágicas de la justicia que son la venganza y la prepotencia: el acto de querer hacer justicia por propia cuenta y de considerar al otro como un simple medio para el propio provecho. En este sentido, el acto fundamental que define a una sociedad fundada en la justicia es el acto en virtud del cual la sociedad inhabilita la capacidad y el derecho de los individuos y grupos de hacer justicia por sí mismos, o aún mejor, el acto por medio del cual la sociedad empodera a los jueces para aplicar la justicia.

Ya el gran profeta Isaías había visto que el horizonte último del



acto de juzgar parece ser la paz social más que la seguridad. La finalidad última de la paz social hace aparecer en filigrana algo más profundo en la sociedad que toca al recíproco entendimiento, reconocimiento, y tal vez a la reconciliación, como aun también al amor y al perdón.

Debemos recomenzar desde la justicia en la sociedad global. Ninguna instancia de justicia puede tolerar la violencia de la esclavitud ni la del crimen organizado, y ningún poder debe corromper a la justicia. Los jueces están llamados a tomar plena conciencia de este desafío, compartir sus experiencias, y actuar juntos para abrir nuevos caminos de justicia y promover la dignidad humana, la libertad, la responsabilidad, la felicidad y la paz.

Quisiéramos saber de los jueces cómo encaran el problema de la trata sexual, del trabajo esclavo, de la venta de órganos, del narcotráfico y del crimen organizado; cómo los sistemas judiciales podrían incorporar mejor nuestros valores humanitarios; y cómo la formación de capacidades podría hacer que los jueces, además de condenar a los responsables, pongan más atención en las necesidades de las víctimas. Una pregunta, aún sin adecuada respuesta, que surgió en nuestros encuentros es la siguiente: ¿cuántos traficantes, proxenetas, criminales del narcotráfico o colaboradores están presos y cuántos bienes mal habidos han sido recuperados para la sociedad y las víctimas? Cada juez podría exponer en breves minutos un caso concreto que haya tenido que juzgar y compartir su visión de las necesidades futuras en el propio campo.

También sería importante que los presidentes de las Cortes o los abogados que hayan reflexionado sobre este tema tracen un panorama general sobre este angustioso problema y sugieran posibles soluciones tanto a nivel nacional como internacional. Tendríamos que concluir con un llamado común a la acción de la justicia.

Se trata de salvar víctimas de la esclavitud y del crimen organizado, y de obtener la paz social. Así como en la Grecia de Pitágoras los grandes pensadores se llamaban «amantes de la sabiduría», o sea filósofos, en la era cristiana Cristo quiere que los cristianos sean y se llamen «amantes de la justicia»: «felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices

los que son perseguidos por predicar la justicia, felices los que trabajan por la paz». La recompensa lo merece, porque “serán saciados, serán hijos de Dios, verán a Dios” (Mt 5, 6-9).

Discurso del Papa Francisco

Pontificia Academia de las Ciencias Sociales

Viernes 3 de junio de 2016

Buenas tardes! Los saludo cordialmente y renuevo la expresión de mi estima por vuestra colaboración para contribuir al progreso humano y social del que es capaz la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.

Si me alegro de esta contribución y me complace con Ustedes es también en consideración al noble servicio que pueden ofrecer a la humanidad, ya sea profundizando en el conocimiento de ese fenómeno tan actual, la indiferencia en el mundo globalizado y sus formas extremas, ya sea en las soluciones frente a este



reto, tratando de mejorar las condiciones de vida de los necesitados entre nuestros hermanos y hermanas. Siguiendo a Cristo, la Iglesia está llamada a comprometerse. O sea, no cabe el adagio de la Ilustración que considera que la Iglesia no deba meterse en política, la Iglesia debe meterse en la gran política porque —cito a Pablo VI— “la política es una de las formas más altas del amor, de la caridad”. Y la Iglesia también está llamada a ser fiel con las personas, aún más cuando se consideran las situaciones donde se tocan las llagas y el sufrimiento dramático, y en los cuales están implicados los valores, la ética, las ciencias sociales y la fe; situaciones en las cuales el testimonio de Ustedes como personas y humanistas, unido a la competencia social propia, es particularmente apreciado.

En el curso de estos recientes años no han faltado importantes actividades de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales bajo el vigoroso impulso de su Presidenta, del Canciller y de algunos colaboradores externos de notorio prestigio, a quienes agradezco de corazón. Actividades en defensa de la dignidad y libertad de los hombres y mujeres de hoy y, en particular, para erradicar la trata y el tráfico de personas y las nuevas formas de esclavitud tales como el trabajo forzado, la prostitución, el tráfico de órganos, el comercio de la droga, la criminalidad organizada. Como dijo mi predecesor Benedicto XVI, y lo he afirmado yo mismo en varias ocasiones, éstos son verdaderos crímenes de lesa humanidad que deben ser reconocidos como tales por todos los líderes religiosos, políticos y sociales, y plasmados en las leyes nacionales e internacionales.

Tanto en el encuentro con los líderes religiosos de las principales religiones que hoy influyen en el mundo global realizado el 2 de diciembre del 2014, como en la cumbre de los intendentes y alcaldes de las ciudades más importantes del mundo, del 21 de julio del 2015, se ha manifestado la voluntad de esta Institución en perseguir la erradicación de las nuevas formas de esclavitud. Conservo un particular recuerdo de estos dos encuentros, como también de los significativos seminarios de los jóvenes, todos debidos a la iniciativa de la Academia. Alguno puede pensar que la Academia debe moverse más bien en un ámbito de ciencias puras, de consideraciones más teóricas. Esto responde ciertamente a una concepción ilustrada de lo que debe ser una Academia. Una Academia debe de tener raíces, y raíces en lo concreto, sino corre el riesgo de fomentar una reflexión líquida que se vaporiza y no llega a nada. Este divorcio entre la idea y la realidad evidentemente que es un

fenómeno cultural pasado, más bien de la Ilustración, pero que todavía tiene su incidencia.

Actualmente, inspirada por los mismos deseos, la Academia los ha convocado a Ustedes, jueces y fiscales de todo el mundo, con experiencia y sabiduría práctica en la erradicación de la trata y tráfico de personas y de la criminalidad organizada. Ustedes han venido aquí representando a sus colegas con el loable propósito de avanzar en la toma de conciencia cabal de estos flagelos y, consecuentemente, manifestar vuestra insustituible misión frente a los nuevos retos que nos plantea la globalización de la indiferencia, respondiendo a la creciente solicitud de la sociedad y en el respeto de las leyes nacionales e internacionales. Hacerse cargo de la propia vocación quiere decir también sentirse y proclamarse libres. Jueces y fiscales libres ¿de qué?: de las presiones de los gobiernos, libres de las instituciones privadas y, naturalmente, libres de las “estructuras de pecado” de las que habla mi predecesor San Juan Pablo II, en particular, como “estructura de pecado”, libres del crimen organizado. Yo sé que ustedes sufren presiones, sufren amenazas en todo esto, y sé que hoy día ser juez, ser fiscal, es arriesgar el pellejo, y eso merece un reconocimiento a la valentía de aquellos que quieren seguir siendo libres en el ejercicio de su función jurídica. Sin esta libertad, el poder judicial de



una Nación, se corrompe y siembra corrupción. Todos conocemos la caricatura, para estos casos, de la justicia, ¿no?: la justicia con los ojos vendados que se le va cayendo la venda y le tapa la boca.

Felizmente, para la realización de este complejo y delicado proyecto humano y cristiano: liberar a la humanidad de las nuevas esclavitudes y del crimen organizado, que la Academia cumple siguiendo mi pedido, se puede contar también con la importante y decisiva sinergia de las Naciones Unidas. Hay una mayor conciencia en esto, una fuerte conciencia. Agradezco que los representantes de las 193 Naciones miembros de la ONU, hayan aprobado unánimemente los nuevos objetivos del desarrollo sostenible e integral, y en particular la meta 8.7. Esta reza: *“Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”*. Hasta aquí la resolución. Bien se puede decir que ahora es un imperativo moral para todas las Naciones miembros de la ONU actuar tales objetivos y tal meta.

Para ello, es obligatorio generar un movimiento trasversal y ondular, una “buena onda”, que abrace a la sociedad toda de arriba para abajo y viceversa, desde la periferia al centro y al revés, desde los líderes hacia las comunidades, y desde los pueblos y la opinión pública hasta los más altos estratos dirigenciales. La realización de ello requiere que, como ya lo han hecho los líderes religiosos, los sociales y los alcaldes, así también los jueces, tomen plena conciencia de este desafío, que sientan la importancia de su responsabilidad ante la sociedad, y que compartan sus experiencias y buenas prácticas y que actúen juntos —importante, en comunión, en comunidad, que actúen juntos—, para abrir brechas y nuevos caminos de justicia en beneficio de la promoción de la dignidad humana, de la libertad, la responsabilidad, la felicidad y, en definitiva, la paz. Sin ceder al gusto por la simetría, podríamos decir que el juez es a la justicia como el religioso y filósofo a la moral, y el gobernante o cualquier otra figura personalizada del poder soberano es a lo político. Pero solamente en la figura del juez la justicia se reconoce como el primer atributo de la sociedad. Y esto hay que rescatarlo, porque la tendencia, cada vez mayor, es la de licuar la figura del juez a través de las presiones, etcétera, que mencioné antes. Y sin embargo, es el primer atributo de la sociedad. Sale en la misma

tradición bíblica, ¿no es cierto? Moisés necesita instituir 70 jueces para que lo ayuden, que juzguen los casos, el juez a quien se recurre. Y también en este proceso de licuefacción, lo contundente, lo concreto de la realidad afecta a los pueblos. O sea, los pueblos tienen una entidad que les da consistencia, que los hace crecer, hacer sus propios proyectos, asumir sus fracasos, asumir sus ideales, pero también están sufriendo un proceso de licuefacción, y todo lo que es la consistencia concreta de un pueblo tiende a transformarse en la mera identidad nominal de un ciudadano, y un pueblo no es lo mismo que un grupo de ciudadanos. El juez es el primer atributo de una sociedad de pueblo.

La Academia, convocando los jueces, no aspira sino a colaborar en la medida de sus posibilidades según el mandato de la ONU. Cabe aquí agradecer a aquellas Naciones que por intermedio de los Embajadores ante la Santa Sede no se han mostrado indiferentes o arbitrariamente críticas, sino que, por el contrario, han colaborado activamente con la Academia para la realización de esta cumbre. Los Embajadores que no sintieron esta necesidad, o que se lavaron las manos, o que pensaron que no era tan necesario, los esperamos para la próxima reunión.



Pido a los jueces que realicen su vocación y misión esencial, la de establecer la justicia sin la cual no hay ni orden, ni desarrollo sostenible e integral, ni tampoco paz social. Sin duda, uno de los más grandes males sociales del mundo de hoy es la corrupción en todos los niveles, la cual debilita cualquier gobierno, debilita la democracia participativa y la actividad de la justicia. A Ustedes, jueces, corresponde hacer justicia, y les pido una especial atención en hacer justicia en el campo de la trata y del tráfico de personas y, frente a esto, al crimen organizado, les pido que se defiendan de caer en la telaraña de las corrupciones.

Cuando decimos “hacer justicia”, como Ustedes bien saben, no entendemos que se deba buscar el castigo por sí mismo, sino que, cuando caben penalidades, que éstas sean dadas para la reeducación de los responsables de tal modo que se les pueda abrir una esperanza de reinserción en la sociedad, o sea, no hay pena válida, sin esperanza. Una pena clausurada en sí misma, que no dé lugar a la esperanza, es una tortura, no es una pena. En esto yo me baso también para afirmar seriamente la postura de la Iglesia contra la pena de muerte. Claro, me decía un teólogo que en la



concepción de la teología medieval y posmedieval, la pena de muerte tenía la esperanza: “se los entregamos a Dios”. Pero los tiempos han cambiado y esto ya no cabe. Dejemos que sea Dios quien elija el momento... La esperanza de la reinserción en la sociedad: “ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante” (San Juan Pablo II, *EV*, n. 9). Y si esta delicada conjunción entre la justicia y la misericordia, que en el fondo es preparar para una reinserción, vale para los responsables de los crímenes de lesa humanidad como también para todo ser humano, *a fortiori* vale sobretodo para las víctimas quienes, como su nombre lo indica, son más pasivas que activas en el ejercicio de su libertad, habiendo caído en la trampa de los nuevos cazadores de esclavos. Víctimas tantas veces traicionadas hasta en lo más íntimo y sagrado de su persona, es decir en el amor que ellas aspiran a dar y tener, y que su familia les debe o que les prometen sus pretendientes o maridos, quienes en cambio acaban vendiéndolas en el mercado del trabajo forzado, de la prostitución o de la venta de órganos.

Los jueces están llamados hoy más que nunca a poner gran atención en las necesidades de las víctimas. Son las primeras que deben ser rehabilitadas y reintegradas en la sociedad y por ellas se debe perseguir sin cuartel a los traficantes y “carníferos”. No vale el viejo adagio: “Son cosas que existen desde que el mundo es mundo”. Las víctimas pueden cambiar y de hecho sabemos que cambian de vida con la ayuda de los buenos jueces, de las personas que las asisten y de la sociedad toda. Sabemos que no pocas de esas personas son abogados o abogadas, políticos o políticas, escritores brillantes o bien tienen algún exitoso oficio para servir de modo válido al bien común. Sabemos cuán importante es que cada víctima se anime a hablar de su ser víctima como un pasado que superó valientemente siendo ahora un sobreviviente o, mejor dicho, una persona con calidad de vida, con dignidad recuperada y libertad asumida. Y en este asunto de la reinserción quisiera transmitir una experiencia empírica, a mi me gusta cuando voy a una ciudad, visitar las cárceles —ya he visitado varias— y es curioso, sin desmerecer a nadie, pero como impresión general he visto que las cárceles cuyo director es una mujer van mejor que aquellas cuyo director es hombre.

Esto no es feminismo, es curioso. La mujer tiene en esto de la reinserción un olfato especial, un tacto especial, que sin perder energías, recoloca a

las personas, las reubica, algunos lo atribuyen a la raíz de la maternalidad. Pero es curioso, lo paso como experiencia personal, vale la pena repensarlo. Y aquí en Italia, hay un alto porcentaje de cárceles dirigidas por mujeres, muchas mujeres jóvenes, respetadas y que tienen su buen trato con los presos. Otra experiencia que tengo es que en las audiencias de los miércoles no es raro que venga un grupo de reclusos —de tal cárcel, de tal otra—, traídos por el director o la directora, y estén ahí. O sea, son todos gestos de reinserción.

Ustedes están llamados a dar esperanza en hacer la justicia. Desde la viuda que pide justicia insistentemente (*Le* 18,1-8), hasta las víctimas de hoy, todas ellas alimentan un anhelo de justicia como esperanza de que la injusticia que atraviesa este mundo no sea lo último, no tenga la última palabra.

Tal vez puede ayudar aplicar, según las modalidades propias de cada país, de cada continente y de cada tradición jurídica, la praxis italiana de recuperar los bienes mal habidos de los traficantes y delincuentes para ofrecerlos a la sociedad y, en concreto, para la reinserción de las víctimas. La rehabilitación de las víctimas y su reinserción en la sociedad, siempre realmente posible, es el mayor bien que podemos hacer a ellas mismas, a la comunidad y a la paz social. Claro, es duro el trabajo, no termina con la sentencia, termina después procurando que haya un acompañamiento, un crecimiento, una reinserción, una rehabilitación de la víctima y del victimario.

Si hay algo que atraviesa las bienaventuranzas evangélicas y el protocolo del juicio divino con el que todos seremos juzgados, de Mateo c.25, es el tema de la justicia: felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los que sufren por la justicia, “felices los que lloran, felices los pacíficos, felices los operadores de paz, benditos de mi Padre los que tratan al más necesitado y pequeño de mis hermanos como a mí mismo. Ellos o ellas —y aquí cabe referirse especialmente a los jueces— tendrán la más alta recompensa: poseerán la tierra, serán llamados y serán hijos de Dios, verán a Dios, y gozarán eternamente junto al Padre”.

En este espíritu, me animo a pedirles a Jueces, Fiscales y Académicos que continúen sus trabajos y realicen, dentro de las propias posibilidades y con la ayuda de la gracia, las felices iniciativas que les honran en servicio de las personas y del bien común. Muchas gracias.

Declaración de la Cumbre

De acuerdo con el Magisterio del Papa Francisco, con las declaraciones de los líderes de las principales religiones y de los alcaldes de las más importantes ciudades del mundo, afirmamos que la esclavitud moderna, la trata de personas, el trabajo forzado, la prostitución y el tráfico de órganos humanos, son crímenes contra la humanidad y deben ser reconocidos como tales.

Asimismo, el crimen organizado que mira directa o indirectamente a expandir la esclavitud moderna en sus formas antes descritas, también debe ser considerado un delito de lesa humanidad y reconocido como tal. Los abajo firmantes nos hemos reunido en la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales para abordar del mejor modo posible por parte de los representantes de la justicia este dramático reto. La eliminación de la esclavitud



moderna hoy es un nuevo imperativo moral para los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, según rezan los recién aprobados (septiembre de 2015) Objetivos de Desarrollo Sostenible (Meta 8.7). La aplicación efectiva del derecho penal es una condición necesaria para *“erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados”*. Esto implica asimismo ayudar a remediar las consecuencias, ya sea para las víctimas, sea para la sociedad.

Es evidente que la justicia penal está intrínsecamente ligada a la justicia social, y a su vez la justicia social a la justicia ambiental. Como afirma la Encíclica *Laudato si*, *“hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres”* (S19).

Rehabilitación, reasentamiento y reintegración tienen por objeto liberar a las víctimas de la esclavitud moderna y de la trata de personas, así como restaurar su dignidad humana y su capacidad de ser social y económicamente independientes.

No corriendo más el riesgo de recaer en la trata o de recurrir a actividades ilegales y deshumanas, los sobrevivientes pueden contribuir así positivamente al bien de la sociedad. Con tal propósito, suscribimos los siguientes 10 objetivos:

1. Promover en cada estado el incremento de los recursos y de la colaboración judicial y policial nacional e internacional con el fin de aumentar las bajas tasas actuales de procesos y de condenas para los crímenes con el fortalecimiento de los organismos supranacionales de la lucha contra los traficantes y de la tutela de los Derechos Humanos.
2. Habiendo sido aprobados los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y ratificado el Protocolo de Palermo del año 2000 contra la trata de personas, todas las naciones tienen que reconocer la esclavitud moderna, la trata de personas, el trabajo forzoso y la prostitución como crímenes de la humanidad con penas proporcionadas.

3. Los bienes incautados a traficantes y criminales ya condenados deben ser utilizados para la rehabilitación y compensación de las víctimas, y para la reparación de la sociedad. El delito de lavado de dinero debe ser intensamente perseguido, porque consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales.

4. Abogar para proporcionar un apoyo adecuado a las víctimas que incluya la asistencia civil y legal, una protección segura de los testigos, la asistencia médica y el sostén a las personas por parte de las agencias de servicios sociales, especialmente en el caso de las víctimas indocumentadas. Favorecer la colaboración con la justicia de las víctimas como testigos, también a través de la protección segura y profesional de los mismos con programas de protección organizados a nivel internacional.

5. En el caso de víctimas indocumentadas, emanar autorizaciones de residencia temporal en el país de destino para los que deseen permanecer en éste, independientemente de su situación legal. Garantizar el acceso efectivo a los tribunales pertinentes, a la asistencia jurídica gratuita, y el acompañamiento hasta la reinserción laboral efectiva.



6. Alentar esfuerzos concertados para reducir las prórrogas al acceso a la asistencia legal por parte de las víctimas reconocidas de esclavitud moderna.
7. El tráfico de órganos, definido y condenado por la Declaración de Estambul (2008), debe ser reconocido como delito en todos los países y perseguido eficazmente por la justicia en los ámbitos nacionales e internacionales. Asimismo, junto con ser ilegal tal actividad, debe ser también reconocida como típica de las organizaciones criminales internacionales.
8. La sanción de los clientes de servicios sexuales debe constituir parte integral de la legislación para una eficaz lucha contra la esclavitud y la trata, al igual que quien emplea a sabiendas trabajo forzado.
9. Las víctimas de trata no deben confundirse con los inmigrantes irregulares, ni con las personas objeto de tráfico.
10. La repatriación de los extranjeros no documentados nunca debe ser una respuesta sin el acuerdo de las víctimas a fin de evitar el riesgo de las recaídas y de las actividades ilegales y deshumanas.

Palabras de Apertura

Susan Coppedge

Embajadora de la Oficina del Departamento de Estado
para el Combate al Tráfico de Personas (EEUU)

Buenos días. Es un honor estar aquí hoy con tantos estimados jueces, fiscales, funcionarios de gobierno y líderes religiosos, unidos por el deseo de utilizar el sistema legal para hacer una diferencia en la lucha contra la trata de personas. Mi jefe Secretario de Estado, John Kerry, ha denominado a esta lucha contra la trata “un asunto de extrema claridad moral”, y yo no podría estar más de acuerdo.

La combinación de poder y de influencia de esta audiencia puede recorrer un largo camino para erradicar la trata de personas, que es nada menos que la esclavitud del siglo XXI.

He dedicado mi carrera al tema de la trata de personas, primero como Procuradora asistente de EE.UU. procesando casos de trata de personas en mi estado natal de Georgia, y ahora en el Departamento de Estado como Embajadora en Misión Especial, monitoreando y combatiendo la trata de personas.

Como exfiscal federal, es especialmente gratificante poder viajar a esta Cumbre con cuatro jueces federales de los Estados Unidos, con conocimientos especializados a la hora de tratar los casos de tráfico de personas, que creen en la importancia de un enfoque centrado en las víctimas, en las leyes del Estado, y en que se haga justicia.

Antes de escuchar sus perspectivas judiciales sobre casos de tráfico de personas y aprender de sus experiencias, me gustaría compartir un poco acerca de mi oficina: La Oficina del Departamento del Estado de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas.

La Oficina TIP (Trafficking in Persons), tal como nos referimos a nosotros mismos para abreviar, fue establecida en el año 2000 por la ley general contra la trata de los Estados Unidos y la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico,

las cuales: o dirigen el compromiso global de EE.UU. en relación a la trata de personas y/o apoyan la coordinación de los esfuerzos del gobierno federal para combatir el tráfico.

Como embajadora de la Oficina TIP, dirijo los esfuerzos del Departamento de Estado para luchar contra todas las formas de trata de personas a través de la diplomacia bilateral y multilateral, el enfoque a la ayuda exterior, y el compromiso con la sociedad civil para aumentar la conciencia global y prevenir el tráfico.

A pesar de ser mejor conocidos por la emisión del Informe Anual sobre Trata de Personas, también aprovechamos nuestra ayuda exterior para auxiliar a los gobiernos que desean mejorar sus esfuerzos para combatir el tráfico pero carecen de los recursos fiscales para hacerlo. A partir de 2015 mi oficina tenía más de 85 proyectos activos contra el tráfico en más de 65 países.

Con efectos de la cumbre de jueces el día de hoy, me gustaría destacar algunos de nuestros programas clave de capacitación y asistencia técnica que se enfocan en mejorar las leyes, construyendo un gobierno como una sociedad civil capaz de combatir la trata de personas. El año pasado, mi oficina proporcionó asistencia técnica para el desarrollo y la mejora de las leyes, planes de acción nacionales, y/o la identificación de las víctimas y mecanismos de referencia en varios países a través de asociados en la ejecución como la ONUDD y la Organización Internacional para las Migraciones.

Por ejemplo, hemos financiado los esfuerzos para: asistir en la elaboración de la legislación en el Chad, Yibuti, Kenia y Malasia; desarrollar y mejorar los planes de acción nacionales en Guinea y la República del Congo, y mejorar la identificación de las víctimas y los mecanismos de derivación a través de talleres en Brasil, Madagascar y Malawi.

Nuestra intención es utilizar nuestra ayuda exterior para entrenar y equipar a los sectores de justicia y seguridad penal para investigar mejor, procesar y sancionar el delito de tráfico, y para enseñar a los funcionarios de estos sectores cómo proteger eficazmente a las víctimas. En 2015, nuestros beneficiarios capacitaron a más de 200 profesionales de la justicia penal, incluyendo jueces, magistrados, fiscales y procuradores de justicia, en diez diferentes países.

Los jueces han sido una audiencia base en nuestros entrenamientos en países como Argelia, Barbados, Haití, Jordania, Malasia, Mongolia, Montenegro, Marruecos y Togo. Por ejemplo, recientemente colaboramos con la formación multidisciplinar de los jueces, fiscales, policías, profesores universitarios de derecho y la sociedad civil de Mongolia en la investigación centrada en las víctimas y los enjuiciamientos, incluyendo técnicas de coordinación y cooperación entre la policía y los proveedores de servicios de ONG.

Esta capacitación y asistencia técnica es de suma importancia, pero también lo es la coordinación y la colaboración entre organismos. Como antiguo miembro de La Fuerza del trabajo contra la trata de personas de Atlanta, Georgia, sé por experiencia que los gobiernos y las ONG's deben trabajar juntos para estabilizar y proteger mejor a las víctimas. Como fiscal federal, no hubiese podido llevar casos criminales exitosos sin haberme asociado con los proveedores de los servicios esenciales de las víctimas. En un caso que escucharan en breve, le pedimos al proveedor de servicios de la ONG que asistiera a las mujeres jóvenes que fueron recuperadas al ser detenidos sus traficantes. Un año más tarde, el mismo proveedor de servicios se sentó en el tribunal durante el testimonio de los sobrevivientes; una cara familiar y amable en un momento en que las jóvenes lo necesitaban.

Mi tiempo procesando casos también me enseñó que debemos estar seguros de no penalizar a las víctimas de trata de crímenes violentos cometidos como resultado de haber sido objetos de trata. Este es un problema persistente y constante, tanto aquí en los Estados Unidos como en todo el mundo. Ya he tenido la suerte de pulsar este tema como parte de mi mensaje en mis viajes a México, Cuba, Botswana, Sudáfrica y la India.

Es esencial que los fiscales y los jueces hagan todo lo posible para garantizar que las víctimas de trata sean tratadas como sobrevivientes de esta situación y que les ofrezcan la dignidad de ser asistidos, en vez de perjudicados por los sistemas destinados a protegerlos. Este es el núcleo del enfoque centrado en las víctimas de lucha contra la trata. Y para mejorar su recuperación, también debemos de desalojar los antecedentes penales de las víctimas injustamente condenadas.

Es igualmente importante que los funcionarios, incluyendo la policía, los fiscales, los jueces, los funcionarios de inmigración, y el personal de los servicios sociales, sean entrenados para identificar a las víctimas de trata, que eviten una mayor victimización, y que inicien el proceso hacia una recuperación tan pronto como sea posible. Y esto es difícil, ya que es a menudo como las víctimas de trata no se identifican a sí mismos. Han sido amenazados por el traficante, abusados físicamente, psicológicamente manipulados, y advertidos de que si hablan de más ellos y sus seres queridos sufrirán las consecuencias. Estas tácticas son las formas ocultas de la violencia sutil esbozadas por monseñor Sánchez Sorondo, en los Documentos de Introducción a la Cumbre.

La formación es esencial, ya que es común que la policía, bien intencionada, y los funcionarios judiciales no comprendan las múltiples formas de trata de personas o las circunstancias que mantienen alejadas a las víctimas de denunciar el delito. Idealmente, la formación es especializada y está institucionalizada. No solo ha sido adaptada a una audiencia específica, sino también integrada a una formación policial existente para que pueda sobrevivir a cualquier cambio de personal.

Mientras que las instituciones judiciales y fuerzas policiacas nunca serán capaces de revertir completamente el trauma de la trata de personas, podemos revisar y mejorar nuestras leyes y políticas para fortalecer nuestros esfuerzos para identificar y ayudar a la recuperación de los individuos mediante el apoyo a cada víctima en su camino para convertirse en sobrevivientes. Para tomar prestado el lenguaje de la introducción: la promoción de la dignidad humana, la libertad, la felicidad y la paz.

En febrero tuve la oportunidad de abordar a los procuradores generales de EE.UU. en una reunión en Washington DC para su conferencia anual. Los animé a mirar las leyes en sus estados para anular o borrar los antecedentes penales de las víctimas de la trata. Así mismo aliento a los legisladores y jueces aquí a proporcionar a los supervivientes la capacidad de obtener una orden judicial para borrar o suprimir antecedentes penales consignados como resultado de una situación de tráfico.

En 2010, Nueva York se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en aprobar una ley que permite a los sobrevivientes de la trata dejar vacante sus condenas por delitos de prostitución. En 2013, la ley de Florida fue aún más

lejos previendo eliminar los antecedentes penales de *“cualquier condena por un delito cometido durante el tiempo que se fue víctima de la trata de personas”*.

Estas leyes no sólo corrigen injusticias pasadas, sino también ayudan a los sobrevivientes a seguir adelante con sus vidas. Mejoran la capacidad de encontrar trabajo y vivienda de los supervivientes; y reducen las vulnerabilidades económicas y el riesgo de recaer en la trata.

En los Estados Unidos estamos escuchando a los sobrevivientes y dándoles el poder de aprovechar sus experiencias y hacer recomendaciones para guiar a nuestro gobierno a medida que desarrolla políticas y programas para combatir la esclavitud moderna.

El año pasado, el presidente Obama nombró al primer Consejo Asesor de EE.UU. de la trata de personas. Todo el Consejo, 11 supervivientes de la trata sexual y de trabajo dará a conocer un informe a finales de este año, con recomendaciones para mejorar nuestras políticas federales contra la trata.

Nos esforzamos por un enfoque integral para combatir la trata de personas, que también incluye como objetivo campañas públicas de concientización dentro de las comunidades, eventos con médicos profesionales, educadores y organizaciones de la comunidad. Esto tiene un doble beneficio: aumenta el número de personas que podrían denunciar el delito a la policía y dirige la demanda. Además, los esfuerzos de sensibilización pueden aumentar el número de individuos que se niegan a comprar sexo comercial. Los consumidores informados también son más propensos a preguntar a las empresas dónde y cómo se están haciendo sus bienes, insistir en el monitoreo de este tipo de empresas y evaluar sus cadenas de suministro globales con eficacia.

El trabajo forzoso se encuentra en las cadenas de suministro en todo el mundo y es esencial que los gobiernos y las empresas examinen sus operaciones, trabajen con sus proveedores, y tomen medidas para prevenir el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro globales. Como el mayor comprador de bienes y servicios a nivel mundial, el gobierno de EE.UU. ha tratado de garantizar que sus prácticas de contratación no están contribuyendo a la esclavitud moderna a través de una orden ejecutiva para

fortalecer las protecciones contra la trata de personas en los contratos del gobierno. Incluso sin una transparencia en Ley de Cadena de Suministros, similar a la del Reino Unido, cada gobierno puede revisar sus propias prácticas de adquisición, y cada gobierno puede implementar el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas o el Protocolo de Palermo.

El año pasado marcó el 15 aniversario del Protocolo de Palermo, y los inquilinos centrales a favor de la prevención del delito, de la protección de las víctimas, y del enjuiciamiento de los traficantes continúan enmarcando nuestro trabajo. Hemos visto la evolución del Protocolo así como algunos 169 países se han convertido en parte del mismo. También hemos sido testigos de la creación de un Relator Especial sobre la trata de personas y de un grupo de trabajo sobre el tráfico de personas para facilitar la aplicación del Protocolo de Palermo y hacer recomendaciones a los partidos de los Estados.

Antes de ramificarse en las presentaciones de los jueces que vamos a escuchar en los próximos dos días, quiero destacar cómo podemos integrar las lecciones aprendidas de los casos que han sido procesados en todo el mundo y los supervivientes que hemos conocido. Uno de los casos en el que trabajé involucra a dos niñas nigerianas que fueron traídas a los Estados Unidos, una tras la otra, con el fin de ser niñeras a cambio de la oportunidad de ir a la escuela y enviar dinero a casa. Su traficante las mantenía aisladas, no les pagan, retuvo sus documentos de viaje, las privó de sueño y comida, y las obligó a dormir en el suelo y a bañarse con una cubeta a pesar de que tenía un montón de habitaciones en su casa espaciosa. Su aislamiento y su falta de familiaridad con los Estados Unidos, así como su propio sentido cultural del respeto que le tenían a su traficante como a un anciano de la comunidad, aumentó su vulnerabilidad de ser traficadas por esta mujer, de la cual dependían completamente.

Casos como éste demuestran el número de variables que entran en juego en cualquier esquema de tráfico dado y también nos dan una idea de lo difícil que es descubrir los delitos de trata. Menciono este caso en particular, ya que salió a la luz cuando la segunda víctima pidió ayuda a una iglesia. El pastor la refirió a una ONG especializada en la trata de personas, que con su permiso, llamaron al FBI para denunciar el delito.

Y los que están aquí hoy en esta ciudad santa, observo que la fe y los valores pueden desempeñar un papel importante en motivarnos a resolver algunos de los problemas más urgentes del mundo actual. Creo que este es el caso de la trata de personas. Quiero que escuchen de dos sobrevivientes con sus propias palabras, a partir de un caso que he juzgado ante el Juez Federal de Distrito de Estados Unidos, el Juez Richard Story, quien se dirigirá a ustedes posteriormente, en primer lugar, los sueños de una de las víctimas que escribió en la mitad de su terrible experiencia en el tráfico. Rosalina quería ser una maestra hasta que fue engañada para venir a los Estados Unidos y la obligaron a prostituirse.

Y Lorena, que rogó fuerza a Dios durante lo que describe ella como su tortura, durante los casi dos años que fue forzada a tener relaciones sexuales con 20-30 hombres por noche. Así que empecemos estos dos días de compartir las mejores prácticas, de escuchar y aprender unos de otros. Por favor, mantengan los sueños y oraciones de estos sobrevivientes en su corazón mientras ponemos nuestras mentes en la tarea de mejorar la manera de utilizar nuestros sistemas de justicia para erradicar la trata de personas.

La implementación de fuertes instrumentos legales con un enfoque centrado en la víctima hace una verdadera diferencia. Como mi jefe Secretario Kerry, también un ex fiscal, ha dicho: “ la justicia no es simplemente una cuestión de tener las leyes correctas en los libros; tenemos que respaldar esas palabras con recursos, estrategias y acciones que producen los resultados correctos.”

Gracias por ser parte de la solución y espero con interés escuchar la sabiduría y consejos prácticos de los jueces y otros funcionarios durante la cumbre.

Ley y Acuerdos Globales Emergentes sobre la Trata de Personas y Drogas

Jeffrey Sachs

Profesor (Organización de las Naciones Unidas)

Muchas gracias. Todos somos muy afortunados de estar juntos. Esta es una de las reuniones más notables en el mundo entero. Sólo puedo compartir mi sentido de que cuando nos juntamos suceden cosas increíbles que son en muchas maneras inesperadas y extremadamente poderosas, por lo que es siempre una emoción estar aquí. Además de la ley común y el derecho civil tenemos el derecho internacional y el marco internacional, y este es un momento importante para la comunidad internacional —como hemos escuchado de la presidenta Archer en su apertura.

2015 fue un año muy particular desde el punto de vista de la comunidad internacional. Yo diría que se produjeron tres acontecimientos sorprendentes. En primer lugar, en septiembre del 2015 se adoptó el nuevo marco de cooperación mundial sobre el desarrollo sostenible, lo que se llama Agenda 2030, incluyendo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y varios de ellos abordan nuestro tema de hoy.

Unas pocas semanas después, el 12 de diciembre, se aprobó el acuerdo sobre el clima de París, de modo que por primera vez, el mundo cuenta con un marco para la implementación de un camino hacia la seguridad climática. Y el tercera desarrollo, que en formas muy importantes hizo estos dos posibles, fue la Encíclica *Laudato si'* del Papa Francisco, que fue una revelación sorprendente para el mundo. Resonó muy rápidamente en todo el mundo.

Hizo un llamado para un enfoque integral de nuestros retos, hizo un llamado para un humano integral y el desarrollo sostenible y, muy importante, hizo un llamado para lo que el Papa Francisco denomina como un plan común para nuestro hogar común. Los líderes mundiales escucharon este llamado de formas muy importantes, de formas muy literales, para hacer posible los acuerdos de septiembre y de diciembre. ¡Y uno tiene que hacer hincapié con las Naciones Unidas que esto no es fácil!

Hay 193 miembros, y si un solo Estado miembro en cualquiera de esas dos ocasiones hubiera levantado su mano y dicho “no nos gusta este marco”, hubiera sido desde un punto de vista jurídico, el fin por el momento al menos, ya que existen procesos que sólo operan por consenso global. Así que tenemos un marco que no teníamos antes. Por supuesto que es extraordinariamente frágil.

Creo que es nuestra responsabilidad y nuestra mejor esperanza ayudar a poner esto en ejecución de una manera global e integral. Y el tiempo es corto por supuesto, porque los acuerdos de este tipo tienen una gran fragilidad y si no son aplicados ni avanzan se desaparecen de la vista.

Lo que es esencial acerca de este marco son los desafíos interconectados. Todo el tema del desarrollo sostenible es que la sociedad debe, simultáneamente y de forma integral, establecer consideraciones económicas, sociales y ambientales en conjunto, y cuando pensamos en el tráfico de personas y la esclavitud moderna, mientras que éstas son primeras y principales crisis sociales de la exclusión y extrema vulnerabilidad y extrema injusticia —crímenes contra la humanidad— resultan de factores económicos de la pobreza y la desesperación, resultan de un aumento de factores ambientales, de entornos físicos que son tan degradados y por lo tanto tan sujetos a la agitación y a los choques que están desplazando a millones y decenas de millones de personas.

Por lo que tenemos la atención del mundo y hacemos en este momento, con base en los objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo sobre el Clima de París, un llamado a todas las naciones a que presenten planes nacionales de acción para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, para lograr el acuerdo sobre el clima de París y para trabajar en conjunto con otros países y en todos los sectores de la sociedad con el objetivo de alcanzar el éxito. En el contexto jurídico internacional de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se basan en los tratados y convenciones específicas también. Se puede mencionar la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional, que fue aprobada en 2000, y los protocolos subyacentes —el llamado Protocolo de Palermo— sobre la trata de personas, que tiene como objetivo por el derecho internacional, implementar la Convención contra la delincuencia organizada transnacional.

También hay que mencionar que en el 2010 los gobiernos acordaron un plan de acción mundial sobre la trata de personas, y habrá una revisión que acaba de ser anunciada en la Asamblea General de la ONU y el próximo año, en 2017, en este plan de acción mundial; pero está claro que necesita un gran refuerzo y aumento de compromiso y energía y recursos específicos para su éxito, que es una de las principales metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ha mencionado la presidenta Archer, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, gracias a la magnífica labor de la Presidenta Archer y Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo y muchas personas en este cuarto, Kevin Hyland y muchos otros, incorporan los objetivos de la lucha contra la trata de personas y la esclavitud moderna. Mencionaría muy rápidamente que hay tres disposiciones clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

No hay coherencia, se repiten dos elementos existe el objetivo de eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en las esferas públicas y privadas, incluyendo tráfico y sexual y otros tipos de explotación.

Ustedes vieron hace un momento el Objetivo 8.7, que hace referencia a “tomar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo de fuerza, acabar con la esclavitud moderna y la trata de personas y conseguir la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil”. Por otra parte, el objetivo 16.2, bajo la rúbrica de sociedades pacíficas y no excluyentes, pide acabar con el abuso, la explotación, la trata y todas las formas de violencia, y la tortura de los niños.

También existen medios de implementación mencionados en la Agenda 2030 y muy brevemente van de la mano con lo que en ocasiones se llama la prevención 3 Ps: prevención, protección y sanción.

Hay un claro reconocimiento de que lo que tenemos que tomar siempre en cuenta que es abordar los factores sociales, económicos, culturales, políticos entre otros que hacen a las personas vulnerables a la trata de personas, como la pobreza, el desempleo, la desigualdad, emergencias humanitarias, incluyendo conflictos armados, desastres naturales, violencia sexual y así sucesivamente.

Así que tenemos un marco. También tenemos un nuevo esfuerzo de medir,

ya que la medición es extraordinariamente difícil y frágil, y una comisión de expertos de la ONU en mediciones del Sistema de Archivo de Documentos (ODS) ha llamado a recoger, por primera vez, varios indicadores a nivel sistemático, incluyendo el número de víctimas de la trata de personas por población, clasificados por género, grupo de edad, formas de explotación y otros indicadores que van por las mismas líneas.

Este es el contexto internacional. Hay atención, hay atención debido al Papa Francisco, hay atención debido a la urgencia del reto del desarrollo sostenible. Creo que es justo decir que estamos tratando con un problema que es de los más intratables y profundamente arraigado a nuestras sociedades y en el mundo.

Probablemente no es casualidad que la trata de personas en realidad se encuentra en el punto crucial del gran drama del Antiguo Testamento, porque todo el drama de la salida de Egipto comenzó con la trata de personas, lo que llevó a José a Egipto al comienzo, cuando sus propios hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata. Y sabemos que ese comienzo tuvo consecuencias de ramificación para toda una sociedad, sometiéndola a la esclavitud a través del tiempo, conduciendo a la redención de la esclavitud que es en realidad el gran drama de la historia humana. Y creo importante recordar que la definición de la justicia en el Antiguo Testamento comienza con la declaración “Recuerde sus esclavos en Egipto” y esta es la esencia de la convocatoria de la justicia y con Jesús, creo, es clave del llamado más fundamental a recordar “el mínimo entre ustedes”.

Es una idea notable, es una idea que continúa moviendo a la humanidad, es la idea de que si podemos recordar el menos entre nosotros, no sólo dignificamos a cada individuo, sino que protegemos a toda la humanidad, y ese es el servicio de la justicia por lo que creo estamos muy, muy privilegiados de estar aquí. Gracias.

***Perspectivas Judiciales de los Casos de Tráfico de
Personas en Estados Unidos: Gestión Centrada en las
Víctimas, Problemas en los Juicios y la Restitución***

Leslie J. Abrams, Richard W. Story y Beverly B. Martin

(EE.UU.)

Juez Leslie Abrams

Quiero presentarles un caso y me voy a referir a la víctima por sus iniciales: CR, en lugar de por su nombre, para proteger su privacidad. CR fue detenida durante una operación encubierta de prostitución ilegal en el estado de Atlanta, Georgia. Ella tenía 17 años en el momento en que fue detenida por prostitución. Sin embargo, una vez que se descubrió que era menor de edad, el foco de la investigación cambió, ya que los investigadores se dieron cuenta de que estaban tratando con, posiblemente, el tráfico sexual de un menor de edad. Finalmente, el caso fue investigado por la Oficina de Investigación de Georgia, una agencia de investigación de estado, y el Departamento de Seguridad Nacional, una agencia federal. En mayo de 2013 Stephen Thompson y Tiara Waters, fueron acusados por un jurado federal de conspiración por participar en tráfico sexual y tráfico sexual de un menor. La Sra. Waters se declaró culpable desde el principio del caso y cooperó contra su coacusado el Sr. Thompson. Ella fue condenada a ocho años. Más tarde, el Sr. Thompson fue procesado por mí y la Sra. Coppedge y fue encontrado culpable en el juicio en ambas cosas y condenado a 25 años de prisión.

La persona más importante en esta investigación fue la víctima, CR. El paso más importante fue desarrollar una relación y un vínculo con CR. Cuando se le encontró, era menor de edad y había sido explotada sexualmente y arrestada. Ella era una víctima extremadamente vulnerable. Su posición vulnerable comenzó mucho antes de que se le encontrara con el señor Thompson y la Sra. Waters. Nació en Sierra Leona, en medio de la guerra civil de ese país, y fue una de dos millones de personas desplazadas de esa nación. En 2005 a la edad de 11 llegó a los Estados Unidos para vivir con su abuela, pero tenía problemas para adaptarse. Ella no hablaba bien inglés y era objeto de burlas por otros estudiantes. Como resultado,

ella tenía problemas en la escuela y esto dio lugar a problemas en casa. No tenía padres en Estados Unidos y se desplazaba constantemente de casa de su abuela a la casa de su tía hasta que finalmente, vivió permanentemente con su tía, aunque esto no le dio ninguna estabilidad. En varias ocasiones su tía la dejó fuera de casa y ella también se escapó. No tenía una situación de vida estable, era extremadamente vulnerable y tenía que depender de vecinos y amigos para encontrar refugio. En una ocasión, un vecino le ofreció un lugar para dormir por la noche y la violó. Esta no fue la primera vez que alguien que le ofrecía refugio abusaba sexualmente de ella. Cuando ella vivía con una familia en Sierra Leona un miembro masculino de la familia también la atacó sexualmente. Por lo tanto, antes de los 12 años, esta niña se había enfrentado a asaltos sexuales en los lugares en los que debería haber encontrado seguridad.

La falta de estabilidad familiar la llevó a ser colocada en un refugio cuando ella tenía sólo 17 años. En 2014 una vez más se encontraba sin un hogar. Ella hizo un plan para entrar en un programa de capacitación laboral, todo lo que necesitaba era un lugar para vivir durante 3 meses. Un amigo le habló de Tiara Waters, que ayudaba a chicas jóvenes, pensó que esto era su salvación, pero después de vivir con Tiara Waters y su novio, el Sr. Thompson, durante dos semanas, se le dijo que tenía que ejercer la prostitución o se encontraría sin hogar una vez más. Con miedo de quedarse sin hogar otra vez y diciéndose a sí misma que sólo tendría que hacerlo durante un corto periodo de tiempo, comenzó a dedicarse a la prostitución y se vio obligada a dar el dinero que ganaba al Sr. Thompson. Además, durante este tiempo, el Sr. Thompson la violó y también se jactó de matar a otras personas. Él era físicamente violento con la señora Waters. CR vivió atemorizada las siete semanas antes de ser arrestada. Por suerte, se encontró con un fiscal que había sido entrenado en tráfico sexual y que llevó el caso con un enfoque centrado en víctimas. Los investigadores inmediatamente se centraron en estabilizar a CR. Fue colocada en una casa hogar para niñas y ya no tenía que preocuparse de tener un lugar seguro para dormir y comer. También trabajó con psicólogos, que le ayudaron a lidiar con su trauma psicológico y emocional. Dada su edad, fue colocada en un hogar de grupo, pero quiero señalar que a víctimas mayores también se les proporciona alimentación, vivienda, empleo y se les cubren otras necesidades, ya que esto es fundamental para la estabilización de las víctimas.

A la par que asistencia a víctimas trabajaba en estabilizarla, los investigadores trabajaron para desarrollar confianza con ella. Mantenían contacto a través de un enlace dedicado, le aseguraron que no estaba en problemas legales, como señaló el Embajador Coppedge, que no se enfrentaría a cargos de prostitución ya que una vez que se determinó que era menor de edad esos cargos fueron removidos. Y a medida que ella se estabilizaba, ayudó a nutrir el caso contra el Sr. Thompson y la Sra. Waters.

Ahora bien, es importante que los jueces y fiscales entiendan que puede haber testimonios contradictorios, nos enfrentamos a esto con CR desde el inicio del caso. A menudo, las víctimas temen la aplicación de la ley, muchas veces han sido entrenadas sobre qué decir si son capturadas, además, temen que el traficante las castigue. También está la vergüenza, que en el caso de CR era muy grande. Ella venía de una pequeña comunidad y no quería que la comunidad se enterara, que había estado involucrada en la prostitución. Es muy importante que los jueces y fiscales entiendan que hay razón para estas contradicciones y es importante contar con especialistas forenses y otros expertos para trabajar con las víctimas desde el principio, no sólo para ayudar a la víctima, sino también en pro del caso, para que puedan ayudar a explicar por qué hay contradicción y por qué se toma un tiempo para que la víctima cuente toda la historia ante la corte.

Al final, el Sr. Thompson y la Sra. Waters fueron condenados por coerción. En los Estados Unidos, la definición de coerción implica utilizar amenazas, hacer daño grave o restringir físicamente a cualquier persona, o cualquier proyecto, plan, o patrón de intención que hace que una persona crea que un fracaso de su parte para llevar a cabo un acto dará lugar a daños graves, o a la restricción física. Ahora bien, en el caso de CR había una amenaza de violencia, pero lo más importante fue la amenaza de la falta de vivienda. Lo fundamental de la ley estadounidense, en mi opinión, es que señala que la coacción se ejecuta desde el modo de pensar de una persona en las mismas circunstancias y antecedentes de la víctima y por lo tanto, yo o usted habríamos actuado de diferente manera en esta misma situación, pero lo importante es la forma en que la víctima habría actuado. En este caso, CR fue capaz de declarar sobre su situación familiar, la falta de estabilidad, el abuso sexual en su pasado y las instancias anteriores de la falta de vivienda y esto ayudó a que el jurado entendiera que, desde su posición, no tener hogar era un grave

daño y por eso se dedicó a la prostitución. Creo que la capacidad de CR para contar su historia y la ley que dice que se debe mirar el caso desde el punto de vista de la víctima, ayudó a que el jurado viera que estas dos personas habían coaccionado contra CR en la participación en la prostitución. Gracias.

Embajador Coppedge

Vamos a la historia del Juez Richard Story, que llevó un caso penal internacional. Sabemos que el tráfico de personas es un gran negocio internacional y que los grupos delictivos motivados por el lucro importan niños de varios países para el comercio sexual. Juez Story, usted tuvo un caso en que las víctimas tenían entre 14 y 24 años de edad, cuando fueron reclutados de una operación de tráfico sexual de gestión familiar en el estado de Tlaxcala, México y contrabandeados a Estados Unidos. ¿Puede hablarnos un poco acerca de este caso, de cómo llegó a usted y de las lecciones que aprendió de él como funcionario judicial?

Juez Richard Story

Sí, claro. Permítanme comenzar dando las gracias a la academia por darme la oportunidad de estar aquí, es sin duda un honor para mí participar en este programa significativo. El caso referido por el Embajador Coppedge involucra a 10 mujeres jóvenes que habían sido blanco de lo que me referiré como la organización Cortés Meza. Estas mujeres eran jóvenes, sin educación, generalmente de zonas empobrecidas de México. Unos hombres llegaron a sus comunidades y utilizando engaño, amenazas, violencia física, manipulación psicológica, promesas de amor, matrimonio y una vida mejor, indujeron a las víctimas a irse a vivir con ellos a Estados Unidos.

El principal acusado, que al final fue enjuiciado —los otros acusados se declararon culpables— un joven llamado Amador Cortés Meza, junto con sus hermanos y sobrinos, encontraban a estas mujeres jóvenes en México. Iban a las comunidades, permanecían allí durante un corto tiempo, llegaban a conocer a las jóvenes y sus familias, fingían que se habían enamorado de las mujeres y que querían casarse con ellas y llevarlas a Estados Unidos para tener una vida mejor. Sugerían que cuando llegaran a Estados Unidos ellas podrían trabajar, ya sea en restaurantes o de amas de casa y luego hacían los arreglos para llevarlas a Estados Unidos.

En todos los casos fueron llevadas por coyotes, entraron por Arizona ilegalmente en el país y fueron trasladadas a Atlanta, Georgia. Una vez que llegaban a Atlanta se les llevaba a hogares donde inmediatamente se daban cuenta de que habían sido engañadas. Se les dijo de inmediato que tenían que dedicarse a la prostitución para pagar el costo de su contrabando al país y para pagar sus gastos de vida. Cuando se negaban eran golpeadas, amenazadas y dañadas físicamente, se les dijo que sus familias serían asesinadas, que estaban en Estados Unidos de manera ilegal y, por supuesto, no tenían más remedio que seguir las instrucciones que se le dieran.

El líder, Amador Cortés Meza, era un tipo particularmente brutal y las víctimas que testificaron en su contra en el juicio vívidamente describieron parte de la violencia que recibieron de su parte. Una de las víctimas, de sólo 15 años de edad en el momento, relató cómo Amador con un cuchillo en su garganta la amenazó con matarla porque ella le había contestado. Otra víctima fue arrastrada por una escalera del cabello, golpeada con la barra de un armario y después de romperle la barra en el cuerpo, Amador le lanzó una plancha en la cabeza y la descalabró. Su cabeza sangró durante más de una semana y, por supuesto, se le negó atención médica o cualquier tipo de tratamiento. Otra víctima, que seguía tratando de resistirse a la prostitución e incluso intentó escapar, fue brutalmente golpeada con una escoba y una silla y, mientras trataba de protegerse la cabeza de los golpes, Amador le rompió un dedo, dejándolo desfigurado permanentemente.

Cuando testificó en el juicio, levantó la mano, se podía ver la desfiguración y por supuesto, nunca se le permitió obtener atención médica. Tan triste y terrible fue el abuso físico a estas mujeres, que fueron sometidas y coercionadas psicológica y emocionalmente por estar ilegalmente en un país. Sentían que no podían acudir a la policía u otros representantes gubernamentales. Tal vez, aún más devastador, era que no podían informar de su situación a sus propias familias. La vergüenza de informarles que se dedicaban a la prostitución, cuando sus familias pensaban que iban a Estados Unidos para una vida mejor y por el amor de estos hombres que habían conocido en sus propios hogares. Que sus familias supieran que se dedicaban a la prostitución por causa de ellos era peor que tratar de simplemente sobrevivir a las circunstancias, circunstancias chocantes para mí, más allá de mi comprensión. Estas mujeres eran llevadas a complejos de apartamentos cada noche, se esperaba que trabajaran siete días a

la semana. Se les avisaba a hombres que las mujeres llegarían y estos se alineaban a la espera de ellas. Eran llevadas ahí por choferes, que no eran parte del anillo oficial, así los traficantes se aislaban del conductor. Estos choferes las llevaban a los apartamentos y las dejaban allí con los hombres. Tenían que dar servicio a entre 20 y 40 clientes por noche, ellos pagaban veinticinco a treinta dólares por el servicio y todo el dinero se dividía entre choferes y los hombres de Cortés Meza. Las mujeres no recibieron nada de dinero. Dependían por completo de sus victimarios para su supervivencia, hombres que no tenían otros trabajos, simplemente corrían la operación y los ingresos derivados de lo que hacían sufrir a esas mujeres.

Embajador Coppedge

Comencemos, esta cumbre con un enfoque en las víctimas para que no se nos olvide por qué estamos todos aquí. En los casos en los EE.UU. que tienen víctimas de origen extranjero, hay disposiciones en la ley americana que les permiten permanecer en el país. Me gustaría compartir con ustedes, o que el juez Abrams comparta con ustedes, sobre las visas T que tenemos y las disposiciones en la ley estadounidense para fomentar ideas acerca de lo que cada país puede hacer para proteger a las víctimas del tráfico. Las diapositivas, juez Abrams por favor. Voy a pasar directamente a la parte de las Visas T, porque la mayoría de las primeras diapositivas ya fueron abordadas por el Juez Abrams.

Juez Leslie Abrams

Hay 2 estatus, la mayoría de las víctimas son objeto de tráfico y llegan a los EE.UU. ilegalmente y no tienen ningún estatus legal ni jurídico. Esta es una de sus principales vulnerabilidades, el hecho de no estar en los Estados Unidos de manera legal, por lo que están en peligro de posible deportación. Además son incapaces de encontrar un trabajo legítimo. En el marco del programa de Visas T, una persona que es o ha sido víctima de la trata sexual puede solicitar una visa de no inmigrante. La Visa T permite que la víctima permanezca en Estados Unidos durante un máximo de cuatro años, reciba una autorización para empleo, lo que es clave, porque ahora no sólo está por debajo del estigma, o la amenaza de ser deportada, sino que también puede trabajar y ganar dinero.

La visa T también permite obtener residencia permanente legal, después de unos procesos la posibilidad de convertirse en residente legal y permanente está disponible. Por último, otro factor importante de la Visa T es que la familia inmediata o un familiar puede obtener también el estatus de no inmigrante derivada e ir a los Estados Unidos. Esto es fundamental para las personas cuya familia podría enfrentar el peligro una vez que ellas salen de la prostitución, o de la trata de personas. Las víctimas son vulnerables aún en los Estados Unidos al vivir sin familia. Así que esa es una de las formas de protección que se proporciona.

Embajador Coppedge

Gracias, Juez Abrams, tomé ese desvío porque en el caso Cortés Meza, lo mencioné en la apertura de mi discurso, la ONG trabajó con las víctimas y ella ayudó a solicitar las visas T. En los EE.UU los casos de tráfico tienden a tomar alrededor de un año o un poco más en llegar a término. Así que durante la tramitación del caso, las víctimas fueron capaces de trabajar, seguir adelante con sus vidas, algunas de las más jóvenes, se matricularon en la escuela, aprendieron inglés y la mayoría que no estaba en edad escolar consiguió trabajo. Todo esto ocurrió mientras el juicio estaba en proceso. Juez Story, si pudiéramos volver a usted y nos pudiera hablar de los factores considerados en la sentencia porque creo que esos factores también son importantes y la forma en que los EE.UU. pone en marcha su sistema de sentencias. Gracias.

Juez Richard Story

En los Estados Unidos tenemos una comisión de sentencia que ha establecido directrices que los jueces deben considerar al sentenciar, son factores de sentido común, sinceramente. Son factores que, como juez condenando a una persona, creo que casi cualquiera de nosotros tendría en cuenta. Las directrices están destinadas a asegurar la coherencia de las sentencias en los tribunales de todo el país, para ayudar a asegurar que las sentencias sean justas y para asegurar que sean proporcionales a la gravedad del delito en cuestión. Estas directrices establecen un castigo de base y luego permiten tomar en cuenta otros factores antes de determinar la sentencia final en el caso.

En el área de la trata de personas algunos de los factores, en virtud de las directrices, que mejorarán o aumentarán la condena incluyen: el uso de fraude o coacción, el

uso de fuerza o la amenaza de uso de fuerza, el número de víctimas, el hecho de que las víctimas puedan ser menores de edad y, si el autor del crimen es parte de un esfuerzo organizado, el papel que desempeña esa persona en esa organización. En una audiencia de sentencia normalmente escuchamos una declaración de la parte demandada. Se permite que la parte demandada alegue y haga una declaración y ofrezca testigos en su nombre; pero otro aspecto importante de la sentencia y la audiencia es la oportunidad para que las propias víctimas estén frente a la corte.

Las víctimas están autorizadas a manifestar cómo la delincuencia les ha afectado y expresar sus opiniones en relación con el castigo del acusado. Creo que, para la mayoría de los jueces, esta parte del proceso de sentencia es el más informativo. Mientras que nosotros, como individuos podemos ser capaces, pensamos, imaginamos, en cierta medida, el impacto que el crimen pudo haber tenido sobre la víctima, el testimonio de la víctima suele ser bastante potente. Varias de las víctimas en este caso particular hablaron en las audiencias sobre los acusados, pero por cuestiones de tiempo, quiero centrarme en la declaración de una de las víctimas, en particular, Natalia. Es una declaración que siempre me persigue, creo, porque, con base en su declaración, sinceramente temo que su confianza en otras personas ha sido irreparablemente dañada y, sin duda, su capacidad para tener una relación personal significativa con alguien y la idea de alguna vez poder confiar es casi nula. Quiero leer, brevemente, algunos de sus comentarios. Esto es lo que le dijo “Francisco”, el joven que la atrajo a Estados Unidos con promesas de matrimonio y amor: “Francisco” prometió a mis padres y a mí que nos casaríamos en un año o dos.

“Me propuso venir a Estados Unidos con el propósito de que yo trabajara en un restaurante y el estaría trabajando en un taxi. Cuando llegamos aquí me dieron la sorpresa más grande de mi vida, que iba a ser prostituida, que tenía que acostarme con hombres sin mi permiso y si no lo hacía, me golpearía. Dejó mi cara moreteada, me golpeó en el estómago dejándome con dificultad de respirar, le dije que no me hiciera esto de nuevo. Le dije que él me conocía, conocía mi casa, no me encontró en la calle como para hacerme trabajar de prostituta. Con el transcurso del tiempo, hice el trabajo que él quería que hiciera, sin querer. Todas las tardes, cuando lo dejaba y luego volvía por la noche, me ponía a llorar y le pedía a Dios que me sacara de esto, o que me enviará a casa, pero él nunca quiso. Me dijo que

iba a trabajar para que pudiéramos ganar dinero y casarnos, y cada vez que le decía que quería ir a casa la respuesta que obtenía era la siguiente [gesto de mano amenazante].

“Viví así durante mucho tiempo, sin poder hablar con nadie, las únicas que podían escucharme eran las paredes, porque ni siquiera podía salir a la calle o conversar con nadie. Si hablaba con alguien me golpeaba. Todos los días, meses, el año que estuve allí, fue muy, muy duro y muy desagradable. Después de haber estado aquí seis meses en los Estados Unidos quedé embarazada de él, se lo dije para asegurarse me llevó a una clínica, con un nombre falso. Le dije que quería tenerlo y él dijo que no, que teníamos que trabajar, y me dio unas pastillas para abortar. Le dije que no hiciera eso, que sería mejor para mí irme a casa y criar al bebé, me dijo que en la situación que estábamos no podíamos tener un hijo porque había que ahorrar dinero. Le preguntaba cada noche cuando llegaba a casa cómo era que él no trabajaba y me enviaba a trabajar. Tuve que acostarme con 20 o 30 hombres por noche y cada vez que le dije que no quería hacer el trabajo me obligó a hacerlo, dijo que esa actividad era para lo que había nacido y, para concluir, me amenazó muchas veces que si hacía algo, o alguien más hacía algo, mataría a mi familia.” Mientras Natalia hacía su declaración pude ver en su rostro la angustia que había en su corazón y nunca lo olvidaré. Gracias.

Embajador Coppedge

Compartimos aquí historias de las víctimas que hemos conocido. Creo que esto marca la pauta para el trabajo que estamos haciendo y por qué es tan importante dar voces y oportunidades a los que piensan que no tienen voz, que el sistema no los respeta y que no tienen oportunidades. Han escuchado ados de nuestros jueces y me gustaría concluir con el juez de apelaciones Beverly Martin, quien analiza cuestiones legales que surgen en todos nuestros casos criminales, incluyendo los casos de trata.

El Juez Martín, en este momento es juez de apelación, y fue juez de primera instancia durante muchos años y fiscal federal, ahora revisa juicios e impugna asuntos legales. ¿Podría hablar con la Academia sobre algunos de los problemas que se presentan en la forma de restitución a las víctimas?

Juez Beverly Martin

Gracias, Embajador, es sin duda un privilegio para mí poder estar aquí y participar. Creo que en la sala voy a aprender más de lo que voy a contribuir, así que estoy especialmente agradecido. El Profesor McEldowney habló de un sistema con reglas detalladas; uno de los problemas con reglas detalladas es que, a veces, las reglas no están a la par con lo que está ocurriendo sobre el terreno.

Ya hemos establecido que la solución a este problema comienza con la identificación de las víctimas y el apoyo a ellas de una manera que nos permitirá llevar a los traficantes ante la justicia. Una de las razones por las que es difícil identificar a estas víctimas es porque son atemorizadas de estar ilegalmente en el país y que por eso serán llevadas a la cárcel. El Juez Abrams ha hablado de algunos de los pasos que hemos tomado en nuestro sistema de inmigración para apoyar a las víctimas de la trata, tanto de la trata laboral como del tráfico sexual, para que puedan ser protegidas una vez que se presenten ante la policía, con un estatus presente y continuo y con la Visa T que el juez Abrams explicó. La primera forma de apoyar a las víctimas, es hacerles saber que “a pesar de que fueron traídas aquí en contra de su voluntad, no van a ser castigadas por ello”.

La segunda forma en que las víctimas se mantienen en la sombra es a través de la vergüenza que sienten por ser obligadas a tener sexo por esos traficantes, sexo comercial. Se sienten avergonzadas, se preocupan por sus familias. Hemos enmendado, una de nuestras reglas de prueba que tradicionalmente había sido utilizada para proteger a las víctimas de violación. La regla de evidencia que existe desde hace mucho tiempo no permitía que una víctima de violación fuera interrogada sobre su historia sexual; esa regla ha sido modificada y ampliada para incluir a las víctimas de delitos sexuales. Lo que a menudo descubrimos sobre estas víctimas es que habían sido involucradas en el comercio sexual en alguna otra etapa de su vida. Ahora es muy claro que esto es una consideración aparte que no tiene nada que ver con la culpabilidad o inocencia de la persona que los traficó o esclavizó y los tipos de condiciones sobre las que el juez ha hablado.

A veces, para aquellos de ustedes que han visto representaciones de televisión de nuestras salas de audiencia, se habrán dado cuenta de que los jueces se preocupan

por que la gente impulsivamente no diga cosas que no queremos que el jurado escuche. Esta regla, Regla Federal de Evidencia 412, también se ha modificado para requerir a cualquier abogado que va a introducir información sobre los antecedentes sexuales de una víctima, dar aviso de 20 días —Creo que es de 20 días— y debe hacer una lista de los documentos exactos y tipos de pruebas que van a ser presentados en relación con la historia de las víctimas. De esta forma el juez sabe, se puede preparar y tomar una decisión con antelación. No, no se permite hablar de eso, o la víctima no va a ser sometida a eso, nos vamos a centrar en las pruebas contra el traficante y las condiciones impuestas a las víctimas sexuales.

Me pidieron hablar de la restitución y prometo llegar a ello. En nuestros continuos esfuerzos para modificar las reglas y ponerlas en una atmósfera en la que podamos apoyar a estas víctimas de delitos sexuales. Hemos estado tratando con el tema de la restitución, la manera de compensar a estas víctimas de los años de sus vidas que “han perdido”, por el daño que se les ha hecho. Nuestras leyes de restitución también se han modificado. El Juez Story habló sobre el proceso de sentencia y parte de las sanciones que están siendo impuestas a los traficantes para pagar a las víctimas. La cantidad de dinero que tienen que pagar se calcula de diferentes maneras. Ellos están obligados a compensar a las víctimas por sus pérdidas personales, que incluye la pérdida de vivienda, los gastos médicos en los que se incurran para ayudarlas a estar “completas”, esto incluye las necesidades médicas físicas que surgieron como resultado de su esclavización así como la atención médica psicológica que necesiten. Además, las leyes se han modificado para permitir que las víctimas sean compensadas por el valor del tiempo que han sido mantenidas en esas condiciones. Se toma en cuenta el número de días, meses o años que han sido esclavizadas así como las ganancias obtenidas por el traficante. En esos casos, como parte de la sentencia, las víctimas entran y hablan acerca de las condiciones con las que puedan ser nutridas y apoyadas. Y, ciertamente, con jueces como el juez Abrams, el juez Story y el juez Duffy, a quien escucharán más tarde, hoy o mañana, el proceso será empoderador para esas víctimas. Eso es lo que esperamos y que su testimonio se tome en cuenta para llegar a una cifra de pago. Siempre existe la cuestión de si la restitución concedida va a poder ser colectada.

Una de las herramientas que utilizamos en este sentido es, si somos capaces de hacerlo, si las autoridades policiales han sido capaces de identificar los activos de los traficantes, entonces esos activos se embargan y en vez de que-

darse en el gobierno de Estados Unidos, se trata de que vaya, en cambio, a las víctimas para ayudar en su rehabilitación y su supervivencia a largo plazo. Últimamente no hemos visto estos casos en los tribunales de apelación, sin embargo, uno de los casos más destacables de mi circuito es uno extraño.

El acusado de nombre Damion Baston, quien viste como Drácula, incluyendo lentes de contacto amarillos y colmillos de oro. De alguna manera creó un imperio de trata que se expandió a todo el mundo. Encontraba mujeres jóvenes de varios países. Las esclavizaba y manipulaba usando algunos de los métodos mencionados anteriormente por el juez Story. En la sentencia su alegato de defensa fue que había enviado algunas de estas mujeres jóvenes a otros países para servir como prostitutas, y que, “la Constitución de los Estados Unidos y sus leyes, se detienen en la frontera de los Estados Unidos y no pueden pedir que pague restitución de actos que se dieron fuera de las fronteras de los Estados Unidos”. Creo que este problema es bastante nuevo, la corte dijo que en virtud de la Cláusula de la Constitución de los Estados Unidos de Comercio Exterior el podía ser responsabilizado por el tiempo y daño hecho a la joven, en este caso en particular, en Australia. Se duplicó la cantidad de restitución que se adjudicó a la joven mujer que había sido prostituida en Australia. Creo que este personaje, Drácula, en realidad tenía algunos activos que fueron confiscado y transformados en dinero para pagar a estas víctimas.

Embajador Coppedge

Gracias, juez Martin, por sus comentarios. Nuestro objetivo en centrarnos en las reglas de evidencia que protegen a las víctimas y “premios” de restitución que van a ellas, las declaraciones de las víctimas en los tribunales y los servicios de las ONGs durante el proceso de juicio. Todas estas áreas son la manera en que el sistema de Estados Unidos apoya a las víctimas de la trata en un esfuerzo por hacer que sean personas “completas” de nuevo y ayudarles a iniciar un camino hacia una nueva vida. Así que tenemos que poner a las víctimas al frente y al centro. Gracias a todos por permitirnos dirigirnos a ustedes.

El Esfuerzo de los Tribunales Mexicanos en el Ataque a la Trata de Personas

Mgdo. Edgar Elías Azar

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

La trata de personas es el segundo negocio ilícito más rentable del planeta, sólo detrás del narcotráfico. Naciones Unidas reporta ganancias de tan infame procedencia por más de 35,000 millones de dólares americanos al año. De ahí su enorme potencial dañino, su atractivo para muchas empresas criminales, su capacidad de movimiento global; y la complejidad para su prevención y erradicación.

Se calcula que cada año se dedican a esa criminalidad más de 800,000 personas a lo largo y ancho de la Tierra. Se han identificado por las agencias internacionales más de 2 y medio millones de personas víctimas de esta práctica tan cruel y devastadora, pero bajo la circunstancia de que la cifra negra en esto es muy notable, pues se calcula que se identifica sólo a una víctima por cada 20 realmente sometidas al crimen organizado para sus propósitos.

Así las cosas, cerca de la mitad de las víctimas son explotadas para el comercio sexual y poco más del 35% se dedican a la explotación laboral en diversas formas de servidumbre e incluso esclavitud; y del total victimizado, sólo el 15% se trata de varones mayores de edad, pues las mujeres adultas comprenden más del 60% de personas explotadas y son niños y niñas, menores de 15 años de edad el resto de personas que sufren está acción tan atroz e intolerable.

Prácticamente todas las naciones del mundo, la padecen, más de 198 países reportan problemas relacionados de diversas maneras con la trata de personas. Es, en realidad, una terrible manifestación de los procesos de globalización en los que vivimos desde hace ya varios lustros.

Aclaro: se utilizan términos como globalización, internacionalización, transnacionalización o universalización, indiscriminadamente, para referir el Fenómeno de la Mundialización.

En realidad, se ha tratado, con esas expresiones variadas y dispersas, además de equívocas, de reconocer el fin del ghetto nacional; la “porosidad” de las fronteras y la interdependencia, más o menos relevante de los fenómenos sociales, entre los que —desde luego—, se inscribe con puntualidad y alto sentido de la prioridad la delincuencia organizada.

Desde luego, esto fragiliza fronteras y divide a las antiguas comunidades nacionales. Con ello, se da un primer factor de la mundialización: el individuo deja de reivindicar su asidera al estado nacional y se refugia, o se acerca al menos, a identidades múltiples, móviles, volátiles, cada vez menos territoriales.

Por supuesto que quiénes más colaboran en la prosperidad de éste acontecer, son: el progreso tecnológico, el de las comunicaciones, el de las nuevas estrategias empresariales; sin olvidar los intercambios económicos, formales o informales; los desplazamientos migratorios; la difusión rápida y penetrante de ideas o modelos a escala mundial. Todo esto y más, transgrede las convenciones, hasta hoy conocidas, de la geografía política.

Así, parece que trascendemos en ésta hora del mundo, de una organización consensual de instituciones y gobiernos, a otra, desconectada de esos consensos que parecían firmes, totalmente espontánea, más que convenida y sustentada en los intereses de aquellos protagonistas —civiles y anónimos muchas veces—, y no del Estado-Nación. Es evidente que éste nuevo orden, no sólo trastoca al viejo sistema de convenciones y soberanías, soslayando sus potencialidades, reglas y convenciones institucionales y apareja conflictos y tensiones por resolver.

En este nuevo orden, eminentemente sociológico, se inscribe, prepotente, emboscada, agresiva, la nueva delincuencia, que se solaza de ésta forma de concebir las interrelaciones de la humanidad.

En ese contexto novedoso, aún inexplorado, se presenta con gran virulencia todo tipo de tráfico, que comprende desde mercancías, como droga, armas, obras de arte o vehículos, o de recursos; como los tráfico con ayudas humanitarias y por supuesto, de personas en el tráfico de indocumentados y en la trata para la explotación de distinto tipo.

En México vivimos una especial condición de nuestra geografía política, pues estamos en la inmediata periferia de la sociedad más rica del planeta, más exuberante en recursos y apetitos de todas clases y por ello de una alta demanda de bienes, servicios y, claro, de personas. Nuestro problema de trata de personas está resuelto en nuestro orden normativo vigente y nos atecemos a las regulaciones y recomendaciones internacionales más adecuadas. Pero nuestra realidad fáctica, ya no jurídica, acusa datos que nos previenen y nos alertan.

A pesar del progreso legislativo mencionado, todavía hay muy pocos fallos condenatorios por trata de personas en México y en el mundo. Solo 4 de cada 10 países comunicaron que habían registrado 10 o más fallos condenatorios por año y casi el 15% no habían registrado ninguno en absoluto. Por lo general, el panorama mundial de la respuesta en materia de justicia penal se ha mantenido estable en los últimos años. Menos países están comunicando aumentos del número de fallos condenatorios, que sigue siendo muy bajo. Esto puede ser reflejo de las dificultades de los sistemas de justicia penal para hacer frente de manera adecuada a la trata de personas.

A pesar de ello, en México se empiezan a vislumbrar avances, se han sumado los esfuerzos de los Sistemas de Justicia Federal y Local, del año 2009 al 2015 las sentencias emitidas para este delito, fue un total de 570, de las cuales 551 fueron dictadas por las entidades federativas y 19 por la federación, de este total la Ciudad de México es la entidad que más sentencias ha dictado en ese periodo con un total de 211 sentencias, lo que representa el 38% respecto del total de las sentencias dictadas a nivel nacional en el fuero común. Por lo menos el 72% de las sentencias fueron condenatorias, las personas sentenciadas habrían sido 733 y el número de víctimas involucradas en estos delitos eran 951.

Por eso, hoy por hoy, podemos anunciar con la mayor contundencia que después de los Estados Unidos, somos el país que más sentencias hemos dictado en el mundo entero y sólo las emitidas en la Ciudad de México, gracias a la colaboración institucional con las Procuradurías General de la República y de la Ciudad de México, se han pronunciado más sentencias que todas las generadas en América Latina.

Es importante abordar esta problemática en el contexto de la incidencia delictiva nacional, considerando que la cifra negra del país es del 92.8 por ciento, es necesario fomentar la denuncia para poder incidir de manera efectiva en el combate a este delito.

Es por ello, que la Reforma Constitucional de México en la materia penal adquiere gran relevancia, ya que la misma al hacer más eficiente el Sistema de Justicia, debe garantizar una mayor confianza en la Ciudadanía.

Para enfrentar este problema de dimensiones mayores, es necesario tratar de comprender el panorama general y no aldeanamente. Las corrientes de este Nuevo Orden Mundial no pueden ser sinónimo de integración internacional, aunque evidentemente sí de flujos tecnológicos, migratorios, mercantiles y de naturaleza similar.

Por una parte, emergen ahora, en éste momento, grupos o asociaciones que operan sin fronteras y se desarrollan en los más diversos ámbitos; así, los hay de índole profesional, científica o cultural, económica o mercantil. Por supuesto que dentro de ese espectro aparecen, se fortalecen o mutan a nuevas formas más eficaces, las organizaciones de delincuentes.

Resulta pues, que el Nuevo Orden Mundial, ya no reconoce a las convenciones supranacionales ni a la dominación ideológica, como sus instrumentos de integración. Muy lejos de ello, las fragmentaciones, el fortalecimiento de los grupos y redes, los escasos resultados de los regímenes supranacionales y de la diplomacia, al lado de los nuevos flujos, sofisticados y muy amplios, de diverso tipo, confluyen a un nuevo estado de cosas.

Quienes piensen que con la fuerza y el enfrentamiento “cuerpo a cuerpo” en el campo mismo donde se desenvuelve esta delincuencia emergente, que con marcos normativos, instituciones, tecnología, personal, equipamiento, participación comunitaria, vigentes y caducos, se acabará venciendo a dicha criminalidad, están errando gravemente en sus funciones y enfoques y lo más grave, estarán retrasando la adopción de los esquemas nuevos de prevención y persecución de los delitos.

La alta capacidad financiera de éste nuevo Crimen Organizado, su evidente capacidad corruptora, de infiltración, de innovación, de reclutamiento, de

mecanismos ofensivos y defensivos; su propia cohesión y moral de grupo, convierte a estos delincuentes del nuevo milenio, en grupos casi imbatibles en sus propios terrenos.

Los ámbitos emergentes de la delincuencia organizada requerirán de novedosos y pertinentes marcos de lucha, prevención y represión; desde luego, los especialistas en el diseño y conducción de la nueva Política Criminal, aguzarán sus inteligencias, imaginación y disposición, para instrumentar el cambio. El delito de trata de personas es una actividad mundial, muy eficaz para sus promotores y muy dañina para todos. Se desarrolla en un ambiente propicio ante esta mundialización irreversible; los instrumentos para su combate se encuentran en la afectación de la economía del delito, en la cultura universal sobre la dignidad humana y los derechos de las personas y un más eficaz sistema internacional de persecución y juzgamiento de los criminales.

Así, la economía, los procesos financieros o mercantiles, bursátiles y de inversión; la cultura, las ideas, la ciencia y el lenguaje. Todo se mira ahora desde otra perspectiva, que es la que, en una Sociedad Científica como ésta, estamos obligados a conocer, para poder enfrentar nuestra encomienda de manera acertada y puntual. Acaso la criminalidad que emerge ha contribuido a éste nuevo orden, que indudablemente le otorga ventajas y ocultamiento.

Para citar sólo un proceso novedoso, con sus efectos inmediatos, refrámonos a la sorprendente economía digital. Ya es posible realizar transacciones de toda índole, vía Internet, cancelando paulatinamente con ello el uso del dinero material, del llamado efectivo, o mejor, convirtiéndolo en un ente digital.

Visto desde un punto de vista criminológico, la utilización de ésta nueva modalidad de movimiento de la riqueza podría permitir, sin los controles adecuados, a los que desde luego reconocen oposiciones, incursiones más activas, prolongadas y distantes del crimen organizado.

Desde otro enfoque, dicha práctica, que se espera se difunda internacionalmente muy rápido, al tender a la cancelación del dinero tangible y su sustitución por la transferencia electrónica de fondos, podría desestimar y acaso evitar, los mercados negros, incluyendo los de drogas, armas, y desde luego, de personas.

Debe tenerse presente que estos procesos electrónicos dejan huellas a través de sus registros, con lo que sistemas financieros ilícitos, ahora en la penumbra, difíciles de seguir, podrían dejar una ruta bien marcada y auditable.

Si bien el robo de dinero, el secuestro, la extorsión, la falsificación de moneda o los delitos fiscales, perderían viabilidad y eficacia con el uso del dinero digital, también es verdad que seguramente surgirán nuevas formas delictivas, seguramente más sofisticadas y dañinas y, por cierto, no en algunas décadas, sino en los próximos años.

Todo esto nos lleva a reflexionar en la imposibilidad de contentarnos con revisar y “poner al día” los procesos, instrumentos y medios de estudio, prevención y combate al delito, que conocimos en el pasado, aun en el más reciente.

Ahora estamos a tiempo de que estos nuevos procesos mundiales, cancelen viejas prácticas delictivas, volviéndolas obsoletas, inútiles y costosas; y también estamos a tiempo de sumarnos, con los operadores y promotores de estos cambios, para lograr que futuras acciones ilícitas, puedan prevenirse, evitarse o perseguirse con verdadera eficacia.

En éste tema particular de la trata de personas, dadas sus dimensiones planetarias y su poder de acción, es uno de los muchos que componen la agenda del siglo XXI, y se debe insistir, desde hoy en permitir la “huella electrónica” de los movimientos financieros; si éste dinero digital, se puede ocultar como el dinero tangible, estaremos viviendo, en un lustro, el más extenso paraíso fiscal y de lavado de dinero, que pudieran haber soñado los más afamados y conspicuos delincuentes.

Las fuerzas institucionales de combate al crimen organizado tienen ahora mismo la oportunidad histórica de bloquear el campo del delincuente. La omisión en éste caso, promovería la acción criminal más importante y devastadora en la historia de la delincuencia. Nunca antes hubo ésta circunstancia tan propicia, en todos los siglos de confrontación sociedad-criminalidad.

El esfuerzo mexicano ha sido verdaderamente contundente, lo ha sido a través de reformas estructurales frontales importantes en el combate al problema. No hemos tenido descanso y su actividad la ha fundamentado en muchos

factores, entre otros encontramos la exigencia del nuevo orden mundial en el respeto a los derechos humanos, reflejado en las reformas constitucionales trascendentales e inéditas de la actual administración, leyes de corte general que obligan a las entidades federativas a coordinar esfuerzos y políticas judiciales importantes.

Pero siendo verdaderamente autocrítico, el esfuerzo de nuestro país no ha sido parejo, algunas entidades federativas, afortunadamente las menos, no han judicializado casos de trata en su territorio, argumentando que este problema no lo tienen, mientras que otros, como la Ciudad de México y Chiapas, tenemos varios centenares de expedientes, que ya suman penalidades muy cercanas a los mil años. Nuestro esfuerzo coordinado con las Procuradurías General de la República y de la Ciudad de México, es el que ha dado este magnífico resultado. Otro argumento importante es la presión y empuje que en este tema han dado algunas organizaciones sociales, entre las que destaca la que lidera Rosi Orozco. Los resultados que hemos obtenido aun cuando nos distinguen como un país esforzado y preocupado en el ataque al problema, no nos deja satisfechos, pues entre la porosidad de la frontera sur y el apetito insaciable de drogas y prostitución de la frontera norte la constante del problema continúa.

Cada vez hay más niños, niñas y mujeres esclavizadas, que ven con desaliento el que algunos países del mundo digan que en su territorio no existe el problema o que el tema es menor o, lo más grave, que es culpa de quien demanda el servicio y no suya, en una clara e injustificada evasiva de sus responsabilidades.

El problema existe, el problema es responsabilidad de todos, no lo debemos permitir, perdiendo la batalla la perdemos todos, se destruyen valores, se aniquilan esperanzas de vida, se generan mafias, nacen nuevos tipos de delincuencia y más corrupción y todo lo imaginable.

Los países del mundo estamos obligados a fortalecer sanciones para hacerlas más severas, a unificar tipos penales para no dar cabida a interpretaciones tendentes a proteger este tipo de delincuentes, terminar con antros dedicados a la prostitución en donde encuentra cobijo este infamante delito, apoyar a organizaciones sociales que dedican su esfuerzo al rescate de víctimas y a generar una verdadera y fructífera coordinación entre los países, que la

diplomacia haga su trabajo para evitar al menos la transfronterización del problema. Mucho habrá que decirse del tema, estoy seguro que la judicatura del mundo aquí reunida bajo esta espléndida convocatoria coincidirá en lo fundamental en la necesidad imperiosa de nunca dejar de seguir buscando soluciones para aplicarlas con la severidad que el caso merece, gran parte del futuro de la vida de niños, niñas y mujeres está en nuestras manos.

El siglo XXI dio inicio en algún momento significativo. Tal vez con la cancelación de la Guerra Fría, tal vez con los ataques terroristas del 9/11, tal vez con el colapso del sistema capitalista de 2008. Pero es seguro que lo que en realidad distingue a este siglo es el movimiento mundial a favor del fortalecimiento, respeto y protección de los derechos humanos.

Esa expansión universal del concepto, de la protección y reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, distingue completamente a estas épocas de mundialización. Si este fenómeno planetario presenta aspectos temibles como la acción de una delincuencia organizada sin fronteras, también nos coloca ante el imperativo de garantizar a cada cual que sus derechos básicos se mantengan incólumes.

Todos los días se promueven e impulsan nuevas fórmulas y estructuras gubernamentales y supranacionales dedicadas a enfrentar ésta modalidad criminal tan poderosa; surgen ideas y legislaciones novedosas e inteligentes, pero lamentablemente proclives a los estados de excepción, al llamado terror legal o a las respuestas de extremo, que cuando fracasan, sólo dejan el abismo por delante.

Ante el nuevo orden de cosas, de ninguna manera puede contemplarse una tarea concluida; en rigor, apenas se inicia la construcción del nuevo modelo que el conocimiento humano del porvenir habrá de erigir, para garantizar el éxito de su propósito primigenio: conocer el delito, para prevenirlo y perseguirlo con eficacia y preservar todos los derechos de todas las personas.

El delito ha reconocido tres fases para su prosperidad: en primer término, el campo propicio —otrra, los entornos del desarrollo social inmediato; hoy, la nueva sociología mundial—; en segundo lugar, los flujos que le dan corporeidad —antaño, los usos y costumbres de una comunidad dada, hogaño, los incontrolados movimientos migratorios, financieros, mercantiles, tecnológi-

cos, montados en una rápida y eficiente red de comunicación—; por último, los resultados o beneficios obtenidos —hasta hace poco, las secuelas mismas del acto ilícito considerado en sí mismo, hoy, los incontables recursos financieros que discurren más allá de los controles y vigilancias institucionales—.

La comprensión a cabalidad de estas tres fases por parte del moderno operador en contra de esta criminalidad, le permitirá abordar los diversos temas que la rodean, con mayor profundidad y amplificada eficiencia, de tal suerte que el diseño de las Políticas Públicas domésticas e internacionales, resulten, no sólo viables, sino aplicadas con pulcritud y seguidas con rigor.

Esta delincuencia sin rostro, que merece todo el esfuerzo posible en su combate, actúa en toda la faz de la Tierra y no reconoce fronteras; las víctimas somos todos y ya no podemos hablar de víctimas en lo individual, dados sus efectos universales y genéricos.

La perspectiva de inicios de siglo ante la agenda de las naciones, es abrumadora. Arroja retos en todos sus ángulos y deja una premisa mayor: lo único que no puede hacer el responsable de conocer y evitar la delincuencia, es permanecer inmóvil y conforme con lo hasta hoy logrado, que siendo mucho y bueno, no será suficiente, ante el nuevo embate criminal.

Juntos por la Defensa de la Dignidad Humana

Margarita Popova

Vicepresidente de la República de Bulgaria

Hemos sido llamados en conjunto al *caput mundi* para un evento notable: apoyar con pensamientos brillantes al diálogo a nivel mundial dirigido por la Iglesia sobre la protección de la creación de Dios y sobre las complejas relaciones entre Dios —Hombre— Naturaleza como la base de progreso universal. En el curso de dos días, nos dedicaremos con amor y respeto mutuo, a tratar grandes preguntas sobre el significado de la vida y la grandeza de la dignidad humana.

No existe una receta para el verdadero sentido de la vida. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que la creación, la libertad, la justicia y el refuerzo de la justicia humana, que es justicia de Dios, debe ser velada. El sentido de la vida es la hazaña espiritual del hombre, debería incluir la mejora moral y lo sublime en el camino hacia el progreso humano, dominando la naturaleza para que la gracia pueda ser universal y la alegría del triunfo de la vida sobre la muerte puede ser completa.

Así es como el salmista introdujo la racionalización teológica de la creación y nuestro lugar en el Salmo 8 del Antiguo Testamento:

*“¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?
Y el hijo del hombre, para que lo visites?
Le has hecho poco menos que los ángeles,
Y lo coronaste de gloria y honor.
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;
Has puesto todas las cosas bajo sus pies.”*

Para nosotros, los únicos seres capaces de autoconciencia, Dios ha establecido un objetivo excepcional: salvaguardar el mundo terrenal, seguir mejorando a través de un trabajo consciente, eufórico, virtuoso y digno, cuidando de nuestro vecino en sus dolores y alegrías. Nosotros, los humanos, somos minúsculas partículas en el universo. Somos, sin embargo, una parte integral

del mismo y estamos unidos a él: como materia, como espíritu. Por nuestro “dominio sobre las obras de la mano de Dios”, tenemos la responsabilidad del advenimiento al mundo en una nueva fase.

Espero que durante estos dos días de junio seamos capaces de demostrar que nuestros pensamientos y acciones pueden ayudar a mejorar el mundo, al menos, un poco como cuando lo hacemos al administrar justicia en defensa de la dignidad humana. Como buenos cristianos, haremos todo lo posible para compartir abierta y sinceramente las alegrías y sufrimientos del presente que vivimos. Alcemos la voz en oración contra las humillaciones más graves que degradan la dignidad humana, perjudican el honor, y privan a los seres humanos de su libertad creativa en el nombre de la paz, la bondad, la verdad y la armonía.

Vivimos en un mundo de progreso sin precedente y montones de riquezas incalculables. Hemos dotado al hombre con un sinnúmero de derechos. Algunas personas incluso disfrutan de una libertad y movilidad casi infinita. Mientras millones siguen viviendo en la ilegitimidad y en “tierra de nadie”. Los países y sociedades están estrechamente relacionados entre sí, lo que a veces provoca presión y vulnerabilidad. Lamentablemente, creemos cada vez menos que la unión hace la fuerza y confiamos cada vez menos en las instituciones que hemos establecido nosotros mismos. Rivalidades y animosidades en todo el mundo dan lugar a injusticias y desigualdades graves. Millones de personas están privadas de artículos de primera necesidad y viven privadas de dignidad.

Son arrancadas de su tierra natal y forzadas a la migración masiva a pesar del peligro que ello conlleva. Abundan conflictos étnicos, religiosos y sociales. A pesar del excedente mundial de alimentos, la hambruna es un hecho que peligra la supervivencia de naciones enteras, pero también es una ofensa a la grandeza y la santidad de la persona humana. Niños siguen muriendo de hambre. “Por lo tanto, si la preocupación por la necesidad de alimentarnos es una cuestión material, entonces la preocupación por la alimentación de nuestro vecino es un asunto espiritual (Santiago 2: 14-18). -*La misión de la Iglesia ortodoxa en el mundo de hoy*). Hemos sido testigos de la degradación de la condición de Estado, la radicalización y el extremismo en proporciones aterradoras. Fracturas sociales profundas se han generado, con un abismo in-

franqueable, una pequeña porción de la sociedad dice ser la titular del poder. Grupos y redes ocupan posiciones privilegiadas en la sociedad y se destacan como centros de poder político, influencia y control.

Las profundas desigualdades sociales, la avaricia, la alienación, el caos y la violencia actúan como poderosos catalizadores del descontento social y la crisis. La sensación de inseguridad crece drásticamente. Nuevos estallidos de intolerancia y hostilidad se activan y se añaden a los ya existentes. La violencia con motivación política va en aumento. En sus foros de glamour las élites no hacen mención de la corrupción, la hipocresía, la falsedad y la demagogia política que ha crecido hasta el punto de hacer del mundo un lugar peligrosamente dividido. Es con el corazón en la mano que escuchamos las noticias sobre nuevos brotes de sufrimiento humano, la enfermedad o la pobreza. El crimen organizado, ayudado por la corrupción brutal, ataca con éxito sectores económicos enteros y destruye los sistemas sociales. Debido al debilitamiento de las relaciones entre las personas y la pérdida de fuerza del estado, al crimen organizado le resulta más fácil imponer sus valores y orden. Ven y tratan a los seres humanos como objetos. Internet y las tecnologías de comunicación de gran alcance se utilizan para reclutar a las víctimas de la trata de personas. Un mundo se levanta contra otro. La trata de seres humanos es un negocio, y nosotros, los abogados, con timidez teorizamos y nos preguntarnos si existe la esclavitud hoy y la forma en que posiblemente podría contrarrestarse.

En la primera Constitución de Bulgaria de 1879 adoptada después de nuestra liberación otomana, los legisladores búlgaros elaboraron una disposición notable: “Nadie en el Principado de Bulgaria tendrá derecho a comprar o vender seres humanos. Todo esclavo, cualquiera que sea su sexo, religión o nacionalidad, pasará a ser un hombre libre al poner un pie en territorio búlgaro”. La base de la disposición del artículo 61 de la antigua Constitución de Bulgaria, en 1881, donde un tribunal local nulificó la transacción entre dos rumanos ya que estaba relacionada “al intercambio de tierras por esclavos agrícolas”. Del mismo modo, la primera Ley del Código Penal de Bulgaria de 1896 proporcionó una pena de cinco a diez años en régimen de aislamiento para cualquier persona que “prive a otra persona de la libertad y los venda como esclavos dentro o fuera del país” (artículo 291) .

¿Qué les sucedió a la humanidad al transitar del siglo XIX al siglo XXI?
¿Hemos conocido la verdad ahora que hemos adquirido libertades? La verdad y la libertad siempre van de la mano y existen juntas y entrelazadas.

En la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la ONU establece la asociación mundial para el desarrollo sostenible como un objetivo principal. El Programa se basa en la dignidad humana. Para las personas con sus plenas facultades mentales que mantienen sus corazones abiertos al *ethos* del humanismo, el desarrollo sostenible sólo puede tener un sentido histórico y cultural, vivir juntos en un mundo pacífico y próspero, donde la acritud, el insulto, la humillación, y la violencia no prevalezcan.

Para luchar contra la esclavitud moderna y proteger a sus víctimas, la comunidad global de especialistas en derecho penal y profesionales ha elaborado una serie de instrumentos, tales como convenciones, directrices, protocolos, leyes nacionales y mecanismos de apoyo y compensación económica para las víctimas de la delincuencia, así como catálogos de los derechos del niño, reglamentos y directrices para ayudar a las víctimas del tráfico. Varios comités y organismos se han puesto en marcha. La trata de seres humanos está prohibida por la Carta de la Unión Europea de los Derechos Fundamentales, así como el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Los investigadores apuntan a una serie de deficiencias de los instrumentos internacionales adoptados en todo el siglo XX, como la “definición inexacta y tendenciosa de la trata”, haciendo caso omiso de los aspectos específicos de la explotación y su conexión con los mercados delictivos, o la eficacia de los instrumentos de protección de víctimas.¹ El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, fue adoptado en 2000 y entró en vigor en 2003.

El tratado del consejo 2002/629 / JAI del 19 de julio de 2002 (derogado) y el tratado 2004/68 / JAI, de 22 de diciembre de 2003 establecieron las primeras normas en la Unión Europea para la lucha contra la trata de seres humanos. El Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de

¹ Pushkarova, Iva. *La trata de seres humanos*, SIBI Publishing House, Sofia, 2012, p. 12.

Seres Humanos entró en vigor en 2007. La armonización gradual de la legislación penal del Consejo Europeo de 2011 abrió el camino para tener instrumentos jurídicos globales sobre la trata de personas —Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo— de 5 de abril de 2011.

Sin embargo, todos los esfuerzos legislativos y numerosas reformas estructurales palidecen en comparación con las estadísticas escalofriantes: según el primer informe de la Comisión Europea del 19 de mayo de 2016 los progresos realizados en la lucha contra el tráfico de seres humanos, dicen que de 2013 a 2014, 15,846 hombres, mujeres, niños y niñas fueron registrados como víctimas de la trata en la UE, mientras que el número de condenas fue de 3,129. Los datos muestran que menos de la mitad de las víctimas reportaron el caso a la policía y solicitaron protección. Al menos el 15% de las víctimas fueron niños que sufrieron abuso sexual y explotación laboral, incluyendo la mendicidad, el robo de carteras, y la prostitución. El comercio de órganos corporales no se puede descartar en los casos de trata de niños. Los bebés se venden a veces incluso antes de nacer. El 76% de las víctimas son mujeres, la mayoría son mujeres jóvenes.

La trata de personas priva a los seres humanos de su libre voluntad y los reduce a objetos de derechos de propiedad. La trata de seres humanos es parte del gran problema del progreso universal y la supervivencia pacífica de la humanidad. Es incompatible con los valores de una sociedad democrática. No hay ningún otro valor, más que el ser humano en sí: la vida humana, la salud, la integridad, la libertad y la dignidad justifican la más potente de las represiones, la represión penal. Excluir a los seres humanos de sus características sociales es equivalente a su transformación en productos básicos. Lo que equivale a la esclavitud.² Ningún otro crimen parece capaz de generar víctimas de tal manera. La posición de dependencia de las víctimas aplasta cualquier resistencia al mal y mata la sed de vida. Lo peor de todo, el tráfico humano a menudo moldea las actitudes de las víctimas de esclavitud y los hace pensar que es una forma normal de vida. Un sistema de valores paralelo al estado de derecho se desarrolla. Vidas privadas de elección se viven. La

² Sobre este tema véase B. Vechev, *Esclavitud y Derecho Penal de Bulgaria*, Siela Publishers, Sofía, 2016.

trata de seres humanos es una de las formas más monstruosas de delincuencia organizada, apoyada por la corrupción política de alto nivel.

No todos los sistemas jurídicos tratan la esclavitud como atentado grave contra la dignidad humana. Expertos en derecho penal y profesionales tipifican la esclavitud como un delito general relacionado con el delito de tráfico de seres humanos. Soy plenamente consciente de los numerosos argumentos y razones en contra y a favor de tal entendimiento. A pesar de todos los argumentos a favor y en contra de este enfoque, creo, no obstante, que deberían ser ofrecidas garantías adicionales y advertencias a la disuasión de los usurpadores del derecho a la libertad y dignidad humana. Por otra parte, también se debe facilitar la cooperación jurídica internacional. Estoy convencida que cualquiera que ayude a alguien a forzar o fuerce a otro a la esclavitud y a la trata, debe ser juzgado. Además, recordemos las estrategias y políticas específicas de protección infantil, en particular en materia de menores no acompañados a lo largo de rutas de migración, éstas son de suma importancia en la actualidad. Las acciones comunes son requeridas por gobiernos, iglesia y sociedad civil. También se necesitan políticas eficaces de justicia para menores, junto con medidas fiables de protección infantil. Este tipo de políticas son la piedra angular para recuperar la humanidad de nuestras sociedades.

La comunidad judicial esta a prueba ante su conciencia profesional, ante la humanidad y Dios. Así como las élites políticas y sus asambleas legislativas. Juntémonos hoy en contra de la esclavitud que fuerza a los seres humanos a la sumisión, e ilegitimidad, y los somete a tratos inhumanos, explotación, al poder de otros seres humanos y les arranca a las víctimas cualquier posibilidad de cambiar esa situación por sí solos.

Mis pensamientos se deslizan de nuevo a las preguntas: “¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Dónde nos encontramos hoy los seres humanos? ¿Cómo gobernamos la tierra, ya que Dios ‘no dio el mundo a los ángeles ...’, y sometió todas las cosas a nuestros pies?” (Hebreos 2:5).

“Aquí está el hombre” (Juan 19:5). Un mártir con una corona de espinas. La vida de un cristiano, según el Nuevo Testamento, es una vida llena de amor a Dios y al prójimo. Una vida en que “lo bueno es bueno sólo si se logra a través de buenos medios”. Una vida orientada hacia la próxima grandeza

humana, por la resurrección de Jesucristo, que es un símbolo de la vida que supera a la muerte.

¿Cómo podemos lograr una vida así? Por medio de acciones humanas conjuntas y de un gobierno acorde con la ley natural dominando la naturaleza por el bien del hombre y por el bien de la propia naturaleza.

Por medio de un nuevo liderazgo político que sea punto de partida para la futura reforma del mundo de hoy, construido invariablemente, sobre la premisa de la moralidad: el territorio sagrado del desinterés, la transparencia, la responsabilidad y la honestidad a otros seres humanos. Un territorio de “una vida plena ... que incluye un anhelo de fraternidad”, por lo que no habrá “más esclavos, sino hermanos y hermanas”.

Combatir la Trata de Personas en México

Rodolfo F. Ríos Garza

Procurador General de Justicia de la Ciudad de México

Impartir y procurar justicia son dos funciones esenciales a cargo de los estados modernos, porque aseguran a la sociedad en las mejores condiciones posibles de paz, de orden y de progreso.

La globalización nos invita a mantener abiertos los vínculos de solidaridad y diálogo entre quien desempeña estas actividades, debido a que las agencias de investigación y los tribunales adquieren cada vez mayor relevancia en el combate de actividades ilícitas, el fenómeno delictivo está lejos de ser un hecho aislado y exclusivo, cuyo combate se limita solamente a la jurisdicción de los gobiernos locales, sus efectos sobrepasan en ocasiones las fronteras de los estados para proyectarse a nivel internacional, esto propicia un resultado negativo que se aprecia en el incremento de actividades ilícitas, como la trata de personas. Hoy en día, esta actividad se posiciona entre los tres, negocios ilícitos más lucrativos del planeta y se estima que cada año genera más utilidades por billones de dólares.

En México no somos ajenos a este problema, ya que la modalidad más recurrente de esta conducta refiere a fines de explotación sexual en agravio de mujeres, niñas y niños, ubicándose entre sus causas más frecuentes las desfavorables condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que resienten las víctimas, es preciso combatir la trata de personas con todos los medios a nuestro alcance, debido a que es una práctica que destruye la dignidad de quien la padece sin distinguir sexo, edad, origen étnico o condición social. Combatir este ilícito implica someter a los tratantes de personas al imperio de la ley.

En la consecución de este fin las instituciones tienen frente a sí una tarea de dimensiones colosales debido a su carácter de órganos encargados de proteger los derechos humanos y preservar el orden jurídico.

Desde 2011 en México hemos dado pasos importantes en la defensa de los derechos humanos; la Ciudad de México a través de su Procuraduría, man-

tienen su vocación de combatir con decisión esta deleznable conducta, bajo los principios constitucionales y convencionales de la materia.

Con este fin, contamos con instrumentos jurídicos relevantes aplicados al respecto, estos valiosos instrumentos son fuentes de principios y directrices que guían la actuación de las autoridades de la Ciudad de México en la defensa y protección de las víctimas de trata, derivado de ellos el Estado mexicano ha emitido legislación federal de vanguardia que contempla instrumentos de prevención, combate y atención a las víctimas, en el caso de la Ciudad de México la entidad concurre al combate y persecución de estos ilícitos atendiendo los límites competenciales que precisan las leyes sin menoscabo de la emisión de instrumentos normativos propios que son útiles para investigarlos.

En el caso hay un acuerdo emitido por el procurador por el cual se creó la Fiscalía Central para la Investigación del Delito de Trata de Personas.

El principal fruto de las reformas implementadas en materia de justicia penal y de derechos humanos, es una legislación garantista de acorde a las necesidades de nuestro país, entre las acciones relevantes impulsadas para atender y combatir este flagelo, está la creación en julio de 2014 de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas en la Ciudad de México, que actualmente trabaja en la elaboración del programa para prevenir y erradicar la trata de personas, y en la creación de un fondo de protección y asistencia a las víctimas.

Recientemente, el 25 de mayo pasado, el jefe de gobierno de la Ciudad de México inauguró el refugio especializado para mujeres, niñas y niños víctimas de trata de personas, espacio destinado a su resguardo temporal en condiciones de seguridad y confidencialidad, en el que encuentran la debida protección y asistencia que garantiza su acceso a la justicia, así como la debida restitución de sus derechos. En el refugio laboran profesionales que proporcionan servicio de trabajo social, psicología, sexología, medicina, antropología y derecho, quienes actúan con base en principios que garantice el bienestar y restablecimiento de las personas afectadas.

Asimismo, opera la denominada línea de trata 53 46 88 00, teléfono que opera las 24 horas del día, los 365 días del año, para proporcionar información y asesoría jurídica, además de atender llamadas de auxilio y de denuncias.

Somos conscientes de que nos enfrentamos a un ilícito complejo cuya investigación debe realizarse bajo los criterios de certeza y precisión para evitar que los imputables intenten sustraerse de la acción de la justicia.

Desde 2007, año en que la sociedad, el gobierno de la Ciudad de México y su Procuraduría capitalina decidieron enfrentarse a los tratantes de personas, se han alcanzado resultados por demás relevantes, hasta abril del presente año, se habían iniciado 191 averiguaciones previas y liberado a 1557 personas, de las cuales 1382 son mujeres que representan el 88.76% del total de víctimas, es conveniente añadir que el 7.74% de mujeres rescatadas procedían del extranjero. En el mismo lapso 875 personas fueron identificadas como probables responsables de la comisión de este delito, 670 también fueron consideradas a las autoridades de todos los niveles de gobierno; a 460 de ellas se les dictó el auto de formal prisión; y 252 personas resultaron sentenciadas y condenadas. Al momento hemos realizado 857 operativos y desarticulado a 79 bandas delictivas, asegurado 126 inmuebles y propuesto 37 de los mismos al procedimiento de extinción de dominio, acción jurídica que en nuestro país es útil para arrestar a quienes cometen determinados delitos de los bienes que lleguen a adquirir como producto de su actividad ilícita.

El compromiso de las instancias jurisdiccionales y de combate al delito de trata de personas en la Ciudad de México es total, los resultados alcanzados nos alientan a seguir adelante para disminuir la reproducción de esta conducta que tanto agravia a nuestros conciudadanos, estamos obligados a combatir las distintas modalidades en que se presentan el delito de trata de personas, porque constituye conductas que vulneran gravemente la dignidad de las personas, afectan su libertad y el desarrollo de su personalidad.

En esta cumbre de los jueces quiero dejar manifiesto que los derechos humanos, son el núcleo de la democracia sustantiva, sin la protección de los mismos no puede haber democracia.

Los jueces no se legitiman con el poder que el estado les confiere sino con el respaldo justo y humano de sus decisiones. Los jueces, como bien lo refirió Aaron Barak, expresidente del Tribunal Supremo de Israel, tienen una estrella polar que los guía, los valores fundamentales y los principios de la democracia constitucional. Espero que este astroitinerario les acompañe por siempre al momento de impartir justicia en beneficio de todas, aquellas víctimas de trata de personas.

La Trata de Personas: un Crimen contra la Dignidad Humana

Yves Charpenel

Primer Fiscal General del Tribunal Supremo de Francia

La cuestión del impacto de la trata de personas en la dignidad de las personas fue abordada por la Convención de las Naciones Unidas en 1949: *“La prostitución y el mal que la acompaña por la trata de personas con fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana”*.

Sesenta y siete años después de que la comunidad internacional se pronunció contra la prostitución, la trata de personas es unánimemente condenada. Mientras tanto, en 2016, millones de personas están siendo tratadas como bienes comunes. La explotación sexual, el trabajo forzado y el tráfico de órganos son hoy en día un negocio muy lucrativo, bajo el control de la delincuencia organizada transnacional. La violencia, la vulnerabilidad y la venalidad son una realidad diaria para un número creciente de personas y nadie podría contradecir al Papa Francisco cuando el año pasado describió la trata de personas como “un crimen contra la humanidad”.

En nuestros países, donde el estado de derecho es un valor supremo, jueces y fiscales deben movilizarse, ya que para ellos el tráfico de seres humanos es superior a cualquier crimen. Para los juzgadores de todo el mundo, la lucha contra la criminalidad es su misión fundamental. En mi país, donde el ministerio público nace desde el siglo XIV, el Rey fijó a los jueces y fiscales con un objetivo principal, defender a la viuda y al huérfano. La misión del juez moderno sigue siendo ésta: proteger a las víctimas y castigar a los criminales. Hoy en día estas víctimas son, en su mayoría, de las comunidades más frágiles. En varios países europeos, la minoría romaní está sobrerrepresentada en la explotación sexual: representa del 50 al 80% de las víctimas en Bulgaria, el 70% en algunas partes de la República Checa, alrededor del 50% en Rumania, al menos el 60% en Eslovaquia, y alrededor del 40% en Hungría. En la India, el 65% de las prostitutas proceden de familias pobres y con frecuencia pertenecen

a las castas inferiores. En Nueva Zelanda, según el Ministerio de Justicia, la mayoría de los niños que se prostituyen son Maorís. Mediante la explotación de las mujeres más vulnerables, la trata de personas perpetúa las desigualdades entre hombres y mujeres y la violencia contra las mujeres en general.

En este contexto, ¿cómo podemos hablar de una “libre elección” de la explotación? ¿Podemos continuar cerrando los ojos? ¿Cómo escuchar la voz de los más vulnerables? ¿Cuál es el compromiso de los gobiernos y de las sociedades que se enfrentan a este problema?

Una nueva amenaza aumenta la tarea del juez, que ahora debe tener en cuenta el espacio digital, convertido en un edén para los traficantes. Indiscutiblemente, la idea de libertad en el internet, o al menos la ilusión de ésta, crea el ambiente ideal para las organizaciones que ofrecen la prostitución en los sitios web, lo que pone a los usuarios vulnerables en situación de riesgo. Las redes sociales han aumentado la frecuencia de este fenómeno, ya que son las plataformas perfectas para buscar futuras víctimas haciéndoles sentirse tranquilas, y con el tiempo, fomentando su confianza.

La seguridad que proporciona el internet para el anonimato, sus intercambios efímeros y su carácter global han alentado a los compradores y a varias redes criminales a recurrir a los medios más discretos para el desarrollo de sus actividades ilegales. Además, los usuarios pueden percibir sus relaciones en línea con estos criminales como inofensivas o completamente seguras y, a continuación, ser engañados con la seductora táctica criminal de contactar a las víctimas durante un largo período de tiempo. El criminal es un amigo antes de convertirse en un enemigo.

El juez naturalmente tiene un papel importante que desempeñar en la lucha contra esta negación de la dignidad. Para cumplir con esta ambición, el juez necesita tres armas adicionales: un profundo conocimiento sobre la realidad del crimen por el que lucha, leyes eficaces, y un firme compromiso para ponerlas en práctica. Los datos sobre el tráfico de personas son estratégicos, y esta información la pueden encontrar sólo aquellos que realmente buscan. Es este papel el que se asignará a los

observatorios imparciales de este crimen, los cuales siguen siendo muy inadecuados.

Las leyes son esenciales, pero cómo no preocuparse de ver reaparecer en nuestro arsenal legal de delitos la esclavitud o la servidumbre que parecían ser cosa del pasado. El compromiso para combatir tal delito no está en duda, pero ¿cómo no ver el costo y la longitud considerable de investigaciones que deben de ser necesariamente transnacionales?

Contra el poder y la insolencia de la delincuencia organizada, contra la indiferencia del público y confrontando sus recursos modestos, el juez que lucha contra el tráfico a veces está muy sólo.

Debido a que este crimen reporta demasiado dinero a los traficantes, toman precauciones que complican enormemente la tarea del juez, quien a su vez se mantiene en estricto cumplimiento de las leyes. Por ende, ¿cómo competir con igualdad de condiciones contra oponentes que no conocen fronteras geográficas, judiciales o políticas, que cínicamente utilizan las nuevas tecnologías para evadir el radar de las leyes, que utilizan la intimidación para silenciar a las víctimas?

Por supuesto, los Estados se han comprometido a luchar en conformidad con los tratados internacionales. Tanto el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas del 2000, así como la Convención del Consejo Europeo para la Acción contra la Trata de Personas, celebrada en 2005, urgen a los Estados a adoptar las medidas pertinentes. El principal valor añadido de la Convención es su perspectiva de los derechos humanos y el enfoque en la protección de las víctimas. En su preámbulo se define la trata de seres humanos como una violación de los derechos humanos y una ofensa a la dignidad e integridad del ser humano.

Teniendo en cuenta el avance constante de las ganancias criminales de traficantes y el creciente número de personas que son comercializadas en el mundo, tenemos que admitir que estas disposiciones siguen siendo letra muerta. En un estudio del 2014 llevado a cabo por el Parlamento Europeo, el estado de vulnerabilidad de la persona representa una carac-

terística de la explotación: la mayoría de las víctimas son migrantes y/o representantes de las minorías étnicas.

El juez, como cualquier ciudadano de nuestro mundo, sólo puede ver la magnitud del desafío. Si cada año se dictan cerca de 500 condenas por los tribunales franceses para este tipo de delito, con 50 redes internacionales desmanteladas, estamos todavía lejos de reducir seriamente estas violaciones intolerables de dignidad. Pero en mi país, como en Suecia, Noruega, Islandia o Canadá, avances significativos recientemente se han realizado hacia una mejor defensa de la dignidad humana con un enfoque jurídico muy completo.

Después de años de debates intensos frecuentes, el parlamento francés aprobó el 13 de abril del 2016 una ley que plantea muchas esperanzas para todos aquellos que rechazan la inevitabilidad de ver a la persona humana reducida a un producto comercializable. Sus puntos clave muestran que su objetivo es global, y se refieren tanto a la víctima, al traficante, al cliente y a la opinión pública.

Deben tenerse en cuenta 8 principales disposiciones:

- La creación de un consejo dentro de cada condado responsable de organizar y coordinar las acciones de las víctimas de la prostitución y la trata de personas.
- Derechos para las víctimas para poderse beneficiar de protección y asistencia en el sistema.
- La creación de un fondo para la prevención de la prostitución, dentro del presupuesto del Estado y para el apoyo social y profesional de las personas prostituidas.
- La expedición de una autorización de residencia temporal por un período de 6 meses para los extranjeros que participan en el camino para salir de la prostitución.
- Derogación del delito de tentativa.
- Obligación de los proveedores de internet de bloquear el acceso a sitios alojados en el extranjero que violan la ley francesa contra el proxenetismo y la trata de personas.
- Usar, solicitar, aceptar u obtener relaciones sexuales con una perso-

na que se dedique a la prostitución condena a una multa de ofensa del quinto grado.

- La integración de la lucha contra la mercantilización del cuerpo debe estar entre los temas impartidos en la escuela.

Los miembros del parlamento, más allá de las afiliaciones partidistas, fueron conscientes de una importante consideración: el aspecto de mercado del negocio de la trata de personas es generalmente subestimado, especialmente teniendo en cuenta que la globalización del comercio de la explotación se sigue expandiendo. No podemos olvidar que la campaña “Corazón Azul contra la trata de seres humanos”, de las Naciones Unidas, destacó que 25 millones de personas son víctimas de trata cada año, con un beneficio estimado de \$32 mil millones de dólares.

Es importante recordar que la trata de personas está vinculada a la corrupción, y la inyección de capital criminal en la economía legal plantea otra amenaza para nuestros valores comunes. La defensa de la dignidad de las personas implica combinar los enfoques preventivos, represivos y sociales. Sin embargo, hay soluciones, como lo muestra un experimento realizado en Francia en cooperación con los países balcánicos. En la lucha contra la prostitución y la explotación sexual, los servicios de prevención y atención han evolucionado a través de la sociedad francesa. Una perspectiva “comunitaria” ha surgido para satisfacer las necesidades no satisfechas. Por lo tanto, algunos migrantes están recurriendo a las asociaciones basadas en la comunidad, mientras que otros prefieren buscar el apoyo en otro lugar fuera de su comunidad.

Este nuevo enfoque, que reconoce y valora el papel de la comunidad migrante en el país que le da asilo, ha dado lugar al nacimiento de numerosos proyectos e iniciativas de asociaciones de las comunidades de migrantes y especialmente de sus líderes. Por lo tanto, la élite de las comunidades migrantes está desarrollando un nuevo marco de interacción con la comunidad migrante y la comunidad nacional del país anfitrión. Mientras tanto, la legitimidad del juez está en el cumplimiento de las leyes. Obviamente, él no puede tener éxito por sí solo, pero sin él, la lucha no puede ser ganada. Aquí radica, sin duda, una de las claves del éxito en la lucha contra el tráfico de seres humanos, el fortalecimiento de las ac-

ciones de cooperación internacional. Un Estado que está motivado para luchar contra la trata de personas, a través de la cooperación bilateral, no se puede esperar a hacerlo de la manera que quiere, con quien quiera, y en contra de lo que quiera.

El Estado debe, antes de que cualquier tipo de cooperación tome lugar, identificar el tema de la cooperación y las partes incluidas en la cooperación bilateral. Después de esto se debe definir los límites de la cooperación de manera que funcione con eficacia. El abandono de la soberanía del estado implícita en la cooperación bilateral es el principal obstáculo: el derecho penal está muy conectado con su territorio y los estados no están dispuestos a abandonar esto con el fin de tener un área común en la ley penal.

Por otra parte, la cooperación bilateral es un procedimiento difícil de poner en práctica en términos de costo y tiempo. Algunos otros obstáculos incluyen el conflicto entre los sistemas legales de los países cooperantes y el alto índice de corrupción en los países donde el tráfico sexual es común. Sin embargo, cuando la cooperación bilateral se pone en acción, funciona de manera eficaz y permite el desmantelamiento de las redes de tráfico sexual. Todas estas acciones y cambios legislativos son esenciales pero, ¿cómo no podemos, hoy y aquí, pensar en la advertencia del Evangelio según San Mateo: “Porque un árbol se reconoce por su fruto”?

En mi opinión, más allá de sus habilidades profesionales, el juez, en esta materia, podrá recurrir, de una manera profana, a las tres virtudes teológicas de: la fe, la esperanza y la caridad.

Fuentes:

- ONUDD Hoja de datos sobre la trata de personas, junio de 2010.
- Departamento de Estado de EE.UU., la Trata de Personas, junio de 2014.
- D. Bousquet (Presidente), Geoffroy G. (Ponente), Rapport d’information par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des Travaux d’une mission d’information sur la prostitution en Francia, la Asamblea Nacional francesa, n. 3334, de 13 de abril, 2011. - Fondation Scelles, Charpenel Y. (bajo la dirección de), 1er Informe Global: Rapport mondial sur l’exploitation Sexuelle

- La prostitución au coeur du crime organisé, Ed Económica, 2011.
- Fondation Scelles, Charpenel Y. (bajo la dirección de), segundo Informe global: Explotación Sexual.
- La prostitución y el crimen organizado, Ed Económica de 2012.
- Fondation Scelles, Charpenel Y. (bajo la dirección de), 3er Informe Global: Explotación Sexual.
- Una amenaza cada vez mayor, Ed Económica, 2013. Farley M., A. algodón, Lynne J. et al, la prostitución y la trata de nueve países: Actualización sobre la violencia y el desorden de estrés postraumático, Journal of Trauma Practice, vol. 2, Número 3 / 4, 2004.
- Fondation Scelles, Charpenel Y. (bajo la dirección de), cuarto Informe Global: Prostitución: Explotación, Procesamiento, Represión, Ed Económica, 2016.

***Causas y soluciones para la Trata de personas:
Un problema de índole trasnacional.***

Miguel Ángel Aguilar López

Magistrado de Circuito y Profesor de Posgrado

México

*El hombre es el lobo del hombre
(Homo homini lupus)*

Thomas Hobbes

I. Justificación

La trata de personas pone en evidencia que en México y el mundo existe esclavitud y explotación a seres humanos. Concebido como un problema ancestral, en el que principalmente las mujeres son desarraigadas de sus lugares de origen y comercializadas como mano de obra, servidumbre y/o como objetos sexuales.

En las últimas décadas surge como un fenómeno de índole social, que reviste diversas aristas, cuyo origen se concibe desde los matrimonios arreglados, el comercio, la explotación sexual y laboral, extracción de órganos y la pornografía infantil, considerada como un modo de esclavitud moderna y una forma extrema de violencia, principalmente contra mujeres y niños que viola sus derechos humanos; con lo cual se da vida a negocios clandestinos fomentados por los gobiernos de países empobrecidos y no empobrecidos, debido a la corrupción por los grandes beneficios que reportan esta actividad, así como la impunidad por el riesgo mínimo de detección y castigo, hacen de ésta una empresa en países del mundo. Lo que la convierte en un tema importante de seguridad y salud pública nacional e internacional. La explotación de seres humanos es un negocio altamente lucrativo para los grupos criminales; por lo que no se pueda escindir aquella de la delincuencia organizada. Luego, surge la necesidad imperiosa de actuar contra esta última desde el ámbito nacional e internacional, lo que implica la actuación no sólo de autoridades gubernamentales, sino también enfatiza el papel de las comunidades e individuos.

La situación del Estado mexicano en relación con la trata de personas, ha adquirido un aspecto significativo, en tanto se constituye como un país de

origen, tránsito y recepción, aspectos que contribuyen a la vulnerabilidad de miles de personas; de ahí que en la actualidad signifique uno de los problemas de mayor trascendencia dado que afecta no sólo la libertad, sino la dignidad del ser humano, asemejándose en sus efectos al tráfico de migrantes, narcotráfico, la venta de armas y el lavado de dinero [actividades igualmente propias de la delincuencia organizada].

Dicho fenómeno se concebía sólo ocurría en sectores sociales “pobres”; sin embargo, está documentado que en la actualidad afecta todas las esferas sociales, lo que implica que cualquier persona puede ser objeto del mismo; no obstante, son mujeres y niños sus principales objetos, ello debido a su propia vulnerabilidad, en tanto de igual manera se ven afectados por la violencia y discriminación.

El proceso de globalización y el desarrollo de los medios de comunicación entre otros aspectos han convertido de dicho problema un fenómeno complejo, en ocasiones difícil de medir y regular.¹ Lo anterior, ya que no es exclusivamente con fines de explotación sexual sino que se da en varios sectores y a través de diversos mecanismos, por ende, no se trata de un delito estático, sino de un proceso con varias etapas: reclutamiento del lugar de origen, transporte al sitio de destino y acogida para la explotación, lo que implica que sea mutable, conforme las condiciones locales y mundiales, en los que participan diversos actores.

Es precisamente en este proceso operacional donde se hace evidente la forma de operar de la delincuencia organizada, cuyas células registran diversas tareas, desde la captación de las víctimas [en su mayoría provenientes de grupos vulnerables, previamente estudiados, carentes de redes de apoyo], las cuales son sustraídas de sus lugares de origen en formas diversas [“voluntariamente” o forzadas mediante la violencia] trasladadas por diversos grupos a sus destinos, donde son recibidas por distintos individuos encargados de colocarlas en el mercado del tráfico sexual, laboral, incluso de obtención de órganos; con la consecuente retribución económica.

¹ Moya Delgado Octaviano, Yanet Hernández Medina. “Estudio sobre la trata de personas en México”. Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Dirección General de Estudios Legislativos: Investigaciones Sociales. Diciembre 2010.

A razón de ello, la trata de personas debe entenderse en el amplio contexto de la desigualdad y violencia estructural en la que se encuentran sujetas las personas que son víctimas de ella; es un delito de lesa humanidad y una grave violación de los derechos humanos que destruye la dignidad humana de quien es comprado, vendido, distribuido y explotado como si fuera un objeto. Precisado lo anterior, si se ha determinado que en la actualidad constituye un problema de índole social y legal que abarca diversas esferas [económica, educativa, laboral y de salud].

II. Factores que impiden erradicar la trata de personas y por el contrario abonan a su crecimiento

Para conocer estos factores, es necesario entender cuáles son sus orígenes, como se indicó, no sólo surge como un problema propio de la pobreza, en su caso, la falta de comunicación al interior de la familia, familias desintegradas, la omisión de investigación policial, la corrupción e impunidad, son de los aspectos que favorecen su proliferación.

“Una amiga mía de Veracruz, México, me habló de trabajos bien pagados en restaurantes en los Estados Unidos. Acepté la oferta del trabajo y un ‘coyote’ me trajo a Texas. Luego me llevaron a la Florida y uno de los encargados me dijo que iba a trabajar en un prostíbulo. Le dije que estaba equivocado, y que yo iba a trabajar en un restaurante. Me dijo que le debía dinero del viaje y que me podía ir cuando terminara de pagarle. Tenía dieciocho años, nunca había ido tan lejos de mi casa y no tenía dinero para regresarme [...]. Así empezó la pesadilla. Porque yo era virgen, los hombres decidieron violarme una y otra vez para enseñarme sobre el sexo”. María víctima de trata.²

En México, la existencia de comunidades en situación de pobreza y sobrevivencia, en las que no se garantiza el acceso a los derechos económicos y sociales, constituye un centro de “cultivo fácil” para las redes de tratantes [or-

² Ezeta Fernanda. OIM México. “Trata de personas: aspectos básicos”. Organización Internacional para las Migraciones. Comisión Interamericana de Mujeres. Instituto Nacional de Migración. Instituto Nacional de las Mujeres. Primera edición, Mayo 2006. Pág. 22.

ganizaciones criminales] que están a la “caza” de sectores vulnerables que les facilite la obtención de seres humanos como producto viable para su comercio, al constituirse como una actividad altamente retributiva; ello impide, en la mayoría de los casos, evitar que un ser humano esté dispuesto a comprar y explotar otro ser humano.

Sin embargo, como se precisó, la pobreza no es el único factor determinante que da cabida a la trata de personas, la falta de acciones gubernamentales, a fin de incentivar la economía, educación, trabajo, salud, convergen con la proliferación de grupos criminales que aprovechan situaciones de exclusión social, en evidente colaboración con sectores del gobierno (generalmente elementos policíacos) a los que corrompen, y en consecuencia, les facilitan operar bajo el amparo de la impunidad, lo que torna más lacerante el problema de la trata de personas, al punto de generar la falsa concepción que en el caso, principalmente de mujeres y niños, se les considere como objetos de comercio.

La familia, concebida como el núcleo esencial de toda sociedad, ha sido fracturada, los adolescentes se vuelven padres, sin contar con la suficiente madurez psicológica, incluso física, para enfrentar el gran reto que implica conformar el núcleo familiar, carecen de la orientación adecuada y de los medios laborales propicios, lo que origina inestabilidad emocional al punto de que los padres se convierten en verdaderos verdugos de los hijos y los esposos de las esposas, a quienes en el menor de los casos consideran objetos de comercio [sexual o laboral], o son proclives a caer en las redes del crimen organizado, convirtiéndose en reclutadores y explotadores viables.

Precisamente, la operación de los grupos organizados se ha hecho más eficaz, a la vez que especializada, al conjugar prácticas de la cultura tradicional con el manejo de nuevas tecnologías de la información. Los proxenetas, encargados en primera instancia del reclutamiento de mujeres y niños potencialmente sujetos a la trata de personas, han desarrollado una serie de mecanismos que van desde el enamoramiento, que provienen de prácticas culturales tradicionales, cuyo objetivo se centra en la somatización de la dominación, abusos, golpes, chantajes, amenazas, el engaño, con ofertas prometedoras de trabajo, incluso hasta de matrimonio.

En el aspecto laboral, la falta de oportunidades en trabajos con remuneraciones “adecuadas” que permitan un nivel de vida “decoroso”, a través del cual puedan satisfacerse las necesidades básicas, culmina en “el abandono de los hijos” para buscar oportunidades de trabajo bien remunerado [lo que se consigue en su mayoría fuera del país]: de esta manera se optimizan nuevas condiciones para que células de grupos delincuenciales puedan operar en la búsqueda y captación de nuevas víctimas a quienes se les ofrecen trabajos bien pagados en el extranjero, lo que les facilita el traslado de un mayor número de personas lejos de sus lugares de origen para “comercializarlos” como si fueran objetos, para su explotación; lo que necesariamente impide se logre el objetivo de obtener mejores condiciones de vida.

De tal manera, niños y adolescentes, se constituyen en “blancos fáciles”, para ser captados por organizaciones criminales. Los menores crecen sin el sentido de pertenencia, carentes de figuras de autoridad que guíen su crecimiento, de valores y disciplina, con baja autoestima, son incluso víctimas de violencia doméstica, lo que propicia una alta vulnerabilidad de caer en las redes de la delincuencia organizada, a través de ofertas atractivas para hacerse de recursos económicos, vinculados al narcotráfico, tráfico de armas, extorsiones, incluso secuestros, con un alto sentido de desprecio hacia los bienes jurídicos más elementales, como son la vida, la integridad física, la libertad, y sobre todo la dignidad.

En las redes sociales, grupos criminales, de manera atractiva buscan mujeres potenciales, crean portales electrónicos en forma de “scorts” con jugosos contratos para el modelaje, el canto o la actuación, son el “gancho” perfecto para despertar el interés en mujeres jóvenes.

El tratante recluta a la víctima de forma indirecta mediante anuncios en medios impresos, contactos por internet, referencias de familiares o conocidos, supuestas oportunidades de empleo, agencias de reclutamiento, ofrecimiento de cursos, agencias de viajes, escuelas, cantinas, manipulación sentimental a través del noviazgo o matrimonio, entre otros, o en su caso, situaciones en las que simplemente se les secuestra o se les fuerza a través de la violación y el sometimiento.

De lo anterior, podemos establecer como factores de riesgo que contribuyen a la delincuencia organizada y a la trata de personas como uno de sus principa-

les “negocios”, los siguientes: pobreza, discriminación, desigualdad de género, falta de oportunidades económicas, educación, desconocimiento, promesa de beneficios materiales, leyes migratorias, conflictos armados, corrupción, impunidad, religiosos-culturales e incremento de trabajo infantil.

Luego, si se tienen delimitadas las causas que originan el fenómeno de la trata de personas, ¿qué impide su erradicación?

Al respecto, cabe destacar que, una de las particularidades del delito radica en la relación de subordinación o sometimiento de la víctima con el tratante [crimen organizado], el cual es realizado mediante métodos de control, que se han estandarizado, como:

- a) **Restricción del movimiento.** Confiscación de pasaportes, visas o documentos de identificación; acompañamiento constante a la víctima; insistir en hablar por la víctima o traducirle todas las conversaciones; aislarla de cualquier contacto con la sociedad, al ocultarle información relativa a la dirección o el lugar donde se encuentra; exigir que la víctima viva o trabaje en el mismo lugar.
- b) **Condiciones de vida perjudiciales:** restringir el acceso de alimentos e indumentaria apropiada; prohibir el acceso a atención médica adecuada y no dar tiempo libre ni suficiente para dormir.
- c) **Condiciones de trabajo perjudiciales:** a cambio de la oportunidad de trabajar, cobrar una cuota elevada o difícil o imposible de pagar; exigir horarios de trabajo extraordinariamente prolongados, con pocos o ningún descanso; limitar el número de días libres y pagar poco o nada, o de manera irregular.³

De tal manera los mecanismos que utilizan los tratantes para controlar a las víctimas, en sumadas ocasiones son aspectos que obstaculizan la detección oportuna del fenómeno de trata de personas.

“Me dijeron que me iban a matar. Me amenazaron con hacer daño a mi familia si me escapaba”. Rosario. Tlaxcala, México.

³ Aboso, Gustavo Eduardo. “Trata de personas, la criminalidad organizada en la explotación laboral y sexual”, Euros Editores, Argentina 2013.

Como se indicó, al tratarse de una actividad criminal altamente lucrativa, frecuentemente se encuentran involucradas organizaciones asociadas, al tráfico de migrantes, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas; sin desatender, la implicación de funcionarios del gobierno que han sido corrompidos por el crimen organizado, a cambio de cuantiosas “dádivas”; lo que facilita la intervención de diversos sujetos en su producción, y le da el carácter de mutable; de ahí que no resulte fácil situar a los reclutadores, en su caso a las víctimas.

En efecto, es incuestionable que las grandes redes de las organizaciones que operan con la trata de personas, se encuentran vinculadas [protegidas] a ciertos sectores del gobierno, a través de sus funcionarios, precisamente ello facilita que las víctimas, una vez que han sido coptadas, sean trasladadas a lugares diversos del de origen, incluso al extranjero, donde son vendidas, con fines sexuales y laborales.

Luego, en el grave problema de la delincuencia organizada, sumado al de la corrupción de los gobiernos, constituye un factor que incluso, impide que desde la justicia se puedan realizar investigaciones eficaces tendientes a determinar las responsabilidades de las autoridades involucradas, lo que evidencia notoriamente el alto grado de impunidad con la que se conducen quienes lucran con el comercio y la explotación del ser humano.

Sin desatender el impacto que la trata produce en aquellas personas que son objeto de ella, especialmente en mujeres y niños, el cual es devastador, ya que siempre existen secuelas de la coacción a la que fueron sometidas, cuyo tratamiento físico y psicológico tarda años en restablecerse; sin perjuicio de las repercusiones que a nivel de salud, puedan producirse, tales como la transmisión de enfermedades, abortos forzados, inducción al alcohol y drogas, que las tornan dependientes de sus tratantes.

Tales aspectos, tienen además un impacto social y psicológico, en tanto, en el caso de aquellas personas que tienen la suerte de escapar o ser rescatadas de sus proxenetas, les depara una vida de rechazo masivo, que inicia con su propio rechazo a manera de exclusión social, psicológica, moral, familiar o religiosa, lo cual les impide reincorporarse a la sociedad de manera activa, situación que propicia que un porcentaje alto nuevamente sean objeto de ese fenómeno tan lacerante.

Las secuelas psicológicas, no son menores, propicia en las víctimas, inseguridad, pérdida de la autoestima, traumas generados por el sometimiento [violencia física y moral], los que siempre son difíciles de superar, máxime si no encuentran las redes de apoyo eficaces para ello, lo que hace irreparable el daño ocasionado.

Otro factor trascendente es sin duda alguna, el “consentimiento” de la víctima, uno de los temas de más polémica; al efecto se ha dicho que los reclutadores, captan a sus víctimas a través de propuestas atractivas de trabajo; en otras ocasiones, son reclutadas por sus propias parejas [novios, esposos], lo que lleva implícito que el primer paso que conforma el proceso de trata de personas, se efectúe “consensualmente”.

Así, determinar si efectivamente se está ante un acto voluntario, es sin duda alguna, el ejercicio de mayor dificultad jurisdiccional, toda vez que las circunstancias de las víctimas de vulnerabilidad y discriminación, aun cuando pueden evidenciar que el dedicarse o que se hayan dedicado a la prostitución [como forma de explotación], no fue en ejercicio pleno de su libertad sexual, sino porque se vieron obligadas por su precaria condición económica, falta de empleo y escueto nivel educativo, colocándose en situaciones vulnerables que constituían el riesgo de ser coptadas por la delincuencia organizada, y en consecuencia sufrir violencia y malos tratos, lo que se trata de erradicar al sancionar la trata de personas como actividad altamente reductible del crimen organizado, por ser incompatible con el respeto a la dignidad de las personas. Por lo que en el caso de los juzgadores, es necesario que se juzgue un hecho en perspectiva de género.

La pobreza y desempleo, se ha señalado, son factores que facilitan que en un alto índice de mujeres, niños y niñas, sean explotados con fines sexuales, por organizaciones criminales que operan a nivel nacional y transnacional, por ello se concibe como una forma de violencia contra ellos al resultar evidente que el ejercicio de la prostitución no es el resultado del ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, sino de una “necesidad” que las obliga a realizar esa actividad.

En México, aun cuando en los últimos años ha habido avances en el marco jurídico que tipifica la trata de personas, no se ha podido avanzar en el tema de la sanción a quienes se ven inmersos en la comisión de ese tipo de conductas, en su caso, el grave problema de delincuencia organizada que aqueja al

Estado mexicano, es quizá el factor más grande que se tiene para contrarrestar ese fenómeno, al no encontrar métodos eficaces de combate.

Sin desatender que muchos de los tratantes son grupos pequeños y aislados, redes de delincuencia o de estructuras familiares organizadas, que incluso, pueden ser amigos, conocidos o parientes cercanos a la víctima, cada uno especializado en una parte de la cadena (la captación, el transporte o la gestión de la explotación), obstaculiza la posibilidad de avanzar en lo relativo a las políticas de prevención, investigación y persecución del delito, así como en la protección y atención adecuada a las víctimas.

De tal manera, aquellos factores, son los que abonan al crecimiento del fenómeno de la trata de personas.

III. ¿Cómo avanzar en cuanto a los derechos de las mujeres, niños, adolescentes y la impunidad de los crímenes que los afectan de manera desproporcionada?

Luego que el Fondo de Población de las Naciones Unidas, señalara que México ocupaba el tercer lugar en toda América Latina y el Caribe, en el tema de trata de personas, actividad que se posicionó como la segunda más rentable, sólo por debajo de aquellas vinculadas con el narcotráfico, se impulsó que el gobierno redirigiera las políticas criminales a fin de frenar dicho fenómeno.

El Estado mexicano, advierte dos grandes problemas en lo referente a la trata, por una parte dada su posición geográfica, tiene la facilidad de que, por su territorio, los grupos criminales organizados ingresen y movilicen a las víctimas de un estado a otro y de una nación a otra, con el objeto de obtener beneficios materiales; en diverso aspecto, la existencia de comunidades indígenas en situación vulnerable, sectores en pobreza extrema, susceptibles de amenazas, coacción, rapto, fraude, engaño y abuso; falta de educación e información como método de prevención.

La carencia de una correcta aplicación de estrategias de prevención, protección y procuración de justicia hacia los afectados por la trata de personas, ha dado lugar a que México, se convierta en un centro de captación y reclutamiento [redituable y disputado por las organizaciones criminales cuya principal actividad es la trata de personas].

A razón de ello, fue promulgada la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, sin embargo, su aplicación dista mucho de las verdaderas intenciones del gobierno, constituyéndose como una legislación ineficaz para controvertir el grave fenómeno de la delincuencia organizada, específicamente en actividades relativas a la trata de personas.

Ineficacia que se hace palpable, esencialmente ante la inadecuada aplicación de dicha legislación, la falta de sensibilidad de quienes operan las leyes, pero sobre todo ante el recurrente problema de corrupción que aqueja al Estado mexicano.

“Lucila y yo salimos de nuestro pueblo en compañía de ‘Pepe’, viajamos muchas horas, cuando por fin llegamos a una casa de dos pisos en el sur de México [...] Nosotras pensamos que nos iban a llevar a una casa para hacer limpieza y nos iban a pagar, porque somos pobres, pero no pensamos que fuera a estar tan lejos, nunca antes habíamos salido de nuestro pueblo. Nos llevaron a un cuarto donde había una cama muy grande y más niñas como nosotras, tres de ellas estaban amarrando a otra niña de las manos y los pies y también le pusieron chocolate líquido en su cuerpo desnudo. En el cuarto también estaban otros tres señores con un aparato que nos dijeron que era una videocámara y grababa todo lo que hacíamos. Nos pegaban muy fuerte si alguna no hacía lo que ellos decían, pero se la pasaban gritándonos y hablándonos con groserías”. Lucila y Sandra, 11 y 12 años respectivamente, de Oaxaca, México.⁴

En 1998, Claudia, de 17 años, conoció a Josué Flores en Tenancingo, Tlaxcala, México. Josué se presentó bajo el nombre de “Raúl” y la sedujo con promesas de amor y matrimonio. Inicialmente Josué utilizó el chantaje para que Claudia se prostituyera (“lo harás si realmente me amas”). Luego utilizó la violencia física y las amenazas. Josué la obligó a prostituirse en Irapuato, Ciudad de México y Puebla, hasta que en 2003 Claudia cruzó la frontera con Ma. de los Ángeles Velásquez (la cuñada), las dos de forma irregular. En Queens, Nueva York, le exigieron que “atendiera” a un promedio de veinte hombres por día. En ningún momento recibió pago por ello. Testimonio de víctima del Caso Carreto, juzgado en EEUU.⁵

⁴ Ezeta Fernanda. OIM México. *op. cit.*, pág. 24.

⁵ *Ibidem*.

Conocer cómo opera el fenómeno de la trata de personas, necesariamente implica vincularlo intrínsecamente a la delincuencia organizada, asimismo es fundamental, entender que para concluir en la “explotación humana”, es necesario, transitar por distintas fases, a saber: la captación [voluntaria, forzosa o fraudulenta], pasando por el transporte [interno o internacional], hasta llegar a la etapa de la acogida de las víctimas.

Proceso, durante el cual, es posible identificar la intervención de distintas personas o grupos organizados en la ejecución de cada una de las fases, así como la comisión de delitos conexos como la privación ilegal de la libertad, corrupción, lavado de dinero, entre otros.

Identificar a las víctimas de trata, requiere de un proceso de investigación que exige conocimiento sobre el tema, a fin de delimitar de manera adecuada cuando se está ante una situación de “explotación”; lo que deberá efectuarse desde una perspectiva legal y criminal; toda vez que los síntomas que refieren aquellas, son de diversa naturaleza, desde reacciones psicósomáticas, psicológicas y sociales, evidencias físicas de abuso hasta, dependencia de sustancias psicoactivas.

Quizá más importante resulte, identificar aquellos factores que elevan el riesgo de ser víctima, los cuales pueden ser:

1. **Individuales:** Baja auto-estima y auto-control, niveles de educación deficientes, falta de información, pobreza y carencias económicas, personas con discapacidades, hogares con numerosos miembros o hacinamiento, con presencia de violencia doméstica, o con presencia de discriminación y violencia por género, adicciones.
2. **Estructurales [entorno social]:** Falta de oportunidades de empleo digno, de políticas económicas como retiro de programas de apoyo al campo y a las familias, inflación etc., urbanización creciente y migración, ambiente social de discriminación racial y de género, fomento del turismo sexual y alta demanda por personas de servicio doméstico, trabajadores en la agricultura e industria, existencia de redes de tráfico de personas con métodos de reclutamiento muy sofisticados, falta de eficacia por parte de las autoridades judiciales, desconfianza en las instituciones, falta de redes de apoyo o capital social, políticas migra-

torias restrictivas que limitan las oportunidades de migración legal, desinterés de los gobiernos por limitar la trata de personas, corrupción.

Crear conciencia, prevenir, y participar en la agenda pública y en la reinserción social de sobrevivientes de la trata, así como dar a conocer la importancia de tener las herramientas para erradicar y prevenir la trata de personas, ya que es un grave delito y una violación a los derechos humanos.

Dignificar, concientizar a las personas para que conozcan el valor de un ser humano, sin importar la raza, nivel socioeconómico, creencias, etc.

A razón de lo anterior, es posible concretar, las estrategias eficaces contra la trata que deben enfocarse en los tres aspectos que la originan: la oferta, los tratantes y la demanda.

En lo relativo a la primera, la intervención y participación de los órganos gubernamentales es esencial; debido a que se trata de hacer frente a las condiciones que impulsan el fenómeno de la trata de personas con programas que alerten a las comunidades sobre sus peligros, mejorar las oportunidades de educación y sistemas escolares, crear oportunidades económicas, promover la igualdad de derechos, informar a las comunidades de sus derechos legales y ofrecer oportunidades de una vida mejor y más amplia.

En el caso de los tratantes, los programas deben enfocarse en identificar e interceptar las rutas que sistemáticamente son utilizadas por las organizaciones criminales para el transporte de las personas víctimas de trata; definir con claridad las figuras legales que prevén y sancionan ese fenómeno como delito, en aras de evitar que se dificulte acreditar las conductas ilícitas relacionadas con el mismo, en su caso, permitir que se logre enjuiciar y sancionar a quienes atentan y laceran los derechos de las víctimas y de la sociedad misma, sobre todo en el aspecto de la libertad y dignidad humana.

La trata de personas, es uno de los negocios más rentables para las organizaciones criminales, las cuales en México, operan al coludirse con las autoridades, por lo que gozan de impunidad. Por ello, es necesario establecer las responsabilidades en que habrán de incurrir aquéllos que omitan la aplica-

ción de la ley, con la subsecuente sanción, pero sobre todo, hacer frente a la corrupción pública que facilita y se beneficia de este comercio y debilita la eficacia de la ley.

Sin embargo, implementar tales estrategias, no constituye tarea fácil, en tanto, como actividad paralela, es imperativo dignificar a los órganos de persecución y procuración de justicia, generar conciencia de la trascendencia y el impacto que la trata tiene en el Estado mexicano, en los diversos ámbitos y sectores sociales, económicos, laborales, educativos y de salud; por lo que resulta necesario asegurar una investigación imparcial y eficaz, en protección de los derechos vulnerados.

Es necesario identificar y perseguir a quienes explotan a las personas que han sido objeto de trata. Para ello se requiere generar todo un proceso de información para concientizar a la población sobre la importancia de la denuncia de quienes prostituyen a mujeres y niños y de los patrones que someten a trabajo forzoso a las personas.

Sin embargo, es inconcuso que la elaboración de programas por parte del Estado, el buen desempeño de las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia, incluso la colaboración ciudadana, no tendrán la eficacia requerida, si no existe una adecuada coordinación de los programas locales, estatales, nacionales e incluso regionales de lucha contra la trata de personas, menos aún, sino se efectúa una vigilancia periódica sobre la aplicación y resultado de los mismos.

El conocimiento sobre la trata de personas no constituye una obligación solo de las autoridades gubernamentales, o de los servidores públicos, sino de todos los ciudadanos, ya que como se indicó, cualquier persona puede ser objeto de la trata de personas. El combate a dicha actividad y, específicamente cuando se trata de mujeres y niños, requiere un enfoque multidimensional y una participación activa de varias instituciones federales, estatales y municipales, junto con las entidades de la sociedad civil.

Por consiguiente, el combate efectivo de la trata de personas debe mirarse desde una perspectiva integral en la que se incorporen aspectos de prevención, identificación, atención y protección de víctimas y procuración de jus-

ticia que incluye, entre otros elementos, legislación y sanción a los tratantes. Así lo establece el Protocolo de Palermo, el cual declara que, para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres y niños, se requiere de un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino, que incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas, amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos.

IV. Conclusión

Significativamente, debe atenderse el problema de la trata de personas, debe combatirse a partir de diversos aspectos, los más relevantes y trascendentes son quizá:

- I. La información. Establecer canales de comunicación a través de los cuales, como una actividad de prevención, se informe aún a las comunidades de mayor retraso cultural, social y económico, de los riesgos y efectos de ser objeto de ese fenómeno tan lacerante, de caer en las redes de la delincuencia organizada.
- II. Fomentar nuevos valores universales, esto es, cualidades positivas y válidas, como origen de normas de convivencia del ser humano sustentadas en el pilar del respeto a la condición del ser humano, la responsabilidad y el deber, a fin de preservar la libertad y dignidad de las personas.
- III. Educación. Se dice que la ignorancia es el opio de los pueblos, refuerza la injusticia, imposibilita la transformación de la realidad. Erradicarla, sólo será posible si se implementan canales y programas educativos eficaces, que doten a la población en general, pero sobre todo a los sectores de mayor atraso cultural, de los instrumentos que les permitan discernir de la verdadera realidad que implica contribuir con el crimen organizado, específicamente en la actividad de explotación del ser humano, en su caso, ser objeto de ésta.
- IV. Economía. Concentrar la riqueza en unas pocas manos constituye uno de los temas más antiguos; sin embargo, aun cuando se ha demostrado que ello trasciende negativamente en el fortalecimiento de un estado de derecho, no se han logrado políticas públicas eficaces de distribución de la riqueza, de incentivación de la economía, de inclusión laboral.

Generar empleos sobre todo con una remuneración adecuada, es quizá uno de los aspectos de mayor trascendencia. Quizá uno de los mayores retos del

Gobierno mexicano, lo que en gran medida, frenaría la incesante búsqueda de mejores ofertas de trabajo y con ello, el gran número de personas que migran a otros países, específicamente a Estados Unidos, en busca de nuevas oportunidades que les hacen presa fácil de caer en manos de grupos pertenecientes al crimen organizado, especializados en la trata de personas.

V. Leyes migratorias. Se ha dicho que uno de los factores que propician que México sea uno de los países de América donde prolifera mayormente el delito de trata de personas, es sin duda alguna su situación geográfica, al constituir el paso obligatorio de extranjeros provenientes de centro y Sudamérica, que pretenden arribar a Estados Unidos de América; las condiciones de vulnerabilidad de aquellos, causadas, por sus precarias condiciones económicas, educativas, incluso de lengua, constituyen el foco rojo que convoca al crimen organizado, a fin de reclutarlos, en el mejor de los casos como sus miembros, en peores circunstancias, como objetos de comercio humano [sexual y laboral, incluso para el tráfico de órganos].

Por lo que de modo imperativo se deben consensar políticas migratorias, que dignifiquen los derechos de los migrantes, y con independencia de su nacionalidad y condición social les sean tutelados de manera efectiva sus derechos fundamentales.

VI. Legislar. Crear nuevos ordenamientos legales, cuya prioridad debe ser prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, además de dignificar a las personas que han sido objeto de la misma, es una de las labores más apremiantes de los Estados.

VII. Sin embargo, la creación de normas resulta estéril si no se tienen aplicadores comprometidos con la sociedad, debidamente capacitados, pero sobre todo dotados de valores que les permitan hacer frente a los actos de acoso por parte de la delincuencia organizada; sensibilizados en el tema de la trata de personas, que les dote de los medios suficientes para evitar revictimizar a quienes han sido víctima de trata.

Aplicar las leyes, no es tarea fácil, sin embargo, sin duda la preparación de los operadores del derecho en un alto porcentaje es garantía de buenos y eficaces juzgadores.

VIII. Desterrar el factor de la corrupción en las altas esferas gubernamentales, tarea nada fácil, pero no imposible; la cual es responsabilidad no sólo de las autoridades, sino de la sociedad en general, contribuir a la corrupción, es palpable en las acciones más insignificantes; por ello, es posible aseverar que todos formamos parte del problema, por consiguiente, todos estamos obli-

gados a oprimirlo, esencialmente a través de la denuncia, pero sobre todo, se insiste en la dignificación de los valores.

IX. Conciencia jurisdiccional. Los juzgadores, en la ardua tarea de impartir “justicia” ante un hecho concreto vinculado al fenómeno de la trata, deben analizar en concreto el hecho fáctico a partir de una perspectiva de género, en el entendido de que las principales víctimas de la delincuencia organizada, en relación con actividades de explotación humana, son mujeres y niños, en circunstancias de vulnerabilidad.

De tal manera, si bien los juzgadores deben pugnar por un trato equitativo de la ley para hombres y mujeres, es necesario que atiendan a las circunstancias específicas de cada suceso particular que se juzga, sin que se pretenda obtener una identidad de trato en todas las situaciones fácticas; no obstante, se hace necesario que cuando se requiera evidenciar esas diferencias, se efectúe dentro del marco legal, de manera justificada, con apego a la normatividad interna e internacional, que permita permear el reconocimiento y respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y niños.

X. Tutela judicial efectiva, a través del debido proceso. Advertir que aquéllo que aparece como una diferenciación formalmente razonable [diferencias sociales, económicas, sexuales, religiosas], no encubre o permite encubrir una discriminación contraria a lo dispuesto por la ley.

Es necesario poner de relieve las situaciones concretas que enfrentan los grupos de personas dentro de la sociedad, por ello, se requiere del análisis y aplicación de las normas de manera neutral respecto de hombres y mujeres, en tanto actualmente las leyes se comprenden como equitativas; sin embargo, somos los juzgadores quienes podremos hacer realidad dicha premisa, el papel de quien interprete el Derecho es fundamental, debido a que una resolución puede modificar las diferencias y desigualdades entre las personas.

Juzgadores sensibilizados y capacitados, conformados bajo esquemas de tutela de derechos fundamentales, a fin de que sean capaces de discernir, la verdadera esencia y objetivo de la aplicación de las leyes en materia de trata, esto es, resarcir a las víctimas de aquellos derechos lesionados con conciencia suficiente para visualizar que su actuación debe estar bajo la interpretación más favorable en tutela judicial efectiva, al servicio de quienes son más vulnerables.

Enfrentando el Tráfico de Personas en Brasil: Logros y Retos

Carlos H.B. Haddad

Juez federal y Profesor de Derecho en la UFMG (Brasil)

La experiencia brasileña de trata de personas, especialmente en el área de trabajo forzado, es como un juego de ajedrez. Estrategias, movimientos, avances y retrocesos marcan la historia de la lucha contra este crimen atroz. Hemos trabajado mucho en las últimas dos décadas. Pero además de los logros, siempre nos enfrentamos a nuevos desafíos.

Esta historia comienza en septiembre de 1989, cuando José Pereira, de 17 años, y un compañero de trabajo, apodado Paraná, trataron de escapar de hombres armados que impedían la salida de los trabajadores de una granja de Espírito Santo, estado de Pará. Ellos y otros 60 trabajadores fueron obligados a trabajar sin paga en condiciones inhumanas e ilegales. Después de la fuga, el personal de la granja los emboscó. Con disparos de fusil, mataron a Paraná y golpearon a José Pereira en la cara y manos. Lo pusieron en la cajuela de un coche y después, José, que se hacía pasar por muerto, fue abandonado en la carretera, a 20 kilómetros de la escena del crimen. José Pereira pidió ayuda en la granja más cercana y fue conducido a un hospital. En la capital de Pará, donde fue sometido a tratamiento por las heridas que sufrió, José Pereira informó de las condiciones de trabajo a la Policía Federal. Cuando la Policía Federal fue a la granja encontró a 60 trabajadores que rescataron y se les dio dinero para volver a su casa. ¿Que pasó? No pasó nada, los hombres armados habían huido, nada se ha investigado y nadie fue castigado.

Este es un ejemplo de cómo Brasil no cumple con sus obligaciones de protección de derechos humanos, protección judicial y seguridad en el trabajo. Por eso, en 1994, algunas organizaciones no gubernamentales presentaron quejas contra Brasil en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Después de años de debate, el gobierno brasileño reconoció su responsabilidad en el caso de José Pereira,

y firmó un acuerdo de solución amistosa. Fue a partir de esta queja que los diferentes sectores de la sociedad brasileña reconocieron la existencia, la gravedad y las características del trabajo forzado en el país.

En los últimos veinte años, Brasil ha hecho esfuerzos concertados para identificar y procesar los casos de esclavitud contemporánea. Desde mediados de 1990 hasta finales de 2015, unos 49 000 trabajadores fueron “rescatados” de lugares de trabajo rurales y urbanos en los que los inspectores determinaron que habían sido reducidos a una condición análoga a la esclavitud. En 1995 se creó el Grupo Móvil Especial de Inspección. Una vez informados de las prácticas de trabajo esclavo, los inspectores del Ministerio de Trabajo y procuradores del trabajo, acompañados por agentes de la Policía Federal y la Policía Federal de Carreteras van a las ubicaciones para determinar hechos. El grupo móvil recoge testimonios de trabajadores, toma fotografías, películas de la escena del crimen y prepara un informe que forma la base de los cargos en casos penales y civiles. Brasil tiene un poder judicial especializado llamado justicia laboral donde es común demandar a los empleadores que violan los derechos laborales. Justicia laboral no es justicia penal, sino que permite a los trabajadores ser indemnizados. Bajo supervisión de inspectores, los contratos de trabajo se cancelan, se les cobra a los empleadores por salarios caídos y los “pagos de seguro de desempleo” se proporcionan.

El resultado de las inspecciones dejó en claro que el gobierno de Brasil requiere de un enfoque más sofisticado y una mayor gama de respuestas administrativas para hacer frente a la esclavitud contemporánea. Desde su promulgación en 1940, el Código Penal brasileño ha pronunciado la conducta de “reducción de una persona a una condición análoga a la de esclavo” como un delito grave. Sin embargo, aparte de ser referenciado por comentaristas del ámbito penal, esta disposición se ha olvidado. En 2003, el Congreso aprobó una ley que reformó el artículo 149 del Código Penal brasileño. La reforma derivó de la experiencia de los equipos de inspección móviles y sus asociados dentro y fuera del gobierno. Ahora es un crimen reducir a alguien a una condición análoga a la de un esclavo en cuatro situaciones: someterlos a 1) trabajo forzado; 2) jornadas de trabajo debilitantes; 3) condiciones de trabajo degradantes; o 4) restringir su libertad de movimiento por cualquier motivo.

Este enfoque rechaza la idea de que la esclavitud “real” requiere el control del cuerpo, lo que sería principalmente un delito contra la libertad individual. La nueva definición de esclavitud no requiere trabajo forzado y no está implícito el concepto de candados y cadenas. No sé si es un concepto de vanguardia, pero hemos trabajado con esto desde hace más de 10 años. La pena por este delito es de 2 a 8 años de cárcel, más multas.

Un año más tarde, en 2004, se publicó una lista creada por el gobierno donde se dieron a conocer los nombres de las empresas que se determinó explotaban a los trabajadores y los tenían en condiciones análogas a la esclavitud. Se llama la “lista sucia”, una especie de lista negra, en donde están los nombres de las empresas que llevan a cabo trabajo forzado. Cuando el nombre de una empresa está en esta lista, no puede recibir préstamos de bancos federales. Se les demanda, y se le aplican restricciones comerciales internacionales. Además sufren daños a su reputación en el mercado nacional e internacional. Este es un esfuerzo por promover la responsabilidad social. La “lista sucia” es una estrategia polémica basada en vergüenza y nombre hacia la eliminación de la esclavitud de las principales industrias.

Para aumentar el impacto de la “lista sucia”, se creó en 2005 el Pacto de Brasil para la Erradicación del Trabajo Esclavo. Su objetivo es dar herramientas al sector empresarial y a la sociedad brasileña para evitar que éstos traten con proveedores que han hecho uso de mano de obra esclava. Son partícipes de esta iniciativa 130 empresas brasileñas, asociaciones comerciales y organizaciones sociales, que son responsables de un ingreso bruto anual equivalente a más del 20% del producto nacional bruto de Brasil. Recientemente, en 2014, el Congreso aprobó una enmienda constitucional, que expropia bienes inmuebles urbanos o de granjas en las que se han producido con trabajo esclavo, sin compensación. Las ganancias de la venta de bienes inmuebles y otros bienes utilizados en la comisión de este delito serán aplicados a la reforma urbana o agraria para apoyar los esfuerzos de lucha contra la esclavitud.

Como ya he dicho, hemos hecho mucho, pero todavía nos enfrentamos a nuevos retos. Por ejemplo, está en desarrollo un proyecto de ley del Senado aprobado por una comisión mixta que reduce la definición del trabajo esclavo. Esto podría tener un efecto negativo sobre los fiscales, el trabajo y los tribunales penales, ya que quedarían excluidos como delitos el trabajo forzado

y podría poner a los trabajadores en condiciones degradantes o permitiría jornadas debilitantes de trabajo.

Pero volviendo al tablero de ajedrez, he estado involucrado en este juego desde 2008 y he adjudicado decenas de casos penales relacionados con el trabajo esclavo en zonas rurales de la región amazónica. Hoy en día, no soy juez, soy profesor de derecho, el año pasado fundé la Clínica de trabajo esclavo y la trata de personas de la Facultad de Derecho de la UFMG, con el apoyo de la Universidad de Michigan. Es parte de una iniciativa pionera, con un espíritu pro bono, para formar un sistema internacional de Leyes de Clínicas. Se encuentra en Minas Gerais, el estado donde se documentaron las mayoría de los casos de trabajo esclavo en Brasil en 2014.

La clínica de la UFMG, al igual que la educación superior brasileña, tiene tres componentes: 1) de extensión, 2) de enseñanza, y 3) de investigación.

1. A través de nuestro componente de extensión, ofrecemos asistencia legal gratuita a los supervivientes. Los estudiantes trabajan directamente con las víctimas para hacer frente a sus necesidades legales, las cuales, en algunos casos conducen a la identificación de posibles violaciones de derechos humanos. Los sobrevivientes a menudo son analfabetas y no tienen recursos financieros, por lo que el acceso a los recursos no es fácil para ellos.
2. Cada semestre, los directores de la clínica enseñan a los estudiantes de derecho sobre el trabajo esclavo y la trata de personas en salones de clases. Conferencias, ejercicios y simulaciones empoderan a los estudiantes y les ayuda a desarrollar un importante conjunto de técnicas que utilizarán como profesionales para hacer respetar y que avancen los derechos humanos en el país.
3. Los estudiantes matriculados en la investigación de conducta clínica, también escriben artículos, asisten, organizan y promueven seminarios.

Trabajamos con agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales para desarrollar una red de contactos. Si el tráfico de personas es un delito transnacional, nuestros esfuerzos deben ser a nivel transnacional. Para mí, ese es nuestro mayor desafío: debemos trabajar juntos, debemos coope-

rar entre nosotros. Esto asegurará un constante intercambio de información entre los actores sobre el terreno, lo que, a su vez, ayudará a dar a los millones de esclavos estimados en el mundo lo que se merecen: una voz.

***La Perpetuación de la Trata de Personas: Cómo la
Corrupción Pública Erosiona el Estado de Derecho
y Facilita la Industria del Abuso***

Virginia M. Kendall

Jueza de la Corte de Distrito de EE.UU. del Distrito Norte de Illinois, EE.UU.

Gracias al obispo Marcelo Sánchez Orondo y a la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales por la oportunidad de poder hablar hoy aquí. Estoy muy agradecida de estar reunida con mis colegas de todo el mundo en Roma para discutir este tema tan importante de derechos humanos.

Hoy traigo una perspectiva de mi carrera profesional que creo que va a ser algo diferente a la de mis hermanos y hermanas del poder judicial alrededor del mundo. Al igual que mis colegas, yo también he presidido casos de tráfico de personas en mi corte que se encuentra en Chicago. También, al igual que algunos de mis colegas reunidos hoy aquí, antes de mi nombramiento como juez llevé numerosos casos de explotación infantil. Aunque he estado sentada como juez federal en Chicago durante los últimos 10 años, mi dedicación a la justicia me ha llevado mucho más allá de las cuatro esquinas de mi sala. Además de impartir clases sobre la trata de personas a estudiantes de derecho en tres facultades de derecho diferentes, tengo la suerte de haber colaborado en el país con los colegios de abogados, instituciones académicas, organizaciones sin ánimo de lucro y poderes judiciales estatales y federales para programas de formación para jueces y grupos de trabajo a lo largo del Estados Unidos. Los programas ayudan a estas organizaciones a través de los EE.UU. en la comprensión de la victimización única de esta insidiosa violación global de los derechos humanos. También me siento honrada de haber entrenado a los poderes judiciales de numerosos países en todo el mundo a través del Departamento de Estado, la American Bar Association, la Asociación Internacional de Abogados, y por medio de organizaciones como Abogados sin Fronteras y Voces Vitales.

En total, he viajado a más de 20 países en tareas contra la trata, he estudiado sus leyes y he conocido sus poderes judiciales, fiscales, agentes de la ley y sus ONGs. Uno de los objetivos a lo largo de estos esfuerzos ha sido comprender mejor por qué esta violación de los derechos humanos sigue siendo tan pe-

netrante, tan insidiosa, y tan difícil de erradicar. Es desde esta perspectiva amplia que les traigo un desafío —una llamada a la conciencia inmediata— de lo que creo que es una de las razones más importantes del por qué persiste la trata de personas: la corrupción pública.

En la mayoría de los casos de tráfico ilegal, la mercancía que tiene valor ilegal es fungible —drogas o armas de fuego, por ejemplo—. Una vez que el producto se ha agotado, el traficante busca otra fuente de alimentación. A diferencia de todas las demás actividades ilegales que invaden nuestro Estado de Derecho a nivel global, el crimen que nos trajo hoy aquí hace a un ser humano su producto y reutiliza esa vida abusando varias veces de ella, hasta que la persona pierde todo sentido de valor de sí mismo y de su comunidad. Reconociendo esto, se nos ha reunido aquí hoy en un llamado a ser una voz unificada para proteger la dignidad de la vida humana —la vida con el libre albedrío y la libertad—. La vida con propósito y aspiraciones. La vida con la capacidad de vivir de verdad: sin ser sometida en su potencial de crecimiento.

Ya sea a través de explotación laboral sexual, el traficante tiene una valiosa mercancía que se vende para obtener beneficios materiales. Al igual que cualquier producto ilegal en el mercado, ese producto se vende a través de canales en los que alguien que ocupa una posición de autoridad pública abusa de su autoridad para permitir que la violación ocurra. Si la autoridad está de acuerdo para beneficiarse a sí misma a través de la aceptación de un soborno que facilita el abuso o, en términos más generales, si el funcionario abandona su deber de hacer cumplir la ley o proteger al público al hacerse de la vista gorda ante una violación que causa lesiones a una clase de individuos que el funcionario no considera dignas de protección —los jóvenes, los ancianos, los discapacitados, los pobres, los ignorantes, los indigentes— esto, mis amigos, es el hilo común que une a todos nuestros países juntos en la perpetuación de la trata de personas: abuso de autoridad pública y el abandono del deber público.

Para explicar este vínculo común, permítanme compartir con ustedes algunos de los escenarios de todo el mundo a partir de mis estudios y mis enseñanzas. En Chipre, por ejemplo, me encontré con mujeres jóvenes que fueron víctimas del tráfico sexual en los burdeles, que describen cómo cada dos semanas, las llevaban a un hospital para hacerles pruebas de enfermeda-

des de transmisión sexual. Por supuesto, estas visitas al hospital no eran para garantizar la salud o la seguridad de las mujeres, simplemente no eran productos valiosos para los traficantes a menos que pudieran ser vendidas como limpias y sin enfermedad. Los traficantes las llevaban en camionetas por la puerta trasera del hospital donde médicos (médicos que habían tomado un juramento hipocrático para el cuidado de aquellos a lo mejor de su capacidad y juicio que buscan su ayuda) las examinaban para ver si el producto que el traficante tenía estaba contaminado, todo ello bajo la atenta mirada de los policías locales que permitieron el acceso al hospital y se aseguraron de que las camionetas fueran y vinieran con la eficiencia necesaria para llevar a las mujeres de nuevo a los burdeles para hacer dinero. Las víctimas describen la estrecha relación entre los traficantes y la policía, y mientras hablábamos bajo la sombra de un árbol de limón hermoso, las mujeres miraron nerviosamente sobre sus hombros a la policía —no a los traficantes— la policía, que dijeron sería la que las devolvería, como propiedad, a los traficantes si las encontraban.

En Bangladesh, en 2013, el mundo vio con horror como un edificio entero se derrumbó en el distrito de la moda, matando a unos 1130 trabajadores de la confección, un porcentaje significativo de ellos niños. Los códigos de construcción y las leyes laborales fueron sacrificadas con el fin de vender ropa a precios de saldo a muchos mercados en el hemisferio occidental. Las leyes de la India requieren inspecciones a los edificios y prohíben el trabajo infantil. El colapso del edificio en ese distrito, un sólo edificio, mató a más de 1.000 personas, principalmente mujeres y niños que ganan menos de 38 euros por mes.

En Egipto, las niñas son vendidas a extranjeros ricos como “novias del verano” o “novias de vacaciones”. Mientras tanto, los inspectores fronterizos permiten el cruce de niños explotados hacia los países ricos con tal regularidad que muchos niños se venden tres o cuatro veces antes de su decimosexto cumpleaños —pasan a través de las fronteras con documentos falsos que apoyan este movimiento—. Por desgracia, muchos padres se benefician de la venta de sus propios hijos y justifican el abandono de sus funciones parentales con el argumento de que su niño va a vivir una vida mejor.

En Kenia, los grupos de víctimas describen cómo la policía local es pagada por los delincuentes para no presentar un informe policíaco en caso de

explotación infantil, o para retrasar el cuidado de la víctima durante tanto tiempo que se pierde esa evidencia, fechas citatorios ante la corte se pierden, y los casos permanecen en expedientes sobrecargados durante años hasta que las víctimas y sus familias, muchos de los que están en situación de pobreza y residen a cientos de kilómetros de la corte más cercana, renuncian a su esperanza de justicia y simplemente se dan por vencidos

En Zambia, las minas de cobre se nutren de trabajo infantil a pesar de que existen leyes para proteger dicho abuso, sin embargo, cuando el dinero está disponible, la aplicación de la ley se puede comprar, a veces por tan poco como un día de salario o menos.

En Croacia, Letonia y Lituania, las mujeres se sienten atraídas por empleos a través de anuncios de Internet que les ofrecen salarios por servicios domésticos, trabajos en restaurantes o modelos, sólo para ser coaccionadas al comercio sexual, mientras que la policía local da la espalda a lo que creen que es la elección personal de la mujer en oposición a la ruptura de su voluntad.

Incluso en casa, en Chicago, las niñas son objeto de tráfico sexual a través de pequeños grupos oportunistas que glorifican la cultura proxeneta. Niñas atraídas por bandas o marcadas como animales con el nombre del proxeneta con el fin de reclamar su derecho a ellas como propiedad. A pesar de las leyes estatales y federales que prohíben dicho crimen, la policía local a menudo permite a los hoteles funcionar como burdeles para el comercio sexual y en su lugar se centran en “problemas más grandes” o crímenes que han sido priorizados por las autoridades superiores y son más propensos a ser procesados.

Estos son sólo algunos ejemplos de todo el mundo, en el que el abuso de la confianza pública o el abandono del deber público juega un papel fundamental en la perpetuación del abuso de la humanidad. En su forma más básica, la corrupción pública comprende la toma de dinero por un acto oficial, tales como la aceptación de un documento de identificación falso, lo que permite el paso de una frontera sin documentos de inmigración, no se ejecuta el deber oficial en inspecciones de edificios, instalaciones, escuelas; no se arrestan delincuentes y esto viola las leyes establecidas, y facilita la venta de la humanidad. Cuando se ve de manera más amplia, también es la negativa de nuestros funcionarios elegidos para dar prioridad a las leyes ya existentes

para proteger a los más débiles de nuestra sociedad. Al no cumplir las leyes de tráfico, las autoridades públicas están enviando un mensaje muy real para las víctimas, los más débiles de nuestra sociedad, que no son dignos de protección. Hoy, en mi país, cada uno de los 50 estados tiene su propia ley de trata de personas, como lo hace el gobierno federal. Sin embargo, el número de procesamiento de delito palidece en comparación con el número de víctimas de trata. ¿Por qué?

Creo que hay cuatro razones principales. En primer lugar, cada año cuando se les requiere a los países informar el trabajo que están haciendo para combatir la trata de personas en sus informes anuales TIP, no están obligados a informar sobre sus esfuerzos para cobrar y procesar a los funcionarios públicos que facilitan el delito. Al centrarse en el enjuiciamiento de los traficantes sin procesar a los sobornados, o sea a los facilitadores, hemos fracasado en hacer frente a un componente clave en esta tubería ilegal de la degradación humana.

En segundo lugar, siguen existiendo ciertas prácticas arcaicas en todo el mundo que perpetúan el abuso de autoridad pública. Una de esas prácticas es permitir a las autoridades pagar una multa y así borrar su crimen; en lugar de un procesamiento o tiempo en la cárcel. En un país africano este verano pasado me dijeron que este es el camino adecuado para erradicar la corrupción pública. Sin embargo, cualquiera puede ver que para el traficante, esto simplemente se convierte en costo de operación, como un impuesto o peaje que ha de efectuarse a lo largo de la cadena de suministro.

Incluso nuestros tribunales alrededor del mundo sufren de falta de transparencia y rendición de cuentas. En una mayoría significativa, no existe un registro permanente de un juicio o procedimiento judicial distinto de lo que está escrito a mano del juez. Aparte del inmenso retraso causado por esta ineficiencia, imaginemos el potencial para abuso del registro.

En tercer lugar, los más altos líderes a nivel mundial rara vez abordan la magnitud de estos temas de violación a los derechos humanos, y envían el mensaje inherente que son temas menos importante que otros que aborda al país, o peor, envían el mensaje de que la victimización no es tan real. Un público escéptico no puede ser un socio para el cambio. Estar aquí hoy y tener jueces de todo el mundo reunidos para abordar esta crisis internacional es exacta-

mente lo que se necesita para inspirar un cambio inmediato. Reconocer que el problema es real y que requiere de una participación proactiva es el primer paso hacia la protección de la dignidad de la vida humana.

A lo largo de la historia, hemos sido testigos de violaciones regulares y terribles de derechos humanos. Usualmente, con el tiempo, aprendemos de estas violaciones y aprendemos a reformar en parte debido a nuestra vergüenza colectiva, esto no habría ocurrido si nuestro liderazgo hubiera enfrentado este reto moral. Sin embargo, la trata de seres humanos se da a diario, consistente, persistente, dejando una humanidad rota a su paso, mientras que a menudo los líderes mundiales se sientan y relegan la discusión y prioridad de estos temas a lo más baja en su agenda.

En cuarto lugar, los que están en posiciones de autoridad deben entender que la persecución de este tipo de delito es muy diferente a la de otros delitos; que la manipulación psicológica implicada equivale a la ruptura de la voluntad humana; que la lesión es la de privar a nuestra próxima generación de millones de líderes potenciales, padres, educadores, científicos, académicos, porque la lesión es tan grande que las víctimas apenas sobreviven, y mucho menos prosperan, nosotros como comunidad civilizada y espiritualmente iluminada debemos sonar la alarma, estamos descartando de 30 a 40 millones de personas anualmente. Tenemos la obligación de educarlos y la obligación de tener misericordia por las víctimas.

Hay esperanza para la reforma. Esa reforma, sin embargo, debe venir desde arriba, de nuestros líderes electos y designados. Propongo a todos ustedes hoy cuatro formas concretas para salvar a los que están encarcelados en todo el mundo.

En primer lugar, añadir los delitos de corrupción pública a la lista de requisitos que cada país debe mostrar en su informe anual TIP, llevando estos delitos a la luz, donde deben permanecer. Capacitar a las autoridades públicas a reconocer que facilitar el tráfico de personas es ayudar e instigar la erosión de la voluntad de un ser humano. Poner dinero en el bolsillo a expensas de la humanidad de otra persona no sólo es ilegal, es inmoral.

En segundo lugar, trabajar juntos como una comunidad global, aplicando leyes internacionales y nacionales mediante la asistencia efectiva mutua, así

como cooperación en la recopilación de evidencia con prontitud y detención de los delincuentes a través de ambos tratados formales y esfuerzos de cooperación informales.

En tercer lugar, educar al poder judicial acerca de la victimización única de este crimen contra la humanidad para que sus resoluciones puedan iluminar e informar y, por lo tanto, ser un faro para los sobrevivientes, y educar al público en general. Proporcionar al poder judicial los servicios necesarios para crear y mantener un expediente judicial abierto y accesible a través de informes y un archivo público que ayude a inculcar la fe en la gente que el estado de derecho existe y protege a las personas.

En cuarto lugar, reconocer que las empresas se benefician del trabajo forzado e infantil, y como tal deben ser consideradas responsables de mantener las cadenas de suministro libre de violaciones de derechos humanos. La responsabilidad social de las empresas a su vez estimula al público consumidor a exigir productos que se hacen sin el sudor y la sangre de trabajo forzado o infantil. Del mismo modo, alentar a las instituciones tales como el Banco Mundial para inhabilitar a las empresas que utilizan fondos del Banco Mundial para financiar actividades de tráfico —las empresas localizadas mayormente en el mundo en desarrollo— empresas que se enfrentan a la inhabilitación por ejercer el soborno también deben ser enfrentadas a la inhabilitación por tráfico humano.

Me siento inspirada por todos los que se han reunido aquí hoy para proteger a los que no están en condiciones de protegerse a sí mismos. Humildemente me uno a esta voz unida para erradicar este crimen contra la humanidad. Es lo moralmente correcto por hacer y hay que hacerlo ahora.

El Abordaje de las Víctimas de Trata de Personas en el Perú: Un Gran Desafío A Vencer

Rosario López Wong

Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Especializada
en Delitos de Trata de Personas de Perú

El delito de Trata de Personas constituye a nivel mundial una de las peores violaciones de Derechos Humanos, toda vez que reduce a las personas a la condición de mercancía, cosificándolas, convirtiéndose así en una de las actividades ilícitas más rentables a nivel mundial, sólo superada por el tráfico ilícito de Drogas y el tráfico de armas, ello por las ingentes ganancias que captan los tratantes, debido a que el mantenimiento de dicha actividad lucrativa involucra poca inversión, dado los métodos utilizados para reclutar a sus víctimas y explotarlas y las condiciones infrahumanas en las que, en la mayoría de los casos se les obliga a “vivir” a sus víctimas.

Este delito traspasa fronteras y se presenta bajo diferentes modalidades, lo cual hace compleja la forma de enfrentarlo, tiene como principales víctimas a los niños, niñas y adolescentes y las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, principalmente aquellas de escasos recursos económicos, por lo que al advertir la tendencia al incremento de dicho accionar delictivo, resulta indispensable identificar los problemas centrales en la lucha contra la Trata de Personas a nivel normativo, operativo, y de asistencia y protección a favor de sus víctimas, para así establecer acciones concretas que contribuyan con su progresiva pero efectiva erradicación.

Respecto al Perú, debemos señalar que somos lamentablemente un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en sus diversas formas y modalidades, habiéndose identificado como un porcentaje mayoritario de las víctimas de la trata a menores de edad y mujeres muy jóvenes. Se genera este fenómeno por diversos factores multicausales que van desde la implicancia de aspectos negativos vinculados a la desprotección y disfuncionalidad familiar, violencia en una sociedad marcadamente machista como en muchos países de la región, el abuso de poder, falta de oportunidades y de acceso a

una vida digna por carencia de medios educacionales, laborales o de mejora social y económica, entre otros.

Bajo este panorama, resulta sumamente complejo para los operadores del sistema de justicia enfrentar bajo las características de un delito sumamente grave previsto y sancionado en nuestro código penal, lo que en realidad constituye un fenómeno delictual tanto por ser asumido por tratantes y explotadores como un negocio muy lucrativo con base en la “cosificación de seres humanos”, como por el propio perfil de sus víctimas, quienes atraviesan una seria problemática y carencias de índole social y familiar, sometidas a degradación humana. Dato importante a tomar en cuenta es que así como las víctimas en el Perú son mayoritariamente niños, niñas y adolescentes mujeres, también lo es que cada vez más se está incrementando el número identificado de tratantes que corresponden al género femenino; muchas de estas mujeres fueron en su momento víctimas a las cuales ni el Estado ni el sistema de justicia, pudieron extender su apoyo y atención oportuna y eficazmente.

El Ministerio Público del Perú como titular de la acción penal no es ajeno a esta grave realidad y desde hace varios años viene adoptando acciones para frenar el avance de este delito y sobre todo para, de modo adecuado y con enfoque humanitario, asistir y proteger a sus víctimas. Así, siguiendo las políticas públicas que se desprenden de la Ley N° 28950 —Ley contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes—, la Política Criminal contra la trata de personas, el Plan Nacional de Acción contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y la propia Constitución Política del Estado que estipula como un principio fundamental, la primacía del respeto a la dignidad del ser humano, el Ministerio Público peruano enfrenta este delito a través de acciones de prevención, de persecución del delito y de asistencia y protección a las víctimas; incluso, se ha hecho cargo a través de su Programa de Protección y Asistencia a víctimas y testigos de brindarles una atención integral que involucra asistencia psicológica, legal y social así como la promoción del otorgamiento a su favor de las medidas de protección que el caso amerite.

Igualmente, en actuación articulada con otras instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, el Ministerio Público ha realizado un trabajo de

afianzamiento de un cuarto eje de suma importancia: la reintegración social de las víctimas de la trata que es, en suma, el conjunto de esfuerzos y acciones destinados a la restitución plena de los derechos de las víctimas.

En efecto, en el marco del mandato constitucional y legal, el Ministerio Público del Perú ha procurado cumplir con dicha misión, buscando identificar y minimizar las causas de su comisión, ello en cumplimiento de nuestra política institucional de “persecución estratégica del delito” (prevención). Asimismo, se vienen realizando acciones que buscan enfrentar al delito de Trata de Personas desde su investigación proactiva y el requerimiento de la sanción penal respectiva (persecución), constituyendo uno de los principales avances la creación del Proyecto de Fortalecimiento de la Función Fiscal frente a la trata de personas, cuyos objetivos trazados se están cumpliendo progresivamente. Tal es el caso de la creación del Subsistema Fiscal Especializado en Delitos de Trata de Personas con su respectiva Coordinación Nacional, la implementación del Proyecto de interconexión de los registros estadísticos y base de datos de los casos de trata a cargo de la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú, ello sin dejar de lado a quien constituye la preocupación principal en medio de este fenómeno delictivo que es la víctima de trata, a quien se le aplica el Protocolo de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

Este Protocolo es otro logro importante que ha sido impulsado por el Ministerio Público del Perú, el cual tiene como finalidad establecer criterios comunes y una ruta única de actuación para afrontar de manera más proactiva los casos de trata de personas, fijando las pautas necesarias tanto para los actores del Ministerio Público como para los demás intervinientes del sistema de justicia (actuación interinstitucional), que haga posible la efectiva atención y protección a favor de las víctimas de trata.

Por citar algunas estadísticas relevantes, durante el periodo enero 2011 hasta marzo 2016, el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público atendió a 1 278 usuarios (1 164 víctimas y 114 testigos) derivados por el delito de Trata de Personas, en su mayoría mujeres (966 mujeres y 312 varones) y menores de edad (710 menores de edad y 568 mayores de edad), siendo que por las características de este delito se enfatizan las asistencias en vía de reciprocidad, pues la víctima no puede dejar de ser asistida por el Programa sin importar el

lugar donde esté, además se coordina su derivación y referencia a circuitos de asistencia y redes de apoyo, con la finalidad de que se les brinde patrocinio legal, albergue, atención médica, provisión de servicios, educación a través de actividades formativas, ofrecimiento de colocación laboral, entre otros.

Aunado a esta labor y con el objetivo de unificar esfuerzos interinstitucionales, el Ministerio Público ha suscrito 11 convenios de cooperación interinstitucional y recibe el apoyo de diversas entidades públicas y privadas así como de la sociedad civil (Inter Iuris, Save the Children, Terre des Hommes, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Capital Social y Humano Alternativo (CHS), entre otros), a efectos de desarrollar acciones conjuntas y homogéneas en favor de las víctimas de trata, con especial atención en el enfoque de derechos, género, interculturalidad y prevalencia del Principio Superior del Niño en el tratamiento de las víctimas más vulnerables: mujeres muy jóvenes y menores de edad.

Orientados a la asistencia integral y efectiva protección de la víctima más vulnerable, la Fiscalía peruana también ha promovido la implementación de salas de acogida en todo el país, habiéndose implementado a la actualidad ocho salas de acogida ubicadas en los Distritos Fiscales de Madre de Dios, Loreto (dos salas: Maynas y Nauta), Puno, Moquegua, Arequipa, Junín y Apurímac, encontrándose en pleno proceso de implementación la primera casa de acogida en el Perú, que funcionará en la ciudad de Lima y en la cual se dará un especial énfasis a la atención de las víctimas más vulnerables, como lo son las víctimas de la trata de personas.

Es preciso indicar que las salas de acogida implementadas por el Ministerio Público se emplean como un lugar transitorio de asistencia, soporte inmediato y especializado para las víctimas en especial grado de vulnerabilidad y riesgo, cuando deban esperarse breves horas para el inicio de las pericias médico legales y otros actos iniciales de investigación que hayan dispuesto los despachos fiscales, o cuando por una situación de inmediatez se requiera un lugar físico apropiado para permanecer hasta que se defina su situación (se determine al albergue al que irá).

Es así que, con el fin de contribuir a mejorar la respuesta del Estado frente a este delito, brindando un mejor servicio a la ciudadanía y en especial a las víctimas, el Ministerio Público del Perú seguirá fomentando mejorar su acceso a los servicios de Justicia para que reciban la asistencia y protección que requieran, así como promover la articulación estatal mediante convenios interinstitucionales que refuercen la persecución de este delito, la capacitación y sensibilización permanente de los operadores de justicia, y la elaboración de protocolos especializados para abordar adecuadamente a la víctima de trata; realizando todos los esfuerzos necesarios para concientizar a la sociedad peruana sobre la naturaleza, alcance y gravedad de este delito y estableciendo todas aquellas acciones y mecanismos que permita a los ciudadanos identificar concretas y potenciales situaciones de riesgo, evitando así ser presa fácil de organizaciones o grupos de personas que se dedican a esta ruin actividad delictiva.

La Fiscalía peruana proseguirá con mayor compromiso la labor a favor no sólo del rescate y atención de las víctimas de trata, sino especialmente para contribuir decididamente a la plena restitución de sus derechos y su dignificación, impulsados en el ejemplo y exhortación que nos ha dirigido el Santo Papa Francisco con acciones y palabras firmes de fe, fortaleza y bondad en la Cumbre celebrada en el Vaticano este 3 y 4 de junio del 2016.

Desafíos Actuales en la Investigación del Delito de Trata de Personas

Santiago Inchausti

Juez Federal de Mar de Plata, Argentina.

Introducción

Las estadísticas oficiales de Argentina nos muestran un progresivo incremento en las condenas y procesamientos por el delito de trata de personas. Desde el año 2008, en que se sancionó la ley que reprime las conductas prohibidas vinculadas a ese delito,¹ se procesaron a 433 personas² y se condenaron a 143.³

La legislación en materia de trata de personas responde a los estándares internacionales y es de avanzada porque abarca muchos casos que en otras legislaciones quedan fuera del delito, o excluyen expresamente al consentimiento como modo de atipicidad.

Sin embargo, las condenas han alcanzado a un universo relativamente reducido de casos de víctimas —aproximadamente 800 casos— si las confrontamos con los datos oficiales del Ministerio de Justicia de la Nación, que en ese período habrían rescatado 10 000 víctimas de trata de personas.

La explicación de esa diferencia la podemos encontrar en varios factores, algunos difíciles de medir y otros más palpables. Precisamente, dentro de este segundo grupo de casos podemos hallar algunas *malas prácticas judiciales* que se cometen a lo largo del proceso de investigación y enjuiciamiento de este tipo de delitos complejos que impiden su debida identificación y sanción.

Este trabajo se centra principalmente en los problemas que presenta la investigación de esos delitos (trata de personas y delitos conexos, como pueden ser los vinculados a la explotación sexual o laboral) a la hora de incorporar

¹ Ley 26.364 (BO 30/4/2008), actualmente modificada por la ley 26.842 (BO 27/12/2012).

² Por trata de personas con finalidad de explotación sexual 291 procesamientos y con finalidad de explotación laboral 142.

³ Los datos comprenden desde el año 2008 hasta el año 2015.

eficazmente prueba sin afectar las garantías procesales de los imputados y garantizando a la vez el debido respeto de las víctimas vulnerables.⁴

Principios del Derecho Internacional

La cuestión de la trata de personas y el trabajo forzoso u obligatorio o esclavitud, ha merecido una especial atención a nivel internacional, lo que se ha plasmado en una gran cantidad de tratados y documentos internacionales obligatorios para los países que lo suscribieron.⁵ En curso de entrar en vigencia encontramos, por ejemplo, el Protocolo de la OIT sobre Trabajo Forzoso (Conferencia de la OIT 2014, a la firma de los estados), en cuya aprobación se dijo: *“es fruto de la determinación de todos en poner fin a una abominación que sigue afligiendo al mundo del trabajo y liberar a sus 21 millones de víctimas”*.

Existe consenso de toda la comunidad en que este flagelo de la trata de personas, la esclavitud, el trabajo forzoso (entre otros modos análogos de sometimiento del hombre) se trata de una violación a los derechos humanos, atentado gravísimo contra la dignidad del hombre, que contribuye a perpetuar la marginalidad y pobreza e impide la obtención de un trabajo decente.⁶

Las obligaciones de los Estados que de ello se desprenden son las de evitar y erradicar esta práctica esclavizadora con medidas preventivas y de control, pero también, y esto es de especial incumbencia de las agencias judiciales y de investigación (jueces, fiscales y policías), el deber primordial de investigar y sancionar, por un lado, y reparar a los damnificados (recuperación y readaptación), por el otro.

4 Estos breves apuntes, críticas y propuestas están hechos sobre la base del estudio de varios casos judicializados en Argentina, pero, principalmente, en mi experiencia como juez de instrucción en este tipo de delitos; desde el año 2009 que asumí como magistrado, he decretado más de 70 procesamientos a imputados por el delito de trata de personas (varios de ellos ya cuentan con condenas firmes), lo que abarcó a aproximadamente 250 víctimas.

5 Ejemplo de ello son algunos de los siguientes: Declaración Universal sobre los derechos del hombre (1948); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); Convención sobre esclavitud (1926); Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de esclavos y las instituciones y prácticas análoga a la esclavitud (1956); Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000); Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2000); Protocolo contra el tráfico ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (2000); Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990); Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984); Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979); Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006).

6 La CIDH en “Masacre de Río Negro vs. Guatemala” (con cita de la Corte Int. Justicia en “Barcelona Traction”) dijo que hay una norma imperativa del derecho internacional que prohíbe la servidumbre y la discriminación racial; es *erga omnes* derivada de los principios y reglas relativos a los derechos básicos de la persona humana y que atañe a todos los Estados”

El Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos dijo en un caso de trata de personas doméstica⁷ que la prohibición de la esclavitud (art. 4 Conv. Europeo) se proyecta en tres sentidos: 1) penalizar los actos de esclavitud o trabajo forzoso; 2) medidas operativas para proteger a la posible víctima de situaciones de riesgo conocidas; y 3) investigar y sancionar.

Sobre este último punto, aclaró que la investigación eficiente debe ser de oficio ante cualquier situación, y debe tener los siguientes principios: 1. Independencia de los implicados en el hecho; 2. Capacidad de identificación y castigo; 3. Prontitud y expedición razonable (sacar a la víctima del lugar urgentemente); y 4. Participación de la víctima y sus familiares para resguardo de sus legítimos intereses.⁸

Éstos son principios que deben aplicarse a todas las investigaciones de este tipo de delitos complejos que suponen una o varias víctimas que están siendo explotadas o tratadas. Sin embargo, en muchos casos en Argentina no se respetan.

Malas Prácticas Advertidas en la Investigación

En nuestro país son varios los casos en que estas investigaciones no reúnen los estándares mínimos de eficacia y eso se traduce en las pocas condenas que hay pese a la gran cantidad de casos detectados. Un estudio de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN) y de la Cámara Federal de Casación Penal (en adelante, CFCP) –que precisamente señalan y censuran esas malas prácticas y nos sirven de guía para una eficiente investigación– nos permite ver el siguiente panorama que se repite en varios casos:

- 1. No se investiga seriamente:** Se desestiman denuncias por inexistencia de delito o se sobresee prematuramente al inicio del proceso sin adoptar medidas mínimas de investigación⁹ como la entrevista con la presunta víctima.

⁷ TEDH en "CN vs. Inglaterra", del 13/11/2012.

⁸ El tribunal responsabilizó a Inglaterra por la inexistencia de la tipificación de los delitos de esclavitud (no era suficiente con otros delitos como secuestro) y por no perseguirlo eficientemente: no se interrogó a responsables que retenían dinero y documentos, indiferencia de indicadores de trabajo forzoso.

⁹ CFCP, s. 3, "Parun".

2. **Se investiga la conducta de la víctima y no la del sospechoso:** Se absuelve o sobresee valorando en contra de las víctimas los indicadores de la trata de personas, como puede ser “su falta de colaboración en la investigación”, “la voluntad de quedarse en el lugar de explotación”, “libertad de movimiento”, etc. En verdad no se advierte que esos pueden ser indicadores del temor, las amenazas sufridas en caso de que se los denuncie o el abuso de la situación de vulnerabilidad.¹⁰ No se tiene en cuenta que el consentimiento de la víctima no excluye el delito.
3. **Pérdida de prueba esencial:** se demora en la toma de medidas indispensables para el proceso, como puede ser el allanamiento y rescate de las víctimas, la recepción inmediata de la declaración de las víctimas, la inspección judicial de los lugares, decomiso de bienes, etc.; todo eso si no se toma de modo urgente y en los primeros momentos de la investigación se corre el riesgo de que se pierda como prueba o se altere (por ejemplo, es común que los imputados presionen a las víctimas para cambiar el testimonio o desmantelan lugares de explotación o hagan desaparecer pruebas).
4. **Víctimas imputadas:** Se enjuicia a personas que eran víctimas por el hecho de haber colaborado en las conductas de los tratantes. Tanto en lugares de explotación laboral o sexual los autores recurren a las víctimas para sus tareas ilícitas, y esto no es advertido por los investigadores. No se aplica la cláusula absolutoria del art. 5 de nuestra ley de trata.¹¹
5. **Re-victimización procesal:** 1. Trato por parte de jueces y fiscales de las víctimas por cantidad, y no por persona (en resoluciones no se las menciona por sus nombres, sino por cantidad). Cada víctima es un caso, por lo que hay que reconstruir cada historia personal.¹² 2. Se las hace declarar varias veces. 3. Se emplea en resoluciones un lenguaje discriminatorio para referirse a las víctimas.
6. **No se encaran las investigaciones como casos de crimen organizado internacional:** Es común que la víctima que es captada en un país, sea explotada en otro, y que las ganancias económicas pueden dirigirse a un tercer

¹⁰ CFCP, 2, “Sanfilipo”.

¹¹ El artículo 5 de la Ley 26.364 establece que: “No punibilidad. Las víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata. Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificara”.

¹² Esta crítica ha sido remarcada en el informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de la Procuración General de la Nación (Prolex): “Trata laboral en Argentina. 2014. El tratamiento judicial de los casos en el fuero federal”.

país. Todo ello requiere la investigación en conjunto de varios países, lo que no suele hacerse y no se emplean las herramientas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional para trabajar e investigar con otros países.¹³

7. **No se rescata y repara a la víctima:** En lo que es social y patrimonial también la cuestión actual presenta varias falencias: a) **Falta asistencia social y jurídica a las víctimas.** b) **No se aseguran los bienes patrimoniales usados para el delito ni su decomiso.** c) **Falta de reparación a las víctimas:** por ejemplo, no hay prácticamente registros de reparaciones civiles o indemnizaciones a las víctimas.¹⁴

Desafíos y soluciones posibles

Este tipo de delitos es de investigación compleja. Los tratantes y explotadores montan empresas delictivas que afectan a varias víctimas y las tratan de ocultar de los ojos del Estado corrompiendo a funcionarios o mutando de lugares. Ello requiere un continuo aprendizaje de mejores herramientas de investigación y capacitación por parte de los operadores judiciales para lograr una eficiente investigación del delito. A continuación, señalaré algunas soluciones posibles para ello que reflejan mi experiencia en la materia.¹⁵

1. Conocer el delito y sus modalidades

Para investigar, primero hay que conocer cómo operan las organizaciones criminales de trata laboral o sexual y cuál es su *modus operandi*. Los estudios internacionales sobre la materia son un buen punto de partida por cuanto este fenómeno se repite en todo el mundo de un modo parecido.¹⁶ Hay que saber que la mayor cantidad del trabajo forzoso y trata de personas se da en ámbitos privados de la

¹³ El Protocolo de Palermo establece en su art. 10 el deber de cooperar entre los países.

¹⁴ Uno de los pocos casos con que se cuenta, se trata de una probación dada por tribunal oral que le reconoció solo mil pesos de reparación por daños a dos mujeres boliviana que había sido víctima de trata doméstica por más de un año y a la que no se le habían abonado los últimos seis meses.

¹⁵ Algunas de estas recomendaciones están contenidas en el "Manual de buenas prácticas para la protección de los testigos en las actuaciones penales que guarden relación con la delincuencia organizada" de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2008).

¹⁶ Por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado un documento titulado "La Abolición de la Esclavitud y sus Formas Contemporáneas" (por David Weissbrodt y la Liga contra la Esclavitud, Nueva York Y Ginebra, 2002, publicado también en internet) en el que encontramos un profundo análisis de los procesos perversos actuales con los que se somete a esclavitud y trata de personas a las víctimas.

economía, y que se recurre a él porque da enormes ganancias ilícitas. América Latina, luego de Asia, es el principal lugar de explotación laboral en el mundo,¹⁷ por ello, encontraremos similitudes y vinculaciones entre los distintos países de nuestra región entre las organizaciones criminales.

Hay que saber que en general los inmigrantes indocumentados son las víctimas de los casos de trata de personas tanto con finalidad de explotación sexual como laboral. Ello se debe a su situación de vulnerabilidad; son los que más expuestos están a los riesgos de la trata de personas, lo cual ya ha sido denunciado por varios organismos internacionales (OIT, CIDH, TEDH, entre otros) y por el Papa Francisco en varias oportunidades.

Según los casos que se han judicializado, los siguientes son los modos más comunes en que encontramos este delito en nuestro país. En todos veremos que las víctimas son en su mayoría inmigrantes:

- a. **“Talleres textiles clandestinos”**: a los trabajadores se los explota mediante trabajo esclavo, jornadas prolongadas y sin descanso, duermen en los mismos talleres, retención de salarios y endeudamiento, multas, empleo del grupo familiar, condiciones inhumanas de trabajo y alojamiento, amenazas con procesos penales por ser indocumentados, encierro, etc.
- b. **“Trabajadores golondrinas o temporarios”**: aunque no se les suela ver como casos de trabajo forzoso ni reducción a la servidumbre, reúne los mismo indicios que dan lugar a la trata de personas: hay abusos, descuentos por traslados, alojamientos y alimentos (cobrados a mayor precio), uso del trabajo familiar, no se paga hasta el fin de la cosecha (con lo que se logra retener al trabajador), no se firman contratos, salarios indignos, etc.
- c. **“Trabajo rural a porcentaje”**: un modo encubierto de la servidumbre de la gleba se da con los trabajadores o peones rurales a los que se les asigna una porción de la tierra para cosechar a cambio de múltiples tareas en la explotación agrícola y doméstica; también puede pactarse abusivamente salario por productividad. Sin embargo, las condiciones son sumamente abusivas y esclavizantes: trabaja toda una familia para el patrón o dueño y se le abona

¹⁷ “El costo de la coacción. Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo”, de la Conferencia Internacional del Trabajo, 98.ª reunión, 2009, Informe

sólo a uno, viven en condiciones inhumanas, se los endeuda y están siempre en incapacidad de dejar su condición de siervo; suele ser hereditaria y sin sueldo. Es lo que comúnmente ocurre en los cinturones frutihortícolas de las grandes ciudades.

- d. **“Servidumbre por deudas”**: también es común que ciertas comunidades de origen asiático sean explotadas mediante el abusivo sistema de las deudas. Por lo general, cuando llegan al país deben trabajar de dos a cinco años sin salario alguno para devolver los costos del traslado y documentación (falsa por lo general); sin embargo, esa deuda va creciendo por el perverso mecanismo de adelantos o descuentos, lo que a veces extiende ese período indefinidamente.
- e. **“Trata con fines de explotación sexual o prostitución forzada”**: los llamados “prostíbulos” son los lugares de destino de las mujeres víctimas de trata de personas. Ya sea por violencia, coacción, engaño o abuso de una situación de vulnerabilidad (esto, en la mayoría de los casos), los tratantes captan a las víctimas para explotarlas en estos lugares. Allí son sometidas a daños físicos, morales y familiares que se les ocasiona y se las expone a los graves peligros de esa actividad que tiene los porcentajes más altos de muertes. Todos los casos en que se está explotando la prostitución ajena encubre un supuesto de trata de persona porque a las víctimas se la coloca en una situación de dependencia que les impide ejercer su libertad de autodeterminación.
- f. **Trata doméstica**: son los casos más difíciles de detectar, pero se han registrado varios. Por lo general, las víctimas son mujeres que realizan tareas dentro de las casas de los explotadores sin percibir salario alguno, o sumamente ínfimo. La dependencia es total, a tal punto que los explotadores llegan a decidir sobre el futuro de los hijos de las víctimas si quedan embarazadas.

En cada una de estas modalidades hay que conocer cómo es el proceso de reclutamiento de las víctimas y cómo es la cadena de suministro empresarial en el que están insertas, para saber hasta dónde es la responsabilidad penal y civil. Hay que conocer, por ejemplo, si ese empresario que se beneficia con la explotación laboral recurrió a propósito a esas agencias de colocaciones, a ese taller clandestino o a ese emprendimiento rural para abaratar costos. La alegada defensa de tercerización no alcanza como excusa, pues conocen los costos del mercado por debajo de los cuales ya deben suponer que hay una situación de explotación.

2. Características de la instrucción

En materia de investigación deben respetarse ciertos estándares para una investigación eficiente:

- a. **Rapidez:** la investigación previa a un allanamiento y rescate de presuntas víctimas debe ser lo más breve y rápida posible porque, en principio, estamos frente a una restricción ilegítima a la libertad en curso de ejecución. Toda demora innecesaria implicará un día, una semana o un mes más del sometimiento de la víctima a la explotación sexual o laboral, con el riesgo para la salud o vida del afectado. Recordemos que la prostitución registra el más alto índice de mortalidad y agresión física. Por eso, debe ordenarse el cumplimiento de las medidas con la mayor urgencia posible. Por ejemplo, se requiere a) contar con buenas bases de datos accesibles, como migraciones, propiedad automotor, titularidad de líneas telefónicas, antecedentes penales, etc.; b) incorporar tecnología: los pedidos pueden ser adelantados por cualquier medio tecnológico (mail, fax, teléfono), videoconferencias para testigos; c) encargar las investigaciones a personal profesionalizado entrenado en esta temática (si puede ser ajeno a las fuerzas de seguridad locales mejor).
- b. **Problema con la competencia:** la discusión de la competencia prematuramente,¹⁸ y sin previamente realizar las medidas indispensables, atenta contra el descubrimiento de la verdad y la debida protección de las víctimas. Lo mismo ocurre si se la analiza tardíamente por parte de provincia porque ellos van a buscar otro delito menor. Muchas veces se pierde mucho tiempo hasta que queda radicado el expediente definitivamente en el juzgado federal competente, lo que implica que se pierda la posibilidad de tomarle testimonio a las víctimas, o realizarse el allanamiento del lugar, lo cual posteriormente es prácticamente imposible. Esto se debe a la falta de coordinación o información entre las fuerzas de seguridad o municipales que suelen acercar las denuncias al juzgado local y no al federal. La CSJN ya tiene doctrina en cuanto a que es la justicia federal la que debe realizar la

¹⁸ En Argentina este problema se da porque la legislación asigna competencia a la justicia federal en los delitos de trata de personas (145 bis y ss. del Código Penal), pero mantiene la competencia de la justicia de las provincias en los delitos conexos como reducción a la servidumbre o explotación económica de prostitución de otra persona (arts. 140 y 127 del Código Penal). Esta división de competencia respecto de delitos prácticamente superpuestos ha generado una conflictividad importante y demoras en las investigaciones.

instrucción (allanamientos, testimonios, etc, incluidos) mientras subsista la hipótesis de trata de personas, y no a la inversa para no entorpecer la investigación y rescate de las víctimas.¹⁹

- c. **Estándares para ordenar una medida de coerción procesal:** es necesario que las medidas de coerción en un estado de derecho sean fundadas en una sospecha razonable; pero eso no puede traducirse en una exigencia más allá de lo razonable porque eso pone en riesgo la vida y salud de las presuntas víctimas que deben ser rescatadas. Por ejemplo: no corresponde negar los allanamientos cuando ya está acreditada la existencia de un prostíbulo o que en un lugar hay personas trabajando en condiciones irregulares (indicadores mínimos); ya esos dos casos habilitan la inspección, pues de lo que se trata es de entrevistarse con las posibles víctimas (para lo cual no se requiere mucho).
- d. **Declaración testimonial de las víctimas:** la testimonial de la víctima es una de las pruebas fundamentales de las investigaciones²⁰ y por ello hay que tomarla en los primeros momentos para asegurar su incorporación al proceso. Si se demora se corre el riesgo de que luego no pueda realizarse debido a que no se pueda dar con el paradero de la persona, a que hayan sido captadas en otros lugares de explotación laboral o sexual desconocidos o a que los imputados influyan para cambiar su testimonio.²¹ No lograr obtener su testimonio inmediatamente puede afectar seriamente el avance de la causa. Pero esa declaración debe hacerse bajo ciertos recaudos²² a) en cámara gesell: actualmente el marco legal argentino²³ indicaría la preferencia por el

¹⁹ CSJN Fallos 334:1382, del 15 de noviembre de 2011; y competencia 1016, XLVI in re "Abratte, Gloria s/ denuncia" del 5 de julio de 2011.

²⁰ Más del 85%, según el informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de la Procuración General de la Nación (Protex) antes citado.

²¹ La CFPP en "Paoletti" entendió que debía prevalecer el primer testimonio de una víctima menor de edad dado en la instrucción por sobre el brindado en el debate en el que se había retractado de lo dicho anteriormente; la casación avaló darle prevalencia al primer testimonio por ajustarse a los efectivamente ocurridos, conforme el resto de los elementos de cargo.

²² Según el mismo informe antes mencionado de la Protex, en casos en los que se hallaron muchas víctimas en un lugar de explotación se advirtió una (mala) práctica bastante extendida de tomar testimonio sólo a algunas de ellas y no a todas, sin explicar el por qué. Los criterios de esta "selección", que no aparece explicitada ni explicada en las actuaciones judiciales, en ocasiones coincide con lo informado por los profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sin embargo, a mi entender, aún sin el testimonio de la víctima se puede reconstruir su caso si se cuenta con otro conjunto de elementos probatorios para acreditar el cuadro de explotación o de trata de persona, máxime en los casos de situación de vulnerabilidad extrema.

²³ Actualmente el CPPN —conforme la reforma de la ley 26.364— establece este mecanismo en casos de menores de 16 años (Art. 250 Bis.) o de 16 a 18 años en riesgo, para lo cual deben ser 1) entrevistados por un psicólogo especialista en niños y/o adolescentes designado por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho tribunal o las partes; 2) en un gabinete acondicionado; 3) informe detallado con las conclusiones; 4) a pedido de parte o de oficio seguidas desde el exterior (vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico). En el resto de los casos, se empleará el mismo mecanismo "si fuere posible" (art. 250 quater).

empleo de la cámara gesell en todos los casos para evitar la revictimización de la persona y la reiteración del acto; b) intervención de la defensa y garantías mínimas: el método debe ser el previsto para el adelanto de prueba irreproducible previsto en el art. 200 CPPN para asegurar que esa prueba pueda ingresar a la etapa de juicio directamente;²⁴ para ello debe asegurar la participación y control de la defensa del acto,²⁵ lo que evita futuros planteos de nulidad; c) protecciones de testigos: evaluar en cada caso la necesidad o no de brindar algún sistema o programa en resguardo de la víctima frente a ataques o amenazas de los imputados, previo, durante o posterior a la declaración o proceso; y d) valoración del testimonio: no hay que focalizarse en la víctima, sino en lo que hizo el acusado o sospechoso con ella. Según el minucioso análisis de la Procuraduría especializada en trata de persona —crítica que comparto—, se advierte una subutilización o subvaloración de sus dichos por parte de los jueces, y no se advierte que un correcto y acabado testimonio de las víctimas permite mostrar sus condiciones objetivas de vida, su situación de vulnerabilidad previa y conocer cómo fue su captación u ofrecimiento de la oferta laboral o sexual y explotación.²⁶ Para acreditación de hechos de trata de persona o delitos conexos hay que trabajar con indicadores; si bien la presencia o ausencia de cualquiera de los indicadores no prueba ni deja de probar que se esté frente a un caso de trata de personas, su presencia debería dar lugar a una investigación más seria y profunda.

- e. **Cooperación internacional:** la cooperación entre los países viene impuesta por la Convención Internacional contra la delincuencia organizada transnacional y el Protocolo de Palermo. Debemos encarar todos los casos debidamente como un caso de crimen organizado internacional desde un

24 Puntualmente en causas de trata de personas se presenta el problema porque para el juicio es difícil conseguir la presencia de los testigos víctimas, y se recurre a la declaración prestada en la instrucción. La cuestión ya fue tratada en CFCP: su sala 4 en "Mumeli" (Causa n° 13.315, 3 de agosto de 2012, reg. 1271/12) lo avaló porque además se contaban con otros elementos: la indagatoria de la imputada, actas del procedimiento de las que surgía que la víctima estaba en el lugar allanado, cédula paraguaya, compra del pasaje; y en el caso "Aguirre López" (Causa n° 13.780, del 28 de agosto de 2012, reg. n° 1447) se convalidó que los dichos de una de las víctimas sólo fueran puestos en conocimiento por el policía que los escuchó el día del allanamiento; sin embargo, la casación consideró que independientemente de ello otra víctima había declarado por videoconferencia, y se destacó que había otras pruebas: declaraciones de vecinos, policías, secuestros de elementos demostrativos, pasajes, etc. En el caso "Inca Ticona" (Causa n° 14.048, reg. 1998/11, del 27/12/2012) de la Sala 3°: a la incorporación por lectura de los testimonios de las víctimas extranjeras recibidos durante la etapa de instrucción, se les sumó que fueron contrastadas con el restante material probatorio; y en "Enciso" y "Sanfilipo" de la sala 2° se descartó la violación al derecho de defensa porque estuvo presente el abogado defensor en las declaraciones durante la instrucción.

25 Ello satisface, a mi entender, las garantías mínimas que reclama la CN y la Convención Americana. Por su parte, la CEDH, en un caso de abuso sexual de menores, sostuvo que el acusado tiene derecho a presenciar la exploración del menor (en el momento o después del acto a través de la grabación audiovisual) y a la posibilidad de dirigir preguntas, en forma directa o indirecta, en esa oportunidad o en otra posterior (A.S. c. Finlandia).

26 Conforme el minucioso análisis efectuado en el informe de la Protex antes mencionado.

primer momento para: 1. Investigar la cadena de responsabilidades en otros país (por ejemplo, lugar de captación). 2. Producir pruebas en esos países y usar las herramientas de la Convención; y 3. Desbaratar bandas internacionales y prevenir futuros casos de trata de personas.

- f. Prevenir y denunciar:** desde la instrucción se pueden tomar medidas para prevenir y descubrir nuevos casos. Para ello, debe darse intervención a las ONGs, sindicatos, comunidad educativa, social y religiosa y cámara de empresarios: mi experiencia me indica de la indispensable necesidad de contar con el apoyo de personas ajenas al sistema penal para poder prevenir, investigar y asistir a las víctimas. En Argentina el rol de las ONG, sobre todo la Alameda, ha sido muy importante a la hora de denunciar los lugares de explotación laboral o sexual; muchas de las causas se iniciaron por ello y el avance también se debió a su rol de querellante. Lo mismo ha ocurrido con el sistema de salud o social de las escuelas. Hay que capacitar a estos actores en la materia.

3. Rescatar y restaurar a la víctima

El problema para las víctimas no termina con el rescate, es decir, el procedimiento judicial por el cual se pone fin a la explotación. La afectación de las víctimas de trata de personas genera un trauma y las coloca en una situación de vulnerabilidad que debe ser restaurada desde el inicio mismo de la instrucción. Que se cumpla con ello también es responsabilidad de los jueces.

- a. Atender a la cuestión social de las víctimas y repararlas:** la situación de vulnerabilidad de las víctimas —y su núcleo familiar— requiere de un abordaje multiagencial para su asistencia desde un primer momento. Hay que cumplir con el Protocolo de Palermo y 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Problema actual: las víctimas no aceptan la colaboración o asistencia social ni tampoco se trabaja en la restauración (trauma). Los programas deben adaptarse a las víctimas para que funcionen (por ejemplo: horarios, lugares de los consultorios, traslados) y escucharlas para mejorarlos.²⁷

²⁷ También las ONGs pueden cumplir un rol esencial en la asistencia a las víctimas luego de los procedimientos de rescate. Están en mejores condiciones profesionales para hacerlo y articular con las agencias asistenciales. Ejemplo: EEUU es una buena experiencia. En mi caso: tanto Alameda como la CGT han aportado veedores para inspeccionar los campos donde eran explotadas personas y mejorar la situación de las víctimas durante el proceso.

b. Decomiso de los bienes para indemnizar a las víctimas: La OIT ha calculado los costos económicos para el trabajador víctimas: salarios perdidos, horas extras, beneficios médicos y de la seguridad social, todo se lo roban al trabajador y el grupo familiar; también debe serle reparado el daño moral, psíquico, pérdida de chance, etc. Lo mismo ocurre con los daños provocados a las víctimas de explotación o trata sexual. Lamentablemente, hoy sólo contamos con escasos subsidios, pero no hay casos de reparaciones o indemnizaciones judiciales. Algunos de los motivos son que las víctimas no se ven como tales, tienen temores o son amenazada, carecen de recursos o debida asistencia jurídica. Una solución posible para trabajar es que la indemnización sea automática o de oficio con la condena (por ejemplo, EEUU) e instaurar una representación jurídica promiscua (pueden intervenir asesores de pobres y ausentes u ONGs).²⁸ Sin embargo, desde un primer momento de la investigación hay que ir por el decomiso de todos los bienes usados en el delito y la intervención de las empresas que lo cometan para asegurar la futura indemnización.²⁹

A Modo de Conclusión

El problema de la trata de personas nos coloca a los jueces y fiscales como órganos representantes de nuestros países, frente al compromiso internacional de su investigación y sanción. Sólo mediante un constante aprendizaje y capacitación podremos hacer frente a ese desafío.

Es nuestra responsabilidad llevar adelante investigaciones eficaces que concluyan en condenas de corresponder, por cuanto la sanción penal es uno de los modos de hacer visible la esclavitud contemporánea y erradicar esta grave violación a los derechos humanos que perpetúa la marginalidad y la pobreza.

28 Tampoco hay procedimientos eficaces para la indemnización: se incumple con el párrafo 6 del artículo 6 del Protocolo (velar por que su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que brinden a las víctimas la posibilidad de obtener una indemnización por los daños sufridos) y el párrafo 2 del artículo 25 de la Convención (establecer procedimientos adecuados que permitan a las víctimas indemnización y restitución).

29 Se requiere la urgente creación de un fondo estatal de indemnización. Pese a estar en la ley, aún no funciona. Le aseguraría a la víctima de estos delitos una inmediata y segura indemnización sin someterla a los plazos y contratiempos del proceso penal.

Un Enfoque Holístico para la Lucha Contra la Trata: del Estado de Derecho a la Prevención Aguas Arriba

Kevin Hyland

Comisionado Independiente Anti-esclavitud del Reino Unido

La globalización de la indiferencia, en palabras del papa Francisco, ha creado una “cultura de usar y tirar”. Esta cultura de tirar a la basura no sólo se relaciona con el mercado de bienes de consumo cada vez más desechable, sino también a las muchas vidas tiradas a la basura, atrapadas y explotadas en las líneas de producción por una búsqueda de ganancias y alimentada por la cultura materialista.

En el Reino Unido, el gobierno ha estimado conservadoramente que hay 13 000 personas en condiciones de esclavitud moderna.

Esto incluye a hombres y mujeres en trabajo forzado en la construcción, lavados de autos, agricultura, servicio doméstico, explotación sexual y la criminalidad forzada como pequeños robos, el cultivo de *cannabis* o la mendicidad callejera, sólo por mencionar algunas formas que adopta en nuestras ciudades y pueblos globalizados.

Esto incluye a un niña de 7 encerrada en una casa de Londres que trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días después de haber sido tomada de su madre con la promesa de una vida mejor en el Reino Unido. Cuan equivocada estaba la “Cenicienta rumana como los medios de comunicación la nombraron viviendo una vida de miseria y explotación. Muchos sospechaban la realidad pero nadie actuó durante casi 2 años”.

Hoy en día la esclavitud rara vez es ideológica, no es parte de una estructura formal separada como fue históricamente, sino que se integra, esta incrustada, y me atrevo a decir, incluso institucionalizada, aunque a menudo sin darnos cuenta.

No puede simplemente ser prohibida por un tratado al igual que lo fue el comercio trasatlántico, ya no implica rutas comerciales fijas que se pueden

deshabilitar; se trata de un problema político, socio-económico y moral complejo.

Es un engranaje en nuestra máquina económica, que se manifiesta en un sub-mundo oculto, interactúa con la economía legítima y está intrínsecamente ligada a las cadenas de suministro globales, cambiando los paisajes políticos y el desarrollo humano.

Las víctimas sufren experiencias horripilantes e inhumanas, tales como violencia, violación y abuso extremo. La esclavitud moderna también tiene implicaciones negativas más amplias para el desarrollo humano.

Esto resulta en una gran pérdida de remesas a los países en desarrollo, ya que los flujos de remesas se toman de las víctimas, que se ven obligadas a pagar las deudas, que se convierten en beneficios para los delincuentes.

Y está el impacto en las familias y comunidades dejadas atrás. Las víctimas no pueden cuidar de sus niños o ancianos. Muchos son jóvenes, la esclavitud moderna roba a las comunidades las personas que económicamente podrían contribuir más al desarrollo local.

La esclavitud moderna es un problema económico, ya que muchas víctimas están tratando de escapar de la pobreza y son atraídos a la trata y a la esclavitud con la falsa promesa de obtener ganancias económicas.

Es un problema de salud, ya que las mujeres y los niños víctimas de trata se encuentran en mayor riesgo de infección por el VIH.

Es un problema de género, ya que las relaciones desiguales de poder refuerzan la condición secundaria de la mujer en la sociedad.

Y, por supuesto, es un problema legal, como víctimas son despojadas de sus derechos humanos y los traficantes demasiado a menudo actúan con impunidad.

Como jueces aquí, muchos de ustedes están en condiciones de comprender y utilizar la ley con el fin de ayudar a restaurar la justicia que las víctimas y sus familias merecen.

En primer lugar, es necesario tener los instrumentos jurídicos necesarios para ayudarles. Afortunadamente, en el Reino Unido, hemos dado grandes pasos hacia adelante en esta área con la aprobación de la Ley de la esclavitud moderna, una ley histórica de la que van a escuchar más de mis colegas aquí.

Esta legislación inclusiva ha colocado una vez más al Reino Unido en el centro de la escena en la lucha contra la esclavitud. El Índice Global de la Esclavitud 2016 publicado la semana pasada pide a todos los países aplicar una legislación que sea igualmente robusta.

Pero como el profesor McEldowney ha dicho esto es sólo el principio.

Y aunque la búsqueda de cambio nacional e internacional podría parecer como una tarea enorme, si hay voluntad política, el cambio puede suceder rápidamente.

A finales de 2013, un informe en profundidad del Centro de Justicia Social fue publicado, destacando la gravedad del problema de esclavitud en la sociedad británica contemporánea. Menos de dos años después, la Ley de la esclavitud moderna fue promulgada. La baronesa Butler-Sloss que nos acompaña aquí hoy, jugó un papel crucial en la Cámara de los lords del Parlamento para asegurar la promulgación.

Es importante centrarse en soluciones prácticas sobre lo que podemos hacer, ya sean grandes o pequeñas, en lugar de lamentarnos y permanecer horrorizados por historias de tragedia y la enormidad del problema. Estas historias, no importa cuán horribles, deben motivarnos a no detenernos, en realidad son nuestro mandato.

Hay que recordar que le tomó al parlamentario británico William Wilberforce sólo 20 años para poner fin a la trata de esclavos transatlántica británica, y menos de 30 años después, se abolió el comercio mundial de esclavos.

Y esto fue en un momento en que la esclavitud era tan aceptada como el nacimiento, el matrimonio y la muerte.

En nuestro mundo interconectado, la abolición hoy parece mucho más compleja de lo que era en los tiempos de la esclavitud transatlántica, cuando el

comercio se detuvo con un simple tratado y con un poco de ayuda de la Armada británica.

No olvidemos que Wilberforce y sus aliados también tuvieron que hacer grandes cambios institucionales y trabajaron duro por años para cambiar las actitudes culturales hacia la forma en que funcionaban los negocios y la sociedad. Así como ellos lo hicieron, debemos hacerlo nosotros.

¿Qué hubiera pasado si Wilberforce no hubiera levantado su voz? ¿Entonces que? ¿Por cuánto tiempo más persistiría el comercio de esclavos?

Tenemos que embarcar ese mismo viaje de nuevo ahora y hacer frente a las estructuras y actitudes culturales, sociales y económicas. Factores que han permitido a la esclavitud de prosperar una vez más.

Aquí, en esta sala hoy, tenemos algunas voces muy valiosas y respetadas que tienen el poder de crear el cambio e incitar a otros al cambio.

Los jueces, con su amplia riqueza de experiencia e interpretación para aplicar la ley, están en una posición fuerte para restablecer la justicia a las vidas de aquellos que han sido tomados por los traficantes.

No sólo, a través de la interpretación, comprensión de la ley y el discernimiento de las complejidades de los casos individuales, sino también alzando su voz, instigando al cambio, informando las políticas.

El papel de los jueces es dual, primeramente llevar a cabo las responsabilidades realizadas en primera línea en la protección y restauración de los derechos de las víctimas y en segundo lugar, como una voz para el cambio.

La primera, implica comprender la naturaleza del tráfico de personas y cómo los traumas que las víctimas han experimentado pueden influir en su comportamiento en la corte y en la interacción con las autoridades legales. Asegurando que esto no limite injustamente la capacidad de la víctima para tener acceso a la justicia.

Por ejemplo, una víctima puede dar quejas tardías, incluso volver a un empleador abusivo o no haber escapado cuando era aparentemente posible que

lo hiciera. Esto podría parecer reducir la credibilidad de un caso, sin embargo, esto es de hecho una indicación adicional del control que el traficante ejerce sobre la víctima. Es de vital importancia que el poder judicial entienda estos matices si ha de atribuírsele voz y justicia a las víctimas de la esclavitud moderna.

Otro punto donde el juicio cauteloso puede ser necesario es cuando las víctimas han sido objeto de trata con el fin de criminalidad forzada. Comprender los matices de estos casos podría ayudar a identificar a una víctima que esta en el tribunal por haber cometido un crimen bajo coacción.

Para proteger a las víctimas que podrían encontrarse en esta situación, la Ley del Reino Unido de esclavitud, moderna, introdujo una defensa legal, las víctimas que han sido obligadas a cometer un delito, como consecuencia directa de su situación de esclavitud pueden estar seguras de que no van a ser tratadas como un criminal por el sistema de justicia.

La capacitación y sensibilización en el poder judicial en torno a las particularidades de la delincuencia y esclavitud moderna puede allanar el camino para la restauración de la vida de aquellos que han sido esclavizados.

No es sólo en la línea directa de trabajo que el poder judicial puede hacer la diferencia. La ayuda de los jueces y fiscales en la redacción de la Ley de la esclavitud moderna en el Reino Unido fue absolutamente crucial. La colaboración de un juez y un fiscal aseguraron la creación de órdenes de prevención y de riesgo que fueron piezas clave de la Ley de la esclavitud moderna y dieron a los tribunales los poderes necesarios para prevenir el daño causado por los delitos de esclavitud moderna.

Las órdenes de prevención restringirán la actividad de las personas que han sido condenadas por delitos de esclavitud moderna. Las órdenes de riesgo, no requieren de una condena penal, se pueden usar, por ejemplo, para restringir el comportamiento de aquellos en la periferia de las organizaciones criminales, que juegan papeles secundarios en el crimen de esclavitud moderna, donde puede haber suficientes evidencias para condenar a un individuo, el riesgo es todavía claro.

Ya han sido utilizados en el Reino Unido convirtiéndolo en un entorno mucho más difícil para que los traficantes operen.

Otra cláusula de la Ley de la Esclavitud Moderna fue la creación de mi papel como el Comisionado Independiente Anti-esclavitud del Reino Unido, una posición creada para encabezar los esfuerzos del Reino Unido contra la esclavitud, para así tener una visión general de los diferentes componentes en la lucha contra la esclavitud, para atar cabos y trabajar hacia una mejor coordinación y llevar a la rendición de cuentas de todos los actores.

Las personas dentro de estas esferas están trabajando muy duro, rescatando y atendiendo a las víctimas, reduciendo el riesgo de otros a la esclavitud moderna, haciendo su trabajo.

Mientras todos estos engranajes trabajan frente a demandas inmediatas y presiones, contar con un órgano que esté al pendiente y analice los grandes esfuerzos antiesclavistas e identifique dónde las cosas funcionan y que puede ser replicado donde hay lagunas es de vital importancia. La coordinación es importante tanto a nivel nacional como internacional.

En los últimos años ha habido una amplia variedad de iniciativas muy positivas para tratar de hacer frente a la esclavitud moderna y la trata de personas en todo el mundo.

Pero la triste y simple verdad es que el movimiento contra la esclavitud ha fracasado hasta ahora. La esclavitud moderna continúa en auge, como industria, y los criminales siguen viéndola como un costo de bajo riesgo en un negocio de alta recompensa. En realidad, no ha sido una lucha justa. Se estima que la esclavitud moderna genera en todo el mundo más de 150 millones de dólares por año en ganancias ilegales, los países de la OCDE gastan apenas 0.08% de esta cantidad en la asistencia para el desarrollo antiesclavista.

Por otra parte, sólo alrededor del 0.2% de los casos de esclavitud son investigados y procesados anualmente.

Todos ustedes aquí estarán de acuerdo conmigo. Esto tiene que cambiar.

El primer paso es que la esclavitud moderna sea tratada con la gravedad que merece. La esclavitud, el sufrimiento incalculable de millones y millones de personas en todo el mundo, es una industria criminal de miles de millones de dólares.

Y cada vez más los grupos criminales internacionales y las organizaciones terroristas como ISIS y Boko Haram tienen como actividad predilecta para financiar sus actividades la esclavitud.

Sin embargo, la conectividad de la esclavitud moderna, con otros males globales a menudo se ignora.

Es un tema que merece ser debatido a la par que la lucha contra el terrorismo y otras amenazas prioritarias nacionales e internacionales. Además, los recursos nacionales e internacionales deben ser proporcionales tomando en cuenta la gravedad de este tema.

Necesitamos recursos adicionales y ser más estratégicos en la manera de asignar los recursos. Cada silo dentro del sistema multilateral tiene su propio enfoque, a menudo se superponen pero rara vez habla el uno al otro.

Con el objetivo de desarrollo sostenible, Gol 8.7, dedicado a la erradicación de la esclavitud moderna, que llamó a todos los gobiernos y empresas a la lucha contra la trata, ahora tenemos una verdadera oportunidad de conducir esfuerzos coordinados a nivel mundial.

Necesitamos una asociación mundial coordinada, global y eficaz que entrelace la política, las empresas y el capital social y asegure que los esfuerzos internacionales estén alineados y entregando su máximo potencial.

Aún queda trabajo por hacer en la prevención de la esclavitud moderna, en especial para que esta no suceda en primer lugar. Esto significa trabajar en estrecha colaboración con el sector privado para poner fin a la demanda, ya sea voluntaria o involuntaria, de mano de obra esclava.

Y algo muy importante, trabajar mucho más cuidadosamente para hacer frente a la esclavitud desde la raíz, para cambiar y desafiar las condiciones que permiten que la esclavitud persista.

La transparencia en las cadenas de suministro de la Ley de la esclavitud moderna del Reino Unido requiere que grandes empresas que operan en el Reino Unido informen anualmente sobre la forma en que están asegurando su cadena de negocio y que esta esté libre de esclavitud moderna, esto es para lograr un cambio cultural donde respetemos a los trabajadores de todo el mundo. Hay que felicitar a aquellas empresas que buscan y que pongan en práctica medidas para prevenir la explotación, es importante mencionar que este objetivo no tiene como fin ser medida de castigo contra el sector empresarial.

Los países de destino de las víctimas tienen que ser más inteligentes al identificar con exactitud las regiones de donde las víctimas han sido traficadas, y luego deben trabajar en colaboración con los gobiernos de los países de origen en torno a los esfuerzos de prevención dirigidos a cortar la raíz.

Esto es exactamente en lo que me he estado centrando y un ejemplo de ello es con mi socios de Nigeria.

Nigeria ha sido siempre un importante país de origen —ocupando el primer o segundo lugar de proveniencia— de víctimas de la esclavitud moderna identificadas en el Reino Unido. De hecho, el tráfico de mujeres y niñas de Nigeria a Europa es uno de los más persistentes flujos de tráfico globales. A pesar de la magnitud y el volumen de tráfico de seres humanos procedentes de Nigeria, la proporción significativa de la misma es un fenómeno muy localizado.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la agencia de lucha contra la trata de Nigeria han estimado que en conjunto el 94% de las víctimas de trata de su país para explotación sexual rescatadas fuera de Nigeria son del estado de Edo. Agencias del Reino Unido también han indicado que una proporción igualmente elevada de víctimas identificadas de Nigeria en el Reino Unido son de Edo. Para poner esto en contexto, la población de Edo se estima que representa menos del 2% de la población total de Nigeria.

A través del modelo único del Grupo Santa Marta, una asociación entre la Iglesia, jefes de policía y líderes de la sociedad civil que se formó en esta misma sala en abril de 2014 bajo la dirección del cardenal Vincent Nichols, en presencia del Santo Padre, he estado trabajando este último

año con agencias, sociedad civil y grupos religiosos en Edo, junto con académicos locales que han identificado las causas del fenómeno y las intervenciones necesarias.

Juntos hemos desarrollado un plan de necesidades y estoy trabajando con el gobierno británico para explorar cómo esto puede ser llevado a cabo de manera efectiva con la utilización de los recursos y fondos internacionales.

El plan se basa en tres pilares: el compromiso de la Comunidad y la capacidad de resistencia; la creación de oportunidades locales a través de un desarrollo sostenible, centrándose en gran medida en las empresas agrícolas; y la creación de capacidades de justicia criminal.

Este enfoque de tres pilares es esencial, ya que la legislación y el compromiso de la comunidad por sí solo tiene impacto, pero la creación de puestos de trabajo y el desarrollo sostenible en las zonas más endémicas de la trata de personas y la esclavitud moderna es esencial.

Hasta que cortemos la esclavitud de raíz, podemos solamente, en el mejor de los casos, tener la esperanza de aplicar una solución temporal. Esto también es cierto para la captura de los propios traficantes. La esclavitud moderna es muy grave y a menudo es crimen organizado, y debe ser tratada como tal. Si los traficantes de esclavos y amos no son implacablemente perseguidos y castigados, las víctimas rescatadas y apoyadas serán simplemente reemplazadas con un suministro cada vez mayor de personas vulnerables y el ciclo de abuso y explotación va a continuar.

Se necesita un enfoque holístico para hacer frente al flagelo de la trata de personas en la sociedad actual. Un enfoque que vea las causas profundas de la trata, pero que también mantenga al estado de derecho en su epicentro. Porque sólo cuando la impunidad de los traficantes se convierta en cosa del pasado será el mundo un lugar donde el tráfico de personas es un negocio de bajo beneficio y de alto riesgo.

Estas oportunidades únicas que ofrece la Iglesia y las uniones inusuales con un acuerdo de respeto, confianza y dignidad son clave para nuestra misión de erradicar este crimen contra la humanidad para tener éxito.

Para terminar voy a citar a una gran figura en la lucha por la libertad, el Dr. Martin Luther King.

En 1963, escribió desde la cárcel:

“La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes.”

Es una vergüenza para todos nosotros en la sociedad actual que haya injusticia en todas partes, en todo el mundo la gente sufre este flagelo de la humanidad.

Y es tarea de todos nosotros en esta sala, luchar por que la injusticia se convierta en justicia, para que hombres mujeres y niños, puedan disfrutar de la libertad que damos por sentada.

Tenemos que llegar a una posición en la que veamos el éxito no en términos de ganancias, sino en la forma en que tratamos a nuestros semejantes. Ahora tenemos una oportunidad para empujar la esclavitud moderna y la trata de personas al abismo y finalmente confinarlo a los libros de historia. No perdamos esta oportunidad, ya que será gente como nosotros, la que pueda y deba hacer que esto suceda, si no, seremos nosotros los que aparezcan en los libros de historia habiendo fracasado a nuestro deber con nuestros compañeros de la humanidad por muchos años por venir.

Protección de Víctimas y el Proceso Penal

Alison Saunders

Directora de la Fiscalía Pública del Reino Unido

Muchas gracias por la invitación para estar aquí hoy. Estoy muy contenta, sobre todo porque la trata de personas y la esclavitud moderna no son algo con lo que se pueda lidiar aislados. Debemos lidiar con ella todos juntos. No afecta solamente al Reino Unido, acontece en todos los países, ya sea que sean origen, transito o destino final de este problema. Es realmente alentador ver tanta gente que puede en verdad hacer la diferencia y por eso agradezco poder hablar ante ustedes.

La trata de personas puede claramente tener un efecto devastador en sus víctimas. Sabemos y hemos escuchado aquí todo tipo de ejemplos. Sin embargo, lo que tenemos que asegurar es el enfoque de derechos humanos desde el comienzo para así poder proteger a las víctimas y ayudarlas a recuperarse de su calvario; alentándolas a dar la mejor evidencia posible y cooperar con el sistema judicial, y que apoyen procesos penales que esperemos lleven a encontrar a sus traficantes. Con respecto a la trata de personas, Inglaterra y Gales trabajan en participación con organizaciones a lo largo del sistema judicial tanto en casa como en otros países, para lograr procesos penales exitosos. Yo trabajo de cerca con los jefes de los servicios de persecución de Escocia e Irlanda del Norte para asegurar que tengamos un abordaje y enfoque robusto y consistente para mejorar los juicios en el Reino Unido.

El *Lord* Abogado de Escocia y yo hemos organizado dos cumbres, una en Edimburgo y otra en Londres a la cual invitamos a parlamentarios y jueces con experiencia en trata e implementación legal y de justicia y a organizaciones del tercer sector, a que contribuyen en nuestras discusiones para poder aprender de qué manera taclear mas efectivamente las tendencias del trafico juntos. Para nosotros, uno de los temas más importantes es la identificación de víctimas y esto continúa siendo un reto como escuchamos esta mañana. En 2017 había poco mas de 1700 víctimas en nuestros mecanismo nacional de referencia. Esto aumentó

a 3000 en 2015, pero es muy seguro que muchas más víctimas no estén identificadas. Sabemos que, por lo general, las víctimas no se auto-identifican ya sea por miedo, coerción o por vergüenza. Existen muchas razones y por eso se requiere un abordaje y enfoque más proactivo tanto en las investigaciones como de los fiscales para poder reconocerlas.

Cada vez vemos más víctimas forzadas a la criminalidad. Por lo tanto, los fiscales y la fuerzas del orden público deben estar alerta de esto y referir a las posibles víctimas para no seguirlas victimizado y no enjuiciar a las personas equivocadas.

Recientemente, la identificación de víctimas referidas a través de nuestro Mecanismo de Referencia Nacional también reveló cambios de tendencias en Inglaterra y Gales. Previamente, un mayor número de víctimas se traficaba hacia la explotación sexual que a la laboral y eran significativamente un porcentaje mayor de mujeres que de hombres. Durante 2015 vimos un cambio hacia más víctimas adultas para explotación laboral que sexual y también estamos viendo un incremento en el número masculino de víctimas. Durante 2014, el 39% de las víctimas fueron de sexo masculino. En 2015 esa proporción subió a 46%, así que es importante que los fiscales entiendan el cambio de tendencias y las características de una víctima si la hubiera.

Regresando a cómo nos aseguramos que los fiscales hagan esto, tenemos varia documentación para ellos, quienes toman decisiones en acuerdo con el Código para Fiscales de la Corona. Tenemos guías específicas con relación a la trata de personas y la esclavitud moderna. Estas guías se actualizan en base regular que refleja legislaciones o cambios jurisprudenciales. Hay guías de sentencias y cambios de políticas y se publican en la página web de la CPS, así esta accesible a otros y no sólo a los fiscales y jueces. Creemos que una buena práctica que ha surgido de nuestra experiencia con casos de tráfico y esclavitud, especialmente aquellos con asuntos complejos o novedosos, es asegurarnos de que los fiscales sean conscientes de estos casos y entiendan cómo apoyar mejor a las víctimas y cómo pueden constituir casos robustos con los cuales ir a la corte.

Los casos de trata y esclavitud son llevados por fiscales especializados que tienen experiencia y han sido entrenados para lidiar con este tipo

de casos. La capacitación se ha enfocado en los fiscales que lidian con este tipo de casos para asegurarnos que entiendan temas tales como lo que la víctima puede necesitar para ayudar a lo largo del caso. La manera en que una víctima puede presentar la cosas y cómo no juzgarla particularmente en su credibilidad. Como lo ha dicho Kevin, muchas víctimas regresan a aquéllos que las han traficado o regresan a los que las han forzado a la esclavitud. Los fiscales son recordados de no juzgar a las víctimas por su credibilidad y más bien consideran su alegato como un todo y ayudan a las víctimas durante el proceso ¿Cómo hacemos eso? Trabajamos muy cercanamente con nuestros colegas de la policía y nos aseguramos de estar trabajando con ellos en etapas tempranas para identificar la evidencia y construir los casos. Recientemente hemos desarrollado una lista conjunta de evidencia vital que asiste a las acusaciones y a progresar los juicios de las víctimas.

Somos muy agudos al buscar maneras en las que podemos ayudar a la policía a investigar y obtener evidencia que sostenga los cargos. A veces esto implica buscar evidencias en otros países, a veces en documentos, teléfonos móviles, equipos de informática que han sido confiscados a los traficantes así como evidencia bancaria y financiera. Si podemos construir casos donde no tengamos que depender de las víctimas, esto las asistirá para recuperarse de su carga pero no siempre podemos hacerlo.

También nos aseguramos de ver las ofensas de la trata y de la esclavitud como propósitos de consecución. Esto significa que bajo los procedimientos penales del Reino Unido la corte pueden asumir que los bienes que el acusado ha adquirido en los últimos seis años se asumen como adquiridos del crimen y el acusado tiene que probar lo contrario. Esto nos permite buscar y ordenar la confiscación de los bienes del acusado. Esto es importante pero no es algo que hemos tradicionalmente hecho bien en casos de trata. ¿Por qué es importante? Porque es importante privar al traficante del dinero que ha ganado a través del tráfico y la esclavitud forzada, ya que es por dinero la razón que lo hacen. Ven a la gente como un producto, de la misma manera en que ven las drogas, armas o cualquier otro bien ilegal que trafiquen, y quitarles la ganancias les quita el motivo para seguir haciéndolo. Así también, prevenimos que el dinero siga siendo re-invertido en tráfico y se pueda usar para ayudar

a las víctimas a través de la compensación. Somos muy agudos para cerciorarnos que mejoramos en relación con los ingresos del crimen y tenemos investigaciones financieras ocurriendo a la par que los juicios para producir evidencia en los casos de trata o esclavitud moderna.

Claro que no podemos hacer esto solos. La cooperación internacional es muy importante ya sea a través de asistencia legal mutua, investigaciones de policía a policía o equipos de investigación conjuntos para así proveer evidencia a la cortes del reclutamiento de víctimas, planes de viajes y antecedentes penales. Hemos encontrado que los equipos de investigación conjunta han sido la manera más eficaz de investigar y enjuiciar redes organizadas de tráfico alrededor de la comunidad europea, pero estos equipos se pueden armar en países fuera de la comunidad si existe una base legal.

También trabajamos muy de cerca con la policía para asegurar que se discutan estrategias para las víctimas en las primeras etapas del proceso para ayudar a asistir a la víctima a dar su evidencia y nos aseguramos de ver con ellas cómo sería la mejor manera para que presenten la evidencia en el juicio. Esto es especialmente importante en casos donde la víctima es particularmente vulnerable como en casos de niños, discapacitados o gente que tiene dificultades de aprendizaje. Áreas donde tendremos que encontrar maneras mas innovadoras de ayudar a presentar su evidencia ante la corte. Por ejemplo, usando intermediarios que puedan traducir efectivamente las preguntas y asegurarse de que la víctima entienda lo que se le pregunta para proporcionar la mejor evidencia posible.

Es posible para nosotros llevar juicios de tráfico sin la víctima presente, donde la policía ha llevado a cabo investigaciones proactivas. Aunque es más usual depender del testimonio de la víctima. Así que en orden para reducir la carga de la víctima, es importante que proporcionemos evidencia que pruebe el caso para así minimizar su involucramiento en el proceso tanto cuanto podamos. Sabemos que las víctimas son testigos y regularmente se arriesgan al dar evidencia en contra de los traficantes. Muchas veces tienen miedo a las consecuencias que puedan tener, ya sean ellas o sus familias, por proporcionar información y por eso están reacias a hacerlo. Por ende, bajo nuestra legislación las consideramos a

todas vulnerables e intimidadas y con derecho a derechos más amplios y servicios que las asistan. Por ejemplo, al proporcionar evidencia a la policía, las víctimas pueden dar sus declaraciones en una entrevista de video grabada y hecha por oficiales especialmente entrenados. Asistida por interpretes en algunas instancias, como mencioné un intermediario, es usado para ayudar a facilitar la comunicación. El video se utiliza en la corte para que ellas no tengan que repetir lo mismo una y otra vez en el ambiente de la corte.

Cuando una investigación comienza y las víctimas potenciales pueden requerir protección mientras la policía hace las investigaciones, ahora hemos empezado a usar las nuevas Órdenes de Riesgo de Tráfico a las que Kevin se refirió. Éstas se pueden aplicar para restringir actividades o comportamientos de sospechosos. Estas órdenes pueden prohibir a los sospechosos de hacer cualquiera de las cosas descritas por al menos dos años. El incumpliendo de esas órdenes es castigable hasta con 5 años de prisión. Hemos trabajado de cerca con la aplicación de la ley para obtener un número de estas órdenes desde su introducción en julio del año pasado. Por ejemplo, este año trabajamos para obtener este tipo de órdenes para dos sospechosos vietnamitas ya conocidos por autoridades en el Reino Unido y Francia. Esos sospechosos estaban siendo investigados por tráfico de personas vietnamitas al Reino Unido. La investigación estaba en su etapa temprana y los sujetos estaban bajo fianza. Había suficiente información e inteligencia corroborando que ellos continuarían sus actividades si no suspendíamos sus actividades y viajes. La orden nos fue concedida, lo que les impidió viajar y organizar viajes o alojamiento a terceros. También hubo otras prohibiciones relevantes impuestas a sus actividades. Así que en ese periodo peligroso, antes de que pudiéramos recopilar procedimientos judiciales contra ellos, pudimos asegurarnos de que sus actividades fueran restringidas.

Las víctimas del tráfico que proporcionan evidencia en las cortes también son aptas para medidas especiales que incluyen un rango de provisiones de asistencia para que den su mejor evidencia en la corte. La policía y fiscales discuten con la víctima las medidas que les ayudarán a dar esta evidencia de una manera fácil. Además de las medidas especiales, el fiscal puede hacer una petición y pedir anonimato, reportar

restricciones o que la víctima brinde evidencia a través de una TV en vivo cuando escogen regresar a casa a su propio país o no quieren asistir personalmente a la corte. El juez Prince les hablará con más detalle de esto cuando aborde los procesos de juicio.

En algunos casos es necesario proteger a las víctimas o a sus familias en su país de origen de intimidaciones, amenazas y represalias durante las investigaciones o el juicio y algunas veces hasta después de concluido el caso. En estos casos trabajamos con el orden público en otros países para proveer protección y con los fiscales y fuerzas policiales consideraremos cargos penales contra aquellos que giran las amenazas. De igual manera, si tenemos éxito en obtener juicios y sentencias, también trabajaremos para sacar unas órdenes preventivas que se imponen postconvicción. Estas órdenes de prevención van una vez más a imponer restricciones en la libertad de aquellos convictos. Impondremos prohibiciones de viajes para que no puedan buscar alojamiento o trabajo para otra gente. No podrán hacer otra cosas que pueda ayudarles a seguir traficando. Estas órdenes de prevención han estado en vigor sólo desde el año pasado y ya hemos obtenido 17 de ellas con unas condiciones muy innovadoras, incluyendo condiciones que se aplican en el extranjero.

Finalmente, una de las cosas que necesitamos analizar en relación con las víctimas es la identificación, como dije al principio. Ya que son víctimas, y es importante no sólo para no victimizarlas otra vez sino también para protegerlas y estar seguros de que estamos juzgando a los que son verdaderamente responsables por el tráfico y la esclavitud moderna. En nuestra nueva legislación hay un estatuto de defensa para víctimas de tráfico que son forzadas a cometer ofensas criminales como consecuencia de su situación de tráfico. En casos donde hay evidencia o información de que el sospechoso pueda ser una víctima de trata, la defensa puede aplicar el acto. El juez puede sin duda pedir que se investigue esto también el decide si seguir con el juicio o no. Ésto debería pasar más allá de si tenemos o no el reglamento de defensa y espero que los fiscales de todo el mundo estén analizando este punto.

Espero que esto les provea un resumen útil de algunos pasos que hemos tomado en Inglaterra y Gales. No estoy segura si son buenas noti-

cias pero el número de casos que hemos tenido en Inglaterra y Gales se ha incrementado substancialmente. Hemos visto en el ultimo año un aumento de hasta 300 casos. No sé si esto es bueno, creo que de alguna manera es malo, porque no hemos podido prevenirlo pero mínimo estamos trayendo a los perpetuadores ante la justicia. Espero con ansia escuchar al resto de los ponentes de esta conferencia y muchas gracias por su tiempo.

La Ley de la Esclavitud Moderna del 2015: su Impacto en el Poder Judicial de Inglaterra y Gales

Ann Elizabeth Oldfield Butler-Sloss y Christopher Prince

Jueces del Reino Unido

Mi colega, el juez Prince, y yo vamos a compartir esta charla. Queremos informarles sobre una nueva ley del Reino Unido, la Ley de la Esclavitud Moderna, que entró en vigor en 2015. Me he retirado de ser juez desde hace más de 10 años, pero ahora soy un miembro independiente de la Cámara de los Lores, nuestro Senado, y tuve mucho que ver con la redacción de la nueva ley. Soy abogada convertida en legisladora. Así que voy a hablarles acerca de las principales partes de la Ley.

Christopher Prince, quien es juez en el extremo norte de Inglaterra, trata casos penales graves, les informará sobre el impacto de la Ley de la Esclavitud Moderna bajo el poder judicial de Inglaterra y Gales tratando casos de tráfico de personas y el enfoque judicial a las víctimas que proporcionan evidencia en esos casos. Escocia y el norte de Irlanda tienen jurisdicciones separadas, pero la Ley de la Esclavitud Moderna forma parte de sus leyes.

La Ley de la Esclavitud Moderna trae bajo un mismo techo todas las diferentes partes de la trata de personas y la esclavitud, la explotación sexual, la servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio. El consentimiento de la víctima no funciona como defensa para el traficante de personas si se ha probado el delito. Aplicamos el artículo 4 de la Convención de Derechos Humanos, que aumenta el encarcelamiento de traficantes de humanos. Se extiende la jurisdicción de los tribunales del Reino Unido a los que trafican o esclavizan en el extranjero. Hay un aumento importante de los enjuiciamientos, pero todavía un pequeño número en comparación con el número de víctimas identificadas.

El tribunal puede emitir una orden de reparación o indemnización a la víctima. Hasta ahora, que yo sepa, todavía ninguno ha sido hecho. Un policía o funcionario superior de inmigración puede detener un vehículo, barco o aeronave si la persona que es el propietario, fletador o lo

tiene bajo una orden de compra a plazos, ha sido detenido por uno de los delitos graves, y hay una orden de confiscación hecha por el tribunal.

En ciertas circunstancias, un alto funcionario gubernamental puede requerir de un agente policíaco o agente de la autoridad para, abordar, desviar y detener a una nave británica cuando haya motivos razonables para sospechar que se ha cometido un delito de esta naturaleza. Un barco extranjero puede ser detenido si el estado de origen pide al Reino Unido ayuda para hacerlo.

La Ley crea nuevos pedidos de prevención que se pueden hacer si el acusado ha sido condenado por un delito en virtud de la Ley. El propósito es prevenir futuros delitos de tráfico y proteger a las víctimas de su respectivo delincuente. Incluye prohibiciones dentro y fuera del Reino Unido y la prohibición de viajar al extranjero por un máximo de 5 años. Hasta ahora, en los primeros 12 meses se han registrado 14 pedidos, incluyendo 4 eslovacos condenados por delitos de tráfico y enviados a prisión. Se han realizado órdenes de prevención evitando que se reincorporen a la zona en Eslovaquia, después de su salida de la cárcel, de donde las víctimas fueron reclutadas; así mismo, las autoridades eslovacas se han puesto de acuerdo para cumplir las órdenes de los tribunales ingleses.

La ley también ha creado nuevas órdenes de riesgo de esclavitud y el tráfico cuando hay pruebas donde el demandado ha actuado de tal manera que puede cometer un delito de esclavitud o trata de personas, así como también fueron creadas para la protección de las víctimas. Estas órdenes establecen prohibiciones de la parte demandada, incluyendo viajes al extranjero por un máximo de 5 años. Se han realizado 5 órdenes de riesgo en donde se incluyen casos en los que los demandantes han sido escuchados y aquellos en los que no hay pruebas suficientes para procesar.

La parte más importante de la nueva ley es la creación del Comisionado Independiente contra la Esclavitud y nuestro Comisionado se encuentra en esta Cumbre. Creo que él se encargará de informarles sobre su papel. Estoy muy contento de ser un miembro de su grupo asesor que está presidido por el Obispo de Derby, miembro de la Cámara de los Lores.

Otra parte importante de la Ley es la sección que protege a las víctimas. Si la víctima puede demostrar que él/ella se vio obligado a actuar como un esclavo, como un niño vietnamita encerrado en una granja de *cannabis* en Londres, es una defensa para el delito que ha cometido y no debe ser procesado. Existe la presunción de que una persona menor de 18 años no es culpable del delito.

Existen medidas especiales para los testigos de las víctimas y el apoyo a las víctimas, que el Juez Prince les contará. El Gobierno tiene proyectos piloto que proporcionan a los niños víctimas de trata con abogados del tráfico infantil requeridos en virtud de la Ley. Existen también disposiciones especiales para los trabajadores domésticos extranjeros que han sido tratados como esclavos.

La última parte importante de la Ley es el requisito a las grandes empresas para hacer una declaración de esclavitud anual y de trata de personas para proporcionar cierta transparencia en las cadenas de suministro.

En mi opinión, tenemos una buena legislación y ahora tenemos que hacer que funcione. Nuestro sistema de identificación de las víctimas no es tan bueno como debería ser, sobre todo para aquellos que vienen al Reino Unido desde fuera de la UE. El gobierno está mirando para ver cómo mejorar el sistema. Hay mucho trabajo por hacer para mejorar la forma en que tratamos a los autores de estos crímenes impactantes y la protección de sus víctimas que vienen a o están dentro del Reino Unido. Pero ahora podemos mejorar la forma en que nuestros tribunales y nuestros jueces se ocupan de estos temas.

Christopher Prince

Como la Dama Butler-Sloss ha dicho, voy a hablar sobre cómo en Inglaterra y Gales el enfoque judicial para la realización de ensayos penales que afectan a las víctimas vulnerables ha cambiado radicalmente. El legislativo y el judicial han introducido medidas que permiten a los testigos vulnerables dar lo mejor evidencia.

Hemos reconocido que si las víctimas de delitos pueden dar evidencia en el juicio sin distracciones, el miedo o ansiedad, se optimizará la calidad de sus pruebas y será más probable lograr justicia.

Un beneficio incidental es que si un sistema de justicia criminal es respetado por los ciudadanos a los que sirve como justo y humano en su tratamiento a las víctimas, éstas son más propensas a la hora de pedir justicia.

En cualquier juicio que incluya una víctima joven o vulnerable, un juez de primera instancia en Inglaterra y Gales podrá ordenar cualquier combinación de las siguientes circunstancias:

- Que el juez y los abogados se quiten sus pelucas y vestidos.
- Que se aclare la tribuna del público.
- Que el testigo pueda declarar en la corte desde detrás de una pantalla, de manera que no sean vistos por el acusado.
- Que el testigo pueda declarar por un enlace televisivo en directo desde una habitación aparte de la sala.
- Que la evidencia del testigo para el juicio consista en una entrevista pre-grabada en un DVD, tomada por un oficial de policía horas o días previos al primer contacto de la víctima con la policía.
- Que el contra-interrogatorio de las víctimas por la defensa sea pre-grabada en un DVD, conducido justo después de su primera entrevista con la policía.
- Que un intermediario profesional capacitado deberá acompañar al testigo a lo largo de sus pruebas para asesorar al tribunal cuando las preguntas sean inapropiadamente complicadas, y para ayudar al testigo a comprender las preguntas y formular cuidadosamente sus respuestas.
- Que la defensa presente por escrito todas las preguntas que desea dar a conocer al testigo y el Juez de sentencia posteriormente las editará y limitará como lo vea apropiado.
- Que la duración, el contenido y la forma de entrega de las preguntas estarán estrictamente controlados por el juez de sentencia.
- No se permitirán interrogatorios agresivos.
- No se permitirán preguntas tendenciosas o complejas.

Este enfoque moderno para el tratamiento de las víctimas vulnerables ha avanzado recientemente con la introducción de lo que nos referimos como “sitios de conexión remota”. El primer sitio se abrió en Durham, en julio de 2015. Es típico de sitios similares futuras propuestas. El sitio se encuentra a

algunas millas del edificio de la corte. Se encuentra en una tranquila ubicación semirural. Proporciona un entorno cómodo, tranquilo, tranquilizador y de apoyo con personal capacitado, muebles, decoración neutra, con té (té porque estamos en Inglaterra), café, chocolate caliente, galletas y juegos de ordenador para personas jóvenes.

El sitio cuenta con tres elementos fundamentales: En primer lugar, un examen médico y una habitación para la recolección de evidencia. En segundo lugar, salas de entrevistas confortables equipadas con cámaras para grabar la evidencia de las víctimas a DVD para su uso en pruebas y, en tercer lugar, un enlace de televisión en directo de la cámara a la sala de audiencias.

A modo de ejemplo, un caso típico: una mujer víctima que llama a la policía será llevada a este sitio para un examen médico y luego conducida a casa o a un lugar de seguridad. Uno o dos días más tarde ella será recogida y llevada al sitio, donde será entrevistada y se grabará su evidencia en DVD. Algunas semanas o meses más tarde en el día del juicio se mostrará al jurado el DVD con su pregrabación y ella volverá al sitio —lugar ya familiar y en donde ella se siente tranquila— para poder responder a preguntas por medio de la televisión en directo que enlaza a la sala de ensayo.

Por ello, hemos llegado en Inglaterra y Gales a la posición en donde las víctimas vulnerables de delitos como la esclavitud, la trata y el abuso sexual, pueden participar plenamente en el proceso de justicia criminal sin tener, como en el pasado, que entrar a un hospital, a una estación de policía o a un edificio de la corte. Los sitios tienen la ventaja adicional de que pueden vincularse a cualquier sala de audiencias en el país para que las víctimas no tengan que salir de un alojamiento seguro para asistir a los juicios.

Los más propensos a ser víctimas son generalmente más jóvenes que el poder judicial. Esta generación más joven está perfectamente acostumbrada y cómoda con la comunicación cara a cara a través de los medios sociales. Puede ser radical para algunos miembros del poder judicial recibir las pruebas de esta manera; pero no suele ser radicalmente raro para las víctimas. Las evaluaciones oficiales de las medidas han sido universalmente positivas. Los que suelen llevar a cabo juicios con testigos

vulnerables pueden ver lo eficaz de estas medidas en el trabajo en una base diaria.

Habiendo explicado las medidas que hemos introducido para ayudar a las víctimas vulnerables a presentar mejor su evidencia en el juicio, debo añadir que si el acusado se declara culpable o es declarado culpable tras el juicio, se invita a las víctimas a leer en voz alta, o formular por escrito, declaraciones que describan el impacto que ha tenido el delito sobre ellos. Por una variedad de razones, incluyendo asistencia a la recuperación y sabiendo que su sufrimiento ha sido reconocido por el tribunal, las víctimas agradecen enormemente esta oportunidad. Para determinar y dictar la sentencia, el juez de sentencia siempre tomará en cuenta y se referirá al impacto sobre las víctimas.

El Presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, *Lord Thomas de Cuming*, me solicitó platicarles sobre el trabajo llevado a cabo en nuestra jurisdicción en nombre de las víctimas vulnerables. Nuestro poder judicial está muy orgulloso de lo que se ha logrado hasta la fecha.

Si en sus respectivas jurisdicciones ustedes han introducido medidas que no he mencionado, los invito a compartirlas conmigo durante esta cumbre, que se presta para discusiones informales para poder considerar adoptarlas en Inglaterra y en Gales. Así mismo, estaría encantado de discutir con más detalle las medidas que he descrito.

El gran autor italiano, Primo Levi, escribió sobre las víctimas en *Si Este Hombre*: “Si hablamos no nos escucharán, y si escuchan, no van a entender”. Las víctimas han estado hablando con nosotros en los tribunales durante años. Siempre hemos escuchado. Pero tal vez sólo ahora que las víctimas pueden contar sus historias completas y con claridad, les hemos garantizado que no sólo son escuchados sino también comprendidos.

La Ley de la Esclavitud Moderna 2015: Evaluando el Efecto

Philip Norton de Louth
Académico del Reino Unido

Es un placer seguir a la baronesa Butler-Sloss y al Juez Prince. Ellos han descrito las normas generales de la Ley de la Esclavitud Moderna. Mi propósito no es hacer referencia a lo que está en la ley, sino más bien la necesidad de contar con un medio para evaluar las medidas legislativas una vez promulgadas. Esto es especialmente relevante en el caso de la Ley de la Esclavitud Moderna. No podemos hacer frente a la esclavitud moderna sin una base legal. Ustedes, como jueces, no pueden actuar sin una base tal. Los fiscales sólo pueden juzgar lo que está prohibido por la ley. De usted depende que la ley sea apta para su propósito.

Los legisladores buscan poner en práctica lo que quieren lograr a través de las palabras de un acto legislativo, pero no pueden saber con certeza qué efecto tendrá la medida. Puede haber problemas de interpretación si el idioma se expresa de modo general en lugar de términos específicos. Como un juez británico distinguido, Sir Rodger de Earlsferry, ha observado, si el Parlamento en el Reino Unido establece los principios detrás de la legislación en términos generales: *“los tribunales podrían no ser siempre capaces de interpretar esos principios tan claramente como para determinar con precisión y consistencia los casos que deben ser considerados dentro de o fuera de su alcance”*.¹ Algunas medidas no funcionan como era su intención: el significado puede ser benigno, pero la redacción puede ser deficiente. Algunas medidas pueden resultar desastrosas, otras simplemente tienen poco o ningún efecto. Incluso si la redacción es clara, puede haber problemas con los recursos para la ejecución.

A medida que el texto de introducción de esta cumbre es observado, una pregunta sin respuesta adecuada se presenta de nuevo en nuestras reuniones:

¹ Lord Rodger of Earlsferry, “The Form and Language of Legislation”, in D. Feldman (ed), *Law in Politics, Politics in Law* (Oxford: Hart Publishing, 2013), p. 77.

¿cuántos traficantes, proxenetas y traficantes de droga son capturados y el número de las ganancias mal habidas han sido confiscados y dirigidos hacia antiguas víctimas y la sociedad?

Para ser aprehendido y tener ganancias ilícitas confiscadas, tiene que haber una base legal, pero la base jurídica necesita ser precisa y el grado en que la ley logra lo que se pretende tiene que ser evaluada. Una Ley de Reino Unido aprobada en el 2000 —Ley de los Poderes de los Tribunales Penales— hizo posible proporcionar reparación a las víctimas, pero el número de órdenes de reparación realizadas en los casos de trata y tráfico humano en 2015 fue baja. En vista de ello, la Ley no estaba logrando lo que los legisladores destinaron a lograr.

Para muchos legisladores, y esto sin duda ha tendido a ser el caso en el Reino Unido, el éxito en términos legislativos se ha medido en términos de conseguir una medida en el libro de estatutos. El éxito es conseguir que pase. No se mide en términos de si se logra lo que se pretende conseguir. Así pues, el proceso legislativo ha tendido a terminar en la sanción real que se da a un proyecto de ley.

Eso ha cambiado en los últimos años, reconociendo la necesidad de evaluar las medidas una vez que están en vigor. Desde entonces ha habido movimiento para implementar, para ver el proceso legislativo como algo más que la deliberación y aprobación concedida a una medida por el legislador, y para verla más bien como un proceso de tres etapas: la pre-legislativa, la legislativa, y la postlegislativas. Se ha prestado atención en mirar las medidas de borradores, antes de ser presentados formalmente al Parlamento, para evaluar si se ha logrado su propósito cuando están en vigor.

Este enfoque más holístico se ha aplicado sobre todo en relación con el Acta de Esclavitud Moderna promulgada el año pasado. Como dijo John McEldowney en sus comentarios de apertura en esta cumbre, y la baronesa Butler-Sloss ha reiterado, ésta Ley es la primera de su tipo en Europa. Teniendo en cuenta que el Acta es la primera de su tipo es especialmente importante asegurarse de que logre su objetivo. Existen dos problemas particulares en cuanto a esta medida:

En primer lugar, el hecho de que es la primera de su tipo. Si la Ley debe de ser una referencia, es necesario tenerla bien realizada, considerando que no se tiene con que probarla en su contra.

En segundo lugar, la naturaleza del problema hace que sea difícil evaluar la eficacia de la medida. Como ha señalado el proyecto de ley de La Evaluación del Impacto de la Esclavitud Moderna: “La esclavitud moderna es un crimen oculto en su gran medida”.² Existe la dificultad de definir el tema y no hay manera de saber la magnitud del problema. Podemos obtener datos bastante objetivos sobre los delitos como el asesinato, pero para la extensión de la esclavitud moderna debemos confiar en las estimaciones, dependiendo por supuesto de cómo definimos el término y, por tanto, lo que constituye un delito.

Por lo tanto, es crucial evaluar los efectos de la Ley una vez que haya tenido la oportunidad de implementarse. Para citar La Evaluación de Impacto una vez más, la esclavitud moderna requiere de un enfoque claro del Gobierno a través de medidas legislativas y no legislativas para garantizar una respuesta eficaz. Pero, ¿cómo sabemos si la respuesta ha sido eficaz? El objetivo de la política de la Ley de la Esclavitud Moderna es reducir la incidencia de la trata de personas y la esclavitud moderna en el Reino Unido. La cuestión no es el objetivo sino la determinación de si se ha alcanzado.

Como dijo la secretaria de Interior, Theresa May, en la tercera lectura del proyecto de Ley de la Esclavitud Moderna “si se quiere ser aplicada con eficacia necesitamos esfuerzo concertados de todos los implícitos”.³ La Promulgación, por ende, es una condición necesaria pero no suficiente. Una de las motivaciones para la introducción del proyecto de ley fue el “régimen de condena excesivamente indulgente”.⁴ Pero, ¿qué mecanismo está en su lugar para determinar que la Ley de la Esclavitud Moderna se está aplicando de manera efectiva, que las disposiciones son claras y están demostrando ser ejecutables?

² Ley de Esclavitud Moderna, Impact Assessment (IA), 30/10/2014, p. 1.

³ Ley de Esclavitud Moderna, Impact Assessment (IA), 30/10/2014, p. 1.

⁴ HC Hansard, 4 November 2014, col. 790.

Dada la importancia y la complejidad de la cuestión, la Ley de la Esclavitud Moderna fue precedida de un estudio basado en la evidencia del problema y continuada por el control de la etapa pre-legislativa. Hubo un Comité de Revisión de la Ley de Esclavitud Moderna, presidido por el diputado Frank Field —quien asistió a una de las cumbres anteriores celebradas aquí— en donde se tuvo pruebas aportadas por expertos antes de la publicación del proyecto de ley. Esto fue seguido por la designación de un Comité Conjunto de ambas Cámaras del Parlamento para examinar el proyecto de ley. Hubo así un intento dedicado y prolongado para asegurar que el proyecto de ley fuese elaborado de manera efectiva con el fin de abordar el daño que se pretendía abordar, identificando el daño en sí.

El siguiente paso, ahora que la Ley está en el libro de estatutos, es determinar si se está logrando lo que se pretende conseguir. Este es el mensaje clave que deseo transmitir. Es importante no sólo promulgar leyes claras para combatir la esclavitud moderna, sino también para poner en marcha un mecanismo para verificar que se está logrando su propósito y si no es así, identificar los cambios necesarios.

En el Reino Unido, tenemos el mecanismo en la forma de la revisión post-legislativa, introducida en 2008. En virtud de esto, la mayoría de las leyes del Parlamento se revisan de cada tres a cinco años después de la promulgación por el Departamento de Gobierno patrocinador para determinar si han alcanzado su finalidad prevista. La Ley de la Esclavitud Moderna será revisada en algún momento entre 2018 y 2020 por el Departamento de Gobierno correspondiente, en este caso el Ministerio de Interior y la opinión pública.

Las evaluaciones post-legislativas, llevadas a cabo por el Departamento de Gobierno, se envían a los comités departamentales seleccionados, es decir comités de investigación permanentes, en la Cámara de los Comunes (Cámara Baja del Parlamento del Reino Unido), que entonces pueden elegir llevar a cabo sus propias investigaciones con base en la luz de los comentarios.

⁵ HM Government, Report of the Internal Review of Human Trafficking Legislation, Mayo 2012, p. 4.

⁶ Select Committee on Adoption Legislation, House of Lords, Adoption: Pre-Legislative Scrutiny, 1st Report, Session 2012-13, HL Paper 94; Adoption: Post-Legislative Scrutiny, 2nd Report, Session 2012-13, HL Paper 127.

Debido a las exigencias con el tiempo, pocos comités selectos conducen evaluaciones postlegislativas. Sin embargo, la Cámara de los Lores ha comenzado una práctica anual seleccionando ciertos actos del parlamento y nombrando comités *ad hoc* para revisar y determinar si se ha logrado lo que se pretendió alcanzar. La Cámara ha tenido comités que examinan la legislación relativa a la adopción de niños,⁵ las preguntas del público,⁶ la salud mental,⁷ la extradición⁸ y la discapacidad⁹. El valor de estas investigaciones es que son a fondo (cada uno cubre una sesión parlamentaria anualmente), dando lugar a informes publicados (incorporando evidencia y recomendaciones), y son emprendidas por los miembros de la Cámara especialistas o con conocimientos relevantes del tema. Por ejemplo, la baronesa Butler-Sloss, ex Presidente de la División de Familia del Tribunal Superior, presidió el de adopción.

La Ley de la Esclavitud Moderna sería un candidato ideal para la revisión postlegislativa evaluada por la Cámara de los Lores (Cámara Alta del Parlamento del Reino Unido) y espero que la Cámara designe un comité de este tipo una vez que la ley ha tenido tiempo para surtir efecto. Esto complementará la revisión llevada a cabo por el Ministerio de Interior y permitiría a la Cámara de los Lores recurrir a expertos en la materia.

Será valioso ver cómo el primer acto de este tipo —la Ley de la Esclavitud Moderna— se está aplicando y en qué medida se están alcanzando los objetivos previstos, y la medida en la que debe modificar en función de su evolución.

Sin embargo, mi propósito no es principalmente para llamar la atención sobre esta eventualidad, sino más bien hacer hincapié en la importancia de contar con un mecanismo para la revisión; lo ideal es una revisión periódica de la ley para combatir la esclavitud moderna. Para repetir mi punto, la promulgación de la ley es necesaria, pero no es suficiente. ¿Acaso la Ley está obteniendo los resultados que pretendió alcanzar? ¿Cómo saber si lo está logrando? ¿Cuáles son las normas por las cuales se está midiendo el éxito? ¿Se puede mejorar la Ley?

⁷ Select Committee on the Inquiries Act 2005, House of Lords, The Inquiries Act 2005: post-legislative scrutiny, Session 2013-14, HL Paper 143.

⁸ Select Committee on the Mental Capacity Act 2005, House of Lords, Mental Capacity Act 2005: post-legislative scrutiny, Session 2013-14, HL Paper 139.

⁹ Select Committee on Extradition Law, House of Lords, The European Arrest Warrant Opt-in, 1st Report, Session 2014-15, HL Paper 63; Extradition: UK law and practice, 2nd Report, Session 2014-15, HL Paper 136.

Concluyo recomendando no sólo que las naciones tienen en marcha mecanismos para evaluar la eficacia de las leyes contra la esclavitud moderna, sino también compartiendo con otros lo que son esos mecanismos. Pasando leyes para combatir la esclavitud moderna es el inicio del proceso para hacer frente a los daños causados. Como es claro para esta cumbre, esto no es el fin de este proceso.

La Ley es un solo paso. El Rol de los Jueces en la Investigación de los Delitos de Trata de Personas

Susana Medina de Rizzo

Argentina

El delito de trata de personas con fines de explotación sexual y/o laboral es un delito global, transnacional, complejo, grave, con muchas y muy variadas aristas, que deja profundas huellas en el alma y en el cuerpo de quienes lo padecen, que en su mayoría son mujeres y niñas, sin instrucción, solas y pobres.

Por ello, desde la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, en septiembre de 2010 comenzamos un programa de capacitación y perfeccionamiento destinado a magistrados y funcionarios, para estudiar la legislación internacional y nacional existente en la materia. El programa comenzó en la provincia de Misiones, que según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) fue declarada el área principal de reclutamiento de mujeres en la Argentina para su posterior explotación sexual y laboral, mientras que las provincias de destino más comunes son Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego y las provincias del NOA.

Para tener una idea de la dimensión del negocio que representa la trata de personas, estamos hablando de ingresos anuales por 32 000 millones de dólares en todo el mundo, el 85 % de ese dinero proviene de la explotación sexual. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 2006), *“siendo Argentina un lugar de origen, tránsito y destino para las víctimas de trata, alrededor de unas 500 000 personas participan directa o indirectamente de este delito”*. No es solamente un flagelo exclusivamente latinoamericano, a nivel mundial, el tráfico de personas ocupa el tercer lugar como negocio ilegal, después del tráfico de armas y de drogas.

No hay cifras oficiales, pero se estima que entre 600 000 y 800 000 mujeres, hombres, niñas y niños, son traficados a través de las fronteras internacionales cada año. De estos, aproximadamente 80% son mujeres y niñas, y hasta 50% son personas menores de edad traficadas con fines de trabajo forzoso o servidumbre sexual, o ambos a la vez.

No podemos dejar de advertir que a través de la esclavitud sexual, el cuerpo humano se convierte en un objeto de comercio para ser explotado. En las víctimas de trabajo forzoso, el cuerpo pasa a ser una máquina descartable y sustituible, cuyo lucro es de otros. En ambos casos la persona esclavizada, sometida y subyugada, es degradada al status de mero objeto para el beneficio de otro. La dignidad humana de la persona es menoscabada a su extremo, por eso consideramos que es un delito de lesa humanidad.

Analizar y debatir de modo constante la cuestión, a la vez de reconocer y concientizarnos que no estamos ante un flagelo que sólo afecta a una región, sino a los cimientos mismos de toda Nación democrática, y con vocación garantizar plenamente los derechos humanos, es una necesidad para alcanzar consensos a fin de elaborar, proponer y consolidar políticas de acción proactivas de naturaleza disuasiva, punitiva y muy especialmente de asistencia a las víctimas, para así mitigar y erradicar el flagelo social que representa la *trata de personas* en todas sus expresiones.

Tenemos que partir de una premisa, la ley es insuficiente si no se la acompaña de un compromiso social. Compromiso que requiere *a priori* de la concientización de la sociedad en su conjunto pero, muy especialmente, de los integrantes de los tres poderes del estado. Para tal cometido, además de apoyarnos tanto en las pautas normativas propias y específicas que contemplan la cuestión —leyes y protocolos—, también debemos hacerlo en estudios interdisciplinarios, en el aporte de las redes sociales y, por supuesto, en la colaboración interjurisdiccional nacional e internacional.

La trata es el camino hacia la explotación de unos sobre otros, el cual es esquematizado por la ley como un proceso que se consuma en distintas acciones: la captación o reclutamiento, el traslado o transporte, el recibimiento y el acogimiento. Es decir, un delito dinámico, complejo y multifacético, donde el perfil de la víctima en Argentina es casi exclusivamente: mujeres con fines de explotación sexual (98% de las víctimas), siendo a su vez el 30% menor (de 11 a 17 años). En nuestro país la *trata interna* como *internacional* es casi similar porcentualmente considerada atento los casos detectados.

Al estar en presencia de un delito complejo, obliga a acciones mancomunadas de instituciones gubernamentales, Organismos Internacionales, Sociedad Civil y la sociedad en general; y atento el carácter transnacional, hace

necesario un dialogo permanente entre los Estados, sean estos de origen, de tránsito o destino de las víctimas. Es por ello que es de renovado y permanente interés su debate en todos los foros y ámbitos posibles.

La concientización y compromiso social sobre la cuestión exige especialmente de los Magistrados, en cuanto sujetos que representan el despliegue del poder del estado destinado a realizar la Justicia, no quedarse en análisis legales exclamativos o programáticos, sino realizar acciones concretas, efectivas y eficaces que tengan como objetivo alcanzar y afianzar el “bienestar general” que establece el Preámbulo de la Constitución Nacional, sin que el federalismo y las fronteras nacionales sean una barrera que impida la realización plena del valor justicia y dignidad humana.

La Justicia para las Víctimas de los Delitos de Trata y Formas de Explotación de Personas en México

María Teresa Paredes Hernández

México

La trata y las Formas de Explotación de Personas llevan implícito el sometimiento infrahumano de la dignidad humana, por lo que las secuelas del delito son: físicas, psíquicas y permanentes, lo cual será determinado por la forma de explotación, la duración del cautiverio y el grado de vulnerabilidad de cada víctima, por ello, podemos partir de una premisa que es: “La víctima de trata, es diferente a cualquier otra víctima” y entonces enumerar cuatro grandes diferencias con relación a las demás víctimas.

Las Víctimas de Trata y de cualquier Forma de Explotación de las Personas, Constituyen el Objeto Material del Delito

En materia penal, el objeto del delito es la afectación que sufre el bien que se tutela, que generalmente recae sobre una cosa material, como el patrimonio, la integridad o la vida de las personas y en algunas ocasiones recae sobre bienes que no son tangibles, pero son exigidos como lo es la honradez del servidor público o la ética de los profesionistas.

En los delitos que se analizan, el objeto del delito recae en la dignidad del ser humano, en su esencia, pues, la delincuencia organizada utiliza métodos, cada vez más crueles y sofisticados para someter a las víctimas y así, convertirlas en mercancía.

Para entender este concepto, hablaré un poco de los Migrantes provenientes de Sudamérica y Centroamérica que fueron capturados en San Fernando, Tamaulipas desde 2010. Una vez que estaban bajo el dominio del crimen organizado, eran amenazados para formar parte del grupo delictivo, los que no aceptaban eran asesinados instantáneamente, en frente de los demás, por lo que los restantes aceptaban colaborar, y seguramente pensaban en subsistir, con la esperanza de poder escapar o ser rescatados, de volver a su país; pero los delincuentes tenían que aniqui-

lar cualquier vestigio de libertad, en esos seres humanos, así que entre el grupo que quedaba, que era la mayoría, repartían palos, un poco más grandes que un bate de béisbol y les daban la instrucción de matarse entre sí y los 10 que quedaran vivos, trabajarían para la Organización. Esto lo declaró uno de los involucrados en dichas masacres que fue detenido, al cual se le imputaba la muerte e inhumación clandestina de por lo menos 72 inmigrantes y haber asesinado y enterrado en fosas clandestinas a por lo menos 145 emigrantes.

Pero la interrogante que debemos hacernos, es cómo queda esa persona que para sobrevivir tuvo que matar a otros: ¿querrá escapar, querrá que su familia sepa dónde está? La respuesta es: ¡No!

Ese ser humano cuya vulnerabilidad se acrecentó al ser inmigrante, ha sufrido un sometimiento infrahumano, que le anula la voluntad, que le impide querer estar con su familia por vergüenza o por miedo a que les vayan a hacer algo, ahora está muerto en vida y ya no buscará más “el sueño americano, pues se ha varado en la pesadilla mexicana”.

Las Víctimas de Trata y de Cualquier Forma de Explotación de las Personas, no Confían en las Autoridades

La víctima de trata difícilmente denuncia, algunas veces porque está amenazada, o porque su grado de vulnerabilidad no le permite asumirse con tal carácter (enamoramiento, desconocimiento de otra forma de vida, no hablar o entender el castellano) pero, la mayoría de las veces, no denuncian por la desconfianza que sienten hacia las autoridades, y es precisamente el punto que debemos analizar.

La desconfianza de estas víctimas, hacia las autoridades tiene su origen en diversos factores, verbigracia:

- Como parte del sometimiento, los grupos delictivos les hacen patentes las relaciones de corrupción que tienen con diversas autoridades.
- Algunos funcionarios (Policías, Peritos, Fiscales, Jueces, Magistrados, etc.) acuden a los lugares donde las personas están siendo víctimas de trata y éstas son obligadas a “atenderlos y estar con ellos” como si fueran una tarjeta

de cortesía o una moneda de cambio.

- Algunas víctimas han escapado y han sido devueltas por la propia policía a los lugares donde las explotan.

Ha llegado a suceder que se rescatan a 14 víctimas y cuando llegan a la fiscalía, ya nada más van 7, lo que sabemos por las declaraciones de las demás. Ante esto, específicamente hemos pedido que cuando se hagan operativos, así como se hace constar la cantidad de drogas, dinero o armas encontradas, también se genere el registro del número de víctimas rescatadas.

Se ha tenido conocimiento de algunos casos de inmigrantes, en los que diversas autoridades han participado en la captura y posterior entrega para su explotación a la delincuencia organizada.

Estos son algunos de los factores que pudieren ayudarnos a comprender por qué las víctimas de trata no tienen confianza en las autoridades.

Las Víctimas de Trata y de Cualquier Forma de Explotación de las Personas no Acceden a Ver a sus Familiares, Inmediatamente, Después del Rescate

Estas víctimas, fueron humilladas y denigradas, se sienten sucias, culpables, avergonzadas. Por ello, en su mayoría, prefieren que sus familiares no se enteren de su tragedia, incluso que las den por muertas.

Por lo anterior es muy importante trabajar en su empoderamiento, en tratamientos físicos y psicológicos que les permitan recuperar su autoestima.

Las Víctimas de Trata y de cualquier Forma de Explotación de las Personas, Después del Rescate son Cuestionadas y Discriminadas por la Sociedad.

Las autoridades, la sociedad civil, los vecinos y familiares de las víctimas, cuestionan la condición de víctima, la excluyen y la re-victimizan.

En este orden de ideas, la sociedad civil puede servir como intermediaria entre la víctima y la autoridad, para lograr, empoderarlas y transmitirles la confianza que requieren, que se asuman como víctimas o que denuncien.

Lo anterior no es suficiente, ya que se requiere que los Estados implementen:

- Pena por separado de los delitos de trata de personas y de cada una de las formas de explotación.
- Medidas eficaces de protección a las víctimas directas e indirectas, así como a los testigos de estos crímenes, no debiendo perder de vista la necesidad y urgencia de dichas acciones, para combatir a la delincuencia organizada.
- Asesoría jurídica especializada, como parte de la atención integral a la víctima, para asegurar el derecho humano que ésta tiene de acceder a la justicia.
- La reparación económica obligatoria, suficiente para permitirles acceder a una nueva vida, con una carrera técnica o profesional, con un trabajo o alguna herramienta para salir adelante y reincorporarse a la sociedad.
- Atención física y psicológica especializada, pues de nada sirve que se les rescate, si no se les repara el daño emocional y físico.

Al respecto, se considera oportuno mencionar la noticia que circuló en los diarios el día 16 de mayo de este año, en la que se anunció que en Holanda se autorizó la eutanasia a una mujer que estaba afectada de sus facultades mentales, por haber sido abusada sexualmente por diez años.

El antecedente referido es preocupante para los que atendemos víctimas, pues los Estados tienen la obligación de brindar ayuda especializada, con expertos en atención a las secuelas patológicas de esos crímenes y, si por el contrario, autorizan este tipo de resoluciones, no se reparará a los seres humanos de las afectaciones sufridas, y una vez más, se les volverá a abandonar a su suerte, como se les dejó cuando fueron capturados y o explotados.

Se debe destacar la necesidad de capacitar y sensibilizar a policías, peritos, fiscales juzgadores, y sociedad civil, respecto a la complejidad de estos delitos y a la atención que deben proporcionar a las víctimas.

No omito manifestar que los sacerdotes y demás miembros de la comunidad religiosa también requieren sensibilización y capacitación, para conocer las acciones que pueden tomar para proteger a las víctimas y denunciar, ya que se han conocido casos en los que hasta sus Iglesias, en las madrugadas, llegan

niñas corriendo y pidiendo ayuda, pero atrás de ellas, algunas veces, también llegan los delincuentes.

En la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se concluyó que la trata de personas ocupaba el tercer lugar entre los delitos que mayor ganancia re-ditúan al crimen organizado, por lo que se elaboraron diversos instrumentos internacionales para combatir a estas mafias, debiendo destacar el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo) que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

El origen de la trata de personas, es la compra-venta de seres humanos, pero el artículo 3º del Protocolo de Palermo la define como los medios preparatorios que se realizan antes de la explotación de una persona, es decir, no es necesario que ésta se consume, es suficiente con que se acredite que la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de una persona, es con esa finalidad.

De la interpretación armónica de los diversos instrumentos emitidos por la ONU para la aplicación del Protocolo de Palermo, cada forma de explotación debe ser castigada como delito autónomo y enumera las siguientes:

La esclavitud

La ley mexicana define este delito como el dominio que una persona tiene sobre otra, dejándola sin capacidad para disponer libremente de su propia persona y de sus bienes. En principio, pareciere imposible que en pleno Siglo XXI, un ser humano se encontrará en la situación descrita; sin embargo, hace poco tuvimos el rescate de una persona que duró 30 años privada de su libertad y resulta necesario narrar este caso, para comprender los términos de esclavitud.

Lupita era una niña de 10 años, indígena por pertenecer a la comunidad Huasteca, asentada en Veracruz; fue captada en el año de 1980, por una señora, que le pagó a una “traductora”, para que convenciera a los padres de que si permitían que se la llevara, tendría una mejor calidad de vida, los engañaron diciéndoles “que le darían educación”, les dieron un poco de dinero, un domicilio y un teléfono, como garantía de que la menor estaría bien.

La trasladaron a Tampico, Tamaulipas, donde no pudieron localizarla sus padres, pues los datos proporcionados fueron falsos, y a su corta edad, la convirtieron en la persona que hacía las actividades domésticas. Ella —todo el tiempo estuvo privada de su libertad, pues no le permitían salir— cuenta que algunas veces escapó y corrió sin rumbo, pero no conocía a nadie y las personas a las que les pedía ayuda no le entendían, ya que ella conservaba su lengua de origen y no hablaba castellano, así que se acostumbró a su nueva familia, donde nunca cobró un sueldo y fue humillada por su condición de indígena, violada por los hijos de la dueña de la casa, procreando por ello dos hijos, los cuales fueron regalados al nacer. Por no tener atención adecuada, le extirparon la matriz. Después de 30 años, se dieron cuenta que la persona que la captó ya era de edad avanzada, por lo que necesitaban que Lupita aprendiera hablar castellano, para que pudiera llamar por teléfono y transmitir recados. Además, era tiempo de que trabajara y aportara dinero para la manutención de la casa, “en compensación por los años que la mantuvieron”, por lo que fue enviada a estudiar corte y confección y fue ahí donde sus compañeras se percataron de las condiciones en que vivía y la ayudaron a escapar, pero a partir de ese momento, ella empezó a percibir la verdadera tragedia.

Como ya se había comentado, la forma de explotación, la temporalidad y el grado de vulnerabilidad son factores que determinarán las secuelas patológicas de la víctima. En el caso que nos ocupa se han conocido las siguientes: Lupita se reencuentra con sus progenitores, pero no logra sentir emociones afectivas, pues en su mente infantil asumió y procesó la pérdida de sus familiares, se sintió abandonada, excluida, refiere que su madre ya no se parece al recuerdo que de ella albergaba.

Ignora donde están los hijos que al nacer le fueron arrebatados. Actualmente tiene 43 años, su apariencia física es de una persona mayor, pero su edad psicológica es de 10 años, ello debido a que una de las secuelas en las víctimas menores de edad, es que se les afecta el libre desarrollo de la personalidad. Esto se debe a que Lupita no terminó de desarrollar su niñez, y no disfrutó, en libertad, las etapas de adolescencia, juventud, reproducción, por lo que psicológicamente no desarrolló esas facetas. En este orden de ideas puede observarse que también se le afectó su seguridad, ya que ella siente temor de salir a la calle sola, se mermó su capacidad de autodeterminación, cuando se le invita a un restaurante, ella no selecciona algún

platillo del menú, espera que otra persona escoja para pedir el mismo plato, tampoco determina en qué gastar dinero, pues durante 30 años no se le pagó, por lo que no sabe qué desearía adquirir, también evade comprar ropa, para no tener que seleccionar.

Inicialmente, pensé que se trataba de un caso más de trabajos forzados, pero sólo hasta que se convive con ella, se puede apreciar que en su conducta se tipifica que el dominio que tuvieron sobre ella la dejó sin capacidad para disponer libremente de su propia persona y de sus bienes, es decir, Lupita fue víctima de esclavitud. Eso hizo que revisara la conducta de Irene y Edith, pues ambas fueron víctimas de trata y trabajos forzados, en condiciones similares. Todas se captaron desde niñas, pertenecían a pueblos indígenas, no percibieron sueldo, fueron sometidas mediante engaños y amenazas. La conclusión fue que las tres presentan los síntomas patológicos de la esclavitud, pues perdieron la capacidad de auto determinar sobre su persona y sus bienes.

Lupita refiere: “A mí no me importa si hoy es lunes o martes, si es temprano o tarde, yo creo que no pienso”. Siente que su vida no tiene ninguna utilidad. Respecto a Dios, señala que también la abandonó, entonces nos percatamos que con las víctimas de esclavitud hay que trabajar en el empoderamiento, en el psicoanálisis y terapias especializadas para que encuentren un sentido de utilidad a la vida, un lazo de unión con sus familias y se reencuentren con su Fe. Pero este fenómeno no es aislado y nos obliga a reflexionar cuantas veces conocimos personas que hacían trabajos domésticos en una casa, nunca se casaron, no salían de vacaciones, ni de fines de semana, cuidaron a los hijos, nietos y bisnietos y lo que nunca nos preguntamos fue si sus servicios eran retribuidos con algo más que la vivienda y comida de cada día. Será que veíamos esclavos, pero no lo percibíamos como delito.

La Explotación Sexual Ajena

Debe precisarse que con la sanción de este delito no se castiga la prostitución, pues la comunidad internacional reconoce que es un fenómeno que se desarrolla en las comunidades vulnerables por falta de oportunidades, pobreza extrema, desintegración familiar, violencia, desplazamientos, etc.

Lo grave es que un tercero se aproveche de la vulnerabilidad y necesidad de un ser humano que recurre a la prostitución, para obtener un lucro o beneficio.

Muchas víctimas no asumen ese carácter, pues consideran que lo hacen voluntariamente con la finalidad de contribuir a la manutención familiar y es solo hasta que se percatan que su pareja nunca trabajó y tenía más mujeres trabajando para contribuir al gasto de la casa, pero de él. Es cuando se perciben como víctimas de explotación sexual. Esto sucede en el caso de que hayan sido convencidas mediante enamoramiento y/o seducción.

Otras, la mayoría, no denuncia que es víctima, porque no hubo convencimiento, sino sometimiento mediante violencia física o moral, que incluye amenazas. Por ello, el inciso b) del propio artículo 3º del Protocolo de Palermo, establece que el consentimiento de la víctima no excluye de responsabilidad, cuando opere una causa de vulnerabilidad, entonces debemos concluir que, para castigar los delitos de explotación, sólo se requiere probar que la víctima haya sido vulnerable; en el caso concreto, de la prostitución ajena, que un tercero obtenga el beneficio, sin tomar en cuenta que la víctima, en su caso, hubiese aceptado voluntariamente prostituirse y entregar su ganancia total o parcialmente a un tercero, o que este cobre por ella, como sucede en los restaurantes, bares, discotecas, karaokes, hoteles y otros establecimientos donde se practica la prostitución, donde los encargados o dueños son los que cobran.

La Mendicidad Forzada

La explotación por mendicidad es un tema que no queremos ver, pues usualmente hasta lo fomentamos cuando vamos por la calle y encontramos un niño de la calle, un discapacitado, una persona de edad avanzada o enferma, les damos una moneda, una fruta, o cualquier otro alimento, con eso, fomentamos la explotación de esa y otras personas, pues mientras siga siendo un negocio tener a una persona pidiendo limosna en la calle, seguirá existiendo esta forma de explotación.

Lo más lamentable, es que en muchos países no se persigue este delito y las personas que debieron cuidar a estos seres humanos vulnerables, son las que las han utilizado para obtener un beneficio.

La Extracción de Órganos

Este delito consiste en extirpar un órgano de manera ilegal, es decir se perpetra en una clínica o no, por médicos, enfermeras, practicantes o cualquier otra persona que tiene conocimientos de medicina.

Las víctimas son gentes pobres que están dispuestas a vender un órgano o aquellas que son capturadas mediante engaños o violencia.

Los Trabajos o Servicios Forzados

Este delito consiste en hacer que una persona trabaje o preste servicios contra su voluntad, es decir, obligada o sometida por alguna causa de vulnerabilidad, como estar privados de su libertad, que se les impida regresar a sus casas o países, o que puedan ir pero deban retornar por estar amenazados. Las víctimas más frecuentes en primer término son los inmigrantes y en segundo lugar los menores de edad. Ambos son capturados y obligados a trabajar en: campos, minas, fábricas, negocios, casas, o en la comisión de delitos para el crimen organizado.

La problemática para perseguir este delito es que suele confundirse con conductas de naturaleza laboral y esa confusión genera que no se castigue el delito. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que las condiciones insalubres, peligrosas o que representen desventajas para los trabajadores como son salarios bajos, serán sancionadas por autoridades de competencia laboral. Partiendo de esta premisa, cuando haya sometimiento para que la persona trabaje o preste servicios contra su voluntad, será competencia penal.

Los Matrimonios Forzados

En México hay algunos lugares donde se acostumbra, por usos y costumbres, a vender a las niñas a cambio incluso de animales. Hay países donde está permitido el matrimonio con menores, pues consideran que es una forma de asegurarles un futuro, quitándole al estado la obligación de cuidar el desarrollo de los niños.

Al respecto, hace cómo un mes salió la noticia de una niña que determinante dijo “yo no quiero casarme” y, por ello, la metieron a la cárcel, por no cumplir con el contrato que suscribió la familia.

El Reclutamiento Forzado

Los militares, los paramilitares, las guerrillas, la delincuencia organizada y los grupos armados en general, someten a menores de edad, inmigrantes y todo tipo de personas vulnerables, para que combatan en sus filas, los entrenan y obligan a matar. Ello trastorna el desarrollo de la personalidad de las víctimas y cuando el Estado los encuentra, en vez de rescatarlos, los captura y procesa penalmente, sin tomar en cuenta las excluyentes de responsabilidad que operan en su favor. No obstante lo anterior, el Protocolo de Palermo no ha sido aplicado en su totalidad por los países que lo suscribieron, en algunos sólo se castiga el delito de trata de personas, mas no las formas de explotación, lo cual genera impunidad.

Aunado a lo anterior, el crimen organizado cada vez busca nuevas formas de someter a los seres humanos a la esclavitud moderna y evoluciona en sus medios de comisión y en sus conductas delictivas, por lo que pudiéramos concluir que las conductas previstas hace 16 años por el Protocolo de Palermo ya han sido diversificadas y ahora debemos incluir las nuevas formas de explotación como son, por enumerar de manera enunciativa, mas no limitativa, los vientres de alquiler, los inmigrantes y personas mayores de edad obligados a delinquir por la delincuencia organizada, etc. También se deben analizar los nuevos medios comisivos que se utilizan para perpetrar el delito, como son los falsos activistas, los seudo defensores de derechos humanos, las redes sociales, las ofertas de trabajo engañosas, etc.

No debemos olvidar que el narcotráfico ha encontrado en la trata y las formas de explotación de personas, una ramificación a su actividad delictiva, que le genera grandes ganancias, por lo que han fortalecido sus redes.

Por último quiero compartirles que mientras elaboraba esta ponencia, vino a mi mente un pasaje de la Biblia que siempre menciono en mis ponencias, que refiere que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud a la que estaba sometido, por parte del Faraón de Egipto, y comprendí que no es una coin-

cidencia que en el Vaticano se lleve a cabo una Cumbre Mundial de Jueces contra la Trata de Personas, ya que fue al mismo liberador del pueblo, a quien Dios le entregó sus leyes, para que los demás las conocieran y cumplieran, y porque ejercía funciones de juzgador, entonces el hecho de que ustedes hayan sido convocados, yo creo que es un llamado para que juzguen con justicia, ya que si alguien puede acabar con la esclavitud, como lo hizo Moisés, son los jueces.

La Trata de Personas en la Modalidad de Pornografía Infantil

Eber Omar Betanzos Torres

Subprocurador de Derechos Humanos, PGR, México

La trata de personas es uno de los delitos de mayor impacto humano y social, afecta profundamente a las personas, violentando sus derechos humanos y privándola de las condiciones más elementales para la vida, dejando con ello una secuela indeleble que deteriora e impide el desarrollo de capacidades para vivir una vida digna. Es un delito grave ya que implica la violación a la integridad, libertad y dignidad de las personas, las víctimas de este delito son convertidas en objetos de explotación, por ello ha sido identificada como la esclavitud del siglo XXI.

Con la aprobación y entrada en vigor del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo), el 25 de diciembre de 2003, el Estado Mexicano dio un paso decisivo en la prevención y combate a la trata de personas en sus distintas modalidades.

La adhesión de México al Protocolo de Palermo constituyó el punto de partida mediante el cual se han llevado a cabo distintas acciones para combatir el delito de la trata de personas, éstas incluyen la publicación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y la instalación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

La trata de personas en México, se encuentra tipificada en el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, estableciendo que es la *“Acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación”*.

Como se puede observar, este tipo penal contiene los tres elementos establecidos por el Protocolo de Palermo en su artículo 3: conductas, medios y fines. La trata de personas es un delito complejo que puede manifestarse de muy diversas formas; es, por tanto, un tipo penal compuesto, entendido como aquel que refiriéndose a un mismo bien jurídico contiene una pluralidad de acciones previstas con distintos verbos rectores.

Cuando distintos países, entre ellos México, iniciaron su proceso de creación de leyes especiales y tipos penales sobre la materia, se pretendió abarcar en una sola redacción típica todas las conductas que podían ser desplegadas por el o los sujetos activos, toda vez que la trata de personas se entendió como un fenómeno delictivo esencialmente complejo que podía manifestarse a través de conductas aisladas o fórmulas mucho más estructuradas. Dada la falta de experiencia operativa y la inexistencia de legislación sobre el tema en otros países a tomar como ejemplo, en México se tipificaron como trata de personas conductas que no son cometidas por los tratantes propiamente dichos, sino por quienes, sin ser tratantes, se relacionan con este delito, más específicamente con el explotador.

Entre el universo de posibles víctimas de trata de personas, los grupos y personas en mayor riesgo son aquellas que sufren exclusión y discriminación, que viven condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de carácter sistemático y/o que sufren de carencias afectivas o emocionales. El perfil de las víctimas identificadas y rescatadas hasta el momento, en conjunto con distintos indicadores económicos y sociodemográficos, confirman que las mujeres, particularmente las niñas, adolescentes y jóvenes, son las más susceptibles a ser víctimas de este delito.

Según el “Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México”, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, establece que la posición geográfica del país lo convierte en escenario de una intensa dinámica migratoria, agravando así el delito de trata de personas y conllevando a que el país sea considerado como un territorio de tránsito, origen y destino.

La Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas determinó realizar, por encargo a la

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México.

En el citado diagnóstico se destaca que el perfil de las víctimas identificadas y rescatadas hasta el momento, en conjunto con distintos indicadores económicos y sociodemográficos, confirman que las mujeres, particularmente las niñas, adolescentes y jóvenes, son las más susceptibles a ser víctimas de este delito.

Un foco rojo de particular preocupación es el caso de niñas y mujeres indígenas en todo el país, particularmente en la región sur-sureste donde las condiciones de empleo, migración y acceso a la educación son más precarias y desfavorables que para el resto de la población femenina en general.

La trata de personas con fines de explotación sexual incluye la explotación para fines de prostitución ajena y, en el caso de los menores de edad, la compra-venta de niños y niñas, así como adopciones ilegales para distintos fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía infantil.

Los actos de violencia sexual, que a menudo se presentan acompañados de otras formas de violencia, van desde el contacto físico directo con la exposición no deseada a lenguaje sexual e imágenes. “La violencia sexual” se utiliza a menudo como un término genérico para cubrir todos los tipos de victimización sexual, incluyendo las formas de explotación.

El artículo 16 de nuestra Ley General en la materia establece que se impondrá una pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil días de multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los materiales resultantes, al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, con fines sexuales, reales o simulados, con el objeto de producir material a través de video grabarlas, audio grabarlas, fotografiarlas, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, y se beneficie económicamente de la explotación de la persona.

Si se hiciere uso de la fuerza, el engaño, la violencia física o psicológica, la coerción, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, las adicciones, una posición jerárquica o de confianza, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra o cualquier otra circunstancia que disminuya o elimine la voluntad de la víctima para resistirse, la pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad.

Se impondrán las mismas sanciones (15 a 30 años), a quien financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o comparta, por cualquier medio, el material a que se refieren las conductas anteriores.

Para el caso de las personas que almacenen, adquieran o arrienden para sí o para un tercero, el material a que se refiere el artículo anterior, sin fines de comercialización o distribución, se les impondrán pena de 15 a 20 años de prisión.

Los grupos y redes criminales que se dedican a los delitos vinculados con la trata de personas presentan cambios constantes en sus estructuras delictivas, los cuales aprenden, innovan y adaptan. Existen nuevas herramientas, como el internet, que pueden potenciar el *modus operandi* de los tratantes y facilitar el reclutamiento de víctimas que no necesariamente responden a los perfiles que han sido identificados en situación de mayor riesgo.

Existe una serie de actividades que a través de esta herramienta se practican tales como las sociales, entretenimiento, financieras, comerciales y educativas; con motivo de estas actividades se presentan una serie de vulnerabilidades para todas y todos los usuarios de internet, derivado del “anonimato”, que aprovechan las personas agresoras tal como los pedófilos, pederastas y proxenetas.

El número de personas usuarias del internet en México ha evolucionado como se observa en la gráfica en donde se aprecia que en el año de 2006, se tenía un registro aproximado de 20.2 millones de usuarios, para el año 2014, según la Asociación Mexicana de Internet con base en información de INEGI e IFETEL, existen 53.9 millones de usuarios, teniendo de este total un 38% de niñas, niños y adolescentes usuarios de entre 6 a 18 años de edad.

Además del número de usuarios es importante destacar que el tiempo promedio del internauta es de 6 horas y 11 minutos.

En la siguiente gráfica se observan los hábitos del uso del internet con los siguientes porcentajes: el envío o recepción de mails con un 73%, el acceso a redes sociales 85%, la búsqueda de información con un 78% y el uso de mensajería instantánea con 64%, destacando que 6 de cada 10 internautas se conectan a través de su Smartphone y el que 9 de cada 10 internautas acceden a alguna red social.

La SYMANTEC es una corporación internacional que desarrolla y comercializa software para computadoras, particularmente en el dominio de la seguridad informática. En una encuesta realizada en un foro, reveló que las y los niños hacen cosas que sus padres no permitirían; que el 21% de las y los niños entrevistados han tenido poca experiencia con material inapropiado, que los ha hecho sentirse incómodos; que las y los niños conocen más acerca de la tecnología.

Los datos graves que desprende esta encuesta fue que el 23% de las y los niños han tenido algún contacto con personas extrañas por internet, incluso el 7% aseguró haber conocido a algunas de esas personas extrañas. Otros datos de la encuesta arrojan que el 63% sabe cómo ocultar a sus padres lo que hacen en línea, que las adolescentes han enviado o publicado en línea fotografías o videos de ellas mismas desnudas o semidesnudas; 52% de los adolescentes han intercambiado información, incluida fotografías privadas y su descripción física, con personas que no conocen y el 32% de los adolescentes fueron intimidados u hostigados en línea; sin embargo menos de la mitad de esos adolescentes no se lo dijeron a sus padres u otro adulto.

Algunas estimaciones sugieren que más del 50% de los delitos cometidos vía internet se relacionan con la pornografía y la trata de menores de edad con fines de explotación sexual. Se estima que cada mes, al menos 100 niños se vuelven víctimas de las redes dedicadas a estos delitos.

El uso de internet como herramienta de enganche podría no sólo incrementar el potencial de los tratantes para reclutar víctimas sino para expandir la vulnerabilidad a otros grupos socioeconómicos que hasta ahora no han sido tan afectados por este fenómeno delictivo.

El internet ha permitido la proliferación y operación de redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con otros fines, además de la prostitución ajena, como lo demuestra el caso de algunas redes de pornografía infantil que han sido desmanteladas. El internet no sólo es usado para el reclutamiento de víctimas de trata de personas, sino para la distribución de los productos ilegales derivados de su explotación (por ejemplo: videos).

Las redes de trata de personas pueden utilizar el internet para captar víctimas con distintos fines, aunque en el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual los más expuestos son los niños y niñas que utilizan los celulares y el internet. Las formas como las víctimas son captadas a través de este medio son muy variadas pero un estudio indica que la clave está en que éstas no sientan que existe vulneración directa a su cuerpo.

Las ventajas de internet que son aprovechadas por las redes de trata de personas son el anonimato y la complicidad que brindan. Los tratantes lo utilizan para establecer un contacto o relación con potenciales víctimas (generalmente menores de edad), introduciendo paulatinamente al delito de la trata de personas, violando sus derechos humanos, de forma implícita (sutil) o explícita (demostrada).

Acciones para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en México

La Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, cuenta con una Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), creada para fortalecer el estado de derecho ante la violencia contra las mujeres y la trata de personas, a través de la investigación y persecución de los delitos federales de su competencia, la protección y atención integral a las víctimas y la creación de políticas públicas para combatir estos delitos.

La FEVIMTRA tiene como uno de sus objetivos principales ser un referente en la investigación ministerial en los delitos federales que le competen como la violencia contra las mujeres y la trata de personas, para así lograr los más altos estándares de eficiencia y efectividad en la investigación de éstos, dado que las actuaciones de la FEVIMTRA se realizan con apego a derecho y de

conformidad con la normatividad aplicable en la materia, como son la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como con los acuerdos de creación y modificación A/024/08 y A/109/12, que determinan las funciones y atribuciones de esta Fiscalía Especial.

Caso de Éxito “Yucatercos”

Uno de los recientes casos en este rubro es el que denominamos “Los Yucatercos” en donde se rescataron víctimas, principalmente adolescentes de preparatoria, con edades que oscilan entre los 15 y 17 años.

La investigación fue motivada por múltiples denuncias que se recibieron vía electrónica a través del Centro de Denuncia y Atención Ciudadana de la Procuraduría General de la República, y de manera presencial en Delegaciones de los Estados de Quintana Roo y Yucatán de la misma Procuraduría.

En este caso, fueron detectados integrantes de una red criminal que contactaban a sus víctimas a través de internet, quienes se aprovechaban de su confianza, solicitándoles el envío de fotografías en actos de exhibicionismo corporal con fines lascivos y sexuales, una vez obtenidas las fotografías, éstas eran subidas a una página de internet para posteriormente solicitar dinero a cambio de eliminar dichas imágenes, las víctimas eran principalmente originarias de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en México.

La Procuraduría General de la República, a través de la FEVIMTRA, en trabajo conjunto con la División Científica de la Policía Federal, realizaron exhaustivas investigaciones técnicas en páginas de internet y redes sociales; y ejecutaron medidas cautelares autorizadas por Jueces Federales Penales Especializados, como intervenciones de llamadas telefónicas y cuentas de correo electrónico, que condujeron a la identificación y ubicación geográfica de una persona del sexo masculino en la Isla de Cozumel, Quintana Roo. La División de Investigación de la Policía Federal fue la encargada de realizar las investigaciones de campo y gabinete, por lo que a través de redes de cruces y mapeo de geolocalización de líneas telefónicas, y con un despliegue de

múltiples suboficiales en los Estados de Quintana Roo y Yucatán, se logró identificar al administrador general del blog pornográfico.

Por lo que durante la noche del cuatro de mayo y las primeras horas del cinco de mayo del año en curso, se cumplimentó una orden de cateo en un domicilio ubicado en Isla Cozumel, Quintana Roo, en el que el administrador general de “yucatercos.net” habitaba; en el operativo se realizó su detención por almacenamiento de pornografía de personas menores de dieciocho años, además se aseguraron dispositivos de almacenamiento y comunicación móvil, así como las tarjetas bancarias correspondientes a las cuentas publicadas en la página de internet, que eran usadas para extorsionar a las víctimas.

Entre los dispositivos electrónicos asegurados, se encuentran cámaras fotográficas, computadoras, llaves USB, incluso una antena que servía a la persona detenida para robar la señal de internet a terceros y de esa manera no ser detectado.

A través de las intervenciones de comunicaciones de las cuentas de correo electrónico que se publicaban en blog pornográfico para que los usuarios enviaran imágenes y videos, se logró conocer que la persona que se detuvo es la misma que mantenía el control de una red dedicada a la explotación de menores de edad a través de la pornografía, pues se aseguró también en el domicilio numerario en efectivo, y se descubrió el almacenamiento de pornografía de personas menores de dieciocho años, en el teléfono celular propiedad del detenido, quien además fue identificado mediante dictámenes periciales en análisis e identificación de voz, en los que se compararon audios aportados por víctimas que recibían llamadas de extorsión, con los obtenidos con la autorización del Juez Especializado.

Por lo que hace a las víctimas que han sido identificadas y de las que se ha recabado su declaración, se les han ofrecido las medidas de protección que proporciona la Fiscalía Especial; además, se les ha proporcionado atención psicosocial y jurídica, a través de la “Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”.

Cierre

En este sentido, la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría que represento y la Fiscalía Especial para los delitos de Vio-

lencia contra las Mujeres y Trata de Personas, atendiendo los compromisos internacionales y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en lo conducente al delito de trata de personas, y en cumplimiento al Programa Nacional y a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, ha desarrollado estrategias especializadas de investigación y persecución de los delitos en materia de trata de personas, particularmente relacionados con pornografía infantil. En ese sentido se han obtenido 9 sentencias condenatorias del 2011 a la fecha, por el delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad y 10 sentencias condenatorias por el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad, obteniendo un total de 19 sentencias condenatorias en la materia.

Todos los días se infringen en todo el mundo los derechos de millones de niños y niñas, cada vez más niños y niñas son víctimas de la explotación a causa de la prostitución y la pornografía. Se trata de un problema creciente, cuya eliminación es responsabilidad de toda la comunidad internacional. Todo el mundo tiene que desempeñar su cometido para proteger a todos y cada uno de los niños, las niñas y los adolescentes contra ésta y contra todo tipo de violaciones.

Los niños y las niñas tienen un derecho fundamental: crecer en un entorno protector que les defienda contra el maltrato. Es en este entorno protector en el que las comunidades y las familias se comprometen a preservar los derechos de la infancia; en el que las leyes se ponen en vigor de manera uniforme; en el que el gobierno dedica recursos a la eliminación de la explotación de la infancia; en el que los medios de comunicación hacen hincapié en los temas importantes y ponen en tela de juicio las actitudes discriminatorias; y en el que los adultos que pasan tiempo con los niños y las niñas —los progenitores, los maestros, las autoridades religiosas, y otras personas— tienen la capacidad de reconocer las señales de maltrato y responden en consecuencia.

Grooming, Cuando tu Depredador está a Sólo un Clic

José Luis Vegas Roche

Venezuela

Venezuela ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño¹, así como también ha suscrito la Declaración del Milenio² y la Declaración de un Mundo Apropiado para los niños,³ la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela⁴ reconoce los derechos de los niños, niñas y adolescentes en su artículo 78, así como también, tratando de salvaguardar a nuestros “chamos” —como les conocemos por estos lados del mundo— nuestro país cuenta con la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.⁵

Tratando de adaptarse Venezuela a los nuevos *modus operandi* que utilizan quienes delinquen, en octubre del año 2001 entra en vigencia la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos,⁶ la cual reserva un capítulo destinado a sancionar las transgresiones cometidas en contra de los niños, niñas y adolescentes, en los cuales se advierte como medio de comisión, el uso de tecnologías de información. Así también la globalización en la cual se encuentra el mundo, y de la que por supuesto no escapa Venezuela, ha encontrado entonces la delincuencia internacional, un negocio lucrativo en los niños, niñas y adolescentes, pues la pornografía infantil, luego de las drogas y las ventas de armas, es el negocio ilícito que reporta mayores dividendos.

Frente a esos desconocidos retos delincuenciales, Venezuela se vio en la necesidad de legislar sobre unos nuevos modos de proceder que hasta ese momento no estaban reglados y es allí entonces cuando se promulga la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo⁷, la cual entre

¹ [http://www.unicef.org/venezuela/spanish/CDN\(1\).pdf](http://www.unicef.org/venezuela/spanish/CDN(1).pdf).

² <http://www.un.org/es/development/devagenda/millennium.shtml>.

³ [http://www.unicef.org/lac/Un_mundo_apropiado_para_los_ninos_y_las_ninas\(2\).pdf](http://www.unicef.org/lac/Un_mundo_apropiado_para_los_ninos_y_las_ninas(2).pdf).

⁴ <http://www.mp.gob.ve/LEYES/constitucion/constitucion1.html>.

⁵ <http://www.hsph.harvard.edu/population/trafficking/venezuela.child.07.pdf>.

⁶ <http://www.uc.edu.ve/diuc/pdf/LeyEspecialcontraDelitosInformaticos.pdf>.

⁷ http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_ley_del_org_finan_terr.pdf Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Gianni Piva, Trina Pinto y Alfonso Granadillo. Editorial Álvaro Nova. 2013.

su articulado, posee un capítulo destinado a proteger los Delitos Contra la Indemnidad Sexual, que por supuesto y conforme al tema que nos ocupa, se encuentran cobijados los niños, niñas y adolescentes.

En ocasión de nuestro ejercicio profesional, hemos tenido la oportunidad de ver en primera fila, cómo la mano criminal acecha cual “bestia”, cual “depredador” a los niños, niñas o adolescentes, para una vez que lo tenga cerca y manipulado totalmente, saciar entonces sus más bajos, viles y pérfidos instintos sexuales.

Corrían los primeros días del año 2016, cuando tuvimos conocimiento de un siniestro ataque de la “bestia”, del “depredador” a una adolescente de trece (13) años a la cual éste a mediados del año 2015 le solicitó, con éxito.

“...tener relaciones sexuales con él, puesto que si no lo hacía iba a publicar las fotos en internet, televisión y se las enviaría a mis contactos, en vista de esto y con mucho miedo de que publicara dichas fotos, accedí a verlo en su casa y a tener relaciones sexuales con él, al terminar le pregunte que si había borrado las fotos y me dijo que sí, después de esto no hablamos más hasta a principios del mes en curso del presente año que me escribió desde otra cuenta de Facebook, diciéndome que había agregado a varios de mis contactos y conocidos y que le enviaría mis fotos, si no volvía a tener relaciones con él...”

(Extracto exactamente igual a la denuncia en C.I.C.P.C).

Los funcionarios de la División de Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C) de Venezuela, al momento de tomar la denuncia, efectuaron entre otras, las siguientes preguntas:

¿Diga usted, lugar, hora y fecha en que ocurrieron los hechos que narra?
CONTESTÓ: “Comenzamos a hablar en el mes de junio del año 2015”.

¿Diga usted, desde que tiempo ha mantenido contacto con dicho ciudadano?
CONTESTÓ: “Sólo hablamos como por dos semanas durante el mes de junio de 2015”.

¿Diga usted, cómo conoció su persona al ciudadano con el cual conversó durante aproximadamente dos semanas? CONTESTÓ: “Lo conocí mediante

una solicitud de amistad que me hizo llegar por Facebook, en donde se hizo pasar por un muchacho de 13 años”.

¿Diga usted, dicho ciudadano le ha escrito de alguna otra cuenta de Facebook que no sea la mencionada anteriormente? CONTESTÓ: “Sí, me ha enviado solicitudes de varios Facebooks, los cuales he bloqueado para que no me moleste más”.

¿Diga usted, qué tipo y cuántas fotos le envió a dicho ciudadano? CONTESTO: “Le envié tres fotos íntimas”.

¿Diga usted, tiene conocimiento que el prenombrado ciudadano le haya enviado dichas fotos a otra persona? CONTESTÓ: “No sé, pero me dijo que él acostumbraba a pedirle fotos íntimas a mujeres para posteriormente estar con ellas así como hizo conmigo”.

¿Diga usted, qué tipos de amenazas le ha realizado el ciudadano XXX? CONTESTÓ: “Me dice que si no accedo a tener nuevamente relaciones con él, publicará las fotos que le envié”.

¿Diga usted, cuál es la cuenta en la red social Facebook del ciudadano XXX? CONTESTÓ: “La cuenta está identificada como XXX, pero también ha creado varias cuentas desde donde me envía solicitudes de amistad”.

¿Diga usted, a que se dedica y que edad tiene? CONTESTÓ: “Soy estudiante y tengo trece (13) años de edad”.

¿Diga usted, qué edad tenía para el momento en que mantuvo relaciones sexuales con el ciudadano en cuestión? CONTESTÓ: “Tenía doce (12) años de edad”.

Una vez en cuenta de esto, las autoridades venezolanas iniciaron las respectivas averiguaciones y luego de practicar una serie de diligencias pertinentes, se produjo la captura de una persona de veinticinco (25) años de edad, el cual meses antes había abusado sexualmente de la adolescente y que una vez más pretendía cometer su felonía.

Dicho ciudadano, quien se desempeñaba como bailarín en un reconocido teatro de Venezuela, en los actuales momentos se encuentra detenido espe-

rando el respectivo juicio oral y público a que tiene derecho todo imputado, acusado de la comisión del delito de Abuso sexual a adolescentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 260 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual contempla una pena de prisión para estos casos, de entre quince (15) a veinte (20) años.

Es necesario, remarcar, reseñar, subrayar y recalcar, que el primer contacto que se produce entre el sujeto activo y su víctima, se origina a raíz de la creación de un “perfil falso” por parte de su persona, en la red social Facebook, en donde este ciudadano se hace pasar por un adolescente de trece (13) años y de esa forma capta y logra obtener la atención de la adolescente; cautivada la víctima, es cuando a través de su *modus operandi* inicia la manipulación de ésta, hasta lograr que la misma ejecute los actos que él como “depredador” desea o aspira.

Hay que hacer la salvedad, que en este caso en particular, el “animus” o intención del agente coincidió con el resultado, pues este ciudadano logró, —luego de ganarse la confianza de la adolescente, que esta accediese a enviarle tres (3) fotos íntimas de ella— ya que, por medio de amenazas e intimidación, logró que ella mantuviese relaciones sexuales con él; en donde dicho sea de paso, hubiere quedado impune el delito cometido por este ciudadano, de no ser por la reincidencia en la cual incurrió, al tratar de coaccionarla nuevamente a que accediera una vez más a sus bajas pretensiones.

De igual manera, en el año 2014, tuvimos oportunidad de conocer una investigación que adelantaba la División de Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C), en ocasión de “una queja que había consignado en la dirección de un colegio, una representante, todo ello motivado a un problema que estaba pasando con la hija de esa señora a través de la red social Facebook”.

Como quiera que la conversación antes descrita se desarrollaba entre una madre y su hija, esta última le comentó a la progenitora:

“...que era cierto, ya que a ella le habían hecho la invitación y ella había aceptado, que era una persona que se llamaba Kimberly Dos Ramos (actriz, modelo y animadora venezolana), de la miniserie de televisión Grachi; que ella le comen-

tó que era amiga de la Directora del colegio y pensaba realizar una miniserie en el teatro del colegio y empezó a hacerle un cuestionario de preguntas acerca de todo su cuerpo, hasta llegar a los pies, en donde le pidió una foto de los pies —la cual envió—...” (Extracto exactamente igual a la denuncia).

La madre de esta niña, al llegar a su casa se conectó en la red social Facebook y se hizo pasar por la niña, y es allí cuando el “depredador” le solicita unas fotos de sus partes íntimas. Estando en cuenta la madre de la niña, de la magnitud del caso, solicita una reunión en la Dirección del colegio en donde acuden los padres de los niños y niñas involucrados y ella decide colocar la denuncia respectiva en la sede del cuerpo policial.

Entre algunas otras, la policía científica efectuó las siguientes preguntas:

¿Diga usted, lugar, hora y fecha de los hechos narrados? CONTESTÓ: “El 00 de marzo del año en curso, me percate al momento de conectarme en Facebook”.

¿Diga usted, de qué cuenta de Facebook, están escritos los mensajes? CONTESTÓ: “Es de una cuenta a nombre de Kimberly Dos Ramos”.

¿Diga usted, tiene conocimiento qué persona creó la cuenta de Facebook con el nombre Kimberly Dos Ramos? CONTESTÓ: “Desconozco”.

¿Diga usted, qué tipos de fotos esta persona le solicitó a su hija que le enviara? CONTESTÓ: “Esta persona le solicitó a mi hija varias fotos, entre ellas, fotos de los pies (la cual fue enviada), fotos oliendo la media que había usado ese día (la cual fue enviada), así como también fotos íntimas (no enviadas).

¿Diga usted, su hija acostumbra a aceptar personas desconocidas en las redes sociales? CONTESTÓ: “No, ella aceptó a esta persona por ser supuestamente de una serie de televisión”.

¿Diga usted, qué edad tiene su hija? CONTESTÓ: “11 años”.

Iniciada entonces la investigación, la policía científica venezolana, como diligencia de investigación, ofició a la compañía asentada en los Estados Unidos

de América, Facebook, solicitándole por favor le remitiera información de la cuenta del usuario Kimberly Dos Ramos, la bitácora de conexión desde su inicio hasta la presente fecha (fecha de la solicitud). La compañía Facebook, remitió a la División de Delitos Informáticos, en más de veinte (20) páginas, toda la información relacionada con la cuenta investigada, teniendo entonces los investigadores, la dirección IP, en dónde se creó la cuenta de nombre Kimberly Dos Ramos, así como también toda la data acerca de las diferentes direcciones IP utilizadas por dicha cuenta, y de igual manera las fechas y horas (incluyendo minutos y segundos) de cada vez que se conectaba la misma. Una vez llegaron los resultados de dicha diligencia, los peritos venezolanos, analizaron las diferentes direcciones IP, e iniciaron la búsqueda acerca del sitio de ubicación geográfica de las líneas telefónicas que estaban relacionadas con las direcciones IP enviadas por la compañía Facebook, así como también el nombre del suscriptor respecto de quien aparecían las diferentes líneas telefónicas comprometidas. Ubicadas las mismas y los nombres de los suscriptores, se solicitaron a un tribunal de control, a través del Ministerio Público venezolano, las diferentes órdenes de allanamiento o visitas domiciliarias.

Con las órdenes de visitas domiciliarias acordadas, los funcionarios policiales iniciaron los allanamientos, ubicando en una de las dos (2) direcciones a una familia, la cual poseía un router con la señal de wi-fi abierta, es decir, sin clave de acceso; no encontrándose ninguna evidencia de interés criminalístico en el computador perteneciente a dicha familia, interrogado sobre esto el titular de la línea telefónica, manifestó que desconocía sobre la utilización de claves para el acceso a la señal de wi-fi, pero que a partir de ese momento la colocaría. En cuanto a la otra dirección a visitar, al momento de llegar al sitio, se constató que era un local comercial destinado al uso de cyber café, sitio este en donde se arriendan por tiempo los equipos, logrando entonces coleccionar el ordenador desde donde en algún momento se conectó el “depredador”, pero, no poseyendo información acerca de sus datos personales, cosa que hasta el momento de la realización de esta investigación, se desconoce por completo.

El tema que hoy nos ocupa, está referido a la captación de niños, niñas y adolescentes, a través de las redes sociales, por parte de adultos, que se hacen pasar por adolescentes para obtener de los primeros imágenes de contenido sexual o de corte pornográfico, o en todo caso para abusar de ellos sexualmente.

La legislación venezolana, si bien es cierto que posee una amplia gama de artículos destinados a proteger a los niños, niñas y adolescentes de los ataques que puedan sufrir en delitos contra la indemnidad sexual, no es menos cierto que la figura delictiva denominada *grooming*, según nuestro punto de vista, no está recogida de manera expresa en nuestra legislación.

Citaremos algunos artículos relacionados con la protección a niños, niñas y adolescentes, a los fines de afianzar nuestra teoría de que no existe artículo alguno que de manera expresa sancione la actividad del *grooming*, en Venezuela, en este sentido iniciaremos con la ley de leyes, es decir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; continuaremos con la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ley especial que protege a todos los menores de dieciocho (18) años, edad esta que es la legalmente establecida en nuestro país para considerar a una persona mayor de edad; luego estudiaremos la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos, que es una ley novísima en cuanto a la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información y por último trataremos los artículos referentes a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo, que son las normas que guardan estricta relación con el tema en particular que hoy nos ocupa.

Así las cosas, iniciamos entonces la transcripción de los artículos relacionados con el tema:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)

Artículo 78. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa, y un ente rector nacional dirigirá las políticas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual data de 1990, recoge entonces de manera expresa en un capítulo denominado “De los Derechos Sociales y de las Familias”, la protección que en teoría debe brindar el Estado a todos los niños, niñas y adolescentes que residan o estén de tránsito en Venezuela.

Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA)

Dicha ley nació con el objetivo de regular los derechos y garantías, así como los deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes, quienes antes de la promulgación de la referida norma, no tenían —en el caso de Venezuela— derecho alguno, así como tampoco, ninguna responsabilidad en caso de la ejecución de hechos constitutivos de delitos.

Artículo 33. Derecho a ser protegidos y protegidas contra abuso y explotación sexual. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos y protegidas contra cualquier forma de abuso y explotación sexual. El Estado debe garantizar programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de abuso o explotación sexual.

Se colige del artículo anterior la obligación que posee el Estado venezolano en dar oportuna respuesta a los niños, niñas y adolescentes que hayan resultado en víctimas de abuso o de explotación sexual. Sin embargo, es oportuno reseñar que aún cuando existen programas, instituciones, personas así como planes destinados en dar atención integral a los martirizados; los mismos —en nuestro criterio— dada la situación político-social que vive nuestro país, se encuentran de manera muy incipiente, pues aun cuando nuestra LOPNA data del año 2000, específicamente del 01 de abril de ese año, con una última reforma de fecha 08 de junio del año 2015, no ha sido verificado un significativo avance en este sentido, pues el Estado, tanto a nivel nacional, estatal o municipal, no le presta la atención debida orientada a tratar de dar óptima atención a las víctimas de abuso o de explotación sexual, lo que indica entonces que al fin del camino, son los padres o representantes, quienes acudiendo a centros de atención de carácter privado, acceden a los tratamientos indicados para así tratar de minimizar las secuelas del ataque recibido.

Artículo 258. Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Quien fomenta, dirija o se lucre de la actividad sexual de un niño, niña o adolescente será penado o penada con prisión de cinco a ocho años. Si el o la culpable ejerce sobre la víctima autoridad, Responsabilidad de Crianza o vigilancia, la prisión será de seis a diez años. Si la o las víctimas son niñas o adolescentes, o en la causa concurren víctimas de ambos sexos, conocerán los Tribunales Especiales previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conforme el procedimiento en ésta establecido.

Acá observamos con meridiana claridad, que la letra del artículo sanciona a quien promueva, tutele o se aproveche económicamente con la actividad sexual de un niño, niña o adolescente. De igual manera es preciso en cuanto a la pena que deberá purgar quien resultare responsable de ejecutar los supuestos antes indicados siendo responsable de su crianza o aquel que ejerciere vigilancia sobre la víctima, es decir lo preceptuado en este sentido es un agravante de la actividad desplegada por el agente o sujeto activo. Así también, no deja lugar a dudas sobre cuáles serán los tribunales que conocerán de la causa, en el supuesto de que las víctimas resultaren ser de ambos sexos.

Artículo 259. Abuso sexual a niños y niñas. Quien realice actos sexuales con un niño o niña, o participe en ellos, será penado o penada con prisión de dos a seis años. Si el acto sexual implica penetración genital o anal, mediante acto carnal, manual o la introducción de objetos; o penetración oral aún con instrumentos que simulen objetos sexuales la prisión será de quince a veinte años. Si el o la culpable ejerce sobre la víctima autoridad, Responsabilidad de Crianza o vigilancia, la pena se aumentará de un cuarto a un tercio. Si el autor es un hombre mayor de edad y la víctima es una niña, o en la causa concurren víctimas de ambos sexos, conocerán los Tribunales Especiales previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia conforme el procedimiento en ésta establecido.

Dicho apartado, recoge la sanción a imponer al sujeto activo que desarrolle aquella conducta en donde, ya no fomenta, dirige o se lucra con la actividad sexual de un niño, niña o adolescente, sino que ejecuta o participa de cualquier manera en la ejecución de un acto sexual con tales sujetos pasivos. De igual forma se pueden apreciar los agravantes de tales conductas, en caso de ser probada su realización de tal manera. Se desarrolla de igual forma cuáles tribunales tendrán conocimiento de aquellas causas en donde la víctima sea

una niña y su agresor un sujeto mayor de edad; así también en cuál juzgado se ventilará el caso, en el supuesto de ser víctimas de ambos sexos.

Artículo 260. Abuso sexual a adolescentes. Quien realice actos sexuales con adolescente, contra su consentimiento, o participe en ellos, será penado o penada conforme el Artículo anterior.

El artículo precedentemente descrito, señala cómo se debe actuar en los supuestos en los cuales se ejecuten actos de abuso sexual contra adolescentes; en contra de su consentimiento, o en aquellos supuestos cuando de cualquier forma participe en tales.

Ley Especial contra los Delitos Informáticos

La experiencia venezolana, o en todo caso, la historia de nuestro país con respecto a un primer contacto con los delitos informáticos, se ubica en la época en la cual “clonaban” los celulares (1990), y así un usuario de una línea móvil, que no tenía contactos por ejemplo en Argentina, Colombia, Dinamarca, España, entre otros o incluso en algunas regiones geográficas de la misma Venezuela, observaba al fin de mes (momento del pago) como sus consumos se habían acrecentado notablemente. Ello motivó a las empresas telefónicas a invertir en materia de seguridad.

Luego surgió otro evento que sin duda alguna colaboró con la puesta en vigencia con la ley *in comento* y que hoy estudiamos, Se trató de la clonación masiva de tarjetas de crédito y de débito. Esta segunda incursión motivó un esfuerzo mayor de los órganos de investigación penal y también de las instituciones emisoras de dinero electrónico, a los fines de prevenir, sancionar y erradicar este flagelo. Ahora bien en el punto específico de nuestro tema, la ley en cuestión, también regló sobre la protección de niños, niñas y adolescentes, cuando en un Capítulo de dos artículos refleja cuanto sigue:

Artículo 23. Difusión o exhibición de material pornográfico. Todo aquel que, por cualquier medio que involucre el uso de tecnologías de información, exhiba, difunda, transmita o venda material pornográfico o reservado a personas adultas, sin realizar previamente las debidas advertencias para que el usua-

rio restrinja el acceso a niños, niñas y adolescentes, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias.

En el presente artículo se trata de proteger a los niños, niñas y adolescentes a que éstos accedan a contenido de material de índole sexual reservado al consumo de personas adultas, por lo que la pena a imponer sería a los sujetos activos que pongan a la vista, propague, traspase o comercialice, dicho material pornográfico, sin haber realizado las debidas advertencias para que el usuario limite, cerque o confíne, la posibilidad de permitir a estos sujetos procesales protegidos, la entrada o acceso a dicho material.

Artículo 24. Exhibición pornográfica de niños o adolescentes. Toda persona que por cualquier medio que involucre el uso de tecnologías de información, utilice a la persona o imagen de un niño, niña o adolescente con fines exhibicionistas o pornográficos, será penada con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

La esfera de hechos que pueden ser subsumidos dentro del precitado artículo, se circunscribe a sancionar a cualquier sujeto que utilizando como medio de comisión, el uso de tecnologías de información, haga entonces uso de la efigie o la propia persona de un niño, niña o adolescente, con fines explícitamente exhibicionistas o pornográficos, ejecuta entonces el tipo penal de exhibición pornográfica de niños o adolescentes.

Así las cosas, vemos como se trata de proteger a los niños, niñas y adolescentes, a que sean utilizados o en todo caso manipulados a ejecutar actos que pueden eventualmente ser manejados para lucrarse, pues los mismos tienen un corte o un contenido implícito o explícito de pornografía infantil.

En el entendido, de que existe una alta demanda en el consumo de estos materiales de índole sexual por parte de adultos alrededor del mundo, coexiste paralelamente a la autopista de la información conocida generalmente por todos, la “deep web” o internet profunda, invisible u oculta, que consiste en un conjunto de sitios web a los cuales no es posible el acceso a través de los servidores convencionales (google, yahoo, bing, safari, entre otros), ello obedece a que la internet superficial se compone de páginas estáticas o fijas, mientras que la internet profunda, está compuesta de páginas dinámicas.

Existen varias formas para acceder a la “Deep web”, sin embargo uno de los más comunes es utilizando el navegador “web Tor”, todo ello para poder tener acceso al material censurable de explotación sexual infantil, entre otras cosas.

Como quiera que la mayoría de los países del mundo, condenan dichos actos, es decir la exhibición, publicación, difusión, transmisión, venta, entre otros supuestos, de material censurable de explotación sexual infantil; y en el entendido de que las personas que ejecutan éstos o que en todo caso sacan ventaja económica de los mismos, necesitan tener un cierto aire de seguridad o de impunidad al cometerlos, es por eso que tratan día tras día, de utilizar métodos más sofisticados para tratar de eludir la acción de la justicia, como lo es por ejemplo el “bit-coin” o moneda virtual cuyo valor oscila entre 10 o 15 dólares americanos, esto para tratar de no dejar “trazas” en el movimiento del dinero ilícito.

Así las cosas, las personas que hacen del delinquir su *modus vivendi*, y que por tal procedimiento obtienen un lucro directo, se han fusionado con la firme intención de obtener mejores y mayores ganancias, entonces dichos sujetos se han agrupado hasta más allá de sus fronteras, en donde inclusive existe un orden jerárquico entre ellos; y es allí entonces donde el Estado, tratando de proteger a sus ciudadanos, legisla sobre esa delincuencia organizada.

Venezuela no es la excepción, y por ello tiene entre sus normas la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y ésta entre sus ochenta y nueve (89) artículos, destina un Capítulo denominado “De los delitos contra indemnidad sexual”, contentivo de cuatro (4) artículos, los cuales de seguida transcribimos:

Artículo 46. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada explote la industria o el comercio de la pornografía para reproducir lo obsceno o impúdico a fin de divulgarlo al público en general, será penado o penada con prisión de diez a quince años. Si la pornografía fue realizada con niños, niñas o adolescentes o para ellos, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años de prisión.

Sanciona así este artículo a las personas que exploten la industria o el comercio de la pornografía reproduciendo entonces todo aquello que con palabras, imá-

genes o acciones, ofendan la moral sexual prevalente, con el fin de generalizarlo entre el público, de igual manera existe un agravante para cuando los hechos (la pornografía) se han ejecutado utilizando a niños, niñas o adolescentes.

Artículo 47. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada por cualquier medio directo o indirecto, venda, difunda o exhiba material pornográfico a niños, niñas o adolescentes, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años.

Según lo preceptuado en este artículo, se condena es la propagación del material pornográfico que sea vendido o exhibido por cualquier medio directo o indirecto a los niños, niñas o adolescentes; es decir, puede cometerse el tipo penal, cuando un niño o adolescente tenga acceso a dicho material por medio de un intermediario.

Artículo 48. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada utilice a niños, niñas o adolescentes o su imagen, con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financie cualquiera de estas actividades, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años.

Se evidencia entonces que lo penalmente reprochable es que se manipulen a los niños o adolescentes, con el fin de aprovecharse de su imagen, o que estos sean colocados a la vista en espectáculos públicos o privados, con un fin implícitamente de contenido sexual, o en todo caso que participen tales niños o adolescentes de cualquier forma en la elaboración de un material de contenido pornográfico. Es un artículo en donde se protegen los derechos fundamentales, sobretudo el de las mujeres por considerarlas —sus tratan-tes— meras mercaderías u objetos de explotación sexual.

Artículo 49. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada produzca, venda, distribuya, exhiba o facilite la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico, en cuya elaboración hayan sido utilizados niños, niñas o adolescentes, aunque el material tenga su origen en el extranjero o fuese desconocido, será penado o penada con prisión de veinte a veinticinco años.

Se toma muy en cuenta en este tipo penal, el interés superior del niño, pues aun cuando el material pornográfico haya sido producido en el extranjero o este sea importado, lo penalmente relevante, es el acto pornográfico cometido o ejecutado contra niños o adolescentes. El legislador venezolano busca, trata, quiere, aspira y desea, con la criminalización de estas conductas, que la utilización de niños, niñas y adolescentes en la realización de estos materiales censurables, descienda o se minimice lo más posible.

Puede observarse con meridiana claridad que Venezuela ha legislado tratando de proteger a los niños, niñas y adolescentes para que éstos no sean víctimas de cualquiera de los delitos que involucran tanto la pornografía infantil como el abuso sexual; sin embargo, en nuestra opinión, está de manera constante, ejecutándose una actividad —a nuestro modo de ver delictuosa— sin articulado, es decir sin ninguna figura jurídica en donde tales hechos se puedan subsumir.

Dicha figura típica, antijurídica y culpable, —desde nuestro punto de vista— es aquella en donde una persona adulta crea un perfil falso en una red social (como por ejemplo Facebook), se hace pasar por un menor de edad (caso Venezuela, menor de 18 años) y capta a un niño, niña o adolescente, haciéndole creer a aquél que es una persona de su misma edad, o cronológicamente muy cercana y además con intereses comunes o en todo caso haciéndose pasar por un productor de televisión o manager de una agencia de modelos, iniciando así conversaciones dirigidas a ganarse la confianza de quien será su víctima, para luego manipularle y lograr que el niño, niña o adolescente, le envíe fotos o algún video de contenido sexual o pornográfico para luego extorsionarlo con amenazas de que si no lo hace lo que le pide, le informará a sus padres, publicará las imágenes o el video entre sus amistades, o las subirá a alguna red social, o en todo caso una vez ganada la confianza de la víctima fijar un encuentro y así entonces, abusar sexualmente de aquel.

Esa forma de proceder, esa manera de actuar, ese modo de ejecutar de forma dolosa la captación del niño, niña o adolescente, y que se conoce como *grooming*, *cybergrooming* o *child grooming*, por sí mismo, no constituye delito en Venezuela, ya que si el agente no se hace de un material pornográfico en donde participe el menor de dieciocho (18) años y de cualquier modo lo utilice (exhibiéndolo, vendiéndolo, distribuyéndolo, etc) o no abusa sexualmente

de ese niño o adolescente; entonces no existiría delito alguno, es decir esa acción no sería reproachable penalmente.

Si observamos bien los casos estudiados, existe uno en donde sin duda alguna la persona logró su cometido, es decir abusó sexualmente de su víctima que resultó ser una adolescente de doce (12) años, pero en el segundo de los casos, el agente no logró el objetivo deseado, aspirado, o querido; pues las fotos que obtuvo de la niña que captó, en sí mismas no configuraban ni de manera implícita así como tampoco explícita un contenido sexual o en todo caso pornográfico, ya que las fotos enviadas por la niña fueron de sus pies así como también de ella oliendo un par de medias, aunado al hecho cierto que, quizás no se materializa el resultado por el aspirado, por la intervención de la madre al hacerse pasar por la pequeña y denunciar el hecho ante las autoridades.

El código penal español, en su reforma del año 2010, reconoce el “grooming” como delito y establece lo siguiente en su artículo 183 bis, el cual señala:

«El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de trece años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 [atentar contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación] a 183 [atentar contra la indemnidad sexual de un menor de trece años] y 189 [captar o utilizar a menores de edad o a incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico], siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.»

En el caso de España, aun cuando está previsto el *grooming*, como delito, no es menos cierto que está sujeto a una condición —salvo mejor criterio— es decir, que se produzca el encuentro o en todo caso que las conversaciones o contacto haya girado en torno al acercamiento entre el agente y la hipotética víctima con la intención dolosa del agente o sujeto activo de ejecutar cualquiera de los tres (3) supuestos descritos en la norma, pareciera entonces

que a la luz de dicho artículo si no se conversa o si no se trata el tema del “encuentro” entre el sujeto activo y el eventual sujeto pasivo, no se estarían satisfaciendo los extremos del tipo penal.

Una legislación que también ha considerado el *grooming* como delito es la Argentina, la cual en su artículo 131 del código penal, expresa lo siguiente:

Artículo 131. Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.

Compartimos sobremanera el punto de vista de la legislación Argentina, incluso más que la de España, pues consideramos, en el caso del artículo 183 bis del código penal español, que si no se da el supuesto relativo al “encuentro” entonces no se corporificaría el delito, mientras que la norma sustantiva del país suramericano, amplía los supuestos de hecho, al señalar que una vez que se ha contactado al menor de edad, “con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma” se estaría en presencia de dicho tipo penal, y estimamos que el “propósito de cometer cualquier delito contra integridad sexual” puede ser satisfecho en principio con el hecho de ser un adulto quien crea un perfil falso en una red social, aunado al tema tratado en las conversaciones entre el agente y la víctima, las fotos del niño, niña o adolescente, o vídeos de este último, ya que todo esto a nuestro modo de ver es considerado una conducta peligrosa por parte de quien finge, adopta o usurpa una personalidad.

Desde nuestra óptica y salvo mejor criterio, resultan claras las “intenciones dolosas” de aquel que se hace pasar por otra persona, para captar la atención de un niño, niña o adolescente y así poder manipularle y obtener de este imágenes o videos de contenido sexual, bien de manera explícita o implícita; consideramos que el no criminalizar esta conducta permite que el “depredador” continúe acechando hasta “cazar” a otra víctima, con la cual si puede llegar a cristalizar sus oscuras y bajas intenciones, con las consecuencias que ello conlleva; caso en el cual entonces, en Venezuela es que pudiera procesársele y eventualmente condenarle.

En un documento que publicó la Universidad Católica del Uruguay en el año 2013, en donde apoyados por la fundación Alia2 de España, realizaron una investigación, en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, para analizar las descargas de archivos “p2p” (peer to peer) a través del programa Ares Galaxy, resultó que Venezuela, ocupó el segundo lugar —entre los estudiados—, en cuanto a países “en el cual se descargan más contenidos sexuales que involucran la presencia de menores de edad”.

No nos cabe la menor duda que nuestro país (Venezuela) se encuentra en estudiados, sobre todo si tomamos en cuenta ese llamado de atención, —por decirlo de alguna manera— que nos hizo la Universidad Católica del Uruguay en el año 2013, lo que a nuestro modo de ver, debió desencadenar en una férrea política de Estado a los fines de implementar serias y profusas campañas de publicidad destinadas a informar a la colectividad, principalmente a los niños y adolescentes del peligro que corren al aceptar a un desconocido como “amigo” en una red social.

En ocasión de la presente investigación, visitamos, —tratando de obtener información acerca del mayor o menor conocimiento que podían poseer tanto los alumnos como los maestros y profesores, acerca del *grooming*— no menos de diez (10) colegios y obtuvimos la pasmosa y asombrosa sorpresa, que sólo dos (2) maestros y un (1) alumno, en algún momento habían “escuchado o leído algo por allí acerca de eso”, situación que sin duda deja ver con resplandeciente claridad el alto grado de desconocimiento en virtud de la desinformación en que se encuentra sumida nuestra sociedad con respecto al tema del *grooming*, colocando entonces a estos niños y adolescentes en un alto grado de vulnerabilidad frente al ataque de quien pudiera ser su “depredador”.

Necesario hacer la salvedad de que existe en Venezuela desde el año 2005, la División de Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), la cual tienen como misión, la investigación de aquellos delitos que comporten como medio de comisión, el uso de tecnologías de información en todo el país y está conformada por aproximadamente cuarenta (40) funcionarios entre hombres y mujeres, cifra que en un primer momento nos parece baja, dado el amplio territorio geográfico del país que deben cubrir en sus investigaciones, pues no todos los delitos en donde se utilicen tecnologías de información se ejecutan o cometen en

Caracas o ciudades de su periferia, por lo que estimamos, que se hace hartamente necesario incrementar el número de oficiales, así como también crear, si no en todas, en las principales delegaciones u oficinas de cada estado del país, brigadas que dependan de la División de Delitos Informáticos, los cuales con una capacitación previa, trabajen estos delitos.

En estricta relación con lo antes comentado, para el momento en que efectuamos este trabajo, se produce la aprehensión de una persona que comercializaba pornografía infantil en una ciudad llamada San Cristóbal, capital del Estado Táchira, la cual se encuentra distante de Caracas (ciudad donde tiene su sede la División de Delitos Informáticos) en aproximadamente ochocientos once kilómetros (811 km), lo que se traduce en poco más o menos en diez (10) u once (11) horas de recorrido en vehículo, lugar hasta donde debieron llegar los funcionarios de la capital del país, para proceder con la captura del ciudadano antes señalado.

Así también, desde hace aproximadamente un año y medio, existe adscripta a la Oficina de Interpol Venezuela, la Brigada Contra Delitos Transnacionales y Explotación Sexual Infantil, la cual está integrada por siete (7) funcionarios. Si consideramos previamente, que en el caso de la División de Delitos Informáticos del C.I.C.P.C., existía poco personal, no nos cabe la menor duda que una brigada como esta (la cual cubre todo el país), debería contar con mayor número de personas. Sin embargo, aun con múltiples carencias y con pocos recursos ha logrado sacar adelante casos importantes, incluso formó parte de una investigación de connotación internacional que se llevó a cabo en más de veinte (20) países, denominada “Operación sin Fronteras”. Ahora bien, aun cuando existen en Venezuela tanto la división, como la brigada previamente descrita, no es menos cierto que no contamos acá con una oficina policial dedicada las veinticuatro (24) horas, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, al “patrullaje por la web”, o lo que se conoce como “cyber policas”. Es decir, no contamos con la tecnología adecuada, para poder realizar con la ayuda de unos servidores un “patrullaje cibernético”, el cual se realiza con unos programas robots, programas cibernéticos, sistemas de información inteligente, con los fines de determinar, detectar y capturar, en las páginas públicas del internet, cualquier actividad ilícita que involucre el envío, exhibición, transmisión, difusión o venta, de material pornográfico, en donde se encuentren involucrados, niños o adolescentes.

En conclusión, aun cuando Venezuela, cuenta con una amplia normativa que protege y cobija a los niños, niñas y adolescentes, no es menos cierto que poseemos como país serias deficiencias en cuanto a la información, educación, y divulgación de la peligrosidad que representa la figura del *grooming* para los niños, niñas y adolescentes venezolanos; todo ello basado en lo que le puede ocurrir a la víctima posteriormente a la captación de la misma por parte del “depredador”, es decir, el peligro que para ella puede representar el hacerse “amigo” en las redes sociales de alguien que tiene oscuras pretensiones, como serían, por ejemplo, utilizar las fotos o videos del niño o adolescente como material de pornografía infantil para lucrarse con estas, o tratar de contactar físicamente al menor de edad para abusar sexualmente de él, o retenerlo en contra de su voluntad para explotarlo con múltiples fines, configurándose entonces el delito de trata de personas, o pudiera ser también la intención del sujeto activo de retenerlo para sí con fines de la venta de los órganos de dicha víctima.

En síntesis, esto quiere decir que el Estado venezolano no ha estructurado, diseñado, así como tampoco ha puesto en práctica planes, destinados a informar a la sociedad por medio de los medios de comunicación, de charlas en colegios, liceos, universidades, entre muchos otros lugares, de la existencia de esta figura delictiva, lo que sin lugar a dudas coloca en un estado de muchísima vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescentes venezolanos.

Por otro lado, a los fines de procurar hacer esfuerzos serios y tangibles en la prevención de delitos donde se encuentren involucrados como víctimas los niños y adolescentes, en los cuales se utilice como medio de comisión cualquier sistema de tecnología de la información, se hace harto necesario que el Estado inicie los trámites precisos para poner en funcionamiento una oficina de “cyber patrullaje” con toda la tecnología imprescindible a los fines de monitorear las páginas públicas de internet, o en todo caso las comunicaciones donde se evidencie intercambio de material censurable de explotación sexual infantil; esto para colocar de esta manera a Venezuela al nivel de otros países latinoamericanos como por ejemplo Chile y México, los cuales cuentan con dichas oficinas destinadas a la prevención, control, investigación y erradicación de dichos delitos.

Consideramos oportuno, acotar que resulta sumamente importante, necesario e imprescindible, que exista un régimen de capacitación continua y

permanente para con los funcionarios dedicados a combatir los delitos en donde se utilicen sistemas de tecnologías de información, todo ello con el fin de mantenerlos actualizados en cuanto a los nuevos *modus operandi* de la delincuencia organizada internacional, así como también capacitarles en cuanto a las diversas formas de tratar de investigar aquellos delitos en donde resulten víctimas niños o adolescentes.

Por último, pero no menos importante, pensamos que se hace necesaria una reforma a la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos, en donde se adicione un artículo que recoja entre sus líneas de manera expresa el supuesto hecho de una persona adulta que cree un perfil falso en una red social y que con éste capte a un niño, niña o adolescente, en donde luego de ganarse la confianza de aquel, se evidencie, —a través de las conversaciones sostenidas entre el adulto y el niño o adolescente, así como el material fotográfico o de video solicitado por el adulto y enviado o no por el menor— las intenciones dolosas del agente, ya que resulta —por decir lo menos— muy infantil creer que no posee intenciones malignas, el adulto que se hace pasar por un adolescente y conversa con éste temas de índole sexual.

La Trata de Personas y la Importancia de la Conciencia de los Jueces

Corinne E. Dettmeijer-Vermeulen

Relator Holandés en el Tráfico de los Seres Humanos
y la Violencia Sexual contra los Niños (Holanda)

He sido juez durante la mayor parte de mi carrera y me he sentado en el banco incluso al principio de mi Relatoría, que ahora es de hace casi diez años. Eso podría explicar por qué siempre he tenido un interés adicional en el papel que los jueces han tomado en la lucha contra la trata de seres humanos. Usted puede preguntar: ¿tienen un papel? Después de todo, no son parte de la cadena de aplicación de la ley, que consiste en la policía y en el ministerio público. Los jueces son independientes y no sólo tienen los intereses de las víctimas en el corazón, también es su papel garantizar un juicio justo para los autores.

Lo que he estudiado en los Países Bajos —en las resoluciones en los casos THB— no es que si hay o no suficiente evidencia en un caso particular. Al no haber leído los archivos y no ser parte del tribunal, no tuve la oportunidad de estudiar estos casos ampliamente. Pero lo que he visto son los hechos que los tribunales de los Países Bajos han establecido y la posterior aplicación de la ley nacional. Encontré el conocimiento en los tribunales de distrito y de apelación queriendo. Para mí esta fue la razón para recomendar una formación especializada para el poder judicial, como fue el caso de la policía y la fiscalía.

Sí, los jueces tienen un papel que desempeñar en la lucha contra la trata de seres humanos, y este papel se puede describir mediante el uso del término “conciencia situacional”. En mi opinión, este conocimiento de la situación, debe concebirse como una cualidad clave para todos los jueces que se ocupan de los casos de trata de seres humanos. Esta competencia destaca la importancia de la interacción de los jueces con su entorno. Lo que haré hoy aquí es explorar con ustedes los tres componentes principales que constituyen esta conciencia situacional. Cada uno de estos componentes aborda un área con la que los jueces tienen que interactuar con el fin de hacer frente a los casos de trata de personas correctamente.

El primer componente se centra en la forma en que los jueces se relacionan con el fenómeno de la trata de personas, que es un tema complejo, se produce en varias formas, es un fenómeno en constante cambio con el tiempo y requiere una respuesta igualmente dinámica. Estoy hablando aquí acerca de lo importante que es para los jueces poder interactuar con la sociedad y las diferentes formas de trata de personas que siguen apareciendo.

Es igualmente importante que los jueces interactúen bien con sus compañeros jueces en otros campos legales. Un tratamiento justo a las víctimas en los procesos judiciales requiere un enfoque que va más allá de las áreas individuales de la ley, un enfoque holístico. Sin efecto silo, sino un enfoque global en el que la experiencia de los distintos ámbitos jurídicos se estudian en conjunto y no por separado.

En tercer lugar, los jueces con conciencia situacional tienen en cuenta su papel como parte del mundo, que forma parte del derecho internacional y la legislación europea, y la influencia de éstos en el trabajo que hacen. Estos jueces son conscientes de su importante papel en la expansión de esa ley con las experiencias que han adquirido y están ganando a nivel nacional.

Por ende, estoy haciendo una distinción entre tres factores circunstanciales que los jueces en los casos de trata de personas necesitan para relacionarse. Permítanme pasar por estas tres con ustedes.

En primer lugar la realidad social. La trata de personas no es hecho estático legal, pero ocurre en nuestra realidad social en una multiplicidad de formas. Factores constantes son la fuerza y la explotación. La trata de personas tiene como objetivo obtener ganancias financieras, coaccionado por violencia o formas mucho más sutiles de coacción. La trata de personas tiene por objeto obtener beneficios a costa de otra persona, alguien que está a menudo en una posición muy vulnerable en relación con el traficante de personas. Aunque todo el mundo tiene una idea de lo que implica el término de “trata de personas”, es tarea del legislador poder encapsular la realidad social que representa en términos abstractos. Entonces es un reto para los jueces conciliar estas abstracciones con los hechos que se manifiestan en un caso concreto. La realidad solía ser bastante clara. Hasta 2005, sólo la explotación sexual era un delito en muchos países y se podía imaginar el sufrimiento que hay detrás de ella, cuando la explotación laboral se convirtió en un crimen que esto ya era mucho más

difícil. Sin embargo, recientemente los tribunales se están encontrando cada vez más confrontados con casos de lo que llamamos la explotación criminal: la explotación que implica víctimas que se ven obligadas a cometer delitos: robos en tiendas, el tráfico de drogas, la cosecha de *cannabis*. Todos los servicios que las personas pueden ser obligadas a cometer. Pero, ¿cómo detectar el tráfico de personas detrás de un ladrón de 16 años de edad? No hay nada en el hurto en las tiendas que traiciona señales de tráfico de seres humanos.

En los Países Bajos, Romanu y Ener, dos chicos rumanos, fueron tomados por su tío para Wassenaar, un pueblo cercano adinerado en La Haya. Comenzó a suceder con más frecuencia y cada vez la instrucción del tío para sus sobrinos era: “tomen todo lo de las casas para mí”. En Wassenaar el tío y los sobrinos fueron capturados. Los sobrinos fueron condenados a seis semanas en la cárcel y cumplieron su condena. El tío fue condenado mucho más tarde porque se dio cuenta de que no sólo era culpable de robo, sino también del tráfico de personas. Aquí vemos cómo la explotación criminal plantea desafíos al sistema de justicia criminal. Los sobrinos en este caso no eran sólo autores sino también eran víctimas. ¿Cómo podemos hacer frente a esta dualidad? ¿Qué hace usted como juez si se enfrenta con una víctima que es también un autor? Es de esperar que desde el principio en tales casos el fiscal decidiera que el enjuiciamiento no es adecuado, pero por lo demás los jueces tienen un papel vital que desempeñar. Los jueces tienen que responder a los nuevos retos derivados de los cambios en la realidad social, en nuestro caso la nueva realidad de la explotación criminal. La capacidad de los jueces para estar calibrando constantemente una realidad cambiante se prueba aquí al máximo. Es una habilidad crucial, ya que los traficantes de personas son astutos y cambian sus tácticas sin cesar, sobre todo ahora en la cara de la afluencia de refugiados. El destino de los refugiados es preocupante no sólo desde un punto de vista humano, sino también desde un punto de vista de la trata de personas.

Es crucial que los jueces se refieran a la sociedad. Pero de igual modo los jueces deben estar al tanto de la situación de sus colegas en otros ámbitos jurídicos. La trata de personas tiene demasiadas caras que deben abordarse de una manera directa por un enfoque represivo derivado principalmente de la ley penal. El derecho administrativo, la legislación de inmigración y el derecho del trabajo desempeñan un papel vital. Se necesita una visión que va más allá de los dominios legales individuales.

Para ilustrar mi punto dejen que les cuente la historia de Santosh, una niña india de trece años de edad, que llegó a los Países Bajos en 1999 para trabajar en la casa de una familia india bien-posicionada. Durante siete años Santosh tuvo que trabajar excesivamente largas horas y tuvo que estar disponible a todo momento. Ella fue explotada durante años como esclava doméstica, pero además de sus explotadores Santosh también fue condenada. ¿Cuál fue la historia? Durante el tiempo de su propia explotación Santosh fue instruida por sus explotadores a maltratar al bebé de los otros dos años de casa que, de acuerdo con los explotadores, estaba hechizada por espíritus malignos. Después de una escena espantosa el bebé murió y Santosh —a pesar del hecho de que todo lo que había sucedido era bajo una situación de trata de seres humanos— fue condenado a cinco años de prisión.

La condena de Santosh tuvo grandes repercusiones porque, como el primer dominó a caer, demostró tener un gran impacto en los resultados de otros procedimientos legales en otros dominios. Por lo tanto, la condena fue la causa inmediata para que Santosh fuera declarada persona *non grata*. La condena sirvió para asegurar que Santosh no fue concedida con la protección que todas las víctimas de trata de personas tienen derecho a por la virtud de las leyes de inmigración. Por lo tanto, no tuvo derecho a residencia y protección temporal. Aquí podemos ver cuanta influencia puede tener una decisión tomada en un dominio legal sobre el fondo de una decisión en otro dominio legal. La decisión no tomó en cuenta las circunstancias lamentables en las que se encontró Santosh como la víctima de trata de personas.

Y entonces yo no he mencionado siquiera la discrepancia entre el derecho penal y el derecho laboral. La explotación se define en los Países Bajos para los estándares holandeses, pero el juez laboral decidió, en el caso de Santosh, que el trabajo había sido realizado en un contexto completamente indio, por lo tanto, la legislación laboral de la India era aplicable. El cálculo se realizó fácilmente. Por el trabajo de una semana de 80 horas sin sueldo por un período de dos años, Santosh tenía derecho hasta 2020 euros.

Lo que el caso de Santosh demuestra es que la protección de las víctimas es un desafío frustrado por la subdivisión en dominios legales que nosotros mismos hemos creado. El caso es un argumento como ningún otro de los jueces para mirar más allá de su propio ámbito jurídico. La interacción entre los

penales, administrativos, inmigración y el derecho laboral es indispensable para la protección de las víctimas de trata de personas.

Esto me lleva al tercer y último factor situacional formado por la dimensión internacional. Quiero decir con esto no sólo el impacto del derecho internacional y europeo, sino también la importancia del conocimiento y la interacción con otros jueces de otros países.

La internacionalización y la europeización de la ley se están acelerando rápidamente. Está encabezando los casos de trata de seres humanos y el derecho internacional europeo. La definición de trata de personas en el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas data de 2000 y proporcionó una definición internacional por primera vez. Muchas legislaciones nacionales se han dirigido a esta definición internacional hasta el día de hoy.

La definición fue adoptada prácticamente intacta en el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias ha incluido, de largo alcance, obligaciones positivas para los Estados con respecto a la lucha contra los derechos humanos y la protección de las víctimas. Se espera que los jueces puedan operar dentro de esta realidad judicial internacional y pronunciarse en el espíritu de los documentos que he mencionado.

La relación de los jueces con la ley internacional es sin duda uno de interacción. El derecho internacional y europeo sólo se concretó a través de su incorporación a la legislación por los tribunales nacionales. A pesar de la creación de un uniforme, de la definición en todo el mundo, las disposiciones de tráfico de personas son interpretadas de diversas maneras en los diferentes estados. Mi opinión es que esto es atribuible “entre otras cosas” a la formulación abierta de la definición; las diferentes partes todavía permiten una gran cantidad de posibilidades de interpretación por los tribunales. La definición internacional, por ejemplo, ve el abuso de la posición vulnerable de una persona como una forma de coerción. Pero ¿qué es una posición vulnerable? ¿Y cuando alguien abusa de ella? Los tribunales nacionales son clave para responder estas preguntas y es por eso que es absolutamente crucial que los jueces de los diferentes estados mantengan contacto entre sí. Recuerdo mis tiempos como juez de menores y secretario general de la Asociación Internacional de la Juventud y la Familia, jueces y magistrados cuyos contactos no eran en abso-

luto evidente. Fue a través de esta asociación que me encontré con Luigi Fadiga, presidente de la Corte de Familia aquí en Roma, que venía muy bien en un caso de secuestro infantil que involucraba a un padre italiano y una madre holandesa. Mi corte no podía imaginar por qué quería enviar un correo electrónico a mi homólogo italiano para preguntar acerca de la aplicación del derecho de familia en Italia. Lo que me envió fue una visión detallada de la jurisprudencia más reciente, exactamente lo que necesitaba para manejar adecuadamente el asunto. Esto fue hace quince años y yo estaba un poco ridiculizado por el correo electrónico de mi querido Luigi. Ahora existe una relación de trabajo de los jueces de familia en los casos relativos a la sustracción de menores como se indica en la Convención de La Haya. Este es un ejemplo de la interacción actual entre los jueces nacionales sobre conceptos jurídicos internacionales y sus implicaciones para los solicitantes de justicia en el ámbito del derecho de familia. Pero ¿por qué esta interacción se limita a los jueces de derecho de familia? En mi opinión es necesaria en el derecho penal una conexión más estrecha entre los jueces nacionales también.

Hice un caso fuerte para esto en un artículo que publiqué este mes en la Revista contra la trata. Me alegro de que las Naciones Unidas están trabajando actualmente en una base de datos traducida de casos de tráfico humano, y están felices con el reciente desarrollo de una base de datos de jurisprudencia europea por la Comisión Europea. Las cosas cambian, como debía de ser.

Damas y caballeros, he dicho más de lo que quiero decir. He demostrado lo importante que es que los jueces interactúen con su entorno dada la complejidad de los problemas que enfrentan los jueces en los casos de trata de personas.

Los jueces que se ocupan de la trata de personas necesitan habilidades que pueden ser recogidas bajo el término de “conciencia situacional”. He tomado esta terminología del sector de la aviación no sin razón. Creo que la interacción entre los pilotos y sus alrededores es una calidad muy similar a la interacción necesaria para los jueces de tráfico de personas. Los jueces, como los pilotos, deben de tener el mando de la información de prioridad que necesitan para tomar la decisión correcta en una situación exigente. En la interacción con la sociedad, otros ámbitos jurídicos y sus homólogos internacionales; en un intento de volar hacia la libertad, la libertad que todavía no es una realidad para los millones de víctimas de trata de personas, sino que debe permanecer en nuestra visión en el horizonte.

El Modelo Sueco: Detener la Prostitución y la Trata de Personas Donde Todo Comienza

Anna Skarhed

Canciller de Justicia (Suecia)

Su Santidad Francisco muchas veces ha declarado que existen nuevas formas de esclavitud; la trata de personas, el trabajo forzado, la prostitución y el tráfico de órganos, son delitos sumamente graves, “una herida abierta en el cuerpo de la sociedad contemporánea”. Él ha pedido a toda la sociedad ser más consciente, especialmente en relación con la legislación nacional e internacional, con el fin de asegurar que los traficantes sean juzgados y sus ganancias injustas redirigidas a la rehabilitación de las víctimas.

Es en este contexto particularmente importante que el Santo Padre ha asignado a la Pontificia Academia de Ciencias Sociales convocar a esta Cumbre de Jueces con un enfoque hacia las víctimas, y con un énfasis en el hecho de que la trata de personas y el crimen organizado tienen un fuerte vínculo con el desarrollo sostenible, incluidas la pobreza y el cambio climático.

Me siento honrada de estar aquí hoy y de que se me haya dado la oportunidad de hablar con ustedes acerca de una de las maneras en que Suecia ha tratado de proteger los derechos de los niños, de las mujeres y hombres que son víctimas de la trata con fines sexuales.

Según el Informe Mundial de la ONU sobre la Trata de Personas en 2014, hasta el 33% de las víctimas de la trata detectadas son niños, el doble de niñas que de niños. Y en Europa, la gran mayoría de las víctimas de trata son víctimas de explotación sexual. Es importante destacar que a pesar de ser dos fenómenos distintos, existe un vínculo claro y fuerte entre la prostitución y la trata.

El número de víctimas y la cantidad de dinero en juego en este comercio, donde los seres humanos son tratados como mercancías, es incomprensible. Se estima que sólo en Europa 140 000 mujeres y niñas son cada día víctimas de la trata con fines sexuales, forzadas a ejercer la prostitución. Volver al ser

humano mercancía es un negocio lucrativo que financia otros tipos de crimen organizado, como el tráfico de estupefacientes y armas. Por lo tanto, combatir la trata de personas es esencial si queremos evitar otros tipos de delincuencia grave. Y para reducir la trata es esencial y necesario detener la prostitución.

La posición sueca sobre la prostitución se puede describir de la siguiente manera:

- La prostitución es un grave obstáculo para la igualdad de género.
- La prostitución conlleva un grave daño tanto a los individuos como a la sociedad.
- La prostitución es violencia, en la mayoría de los casos contra mujeres y niñas, especialmente dirigida a las que están económicamente marginadas u oprimidas racial o étnicamente.
- La prostitución es incompatible con los principios internacionalmente aceptados de derechos humanos: la dignidad y valor de la persona humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres.
- Centrarse en la demanda es una piedra angular de las políticas suecas ya que la demanda es una de las causas de la prostitución.
- Existe una correlación y vínculo claro y fuerte entre la prostitución y la trata de seres humanos con fines sexuales.
- La trata con fines sexuales es en gran medida un delito específico de género; la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, aunque hombres jóvenes y niños también son víctimas.
- Las personas empleadas en la prostitución no deben ser criminalizadas o sometidas a castigos administrativos.
- Para eliminar la prostitución, es necesario centrarse en reducir la pobreza, tener desarrollo sostenible, promover la igualdad de género, luchar contra la violencia masculina contra mujeres y niñas, y crear programas sociales, tanto para víctimas como autores.

El 1 de enero de 1999, Suecia fue el primer país en el mundo en aprobar una ley que prohíbe la compra de sexo.

La prohibición contemplaba la igualdad de género, así como los derechos humanos. Se consideró que la lucha contra la prostitución era de interés social imperioso. La esperanza era que la penalización de la compra de sexo ten-

dría un efecto disuasorio sobre los posibles compradores y serviría para reducir el interés al establecer actividades organizadas de prostitución en Suecia, lo que tendría un efecto inhibitorio sobre la prevalencia de la prostitución.

La ley constituía un cambio de perspectiva, si no había demanda no habría prostitución.

Una persona que obtiene una relación sexual ocasional a cambio de pago será condenada por la compra de sexo a una multa o una pena de como máximo un año. Lo que se indica en el primer párrafo también se aplica si el pago se ha prometido o realizado por otra persona (Código Penal de Suecia, Capítulo 6: Delitos Sexuales, sección 11).

En 2008, cuando la prohibición había estado en vigor durante diez años, el gobierno sueco me designó para evaluar la aplicación y los efectos de la ley. La Comisión consultó con mujeres y hombres en la prostitución, mujeres y hombres que habían dejado la prostitución, la policía, trabajadores sociales, sociedad civil, autoridades públicas y otros sectores clave. El informe del Comité (SOU 2010: 49) fue presentado al Gobierno el 2 de julio de 2010.

Conclusiones-Efectos:

1. El número de personas explotadas en la prostitución callejera en Suecia se había reducido a la mitad desde 1999.
2. La prevalencia de la prostitución callejera era aproximadamente el mismo en las tres ciudades capitales de Dinamarca, Noruega y Suecia antes de 1999. En 2008 se estimó que el número de personas en prostitución callejera en Dinamarca y Noruega era tres veces más alta que en Suecia.
3. La preocupación de que la prostitución podría pasar a la clandestinidad o trasladarse a otros ámbitos no se cumplió.
4. La prostitución por internet había aumentado en Suecia como lo había hecho en otros países, pero no a causa de la prohibición, sino debido al desarrollo general de la tecnología en línea.
5. Sin embargo, en 2008, la escala de la prostitución relacionada al internet era mucho más extensa en los países vecinos de Suecia (Dinamarca y Noruega).
6. No hubo evidencia de un aumento de prostitución “interior” en Suecia.

7. Si bien hubo un aumento significativo de prostitución en Noruega y Dinamarca de 1999-2008, no hubo evidencia de un aumento similar en Suecia. No pudimos encontrar ninguna otra explicación para esto que la penalización de la compra de sexo en Suecia.
8. De acuerdo con la Policía Nacional de Suecia, la prohibición disuadió el establecimiento de redes de delincuencia / crimen organizado en Suecia. Podría decirse que la ley funciona como una barrera contra los traficantes y proxenetas en Suecia. Perseguir a los consumidores realmente ayuda y es esencial cuando la policía trata de encontrar e investigar los casos relacionados al tráfico de personas.
9. Si bien muchos fueron críticos antes de que se aprobara la ley, las encuestas realizadas después de 2009 muestran que ahora hay un fuerte apoyo del público a la prohibición en Suecia; alrededor del 70% a favor. La prohibición ha tenido efectos normativos, así como un efecto directo de reducción del crimen.
10. No se encontraron pruebas de que la prohibición ha tenido efectos negativos para las personas explotadas en la prostitución.
11. La buena aplicación de la ley depende de los recursos disponibles y las prioridades formuladas por el sistema de justicia.

Los efectos directos y normativos positivos de esta legislación han inspirado a otros países de la Unión Europea y más allá a implementar leyes similares. La última es Francia (2016), Canadá (2014), Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte (2010), Noruega e Islandia (2009), Sudáfrica (2007), y Corea del Sur (2003).

En un informe financiado por la Comisión Europea expedido en 2015, antes de que Francia criminalizara la compra de sexo, se estimó que el número de personas que ejercían la prostitución en Francia era entre 30 000 y 44 000 personas y que la prostitución costaba a la sociedad francesa 1,6 millones de euros por año.

El Parlamento Europeo en febrero de 2014 aprobó una resolución (no vinculante) instando a los países de la UE a trabajar en contra de la prostitución, centrándose en la demanda; es decir, el modelo sueco.

El “nuevo” enfoque del llamado modelo sueco o nórdico es centrarse en la demanda; centrarse en el comprador. Esto es lógico para nosotros. Si no hay

demanda obviamente no hay prostitución. Es importante mencionar que esto no es una cuestión moral, sino una cuestión de derechos humanos. También es una cuestión de género fuerte y una cuestión de igualdad de derechos ya que la inmensa mayoría de las víctimas de la trata son niñas y mujeres.

Varios informes han demostrado que la manera opuesta de tratar con el problema de la trata, que es legalizar el “negocio” y mirar la “venta” de las relaciones sexuales como un trabajo ordinario, no ha tenido éxito. Incluso si no se consideran formalmente víctimas de la trata, es evidente que la gran mayoría de las personas empleadas en la prostitución no han hecho lo que podría llamarse una elección libre.

Una voz fuerte en favor del modelo sueco / nórdico es el Sr. Mendes Bota de la Comisión Europea y su artículo “La prostitución, la trata y la esclavitud moderna en Europa”, de marzo de 2014. Su conclusión es que “la prostitución voluntaria” es un mito, ya que para la gran mayoría de las personas, la prostitución es la consecuencia ya sea de un estado de pobreza y necesidad extrema o de violencia. También hace hincapié en que todos los países tienen el derecho a elegir su camino, pero aconseja encarecidamente a los legisladores por toda Europa a seguir el ejemplo de Suecia y otros países nórdicos y criminalizar la compra de sexo.

Creo que penalizar al comprador de sexo es una medida importante y eficaz para luchar contra la trata de seres humanos. La penalización no es suficiente pero es un mensaje importante para aquellos que explotan a otros seres humanos. Detener la trata es una enorme y difícil tarea que ningún individuo, organización o incluso país puede resolver por sí solo. Tenemos que creer que podemos hacerlo juntos. Así que tenemos que ser persistentes y continuar trabajando contra la trata y la prostitución. Se lo debemos a todas las víctimas que se encuentran atrapadas en esta forma de esclavitud moderna.

Hace más de 150 años, en 1862, el gran escritor francés, Victor Hugo, escribió en su obra *Los Miserables*: “Algunos dicen que la esclavitud ha desaparecido de la civilización. Eso es incorrecto. Todavía existe, pero ahora pesa sólo en las mujeres y se llama prostitución”.

Este es el desafío que aún tenemos que enfrentar hoy en día.

***Las Dificultades del Procesamiento y
Enjuiciamiento de Casos de Tráfico Humano
con Respecto a la Explotación Laboral***

Ulrich Nachtliberger
Austria

Muchas gracias. El tráfico de seres humanos tiene formas diferentes y sólo existen estimaciones sobre la dimensión real. A menudo hay diferentes formas de trata de seres humanos. El trabajo de lucha contra la trata se centró en la trata de mujeres con fines de explotación sexual en los últimos años. Otras formas de trata de seres humanos, especialmente el tráfico con fines de explotación laboral, sólo han atraído la atención recientemente. Las diferentes formas de trata de personas requieren medidas diferentes y adaptables en su contra, y todas las medidas deben seguir un enfoque integral. Esto permite combinar el enjuiciamiento, la prevención del tráfico humano, así como la protección y el fortalecimiento de los derechos de las víctimas.

La explotación laboral requiere habilidades adicionales, conocimiento y conciencia para una investigación efectiva, procesamiento, identificación y asistencia de víctimas en esta forma de tráfico. Actores tales como inspectores del trabajo, servicios de investigación social, municipalidades distintas a la policía y fiscalías también se han involucrado en estas actividades. No está claro qué tipo de camino deben seguir estos agentes para identificar a las víctimas, para investigar y enjuiciar casos de tráfico de explotación laboral, ni cuáles son las mejoras necesarias. A menudo, no están familiarizados con, por ejemplo, las necesidades específicas de las víctimas, cómo funcionan las redes de tráfico o cómo cooperar con otras autoridades o colegas a bordo. Estos problemas obstaculizan obviamente la lucha contra la trata con respecto a la explotación laboral. Además, todavía existen dificultades para definir la trata de explotación laboral.

Cuando se profundiza en la explicación de la explotación, se puede hacer la distinción entre trata con fines de explotación sexual, explotación laboral, incluyendo los trabajos obligados, la esclavitud, la mendicidad forzada y la extracción de órganos. Por lo tanto, estos problemas, así como los desafíos de la tecnología, tienen que ser identificados como un cargo.

En primer lugar, hay que analizar el marco jurídico relativo a la trata de seres humanos para la explotación laboral y las dimensiones de este delito. El tráfico está legalmente definido en el código penal austriaco siguiendo la definición general dada en el protocolo internacional. Las formas de explotación previstas en el Código Penal austriaco son el artículo 104 A, sección 3, la explotación sexual, la extracción de órganos, la explotación laboral, la mendicidad forzada, así como la orden de explotación para cometer delitos incluidos.

La explotación en el sentido del artículo 104 A incluye la opresión despiadada y duradera de los intereses vitales. El perpetrador tiene que pretender oprimir el interés vital a largo plazo de la víctima. La interpretación de la explotación sexual y laboral está influenciada principalmente por la jurisprudencia sobre el proxenetismo. La ofensa se produce cuando la mayoría de la remuneración no es pagada y, en consecuencia, se infringen los intereses vitales de la víctima.

No sólo la falta de pago se considera una explotación, sino que las condiciones de trabajo también pueden conducir a una infracción de intereses vitales. La explotación no está prevista cuando las condiciones de trabajo difíciles se compensan con pagos más elevados. La explotación también incluye las circunstancias en las que las horas normales de trabajo se exceden excesivamente o cuando las condiciones de trabajo son inaceptables. Los pagos que caen ligeramente por debajo del salario mínimo previsto en los convenios colectivos en Austria, así como el excedente ocasional de horas de trabajo, no equivaldrán a explotación.

El código penal enumera como delito el reclutamiento, alojamiento o recepción de personas, así como el ofrecimiento de transporte y transmisión por medios como engaños, abuso de poder, explotación o cualquier situación de angustia, enfermedad mental u otra condición que vuelva a la persona indefensa. Así como dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona y tener control sobre ella.

Existen distintos niveles de sanciones, la pena habitual para el tráfico de seres humanos puede ser de hasta cinco años de prisión. Las circunstancias agravantes incluyen el tráfico de niños menores de 14 años, ser parte de un grupo criminal organizado, causar daños graves a la víctima, o el uso de fuerza severa. Estos conducirán a sanciones de entre 1 y 10 años de prisión. El

marco legal es una norma europea y parece ser suficiente. En la práctica, las políticas y medidas de Austria contra la trata de seres humanos todavía parecen estar impulsadas predominantemente por la idea de que la trata de seres humanos está relacionada principalmente con la explotación de las mujeres, sobre todo la explotación sexual y que necesariamente tiene que abarcar cierto nivel de fuerza, amenaza y confinamiento de la víctima.

De hecho, los casos de tráfico de explotación laboral son bastante raros, los sectores más frecuentemente mencionados en los que se produce la trata para la explotación de mano de obra son el sector de la restauración, la agricultura y la construcción. Otros sectores incluye explotación doméstica, especialmente en los hogares diplomáticos.

¿Cuáles son los obstáculos para una identificación e investigación eficaces de los delitos de trata con respecto a la explotación laboral ?

El primero de los obstáculos parece ser la insuficiente identificación de las víctimas por parte de los actores involucrados. Los agentes que participan en la identificación e investigación de casos de trata con fines de explotación laboral pueden diferir de los de las autoridades que habitualmente participan en la trata de personas con fines de explotación sexual. Las autoridades que suelen participar en la investigación de casos de trata son principalmente la policía, los servidores públicos y los jueces. Todas estas autoridades reciben capacitaciones sobre este tema.

El principal actor diferente en el campo de la explotación laboral en Austria es la Unidad de Control para el Empleo Ilegal que no forma parte de la policía financiera, a la cual se le permite entrar en los locales comerciales y otras habitaciones incluyendo casas privadas en las que los “empleados” podrían trabajar. Otras autoridades, que también están autorizadas a entrar en los lugares de trabajo y locales comerciales, son la Agencia de Inspección Local, el Fondo de Seguro Médico del Distrito y el Fondo de Ayuda y Desaparición de los Trabajadores de la Construcción. Estas autoridades tienen tareas específicas tales como la protección de la seguridad en el lugar de trabajo o el empleo técnico ilegal, pero no está en el ámbito de sus responsabilidades, por lo tanto, no se ofrecen capacitaciones específicas al personal o capacitaciones en

identificación de víctimas. Pues bien, con respecto a las situaciones en las que la explotación puede ocurrir, por un lado a menudo no está claro qué indicadores de trata existen y por otro lado no está claro en qué circunstancias la policía debe ser protegida, aunque cada vez hay más conciencia.

El segundo obstáculo parece ser la cooperación insuficiente de los actores involucrados en la investigación y enjuiciamiento de los casos de explotación. Además, no está claro cómo cooperar en casos de trata para explotación laboral. La unidad de Control para el Empleo Ilegal, por ejemplo, no recibe información para futuras investigaciones. Estos informes son del campo del ministerio público. Además, la cooperación de las corporaciones con respecto al tráfico no está determinada específicamente.

La cooperación en caso de explotación sexual se practica desde hace muchos años y las autoridades y las ONGs implicadas son absolutamente claras con respecto a la trata. Sin embargo, para la explotación laboral todavía no hay cooperación formalizada entre las autoridades y las instituciones relevantes. La cooperación en materia de trata de personas con fines de explotación laboral parece, en general, bastante baja y no suficientemente elaborada. Existe cierta cooperación entre los actores mencionados, pero la intensidad de la cooperación varía considerablemente, especialmente en los casos de explotación laboral, no es claro cómo los actores deben proceder.

Tercer obstáculo, parece que existe la necesidad de utilizar una gama más amplia de técnicas de investigación. Sigue habiendo la impresión de que la declaración de la víctima es la evidencia más importante en los casos. Varias técnicas pueden llevarnos a numerosas evidencias acústicas y visuales de personas apoyadas por instrumentos técnicos, observaciones, telecomunicaciones, seguimiento de la comunicación o solicitud de información sobre datos bancarios que pueda ser importante por razones de investigación, con el fin de reunir pruebas o para apoyar la confiscación de beneficios en una fase posterior del procedimiento. Las experiencias prácticas demostraron que, por consiguiente, la declaración de la víctima sigue desempeñando un papel crucial durante toda la investigación y los procedimientos porque estos otros medios que mencioné antes consumen recursos y no siempre están disponibles, pero debemos de tener cuidado de exigir al eslabón más débil de

la cadena, la víctima, muy a menudo traumatizada, adicta e intimidada para mostrar toda la prueba de todo el caso.

El cuarto obstáculo es que las víctimas a menudo no cooperan con las autoridades. Es difícil determinar si entraron voluntariamente y si sabían lo que iban a hacer en Austria. La falta de identificación también está vinculada a una incertidumbre general acerca de qué casos podrían ser evaluados como casos de trata de explotación laboral. De cerca vinculada a la noción antes mencionada de las víctimas de la trata es la cuestión relativa a las circunstancias en las que se realiza el trabajo versus migrar a Austria con el fin de ganar dinero y por tanto cargar con condiciones de vidas marginadas, en pobreza y con condiciones de trabajo peligrosas. Es difícil determinar dónde comienza y termina la trata de personas. En general, no existen indicadores para la identificación de la explotación laboral en Austria y en las capacitaciones para la Unidad de Control para el Empleo Ilegal la policía suele usar los indicadores generales elaborados por las organizaciones internacionales, pero no puede referirse a indicadores austriacos específicos.

El desarrollo de indicadores sobre la trata para explotación laboral facilitaría el trabajo en esta área y los indicadores clave identificados incluirían, si la persona es capaz de moverse libremente o si hay cualquier forma de violencia ocurriendo. Sin embargo, es importante resaltar que la definición de trata no necesariamente implica violencia, otros medios también pueden utilizarse. La indemnización pagada en casos de trata para explotación sexual y tráfico de explotación laboral debe ser abordada, se puede ver que con respecto a la explotación laboral más oportunidades legales se proporcionan en el acceso a la indemnización.

Permítanme llegar a las conclusiones de estas observaciones, hay necesidad de más capacitación sobre la identificación de casos, ya se ofrece, pero todavía hay espacio para mejoras y esto tendría un gran impacto en la sensibilización del tema. La policía no debe basar enteramente el sistema de identificación en la víctima. Toda la sociedad civil es un actor importante, por ejemplo, con respecto a las mujeres explotadas en los hogares. También es necesario aclarar la estructura y la competencia de las autoridades involucradas y recurrir a todos los medios para reunir pruebas para abordar estos problemas. Muchas gracias.

La Justicia, los Trabajadores y la Lucha Contra el Trabajo Forzoso

Julio Piumato

Argentina

Buenas tardes, quiero agradecer el honor de haber sido invitado a un encuentro de esta trascendencia, en particular a Monseñor Marcelo Sánchez Orondo y a mi amigo Gustavo Vera, que tenemos muchos años de trabajo en común precisamente combatiendo las cuestiones que son objeto, estas cuestiones indígenas, que son objeto de estas dos jornadas de encuentro.

Creo que juntar, representantes de la justicia de tantos lugares del mundo y tanta gente involucrada en estas temáticas, es parte de un milagro que está generando el papa Francisco, una revolución espiritual, una revolución moral y una revolución de las conductas humanas y esto es una esperanza tremenda que nos genera a todos los que luchamos por un mundo más justo.

Pensar esta temática, yo creo que hay que partir precisamente si porque pasa esto que pasa, porque la trata, trata de personas hubo siempre, esclavitud hubo siempre, pero porque mientras el mundo avanza en tantas cosas, la ciencia, la comunicación, estos males del mundo, en lugar de retroceder crecen o son cada vez más graves, y yo creo que la encíclica *laudato sí*, Francisco si hizo una síntesis al comienzo (Gustavo) pero creo que hay que manejar esos tres conceptos que el papa Francisco define como esto que nos pasa y que es el resultado de esto que nos pasa, que es el paradigma tecnocrático, que es esa adoración humana del poder sin límite y lo que Francisco llama el relativismo práctico, es decir, en que la gente piensa solamente en su interés personal, abusado por los medios de comunicación es como todo en una cultura que lleva a eso, bueno, la consecuencia de esto es lo que vivimos no es sólo la parte mala del asunto que es la corrupción, la trata, el trabajo forzoso, el narcotráfico, si no la concentración económica, la concentración económica es un mal también, es un mal que genera todo este tipo porque todos los que hablaron dijeron que precisamente estos males se nutren de los sectores más desposeídos de la tierra, y los sectores más desposeídos de la tierra son las víctimas de esa concentración económica.

Entonces me da la sensación de que Francisco hace una revolución cuando acierta en el planteo que hay que cambiar de paradigma y yo creo que es un pensamiento que también va creciendo en otros lugares, a la vez es una prueba, quiero creer que es una prueba de la salud de la humanidad, el cambio de paradigma es que va a voltear muchas cosas, no sólo el derecho a la vida en todo que es el hombre quien domina la naturaleza, ese apotegma cartesiano, que marco casi 300 años la vida de la humanidad, por ese otro, que plantea que el hombre es parte de la naturaleza.

Francisco dice que no somos los dueños de la tierra, del universo, somos administradores de la casa común y esto me parece que es fundamental, es fundamental profundizar esta cuestión porque sí o nos vamos a entender o no vamos a poder combatir, todo esto a que nos comprometemos en este encuentro, porque hay aspectos positivos que tienen un pro y tienen un contra. Muchos han dicho y con razón el dato positivo que es la preocupación de las Naciones Unidas por ejemplo, en la agenda 2030 para un desarrollo sostenible, donde plantea esta y muchas otras cuestiones que hacen a la necesidad de cómo tenemos que concebir el mundo y la organización social y política de los estados para poder trascender y derrotar a nuestros males; o la organización internacional del trabajo, yo vengo de ahí, ya vuelvo el domingo, donde entre otras cosas se está discutiendo el tema de los trabajadores migrantes, migrantes que son por millones, y no empezó hoy ese tema, donde hoy nos escandalizamos por la situación de los refugiados que huyen de la guerra del medio oriente, pero el flujo de migrantes es muchísimo más grande, viene de todos los lugares más pobres de la tierra y son migraciones por el hambre, y esto demuestra esto que decía antes, del dolor de la concentración económica y de los problemas que genera porque está claro que son los migrantes una buena parte de la carne de cañón que generan esta temática que estamos tratando hoy día.

Pero fíjense ustedes qué paradoja, en el 2014 la OIT aprobó un protocolo sobre trabajo forzoso, al convenio 29 que ya perdió actualidad, y al 105 que lo complementa más adelante y también perdió actualidad frente a estas nuevas formas de trabajo forzoso y al ser ratificado un convenio, no soluciona los problemas de la humanidad pero tenemos que tener presente que le dan una respuesta muy importante y saben que es el convenio. Han pasado dos años y sólo lo ratificaron cinco países, puedo decir con alegría que gracias al trabajo de 2014 venimos haciendo en la Secretaría de Derechos Humanos de la TST, en el día de anteayer, el

Senado de la nación le dio sanción, que ya tenía hace 15 días, a la ratificación de este protocolo, así Argentina es el sexto país firmante, pero estos países que firmaron la agenda 20-30, preocupados por el trabajo forzoso, por que no ratifican este protocolo que es una herramienta más donde demuestran su compromiso para avanzar en el combate.

Viendo la Ley de Gran Bretaña, vimos todo lo que ha hecho bueno precisamente, eso es la consecuencia de que Gran Bretaña ratificó ese protocolo, no se puede hacer una cosa por un lado y otra por el otro. Así que, creo que en este trabajo en este cambio de paradigmas hacia la globalización de la solidaridad tenemos que decir que hay muchas cosas para hacer en este sentido, en nuestro país venimos trabajando firme desde hace tres años en una campaña sobre el trabajo forzoso en todas sus formas, que nos ha costado pero vamos obteniendo paso a paso, tal vez no con la rapidez que pongamos, la solidaridad de la justicia, el involucramiento de la justicia en la persecución y el castigo de los culpables, pero muchas cosas para aportar primero como se decía acá, tenemos que cambiar una paradigma más porque hablamos de crimen organizado y no nos podemos quedar en el análisis del hecho ilícito en particular. Para investigar habrá que cambiar las leyes, habrá que llevar a acuerdos multilaterales, sino que tenemos que tratar de avanzar persistentemente en ir hacia las mafias, ir hacia ese crimen organizado que muchas veces se enlazan con empresas lícitas o con negocios o con bancos o con entidades financieras y lícitas, pero que generan una red que nosotros matamos al, digamos, al gusano pero no vencemos la infección o mandamos a un germen pero no vencemos la infección que genera prácticamente una septicemia.

Un desafío grande es una colaboración de los países donde se plantea el tema de la jurisdicción, yo creo que si asumimos que estos son temas tremendamente importantes para la humanidad, tendríamos que ver cómo, porque no se puede entender cómo los países entregan su jurisdicción frente a imposiciones de convenios comerciales y no pueden hacerlo para combatir delitos que son definitivamente de lesa humanidad, y así tendrían que ser considerados por la comunidad internacional.

Se habló de capacitación, se habló de muchísimas cosas, del rol de los jueces, de los fiscales, yo me detengo en la defensa pública. El concepto de defensa pública hay que ampliarlo a la protección de las víctimas, no sólo mientras dura el proceso si no para garantizar la reparación económica por parte de los responsables de ese calvario que les ha tocado vivir, es reformular muchas situaciones para

llegar al objetivo que tenemos. Yo digo, además, que en esto, la justicia no puede actuar sola, acá hablamos de muchos países, y no hablamos sobre que se daban cifras de los casos de las sentencias. Por otro lado, se hablan de las cifras globales de los sometidos a esta situación indigna, de esclavitud en sus distintas formas, si sumamos los casos que tuvieron resolución judicial, el número nos tiene que dar vergüenza. Entonces tenemos que hacer nacional e internacionalmente estadísticas reales de cuál es la magnitud en cada uno de los países de esta cuestión, para saber, si la tarea que hacemos del ámbito de la justicia y de todos los demás ámbitos, es trascendente o solamente termina siendo un gasto perdido, porque cambiemos, algo para que nos cambie su esencia.

En ese sentido, la OIT plantea planes nacionales de lucha contra el trabajo forzoso, en la Argentina ya empezamos, replanteamos en el consejo del salario un organismo tripartito donde están los empresarios y más allá de la declamación de responsabilidad social que nunca se concretan, los hemos convocado y al gobierno también a que integren y empecemos a delinear ese plan nacional, donde están los sindicatos, están las ONG que trabajan. Hoy me enteraba de la ONG que preside Valeria Maza y digo ¿Por qué todo eso no se conjuga? y no son sólo expresiones aisladas o separadas donde cuando es por separado se pierde la magnitud del impacto, eso lo puede hacer un plan nacional y es responsabilidad del estado fundamentalmente alcanzarlo.

Empezamos la semana pasada nosotros con una convocatoria, donde convocamos a gran parte de los que nombre, a las universidades, a las iglesias porque tiene que ser un compromiso de toda la comunidad, la única forma de vencer esto es con participación, que la globalización de la solidaridad empiece en cada barrio, en cada municipio, en cada ciudad, en cada provincia, en cada estado, en cada región, para llega así al conjunto del mundo. Termino, se me termina el tiempo y quería decir volver a lo anterior. Tenemos que pensar muy claramente algo, la concentración económica, está claro que a medida que la economía se concentra más en menos manos, crece la concentración económica, lo que crece en términos mucho más exponenciales es la miseria, y la miseria es el caldo de cultivo de todos estos dramas, que estamos analizando hoy, así que termino con una frase de las escrituras, corta pero contundente, que dice: “la paz es el fruto de la justicia”.

La Lucha contra la Trata de Personas en el Contexto de Brasil: La Experiencia del Ministerio Público Federal

Zélia Luiza Pierdoná

Fiscal del Ministerio Público Federal de São Paulo – Brasil

Antes de adentrarme en el tema en sí mismo, a fin de contextualizar las medidas de enfrentamiento a la trata de personas utilizadas por Brasil, quisiera detenerme rápidamente en algunos datos relacionados con el país.

Se trata de un país que ha adoptado el sistema federativo: esta compuesto por 26 Estados-miembros, un Distrito Federal y 570 Municipios. La población brasileña, en 2015, fue estimada por el *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística* (IBGE) en 204 450 649 habitantes, lo que corresponde aproximadamente a 47% de la población de la América del Sur. Se trata del quinto mayor país del mundo tanto en función de su población como en función de su área territorial.

Además, para la mejor contextualización del tema es importante mencionar los datos del *Coefficiente de Gini*, que evidencian las desigualdades de los ingresos existentes en Brasil. En 2014, el índice referente a Brasil era de 0.490, teniendo en cuenta que, para la región Sur, era de 0.442; para la Sudeste era de 0.478; para la Centro-Oeste, de 0.478; y para la Nordeste, era de 0.501. Esto demuestra que hay diferencias dentro del propio país. Por cierto que se debe registrar que hubo una pequeña mejora, en 2008, el referido índice era de 0.544.

Las desigualdades observadas revelan importantes aspectos para que se pueda reflejar y enfrentar a la trata de personas. Eso porque, la principal causa de la referida trata se encuentra justamente en la exclusión social y económica, victimando, principalmente, a las personas en estado de vulnerabilidad. De esta manera, una de las medidas más adecuadas para la prevención del crimen es la adopción de políticas públicas de inclusión, especialmente el acceso a la salud, educación con calidad y políticas de empleo.

Sin embargo, además de la prevención, el enfrentamiento a la trata de personas debe ser una preocupación constante, ya que es una de las más antiguas y recurrentes maneras de violación de los derechos humanos.

A nivel internacional, el enfrentamiento a la trata de personas es objeto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su respectivo Protocolo Adicional, que determina la adopción de medidas necesarias para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas e impone a los Estados Partes el deber de acoger, proteger, asistir y repatriar a las víctimas a sus Estados de origen. En Brasil, la referida norma ha sido incorporada por el Decreto nº 5.017, de 12 de marzo de 2004.

Para llevar a cabo el acuerdo internacional, Brasil, en 2006, a través del Decreto nº 5.948, instituyó la Política Nacional de Lucha contra la Trata de Seres Humanos, que tiene por objeto establecer los principios, directrices y acciones para la prevención y represión de la trata, así como la asistencia a las víctimas.

En 2013, por medio del Decreto nº 7.901, ha sido instituida la Coordinación Tripartita de la Política Nacional de Lucha contra la Trata de Seres Humanos, con el fin de elaborar la propuesta del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas.

La referida política ha sido estructurada en tres grandes ejes de actuación: preventivo, represivo y responsabilidad de los autores y atención/acogimiento de las víctimas. Así, la política brasileña está en conformidad con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, ya que garantiza un abordaje integrado del problema, puesto que, además de preocuparse con el enfrentamiento del crimen, también protege a la víctima. El programa también prevé la cooperación e integración nacional e internacional.

En el eje preventivo, la política brasileña de enfrentamiento prevé la implementación de medidas relacionadas a las áreas de salud, educación, trabajo, seguridad, justicia, asistencia social, entre otras, así como de campañas socio educativas.

En cuanto a la atención a las víctimas, la política brasileña prevé atención jurídica, social y de salud, atención consular, independiente de su situación migratoria y laboral, así como la disponibilidad de abrigo provisorio. También reconoce la necesidad de protección de la intimidad e identidad de las víctimas. Para que las medidas logren éxito el programa pugna por la divulgación de los canales de atención y protección tanto internamente cuanto en el exterior.

Además, el éxito del enfrentamiento de la trata de personas necesita de la implementación de tres pilares: información, formación y sensibilización, los cuales deben actuar de forma integrada, para que se asegure una abordaje global de la cuestión.

Se tiene que de las tres modalidades de trata de personas (para fines de explotación sexual, de explotación del trabajo y para la remoción de órganos), la que más ocurre es la trata para fines de explotación sexual y que más causa prejuicio en relación a la víctima. Quizás sea, entre las tres, la más difícil de discurrir en razón de que los traficantes se aprovechan del estado de vulnerabilidad y atraen a las víctimas para la red de la trata, bajo la excusa de una vida mejor en el exterior.

En este contexto, en 2009, Brasil ha modificado su legislación penal, tipificando, en el artículo 231[1] del Código Penal, el delito de trata de personas para fines de explotación sexual, sancionando al autor con detención de tres a ocho años, aplicándose también multa en el caso de obtención de ventaja económica.

Anteriormente, en el ordenamiento penal brasileño, los bienes jurídicos tutelados eran las costumbres sexuales y la moralidad pública sexual. Con la modificación mencionada arriba, el bien jurídico tutelado por el artículo 231 del Código Penal es la dignidad sexual de la persona, la cual esta incluida dentro del derecho fundamental a la libertad, que incluye además de la libertad de ir y venir, la libertad de escoger, de disponer del propio cuerpo y de vivir de modo digno la sexualidad.

Con el reconocimiento de la dignidad sexual y de la libertad como bienes penalmente protegidos, se reconoce la posibilidad de desconsiderarse el consentimiento del sujeto pasivo en el crimen de la trata de personas, que se verá más adelante.

El Código Penal brasileño también tipifica, en su artículo 231-A[2] la trata interna de personas para fines de explotación sexual, sancionando al autor con reclusión de dos a seis años. Hay previsión de motivos de aumento, tanto en la trata interna, como en la trata internacional.

Conforme a lo dicho anteriormente, Brasil es un Estado Federado. En vista de esto, la Constitución instituyó la Justicia Federal y la Justicia Estatal (de

las unidades subnacionales), estableciendo la competencia para cada una de ellas. En lo que atañe a la competencia para procesar y juzgar el crimen de trata para fines de explotación sexual, depende si la trata es interna o internacional; si fuera interna, la competencia es de la Justicia Estatal y si fuera internacional, la competencia es Federal.

De esta manera, la competencia para procesar y juzgar la trata internacional de personas es de la Justicia Federal y, por lo tanto, la atribución para el ofrecimiento de la denuncia es del *Ministério Público Federal*.

En 2012, la segunda Cámara de Coordinación y Revisión del *Ministério Público Federal* ha instituido un Grupo de Trabajo que, entre otras cosas, elaboró un Guión de Actuación sobre el crimen de la trata internacional de personas. El referido guión sugiere una actuación centrada en la víctima, especialmente en la tentativa de minimizar los sucesivos procesos de victimización a los cuales es sometido el ofendido, cuya escoja no fue fruto de una decisión libre.

Esta perspectiva está de acuerdo con el Protocolo Adicional a la Convención de las Naciones Unidas (incorporado al ordenamiento jurídico brasileño), ya que las disposiciones de la letra “b” del artículo 3º, reconoce la vulnerabilidad de la víctima, incluso considerando irrelevante su consentimiento cuando sea utilizado por el tratante cualquier medio que vicie su voluntad.

De esta manera, la exclusión de la eficacia jurídica del consentimiento de la víctima se origina no reconocimiento de la existencia de una situación de vulnerabilidad.

La trata de personas ocurre a partir de situaciones de debilidad o fragilidades vividas por las víctimas, lo que vicia sus escojas, puesto que es una opción de supervivencia y no una escoja verdaderamente libre.

La esperanza de una vida mejor, idealizada por jóvenes sin perspectivas socio-laborales en el territorio nacional, añadido el hecho de que la Europa sería el lugar de realización de los sueños, son los factores que contribuyen para que estas personas —en su mayoría mujeres— sean víctimas de la trata.

Así, considerando la modificación de paradigma del bien jurídico tutelado por el artículo 231 del Código Penal (dignidad sexual y libertad), anteriormente mencionado, el consentimiento de la víctima no debe ser considerado cuando se encuentra en situación de vulnerabilidad. La referida situación es utilizada para atraer a la víctima a la red de trata, viciando su consentimiento. El Guion de Actuación también sugiere una serie de medidas de protección a la víctima que, además de respetar su dignidad y sus derechos fundamentales, contribuyen para una persecución penal más efectiva, sobretodo para el desmonte de las redes de la trata.

Entre las medidas sugeridas, se puede mencionar la protección de la identidad y privacidad de la víctima, derecho de informarse, derecho a la seguridad, derecho a la indemnización, atención a sus necesidades especiales, medidas de recuperación (física, psicológica y social) y respeto a su condición de víctima, que es diferente de un emigrante clandestino y de un partícipe del delito. Así, el trabajo del Ministerio Público Federal en la lucha contra la trata de personas, en su eje represivo, garantiza una perspectiva humanizada del proceso penal, porque cree que la víctima es una verdadera titular de derechos y no sólo una fuente de prueba.

[1] La trata internacional de personas para fines de explotación sexual (redacción dada por la Ley n° 12.015, de 2009). Artículo 231. Promover o facilitar la entrada en el territorio nacional, de alguien que venga a ejercer la prostitución u otras formas de explotación sexual, o la salida de alguien que va a llevarlo a cabo en el extranjero. Pena – reclusión de tres (3) a ocho (8) años. § 1° – Incurre en la misma pena la persona que agencia, incita, o compra a la persona víctima de la trata, así como, conociendo de esta condición, la transporta, traslada o hospeda. § 2° – La pena se aumentará en la mitad si: I – La víctima es menor de dieciocho (18) años; II – la víctima, por enfermedad o discapacidad mental, no tiene el conocimiento necesario para la práctica del acto; III – si el agente es ascendente, padrastro, madrastra, hermano, hijastro, cónyuge, tutor o curador, empleado de la víctima; o caso haya asumido, por ley o cualquier otra manera, obligación de cuidado, protección o vigilancia; o IV – hay uso de violencia, amenazas graves o fraude. § 3° – Si el delito se comete con el fin de obtener una ventaja económica se aplica también la pena de multa.

[2] La trata interna de personas para fines de explotación sexual. Artículo

231-A – Promover o facilitar el desplazamiento de alguien dentro del territorio nacional para el ejercicio de la prostitución u otra manera de explotación sexual: Pena – reclusión, de 2 (dos) a 6 (seis) años. § 1º – Incurrir en la misma pena la persona que agencia, incita, o compra a la persona víctima de la trata, así como, conociendo de esta condición, la transporta, traslada u hospeda. § 2º – La pena se aumentará en la mitad si: I – La víctima es menor de dieciocho (18) años; II – la víctima, por enfermedad o discapacidad mental, no tienen el conocimiento necesario para la práctica del acto; III – si el agente es ascendente, padrastro, madrastra, hermano, hijastro, cónyuge, tutor o curador, empleado de la víctima; o caso haya asumido, por ley o cualquier otra manera, obligación de cuidado, protección o vigilancia; o IV – hay uso de violencia, amenazas graves o fraude. § 3º – Si el delito se comete con el fin de obtener una ventaja económica se aplica también la pena de multa.

[3] Ministério Público Federal. Câmara de Coordenação e Revisão, 2. Roteiro de Atuação: Tráfico Internacional de Pessoas. Coordenação e organização Raquel Elias Ferreira Dodge. Brasília: MPF, 2014, p. 21.

Trata de Personas La Experiencia en Costa Rica

Jorge Chavarría Guzmán
Fiscal General, Costa Rica

Buenas tardes, señoras y señores, amigos todos. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales para participar en este especial evento.

Quisiera decir en primer lugar que personalmente comparto en un todo el pensamiento del Papa Francisco, al decir que *“La trata de personas es una herida abierta en el cuerpo de la sociedad contemporánea, una llaga en el cuerpo de Cristo. Es un crimen contra la humanidad”* (10 de abril del 2014).

Este fenómeno criminal ha afectado a Costa Rica, al igual que a otros países de la región, siendo utilizado su territorio por las organizaciones como un lugar de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños víctimas de trata, tanto con fines de explotación sexual, como de tráfico de órganos, de tráfico de adopciones ilegales y de trabajo forzado. Desde la perspectiva del Derecho Penal costarricense estas conductas se ven como un delito internacional (Art. 7 del C.P.) y se castiga, conforme al Art. 172 del CP, a quien *“promueva, facilite o favorezca la entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro del territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular”*. Como puede observarse la descripción típica varía de la redacción contenida en el Protocolo de la Convención de Palermo.

Para efectos de la exposición vamos a presentar una caracterización o tipología a partir del análisis de casos de tres manifestaciones importantes del fenómeno de la Trata de Personas que se han dado en Costa Rica pues consideramos de importancia que los patrones criminales que

van siendo descubiertos sean difundidos y conocidos por las autoridades de otros países para facilitar su comprensión y la eventual detección de otros casos. Presentaremos en ese sentido dos casos investigados en Costa Rica, uno de Trata de personas menores de edad con fines de adopción, otro de Trata de personas con fines de extracción de órganos y finalmente la interacción entre redes de tráfico y redes de crimen organizado a nivel regional.

Tipología de un Caso de Trata de Personas Menores de Edad con Fines de Adopción Irregular

En septiembre del 2003, la policía encuentra 9 niños pequeños en una casa, dos de ellos con sólo algunos meses de edad, en condiciones insalubres y al cuidado de una mujer.

En la investigación se estableció que estos niños habían sido “comprados” en Guatemala a familias indígenas por sumas de entre los \$500 y los \$2000, aprovechándose el agente de la vulnerabilidad económica y cultural de los padres, a quienes se les enfatizaba la vida futura en pobreza del niño si permanecía con ellos.

A los padres se les financiaba un viaje acompañados por el “comprador” con el fin de que entregaran en San José, Costa Rica, al niño en la casa que fue allanada por la policía.

En Costa Rica un bufete de abogados hacía los trámites administrativos como si se tratara de niños costarricenses abandonados por sus padres. Así lograban obtener una resolución administrativa que les permitía tramitar la adopción. Nótese que de esta manera el niño quedaba “lavado” pues se le desvinculaba totalmente de la acción de compra y de su origen.

Obtenida la resolución administrativa que colocaba al niño en condición de adoptable, procedían a ofrecerlo en adopción a través de la página Web de una agencia de adopciones ubicada en la Florida, EE.UU.

Esta Agencia cobraba entre 42 000 y 70 000 euros por cada niño a quien tramitaban su adopción.

a.- Estructura Criminal

La Organización Criminal que se logró desarticular estaba integrada por:

- 1 Ingeniero Industrial con tres nacionalidades colombiano-israelí-estadounidense, líder del grupo
- 1 abogado costarricense
- 1 una abogada especialista en adopciones estadounidense
- 1 una Agencia de Adopciones debidamente registrada en los EEUU
- 10 personas encargadas de diversas tareas, entre ellas el cuidado de los niños y al menos
- 1 encargado de contactar y convencer a las víctimas

c.- Características de la acción

- **Aprovechamiento de la Vulnerabilidad:** A los padres se les ofrece dinero y un mejor futuro para su hijo (a) aprovechando su vulnerabilidad cultural y de pobreza.
- **Transnacionalidad de la Acción:** Se utiliza el territorio de tres países, a saber Guatemala, Costa Rica, los Estados Unidos.
- **Fragmentación de la Acción:** El *iter criminis*, actos de ideación, preparación ejecución y consumación se fragmenta territorialmente:
 - En un país se substrahe o se compra al niño y se le saca de sus fronteras
 - En el segundo país se oculta y se regulariza su estatus legal.
 - En el tercer país se coloca en adopción legalmente a través de una agencia autorizada.
 - En el cuarto país tendrá el niño su residencia con sus padres adoptivos.
- **Resultado del Caso:** En este caso se logró la imposición de una pena de 10 años de prisión.
- **Formula del Éxito:** Cooperación Internacional para compartir información + Coordinación Internacional + Uso de tecnología.

El éxito fue producto del trabajo conjunto de fiscales y policías de Guatemala, Costa Rica y Los Estados Unidos y el uso de la videoconferencia para la recepción de testigos en el juicio oral entre Guatemala y Costa Rica.

Tipología de un Caso de Trata para la Extracción Ilícita de Órganos

Desde septiembre del 2009 hasta el 10 de octubre del 2013, 14 personas con nacionalidad israelita, griega y estadounidense, necesitados de un trasplante de riñón, recurrieron a una red criminal que operaba entre Israel y Costa Rica para resolver su problema de salud.

Doce de ellos lograron hacerse el trasplante. La cirugía fue realizada en algunas ocasiones en hospitales de Costa Rica y otras en Israel.

Todas las víctimas a quienes se les extrajo un riñón se encontraban en condición de vulnerabilidad económica y cultural. A nueve de ellas se les pagó la suma de 20 000 dólares; a una se le pagó 10 000 mil dólares y a tres de ellas, se les canceló la suma de 6 000 dólares.

El caso se logró descubrir gracias a que dos de las víctimas que viajaron a Israel para que se les extrajera el riñón no supieron contestar las preguntas del oficial de migración que los atendió, razón por la cual no se les permitió la entrada. Al intervenir la embajada de Costa Rica, el embajador, quien había realizado un curso de Trata de Personas, detectó el caso y lo puso en conocimiento de la policía costarricense.

Cuando la red encontraba a una persona interesada en el trasplante, contactaban a un médico nefrólogo costarricense. Este le comunicaba a los “reclutadores” que buscaran a un posible donante a quienes se les pagó entre seis mil y veinte mil dólares.

Una vez reclutado el donante se procedía a hacer los exámenes médicos de compatibilidad. Si eran compatibles se programaba la cirugía para ser realizada en Costa Rica o en Israel.

a.- Estructura criminal en Costa Rica

En virtud de que pese a las coordinaciones que se trataron de hacer con Israel no se obtuvo ninguna información en cuanto a las características de la orga-

nización en ese país o en otros, solo referimos la organización en Costa Rica, la cual constaba de:

- 1 médico cirujano especialista en nefrología.
- 2 médicos cirujanos especialistas en urología.
- 1 médico cirujano especialista en medicina vascular periférica.
- El dueño de una pizzería que actuaba como “reclutador” del probable donante.
- Una mujer policía quien en las noches trabajaba como taxista informal quien “reclutaba” también donantes.

b.- Características de la acción

- **Vulnerabilidad Cultural y por Pobreza:** Todas las víctimas eran vulnerables por pobreza y culturalmente. Se les pagaron sumas entre 6 000 y 20 000 dólares.
- **Transnacionalidad de la Acción:** Los israelitas, Griegos y estadounidenses. En el caso de los israelitas que lograron el transplante fueron contactados en su país por una parte de la organización criminal que permanece oculta. En ese país se hicieron en algunos casos las pruebas de compatibilidad y en otros en Costa Rica. Los transplantes se hicieron unos en Costa Rica y otros en Israel.
- **Fragmentación de la Acción:** Los actos de preparación ejecución y consumación se fragmentan territorialmente al igual que el reclutamiento de las personas necesitadas de transplante (Israel, Grecia, Estados Unidos) y el reclutamiento de los donantes (Costa Rica).
- **Resultado del Caso:** En este caso la acusación fue admitida y el juicio oral se realizará en los próximos meses.
- **Formula de Éxito:** Capacitación del personal diplomático + Cooperación Internacional+ Policía Capacitada.

El contexto Internacional de las Migraciones, las Redes de Tráfico de Personas y las Redes de Trata

Para finalizar esta exposición me gustaría hacer una breve exposición de un serio problema transnacional, del cual Costa Rica es parte.

De conformidad con la información publicada por ACNUR *“el número total de refugiados y desplazados internos a los que protegió o asistió ACNUR en 2014 aumentó en 11 millones de personas, alcanzando un récord de 46.7 millones de personas al concluir el año” (ACNUR 2014).*

Costa Rica no escapa a la realidad del tráfico de migrantes que vienen de diferentes partes del mundo, entre ellas la India y África, a través del Sudán y Brasil hacia los Estados Unidos.

En la actualidad se investiga en la región una extensa red de tráfico transcontinental en las que las redes de tráfico de migrantes además de explotarlos económicamente, interaccionan con las redes de crimen organizado. Estas últimas aprovechándose de la vulnerabilidad del migrante, los someten a situaciones de trata, muchas veces con resultados de muerte.

Conclusión

Como conclusión general quiero centrar su atención en un elemento vital. Como hemos señalado en los casos citados el éxito ha dependido en mucho de la cooperación internacional tanto en el suministro de información como en la coordinación de acciones.

Si realmente queremos tener éxito a nivel internacional esta cooperación debe extenderse no sólo a nivel regional sino también a nivel transcontinental.

En síntesis, es imposible tener éxito en la eliminación del crimen organizado si actuamos desorganizadamente.

Muchas gracias.

La (mala) Experiencia de Venezuela en la Lucha Contra la Trata de Personas

Luis Alberto Petit Guerra¹

Venezuela

*“La trata de personas es la forma más
extendida de esclavitud en este siglo XXI”.*
Papa Francisco, mensaje pascual, 2013.

A manera de colofón. De cómo la comunidad internacional está inmersa en prácticas que no parecen suficientes para afrontar un problema complejo.

Aunque no se pone en dudas la preocupación internacional desde sus primeros pasos² para la elaboración e intercambio de información para ordenar sistemáticamente los temas que hoy nos convocan con la aprobación de diversos convenios celebrados³ (de los que Venezuela forma parte)⁴; en lo personal cuestionamos que se esté haciendo (*todo*) lo necesario; o lo que se esté haciendo sea suficiente, como negamos. Al menos eso parece de la ex-

¹ (i) Ex Juez de Carrera por concurso de oposición en lo Civil, Mercantil y amparo constitucional, Caracas; (ii) Magister y Candidato a Doctor en Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla (US), España; (iii) Especialista en Derecho Procesal Civil, Universidad Central de Venezuela (UCV); (iv) Especialista en Derecho Procesal Constitucional, Universidad Montevideo (UMA); (v) Profesor de posgrado, Universidad Central de Venezuela (UCV); (vi) Profesor de posgrado, Universidad Montevideo (UMA); (vii) Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (IIDP), del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional (IIDPC); (viii) del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC); (viii) de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional (AMJC) y (ix) del Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional (CEDEPCO). Conferencias y/o publicaciones en Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela. Correo electrónico: luispetitguerra@hotmail.com.

² Por ejemplo, como las iniciativas de la Oficina para la supresión del tráfico de mujeres y niños, ante la antigua Liga de las Naciones. Vid., Mayorca, Juan (1967). Introducción al estudio de una anomalía social, Ediciones del Cuatricentenario de Caracas, Comisión de Obras económicas, Caracas, p. 103.

³ Barreiro Sanmartín, Francisco (2013). Trafficking in Human Beings: Modern Slavery, Workshop 2-3 November 2013. Pontifical Academy of Sciences, Pontifical Academy of Social Sciences, and World Federation of the Catholic Medical Associations. De la respectiva fuente electrónica se precisa que entre las regulaciones internacionales, están las siguientes: (i) Convenio para la represión de la trata de blancas, firmado en París en 1910; (ii) Convenio para la represión de la trata de mujeres y niños, Ginebra en 1921, (iii) Convenio para la represión de la trata de mujeres mayores de edad, Ginebra en 1933, (iv) Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Nueva York en 1950. Asimismo, el protocolo de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional firmado en Nueva York el 5 de noviembre del año 2000, como consecuencia de la Resolución 53/111 de la Asamblea General de 9 de diciembre de 1998 que nombró un comité especial intergubernamental para estudiar la trata de mujeres y niños. Disponible: http://www.endslavery.va/content/endslavery/es/publications/scripta_varia_122/barreiro.html.

⁴ Convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada transnacional; Protocolo para reprimir, prevenir y sancionar la Trata de personas, especialmente mujeres y niños; y Protocolo en contra el tráfico ilícitos de migrantes por tierra, mar y aire. Disponible: http://www.mp.gov.ve/web/guest/organos-receptores-de-denuncias-delitos-comunes?p_p_id=62_INSTANCE_9IKZ&p_p_state=maximized&_62_INSTANCE_9IKZ_struts_action=/journal_articles/view&_62_INSTANCE_9IKZ_groupId=T0136&_62_INSTANCE_9IKZ_articleId=1970886&_62_INSTANCE_9IKZ_version=1.0.

perencia real y viva que nos ha correspondido como investigador. Cuando se propone este tipo de eventos debe potenciarse toda clase de ideas contrastables que permita a los órganos correspondientes analizar determinadas situaciones encaminadas para ayudar a la toma de políticas por los diversos órganos competentes; reconociendo las fortalezas que implica todo este esfuerzo; pero también sus áreas problemáticas. Agrupar tantas experiencias, nos convoca a *“un planteamiento global del tema de los derechos humanos y un compromiso serio en su defensa”*⁵

La experiencia personal permite compartir algunas cuestiones inquietantes: Como profesor e investigador hemos participado en distintos congresos y foros en varios países⁶; siendo paradigmático —y preocupante—, que habiendo viajado en grupo familiar (con esposa e hija menor de edad), en *ninguno, salvo el pedido del pasaporte, requirieron otros documentos legales que acreditaran la paternidad de mi hija* menor de edad o el certificado de matrimonio de mi esposa como acompañante o en su caso, si se necesitaba o no permiso de viaje.

Hacemos constar que sólo en el interior de uno de ellos (específicamente en Costa Rica) haciendo un viaje de conexión a la ciudad de Golfito para participar en una conferencia, un agente policial finalmente requirió los “papeles” de filiación de nuestra hija (es decir, excepcionalmente se cumplió con lo que debería ser una obligación básica).

Estas evidencias tristemente no parecen aisladas, si se observa que son cada vez más frecuentes los casos de niños —la más reciente en 2016⁷— que sin ser detectados inicialmente por las autoridades, han podido viajar *solos* tanto en vuelos

⁵ Santo Padre Juan Pablo II (1999). El secreto de la paz verdadera reside en el respeto de los derechos humanos, en: Materiales de lectura. Justicia y derechos humanos, III taller regional Norte, centro y Sur, Comisión episcopal de acción social, Lima, Perú, p. 21.

⁶ Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de Norteamérica, España, Francia, Italia, Marruecos, México, Panamá, Perú, Suiza.

⁷ Se trata de una niña de entre 2 y 4 años de edad, que tomó vuelo desde Turquía a Francia (2016). Este caso debe llamar la atención a la comunidad internacional al tratarse de una bebe de meses que expuesta su vida, fue colocada en un equipaje de mano (2016). Disponible: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160310_francia_turquia_vuelo_bebe_bolso_trafico_wbm

⁸ Un niño de 9 años de edad tomó vuelo interno desde Minneapolis a las Vegas (2013); otro niño de 9 años de edad, igualmente voló desde Seattle a Phoenix (2007); ambos dentro del territorio interno de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde en teoría, existe un hermético sistema de seguridad a raíz de los eventos del 11 de septiembre.

⁹ Un niño de 11 años de edad tomó vuelo internacional desde Manchester a Roma (2012). Disponible: <http://cnnespanol.cnn.com/2013/10/06/un-nino-de-9-anos-viaja-solo-y-sin-boleto-de-minneapolis-a-las-vegas/#0>.

nacionales⁸ como internacionales⁹. Este panorama parece indicar que el sistema internacional opera con cierta laxitud en los controles para contrarrestar la trata de “personas”; pero opera en forma severa al momento de las exigencias y requisa frente al tránsito de “cosas” (maletas, bolsos, bultos, líquidos, cajas, etc.).

Parece entonces que hay mejores prácticas de seguridad en contra del terrorismo y el tráfico de estupefacientes; lo cual lleva a preguntarse, *¿dónde quedan las mejores prácticas para evitar tanta libertad del tránsito/tráfico de personas?* Si a ello le agregamos las fronteras libres de la Comunidad Europea y de los sistemas de integración Latinoamericano como Mercosur o la Comunidad Andina de Naciones; comprobaremos que el sistema capitalista voraz lo que busca es mayor ejercicio de *libertades* con el objeto de favorecer el comercio, en el sentido de la facilitación del tránsito de “mercancías”. Bajo esa visión capitalista del mundo “moderno” se debe producir *más* dinero, *más* rápido y otorgar *más* libertad como sea posible para el intercambio de bienes y servicios; pero parece haber olvidado a la persona como el centro del sistema.

Estas políticas globales (por ejemplo de no preocuparse demasiado con pedir papeles a los niños que viajan acompañados e incluso solos), salvo las odiosas exigencias para evitar la inmigración “ilegal” en sus respectivos países, continuarán mientras no haya reglas internacionales con instrucciones claras y severas sanciones por incumplimiento. Pero aparte de tal omisión por la aplicación de criterios formales, la cosa se pone peor con las prácticas de corrupción de las autoridades para favorecer el tráfico de personas, no sólo policiales y militares¹⁰; sino hasta de los propios jueces¹¹ en el campo de la adopción (ilegal) internacional¹², ello sin obviar el creciente tránsito por determinados conflictos armados y/o desastres naturales¹³. La realidad es desalentadora.

Venezuela frente a la trata de personas. Marco normativo *vs.* su práctica real. ¿Y qué dice el Estado?

¹⁰ Red regional de organizaciones civiles para las migraciones (sin fecha). Niños migrantes: los fantasmas del cartel. Disponible: http://www.rocmm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=201:ninos-migrantes-los-fantasmas-del-cartel&catid=9&Itemid=104.

¹¹ Disponible: <http://www.lanacion.com.ar/570640-crece-el-trafico-de-ninos-en-america-latina>

¹² Entre otros graves casos. Disponible: (i) <http://www.lanacion.com.ar/570640-crece-el-trafico-de-ninos-en-america-latina>; (ii) <http://www.lanacion.com.ar/570640-crece-el-trafico-de-ninos-en-america-latina>; (iii) <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/08/28/mando-del-dif-vendia-ninos-en-20-mil-dolares>.

¹³ El País, España (2013). Disponible: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/06/actualidad/1386360679_823451.html.

En principio, este país cuenta con un rico marco normativo (que en teoría sería suficiente para enfrentar toda la problemática derivada del tráfico ilegal de personas), como se evidencia en su propia Constitución cuando proscribire toda forma de trata de personas y esclavitud (art. 54 CRBV); y de la preeminencia que concede a los tratados de derechos humanos (por encima de la Constitución), cuando son más beneficiosos para el ciudadano (art. 23 CRBV). De esta manera se tiene por buenas intenciones los distintos convenios relacionados para regular la trata de personas en general, como (i) el Convenio de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y su protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, en especial de mujeres y niños; (ii) Protocolo de la convención de los Derechos del niño relativo a la venta, contra la prostitución infantil y utilización de los niños en pornografía; (iii) Protocolo sobre el tráfico ilícito de migrantes por mar y tierra; entre los más destacados. Deben sumarse de igual modo algunos convenios bilaterales sobre crimen organizado y otros sobre protección integral de niños/niñas y adolescentes. Asimismo, se consigue en lo interno las siguientes leyes: (i) Ley contra la Delincuencia Organizada y Terrorismo de 2012 (cuyo art. 41 penaliza la figura de trata de personas); (ii) Ley Orgánica sobre el Derecho de mujeres a una vida sin violencia de 2007; (iii) Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente de 2007; (iv) Ley de extranjería de 2004; y (v) el propio Código Penal cuya última reforma de 2000, sanciona algunas figuras relacionadas con este flagelo.

Ahora bien, ese rico marco normativo contrasta sin embargo con el resultado en la práctica cotidiana: Para nadie es un secreto la compleja situación que atraviesa el Estado de derecho en Venezuela; aspecto del que sólo cabe mencionar para comprender —mas no justificar— el contexto en donde se desarrollan estas líneas. Un Estado que por lo general, y por razones ajenas a este estudio, no tiene solvencia en el manejo de información pública (basados en unos criterios de soberanía del siglo pasado que no permiten la contrastación ni interna y menos externa). De hecho, acerca de los esfuerzos y acciones contra la trata de personas, solo constan algunas informes presentados por el Estado venezolano en 2008¹⁴ y de otros esfuerzos en 2011¹⁵ (como el Plan Nacional de Acción

¹⁴ Disponible: <http://www.embavenez-us.org/pdfs/informedelito.pdf>.

¹⁵ Disponible: <http://scm.oas.org/pdfs/2014/RA00232T.pdf>.

para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, elaborado en el año 2011); pero a partir de allí existe la sensación de que ese país se congeló en el tiempo, al punto de no saberse cifras oficiales hasta el presente.

Efectivamente, por tales motivos se viene reconociendo “que los organismos públicos nacionales no permiten el acceso directo a la información que ellos producen”.¹⁶ Dada esa preocupación, la sociedad civil y el mundo académico se ha venido pronunciando ante la falta de transparencia informativa, aprovechando sobre todo: *“El mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU), creado en el año 2006 por el Sistema de las Naciones Unidas, y en el que por primera vez todos los Estados miembros son examinados sin distinción alguna, es una oportunidad para elevar el interés, exponer abiertamente a la luz pública nacional e internacional y evaluar de manera rigurosa y exhaustiva la situación sobre los derechos humanos en relación con los compromisos y obligaciones de los Estados, emanados de los Pactos y Convenios Internacionales suscritos en materia de derechos humanos.”*¹⁷

Con estos antecedentes, la sociedad civil en general, la academia nacional y algunos países que pretenden mayor colaboración del Estado venezolano se quejan por la falta de acciones concretas y contrastables para enfrentar la trata de personas; al punto que, por ejemplo, ha sido reconocida por diversos países su falta de transparencia en el manejo de la información y metas en materia de trata de personas;¹⁸ entrando en una odiosa lista junto a otros países.¹⁹ En este punto es relevante el informe del **Observatorio Regional de Trata de Personas en América Latina**, cuyo trabajo sobre la trata de personas en Venezuela *“se advierte inconsistencia en la data de organismos públicos, organizaciones sociales e internacionales que revela la ausencia de políticas de seguimiento y el desconocimiento en relación al creciente número de delitos de tráfico de personas en el territorio venezolano.”*²⁰

¹⁶ Coddetta, Carolina (2013). Prostitución y tráfico de mujeres y niñas: un problema global, en: Observatorio venezolano de los derechos humanos de las mujeres. Disponible: <http://observatorioddhhmujeres.org/modulos/prostitucion%20e-a-3.htm>.

¹⁷ Reyna, Feliciano y D'Elia, Yolanda. El Examen Periódico de los Derechos Humanos en Venezuela en el marco del Sistema de las Naciones Unidas. Civilis. Disponible: http://w2.ucab.edu.ve/ri_files/CDH/Lineastematicas/Informe%20sobre%20EPU%20Venezuela%20en%20la%20ONU.pdf.

¹⁸ Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Disponible: <http://spanish.caracas.usembassy.gov/noticias-y-eventos/informes/trata-de-personas/2012.html>.

¹⁹ Diario El Comercio, Perú (2014). Disponible: <http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/venezuela-entro-lista-negra-sobre-trata-personas-noticia-1737590>.

²⁰ Observatorio regional de Trata de Persona en América Latina (2015). La trata de personas en Venezuela. Disponible: <http://www.derechos.org.ve/2015/11/09/informe-atpal-la-trata-de-personas-en-venezuela/>.

Entonces, la situación va más allá de la sola responsabilidad universal; pues de entrada no sólo no hay jueces especializados en materia de trata de personas; sino además, que los designados no cumplen en su inmensa mayoría con la forma constitucional (al ser designados temporalmente sin los debidos concursos públicos de oposición); cuestión que hemos criticado en otro lado en contra de la alta politización del sistema judicial tanto en la democracia de *ayer* (1959-1998) como en la de *hoy* (1999-2016).²¹ Por consiguiente, a pesar de estar previsto en la vigente Constitución que el Ministerio Público o fiscal y el Poder judicial son autónomos e independientes; en contraste, solo existen en el país cinco fiscales titulares proveídos mediante concursos públicos (ya que no hay concursos para proveer otros cargos de fiscales)²²; asimismo, desde 2003 están suspendidos indefinidamente los respectivos concursos de jueces en general, incluyendo en materia criminal;²³ lo que redundará en falta de independencia y autonomía de esos jueces y fiscales designados de una manera distinta.²⁴ Si a ello se suma la precaria y deficitaria dotación salarial del Poder judicial —entre las más bajas de la región— conjuntamente con la de sus cuerpos policiales; no será difícil imaginar los riesgos de que el sistema pueda ser cooptado por la corrupción o la incidencia política.

Se explican así las razones del por qué los temas que acá se abordan se evalúan en clave negativa. De manera que no se pueden perseguir, atacar y evitar las penosas consecuencias del negocio de los tratantes ante la falta de un poder judicial independiente, de una verdadera institucionalidad democrática. Porque sin institucionalidad democrática, sin organismos calificados técnica y humanamente; sin independencia ni autonomía funcional se está en presencia de un “Estado débil”; el cual es propenso a llevar a la anarquía.²⁵ Vale decir, que lamentablemente, ya estamos en ese *estado de cosas*.

²¹ Petit Guerra, Luis (2013). Estudio sistemático de los órganos de gobierno judicial: una retrospectiva en Venezuela, en: Estudios sobre la administración de tribunales, Ed. Porrúa, México, pp. 205 y ss.

²² Ejemplo de ello, es que entre los años 2004 y 2009 se designaron 2 664 fiscales sin los debidos concursos; y asimismo, que hasta enero de 2014, solo habrían sido designados mediante concursos públicos cuatro fiscales titulares. Vid. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2012), informe anual, párr. 478, p. 451.

²³ “Desde 2003 —dice un Informe de la Comisión Internacional de Juristas— no se han vuelto a realizar concursos públicos para proveer cargos de jueces ni para los ascensos”. International Commission of Jurists (2015). Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela, Ginebra, Suiza, p. 16.

²⁴ Human Rights Watch (2004). Manipulando el Estado de derecho: independencia del poder judicial amenazada en Venezuela, Vol. 16, núm. 3. Disponible: <https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0604sp.pdf>

²⁵ Carrillo Flórez, Fernando (2009). Los retos de la reforma de la justicia en América Latina, en: Materiales de lectura. Justicia y derechos humanos, III taller regional Norte, centro y Sur, Comisión episcopal de acción social, Lima, Perú, p. 145.

Para muestra de la vaguedad con que se manejan estos temas, la propia autoridad nacional ha venido reconociendo *la gravedad* del aumento de este tipo de delitos en la propia capital de la República, según se desprende de las afirmaciones del propio Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica que así lo subraya (2015), pero que sin mostrar cifras oficiales (las cuales son secreto de Estado), ni las acciones políticas dirigidas a tal fin (por ejemplo la creación de departamentos policiales especializados, asignación de recursos técnicos, operativos ni económicos, cooperación internacional, etc.); afirmaba la decisión de atacarla y erradicarla; al tiempo que reconocía la corrupción de ciertos funcionarios judiciales detrás del negocio (por ejemplo gestionarles permisos de trabajos a las mujeres venezolanas, brasileñas y colombianas, principalmente, usadas en tales actividades).²⁶

En ese orden (o más bien “desorden”), se entiende que la trata de personas junto a otros delitos va en aumento; si se tiene por intactas las condiciones “sociales” junto a la ineffectividad del aparato del Estado, sobre todo cuando se viene reconociendo que *la trata de personas* (junto con el secuestro, la venta de estupefacientes y los homicidios por encargo) provienen y son dirigidas desde las propias cárceles (que han quedado sin control de las autoridades).²⁷ Por consiguiente, a falta de apoyo estadístico de los entes del Estado constitucionalmente previstos para ello, algunos trabajos nacionales especializados reconocen que “en Venezuela la trata y el tráfico de personas son delitos que se han incrementado en forma alarmante en los últimos años”;²⁸ asunto que se replica en la frontera, por cuya omisión oficial, ha correspondido a la Iglesia católica tal denuncia.²⁹

De las conclusiones (nunca finales ni completas). Venezuela está en un mapa que requiere ajustes.

²⁶ Diario El Universal (2015), versión digital y en formato impreso, Caracas, 18 de octubre de 2015, pág. 8, del cuerpo 4. Entrevista a Yahir Muñoz, Vice-ministro de Política Interior y Justicia, título de la entrevista: “Es grave la trata de blancas en Caracas”. Disponible: <http://www.eluniversal.com/sucesos/151018/es-grave-la-trata-de-blancas-en-caracas>.

²⁷ Natalia Matamoros, Diario El Tiempo (2016), Entorno 33, del 26 de marzo. Disponible: <http://www.entornointeligente.com/articulo/8153069/VENEZUELA-70-de-los-centros-penitenciarios-estan-bajo-el-dominio-de-los-pranes>.

²⁸ Coddetta, Carolina (2013). Prostitución y tráfico de mujeres y niñas: un problema global, en: Observatorio venezolano de los derechos humanos de las mujeres. Disponible: <http://observatorioddhnmujeres.org/modulos/prostitucion%20e-a-3.htm>.

²⁹ Padre Arturo Sosa, diario Quinto día, pp. 16 y ss. 17 de octubre de 2008.

El caso de Venezuela se resume en una frase lapidaria: “Sin independencia judicial no hay Estado de Derecho”;³⁰ y poco o nada puede hacer para mejorar su imagen cuando no hay concierto internacional que le exija cambios por parte de la ONU o la OEA. Nótese que el proyecto de Ley de Tratas reposa en la Asamblea desde 2007, y hoy continúa la falta de colaboración en informar los avances y acciones en el tema; a pesar de que los informes regionales dan cuenta del aumento del tráfico de personas por territorio venezolano:

*“Con una población de más de 30 millones de habitantes, Venezuela es un país de tránsito, origen y destino de personas víctimas del delito de la trata, especialmente en las modalidades de explotación sexual y servidumbre doméstica” destaca el informe, que advierte que el clima de inestabilidad política y social, la impunidad y la crisis económica hacen de Venezuela uno de los países latinoamericanos más golpeado por este flagelo en los últimos años”.*³¹

A pesar de tal denuncia; poco importa al resto de países que se dedican hacer negocios con aquel o fungir de aliados políticos/ideológicos. La manera en que está racionalizado el sistema económico; justifica el “aislamiento” de Venezuela en el contexto universal en la falta de cumplimiento de metas comunes, pues a pesar de la fragilidad institucional y su poca voluntad para enfrentar el tema tan delicado contra la trata de personas; para los demás países mientras sus intereses y negocios den frutos; *la lucha por los derechos humanos puede pasar en un segundo plano.*

Las distintas agrupaciones regionales (Comunidad Europea, Mercosur, Pacto Andino, etc.), en vez de buscar solo beneficios arancelarios y comerciales; deberían disponer de protocolos reales en derechos humanos; más que comportarse como un club de amigos; allí donde radica la necesidad de estudiar el tránsito de personas por encima del tránsito de mercancías. La idea de fronteras libres para el intercambio comercial; lamentablemente facilita el “trabajo” de los tratantes de personas (bajo el criterio de estricto negocio).

³⁰ Carrillo Flórez, Fernando (2009). Los retos de la reforma de la justicia en América Latina, en: Materiales de lectura. Justicia y derechos humanos, III taller regional Norte, centro y sur, Comisión episcopal de acción social, Lima, Perú, p.173.

³¹ Observatorio regional de Trata de Personas en América Latina (2015). La trata de personas en Venezuela. Disponible: <http://www.derechos.org.ve/2015/11/09/informe-otpal-la-trata-de-personas-en-venezuela/>.

Este mismo aspecto pasa por las prácticas por internet; pues todo parte de la “rapidez” de las operaciones (e-learning, e-commerce); donde a pesar de saberse que por este medio se usan miles de aplicaciones y prácticas que facilitan la trata de personas (ofertas falsas de empleos, adopciones, pornografía infantil, etc.); los países más influyentes siguen asumiendo una actitud más “libertaria” que regulatoria del sistema.

A modo de propuesta, (i) se plantea la necesidad de estudiar la existencia de una base de datos con miras a comunicar el tránsito de niños, niñas, adolescentes y sobre todo mujeres a los distintos destinos (países); (ii) que las respectivas agencias de inteligencia, militares y policiales indaguen en las distintas empresas y personas sobre las ofertas de empleo en cada uno de sus territorios; (iii) que se lleve registro de las respectivas direcciones IP de los ordenadores con miras a lograr un control sobre acceso a la pornografía infantil; explotación laboral y negocios “relacionados” que faciliten la trata; (iv) que se lleve un mejor registro para determinar los orígenes de los niños/niñas que se proveen para el sistema de adopciones internacionales (donde China, Rusia y Guatemala provocan la mayor oferta y los Estados Unidos de Norteamérica la mayor demanda); (iv) que se defina un documento homologable (distinto al pasaporte) al que se acceda en línea desde cada país, para registrar y controlar el tránsito de menores de edad de un territorio a otro.

En fin, estas son sólo ideas puntuales, jamás finales ni completas; y responden a la necesidad de provocar más controles. Parte de entender que la libertad no es un concepto absoluto, que el mercado debe ser regulado (pero no limitado); que las fronteras deben tener más controles, que la internet requiere de nuevas aplicaciones donde podamos saber quién y cómo accede en tiempo real a determinadas páginas y aplicaciones (tal como hace la inteligencia para infiltrar a los grupos terroristas o sus posibles conexiones o contra el narcotráfico mediante agentes encubiertos).

Convenimos que se han dados pasos importantes, pero aún no son suficientes. La gravedad del flagelo lo hace un problema tan complejo que no se puede mirar con soluciones puntuales y descontextualizadas. Los tratantes llevan la delantera gracias a la burocracia de los distintos sistemas, los diversos errores administrativos, la falsificación de documentos, junto a la corrupción; que se conjugan con laxos criterios gubernativos y universales que así se lo permiten. Es tiempo de tomarse la dignidad de las personas en serio; y no como simple consumidores, que tienen un número de DNI o un registro como contribuyente. *¡Somos la voz de aquellos que no pueden gritar!*

La Lucha contra la Trata de Personas: La experiencia de Grecia

Christos Naintos

Grecia

Su Excelencia, distinguidos participantes. El tema de mi intervención es la lucha contra la trata de personas en Grecia, centrándose en el marco legislativo actual y sus problemas de implementación.

Observaciones Preliminares

La trata de seres humanos es un fenómeno particularmente agudo que evoluciona rápidamente y tiene implicaciones políticas, sociales y económicas. Su característica principal radica en que continuamente toma nuevas formas. A pesar de que los juristas se centran en la trata con fines de explotación sexual (prostitución, prostitución infantil, la pornografía infantil) y el trabajo forzoso¹, también han surgido otras formas de explotación, incluyendo el reclutamiento de combatientes para conflictos armados y el tráfico de bebés, órganos y tejidos. La trata de personas en todas sus formas no es sólo un problema social interno, sino también un asunto internacional, ya que rara vez se agota dentro de las fronteras de un país en el mundo globalizado moderno². Como un fenómeno estrechamente relacionado con el crimen organizado de la misma manera que el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

El Marco Legislativo Griego

La Ley griega 3064/2002 y el Decreto Presidencial 233/2003 prohíben tanto el tráfico sexual y el trabajo forzado y prescriben penas de hasta 10 años de prisión. Debido a la gravedad de las sanciones amenazadas, medidas espe-

¹ Ver en adelante, M. Papantoniou – Frangouli, *Trafficking for labour in Greece*, 2011, pp. 1-166, http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/10_Slavery___Anti-Trafficking/National_reports/2011-03-Greek_Report_GOING_BEYOND.pdf (last access 22.6.2016).

² Ver en adelante, T. Kyriazi, *Trafficking in human beings*, 2010, pp. 87-101, 297-308.

ciales de investigación pueden llevarse a cabo para su detección. Más específicamente, PD 233/2003 es un acto de Derecho derivado emitido sobre la base de una autorización legal del artículo 12 de la Ley 3064/2002. Prevé las disposiciones operativas en vista de la aplicación del artículo 12 de la Ley Nº 3064/2002 sobre la protección y socorro de las víctimas de los delitos descritos en los artículos 323, 323A, 323B, 348A, 349, 351 y 351A del Código Penal y de los artículos 29 (5) y (6) y 30 de la Ley 4251/2014. Cabe señalar que la DP 233/2003 ha sido objeto de varias modificaciones a través de los años, lo que resultó en la extensión progresiva de su ámbito de aplicación a fin de incluir a las víctimas de delitos de trata de seres humanos. Lo que es esencial para esta evaluación es que este decreto presidencial aplica a todas las víctimas de la trata de seres humanos, nacionales o extranjeros, y su protección no depende de la cooperación con las autoridades penales. Además debe observarse que algunas disposiciones de la DP 233/2003 también hacen referencia cruzada en la Ley 4251/2014 tratando exclusivamente con nacionales de terceros países.

La Ley 3226/2004 es un acto de legislación primaria que establece principalmente la prestación de asistencia jurídica a los ciudadanos de bajos ingresos. Después de las modificaciones introducidas por la Ley 3875/2010, esta ayuda legal se extendió a las víctimas de la trata de seres humanos o tráfico de migrantes.

Además, la Ley 3811/2009 da a las víctimas de delitos de violencia que se han cometido intencionadamente, el derecho a reclamar una indemnización. Después de las modificaciones introducidas por la Ley 3875/2010, el ámbito de aplicación de esta ley se amplió con el fin de cubrir a las víctimas de la trata de seres humanos.

Por otra parte, la Ley 4216/2013 ratifica el Convenio del Consejo de Europa de 2005, en plan de acción contra la trata de seres humanos.

Además, la Ley 4198/2013 tiene como objeto la transposición de la Directiva 2011/36 / UE sobre la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y proteger a sus víctimas, y sustituyendo la Decisión Estructural del Consejo 2002/629 / JAI, a la cual se hace referencia explícita. La adopción de la ley mencionada anteriormente introdujo cambios en el Código Penal y el Código de Pro-

cedimiento Penal, en vista de la armonización de los delitos de trata de seres humanos con la definición del artículo 2 de la Directiva y así garantizar la protección de las víctimas en los procesos penales. Las modificaciones también son llevadas a la Ley 3811/2009 en lo que respecta a las compensaciones concedidas a las víctimas en virtud del artículo 17 de la Directiva. Por otra parte, la Ley 4198/2013 introdujo varias disposiciones nuevas en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas (artículos 5 y 6 de la Directiva), a las herramientas de investigación utilizadas para el crimen organizado (artículo 9 (4) de la Directiva), así como el establecimiento de la Oficina del Relator Nacional (artículos 19 y 20 de la Directiva).

Adicionalmente, la Ley 4251/2014 representa el primer código de concentración y clasificación de las disposiciones en materia de inmigración y de integración social. Más específicamente, la segunda parte, la sección B de la Ley 4251/2014, en realidad transpone la Directiva 2004/81 / UE con el ordenamiento jurídico griego y se ha utilizado en esta evaluación de forma auxiliar con respecto a la asistencia y el apoyo otorgado a las víctimas de la trata de los seres humanos que sean nacionales de terceros países (artículos 11, 12, 13, 14, 16 y 18 de la Directiva).³

Finalmente, la Ley 4267/2014 tiene por objeto la transposición de la Directiva 2011/92 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo “en la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, y se sustituye la Decisión Estructural del Consejo 2004/68 / JAI” a la cual hace referencia explícita. Más específicamente, los artículos de la ley previamente mencionada, trajeron cambios en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal en vista de la armonización de los delitos de explotación sexual de los niños y la pornografía infantil con las definiciones de la Directiva, garantizando la protección de las víctimas infantiles en los procesos penales.

La Aplicación - Estadísticas de Tráfico

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos Griegos, durante los años 2013 - 2015, iniciaron procedimientos penales contra 103 (36 + 35 + 32) sospechosos de la explotación sexual y 16 (6

³ Por todo, nota informativa de 25.4.2016 of the Department of the European Union and International Organizations of the Greek Ministry of Justice, Transparency and Human Rights.

+ 5 + 5) sospechosos de mano de obra forzada. Durante este período de tiempo, las condenas en primera instancia ascendieron a 63 (39 + 12 + 12) con fines de explotación sexual y 11 (7 + 1 + 3) para realizar mano de obra forzada. Solamente 7 personas fueron condenadas en segunda instancia para la explotación sexual y sólo una de mano de obra forzada.

Me gustaría hacer referencia a dos casos. El primero fue la ordenanza del Consejo de Faltas de la Corte de Apelación del Egeo 35/2005⁴. En este caso, los traficantes llevaron a las mujeres de Rusia a su territorio, engañándolas y prometiéndoles empleo en Grecia. De esta manera, se aprovecharon de la vulnerabilidad de su posición (ya que estaban lejos de su país, etc.) y distrajeron su consentimiento para su explotación sexual.

El segundo caso importante fue el de la ordenanza del Consejo de Faltas del Tribunal de primera instancia de Kalamata 34/2011⁵. En este caso, los traficantes actuaban como profesionales; utilizaron la fuerza y las amenazas y se llevaron a sus víctimas a su territorio con el fin de explotar su mendicidad. Más específicamente, los traficantes explotaron la imposición que ejercieron sobre sus víctimas ya que este último vivía en un país extranjero, en completa ignorancia de la lengua griega, así como totalmente dependiente del traficante para su alimentación y supervivencia. Por otra parte, los traficantes utilizaron constantes amenazas contra sus familiares, manteniendo a sus víctimas encerradas en un camión privado con llave, bajo vigilancia constante, obligándolas a la mendicidad y tomando las ganancias para sí mismo.

Existen varias dificultades evidentes para la detección de estos delitos. La principal es la falta de voluntad de las víctimas a testificar y su separación del resto de la sociedad.⁶ La experiencia adquirida en los últimos años ha demostrado que la adopción de medidas especiales de investigación, tales como el rastreo telefónico, y la cooperación judicial y policial, son esenciales para combatir con este tipo de delincuencia transfronteriza. Llevar a cabo investigaciones rutinarias no es suficiente para el desmantelamiento de estas organizaciones criminales, e incluso el levantamiento de la confidencialidad de las comunicaciones no sería suficiente-

⁴ Criminal Justice, 2005, p. 672.

⁵ Criminal Justice, 2012, p. 490.

⁶ Ver en adelante, A. Sykiotou, The difficulties and the importance of recognizing a person as a victim of human trafficking, *Criminology*, 2009, pp. 25-34.

mente eficaz, dado el carácter transfronterizo de estas comunicaciones. La trata de seres humanos es un tipo de crimen organizado que debe abordarse a nivel europeo e internacional.

Observaciones Finales - Soluciones

El papel del Estado no debe limitarse a hacer frente a la trata de personas sólo como un asunto criminal. El derecho penal es sin duda una herramienta útil, pero es insuficiente. El Comité Económico y Social Europeo ha expresado en su opinión “sobre la” Explotación infantil y turismo sexual “ya desde 1998⁷ que” [1]a política de la condena pública, y el enfoque moralista y legalista al problema combinado con la policía, no han dado lugar a un mayor respeto por el orden público ni en los mecanismos de medidas preventivas eficaces y ni de acción”. Los Estados miembros de la UE y las organizaciones internacionales deben abordar las causas profundas del fenómeno, como la extensión de la pobreza y la falta de oportunidades para la mejora del nivel de vida de las víctimas en los países de origen por un lado, y por el otro, la crisis social de valores y la tendencia materialista que es frecuente en las sociedades desarrolladas. Sin lugar a dudas, el tráfico humano se desarrolla sólo cuando hay clientes “listos para comprar”. Al parecer, el desarrollo de una política de reducción de la demanda sería la forma más eficaz de abordar el problema.⁸ El tráfico se ve afectado por muchos fenómenos sociales y el calentamiento global que promueve movimientos migratorios; por lo tanto, la lucha contra el tráfico depende de la regulación de otros importantes problemas sociales, tales como la tasa de inmigración, el reconocimiento de los derechos de las minorías y de trabajo, y la reducción del desempleo, así como la aplicación de una política global de protección del medio ambiente.⁹ En conclusión, hay que destacar especialmente que al promover y facilitar un marco legal de inmigración, Europa puede combatir no sólo la inmigración ilegal, sino también el tráfico de seres humanos.¹⁰

⁷ C 284/14.9.1998, pp. 92-108.

⁸ Ver E. Symeonidou – Kastanidou, Human trafficking: Special countermeasures and implementation problems, Criminal Justice, 2006, pp. 234-237, particularly p. 237.

⁹ Ver en adelante, T. Kyriazi, n. 2 above

¹⁰ Ver en adelante, N. Chatzinikolaou, The criminal repression of illegal immigration and human trafficking in the Greek legal system: searching evaluative coherence between punitive sharpening and victimology approach, Criminal Justice, 2008, pp. 213-230.

El Cambio Climático y el Tráfico Humano Posterior al Tratado de París

Michael B. Gerrard

Andrew Sabin, Profesor de "Professional Practice"
Director de Sabin Center de la Ley de Cambio Climático
Columbia Escuela de Leyes, Nueva York, EEUU

El cambio climático es un importante contribuyente a la migración y el desplazamiento. La persistente sequía obligó a cerca de 1.5 millones de agricultores sirios a trasladarse a ciudades sobrepobladas, contribuyendo a la inestabilidad social y, en última instancia, a la guerra civil que llevó a cientos de miles de personas a intentar cruzar el Mediterráneo hacia Europa. La sequía también agravó las crisis de refugiados en el Sahel, el Cuerno de África, y en otras partes del continente.

El cambio climático puede causar desplazamientos de múltiples formas. Las más destacadas son: la escasez de agua y la desertificación que amenaza los suministros de alimentos y medios de subsistencia, los fenómenos extremos meteorológicos, el aumento del nivel del mar, y el deshielo del Ártico. A menudo estas cuestiones empeoran al combinarse con la pobreza existente y la inestabilidad política.

No existen estimaciones fiables sobre el número de personas que pueden ser desplazadas parcial o totalmente por el cambio climático, debido a las incertidumbres relativas de la velocidad del cambio climático, la capacidad de diferentes sociedades para confrontar este cambio, y otros factores. Sin embargo, varias estimaciones cifran alrededor de cientos de millones de personas a finales de este siglo. De acuerdo con el Comisionado Superior de las Naciones Unidas para los Refugiados, a partir de mediados de 2015, aproximadamente 58 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares como resultado de los desastres naturales, los conflictos y otros factores; el número más grande desde la Segunda Guerra Mundial. El cambio climático podría desplazar varias veces esa cifra. Al menos de existir preparativos y planificaciones avanzadas previos, podemos esperar nuevas crisis internacionales en donde las personas que

huyen de las zonas inhabitables irán, así mismo contemplando las condiciones degradantes y peligrosas en los campos de refugiados inevitables. Está bien documentado que el desplazamiento conduce a un aumento considerable en el tráfico de personas. El Programa Medioambiental de la ONU ha indicado que el tráfico puede aumentar en un 20 a 30% durante los desastres, y la INTERPOL ha advertido que los desastres o conflictos pueden aumentar la exposición de las mujeres a la trata ya que las familias se rompen y los medios de vida se pierden. Hay varios casos en los que se ha demostrado un aumento de la trata como consecuencia de los ciclones, las inundaciones, los terremotos y los tsunamis. Algunos casos son por el tráfico sexual, algunos por el trabajo forzado, y otros por la aceptación de dinero debido a falsas promesas de un pasaje seguro. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) es el mecanismo internacional principal para hacer frente al cambio climático. Lleva a cabo conferencias anuales de los partidos para marcar su rumbo. En la Conferencia de los partidos, celebrada en Cancún, México en 2010, la Convención reconoció por primera vez el problema del desplazamiento humano. Se pidió a los partidos tomar “medidas para mejorar la comprensión, la coordinación y la cooperación en relación al cambio climático inducido por el desplazamiento, la migración y la reubicación planificada, en su caso, en los planos nacional, regional e internacional.” Este tema fue retomado en la Conferencia celebrada en diciembre pasado en París, en donde se solicitó al Comité Ejecutivo Internacional de Mecanismo de Varsovia de Pérdidas y Daños “, a desarrollar recomendaciones para los enfoques integrados para prevenir, minimizar y atender los desplazamientos relacionados con los impactos adversos del cambio climático.” Sin embargo, nada de este acuerdo aborda la cuestión crucial de qué países acogerán el gran número de personas desplazadas por el cambio climático.

En la Conferencia de los Partidos en Copenhague del 2009, se llegó a un acuerdo en donde el incremento máximo tolerable en la temperatura media global es de 2° C (3.6° F) por encima de los niveles preindustriales. Sin embargo, las pequeñas naciones insulares protestaron que esto es demasiado alto, ya que a 2° C estarían por debajo del agua. Ellos presionaron para un objetivo de 1.5° C (2.7° F), y lograron cierto éxito en la Conferencia celebrada en diciembre pasado en París. Se alcanzó un acuerdo ahí en donde el

objetivo sería mantener el aumento de la temperatura media global de “muy por debajo de 2° C”, y “de proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de temperatura a 1.5° C.”

Lamentablemente, la conferencia de París no dio lugar a acuerdos que, de hecho, lograrían ese objetivo. La Conferencia de París adoptó lo que se ha denominado como un “bajo arriba”, en donde cada país presenta su propia promesa para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, llamado Contribuciones Determinadas de Intención Nacional. Casi todos los países presentaron tal promesa. Las promesas no son vinculantes ni ejecutables. Sin embargo, cuando se suma todo, estas promesas llevadas a cabo plenamente, llevarían a un mundo en el año 2100, que es de 3.5° C (6.3° F) por encima de las condiciones pre-industriales.

Un mundo así sería absolutamente catastrófico. Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y prácticamente todos los demás exámenes de la asignatura, un aumento de 3.5° C, no sólo ahogaría las pequeñas naciones insulares, sino también se sumergiría una parte significativa de Bangladesh, el delta del Nilo, el delta del Mekong, y otras zonas bajas del mundo; y conduciría a la fusión de las capas de hielo de la Antártida y de Groenlandia que pondrían en peligro muchas de las ciudades costeras del mundo, desde nueva York a Shanghai. No parece que existan estimaciones del número de personas que estarían desplazadas en una situación de este tipo, pero estaría sin duda en los mil millones. Esto, a su vez, daría lugar a una enorme cantidad de conflictos y tráfico humano. Los negociadores en París entendieron completamente que las promesas realizadas no eran suficientes, y por lo tanto crearon lo que se ha denominado o un “mecanismo de trinquete.” Cada cinco años los partidos de los Estados de la Convención harán nuevas promesas más fuertes que las hechas en París, con la esperanza de cumplir el objetivo de la temperatura. Sin embargo, nos estamos quedando sin tiempo para hacer esto, ya que gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono permanecen en la atmósfera durante un siglo o más, y cada año su nivel en la atmósfera es mayor. Ya sabemos, para cumplir los objetivos de temperatura se requeriría de “emisiones negativas” para finales de este siglo, por lo cual más gases de efecto invernadero tendrían que ser retirados del aire que se emiten en él; y no se sabe hasta qué punto se podría lograr.

Pero una de las acciones necesarias es la eliminación gradual del uso de combustibles fósiles. Esto fue reconocido implícitamente en el acuerdo de París, y se predijo explícitamente por Francisco en *Laudato Si*: “Sabemos que la tecnología basada en el uso de los altamente contaminantes combustibles fósiles —especialmente el carbón, y también el petróleo y, en menor grado el gas— necesita ser reemplazada progresivamente sin demora” (§ 165). Por desgracia, esta transición necesaria se encuentra bajo resistencia masiva por la fuerzas poderosas económicas alrededor del mundo.

La Encíclica también discutió con elocuencia la difícil situación de los desplazados de sus hogares: “Ha habido un trágico aumento en el número de migrantes que tratan de huir de la pobreza creciente causada por la degradación del medio ambiente. No son reconocidos por las convenciones internacionales como refugiados; ellos sufren la pérdida de las vidas que han dejado atrás, sin disfrutar de ningún tipo de protección legal alguna. Lamentablemente existe una indiferencia general de dicho sufrimiento, que está tomando lugar en todo el mundo. Nuestra falta de respuesta a estas tragedias que involucra a nuestros hermanos y hermanas apunta a la pérdida de ese sentido de responsabilidad de nuestros compañeros hombres y mujeres por los cuales se fundamenta toda la sociedad civil.” (§ 25)

El cambio climático representa una de las más profundas injusticias en la sociedad de hoy en día, para los que sufren más, para los desplazados de sus hogares, para los que son más pobres entre nosotros, los que menos han contribuido al exceso de consumo de energía que es la raíz de gran parte del problema. Hay una necesidad urgente de que las personas, independientemente de su fe, presten atención a la llamada del *Laudato si* para proteger al medio ambiente y reducir el sufrimiento de los menos afortunados. Los que estamos en esta sala tenemos una responsabilidad particular para actuar sobre esta frase del párrafo 53 de la encíclica: “El establecimiento de un marco legal que puede establecer límites claros y asegurar la protección de los ecosistemas se ha hecho indispensable, de lo contrario basar las nuevas estructuras de poder basadas en el paradigma tecno económico pueden abrumar no sólo nuestra política, sino también la libertad y la justicia”.

Nuestro Desafío: Erradicar la Trata de Personas en el Siglo XXI

Gloria Guzmán Duque¹

Colombia

En este mundo globalizado, Colombia es un barrio que desde la esquina noroeste de América del Sur o del rincón sureste interconectada con América Central, es paso obligado para el que quiera atravesar el continente. Un barrio desde donde zarpan cargamentos de seres humanos para ser esclavizados en tierras lejanas y a donde también atracan personas de otros países, para ser explotadas y mercantilizadas en condiciones infrahumanas. Un barrio por donde desfilan caravanas de migrantes que buscan una mejor vida, que huyen de la guerra, del hambre y de situaciones extremas. En materia de trata de personas, somos país de origen, de tránsito y de destino, en todas las modalidades posibles en una sociedad azotada por la guerra, el narcotráfico, la corrupción y la desigualdad. Así, la trata de personas que produce nuestra tierra, es una hidra de mil cabezas, que resurge según se detecte un nicho de mercado rentable.

De cara a la complejidad y dificultad a la que nos veremos enfrentados en la sociedad del postconflicto —que tendrá que llegar, espero, antes que cumplamos cien años de soledad—, en esta ocasión me propongo exponer ante mis colegas jueces y juezas de todo el mundo, unas reflexiones sobre *i)* migración y trata; *ii)* Trata de niños y niñas *para* y *en* la guerra; y *iii)* la necesidad de reforzar la persecución penal en contra de los clientes del mercado esclavo.

Migración y Trata

No hay novedad en la migración. Aves, peces y otros animales lo llevan en su ADN. En los humedales de Bogotá, estacionan 64 especies de las 150 borea-

¹ Jueza Penal Colombiana.

les y australes que migran para huir del frío del invierno, buscando mejores oportunidades para alimentarse. Hacen recorridos de hasta 5 000 kilómetros para atravesar el continente y Colombia es su paso obligado.

Adán y Eva expulsados del paraíso, comenzaron una incesante migración. Noé en su arca migró huyendo de la gran inundación (Génesis 7), Abraham sale de Mesopotamia para morir en tierra de Canaán (Génesis 11 y 23), su nieto Jacob huye de las amenazas de Esaú y, después, de su suegro Latam. La historia de la humanidad es la del peregrino en un planeta que no es suyo.

Nada es sencillo para el que migra. Las tinguas azules se orientan por la luna y las estrellas en su vuelo nocturno, pero cuando llegan a Bogotá, las recibe un entramado de cemento sobre lo que otrora fuera una hermosa y fresca sabana, el mar de luces artificiales las confunden, chocándose contra los vidrios de los edificios para caer exhaustas con su hermoso plumaje azul y sus cansadas patitas amarillas, perdidas, heridas y fracturadas, sin poder regresar jamás a su lugar de origen.

Los migrantes se enfrentan a gigantes, como el pueblo antes de pisar tierra prometida: *“todos los hombres que vimos allá eran enormes. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas, y así nos miraban ellos también”* (Números 13,32). Tampoco es fácil para el que recibe al migrante. Se generan conflictos de todo tipo, culturales, económicos y sociales.

“Para los traficantes, las fronteras son una inmensa ventaja comparativa. Trasladar a un esclavo o a una mujer explotada al otro lado del invisible muro, representa enormes ganancias y añade alta, dosis de vulnerabilidad sobre la víctima”, que como las pequeñas tinguas azules cuando llegan a la pavimentada sabana de Bogotá, se pierden para siempre, como José en manos de los revendedores que aumentan su ganancia en cada transacción. Las víctimas llegan a su destino con todo el sistema de códigos de protección desconocidos o alterados, sin documentos, sin el idioma, huérfanos de sus raíces y menguados o anulados en su libertad. Seguimos vendiendo a nuestros hermanos, igual que a José lo hicieron los suyos. Lo hacemos también por omisión, por indiferencia, insensibilidad, exceso de prudencia o ignorancia superable.

En cambio, para las autoridades, las fronteras son una excusa. A pesar del protocolo de Palermo hemos sido flojos para establecer alianzas efectivas

con policías y aparatos judiciales del mundo. “*La Globalización no ha llegado a las Administraciones de justicia nacionales*”. Seguimos con miradas parroquiales, celosos de compartir información, tímidos a la hora de planear y ejecutar operaciones binacionales o multinacionales conjuntas para capturar tratantes de esclavos, confiscarles sus bienes y rescatar víctimas.

Primera breve conclusión: La trata del Protocolo de Palermo, ligada a la migración y a la criminalidad organizada, requiere de actividades judiciales intrépidas y audaces que sobrepasen las diferencias existentes en las prácticas judiciales locales. Fiscales Regionales que levanten evidencias contra tratantes transnacionales, por encima de las barreras nacionales, apoyados por una fuerza policiva conjunta, que entreguen esas evidencias y pruebas para estructurar las acusaciones que se adelanten ante jueces nacionales, podría ser una forma valerosa y oportuna para remover los obstáculos que perpetúan la impunidad de este crimen.

Guerra y Trata

Duele aceptar que, a pesar de los avances internacionales normativos y jurisprudenciales a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y respecto de su especial protección y tutela², siguen existiendo violaciones a los derechos humanos tan flagrantes, como la impune y epidémica práctica del reclutamiento ilícito en la guerra³. Se considera una cifra estimativa modesta de 300 000 menores de edad⁴ reclutados en el mundo⁵ y en Colombia, la Unidad de víctimas tiene registrados 9 000 personas que fueron reclutadas siendo menores de edad.

El uso de los niños, niñas y adolescentes para la guerra tiene cuatro momentos, todos ellos violentos, en los que existen castigos físicos o psicológicos o amenaza de ellos, los cuales constituyen delitos en sí mismos y pueden presentarse independientemente: el enganche, que se da a través del secuestro, del engaño, las

² La Convención de los derechos del niño es el instrumento que más ratificaciones y adhesiones ha recibido.

³ Consideramos guerra como sinónimo de conflicto armado.

⁴ Usaremos las expresiones menores de edad y niños, niñas y adolescentes o infantes y adolescentes para referirnos, a las personas menores de 18 años de edad.

⁵ Cifra de Naciones Unidas en el día Internacional contra la Utilización de Niños Soldado, el 14 de febrero de 2014.

⁶ No existe reclutamiento voluntario, en razón a que la conciencia plena de las consecuencias de la participación en la guerra se halla distorsionada por condiciones que refuerzan una concepción distante de la realidad.

amenazas o extorsiones⁶; el traslado desde sus hogares, instituciones educativas o su entorno, hasta los campamentos, guarniciones militares, la selva o donde quiera que sea el teatro de la guerra, el cual resulta altamente eficaz para desprenderlos y desarraigarlos de sus familias o círculos de contención psicológica y social⁷; el entrenamiento militar en un ambiente de crueldad despiadada que pretende deshumanizarlos, obligándolos a asesinar a sangre fría a sus compañeros cuando infringen las reglas o a presenciar y a participar en violaciones o en otros actos crueles e inhumanos y en los que algunas veces los vuelven adictos al consumo de sustancias sicotrópicas; el momento final es la situación de explotación en la guerra, el trabajo esclavo en el que los conminan en campamentos o unidades militares, con jornadas extenuantes, sin descanso, violencia física y sexual, además de la permanente y siempre presente violencia psicológica, etapa que puede durar toda la vida del ser humano, después que se hace adulto.

Nos preguntamos ¿cómo es posible que estos crímenes se perpetúen a través de los tiempos y en la totalidad de las guerras? La primera razón que encuentro, es la normalización de la guerra como práctica histórica necesaria⁸; así hay un reproche menor, una especie de “mal necesario”, en la utilización de mano de obra infantil o adolescente, invisibilizada, sin costos, muy rentable para los ejércitos y siempre manipulable y dócil para cumplir con tareas abusivas, como sembrar minas, empuñar un arma, servir de escudo, cocinar, lavar ropa, traer agua, o ser utilizados sexualmente. Los ejércitos demandan personal y dado que la guerra se acepta como una determinante histórica invariable, están poco responsabilizados socialmente.

La segunda razón que considero relevante para la perpetuación de este crimen, es el hecho verificable de que la guerra es un negocio cruel que utiliza seres humanos

⁷ “Es muy difícil que vuelvan a ver a sus familias. Lo normal es que además les obliguen a matar a algún miembro de su familia, a su padre, a su hermano mayor o a su tío para que rompan todos los vínculos familiares. Así los deshumanizan y los pueden controlar mucho mejor. Es muy importante que se rompa ese vínculo con la familia, con la unidad tradicional para que puedan ser manipulados más fácilmente”. Chema Caballero, Representante de Desarrollo y Educación Solidaria de la Fundación “El Compromiso”, quien trabajó en la rehabilitación de niños soldados en Sierra Leona. En entrevista http://noticias.lainformacion.com/mundo/chema-caballero-para-formar-a-ninos-soldados-les-obligan-a-matar-a-su-familia_7IJoT7dfAl9INVwO8EJCGr2/ consultada el 19/04/14.

⁸ Hoy hay conflictos en Afganistán, Chad, Filipinas, India, Iraq, Líbano, Myanmar, Pakistan, Malí, Sudán del Sur, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán, Tailandia, Yemen, Siria, Libia, Colombia, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil –estas tres últimas viven el postconflicto- entre otras.²⁰ La guerra pública es un estado de hostilidad armada entre naciones o gobiernos soberanos. Es ley y requisito de la existencia civilizada que los hombres vivan en sociedades políticas que forman unidades organizadas denominadas Estados o naciones, cuyos miembros soportan, disfrutan y sufren juntos el avance y el retroceso, en la paz y en la guerra”. Artículo 20 Código de Lieber, tomado de <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1158/4.pdf> consultado el 22/04/15.

como insumo necesario para mantenerla. La guerra es rentable. Las armas son un negocio demasiado lucrativo a nivel mundial; se considera que el tráfico es el segundo negocio ilícito, después del de las drogas, que moviliza anualmente, según cálculos de distintas agencias de Naciones Unidas, alrededor de veintisiete mil millones de dólares. La guerra se usa para conseguir tierras ricas en petróleo, coltan, oro o diamantes, entre otras materias primas, o por ser buenas para determinado monocultivo, o que se requiere como corredores para sacar drogas ilícitas, contrabando de armas, licor o mercancías, mediante el desplazamiento forzado de la población. También cumplen funciones de posicionamiento geopolítico estratégico e intereses transnacionales⁹. Este dinero beneficia a los ejércitos que participan directamente en el reclutamiento, traslado y explotación de los menores de edad víctimas, y a los Gobiernos que propician las guerras o permiten su perpetuación y también a los involucrados indirectamente, a través de recursos, como ganaderos, hacendados, empresarios o comerciantes lícitos o ilícitos, que venden raciones, uniformes o contrabando.

La tercera razón para la persistencia de este crimen, es que el sistema de protección que rige los conflictos armados, esto es el Derecho Internacional Humanitario —DIH—, no considera a los menores de edad, víctimas del reclutamiento ilícito, como personas protegidas y, por ende, está permitido abrir fuego en contra de ellos, sin ningún miramiento ni consideración.

Los combatientes NO tienen la obligación de atender el principio de interés superior del menor de edad si son miembros de las fuerzas contrarias. Se les da un tratamiento exactamente igual al de cualquier otro enemigo. No se les exige tomar medidas de precaución ni adecuar los medios, las necesidades y los fines militares en la preparación ni en la ejecución de los ataques armados, para evitar o disminuir el ataque a menores de edad integrantes de la fuerza contraria, aunque sea previsible que se les causarán daños con la acción militar. Es decir, que las limitaciones del DIH no se hacen a favor ni en beneficio del interés superior del niño incorporado a las fuerzas armadas.

⁹ "Tan solo para el entrenamiento de fuerzas militares en Irak y Afganistán, los Estados Unidos han invertido aproximadamente \$35 000 millones de dólares desde 2001, y tiene previsto adiestrar más de 100 000 soldados en Afganistán en el curso de los próximos tres años. También ha proporcionado más de \$12 000 millones de dólares en asistencia militar a Pakistán desde 2001. Y tan sólo para el año fiscal 2011, el presidente Obama ha solicitado \$1 066 millones de dólares de esos fondos para Pakistán. El nivel de entrenamiento y equipamiento de los ejércitos de otras naciones para alcanzar los objetivos de los Estados Unidos ha crecido de manera exponencial a lo largo de este período". Informe del Movimiento de reconciliación FOR "Asistencia Militar" coordinado por John Lindsay-Poland en www.forcolombia.org/statisticalreview consultado el 19/04/14.

Las víctimas que padecen sistemáticas y cotidianas violaciones a sus derechos, tales como la situación de pobreza, la violencia, la falta de educación y oportunidades en general, incrementan su vulnerabilidad natural y sus condiciones de mayor debilidad para ser captadas y reclutadas al servicio de la maquinaria militar; ellas no alcanzan a verse como sujetos de derechos, no tienen ningún poder de decisión, quedan atrapadas en una situación que afecta su integridad, su salud física y mental y su identidad.

Si bien el reclutamiento ilícito es un crimen de guerra y una de las conductas más atroces que se han cometido a lo largo de la historia en contra de los menores de edad, en el marco de los conflictos armados internacionales y no internacionales, la impunidad ha perpetuado esta infracción al DIH. Qué no decir de la trata de niños, niñas y adolescentes para la guerra y en la guerra: invisible en clave del Derecho Internacional Humanitario.

Segunda breve conclusión: Es necesario ver más allá del crimen de guerra de reclutamiento ilícito, la explotación que aplasta a los niños, niñas y adolescentes usados en la guerra y para la guerra, como una modalidad de Trata de Personas que es inaplazable combatir desde los estrados judiciales.

Mercado y Trata

La trata es una actividad económica que busca la obtención de ganancias (Jakobson & Kotsadam 2013) y como en toda actividad económica, rige la elemental regla consistente en que la oferta cae cuando no hay demanda. En este globalizado siglo XXI, la connatural migración humana, especialmente la irregular, arrastra el flagelo de la trata de seres humanos. Un ejército de personas desplazadas que caen fácilmente en redes que las esclavizan y las convierten en mercancías reutilizables, en bienes no fungibles. Los tratantes hacen del ser humano único e irrepetible, una vil pieza al que le ponen precio. Precio que lamentablemente, otros congéneres, sin ningún reato de conciencia, están dispuestos a pagar.

Nuestras administraciones de justicia no deben olvidar la persecución de la demanda, como instrumento de prevención general. El cliente que compra un o una esclava, es el combustible que hace posible la existencia de peligrosas redes dispuestas a obtener la jugosa ganancia que les proporcionan sus dineros.

La demanda se afecta por *i*) crisis económicas, como lo documenta Adriana Piscitelli, está sucediendo desde 2009 en España;¹⁰ *ii*) por decisiones legales, como en Suecia, Noruega (y ahora Francia como nos lo explicaba nuestro colega Yves Charpenel en el día de ayer), países en los que se criminaliza la compra de servicios sexuales y *iii*) por la elevación de la conciencia ética y moral de los potenciales clientes.

En el artículo “*The Law and Economics of International Sex Slavery: Prostitution Laws and Trafficking for Sexual Exploitation*”, traducido al español para el libro “Miradas críticas sobre la Trata de Seres Humanos”, Jakobson & Kotsadam se demuestra que en Suecia y Noruega, después de implementar la ley en la que el comprador de prostitución es castigado, se redujo la cifra de trata. Los tratantes, en escucha de sus conversaciones interceptadas, se mostraban reacios a introducir una víctima a esos países porque calculaban perdían tiempo y dinero ante clientes temerosos de ser arrestados, lo cual bajaba la rentabilidad del negocio al tener que invertir más en mantener discreción y clandestinidad máximas.

Con la adopción de esa medida, se ha obtenido éxito en la disminución de la trata de personas con fines de explotación sexual. Respecto de otras modalidades, impactar la demanda sería esencial en cuanto el inmenso poder pacífico y efectivo de quebrar el mercado con la negativa a comprar trabajo esclavo. Concientizar a potenciales clientes respecto de que su actitud indiferente no está exenta de responsabilidad, que puede ser equivalente a la de los tratantes porque su dinero es el motor y el estímulo para conformar la brutalidad de las ambiciosas mafias de tratantes, puede resultar clave y definitivo en nuestra lucha.

Por supuesto, atacar la demanda no quiere decir dejar de monitorear la oferta. Hay que continuar con la persecución penal de las grandes mafias y también de las que delinquen de manera rudimentaria, hay que acrecentar las labores de identificación proactiva de víctimas de trata, observando nuevas rutas y modalidades y rescatándolas, porque, como dice el Papa Francisco, ahí está Cristo crucificado.

¹⁰ “Reconsideración de las nociones de trata con fines de explotación sexual y de sus víctimas”, en el libro de las compiladoras Hurtado & Iranzo, “Miradas críticas sobre la trata de seres humanos”, Editorial Kimpres, 2015, páginas 253 y siguientes.

Breve conclusión final: Esta cumbre mundial de jueces convocada por el Papa Francisco debe ser el inicio de una gran fuerza conjunta internacional de jueces, juezas y fiscales contra la esclavitud moderna. Tenemos tareas comunes pendientes. La hidra no se derrota simplemente cortando sus cabezas que renacen incesantemente; es necesario ser creativos y estar unidos. Propongo un nuevo encuentro para decidir las siguientes acciones. Sé que no es fácil; pero qué obra que valga la pena lo es?

Colegas jueces y juezas del mundo, quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.

***Procesamientos de Servidumbre Doméstica:
¿Una paradoja para los Buscadores de Datos?***

Richard S. Moultrie, Jr.
Atlanta, Georgia, EE.UU

¿Qué Quiero Decir por “Paradoja de los Buscadores de Datos?”

La servidumbre doméstica es una forma de trata de personas extremadamente difíciles de detectar y mucho más perniciosa e insidiosa que otras formas de tráfico de mano de obra. Por ejemplo, a diferencia de las víctimas de trata forzadas a trabajar en granjas o en las empresas públicas donde la detección de la conducta criminal del traficante puede ocurrir con mayor facilidad, el trabajo de los empleados domésticos se realiza en casas particulares. El trabajo doméstico se produce a menudo en ausencia de cualquier contrato formal y, en algunos países, ni siquiera se reconoce como trabajo en absoluto, ni un sector regulado de la población activa. La servidumbre doméstica también se caracteriza por situaciones que aumentan la vulnerabilidad de estas víctimas de la trata al abuso y la explotación, particularmente debido a su aislamiento; el hecho de que estas víctimas a menudo no son ciudadanos legales del país en el que son esclavizados y así carecen de información acerca de sus derechos; la dependencia de estas víctimas de su empleador para la alimentación y la vivienda; y el hecho de que —en muchos de los casos procesados en los Estados Unidos— las víctimas de tráfico doméstico son nuevos en los Estados Unidos, ya sea con conocimientos del idioma Inglés pobres o inexistentes, creando así una barrera crítica para estas víctimas para notificar a las autoridades sobre su circunstancia.

Y sin embargo, en muchos procesamientos la servidumbre doméstica, los buscadores de datos y los jurados se enfrentan a supuestos fácticos en la que las víctimas de servidumbre doméstica recuentan instancias en donde dejaron la casa de sus traficantes —para asistir a servicios religiosos, por ejemplo, o para visitar a sus familiares—. Las víctimas suelen detallar años de explotación donde sufrían sin buscar ayuda de la policía o la ayuda de amigos y familiares. A veces las víctimas se involucran en conductas que pueden ser explotadas por los traficantes que ponen en

duda su credibilidad. La evidencia, por ejemplo, que las víctimas obtuvieron una visa para entrar en el país en el que trabajaron al afirmar falsamente que sólo iban de visita y no para trabajar, no funciona. Y con la misma frecuencia, estas víctimas reportan cuentas de su tráfico que no implican fuerza física ni servidumbre. Datos que por lo tanto— en su cara— parecen contradecir al menos la percepción general de “trabajo forzado.” Una evidente paradoja si me explico.

Pero a medida que las leyes de muchos países reconocen, el servicio doméstico puede, y a menudo ocurre, producirse únicamente como el resultado de una coacción psicológica. En su apasionada “Introducción” a la cumbre, monseñor Marcelo Sánchez Sorondo remarcó que, “Es tristemente común —pero demasiado superficial— reducir la violencia a agresión física pura,” dadas las nuevas formas de esclavitud que, incluso en ausencia de violencia física, todavía resultan en “cuerpos y almas heridas.” Para aquellos de nosotros que sirven como fiscales, asumimos la frecuente tarea difícil de educar a los buscadores de datos y a los jurados para ver el delito de la servidumbre doméstica a través de un prisma más expansivo de una conducta criminal: uno en el que el tráfico puede ser y generalmente es, logrado a través de medios no violentos.

¿Como Fiscales, Persuadimos a los Hechos Buscadores a que el Tráfico Doméstico ha Ocurrido en la Ausencia de Fuerza o Señales Evidentes de Compulsión?

En muchos países, incluyendo los Estados Unidos, se define la “servidumbre involuntaria” de manera muy amplia, abarcando las condiciones bajo las cuales los traficantes obligan a laborar al servicio doméstico por: (1) el daño que amenaza a terceras personas, como los niños u otros miembros de la familia; (2) la amenaza de las víctimas con la detención o la deportación como resultado de su situación ilegal en el país en el que están trabajando; o (3) utilizando cualquier esquema diseñado para causar que una empleada doméstica crea que su rechazo a trabajar dará lugar a un grave daño a sí misma o a alguien más. En lugar de codificar la violencia real como la *sin qua non* para comprobar este delito, los legisladores estadounidenses han promulgado leyes de trabajo forzado que permiten a los buscadores de datos a condenar a los traficantes que obligan el trabajo de estas víctimas únicamente por el uso de la coacción psicológica y la evidencia de las vulnerabilidades especiales de la víctima.

Para determinar si el traficante amenazó u forzosamente obligó a una empleada doméstica a realizar trabajos o servicios bajo las leyes de Estados Unidos, consecuentemente, la cuestión pertinente no es si la conducta del traficante habría sido suficiente para intimidar o coaccionar a una persona estadounidense educada, financieramente capaz y culturalmente y socialmente consiente a permanecer en servicio. En dado caso, el análisis adecuado es si la conducta del traficante podría intimidar y coaccionar a una persona razonable en la situación de la víctima a creer que ella debe permanecer en el servicio del traficante. Nuestros tribunales han interpretado la “especial vulnerabilidad” de la víctima para incluir sus antecedentes, su situación legal en el país en el que labora, su experiencia, su educación, su estatus socio-económico, y el desequilibrio en relación con la situación económica de vida del traficante. Y nuestros tribunales han dejado muy claro que una víctima doméstica que razonablemente cree que no puede salir —basado en la coacción psicológica de su traficante— no tiene la obligación positiva de tratar de escapar.

De hecho, la mayoría de los casos de servicio doméstico que mi oficina ha manejado no han implicado el uso real de la fuerza o la violencia; en cambio, nos hemos basado en la evidencia de la coacción psicológica y el uso del traficante de un entorno de miedo para obligar a trabajar a la víctima sobre la base de estas vulnerabilidades especiales.

Estudio de Caso (India)

Un caso involucró a un oficial de policía de sexo masculino, a su esposa, y al padre del oficial de policía, que era un ex juez. La mujer, nativa de la India, convenció a una mujer joven —también de la India— a viajar a los Estados Unidos para trabajar como niñera de su hija de 4 años de edad. A cambio, la pareja estuvo de acuerdo en pagarle a la víctima un sueldo, a enseñarle a conducir, y tratarla como miembro de la familia. El padre del oficial de policía usó su influencia como juez para proporcionar una carta de patrocinio para la víctima, afirmando en la carta de patrocinio que la víctima sólo venía a los Estados Unidos como visitante sabiendo que su hijo y su nuera planeaban emplear a la mujer. Inicialmente la pareja trató a la víctima con gusto después de su llegada a los Estados Unidos. Pero una vez que su visa expiró, ya estando ilegalmente en los Estados Unidos, la pareja comenzó a insultar a la víctima y amenazándola con llevarla a la cárcel y deportándola si se negaba a

trabajar o se quejaba de sus condiciones laborales. Pero lo más devastador de todo, la esposa —de nuevo nativa de la India y que conocía a la familia de la víctima en la India— amenazó con decirle a la familia de la víctima que era una ladrona, que salía con hombres fuera de su raza y religión, y que estaba involucrada en actividades terroristas. Estas amenazas psicológicas demostraron ser más que suficiente para que los traficantes pudieran mantener a su víctima como prisionera virtual en su casa durante años, en ausencia de golpes o servidumbre.

Estudio de Caso (Swazilandia, África)

Del mismo modo, otro caso reciente de servidumbre doméstica que nuestra oficina procesó es el de una mujer desde el Reino de Swazilandia, África, a quien convencieron un ministro y su esposa de viajar a los Estados Unidos para ayudar a atender una boda para el hijo de la pareja. A su llegada a los Estados Unidos, sin embargo, la pareja confiscó los documentos de viaje de la víctima y la obligó a trabajar como una niñera para su nieto y ama de casa durante casi tres años. La víctima, una mujer de 29 años de edad, nunca había viajado fuera de su pequeño país de África. Por lo que llegó a los Estados Unidos sin saber hablar inglés con eficacia, sin saber conducir ni utilizar un teléfono para comunicarse con sus familiares y prometido. Sus traficantes no recurrieron a la violencia para obligarla a trabajar. En su lugar, le dijeron que si trataba de salir, los funcionarios de inmigración de su casa vendrían por la noche, para arrestarla, encerrarla durante años, y luego deportarla del país. Una vez más, ninguno de estos casos implicaron el uso de la fuerza. Y, sin embargo, estos dos casos se resolvieron mediante declaraciones de culpabilidad como resultado de los esfuerzos extraordinarios nuestros investigadores realizaron para corroborar que los testimonios de las víctimas de la coacción psicológica de los traficantes.

¿Qué Responsabilidades Tienen que Soportar como Fiscales para Ayudar a los Buscadores de Datos, Garantizando que Hemos Tomado Medidas para Presentar la Historia de la Víctima en el Juicio para Cumplir con Nuestra Carga de Pruebas?

De nuevo en su “Introducción”, Monseñor Sánchez Sorondo elogia a participantes en esta cumbre a “mejorar [la] apreciación de las necesidades

de las víctimas.” Para los fiscales, significa que tenemos el deber de no dejar ninguna piedra volteada en la búsqueda de pruebas que corroboren las cuentas de estas víctimas —especialmente desde que estos casos de trata en particular involucran pocos testigos capaces de ofrecer evidencia directa de amenaza o fuerza.

En un caso reciente de servidumbre doméstica que manejé, viajé con agentes de caso para el país de origen de la víctima, el Reino de Swazilandia, África. La víctima, en lugar de utilizar los beneficios de inmigración disponibles para ella en los Estados Unidos, en un principio optó por regresar a su país natal. Por lo que los agentes de caso y yo viajamos a Swazilandia para preparar a la víctima para el juicio y entrevistar a los miembros de su familia y otros testigos acerca de las circunstancias del tráfico de la víctima y las promesas hechas a ella por los traficantes. El equipo fiscal también visitó áreas similares en donde la víctima había vivido una vida empobrecida antes de viajar a los Estados Unidos, tomando fotografías de la zona por lo que los buscadores de datos tendrían el beneficio de las imágenes visuales que podrían subrayar cómo el traficante utilizó vulnerabilidades especiales de las víctimas —incluyendo su antecedente pobre— para obligar su mano de obra.

Con frecuencia, también, nuestros casos de servicio doméstico son el resultado de la colaboración de varios organismos, utilizando la experiencia de la Oficina Federal de Investigaciones de EE.UU. para identificar, recuperar y buscar elementos físicos de pruebas —como computadoras y teléfonos celulares—; agentes de inmigración y servicios de seguridad para ayudar a localizar, entrevistar, y asegurar el desplazamiento de las víctimas o testigos internacionales en preparación para el juicio; el Departamento de Trabajo de EE.UU, un organismo capaz de proporcionar análisis financiero para ayudar a establecer la cantidad de ganancias que los empleados domésticos forzados al trabajo deben de recibir de sus traficantes al momento de condena; y el Departamento de Oficina de Seguridad Diplomática, cuyos agentes especiales se encuentran en cada misión diplomática de Estados Unidos y son asignados a investigar las denuncias de trata de personas. A través de este tipo de multi-agencia y el apoyo internacional, nuestra oficina ha tenido éxito en la superación de obstáculos en materia de prueba en estos casos de trata y en la presentación de casos convincentes a la determinación de los buscadores de datos a pesar de los retos inherentes.

La Lucha contra la Servidumbre Doméstica También se Basa en Campañas de Sensibilización para Educar a las Comunidades Acerca de este Crimen de Tráfico

Uno de los objetivos de esta cumbre es también explorar y considerar soluciones al problema de la trata de personas. Mi oficina considera que nuestra misión de educar al público acerca de la servidumbre doméstica a ser un componente crítico en la lucha contra el éxito de esta forma de trata de personas. Por lo que los fiscales en nuestra oficina, incluido el Fiscal de los Estados Unidos, visitan regularmente iglesias, otras casas de culto, y las organizaciones civiles para ayudar a los miembros del público a desarrollar una comprensión más clara de la servidumbre doméstica; y, sobre todo, cómo informar de este tipo de delitos. Este tipo de campañas de concientización pública han producido importantes dividendos: dos de los tres casos recientes de servidumbre doméstica procesado con éxito por mi oficina resultó de pistas que venían de los vecinos de los traficantes que buscaban información sobre el tráfico de personas, se dieron cuenta de que las mujeres acerca de los cuales estaban preocupadas podían ser víctimas de explotación, e informaron sus sospechas a las agencias federales.

En uno de los casos, una mujer de negocios exitosa reclutó a dos mujeres jóvenes de Nigeria, en diferentes momentos, para viajar a los Estados Unidos para el cuidado de la hija joven de la mujer y servir como su ama de llaves. Obligó a las mujeres jóvenes a trabajar sin paga durante largas horas, requiriéndoles que durmieran en el suelo, y a comer alimentos en mal estado. Esta traficante golpeaba a sus víctimas, regularmente pegándoles con diversos objetos, incluyendo palos de escoba. La primera de las dos víctimas escapó de la traficante como resultado de la astucia de la vecina de la traficante. Esta vecina fue testigo de una conducta entre el traficante y una de las jóvenes que la alarmó. La vecina entonces llevó a cabo una investigación sobre el tráfico de personas, conjeturó que estaba siendo testigo de un crimen, y ayudó a la joven a escapar. Pero trágicamente, el vecino no reportó el incidente a la policía, lo que permitió a la traficante a explotar a su segunda víctima. Afortunadamente, la segunda víctima reveló su tráfico a un ministro local cuya congregación había aprendido recientemente acerca de la trata de personas y posteriormente informó del crimen a la policía, dando lugar a un juicio y a la condena de la traficante. Campañas de concienciación pública respecto a

la servidumbre doméstica, en consecuencia, deben ocupar un peldaño más crítico de cualquier plataforma comprehensiva para atacar esta forma de trata de personas.

Conclusión

Así, mientras que esta categoría de delito sobre la trata de personas puede plantear desafíos únicos a la determinación de los buscadores de datos, involucrar contradicciones inherentes pueden resultar difíciles de resolver para los jueces y los jurados, diligente para los fiscales, organismos de colaboración por parte de agentes oficiales, y una mayor conciencia y comprensión de servidumbre doméstica, pueden combinarse para servir los intereses de la justicia para las víctimas, si no impedir los crímenes por completo en ciertas circunstancias. Y todos tenemos nuestras respectivas funciones que desempeñar en este proceso: en un caso, una de las víctimas, a la vez.

El Rol de la Corte Suprema de Argentina en Materia de Narcotráfico

Ricardo Luis Lorenzetti

Argentina

Lo primero que me parece que es importante señalar es justamente esta visión, mi presentación de hoy va a estar centrada en tres aspectos: los valores, los conceptos y las políticas públicas; y el primero tiene que ver con los valores, porque la visión del Papa Francisco al instalar estos temas, es una visión que no está dirigida solamente a la cristiandad, sino a toda la humanidad, el papa le habla a la humanidad y cuando menciona palabras tan fuertes como decir trata de personas, nueva esclavitud en el siglo XXI, narcotráfico, la casa común está en peligro, estas palabras suenan mucho más allá del lenguaje jurídico, suenan en nuestras conciencias, suenan en nuestra vergüenza, porque vemos que progresa la tecnología y retroceden los valores, porque nadie pensó que en el siglo XXI estuviéramos hablando de nueva esclavitud. De manera que el primer y más importante aspecto de esta reunión es precisamente hablar de valores, ¿cuáles son los valores por los cuales hemos llegado a este punto? y hay necesidad de decir, como lo dice encíclica y este mensaje del Papa, hay que transformar nuestra cultura dentro de lo cual está nuestro sistema jurídico, pero si no entendemos que es lo que está en el fondo es un problema de valores, es muy difícil que luego podamos proceder con la técnica jurídica adecuada.

En el ámbito de la corte suprema de justicia de la Argentina venimos trabajando en esta línea, consistentemente tenemos una oficina de la mujer creada hace muchos años, que trabaja sobre trata de personas, tenemos una política pública en esta materia, un registro inaugurado recientemente sobre feminicidios, tenemos también registros sobre las sentencias, difusión de la información, participación pública, tenemos una Comisión Nacional creada para la lucha contra el narcotráfico, en fin, hay muchas políticas públicas que nuestra corte suprema y el poder judicial han llevado adelante en la Argentina, pero lo que es importante de este evento, es que no se trata sólo de las experiencias nacionales, sino que nos encontremos todos y pensemos que este es un problema global. No se trata sólo de que nosotros sigamos repitiendo

lo que hacemos en cada uno de los países, si no que entendamos que hay que coordinar y pensar distinto y aquí voy al segundo aspecto que parece muy importante de los mensajes que nos ha transmitido el Papa Francisco.

El tema de los conceptos, reflexionábamos ayer sobre este concepto de liquidez, lo que se vuelve líquido es lo que pierde sustancia, aquella visión de Bauman sobre una sociedad más líquida, en dos temas es importante señalarlo esto en el tema de la noción de ciudadanos y en el tema de la noción de juez. En la globalización actual ambos términos corren el riesgo de ser líquidos, licuarse y perder sustancia, significado, y al perder significado real pierden credibilidad y si pierden credibilidad quiere decir que nuestro pueblo no cree en su significado, y esto es lo que no debe llamar la atención.

La ciudadanía es algo que se creó en el siglo XIX con la noción de estado, sólo el que es ciudadano tiene derechos reconocidos por el estado nacional ¿cuál es el problema que vemos hoy?, que muchísimas personas no son ciudadanos de un estado y entonces no se les reconocen los derechos, pero que decimos contrariamente a eso, que hoy en día la noción de derechos humanos pertenece a la persona, la titularidad de los derechos humanos es de las personas y no solo del ciudadano y esta es una reflexión que puede parecer teórica pero es muy importante, cuando nosotros asistimos a los debates internacionales de las cortes supremas, vemos que muchos países dicen que sus derechos son muy desarrollados, que reconocen derechos fundamentales, pero se los reconocen a los ciudadanos y quien es no son ciudadanos, los inmigrantes, las personas que llegan mediante el tráfico de la trata, los trabajadores ilegales, todos aquéllos que transitan por el lado oscuro de las sociedades, no tienen ningún derecho.

Hemos vuelto a mil años atrás, *“hemos vuelto a la división entre los ciudadanos que se conocían en el derecho romano, y quienes no son ciudadanos que son cosas, esclavos, no tenían derechos, esto está pasando en la era de la globalización”*, por eso nosotros decimos que los derechos fundamentales, los derechos humanos o los derechos constitucionales conforme quieran cada uno designarlos, pertenecen a la persona y no al ciudadano, esto significa, por ejemplo, en concreto que la Corte Suprema de la Argentina haya dicho, que el derecho a la vivienda o a la atención médica, pertenece a una persona que no era Argentina, que vivía en la calle. Esta afirmación, esta sentencia, en mu-

chos países sería inadmisible, por eso es necesario pensar que nosotros como jueces en todo el planeta tenemos que decir que los derechos fundamentales son de los ciudadanos, porque decir que el ciudadano es alguien que tiene un título de tal pero no tiene derechos fundamentales, no tiene derecho a los bienes primarios, como la vivienda, la alimentación, la educación, la libertad, es una caricatura, es una afirmación declarativa y este es un concepto líquido, por eso hay que cambiar esta cultura de los conceptos líquidos, vacíos, y pensar en términos reales. Uno de los grandes cambios es éste y esto lo vamos a hacer los poderes judiciales, los jueces ya lo hemos hecho en la Argentina con varias sentencias cambiando este criterio, los derechos fundamentales son de la persona y no sólo de quién es el ciudadano.

El segundo concepto que se ha vuelto líquido es el de juez, porque la noción de juez y de la autoridad judicial, de aquel que administra justicia, está relacionada con el sistema institucional, está relacionada con la credibilidad, el juez, el que es reconocido como tal; pero si el juez, como reflexionábamos ayer, es atacado o presionado o en alguna medida, es deteriorado en su imagen, cuestión que se vive hoy en todo el mundo, este es un juez líquido, es una licuación de la autoridad judicial y si nosotros sumamos este tema al primero, entendemos mejor las cuestiones, porque muchos se preguntan, ¿porque hay presiones o licuación de la autoridad judicial, porque es importante sino no la habría, por que luchar contra la trata de personas, contra la esclavitud del siglo XXI, es algo que hacen los jueces o por lo menos deberíamos de hacer, y si lo hacemos obviamente tenemos presiones, porque la mejor manera de que no funcione la lucha contra la trata, contra la esclavitud, es que no haya alguien con fuerza necesaria para que todas las leyes se impongan y esto es lo que está sucediendo, de manera tal que volver líquido el concepto de ciudadano o el de juez, no son cuestiones que ocurren porque si, son estrategias de debilitamiento de la persona en el Siglo XXI.

Por eso me parece que es muy importante que hayamos reflexionado sobre ambos temas en el día de ayer.

Y esto nos lleva al tercero, que es la necesidad de cooperar, el Papa hablo de cooperar, creando lugares de encuentro y este es un lugar de encuentro, en esta materia en lo que se refiere al narcotráfico, nosotros nos hemos desarrollado en la Argentina una política de este tipo, de cooperación y hemos

creado una Comisión Nacional de Narcotráfico y en una de las reuniones que hicimos recientemente se definió un área, que es el área del conurbano, y es una experiencia muy interesante porque así hemos hecho una primera reunión, en la cual están los jueces, están la autoridad del poder ejecutivo, es decir, los organismos de seguridad, en la cual está la iglesia, porque los párrocos son los que tienen la primera información de lo que sucede en los barrios, la gente, como se decía ayer, va y le cuenta al cura de lugar lo que está sucediendo, están las sociedades no gubernamentales, es decir, crear lugares de encuentro significa que las políticas públicas no son decisiones de una sola persona, necesitamos no un barco, necesitamos una flota donde todos estén encaminados en la misma dirección, los jueces, los políticos, la iglesia, las organizaciones sociales, todos en el mismo sentido.

Esta es la necesidad de políticas públicas basada en la cooperación, en la creación de lugares de encuentro, por eso creo que cuando nosotros asistimos a estas reuniones debemos de tener un modelo de pensamiento distinto, no se trata sólo de repetir lo que venimos haciendo, se trata, como el Papa muy bien lo señala, de cambiar nuestro modo de pensar y nuestro modo de pensar tiene que ser integral, la idea de una ecología integral que está en la encíclica, es una idea extraordinariamente productiva. No podemos solucionar una parte del problema, si no entendemos la globalidad, si no entendemos todas las partes, por eso tenemos que trabajar en los valores, en los conceptos y en las políticas públicas coordinadas. Por eso tenemos que entender que no solamente se trata aquí del problema de la trata, sino que se trata de la esclavitud humana y la esclavitud humana no es un problema aislado, sino que es un problema de igualdad, de discutir seriamente la igualdad, y discutir la igualdad significa también discutir cómo se organiza la sociedad en la economía y esto no se puede discutir si no tenemos también que hay un problema planetario que es la naturaleza, el cuidado de la casa común.

Esta visión integral es un nuevo pensamiento en el siglo XXI, yo creo que es la mejor manera que tenemos hoy de entender lo que nos está pasando, una visión integral y poner de acuerdo al funcionamiento del sistema político, del sistema jurídico, del sistema económico y el sistema de la naturaleza, es nuestra gran tarea de manera que creo que hoy tenemos un lugar de reflexión extraordinaria y que ayer se nos ha dado una idea y una lección a todos los jueces acerca de cómo debemos pensar. Esta reflexión que hicimos ayer me parece

extraordinariamente productiva y los exhorto a todos a que trabajemos en esta línea, sólo así podemos tener la credibilidad que nuestro pueblo reclama de los jueces y de todos los que tenemos responsabilidades en la sociedad.

Quiero terminar agradeciendo nuevamente porque la oportunidad que nos han dado aquí en la academia y quienes nos han convocado es una oportunidad histórica y así debemos entenderlo.

Lo Ordinario y lo Extraordinario en el Crimen Organizado

Daniel Eduardo Adler

Fiscal General Federal y Profesor de Derecho Penal de
la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina)

Resumen

El trabajo se propone describir el carácter ordinario y extraordinario del crimen organizado, estableciendo que la intervención de los agentes estatales, ya sea por comisión u omisión, resulta ser un factor determinante para el enquistamiento de este fenómeno.

Introducción

Los distintos niveles de criminalidad organizada obligan a una reflexión acerca de la interrelación entre ellos y a indagar acerca de las razones por las cuales pequeñas bandas se convierten en grandes organizaciones. El trabajo se propone describir el carácter ordinario y extraordinario del crimen organizado, conforme casos que han pasado ante los tribunales y normas que rigen la materia.

Lo Ordinario

El relato complejo acerca de la criminalidad organizada tiene su contracara cuando se reflexiona sobre cómo se iniciaron estas organizaciones.

Es frecuente que la administración de justicia, enmarañada en trámites burocráticos, no remarque lo que motiva a los hombres al crimen. Las grandes organizaciones criminales comenzaron siendo pequeñas organizaciones, antes sólo bandas y previo a ello sólo asociaciones ocasionales en las cuales dos o más personas convergen para la comisión de un delito.

En el opus criminal colectivo deben rescatarse, desde un punto de vista de la exigencia jurídica internacional, ciertos componentes subjetivos.

El crimen organizado se motiva en situaciones con las que la humanidad convive desde antaño. La codicia, la ira o la soberbia de las personas las lleva a la realización de conductas que tiene su correspondiente definición jurídica. Sin pretensiones de taxatividad, se puede decir que, en términos jurídicos, la codicia se emparenta con el fin lucro, la soberbia al abuso de autoridad y la ira al odio. Se trata de situaciones emocionales, motivaciones o finalidades que se ubican en los elementos subjetivos del tipo penal diferenciados del dolo, entendido este como aquel que tiene en su finalidad a la realización del tipo penal. Esto viene a colación porque la definición normativa del fenómeno (crimen organizado) exige para la constitución del tipo penal internacional que la organización tenga por finalidad la obtención directa o indirecta de un beneficio económico u otro de orden material. Se han dejado de lado otras motivaciones subjetivas que inciden en grupos organizados, como son el odio (de incidencia como los grupos terroristas) o el abuso de poder (se observa en las dictaduras).

Pero, además, para que estas acciones puedan constituir casos de criminalidad organizada, la ley internacional requiere, a saber:

- Que se trate de un grupo estructurado de tres o más personas;
- Con permanencia en el tiempo;
- Que las acciones que lleven adelante sean concertadas;
- Con el propósito de cometer uno o más delitos graves;
- Que las acciones sean transnacionales, esto implica que el delito:
 - *a)* Se comete en más de un Estado; *b)* Se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; *c)* Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o *d)* Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.
- Y que tengan por finalidad obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro de orden material.

Las acciones delictivas de estos grupos se invisibilizan por distintos intereses que las resguardan de las sanciones logrando impunidad. Esto es un mecanismo habitual de comportamiento para mantenerse en el tiempo y lograr

beneficios materiales o de otro tipo. A ello se agrega la mirada complaciente o engañada de la sociedad que no ve en un principio peligro alguno en el inicio de estas organizaciones.

Veamos algunos ejemplos:

- En muchas oportunidades, el delito de trata con fines de explotación sexual tuvo su comienzo en un emprendimiento para ganar dinero fácil, poniendo un prostíbulo barrial. Lo que comenzó siendo un miniemprendimiento, ante la mirada benevolente de los vecinos y autoridades se convirtió luego en una estructura delictiva compleja;
- Los grupos de neonazis que se presentan hoy como un grupo de jóvenes con ciertas simpatías políticas, crecen indebidamente en el desprecio a sus semejantes, con la mirada tolerante de la autoridad que les da cabida. Cabe recordar que los genocidios tuvieron su comienzo en estos grupos minoritarios que odian al otro, al distinto, al que piensa de otro modo, reacciones que son producto de la soberbia y de la ira;
- Quienes trafican drogas no lo hacen gratis, sino con un claro fin de lucro que tiene su origen en la avaricia que los lleva a las acciones de lucro; muchas de estas personas comenzaron siendo consumidores, pasaron a ser trafiadictos y culminaron siendo traficantes, y en muchos casos no han contado con la asistencia social y estatal necesaria para evitar esa escalada de responsabilidad criminal;
- Las dictaduras de América Latina de los años 60 y 70 tuvieron en la soberbia de algunos militares su motivación, impulsados por quienes defendiendo sus intereses, vernáculos y foráneos, engañaron a gran parte de la población y tomaron el poder por las armas. La inacción de los actores estatales, como jueces y fiscales de ese momento, consolidaron esa estructura ilegal.

Estos ejemplos, indican que las organizaciones criminales tuvieron su inicio en situaciones ordinarias llevadas a cabo por hombres ordinarios y que se mantuvieron a lo largo del tiempo con la contribución de ciertas omisiones cómplices de actores estatales que permitieron la consolidación de esa estructura ilegal.

Lo Extraordinario

La pregunta es por qué las acciones ordinarias de hombres ordinarios logran avanzar y desarrollarse a punto tal de conformar grandes organizaciones; cuál es el motivo para que crezcan, se ramifiquen y consoliden. Por qué lo ordinario pasa a constituirse en algo extraordinario como es la macrocriminalidad organizada. No se puede descartar la policausalidad de este fenómeno. Aquí sólo se esbozará un ensayo acerca de uno de los factores que contribuye a pasar de la microcriminalidad a la macrocriminalidad organizada; lo ordinario pasa a ser extraordinario a partir de la actividad estatal, ya sea por comisión u omisión. De acuerdo a la observación empírica y las normas internacionales que rigen la materia, la ausencia de intervención de las autoridades públicas en esos casos, como agentes de promoción del bien común, resulta una causa determinante para el crecimiento de estas organizaciones.

Vayamos a los ejemplos dados.

- Si un comisario de policía ignora que en los alrededores de su comisaría hay una casa de tolerancia, resulta inútil para su función o es un cómplice de los tratantes, y sus omisiones contribuyen a consolidar la organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres y niñas pobres;
- Cuando la autoridad no frena a los grupos que profesan odio y realizan acciones violentas, serán esos grupos quienes finalmente marquen las pautas de convivencia en las calles consolidando la organización violenta;
- Si quienes tienen a su cargo los programas de prevención de las adicciones y quienes llevan a cabo las tareas de investigación y sanción de quienes trafican drogas no ponen su máximo esfuerzo para evitar que la salud de la población corra aún más riesgos, contribuyen a que los traficantes se consoliden en el territorio;
- Hubo jueces y fiscales que trabajaron en las dictaduras. Hubo otros que fueron jueces y fiscales de las dictaduras. Estos últimos contribuyeron a la consolidación de los golpes de estado, pues en el marco de su incumbencia institucional legitimaron la legislación dictatorial y consolidaron así las organizaciones criminales golpistas.

No todas estas omisiones contienen la misma estructura ni la misma relevancia o merecen las mismas consideraciones ni producen las mismas conse-

cuencias. Deben distinguirse tres situaciones en relación a cómo se ubica el funcionario público en relación con las estructuras delictivas, a saber:

- Si la omisión de la autoridad responde a la misma motivación e intencionalidad que la de los grupos (convergencia intencional), se trata de una situación de coautoría o autoría por infracción de deber, pues el funcionario en esos casos resultará un engranaje más de la maquinaria criminal. En este caso el funcionario forma parte de la organización;
- Si la omisión del funcionario se motiva sólo en un acto venal, allí estaremos frente a un delito autónomo de corrupción pública;
- Si la acción se limita a una omisión irresponsable, es factible que incumpla sus deberes funcionales, situación que puede constituir una falta o un delito según el caso.

Estas omisiones son las que permiten el crecimiento de las pequeñas organizaciones, las que liberan el camino para que puedan convertirse en macroorganizaciones. El que no hace debiendo hacer permite que otro haga.

Si Claudio no hubiese dejado pasar tantas cosas, ¿Calígula hubiese sido Calígula?

El criminal más grande es un hombre al que otros hombres debieron ponerle límites cuando tenían el deber de hacerlo y no lo hicieron.

Normativamente podríamos decir que mientras al común de los hombres se les impone el deber de no dañar a otros, los funcionarios están obligados a evitar que los hombres comunes dañen a otros. *“El funcionario público no sólo no debe dañar, sino evitar el daño que puedan realizar con sus acciones dolosas o imprudentes el resto de los hombres.”*

Esto es lo extraordinario del crimen organizado; la participación, por acción u omisión, de funcionarios públicos que, lejos de cumplir su rol general de promover el bien común y específico de ejercer el rol institucional que les compete, permiten que estas organizaciones crezcan y se consoliden.

Este elemento de participación estatal en el delito no es descripto en la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional ni tampoco en las Convenciones Internacionales contra la Corrupción. Sí resulta ser un

elemento constitutivo de los delitos de lesa humanidad conforme el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y las exigencias de la doctrina. La Corte Interamericana ha reconocido, por otra parte, que aún sin tratarse de delitos de lesa humanidad existen casos de graves violaciones a los derechos humanos que deben ser objeto de investigación y eventual sanción por parte de los Estados. A su vez, la doctrina penal ha entendido y atendido, en los últimos años, la existencia de especiales deberes de parte de personas que se encuentran en determinado rol social, lo que ha dado lugar a la conformación de nuevas teorías de la autoría: las de dominio por organización y las de infracción de deber.

Este factor extraordinario, la intervención comisiva u omisiva de funcionarios del estado en la criminalidad organizada, debería ser incluido en las convenciones internacionales pues permitiría:

- visibilizar uno de los factores que inciden en el crecimiento de la criminalidad organizada;
- posibilitar la imprescriptibilidad de estos delitos, en cuanto la participación de agentes estatales dificulta la investigación y sanción efectiva de quienes cometen estos delitos y participan de las organizaciones;
- la correspondencia con las posiciones que se abren en doctrina acerca de la autoría por dominio de organización y por infracción de deber de los funcionarios públicos.

Colofón: La Necesidad de Prevenir y Sancionar a los Autores y de Reparar a las Víctimas

Se requiere evitar que estas organizaciones criminales crezcan.

La mejor prevención para evitar la criminalidad organizada es la educación en ciertos principios y valores que consolidan la conciencia social. En este punto resulta decisivo desterrar actitudes que afectan a toda la comunidad y que dan ocasión al crecimiento de las organizaciones criminales; el no te metas, el por algo será, el dejar pasar y hacer, todo ello beneficia a algunos pero no al conjunto. La ausencia de participación en los problemas comunitarios resulta funcional a quienes defienden sus propios intereses y responden a una visión egoísta desde el punto de vista de la ética social. Los dirigentes, los jueces y fiscales con los que cuenta un Estado no son superhombres, sino hom-

bres que responden a la idiosincrasia de una comunidad determinada pues nacieron, se criaron y desarrollaron su vida en ella. Educar en la solidaridad comunitaria y en principios de justicia resulta el mejor antídoto para dejar fuera la posibilidad de crecimiento de las organizaciones criminales. Los ciudadanos conformados en estos valores difícilmente puedan ser captados por las mafias, pasar a integrarlas o resultar sus víctimas.

Prevenir con la educación en los valores pero también con la efectiva aplicación de la ley. La investigación seria de los crímenes y su eventual sanción es también un modo de prevenirlos. La propuesta de incluir como factor relevante la intervención comisiva u omisiva de funcionarios del estado en la criminalidad organizada va en este sentido, pues otorgarían a los operadores del sistema de justicia herramientas legales para la persecución y sanción efectiva de quienes integran las organizaciones criminales evitando la prescripción de la acción penal, visibilizando la cuestión y adaptando teorías de la autoría que permitan con mayor eficacia la cuestión.

Por último, otro modo de prevención es la reparación a las víctimas, más allá de constituir un deber legal y ético de los Estados. Quienes han sufrido los crímenes deben ser reparados, es un modo de reintegrarlos a la sociedad, de hacer ver a las mafias que sus conductas serán neutralizadas.

En síntesis, el delito, como algo ordinario e inevitable en la comunidad imperfecta de hombres, debe ser debidamente atendido por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Cuando ello no ocurre, lo ordinario se convierte en extraordinario, y se enquistan en la comunidad las organizaciones criminales. Vimos que hay modos y medios para evitarlo. El filósofo español José Ortega y Gasset dijo hace muchos años refiriéndose a mi país: “argentinos, a las cosas”; parafraseándolo hoy, en el contexto de estas jornadas podríamos decir: jueces y fiscales, vayamos a las cosas.

La Colaboración Internacional en Materia de Criminalidad Organizada: del Dicho al Hecho

Dr. Sebastián Casanello

Argentina

Buen día, es un honor para mí participar de esta cumbre organizada por la Academia Pontificia y estar rodeado de tan distinguidas presencias.

Les hablo como juez federal de la República Argentina. Los jueces federales en la República Argentina estamos a cargo de investigaciones que luego —en los casos en los que se junta prueba y se acredita la sospecha de la realización de un hecho y la existencia de responsabilidad— se elevan a un juicio oral. Somos lo que se conoce como “jueces de instrucción”.

Las reflexiones que son el eje de mi exposición surgen a partir de este trabajo como juez de instrucción.

Mi trabajo está relacionado con algunas causas complejas vinculadas con lo que conocemos como “criminalidad organizada” y que involucran en gran parte de ellas la necesidad de obtener colaboración internacional.

Acá estamos reunidos jueces y fiscales de muchos países hablando sobre la criminalidad organizada. La misma expresión nos remite a la idea de una organización moderna, como un subsistema dentro del sistema sociedad dentro de la modernidad.

Esto nos obliga a pensar en las organizaciones como organizaciones racionales, formales, burocráticas, del estilo de las que eran presentadas por Weber, que se mueven dentro de un libre mercado. ¿Esto qué implica? Esto implica que las organizaciones delictivas, racionales, formales, burocráticas, buscan la obtención de ganancias y corren detrás de la eficiencia permanentemente para competir dentro de un mercado libre. Así como *Pepsi* y *Coca Cola* compiten y adquieren cada vez mayor eficiencia en su funcionamiento, las organizaciones criminales hacen exactamente lo mismo.

Esto, dentro de lo que es un mundo global, implica de por sí transnacionalidad. Esta eficiencia dentro de las organizaciones delictivas implica, en consecuencia, circulación de capitales.

Se ha dicho hasta el cansancio, al punto de que ya se trata de una nota definitoria dentro de lo que es la delincuencia organizada, que es un problema mundial; se ha dicho acá y lo escuchamos permanentemente.

También se ha dicho que si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo debería hacer la acción de la ley.¹ Sin embargo, en los hechos, la transnacionalidad de la delincuencia no es replicada, al menos en mi humilde parecer, por una acción transnacional que la combata con efectividad.

Creo yo que eso se debe en parte a que los Estados corremos siempre detrás de las empresas criminales en lo que concierne a esta eficiencia de la que les hablaba.

Quizás incluso responda a que los fines del Estado son fines infinitamente más complejos que los de las empresas criminales, en tanto pura obtención de un lucro y adquisición de poder. Los Estados están involucrados en el bienestar general y en satisfacer las necesidades de un pueblo y eso implica fines infinitamente más complejos de lo que es la obtención de un lucro dentro de una economía capitalista.

Esto en parte explica que los Estados por lo general corramos detrás de esa eficiencia que van logrando las empresas y las organizaciones criminales.

Entre los pensadores de las organizaciones, los pensadores sistémicos, por ejemplo, Peter Senge, cuando escribe *“La quinta disciplina”* dice que busca los ejemplos de los emprendedores en la economía privada y en la libre competencia; de allí y no del Estado surgen los ejemplos del pensamiento sistémico.

¹ Ver el Prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) del año 2000, escrito por el entonces Secretario General de la Organización, Kofi A. Annan.

Lo mismo sucede con las empresas criminales: en ellas hay CEO's que están pensando permanentemente cómo mejorar y ser más eficientes. Dentro del fenómeno de la globalización, obviamente eso implica transnacionalidad.

Hace un tiempo llegamos a la conclusión de que la manera de luchar contra la criminalidad organizada era afectando entonces *el bolsillo* de estas organizaciones, afectando lo que son sus ganancias. ¿Por qué? Porque entendimos que si las empresas criminales se organizan de acuerdo a la tradicional pirámide weberiana, la manera de golpear contra su sustentabilidad y su proyección en el tiempo era privarlas de ese elemento que es el dinero, que asegura su funcionamiento, corrompe instituciones, etc., y que en definitiva es uno de sus principales fines. Si nosotros atacábamos exclusivamente a sus ejecutores, a los que estaban en la base de esa pirámide, éstos iban a ser rápidamente reemplazados, pero la organización iba a seguir funcionando. Es por eso que el consenso internacional llegó a la conclusión de que había que ir por el dinero, por las ganancias de estas organizaciones criminales.

Así nace el combate contra el lavado de activos, enfocado entonces en estas ganancias.

Ahora bien, en un marco globalizado, el lavado de activos no se limita a las acciones dentro del país donde se produjo eso que conocemos como “hecho precedente”, ustedes saben que el lavado de activos es el lavado del dinero de un origen ilícito. No se reducen las acciones a ese país, sino que por lo general las ganancias son depositadas en el extranjero —al menos es lo que sucede en la Argentina en gran parte.

Para el Estado, sus fiscales y jueces, eso implica la necesidad, sí o sí, de buscar colaboración internacional.

De modo generalizado desde la Convención de Viena² prácticamente todos los instrumentos destacan este carácter esencial de la colaboración internacional.

² Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del año 1988.

La Convención de Viena y luego la de Palermo³, la de Mérida⁴, etc., apuntan al lavado y destacan la importancia clave de esta colaboración internacional.

Yo aquí propongo entonces hacer una distinción —recurriendo a lo que es el título de esta exposición— que tiene que ver con lo que es la práctica y lo que es la ley: lo formal y lo real. En el plano de lo formal, en el plano de la ley, la gran mayoría de los países tenemos estándares muy altos en relación a instrumentos orientados a combatir la criminalidad organizada.

Del mismo modo, tenemos estándares muy altos, al parecer, en relación a la colaboración internacional.

Mi pregunta es si eso se replica en la práctica, a partir de algunas experiencias que hemos tenido.

La Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 es el primer instrumento internacional que busca entonces la represión global del lavado de activos. El instrumento tiene el mérito de hacer hincapié en la perspectiva económica a la hora de diseñar la estrategia de persecución.

Esta idea fue ratificada por la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Como recién decíamos, la Convención de Palermo del año 2000 remarca la importancia de la asistencia judicial recíproca entre los Estados, la que debiera ser prestada de la manera más amplia posible. Sin embargo a la hora de establecer los mecanismos de cooperación, si uno lee el articulado de la Convención de Palermo, va a ver que siguen siendo mecanismos muy complejos, en su gran mayoría alejados de las nuevas tecnologías (por ejemplo, muchos de ellos siguen siendo escriturales en la práctica, donde los Estados deben satisfacer muchísimos requisitos a la hora de hacer los pedidos de colaboración, incluso cuando no están comprometidas las medidas de coerción).

³ Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000.

⁴ Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003.

Ustedes saben que la colaboración de nosotros la podríamos distinguir en tres grupos: la extradición, que es la medida más fuerte que implica directamente agarrar el cuerpo, pedirlo; las medidas de coerción, que implican restricciones de derechos y por ende también reclaman una gran variedad de requisitos y, por último, lo que es la colaboración para pedir simple información.

La Convención de Palermo, sin hacer una clara distinción, dice que los Estados pueden reclamar en todos estos casos el requisito de la doble incriminación. Todos ustedes saben que cuando se trata de exigir la doble incriminación por lo general esto no se agota simplemente en una comparación de hipótesis delictivas basadas en calificaciones, sino que involucra a veces mucho más, incluso análisis de tipo probatorio.

Esto hace que los auxilios se conviertan a veces en algo prácticamente imposible.

La Convención de Mérida dice algo parecido.

Casi en simultáneo a la Convención de Viena el Grupo de los 7 crea lo que todos conocemos como el GAFI —el Grupo de Acción Financiera Internacional— y establece algunas recomendaciones que pretenden fijar un estándar internacional generalizado en cuanto a lo que deberían ser medidas eficaces para la lucha contra el lavado de activos de origen delictivo.

Las recomendaciones se fueron modificando. Hoy tenemos nuevas recomendaciones, las cuales fueron avaladas por 180 países, que exhortan a tener una participación y una colaboración muchísimo mayor a lo que dicen tanto la Convención de Viena, como la de Palermo y la de Mérida.⁵

El sentido es que la doble incriminación debe ser utilizada en el menor de los casos. Cuando se pide información, debe ser dada de manera libre y hasta existe la posibilidad de que sea suministrada de forma espontánea.

La Recomendación Número 37 en materia de Asistencia Legal Mutua esta-

⁵ "Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación. las recomendaciones del GAFI", febrero de 2012.

blece que *“Los países deben prestar rápida, constructiva y eficazmente, el mayor rango posible de asistencia legal mutua con relación a investigaciones, procedimientos judiciales y procesos relacionados con el lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo”*.

En particular, los países no deben prohibir o dar lugar a condiciones restrictivas poco razonables o indebidas, en la prestación de asistencia legal mutua. También dice, y esto es crucial, que los países deben prestarse asistencia pese a la ausencia de la doble incriminación, si la asistencia no involucra acciones coercitivas. *“Los países deben considerar la adopción de las medidas que sean necesarias para poder prestar un amplio nivel de asistencia en ausencia de la doble incriminación”*⁶, también aclara.

Esto es muy importante porque, por lo general, las primeras medidas que se solicitan en una investigación no son de coerción, las que de por sí requieren un estándar de sospecha más elevado.

En suma, según las recomendaciones que —repito— plantean un esquema acordado y estandarizado de un modo de proceder en el combate del lavado, cuando el pedido consiste en información, los Estados no sólo no deben exigir la doble incriminación, sino que tampoco pueden oponer exigencias irrazonables o restrictivas. Además el GAFI exhorta a que exista colaboración espontánea (*“Divulgación espontánea: la UIF [UNIDAD DE INTELLIGENCIA FINANCIERA] debe ser capaz de divulgar información y los resultados de sus análisis a las autoridades competentes cuando hubiera motivos para sospechar de lavado de activos, delitos determinantes y financiamiento del terrorismo”*⁷).

Hasta aquí, esto es el plano formal, de los instrumentos, las declaraciones y las palabras. Entonces, en el plano formal, estamos en los estándares más altos de colaboración. Sin embargo, nuestra experiencia en el plano de los hechos es muy distinta.

En la enorme mayoría de los casos —estoy hablando al menos de los casos que tuvimos y tenemos en el Juzgado del que estoy a cargo— incluso países que integran el GAFI y en el caso de meros pedidos de información no proporcionan la información requerida, o bien porque exigen el requisito de la

doble incriminación —que, como les decía, no se agota en comparar hipótesis, sino que involucra una suerte de análisis o valoración probatoria— o porque reclaman una cantidad de antecedentes que hace imposible el auxilio. También nuestra experiencia indica que esto sucede especialmente cuando uno pide información financiera o de depósitos bancarios.

Este tipo de rechazos se suele manifestar de modo tácito. Me explico: guardo en una carpeta ejemplos de exhortos enviados a varios países y una gran cantidad de rechazos de pedidos nuestros de información bancaria, transferencias, composiciones societarias, en los que por lo general nos invocan la doble incriminación, que es un requisito que no debiera estar, o se piden antecedentes y antecedentes... de forma interminable.

No voy a leer las respuestas para evitar aburrirlos. Les cuento simplemente que en todos los casos los Estados requeridos piden más y más información como condición para prestar el auxilio. Son rechazos tácitos porque llega un momento en que el Estado requirente no tiene más información para proporcionar y desiste del intento de lograr la cooperación.

Es preocupante entonces que, si bien parece haber un consenso generalizado a la hora de considerar el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción como delitos sumamente graves que lesionan en lo más profundo la dignidad de las personas, su libertad y el desarrollo de los pueblos, cuando de lo que se trata es de perseguir el producido depositado en otros países, los compromisos en los hechos decaen.

Lo que en un comienzo era entonces violencia, ultraje, delito, tal como lo dijeron en innumerable cantidad de oportunidades, tanto ayer como hoy, una vez invertido en los bancos, pareciera que deja de serlo y se transforma en una cifra virtuosa que aumenta el Producto Bruto Interno de sus países.

También según nuestra experiencia esto no sucede sólo en paraísos fiscales, sino que incluso sucede en países centrales pertenecientes al Grupo de Acción Financiera Internacional.

Este fenómeno pone en crisis la dicotomía “*periferia*”, asociada a un capitalismo aventurero vs. *países centrales*, asociados a un capitalismo racional”, o al

menos llama la atención sobre la posibilidad de que ese capitalismo racional se nutra de los botines de un capitalismo de rapiña. Eso es sinónimo de *globalización de la indiferencia*.

Lo dramático del caso es que, si como dijimos, las empresas criminales son cada vez más eficientes, bastaría que ellas siguieran desarrollando mecanismos para depositar las ganancias en bancos e instituciones financieras extranjeras para asegurar su dinero y de ese modo su sustentabilidad.

Si la situación no varía, el panorama no es esperanzador, porque más allá de las reformas que nosotros podamos hacer en nuestras legislaciones internas y por más que persigamos a los ejecutores de esos delitos precedentes, las organizaciones delictivas van seguir operando, como decíamos, reemplazando en todo caso a esos ejecutores.

Remarco el papel clave de los países desarrollados en esta tarea por su fortaleza y capacidad para operar sobre la realidad a escala mundial.

Atacar la indiferencia global no supone únicamente perseguir y sancionar a los ejecutores de las conductas de narcotráfico, trata de personas o corrupción, sino también perseguir sus ganancias.

Por eso creo humildemente que de una vez por todas debemos llevar a la práctica lo que pusimos en las palabras. Ayudaría a creer en la sinceridad de los preámbulos y en las declaraciones de principios y en que el desarrollo y bienestar de los pueblos sin distinción está por encima de las ganancias de unos pocos.

Muchas gracias.

Una Dogmática Penal para el Crimen Organizado, o cómo Imputar penalmente a las Organizaciones Criminales

Marcelo Colombo

Titular de la Procuraduría de Trata y Explotación
de Personas (PROTEX), Argentina

Quiero empezar por agradecer a la Academia Pontificia, a sus organizadores, la posibilidad de participar de esta magnífica cumbre, es un verdadero honor compartir mis reflexiones en este espacio.

Permítanme continuar por expresar unas pocas palabras acerca de mis antecedentes y trabajo actual. Desde el año 2008 (Año en que se sancionó la primera ley que impuso castigo penal a la trata de personas en la República Argentina) coordino como Fiscal, una Unidad Especial encargada de prestar asistencia a todas las Fiscalías Federales del país en la función de detectar, investigar y sancionar hechos de trata de personas. Todo cuanto se ha venido haciendo, entre ellos, los informes anuales de gestión, aparece difundido en nuestra página web: www.mpf.gov.ar. Centralmente, desde la Unidad Fiscal se reciben y derivan las denuncias ingresadas por una línea de delación gratuita atendida las 24 horas del día (145), se inician investigaciones preliminares por hechos ocurridos en todo el territorio nacional, se litiga en juicio orales, y se elaboran estadísticas propias sobre la aplicación de la ley penal. En la Página web de nuestro organismo¹ podrán encontrar en formato digital la totalidad de sentencias dictadas por este delito, así como informes especiales, que proponen un análisis cualitativo sobre las dinámicas de la trata sexual y laboral en el país. A partir de todo este trabajo hemos podido conocer que, de acuerdo al Informe Global sobre la trata de personas elaborado bianualmente por las Naciones Unidas², la Argentina integra el grupo de países que ha obtenido más de 50 condenados por año (sólo un 16 por ciento de países alcanzó dicho objetivo).

¹ www.mpf.gov.ar/protex.

² Informe Mundial sobre trata de personas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito, UNODC, del año 2014, www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Executive_Summary_Spanish.pdf.

Si bien ello permite seguir trabajando con optimismo sobre los muchos desafíos aún pendientes en la materia, mi presentación de hoy buscará abordar uno de esos desafíos; y uno muy importante desde nuestra perspectiva. Esto es, la necesidad de que las más altas jerarquías de las organizaciones criminales de la trata de personas sean alcanzadas por la justicia penal.

Así, buscaré mostrar de qué modo la dogmática penal y sus actuales estructuras conceptuales resultan aptas para imputar penalmente responsabilidad a los actores claves y más gananciosos en las organizaciones que explotan personas.

Señalaré que, a mi juicio, se trata principalmente de un problema de imputación, de un cambio de enfoque o perspectiva en el modo en que usualmente las agencias penales imputan delitos. Es más provechoso pensar cómo organizamos una investigación penal de este tipo, cómo construimos la investigación e imputación de sus miembros superiores, que crear figuras penales de emergencia que no van a salvar los déficits de una mala o limitada investigación.

Cinco Puntos Serán Sintéticamente Abordados

Los primeros dos, esencialmente problemas de imputación penal objetiva y subjetiva, buscarán convencer que para establecer responsabilidad penal a los responsables superiores de una organización será necesario abandonar definitivamente nociones tendencialmente empíricas de causalidad, dominio e intención bien propias de los tradicionales delitos dolosos de acción, cometidos individualmente, flagrantes y de mano propia.

Los otros tres puntos resultan presupuestos operativos relacionados con la organización e investigación de este tipo de casos, igualmente necesarios para alcanzar el objetivo de llegar a las más altas esferas de las organizaciones criminales.

La preparación de esta presentación está inspirada en varias lecturas bibliográficas específicas pero ha tenido especialmente en cuenta las obras del jurista español Jesús María Silva Sánchez (*Fundamentos del derecho Penal de la*

*Empresa*³ y *Delitos de organización*⁴, *Intervención a través de la organización o una forma moderna de participación en el delito*).

El crimen organizado puede obtener su definición jurídica en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que en su artículo 2 (a) lo caracteriza como:

- Un grupo estructurado de tres o más personas que no fue formado de manera aleatoria;
- que ha existido por un periodo de tiempo;
- que actúa de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito punible con, al menos, 4 años de encarcelamiento;
- con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material.

Las legislaciones penales internacionales han buscado encuadrar el castigo de estos grupos en dos modos diferentes: creando una figura penal que castigue la pertenencia o afiliación a este tipo de organizaciones para delinquir. El delito de asociación ilícita del Código Penal Argentino, artículo 210 de Código Penal Argentino, o *la associazione para delinquere* del artículo 416 del Código Penal Italiano, representan ejemplos de ello. Son fórmulas de política criminal que, más allá de los reparos constitucionales que les han sido opuestos, lo cierto es que rara vez dan lugar a condenas si es que no logra verificarse que esas asociaciones han cometido delitos concretos y verificables; y no en pocas ocasiones se ha (mal) utilizado este tipo de herramientas legales para castigar *asociaciones de personas* que llevan adelante *delitos de escasa peligrosidad o penalidad*, y no, como propone la citada Convención, delitos que tuvieran cuanto menos cuatro años de prisión como castigo previsto.

Una segunda forma de castigar penalmente al crimen organizado resulta de establecer un elemento agravante en la comisión de delitos que son previa y especialmente seleccionados por su gravedad, como ser el comercio de dro-

³ Editorial B de F, Montevideo –Buenos Aires, 2003.

⁴ Libro en coautoría con Manuel Cancio Meliá, Editorial B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2008.

gas o la trata de personas. A partir de ello, lo que se castiga así es *el modo o la forma* en que alguno de estos graves delitos se realiza. Esto es, se castiga especialmente el obrar organizado y estructuradamente es en la ejecución de estos crímenes, por el plus de antijuridicidad y peligrosidad que exhiben.

En este modelo de imputación, que prefiero, la organización no resulta castigada por su mera existencia o constitución, *sino a partir de los hechos concretos que comete*. El grupo organizado es, en definitiva, el instrumento o el modo, en que, por ejemplo, se explota sexualmente a mujeres en un prostíbulo de cualquier ciudad Latinoamericana previa captación en localidades o países vecinos; el modo en que se somete a servidumbre por deuda, a costureros traídos de Bolivia en las ciudades de San Pablo o Buenos Aires.

Este segundo modelo, sin embargo, exige para su aplicación tener presente algunas consideraciones que seguidamente abordaré.

A. Los delitos cometidos por organizaciones criminales presentan una disociación entre acción directa de explotar a otro y la decisión y responsabilidad de sus más altos mandos.

Existe una distancia temporal y espacial entre la decisión y organización de las circunstancias objetivas que posibilitan la explotación, y la explotación misma. Explotación, cuya ejecución directa es generalmente reservada a un actor subordinado de bajo nivel de la organización.

El cuadrillero que recluta operarios para levantar y embolsar la hoja de yerba mate o la caña de azúcar en las haciendas de Argentina o Brasil, y les impone condiciones de trabajo análogas a la esclavitud, es un actor de muy baja relevancia en la organización. Es un actor que carece de autonomía decisoria respecto de la programación y organización del ciclo de producción del que participa con el aporte de su recortada tarea, lo cual lo coloca al borde de la irresponsabilidad penal, a veces por estado de necesidad, otras por coacción o porque resultan victimarios dentro de un sistema de producción que también a ellos los explota en términos de pago, extensión de jornadas, multas, condiciones de vivienda, higiene y seguridad. Estos autores directos, de propia mano, en la captación y explotación de personas, que en ocasiones condensan la paradójica condi-

ción de víctimas-victimarios, son actores perfectamente fungibles para los propósitos superiores de las altas esferas de la organización criminal.

Una adecuada interpretación dogmática que pretenda captar la responsabilidad penal de quienes son los verdaderos responsables de estas explotaciones, en tanto poseen la información, la logística, el financiamiento y la capacidad de decisión, debe acudir a criterios de imputación basados en conceptos de autoría por “*intervención a través de la organización*”, que constituye una categoría complementaria del conocido autor por dominio de un “*aparato organizado de poder*”, u otras categorías familiares que aborden la posibilidad de adjudicar la autoría por un dominio del hecho por infracción a deberes de vigilancia y control.

Debe recordarse que los hechos cometidos desde organizaciones se producen en contextos de división funcional del trabajo, tanto horizontal como vertical, en donde la ejecución material, la posesión de información relevante, la capacidad de decisión pueden hallarse en personas diferentes de la organización *y en diferente tiempo y espacio*. El aporte favorecedor de un miembro, *puede haberse efectuado de modo genérico para la organización y con mucha antelación, y ese aporte es actualizado* y concretado por la organización en el momento de la ejecución del hecho delictual. La organización en ese sentido garantiza la pervivencia del riesgo creado por el aporte de aquél miembro y por otro lado garantiza la conexión de dicho riesgo con el generado por el interviniente directo del hecho delictivo concreto⁵.

B. La configuración del DOLO de los más altos responsables, en su sentido tradicional de intención y voluntad de participar del delito, suele resultar un obstáculo y precisa de una interpretación más actual.

Otro factor importante, que entiendo consecuencia del señalado anteriormente, es la dificultad en la acreditación del dolo o intención de explotar a quienes no son sus ejecutores directos aun cuando realizaron aportes o

⁵ Silva Sánchez, *op. cit.* página 108.

contribuciones centrales a la organización que explota personas como parte de su organización empresarial.

Es el caso de, por ejemplo, el titular de una marca de pantalones que decide que su colección de primavera verano tendrá cuatro diferentes modelos, decide el tipo de tela, la compra, decide la cantidad de unidades que necesita producir, calcula y decide el costo que desea pagar por prenda. Luego de eso entrega la producción y confección de esas prendas a otras personas, a las que, pese a la obligación legal que tiene, no controla ni supervisa respecto del cumplimiento de las mínimas regulaciones laborales. Finalmente son estas terceras personas las que finalmente reclutan ciudadanos pobres de un país vecino y los someten a condiciones de servidumbre.

El titular de la marca suele esgrimir que aquella tercerización no le permitió conocer las concretas circunstancias de explotación que atravesaron las víctimas. Alegando que actuó sin el dolo, a lo sumo con imprudencia.

Para enfrentar este tipo de argumentos, tan superficiales como exitosos, es importante abandonar la idea de un concepto de dolo como estado mental de conocimiento o psicológico. Especialmente en supuestos en donde los altos responsables de la explotación se valen de ejecutores directos que actúan alejados temporal y espacialmente del momento en que la explotación se consuma, es irrazonable exigir por parte de los decisores y organizadores de las condiciones de elaboración de esas prendas un conocimiento psicológico preciso de las circunstancias de la explotación, que por la propia lógica de la división funcional de la organización, ellos no ejecutan de mano propia. Una sensata respuesta a este difícil problema puede encontrarse en el derecho penal anglosajón a partir de las denominadas doctrinas de la ignorancia deliberada (*willful blindness*) y su base radica en que habrá que sostener la existencia de dolo allí donde al sujeto (en nuestro caso, el titular de la marca) pueda imputársele que debería haber conocido la situación de explotación, y que si no la conoció, fue porque provocó ese desconocimiento por acción u omisión⁶.

⁶ Silva Sánchez, *ob. cit.* Páginas 25 y siguientes.

La acreditación de este aspecto subjetivo, siempre esquivo para la administración de justicia, deberá apoyarse en la existencia de indicios objetivos que muestren la altísima *probabilidad* de que la explotación pudiera producirse. Entre esos indicios, para mencionar quizá el más importante, estará el *ínfimo precio pagado* por cada prenda cuyo conocimiento es inevitable para el dueño de la marca a partir de la ecuación económica financiera que debió proyectar para sustentar su producción y actividad. Ello resulta una inmejorable alerta del riesgo de que la explotación de personas era inevitable bajo tales condiciones. Debe recordarse que la propia Convención de Palermo en su artículo 5.2 propone que “*el conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito... podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas*”.

C. Investigación de Grupos vs investigación del caso por caso. Investigaciones Genéricas.

Ya en un plano organizacional de la administración de justicia, resulta imprescindible que los actos delictivos cometidos por la organización no sean juzgados aislada y descontextualizadamente en expedientes comunicados entre sí.

De ese modo jamás podrá visualizarse la actuación de una organización criminal, pues a diferencia de lo que sucede con la inmensa mayoría de delitos que alimentan las agencias criminales, la existencia de una organización criminal es invisible a los ojos. Un agente policial no se tropieza con una organización criminal a la vuelta de la esquina. Su existencia seguramente se descubra a partir de una mirada integradora de varios casos, de la repetición de ciertos autores, sociedades, mismo patrón de comportamiento, identidad del lugar de captación de víctimas o de mecanismos de traslado. La organización de este tipo de investigaciones debe romper con la habitual limitación que impone la construcción de la hipótesis a partir del expediente, atado a la lógica del caso a caso. Para esto último es especialmente útil el trabajo de fiscalías especializadas y temáticas, direcciones de análisis criminal, o incluso Tribunales especializados temáticos, que concentren información y la sepan leer en conjunto.

D. Investigación patrimonial como instrumento para conocer al autor detrás del autor y sus grupos económicos.

Más allá de la evidente utilidad y necesidad que pudiera tener la investiga-

ción patrimonial de los miembros superiores de la organización para fines de decomiso de bienes o incautación preventiva, circunstancia que fue suficientemente tratada en anteriores intervenciones, o para cumplir con la obligación de perseguir a las organizaciones criminales en función del lavado de los activos que se generan (la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, artículos 6 y 7) este tipo de investigaciones patrimoniales es también crucial para conocer a los responsables más importantes de la explotación de personas, a quienes organizan los circuitos de explotación, quienes se enriquecen con ellos, quienes pagan la logística de transporte y alojamiento.

En la práctica forense se les conoce como los autores detrás del autor (directo), aunque resultaría preferible la de autor por arriba del autor.

E. Investigación de la corrupción administrativa y de los actos dirigidos a la obstrucción de la investigación judicial en los crímenes organizados.

La propia Convención sobre crimen organizado establece que la investigación y penalización de la corrupción es un aspecto esencial de la investigación del crimen organizado⁷. A partir de su propia definición, la permanencia en el tiempo de la organización sólo resulta explicable, en la mayoría de las ocasiones, a partir de los lazos de protección y connivencia que se han sabido construir. De allí que el castigo a esos actores ha de ser un objetivo primordial de cualquier investigación de que involucre una organización criminal de trata de personas. La protección sobre el funcionamiento de prostíbulos o lugares no habilitados para la realización de actividades que llevan a la explotación representa el hilo desde donde empezar a tirar.

Se suma a ello, la necesidad de cumplir con la persecución penal de los *actos delictivos colaterales o auxiliares* que este tipo de organizaciones suele cometer para sostener su impunidad. Entre ellos, muy especialmente, aquellos delitos cometidos para *obstruir la investigación*, otra obligación que también emana de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Or-

⁷ Artículos 8 y 9 de la citada Convención.

ganizada transnacional —artículo 23— entre los que se destaca, en los casos de trata de personas, el amedrentamiento de testigos y testigos víctimas. En las organizaciones dedicadas a la trata de personas, como sobradamente se conoce, estas últimas son especialmente vulnerables a la coacción.

F. Reflexiones finales

Para concluir, la lucha contra la criminalidad organizada no implicará en todos los casos perseguir a la Camorra italiana, la Yakusa japonesa, o las triadas chinas, para citar ciertos conocidos ejemplos, pues este tipo de criminalidad aparece también en estructuras organizativas más pequeñas, más parcializadas, de actuación más acotada y que no tienen necesariamente como propósito disputar el poder político de quienes gobiernan, sino la finalidad de obtener ganancias económicas.

También sirve comprender que existe criminalidad organizada en la actuación de sociedades comerciales que comparten finalidades lícitas con ilícitas. La explotación de personas en el sector agrario por parte de grandes corporaciones, o en el sector textil por parte de las empresas de indumentaria, son sólo algunos ejemplos de cómo determinadas empresas incluso de un alto crédito y prestigio social pueden derivar parte de su línea de producción hacia circuitos de explotación y criminalidad.

Algunas ideas para mejorar la imputación penal y la organización judicial de los casos para alcanzar a sus máximos responsables, intentaron ser abordadas en esta corta presentación. Implica un cambio de enfoque respecto del juzgamiento e imputación tradicional de los hechos delictivos que habitualmente nutren los sistemas penales. Y un cambio de paradigma, a partir del cual se propone dedicar menos energía a la persecución de hechos caracterizados por su simpleza, su fragancia e imputados con escaso acceso positivo al poder, para concentrarla en quienes representan una amenaza mucho mayor para el sistema social.

Una administración de justicia penal desigual, que golpea repetidamente sobre las mismas castigadas cabezas no puede llamarse a sí misma justicia. De los hombres y mujeres que la integramos dependerá cambiarla.

Vulnerables y Crimen Organizado: un Gran Desafío de Nuestro Siglo

Julián Ercolini

Juez Federal, Bs. As., Argentina

Buenos días a todos, ante todo mi agradecimiento a Su Santidad el Papa Francisco, a la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y a Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, por la organización de este encuentro tan importante y significativo de dimensión global; por ofrecer y ponernos a disposición este lugar y por supuesto por la invitación, que al tiempo que nos distingue, nos une y nos compromete aún más. También mi agradecimiento especial para el Diputado Gustavo Vera, por su intenso trabajo y por su articulación en Argentina para que este encuentro fuera posible. También, por supuesto, a todos los aquí presentes.

En particular vivo esta oportunidad con la gran emoción de compartir con tantos colegas de distintas partes del mundo preocupaciones en común sobre prácticas contrarias a la dignidad del ser humano, que a pesar de las distancias y de las diferencias culturales, se reproducen en el planeta como si tuvieran un manual único en común.

Deseo aportar algunas palabras sobre una relación que existe —de un modo muy intenso e interdependiente— entre personas pertenecientes a determinadas franjas de vulnerabilidad, especialmente social, y al llamado contemporáneamente crimen organizado.

Y deseo afirmar, por lo menos para agregar a una mesa de discusión y de reflexión:

- que lo que conocemos hoy en día como crimen organizado es el lado oscuro del mercado
- que en general el llamado crimen organizado se vale del aprovechamiento y abuso en personas de extrema vulnerabilidad, normalmente de tipo social
- que ese aprovechamiento está disfrazado o invisibilizado socialmente

por una serie de razones, entre ellas por la indiferencia y porque se asienta sobre creencias falsas de respeto de derechos y libertades fundamentales reconocidas y consolidadas,

- Que la labor que se puede hacer desde la administración de justicia es importante, pero es fundamental la concientización, la prevención y un trabajo mancomunado desde todas las áreas públicas y privadas.

En cuanto al llamado actualmente crimen organizado, no existe consenso acerca de una clara o unívoca definición; ello por distintas razones, que han motivado algunos desarrollos e intentos de explicación teóricos. No obstante, no es esta la ocasión, ni el lugar para exponerlos, aunque me animo aventurar que con la alusión a crimen organizado —tan acertada como abarcativa— no debemos perder de vista que la mayoría de los delitos graves que se incluyen en él, pertenecerían a una categoría con un nombre también comprometedor: delitos o crímenes de mercado.

Si bien darle un nombre a determinada franja de delitos con cualidades comunes podría considerarse algo trivial o meramente clasificatorio, es precisamente curioso que no exista una clara acepción y que la tendencia general lleve a representarnos la idea de organizaciones con reminiscencias literarias y cinematográficas, cuya popularidad y fuerza emocional —junto a nuestros propios prejuicios— condiciona sutilmente la idea de quienes trabajamos en la administración de justicia y termina limitando nuestros objetivos y nuestras estrategias.

Para ello no es menor —o no ha sido menor— cierto desdén por el llamado crimen organizado, desde ámbitos académicos con indudable poder de prédica en la segunda mitad del siglo XX:

- desde la sociología, por ejemplo, por imposibilidad, prejuicios o temores relativos a la obtención de fuentes de investigación primarias, ya que, según se alude, las que existen provienen en general de las fuerzas de seguridad, que poseen metodologías y fines diferentes;
- desde el derecho penal también, por cierta tendencia a negar calidad académica a delitos en los que entre víctima y victimario existe una apariencia de consenso;
- y desde la economía, posiblemente por dificultades de investigación de situaciones con las mismas reglas del mercado en ocasiones tangentes y en otras confluyentes entre lo legal y lo ilegal.

Como sea, las actividades del llamado crimen organizado van dejando —o deben ir dejando— de ser vistas en el siglo XXI como las de las arquetípicas mafias que se describían en la primera mitad del siglo pasado y van divisándose cada vez con mayor nitidez, como un conjunto de actividades ilegales, ilícitas o desviadas más sutiles, que operan en el mercado, con sus mismos objetivos —la obtención del máximo beneficio económico—; y esto se manifiesta, dicho genéricamente en:

- la provisión de bienes y servicios ilegales: como, por ejemplo, producción o tráfico de drogas prohibidas, de inmigrantes ilegales, prostitución, armas;
- la comercialización de bienes lícitos obtenidos ilegalmente; automóviles u otros bienes de lujo, etc.
- la ayuda a las empresas legítimas en materias ilegales, como las vulneraciones en materia medioambiental o laboral;
- o la utilización de redes legales para actividades ilícitas, como, por ejemplo, el transporte de drogas o el blanqueo de capitales en inversiones inmobiliarias u otros negocios.

Así, para marcar una diferencia que nos lleva a denominarlos como crímenes de mercado, podría decirse que la llamada criminalidad común tiene un carácter predatorio que “re-distribuye las riquezas existentes”, mientras que los crímenes de mercado abarcan la producción y distribución de nuevos bienes y servicios, como “valor agregado”.

A ello se le debe agregar otra coincidencia: no es posible encontrar en la antigüedad, en la Edad Media o en Asia antigua fenómenos de crimen organizado porque precisamente se viene desarrollando desde el siglo pasado, paralelo al desarrollo del mercado, al punto que también se impregnó de la llamada globalización.

Estas características generan una sensación de aceptación, de consenso social, sobre la base de una creencia bastante generalizada de que nos encontramos ante un exceso de codicia; ante delitos sin víctimas, lo cual es falso.

Y es falso porque, como todos los que estamos aquí sabemos, los criminales del mercado se valen, se aprovechan o cosifican a millones y millones de personas de todo el mundo en situación de extrema vulnerabilidad, que no sólo se limita a la pobreza —por sí gravísima y basal—. La vulnerabilidad tam-

bién puede ser jurídica, ambiental, económica, psicológica, biológica, social, y puede ser también espiritual. Normalmente, la suma de varias de ellas.

Porque, recordemos, hablar de vulnerabilidad de las personas es hablar de situaciones de capacidad disminuida para anticiparse a los riesgos por causas naturales o humanas, a resistirlos y a superar en la eventualidad las consecuencias.

Pensemos solamente en la extrema fragilidad, en todos los sentidos posibles, de los cientos de inmigrantes que la semana pasada sufrieron un gravísimo accidente al darse vuelta la barcaza en la que llegaban a Europa, en las costas cercanas a Sicilia. Cientos de personas escapando —o sacadas— de su propio lugar, de su propia tierra, de sus propios seres queridos —por si, inimaginable para cualquiera de los que estamos aquí—; y seguramente con el sueño o con la promesa de una vida un poco menos peor. Cientos de personas que se colocaron —o las colocaron— en una situación de extremo peligro, de extrema vulnerabilidad, un poco menor quizás de la que escapaban.

Existe en las sociedades a las que pertenecemos una notoria indiferencia e ignorancia sobre estas situaciones de extrema miseria humana. Aun a los que estamos aquí, que por nuestros roles públicos conocemos esta realidad, en ocasiones nos pueden traicionar los prejuicios o las suposiciones básicas que subyacen en nuestra conciencia.

Las razones de la indiferencia de las sociedades de consumo actuales son numerosas y seguramente tienen que ver con la tendencia al individualismo, en detrimento de las bases sociales humanas de solidaridad, generosidad y respeto mutuo. La concepción cristiana de *prójimo*, a quien “*debemos amar como a nosotros mismos*”, explicada, por ejemplo, en la famosa parábola del buen samaritano, nos muestra también su opuesto, la indiferencia ante el sufrimiento y la indignidad ajena.

Pero me gustaría detenerme en una razón o unas razones que nos tocan a los aquí convocados por nuestra actividad. A la *invisibilidad de las víctimas* en estos delitos gravísimos y masificados a los que hemos llamado crimen organizado o crímenes de mercado, que han evolucionado y también se han globalizado al mismo ritmo que el mercado mundial. Y que mucho tienen que ver con la vida actual y el consumo excesivo e innecesario de bienes y servicios.

Y hablo, desde nuestra especialidad, de *invisibilidad*, porque estas formas de criminalidad han tenido también un desarrollo bajo la falsedad de que están al amparo de derechos fundamentales que se reproducen en general en las constituciones modernas de occidente. Y especialmente me refiero a la idea de autonomía de la voluntad, de la libertad de elección de los propios planes de vida.

Sobre prejuicios xenofóbicos, homofóbicos, racistas, sexistas, chovinistas, etcétera; pero que siempre tienen que ver con un “otro diferente” y con la exclusión, se asienta una creencia social generalizada de que nos encontramos ante delitos sin víctimas, o de no tan víctimas, o de damnificados por propia responsabilidad. Como si las relaciones de las que hablamos fueran de tipo consensual.

Piénsese, existe una matriz común vinculada con el consentimiento. A modo de ejemplos, en la explotación laboral, en la trata sexual, en las organizaciones de traslado de migrantes, en el reclutamiento de personas para el comercio de drogas; o, si se quiere, en la relación misma del vendedor de drogas y el adicto, siempre está disfrazado algo que quiere parecerse al acuerdo de partes, a la libertad de elección. Pero que está contaminado por la vulnerabilidad extrema.

Curiosidades del lenguaje: *admitir*, *prometer*, son de la misma familia etimológica que *omitir*, que *someter*. Estos son los mecanismos contemporáneos de sometimiento. Son tan sutiles como grotescos, como las raíces etimológicas, que llevan a que se escuche parecido *permitir* y *someter*.

¿Cuál entonces es nuestro rol público en este contexto? ¿Dicho de otro modo, cuáles son nuestros desafíos ante el crimen organizado?

Por supuesto, los jueces y fiscales que estamos aquí debemos trabajar intensamente, desde la legalidad, en la persecución y condena de los responsables en todos sus estamentos de los hechos criminales que llegan a nuestro conocimiento.

Y debemos hacerlo con pleno conocimiento de que nos enfrentamos a crímenes de mercado, de inusitado poder económico, con capacidad de disputarle con sus mismas reglas al mercado legítimo, a lo que debe agregarse el poder de daño de la ilegalidad; con poderío cierto y comprobado de fusionarse o filtrarse en las cadenas legítimas de producción de bienes y servicios; con un gran potencial para aprovecharse de los intersticios de ineficiencia o de corrupción de las instituciones públicas.

Pero también debemos hacerlo con la conciencia que ese lado oscuro del mercado se aprovecha de la extrema vulnerabilidad de millones de personas, cuya explotación —por ignorancia, por indiferencia y por las características mismas del sistema— no es percibida con claridad por las sociedades actuales.

Los jueces, que estamos institucionalmente empoderados y al mismo tiempo obligados con la jurisdicción, la *iurisdictio*, debemos imponernos en el “decir jurídico” de nuestras resoluciones, la misión de comunicar y explicar que cada condena no sólo es consecuencia de una infracción legal, sino que se corresponde con víctimas de hechos atroces contra la dignidad humana; hacer visible la existencia de víctimas y trabajar para su contención, de modo de colaborar desde nuestros actos públicos en la toma social de conciencia.

Por último, queda decir que las decisiones claras desde la administración de justicia tienen una gran importancia en términos institucionales y sociales, pero también sabemos todos los fiscales y jueces que estamos aquí que cada vez que actuamos desde el derecho penal lo hacemos a partir de un daño ya hecho, un indicador de que fallaron innumerables mecanismos de prevención y de organización.

Debemos entonces, sin salirnos del rol que nos compete, extremar nuestro saber, nuestra creatividad y nuestras propuestas hacia un horizonte de trabajo comprometido y mancomunado desde las áreas públicas y privadas.

Estoy seguro que ese es uno de los sentidos de esta iniciativa que nos reúne. Para terminar, voy a tomar prestadas —y hacer mías— unas palabras introductorias de Monseñor Sánchez Sorondo vinculadas con la organización del encuentro: *“hemos sido convocados a tomar plena conciencia de este desafío, compartir nuestras experiencias, y actuar juntos para abrir nuevos caminos de justicia y promover la dignidad humana, la libertad, la responsabilidad, la felicidad y la paz”*.

Muchas gracias.

El Narcotráfico: El Acecho a la Democracia

María Romilda Servin Cubría

Argentina

Primero de todo quiero agradecer, mi agradecimiento es para el Papa Francisco que realmente ayer me emocionó con sus palabras, yo lo he conocido, he hablado varias veces con él y escucharlo ayer hablar sobre la justicia, la trata de personas, el crimen organizado, una serie de situaciones que realmente con los años que yo llevo de jueza, que creo que acá debo ser una de las más veteranas, porque llevo 40 años de juez de primera instancia, me emocionó; y también quiero agradecerle a Monseñor Sánchez Orondo por esta invitación que nos ha hecho, que creo que es algo importantísimo, que va a quedar en la historia de nuestro país porque el hecho de habernos juntado a jueces de todo el mundo para hablar de estos delitos tan aberrantes como es el crimen organizado, la trata de personas, la corrupción y el narcotráfico, desde que yo entré han existido, pero lo que observó actualmente es cómo se ha expandido en el mundo, en todos los países, y las dificultades que tenemos nosotros los jueces de primera instancia, que somos los que tenemos que investigar, nos cuesta muchísimo porque hoy el crimen organizado depende de la investigación que se hacen en distintos países y encontramos siempre dificultades, llegamos siempre tarde, porque las leyes nuestras y las leyes de los otros países nos exigen una serie de normas y de formas legales, en el cual tenemos que hacer para que nos contesten y eso hace perder tiempo y la delincuencia avanza más que lo que avanza la justicia, la delincuencia va en un Jet y la justicia va en un auto, esa es la sensación que tengo yo cuando estoy con nosotros que me creo que mis colegas también, cuando estamos investigando, por lo tanto, creo que sería muy importante que se pueda en todos los países aligerar todas las condiciones que se requieren cuando se solicita algo sobre el crimen organizado, sobre la trata de personas sobre, el narcotráfico, porque son delitos que avanza y nos están comiendo, se nos están perdiendo el país.

Yo en el año 83, no, 85, perdón, tuve la oportunidad de escuchar a un abogado que estaba en ese momento en la Comisión de los menores y la familia, y me acuerdo que me dijo que los argentinos se tienen que acostumbrar a perder la seguridad, yo le contesté ¿porque tienen que perder la seguridad? y me dijo: no

porque los argentinos están muy mal acostumbrados, están acostumbrados a la seguridad y así en el año 83 a la época que estamos ahora, 2016, nos damos cuenta que nuestro país ha avanzado para atrás, no avanzado para adelante en cuanto a los ilícitos, a estos delitos tan aberrantes. Por lo tanto creo que es importante que como yo ayer estuve con gente de México para ponernos de acuerdo para poder agilizar todos los trámites que hay y poder llevar una respuesta a la sociedad, inclusive a la víctima de trata, tratar de que el narcotráfico no avancé en la forma que está avanzando. Así que creo que por eso Monseñor, creo que es tan importante esta reunión, reunión que va a quedar en la historia del mundo, reunión que por primera vez se hace acá en el Vaticano, tenemos que darnos cuenta ¿qué es esto? es algo que no los podemos explicar, el Papa Francisco es muy especial, yo creo que no hay otro como él.

Bueno, los dejo para que otro expliqué, yo quería hablar desde el punto de vista no jurídico, porque ya todos conocemos, han hablado, tengo que agradecer a los colegas porque han aportado muchas ideas cada uno que ha hablado, yo quería hablar desde el punto de vista que tenemos que aligerar los trámites de país a país, inclusive en nuestro país a veces tenemos que aligerar los trámites de provincia a provincia, de ciudad a ciudad, porque cuando nosotros llegamos se han ido y han vuelto, y después nos dicen que no investigamos, y no es así, la realidad cuando tenemos que llevarla a la práctica es muy difícil, creo que mis colegas en ese sentido deben estar de acuerdo.

Muchas gracias por todo.

Narcotráfico y Lavado de Activos: Necesidad de una Visión Integral

Dr. Sergio Gabriel Torres

Juez Federal, Argentina

Buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero agradecer la tan amable invitación, al Papa Francisco, a Monseñor Sánchez Sorondo, a Gustavo Vera y su organización 'La Alameda' y a todos ustedes, por estar aquí, dialogando sobre una problemática que tanto nos preocupa a todos.

Claramente, todos nosotros somos muy diferentes, venimos de distintos lugares, tenemos distintas formaciones. Sin embargo, hay algo que nos une, que nos unifica, que nos identifica: el compromiso. Ello es un buen punto de partida para que nosotros podamos conectarnos, trabajar y aprender unos de otros.

En esta ocasión, no hablaré desde mi rol académico, sino desde mi función como juez federal en Buenos Aires, Argentina. En tal sentido, relataré algunos episodios en los que me tocó actuar y luego haré algunas reflexiones sobre el lavado de dinero.

En primer lugar, quiero compartir que hace unos años, en el marco de un procedimiento por trata laboral donde se detectaron los sitios utilizados como talleres clandestinos y se logró la detención de las personas que regenteaban la organización, se consiguió reconvertir las máquinas de coser secuestradas. En tal sentido, se formó un polo textil y aquellas personas que estaban en servidumbre —o directamente esclavizadas— se les dio obra social, se las incorporó en el sistema de trabajo formal, se les proveyó un seguro y se les permitió formar una cooperativa y empezar a trabajar.

Esto fue posible, porque actuaron tres sectores que normalmente no trabajan juntos. En el caso, la Justicia, la Organización no gubernamental 'La Alameda' y el Estado, a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Cabe mencionar que nosotros, los jueces, fuimos formados —por lo menos en mi país— para actuar únicamente en el caso concreto y en la medida del

trámite investigativo. Sin embargo, en mi opinión, los jueces podemos hacer un poquito más y ocuparnos, en algunos casos, de la problemática que ha desencadenado la comisión de ese delito y tratar de reparar a las víctimas para evitar que vuelva a ocurrir.

Esta forma de trabajar se replicó unos años después, cuando se iniciaron numerosas investigaciones coordinadas por narcotráfico en el ámbito de la Capital Federal, y se fueron secuestrando automóviles, dinero, inmuebles. Todos esos bienes fueron donados, cedidos, desde el Juzgado y a través del Estado a distintas organizaciones, diferentes grupos, entre ellos, los ‘curas villeros’, es decir, el sector de la Iglesia que está dentro de los barrios más vulnerables.

A mí siempre me gusta decir, porque estos son casos muy conocidos en Buenos Aires, que poco se recuerdan los imputados, los investigados y los condenados por estas causas, pero sí nos acordamos de estos casos por la reparación de las víctimas, más que por los autores. Y creo que ello es porque tienen un valor simbólico, un profundo valor de justicia, precisamente porque muchas de las víctimas, en un caso esclavos y en otros chicos y chicas consumidores, pudieron recuperar su vida, su dignidad.

Ahora bien, cuando nosotros nos referimos a la narcocriminalidad o crimen organizado, hablamos de delitos complejos. Esto ya se ha dicho y es una característica aceptada. Es un delito que tiene características únicas, y creo que por esto es tan importante la realización de este evento ya que esta Cumbre de Jueces aporta reflexiones, voces y miradas distintas. Por otra parte, todos nosotros después de haber escuchado distintas cuestiones, problemáticas, soluciones e historias humanas que nos han enriquecido, nos vamos con el compromiso de replicar cada una de las opiniones que oímos dentro de los ámbitos de nuestras competencias, de trasladarlo cada uno a nuestros países. Aquí se ha dicho que el narcotráfico tiene como característica la transnacionalidad y que es un delito que afecta a la salud, que tiene consecuencias sociales, afectaciones al derecho e implicancias económicas, políticas, culturales, entre otros. En síntesis, es multidimensional.

Ahora bien, una de las características particulares, ya que la transnacionalidad no es exclusivamente una característica del narcotráfico, es que se trata de un delito escalonado; y esos eslabones, por la propia naturaleza del delito, es-

tán ocultos, están fuera de la visibilidad pública. Esto es, justamente, porque cada uno de estos eslabones constituye delito. Entonces, es un delito desde el mismo comienzo, desde donde se cultiva y hasta el lugar donde finalmente se vende la sustancia prohibida; y toda esa larga cadena de comercialización siempre se maneja subrepticamente, de manera oculta, disimulada. Es esta oscuridad precisamente su esencia, su propia naturaleza. Es interesante ver que recién la claridad y la luz aparecen en el último eslabón, aparecen en el lavado de dinero, es decir, cuando se cumple el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.

Y claro, yo me atrevo a hablar por todos ustedes, todos hemos tenido problemas de dinero, todos trabajamos por un sueldo, tenemos que abonar cuentas, pagar el colegio de nuestros hijos, pagar salud, todos nos vestimos, nos alimentamos, y el dinero ha sido un condicionante en algún momento de nuestras vidas. Esto que es un fenómeno normal, en la vida en sociedad pero que, precisamente, en el caso del narcotráfico, no se cumple. El narcotraficante es alguien cuyo único problema es qué hacer con el dinero, que ingresa en sumas ingentes. Su única dificultad es que no lo puede gastar, no lo puede usar —recordemos que hasta aquí sigue oculto—, lo acumula, y al tratarse de un delito eslabonado y en toda la cadena ilícito, obviamente no resulta posible su bancarización sino que se trata de dinero físico.

Ahora bien, en el lavado de divisas, estas cuestiones que dificultan tanto las investigaciones se invierten, precisamente, porque esta modalidad oculta sale a la superficie al aparecer indicios de bancarización, de formalización de ese dinero, tentativas de incorporación en el sistema formal.

Por otra parte, permítaseme agregar otra característica: también es un delito tramposo, ya que se nos ha hecho creer que los éxitos de las investigaciones se relacionan directamente con la cantidad de kilos secuestrados. De hecho todas las policías del mundo tienen entre sus parámetros estadísticos la cantidad de estupefacientes secuestrados. Y pareciera que más exitosa es una investigación cuanto mayor cantidad de kilos se secuestran, más la historia y nuestra actualidad nos demuestran que este es un camino equivocado, una batalla que está destinada a fracasar.

Siempre me pregunto, cuando hacemos procedimientos y secuestramos ‘X’ cantidad de material estupefaciente, cuántos otros kilos no se secuestran. Siempre son muchos más los que no se secuestran que los que sí. Entonces, obviamente sin abandonar los parámetros del secuestro de material, me parece que debemos ampliar el paradigma y profundizar nuestra tarea contra el lavado de activos. Por eso si nosotros juntamos el ocultamiento y la visibilidad, y pensamos el narcotráfico como un negocio —de objeto ilícito pero negocio al fin—, podemos encontrar un nuevo punto de partida.

Ya dijimos que el lavado es el último eslabón, pero esto no implica que haya que investigar primero el tráfico y después el lavado. Nosotros en la Argentina tenemos una Ley de Estupefacientes y una Ley de Lavado. Esta separación jurídica incluso conlleva a una separación judicial, a que no exista una investigación única o unificada cuando en verdad se trata del mismo delito. Nosotros tenemos aquí un quiebre entre la cantidad de causas de investigación por estupefacientes y las causas por lavado. Son muchísimas más las causas en las que se investiga el tráfico de drogas que su correlato por causas de lavado. Y esto es precisamente la cuestión que a mí me parece que hay que remarcar. Por ello, todas las investigaciones de tráfico, cuando se investigan organizaciones, deben necesariamente conllevar una investigación de lavado. Esto resulta posible con una reforma legislativa y con un cambio cultural de todos los jueces, ya que nosotros no estamos pensando la problemática del tráfico de estupefacientes y el lavado en forma unificada, se estudia e investiga en forma separada, sesgada. Tan es así, que como ya se dijo aquí, en la Argentina, para investigar lavado, se necesita un delito precedente; entonces primero se hace una investigación de tráfico de estupefacientes y una vez culminada esa investigación, incluso llevada a juicio, recién quizá se inicia una causa de lavado.

Obviamente, el delito ya produjo beneficios cuando llegan los investigadores. Indudablemente, esto es posible pensando en el Estado como uno solo. Creo que esto es únicamente posible a través del trabajo coordinado del Estado. El Poder judicial no debe ser pensado como una isla dentro del Estado en su rol específico, sino que en este punto el Estado debe trabajar junto con los Bancos Centrales, las Oficinas de Investigaciones Financieras, las Oficinas de Investigaciones Patrimoniales, etcétera; estableciendo criterios de actuación y de competencia.

En este sentido, es indispensable, y en nuestro país se está empezando a hacer, el establecimiento de protocolos. Esto permitirá que cada institución, cada organismo que se tiene que ocupar de esta problemática, tenga exactamente delimitado su ámbito de su investigación para evitar que haya dispersión o superposición.

Para finalizar, quiero destacar que en esta actividad académico-judicial que se está llevando adelante, encontré en todas las exposiciones preocupación, compromiso, conocimiento, coordinación, intercambio, pensamiento crítico; y creo que este es el valor que tiene esta Cumbre, que permitirá, estoy seguro de ello, mejorar el trabajo de justicia que nuestros ciudadanos se merecen.

Narcotráfico y Corrupción

Zunilda Niremperger

Jueza Federal del Chaco, Argentina

En la última década, hemos sido testigos de un avance mundial sin precedentes respecto del fenómeno de la criminalidad organizada, al punto de que los límites geográficos han dejado de funcionar como barrera protectora de la propagación de su accionar ilícito y sus efectos nocivos.

Los Estados han fracasado en sus intentos por combatirlo mediante políticas públicas represivas que hicieron foco en las actividades que la delincuencia organizada realiza puntualmente, dejando de lado las estructuras y organizaciones complejas que se encuentran incólumes por detrás.

Mutables, erráticas, violentas, con altos niveles de sofisticación y fuerte especialización, gran volumen de negocios, flujo de dinero e importantes márgenes de rentabilidad, de tipo empresarial, capaces de penetrar en las esferas estatales, son algunos de los rasgos que sus estructuras asociativas presentan, sumado una marcada orientación trasnacional.

La experiencia ha demostrado lo infructuoso de encarar el avance de la criminalidad organizada como un aspecto intra-fronteras, ya que estas organizaciones no presentan los límites institucionales o formales característicos de los Estados, donde su estructura flexible les permite adaptar y renovar su *modus operandi* antes de que los organismos estatales puedan adoptar políticas preventivas que les causen algún impacto.

Las fronteras les representan sólo un obstáculo más que sortear, en un contexto donde los pasos fronterizos son permeables a la intervención externa, logrando en los casos de mayor gravedad institucional, mediante la influencia del poder económico o político, crear zonas liberadas o en otros simplemente, aprovechándose de la escases de controles.

¿Hasta qué punto se encuentra bajo amenaza el funcionamiento democrático?
Esta pregunta adquiere particular relevancia en aquellas regiones donde la

criminalidad organizada se ha constituido prácticamente en un poder paraestatal, compartiendo —o al menos compitiendo— con el Estado y el control social que ejerce, o en otros casos al menos han condicionado efectivamente el accionar de las instituciones públicas.

El panorama descrito reclama la adopción de políticas públicas orientadas hacia una nueva dirección, que deberán abordar el conflicto de la criminalidad organizada partiendo de una premisa que reconozca que en el plano internacional las responsabilidades son compartidas y, en función de ello, proyectar programas integrales de actuación conjunta.

El carácter transnacional de estas organizaciones ha alcanzado mayor extensión en aquellas destinadas al tráfico ilícito de estupefacientes, ya que suelen contar con una logística inter-regional para el desarrollo de su cadena de comercialización, comprensiva de la producción de la materia prima, la elaboración del producto, el transporte de las sustancias ilegales, su acopio y distribución hasta la etapa final de comercio y venta, valiéndose de las características favorables de cada región para la optimización y rentabilidad en todos sus estratos, desplazándose en definitiva en búsqueda de los centros de consumo.

Necesariamente debo dedicar unas palabras respecto de una causa reciente en la que tuve la oportunidad de intervenir, cuya magnitud ha generado un gran impacto social y nos servirá para analizar los alcances de las operaciones transnacionales de estas organizaciones y hasta qué punto se encuentran comprometidos nuestros organismos de seguridad y control, para luego ver en concreto la organización, funcionamiento y la sofisticación de una red de narcotráfico que importó grandes cantidades de cocaína desde nuestro país hasta Portugal y España.

Estamos hablando de la causa mediáticamente conocida como “*Carbón Blanco*”, quizás la operación de narcotráfico más grande de la historia argentina, en la que la banda del caso logró pasar camuflados en distintos envíos marítimos —al menos lo que se pudo secuestrar— más de 1 tonelada y media de máxima pureza a Portugal, presuntamente para distribuirse además en España y el resto del mercado europeo, donde se estima que cada kilo está valuado en 45 mil Euros. Sospechándose además que hace más de 10 años se encontrarían operando.

Es inevitable cuestionarse frente a ello, si es posible llevar a cabo una empresa de tal magnitud sin la anuencia, colaboración o trabajo en conjunto con algún organismo y/o funcionario estatal encargado de los controles realizados en las etapas previas al cargamento y envío de los contenedores donde se encontró la cocaína.

Se impone la respuesta negativa. No creo que exista algún escenario donde ello habría sido posible sin algún importante grado de penetración de esta narco-organización en la institucionalidad aduanera y de las fuerzas de seguridad.

Las consecuencias de la última afirmación son nefastas, la corrupción y el dinero sucio proveniente del negocio de las drogas han avanzado sobre nuestra transparencia institucional al punto de poder condicionar el actuar de ciertos organismos públicos.

Desde la óptica del sistema de justicia, la complejidad que conlleva una investigación semejante, la dificultad comunicativa con los tribunales extranjeros, tanto por la diferencia de idiomas como por la burocracia necesaria para el intercambio de información, ha desbordado los recursos y herramientas disponibles para llevarla adelante, situación que impactó además en el accionar de las fuerzas de seguridad nacionales, todo ello nos lleva a cuestionarnos si podremos a futuro hacer frente a casos similares con la infraestructura y organización actuales del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad de la Nación.

¿Será que sus estructuras orgánicas y funcionales resultan anacrónicas y desactualizadas a la luz de las características actuales de las organizaciones delictivas que se pretende desbaratar?

Resulta curioso resaltar que la investigación a nivel internacional se disparó por un aparente descuido de la banda, ya que la policía de Portugal prácticamente se “tropezó” con 12 kilos de cocaína olvidados en un galpón de Lisboa que usaban para esconder la droga luego de recibido el cargamento. Ese detonante que despertó la curiosidad de los investigadores de las Policías Nacionales de Portugal y España fue lo que permitió arribar al descubrimiento de tres contenedores (dos en Lisboa y uno en el puerto de Buenos Aires) donde se secuestraron 105 765 kilos de cocaína.

Si no se hubiera producido esa aparente “distracción”, ¿cuántas operaciones se hubieran podido concretar exitosamente hasta que llegue a nuestro conocimiento?. Esta situación no hace más que demostrar la necesidad de proyectar políticas preventivas de persecución penal inteligente a nivel internacional sobre una base que permita determinar patrones de modalidades delictivas a mayor escala y sus estructuras funcionales, más allá de los hechos que sin mayores dificultades son alcanzados por nuestro sistema penal.

Sin perjuicio de ello, la maniobra realizada por esta organización se llevó a cabo de la siguiente manera:

- Si bien no ha podido determinarse el origen de la cocaína, fácil es advertir que la permeabilidad de nuestros pasos fronterizos limítrofes con los países de Bolivia o Paraguay resulta una puerta de acceso frecuentemente elegida por el narcotráfico, por lo que resulta muy probable que al menos la materia prima proviniera de aquellos países y, con ello, el inicio de una cadena de comercialización de estupefacientes de escala global.
- Una vez en el país, la droga era llevada hasta la ciudad de Quitilipi (Provincia del Chaco), donde una sede de una empresa de producción de carbón —con actividad lícita a los ojos del Estado— se camuflaba y empacaba la cocaína dentro de bolsas de carbón, que a su vez se enviaban con otras bolsas “limpias” en los contenedores, con la diferencia de que aquellas con cocaína en su interior contaban con una doble costura a fin de agilizar el proceso de descarga una vez llegada a destino.
- Cargados los contenedores, de forma previa a que la mercadería saliera con destino al puerto de Buenos Aires, debía pasar por un control realizado *in situ* por agentes aduaneros. Con el visto bueno de estos, el contenedor era sellado con un precinto de seguridad que, en caso de pasar por un segundo control más exhaustivo en la aduana de destino, permanece intacto hasta que arriba al puerto final. En el caso, al momento de realizar la requisa en el puerto de Buenos Aires dichos precintos de seguridad fueron encontrados enteros, sin alteración estructural en los contenedores, lo que permitió concluir que el acondicionamiento de la cocaína fue realizado en la empresa chaqueña.
- Concluido ello, los contenedores emprendían un viaje extenso en camiones y semi-remolques hacia el puerto de Buenos Aires, debiendo atravesar numerosos controles de las fuerzas de seguridad locales y nacionales situadas en la ruta transitada.

- Llegado el cargamento al puerto porteño, las exportaciones de carbón deben pasar por un control exhaustivo realizado por el personal aduanero, que se va por lo que se conoce como “canal rojo”, que en definitiva implica que el contenedor pase por un análisis completo de *scanner*. Los tres contenedores donde se halló la cocaína pasaron este control, sin perjuicio de que las imágenes que resultaron del *scanner* presentaron irregularidades que fueron advertidas por el operador del aparato, pero no desembocó en mayores averiguaciones acerca del motivo de dicho resultado.
- Desde el otro lado del mundo, arribado el contenedor a Lisboa, Portugal, la organización contaba con la infraestructura necesaria para la descarga del cargamento (separando fácilmente aquellas bolsas con doble costura) y su acopio provisorio en un galpón ubicado en esa ciudad comprado sólo a esos efectos, para luego ser introducido en el mercado de Portugal y, presumiblemente, España.
- El último tramo de esta maniobra implica la introducción al mercado financiero de las enormes ganancias obtenidas de la venta de la cocaína. Para ello, se sospecha que la organización realizó complejas operaciones que incluyeron la creación de numerosas empresas fantasma, inversiones en proyectos de construcción masiva, empresas *offshore* y paraísos fiscales —entre otras— a los fines del “blanqueo” del origen de dichos fondos, contexto que determinó que luego de sus condenas por los delitos aquí relatados, se iniciaran procesos judiciales por el delito de lavado de activos, aún en curso.

Luego de una compleja labor investigativa que incluyó la realización de numerosos allanamientos, intervención de comunicaciones, información aportada por la justicia portuguesa y española, pericias técnicas de material secuestrado, declaraciones de testigos, reticencia a colaborar de la Dirección General de Aduanas a nivel nacional, análisis en directo de comunicaciones y el lugar donde sus interlocutores se encontraban al realizarlas al observar las antenas de telefonía celular cercanas a donde se establecieron las comunicaciones, entre otros, se pudo tener una idea más cabal del esquema asociativo de la organización criminal.

Si bien el imaginario colectivo engloba a las organizaciones destinadas al tráfico ilícito de estupefacientes dentro de los comúnmente llamados “Cárteles”, al estilo de países como Méjico o Colombia, no es éste el esquema actual de funcionamiento de las narco-organizaciones, al menos en la región.

Por ello, resulta importante describir, al menos brevemente, la logística de la banda bajo examen, que en buena medida responde a la estructura adoptada en la actualidad por organizaciones del país de similares características.

Aquí, el funcionamiento se erigió en base a una red de narcotráfico compuesta por dos células que operaban simultáneamente en los países de Argentina, Portugal y España. Las cabezas de ambas células —con sede en Argentina y España— marcaron un liderazgo operativo claro, con funciones diferenciadas y sin contacto alguno entre los escalafones inferiores de la organización, limitándose las comunicaciones a las establecidas escuetamente entre ambos líderes. Este esquema de “compartimientos estancos e incommunicados” dificultaría en gran medida el ascenso en la cadena de responsabilidades en caso de que sus integrantes de rango inferior fueran apresados.

En la práctica, la fungibilidad característica de los eslabones más débiles de la cadena y su frecuente detención, ha impedido a nuestro sistema de justicia tener un enfoque global respecto de la real magnitud de las organizaciones que detrás de ellos se esconden, ocasionando una pérdida de mínimo impacto para el panorama general de la organización, incluso contemplada por parte de sus superiores al momento de diagramar las operaciones.

La conjunción de estas características, sumadas a la proliferación de este tipo de organizaciones y su bajo perfil, han complejizado las acciones tendientes a desbaratarlas. Por ello se las ha considerado como parte de un “fenómeno reflexivo”, que supone el atributo y la necesidad de pensarse y repensarse constantemente para evitar estancamientos en sus comportamientos y modalidades, modificando frecuentemente el tipo de organización y forma de camuflaje utilizado.

Los Estados han declarado públicamente la “guerra a las drogas” y ese eslogan ha marcado el horizonte de sus políticas públicas para hacerle frente al narcotráfico. Puntualmente, se ha hecho foco en la idea de reducir la oferta de drogas —lo que ocasionaría un aumento de precios—, dejando en un segundo plano la demanda— por lo que disminuiría el consumo—.

El fracaso de este modelo ha sido rotundo, se ha agravado la violencia que circunda al narcotráfico y la estigmatización y castigo de quienes consumen, las bandas han aumentado significativamente su poder cooptando ciertos

estratos del poder, tanto como han ganado legitimidad en los barrios, siendo sus principales afectados quienes pertenecen a sectores económicamente más vulnerables de la población.

Con este objetivo como estandarte, se ha pretendido erradicar cultivos ilícitos —lo que ha ocasionado su proliferación y desplazamiento constante—, descabezar los líderes de las organizaciones— dando lugar al surgimiento de nuevos cabecillas—, otros han usado la extradición con la idea de que ello quizás frenaría ésta ola cada vez mayor, e incluso se ha llegado a “militarizar” esta guerra contra las drogas, idea que no nos resulta tan ajena ya que ha sido parte de la plataforma de campaña de algunos candidatos en las últimas elecciones presidenciales argentinas.

Frente a ello, la lucha contra el narcotráfico debe ser abordada con nuevos ojos, en un contexto donde el fracaso del modelo anterior permita el surgimiento de propuestas alternativas.

En primer lugar, si se pretende que nuestras políticas de persecución penal causen algún impacto en la estructura de las organizaciones criminales, no deben concentrarse nuestros recursos en atacar los sectores más vulnerables de la cadena, sino que al factor “criminal” debemos añadir el elemento “empresarial” que motiva a estas organizaciones, ya que en definitiva éstas son empresas económicas de carácter delictivo y, por ello, un avance significativo importaría la incorporación de medidas eficaces para el recupero de activos. Las nuevas perspectivas a proyectar deben estar orientadas en perseguir las ganancias descomunales que la criminalidad organizada genera, buscando el decomiso de los bienes producto de sus actividades y, con ello, ocasionar un impacto que afecte la solidez de sus estructuras principalmente sostenida por los grandes flujos de dinero que generan.

Pero además, esta situación evidencia los problemas de encarar a la criminalidad organizada unidireccionalmente como parte de políticas públicas estrictamente criminales, perdiendo perspectiva global acerca de las distintas dimensiones que lo componen y quiénes son los sujetos vulnerados con su accionar.

En este sentido, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia (2009) ha sostenido que los narcóticos ocasionan consecuencias institucio-

nales severas, el desarrollo de poderes paralelos, crecimiento de la corrupción y la criminalización de los conflictos políticos. Como alternativa, ha propuesto que las grandes directrices del nuevo paradigma sean el tratamiento del consumo como una cuestión de salud pública, la reducción de la demanda mediante acciones de información y prevención y la focalización de la represión sobre el crimen organizado en lugar de sobre los consumidores

La lucha contra la criminalidad organizada no es en un fin en sí mismo, ni tampoco un combate autónomo, sino que deben ser batallados los efectos nocivos que su accionar desprende hacia el resto de la sociedad, hacia el vulnerable, adicto o víctima del sistema perverso que impone, en definitiva, lo que se pretende tutelar son las personas y su calidad de vida.

El crimen organizado ha adoptado ribetes de complejidad y sofisticación al punto que debemos repensar el rol del Estado para hacerle frente, poniendo el eje en políticas públicas de intervención de carácter multiagencial, privilegiando la prevención por sobre la reacción.

No todos los eslabones del narcotráfico tienen la misma capacidad nociva, sus alcances se esparcen y afectan con distinta intensidad los bienes objeto de nuestra preocupación. Por ello, la tradicional tendencia de delegar su abordaje a las agencias policiales requiere un tratamiento desde las políticas de salud, educación, sociales, financieras e incluso diplomáticas.

Por último, esta concepción debe ser el producto del trabajo en conjunto a nivel internacional, ya que un avance aislado en tal sentido tornaría estéril cualquier reforma. El carácter trasnacional del crimen organizado nos obligará a aumentar los niveles de cooperación internacional, en búsqueda de políticas inteligentes de persecución criminal que en un futuro permitan lograr un análisis a gran escala de la forma en que operan éstas redes y establecer mecanismos de comunicación e intercambio de información más frecuentes y accesibles.

Narcotráfico y Corrupción Institucional

Carlos A. Vera Barros

Juez Federal de Rosario, Argentina

I. Criminalidad organizada y corrupción

Como han destacado tanto Gustavo Vera en la inauguración de la Cumbre, como Virginia Kendall y Rosario López Wong en sus respectivas ponencias, la corrupción está en la base de la criminalidad organizada. Vera lo afirmó categóricamente en términos generales, mientras que Kendall y López Wong especificaron tal relación en lo referido a la trata de personas.

Nos toca ahora reiterar aquel aserto general en materia de comercio de drogas, a partir de nuestra experiencia judicial en materia de comercio de drogas, y así podemos afirmar: sin corrupción no hay narcotráfico.

Sin necesidad de extendernos demasiado en la demostración de tal vinculación, podemos afirmar que ella surge evidente, en nuestra ciudad de Rosario, en virtud de tres hechos, que bien pueden eslabonarse en forma lógica.

El primero de ellos fue la detención, exoneración, procesamiento y elevación a juicio del entonces Jefe de Policía de la Provincia de Santa Fe, por coautoría de narcotráfico, en una causa iniciada hace ya tres años y que se encuentra actualmente en espera de la celebración de la respectiva audiencia. Unos meses después de iniciada aquella se abrió otra causa contra el mismo jefe policial en la vecina ciudad de Santa Fe, en la que resultara condenado en primera instancia cómo cómplice de similar delito.¹

A partir de aquella primera detención, cerca de una treintena de altos oficiales de policía han sido detenidos, y consecuentemente separados de la fuerza; e igualmente con una frecuencia casi semanal, son arrestados titulares de Comisarías, siempre por vinculación con delitos de narcotráfico.

¹ El fallo del Tribunal Oral de Santa Fe al condenarlo a seis años de prisión por encubrimiento de narcotráfico lo tildó de "calificado protector".

Al descabezamiento de la cúpula de policía puede atribuirse asimismo el desbaratamiento de unas cuantas bandas de narcotraficantes que entonces, de pronto y sin capacidad de respuesta, se quedaron sin protección policial. Estas bandas, de mediano y gran porte, peligrosas y, en algunos casos, muy violentas, carecían sin embargo de toda sofisticación; la única refinación de que podían alardear era la de contar con ese paraguas policial, ahora inutilizado.

El tercer hecho que evidencia la relación entre corrupción y narcotráfico es la modalidad que dichas bandas utilizan para comercializar al menudeo la droga que trafican. Lo hacen mediante los llamados “bunkers”, una marca de fábrica de nuestra ciudad. Consisten en pequeñas fortalezas de cemento ubicadas por lo general en zonas humildes, que cuentan apenas con un ventanuco por el cual se entrega el estupefaciente y dentro del cual literalmente se encierra, con apertura sólo desde afuera, a menores de edad a los que se somete, en una forma aberrante de trata, a larguísimas jornadas de trabajo durante las cuales se limitan a vender el estupefaciente que el encargado del búnker les provee y del cual deben rendir cuentas al fin del día. Tal modalidad pone de manifiesto también cómo el narcotráfico se nutre de los excluidos, porque entre ellos recluta a los llamados “soldaditos”, también menores de edad que en jornadas igualmente extenuantes realizan desde los techos la vigilancia del lugar, con un precario sistema de alerta, para el caso de que la protección pactada sea vulnerada.

La existencia de estas pequeñas fortalezas destinadas a la venta de sustancias prohibidas, ubicadas por definición en lugares fijos y que por ende no pueden ser desconocidas para la policía del lugar, desafía toda idea de prevención de seguridad, e impide pensar al narcomenudeo como una actividad ilícita. Habla más bien de una protección policial tal que lleva a la naturalización de esa modalidad del narcotráfico y, por ende, a su impunidad.

II. Retórica Legitimadora

Sin embargo, lo que nos interesa destacar de esta vinculación entre narcotráfico y corrupción es la retórica legitimadora que la acompaña y que Peter Eigen ha señalado como un componente esencial de esta última.²

² Eigen, Peter, *Las redes de la corrupción*, Edit. Planeta, Buenos Aires 2004, pág. 145.

En efecto, para disimular su inercia, incompetencia o complicidad, el Estado hace suyos una serie de argumentos retóricos destinados a confundir y a enervar a la opinión pública.

Son verdaderos sofismas, algunos de ellos muy simples y otros de una complejidad diabólica. Unos y otros, en virtud de su incansable repetición, terminan naturalizándose.

También aquí, como previniera el Papa Francisco en su discurso inaugural, se trata de evitar caer en la telaraña de la corrupción, y como ya ejemplificara Aristóteles cuando disputaba contra los sofistas, para escapar a su lógica perversa debe recurrirse al sentido común.

a.- El primer argumento sostiene que el combate al narcotráfico se trata de una “guerra perdida”³

El lenguaje bélico es utilizado en forma deliberada para aludir a un paradigma histórico, la llamada “guerra a las drogas” lanzado en los 70 por el entonces Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon⁴ y que, según se denuncia, es frecuentemente tergiversado para esconder ambiciones imperialistas.⁵

Una forma atenuada del mismo argumento, en boca de autoridades locales, sostiene que tal combate las excede, ya que se trata de un fenómeno nacional —con lo que pretende trasladar las culpas a otras esferas de gobierno— o, peor aún, internacional, con la cual aquellas autoridades ya nada tendrían que hacer.

La falacia del razonamiento, que, como suele ocurrir cuando se trata de un sofisma, parte de una base cierta, consiste en que frente a la evidencia de la nacionalización e internalización del narcotráfico se impone la cooperación

³ La Conferencia Episcopal Argentina se hace cargo de este argumento en breves palabras: “La guerra contra las drogas está perdida para quien no se opone a la instalación de este sistema”. *Cfr.* el documento No al narcotráfico, sí a la vida plena, CEA, noviembre 2015.

⁴ *Cfr.* Bergman, Marcelo, Drogas, narcotráfico y poder en América Latina, Edit. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2016, pág. 215.

⁵ El máximo exponente de tal tergiversación lo constituiría la invasión de Estados Unidos a Panamá, oportunamente condenada por la ONU y la OEA, con la finalidad de aprehender al entonces Presidente de facto de ese país, Manuel Antonio Noriega, bajo la acusación de traficar estupefacientes a Estados Unidos.

interjurisdiccional e internacional, y para ello el abordaje local, lejos de resultar inútil, deviene indispensable.

Finalmente, una expresión más retorcida de ese razonamiento, sostiene la imposibilidad de una lucha imparcial.⁶ Todo aquel que combate al narcotráfico, y principalmente cuando también afecta a la corrupción que le es ajena, lo hace por un interés espurio, sea personal, económico o político; así se trate de un Juez, un Fiscal, una ONG o un vecino.

Se trata del viejo sofisma de la argumentación *ad personam*, mediante la cual se descalifica al adversario sin responder sus argumentos; conforme a ello, quienes defecionan en su tarea de prevención del narcotráfico quieren ver a los demás “en el mismo lodo, todos manoseados”, como dice el tango.⁷

La sabiduría popular descubriría el trasfondo confesorio del sofisma: el ladrón —dice el refrán— cree a todos de su condición.

b.- Otro argumento consiste en acotar el fenómeno del narcotráfico exclusivamente al ámbito penal⁸

Discursivamente se insiste en el carácter penal, y aún procesal, de la cuestión del narcotráfico.

Se pretende con ello eludir la responsabilidad política frente al crecimiento exponencial del narcotráfico. Por un lado confundiendo la tarea de prevención del delito, inexcusablemente a cargo de la autoridad administrativa, con la labor judicial de represión del delito, que no sólo es posterior sino que sólo se habilita ante el fracaso de aquella; y por el otro disimular la insuficiencia o ausencia de políticas públicas de acción social destinadas a atacar a la exclusión, caldo de cultivo como bien se sabe del tráfico de drogas. Como expresa el Papa Francisco “*si el Estado no cumple su rol en alguna región, algunos grupos económicos pueden aparecer como benefactores y detentar el poder real*,

⁶ Cfr. Eigen, Peter, *op. cit.*, pág. 146.

⁷ “Cambalache”, de Enrique Santos Discépolo, compuesto en 1934.

⁸ Cfr. Eigen, Peter, *op. cit.* pág. 145.

sintiéndose autorizados a no cumplir ciertas normas, hasta dar lugar a diversas formas de criminalidad organizada, trata de personas, narcotráfico y violencia muy difíciles de erradicar.”⁹

Al calor de este razonamiento también se excluye la responsabilidad administrativa de los funcionarios que defecionaron en el cumplimiento de su tarea de prevención (*vr. gr.*, los Comisarios que nunca dieron cuenta de la existencia de los “bunkers” existentes dentro de su jurisdicción); pretendiendo de tal modo derivar su eventual responsabilidad únicamente a la infracción de un tipo penal, demostrada dentro del respectivo juicio; cuando, sin perjuicio de aquel, en forma concomitante y sin mengua del debido proceso, bien pudiera aplicárseles sanciones por faltas administrativas, menos gravosas pero de demostración hartó más simple.¹⁰

c.- Otra manifestación de la retórica legitimadora consiste en afirmar el carácter “federal” del delito de narcotráfico

Ese carácter se afirma a partir de la competencia de la justicia federal para el juzgamiento de tales delitos, establecida por la ley de drogas N° 23.737. Y a partir de allí pretende argüirse que todo lo relativo a la prevención y a la represión de los mismos corresponde al Estado Federal, y que ninguna responsabilidad le cabe, entonces, a la Provincia.

Se trata de una argumentación pretensamente jurídica que tiene relación con la organización federal de nuestro sistema de gobierno.

En rigor no existe tal cosa como un “delito federal” al que pudiera contraponerse un “delito provincial”, porque esta categoría no existe entre nosotros. A diferencia del sistema federal de Estados Unidos, que ha sido tomado como modelo para el nuestro en la Constitución de 1853, las provincias carecen de facultades para establecer delitos y por ende todos los delitos se incluyen en un único Código Penal, dictado por el Congreso de la Nación; pero, en este caso al igual que en

⁹ Cfr. Carta Encíclica *Laudato si*, N° 197.

¹⁰ El amplio abanico de ellas contempla apercibimiento, llamado de atención, suspensión, traslados, postergación en el ascenso, y aún la exoneración.

Estados Unidos, toda la materia de policía de seguridad,¹¹ es competencia propia e indelegable de las provincias, según surge de la Constitución Nacional.

La asignación de determinada materia, como en este caso el narcotráfico, a la competencia federal para su juzgamiento en nada empece la responsabilidad provincial para la prevención de tales delitos, y aún en lo que hace a la represión de los mismos, tanto las fuerzas de seguridad nacionales como la Policía Provincial se encuentran a tales efectos a las órdenes de la Justicia Federal, que, recordémoslo sólo habrá de intervenir si aquella prevención fracasó. La Policía provincial, entonces, lejos de encontrarse eximida de actuar en estos delitos, es, por el contrario la que resulta convocada en la mayor parte de los casos, por la sencilla razón de que es la que mayor despliegue territorial tiene en el ámbito provincial. Y ello es conforme tanto a la atribución esencial e indelegable de las provincias de proveer a su policía de seguridad, cuanto a la finalidad específicamente asignada a cada una de las fuerzas de seguridad nacionales, a saber: gendarmería, la custodia de la fronteras; policía federal la custodia de los bienes federales; prefectura naval la custodia de los cursos navegables; policía de seguridad aeroportuaria la custodia de la aeronavegación. De otro modo sería incomprensible el funcionamiento de una división de la Policía Provincial denominada Drogas Peligrosas y específicamente creada para el combate del Narcotráfico, con despliegue en todo el territorio provincial, esquema que se repite en todas las provincias argentinas.

Desde luego que una cosa muy distinta es afirmar, dado nuestro sistema federal de gobierno, que debe existir una mayor coordinación para la lucha contra el tráfico de drogas entre las fuerzas de seguridad nacionales y las policías provinciales, y también –aunque menos reclamado- de éstas últimas entre sí.

d.- Otro sofisma que hace parte de la retórica que venimos analizando hace alusión al “ajuste de cuentas”

Esta expresión, tomada del argot mafioso, alude al modo violento en que los delincuentes arreglan sus asuntos litigiosos: incumplimientos, traiciones, delaciones, “vuelos”, “mejicaneadas”.

¹¹ Junto con la policía de salubridad y de moralidad.

En la provincia de Santa Fe guarda relación con la cantidad de muertes violentas que anualmente se producen, que duplica la media nacional.

Al atribuir estas muertes, en forma repetida, a “ajustes de cuentas” se pretende, de un modo brutal y con un componente racista muy pronunciado, tranquilizar a la opinión pública; parecen decir “uno menos” o “déjalos que se maten entre ellos”. A la vez se justifica así la falta de esclarecimiento de tales homicidios, ya que, tratándose de asuntos entre mafiosos, ningún interés social habrá de investigarlos. En definitiva, una nueva manifestación de la globalización de la indiferencia a que alude el Santo Padre en la *Laudato si'*. Contra toda evidencia se pretende también que de aquellos ajustes no derivarán “daños colaterales”, por usar un argot bélico, o, dicho en buen romance, que no afectarán a terceros.

La pretensión de que la sociedad no debería preocuparse por tales disputas ignora que frecuentemente obedecen a luchas territoriales que constituyen el paso previo a la cartelización y a la diversificación delictiva, como la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el tráfico de órganos.¹²

Pero además implica la naturalización de lo que Matías Dewey denomina el orden clandestino, consistente en la suspensión de la aplicación del derecho en determinado territorio, y que normalmente escala de la zona liberada a la inacción activa, con adulteración de registros, procedimientos armados y falsos positivos.

Una explicación más veraz, que se hace cargo de la vinculación entre la extrema violencia y el narcotráfico y desarma el sofisma del ajuste de cuentas, consta en la Declaración “Felices los que trabajan por la paz” de la Conferencia Episcopal: “Los hechos delictivos no solamente han aumentado en cantidad sino también en agresividad. Una violencia cada vez más feroz y despiadada provoca lesiones graves y llega en muchos casos al homicidio. Es evidente la incidencia de la droga en algunas conductas violentas y en el descontrol de los que delinquen, en quienes se percibe escasa y casi nula valoración de la vida propia y ajena”.¹³

¹² Cfr. Bergman, Marcelo, Drogas, narcotráfico y poder en América Latina, *op. cit.* pág. 23.

¹³ Conferencia Episcopal Argentina, 107 Asamblea Plenaria, Pilar 8 de mayo de 2014.

e. Otro argumento utilizado con frecuencia es el de la estigmatización

Parece directamente tomado de la obra de teatro de Ibsen “Un enemigo del pueblo”.

Como se recordará, en esa obra el Dr. Stockman, médico del balneario, denuncia la contaminación del agua y la necesidad de cerrar aquel hasta que se solucione el problema, lo que le genera enfrentamientos con los poderosos del lugar por el alto costo que supondría sanear el balneario, y el dinero que dejaría de percibirse por el alejamiento de los turistas.

Del mismo modo se pretende en Rosario que quien públicamente denuncia o investiga el creciente narcotráfico de la ciudad, con el correlato récord de muertes violentas y altos oficiales de policía implicados lo que hace es estigmatizar la ciudad, según la expresión reiteradamente utilizada, alejando con ello inversores y turistas, aún cuando Rosario no se trata de una ciudad turística como lo era el balneario de la obra de Ibsen.

Ante lo incontrastable de los hechos (aumento exponencial del narcotráfico, muertes violentas que duplican la media nacional, altos oficiales de policía implicados), el argumento suele completarse con aquel otro ya referido del carácter nacional e internacional del fenómeno, concluyendo entonces en que se trata de un mal de muchos, lo cual, como se sabe, es un consuelo de tontos.

f. La retórica finalmente se integra con el “como si” de las instituciones

Quien ha detectado este particular sofisma es el Observatorio de la Deuda Social Argentina.

En el “Barómetro del Narcotráfico y las adicciones en la Argentina”¹⁴ se refiere en particular a cómo las instituciones que deberían prestar asistencia a los menores afectados por el narcotráfico, (simultáneamente consumidores y vendedores en pequeña escala), hacen de cuenta que actúan pero resultan

¹⁴ Cfr. Odsa, Barómetro del narcotráfico y las adicciones en Argentina, Informe N° 2, Educa, Buenos Aires, 2016, págs. 48-50.

totalmente ineficientes. De tal modo, dice el documento, “el niño desde su temprana infancia dio indicios de una problemática y quedó entrampado en una sociedad que, en su no saber o no poder hacer, fue poniendo en funcionamiento el “como si”.

Entendemos que la caracterización realizada por el Observatorio es extensible a otras instituciones relacionadas con el combate al narcotráfico que también hacen “como si” actuaran y en realidad sólo lo hacen en forma harto deficiente.

Pensamos por ejemplo en los llamados “Buzones de la vida”, donde se reciben denuncias anónimas sobre comercio de estupefacientes y que, una vez judicializadas, cuando son puntualmente remitidas a las autoridades preventoras para su investigación, son habitualmente despachadas después de unos pocos días, con la leyenda “no se registra movimiento compatible con el comercio de estupefacientes en el domicilio denunciado” además, la protección es prácticamente inexistente para testigos y denunciantes; y el control policial es prácticamente inexistente en las detenciones domiciliarias.¹⁵

Incluimos esta situación dentro de la retórica legitimadora porque también cumple el objetivo de exculpar al Estado por una función que dice asumir y en realidad presta en forma deficiente, y porque su mal disimulada incompetencia tiene el mismo efecto enervante y desesperanzador sobre la opinión pública.

III. El rol de la opinión pública

El discurso autocomplaciente —cuando no cómplice—, del Estado para justificar su inacción o ineficiencia lo desvirtúa, ya que como bien se ha dicho “el narcotráfico está en contradicción con la naturaleza del Estado”.¹⁶

Pero además debe repararse en el carácter perverso de esa prédica, ya que está directamente dirigida a confundir y anestesiarse a la opinión pública, que constituye el último recurso frente a la inacción estatal.

¹⁵ Sin embargo, debe reconocerse que recientemente el Ministerio de Justicia de la Nación implementó una suerte de “pulsera electrónica” que, todavía en sus comienzos, parece funcionar adecuadamente.

¹⁶ Conferencia Episcopal Argentina “No al narcotráfico, sí a la vida plena”, *op. cit.*

Así lo explica el Papa Francisco en la *Laudato si'*: “dado que el derecho a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política presionada por la población”.¹⁷ Un buen ejemplo de esta reacción política influida por la presión social frente a la inacción inicial, lo constituye el caso Verónica Guerrin, periodista del Sunday Independent de Dublín, que fuera asesinada en 1996 luego de publicar diversos artículos de investigación en los que puso en evidencia al capo narcotraficante Ghillighan, hasta entonces intocable. Luego de tal asesinato la población comenzó a marchar a la casa de los narcotraficantes y viéndose el Estado obligado a actuar ante tales manifestaciones introdujo por primera vez la ley de incautación de activos y la ley del arrepentido, que resultaron eficaces para disminuir en forma notoria el narcotráfico en esa ciudad.

La tarea que se plantea aquí, entonces, consiste en recuperar la acción del Estado, liberándolo de un discurso autojustificadorio que lo desfigura, y revalidando el rol de la opinión pública como garante del cumplimiento de su función de gestor del bien común.

De otro modo, inmovilizado el Estado frente a la corrupción y enervada la opinión pública por la pertinente retórica legitimadora, el camino hacia la temida captura del Estado quedará liberado.

¹⁷ Carta Encíclica *Laudato si'*, N° 179.

***Propuestas para Mejorar la Investigación en los
Delitos de Narcotráfico y Trata de Personas***

Miguel Eugenio Abásolo

Juez Federal de la Ciudad de Rafaela (Santa Fe – Argentina)

Buenas días a todos: Para mí es un honor haber sido invitado a la Cumbre de los Jueces, dentro del ámbito de la Pontificia Academia de las Ciencias y Ciencias Sociales, a quienes agradezco profundamente haber llevado adelante la organización de estas importantes jornadas. Agradezco especialmente a Monseñor Sánchez Sorondo y a Gustavo Vera de la ONG La Alameda y por supuesto mi gratitud al Santo Padre, el Papa Francisco.

En mi caso personal ejerzo la magistratura en el Juzgado Federal de Rafaela (Prov. de Santa Fe, República Argentina). Por dicha ciudad pasa una de las rutas de mayor tránsito de Argentina, como lo es la ruta nacional 34 que atraviesa el país desde Salta al norte, hasta la ciudad de Rosario en el centro, cubriendo una distancia aproximada de 1300 km.

Por la mencionada ruta circula un importante tráfico de cocaína que descien- de desde Yacuiba (República de Bolivia) e ingresa por Salvador Mazza en la provincia de Salta (República Argentina); también existe otro importante paso fronterizo por donde ingresa abundante material estupefaciente y de personas ilegales, en muchos casos víctimas del delito de Trata, que es el de Villazón (República de Bolivia) y La Quiaca (República Argentina) a través de la ruta nacional 9.

Comenzamos a tener numerosos procedimientos efectuados por Gendarmería Nacional que detenían buses de pasajeros procedentes del norte del país, y que luego de un control de equipaje detectaban la existencia de abundante cantidad de cocaína dentro de las valijas. En muchos casos se pudo determinar a los responsables de transportar la droga y en otros no hubo tal suerte porque no se pudo identificar al poseedor del estupefaciente. En la mayoría de los procedimientos nos encontramos con la situación de gente muy joven y humilde que hacen las veces de “mulas”, a los cuales se les paga una escasa suma de dinero para que trasladen la droga desde el norte del país

hasta los centros urbanos más populosos como pueden ser las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Santa Fe.

Creo que ante esta situación tan alarmante, que se replica en casi todos los países de Sudamérica, el planteo que nos debe llevar a recapacitar es el altísimo grado de corrupción que existe en los distintos niveles de la cadena de tráfico, comenzando por las fuerzas policiales, ya sean nacionales que se encuentran en la zona de frontera, o en su caso provinciales, y a la vez advertimos que existe una inoperancia por falta de elementos de control tales como: *scanners* para el chequeo de equipaje, mayor presencia de las fuerzas policiales en las terminales aéreas y de ómnibus, la instalación de radares para detectar la numerosa cantidad de aviones que aterrizan en pistas clandestinas, etc.

Otra situación se planteó con dos casos que voy a relatar en materia de Trata de Personas. Uno de ellos fue una menor boliviana que se había escapado de un taller textil clandestino de la provincia de Buenos Aires donde era obligada a trabajar en condiciones de esclavitud. Ante un descuido de una mujer mayor quien era la que la había ingresado ilegalmente a la República Argentina desde la República de Bolivia, pudo, con la ayuda de otra mujer subirse, a un bus con destino a Jujuy y de allí pretendía regresar a su lugar de origen en la localidad de Villazón (Bolivia). El Escuadrón Vial de Gendarmería Nacional con asiento en la ruta 34 en jurisdicción de Rafaela, detuvo ocasionalmente el transporte en que se trasladaba la menor y ante un pedido de documentación, la menor contó su travesía. A esta menor se le tomó declaración en cámara Gesell y luego en forma urgente se le dio intervención a la Comisión de Trata de Personas dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

El otro caso fue el de una mujer mayor embarazada de nacionalidad boliviana, que residía en la provincia de Buenos Aires y trasladaba ilegalmente a una menor boliviana simulando ser su hija, para luego entregarla aparentemente en un taller textil clandestino en dicha localidad, o en su caso prostituirla.

Estos casos de Trata de Personas, sin duda que también se llevan a cabo con la complicidad de autoridades policiales, migratorias, de las fuerzas de seguridad ubicadas en los pasos de frontera de ambos países y advertimos la responsabilidad que les cabe a la autoridades, la cuales deben brindar respuestas efectivas a estos verdaderos flagelos como lo son el narcotráfico y la trata de personas.

Es por ello que ante la situación de alarma social que en estos años transcurridos del siglo XXI estamos viviendo, y considerando que estos tipos de delitos de crimen organizado nos invaden y se transmiten como una verdadera pandemia, debemos tomar conciencia de la grave problemática que nos aqueja y asumir las responsabilidades que como Magistrados nos corresponden; exhortando a los poderes políticos de cada Estado a que refuercen las medidas de control de los pasos fronterizos y erradiquen la cadena de corrupción existente; asimismo, se disponga a través de los organismos correspondientes, la realización de positivas tareas de inteligencia que tengan por finalidad la desarticulación de los cárteles de la droga y de las organizaciones de Trata de Personas.

Por otra parte, creo, que no obstante haber pasado algunos años desde la suscripción del Protocolo de Palermo (Italia) y plasmado luego en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, cobran hoy plena vigencia las palabras de quien fuera Secretario General de la ONU, Kofi A. Annan, cuando expresaba: *“La Declaración del Milenio, aprobada por los Jefes de Estado reunidos en las Naciones Unidas en septiembre de 2000, reafirmó los principios en que nos inspiramos y ha de servir para alentar a todos los que luchan en pro del imperio de la ley”*. En la Declaración se afirma que *“los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, la opresión o la injusticia. En la Cumbre del Milenio los dirigentes de todo el mundo proclamaron que la liberación del temor y de la miseria era uno de los valores esenciales del siglo XXI. No obstante, en todo el mundo hay millones de personas a quienes todavía se niega el derecho a vivir con dignidad y liberados del temor y de la miseria. Se niega ese derecho al niño que trabaja bajo contrato de cumplimiento forzoso, sometido a explotación, al padre que tiene que dar soborno para conseguir atención médica para su hijo o hija, a la mujer condenada a una vida de prostitución forzosa. Considero que la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, para someterlos a trabajos forzados y a la explotación, incluida la explotación sexual, es una de las violaciones más atroces de los derechos humanos a que hacen frente las Naciones Unidas en la actualidad”*.

Por ello considero que hoy tienen plena actualidad los principios y normas sancionadas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; y son los Estados Parte los que tienen que dar

respuestas urgentes, con la finalidad de poner en práctica los compromisos asumidos.

Al respecto, creo que la República Argentina ha dado muestras de ello, cumplimentando a través de su legislación interna, lo vinculado con la materia de prevención, investigación y enjuiciamiento de los responsables del delito de Trata de Personas, toda vez que luego de sancionarse la ley 26.364 sobre dicha temática, se incorporaron las normas correspondientes en el Código Penal Argentino. Asimismo, se legisló lo vinculado al régimen de medidas destinadas a la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de Trata y el deber del Estado Argentino de proporcionarles apoyo médico, psicológico, como así también el de suministrarles asesoramiento, educación, capacitación y alojamiento.

Pero resta aún la realización por parte de los poderes políticos del Estado Argentino de un verdadero debate a los fines de concretar medidas urgentes tendientes a detener el avance y aumento exponencial del Narcotráfico y la Trata de Personas.

A mi entender, la problemática del crimen organizado requiere ir más allá de una visión pragmática y reduccionista del tema. Debemos ir a las raíces más profundas de este flagelo. Analizar las causas y los efectos que produce en la población; detenernos y evaluar —como lo estamos haciendo en esta Cumbre— qué podemos hacer desde nuestra función para mejorar la situación de las víctimas del crimen organizado, así analizar las medidas que resulten más operativas y efectivas para frenar el avance de los cárteles de la droga y de las organizaciones delictivas de Trata de Personas.

Observar de una manera especial a los adictos de estupefacientes y brindarles las herramientas pertinentes para que puedan llevar adelante tratamientos de recuperación y desintoxicación y a la vez trabajar desde el Poder Judicial en forma coordinada con los municipios para conocer la situación social de los barrios y distritos que forman las distintas ciudades, a los efectos de llevar adelante tareas de prevención e investigación por intermedio de las fuerzas de seguridad.

En definitiva, estamos hablando de propender a la defensa de la persona, de la dignidad humana. Por ello encuentro aplicable a la situación actual, parte

de las conclusiones de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe realizada en Aparecida (Brasil) en el año 2007, cuando se expresa que: *“Dentro de esta amplia preocupación por la dignidad humana, se sitúa nuestra angustia por los millones de latinoamericanos y latinoamericanas que no pueden llevar una vida que responda a esa dignidad. La opción preferencial por los pobres es uno de los rasgos que marca la fisonomía de la Iglesia latinoamericana y caribeña”*.

Creo que en materia de prevención e investigación de los delitos de crimen organizado, existe una deuda pendiente por parte de los Estados, especialmente los que no contamos con una policía judicial nacional que lleve adelante las investigaciones bajo la órbita de los magistrados. Por ello, propongo que en forma urgente se cree dicha fuerza de seguridad, la cual podrá actuar en forma coordinada —en el caso de la República Argentina— con otras fuerzas nacionales, como puede ser Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, etc.

- Asimismo se necesita imperiosamente la radarización del espacio aéreo argentino para detectar las pistas clandestinas de aterrizaje en materia de narcotráfico.
- Extremar los controles en los pasos de frontera, especialmente en el límite con la República de Bolivia y de Paraguay, donde ingresa a la Argentina un importante volumen de estupefacientes, así también el ingreso ilegal de personas víctimas del delito de Trata.
- Creación y puesta en funcionamiento de mayor cantidad de Juzgados Federales y Fiscalías Federales especializados en la materia de Narcotráfico y Trata de Personas, bajo cuya órbita actuará la Policía Judicial.
- El cumplimiento de Protocolos de actuación que se adapten a las realidades de los distintos países, a los fines de optimizar el éxito de las investigaciones; abreviando los plazos en materia de realización de pericias informáticas, para lo cual es fundamental contar con personal técnico especializado.
- Asistencia judicial recíproca entre los Estados Parte que conforman cada región, a los fines de intercambiar información sensible vinculada a la prevención e investigación del crimen organizado.

Por todo lo expuesto es que estoy convencido que hoy es el momento de los magistrados; somos nosotros quienes debemos dar una respuesta más eficaz

a la problemática que venimos hablando en esta Cumbre, y tomar la férrea decisión de actuar a través de los canales legítimos con que contamos para dar una respuesta efectiva a la sociedad. No debemos olvidar que la Justicia es un servicio que debemos brindar a la comunidad y en el verdadero ejercicio de la magistratura, está puesta la esperanza de los pueblos para que podamos vivir en una sociedad más justa y más libre.

Por último, hago una breve mención a lo que para mí encierra el mensaje de la Carta Encíclica del Papa Francisco *Laudato Si'* y está condensado en el llamado personal de Su Santidad cuando dice: *“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común”*.

Por ello, creo que sobre este mensaje del Papa Francisco lleno de esperanza y luminosidad, debemos recostarnos todos los que de alguna manera tenemos la inmensa responsabilidad de impartir justicia, ya seamos católicos o pertenecientes a otras religiones. En nosotros está el querer cambiar el *statu quo* en que vivimos. Deberíamos ser verdaderos artífices en este mundo globalizado para intentar lograr los cambios que nuestro planeta Tierra, es decir, nuestra casa común, requiere y así poder afirmar que ella merezca ser habitada por nosotros los hombres y mujeres de la civilización del siglo XXI.

La Inclusión Social como Herramienta de Prevención del Crimen Organizado

Diego Sebastián Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de la Nación, Argentina

I. Introducción

Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Santo Padre Francisco la invitación para participar de esta Cumbre, que tiene una inestimable trascendencia no sólo en lo personal, sino también para todos los que tenemos el honor de estar acá sentados, porque, de alguna manera, representamos a muchos magistrados, funcionarios y empleados que día a día trabajan con probidad contra el crimen organizado.

De allí que esta importante convocatoria nos genera un serio compromiso y una gran responsabilidad de cara al futuro. Estoy convencido que ninguno de los que estamos acá —jueces, fiscales, operadores del sistema judicial y operadores de paz, como dijo el Santo Padre en su discurso—, vamos a ser los mismos después de estas Jornadas.

Es la figura del Papa Francisco la que fue capaz de reunir a jueces y fiscales de distintos países del mundo, para que nos unamos en un extraordinario objetivo común: combatir el narcotráfico, como también las nuevas formas de esclavitud y la trata de personas, ya sea en las figuras de trabajo forzado, explotación sexual o venta de órganos; en definitiva, lidiar contra el crimen organizado en sus diferentes formas de manifestación.

Sabemos que el camino no es fácil, por eso agradezco profundamente esta convocatoria del Santo Padre, que nos fortalece y nos alienta, pero también nos empuja a que redoblemos el esfuerzo y el compromiso, para impedir que el crimen organizado y la corrupción se roben la dignidad de los pueblos, la libertad y la vida del ser humano.

II. Deber de Visibilizar los Padecimientos de las Víctimas

Lamentablemente durante muchos años en nuestro país la acción criminal de los tratantes y los graves daños que genera a sus víctimas han pasado in-

advertidos a la vista de la sociedad, de políticos, empresarios, gobernantes, legisladores, jueces y fiscales.

La sanción de la ley 26.364, del año 2008 y su posterior modificación por la ley 26.842 en el año 2012, fueron determinantes para visibilizar la violencia y la gravedad de esta acción, que devasta los derechos humanos más elementales.

No digo ninguna novedad y todos sabemos que la trata de personas afecta de manera especial a los más débiles del planeta, a los marginados, a los excluidos. Empero, a pesar de lo indiscutible de esta afirmación, pocas veces somos capaces de trascender y tener una mirada desde el lugar de la víctima de este delito.

Resulta imposible cualquier abordaje de esta problemática, si no logramos colocar en el centro de la escena a quien ve morir día tras día sus ilusiones, sus capacidades y sus talentos.

He observado, con asombro, que en muchas ocasiones analizamos las conductas de las víctimas y sus declaraciones desde la óptica personal del Juez o del Fiscal, alejados de las denigrantes circunstancias por las que atraviesa la víctima en el momento del hecho o incluso en el momento de declarar.

Para comprender el relato de un hombre o una mujer que sufrieron los padecimientos que a menudo viven los damnificados de este aberrante delito, es necesario tener una sensibilidad especial, que trascienda la propia visión.

La justicia, con toda la carga y el valor de esta acepción, que no es ni más ni menos que dar a cada uno lo suyo, debe ser capaz de ponerse en el lugar de la víctima y desde ahí ser custodio de los derechos humanos.

III. Experiencia en Casos de Explotación Sexual

Esta mirada debe consolidarse, especialmente, en los casos de *explotación sexual*, en los que la persona en sí constituye el bien preciado por los tratantes. La persona se transforma en un objeto, sujeto a ser comercializado o adquirido monetariamente.

Actualmente me desempeño como Fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de la Nación, pero también me desempeñé como Fiscal Federal de Mercedes, provincia de Buenos Aires, en donde trabajé diversos casos de explotación sexual apenas se sancionó la ley de trata.

Me gustaría referirme a dos de ellos, pues muestran claramente cómo las miradas y los enfoques pueden provocar diferentes conclusiones:

a. Primer caso:

Con motivo de una larga investigación, que fuera delegada por el Juez Federal en el Ministerio Público Fiscal, que incluyó declaraciones testimoniales, tareas de campo en el lugar, intervenciones telefónicas de las comunicaciones que mantenían lo imputados, seguimientos, etc.; se estableció que en tres prostibulos, denominados de la misma manera, pero ubicados estratégicamente en distintas localidades, se explotaba sexualmente a mujeres mayores de edad, que eran captadas en el exterior mediante el engaño (eran en su gran mayoría de origen paraguayo y dominicano).

La contundente prueba de cargo llevó a que el Juez Federal dispusiera el allanamiento de los lugares. Como consecuencia de ello, se produjo la liberación de un número considerable de víctimas.

Luego de recibir los informes por parte de los psicólogos que contuvieron y estabilizaron a las víctimas —y que daban cuenta de la situación de trata—, se recibió declaración testimonial a cada una de las víctimas, las que explicaron con angustia y con vergüenza la situación denigrante que habían tenido que atravesar.

El análisis conjunto de la prueba llevó a la inexorable conclusión de que todas las víctimas habían sido engañadas y que los imputados se habían valido en casi todos los casos del bajo grado de instrucción, la circunstancia de tratarse de madres solteras que constituían el único sostén económico de su familia y de la condición económica que las apremiaba, todo lo cual se tradujo en una gran vulnerabilidad.

Además, para lograr la permanencia en el lugar fueron amenazadas, se les generó una deuda que debían pagar, se les aplicaron multas. En fin, se ins-

trumentaron diferentes medios coactivos que condicionaron la libertad de las víctimas.

Los imputados fueron procesados por el magistrado interviniente, esta decisión fue confirmada por el Superior Jerárquico y, en consecuencia, la causa fue elevada a juicio oral y público.

Luego de desarrollarse el debate, los integrantes del Tribunal Oral absolviéron a los imputados, realizando no sólo una valoración inadecuada y arbitraria de todas las pruebas, sino que, esto es lo más grave, hicieron una inconcebible interpretación del relato de las víctimas.

Y sobre este punto quiero ampliar mi exposición, pues, realmente, me provocó un impacto negativo el modo en que los jueces de ese Tribunal valoraron los dichos de las víctimas, aislado de los tratos denigrantes por ellas padecidos. En concreto, sostuvieron que: *“La víctima no era consistente en torno a porqué permaneció en el lugar una vez que comprendió que había sido engañada. Así como su “relajada actitud” posterior”*.

El Fiscal General de Juicio, afortunadamente, recurrió esa decisión y finalmente la Cámara de Casación declaró la nulidad de la resolución del Tribunal. Me gustaría destacar un párrafo de la sentencia, pues deja al descubierto el modo anómalo de valoración por parte de los jueces.

Allí se sostuvo: *“El sentenciante debe analizar los dichos de la víctima, no desde una óptica personal y alejada a las circunstancias que ésta estaba atravesando en el momento de los hechos o incluso en el momento de declarar, sino que debe ser capaz de trascender su propia visión sesgada de la realidad, para comprender el relato de la mujer en el marco de la experiencia que ella está relatando. Y siguió: Puede que aquello que los jueces consideraron una ‘actitud relajada’ sea en verdad una actitud de sumisión o ‘auto-abandono’ frente a lo que entiende como irremediable”*.

Quiero aclarar que, según lo que surgía de las conversaciones telefónicas de los imputados, esta damnificada a la que se hizo referencia, había llegado al centro de explotación un día antes del allanamiento en el que fue liberada y se había negado una y otra vez a mantener relaciones sexuales. Es decir,

se encontraba en un proceso que se denomina “de ablande”, en el cual ya le habían ofrecido consumir drogas y se contemplaba emplear métodos más violentos, hasta, incluso, violarla, con el fin de que accediera a los requerimientos de los tratantes y “entendiera” que no había otra opción más que cumplir con las reglas impuestas.

A esto me refiero cuando destaco que la justicia debe trabajar bien cerca de la víctima y tener una mirada sensible frente al sufrimiento ajeno.

b. Segundo caso

Otro suceso que me tocó investigar y me conmovió profundamente fue el de una niña de 14 años, de nombre Celeste, quien en situación de desamparo fue seducida por quien se hizo pasar por su novio, que la indujo a fugarse de su hogar y la trasladó a otra ciudad, de la cual desconocía toda información. En ese lugar fue vendida a otra persona, quien la obligó a ingresar en un prostíbulo. Allí sufrió todo tipo de padecimientos, desde amenazas, malos tratos, hasta reiteradas violaciones. Celeste nunca recibió dinero alguno por la explotación sexual de la que era víctima, sino que el dinero se lo daban a su dueño, un tal Julio, que cuando se negaba a “trabajar”, lo convocaban para que la golpeara y la devolviera lastimada al lugar.

Según los testimonios de otras víctimas, Celeste se la pasaba llorando todo el día en la cama y se reprochaba haber nacido, ya que nadie, ni sus padres, la querían. Celeste festejó sus 15 años en el prostíbulo.

Con la ayuda de una compañera y de un cliente logró escaparse y denunciar el hecho. La organización fue desbaratada, se detuvo a los responsables y se rescató a todas las víctimas.

Este terrible caso me lleva a reflexionar sobre la condiciones actuales de la sociedad donde hay tantas inequidades y cada vez más personas descartables. La globalización ha dejado fuera del sistema y sin posibilidades de subsistir a un sinnúmero de personas, lo que provoca que la oferta de potenciales esclavos se haya ido incrementando exponencialmente. Como contrapartida, el precio de los “nuevos esclavos” ha perdido valor, pues los hay y en abundancia.

Pero también nos lleva a recapacitar sobre determinadas situaciones que se repiten en la inmensa mayoría de los casos:

1.- La indiferencia de la sociedad: se trataba de prostíbulos que se habían asentado al menos diez años antes de la intervención del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, y se encontraban a la vista de toda la sociedad. Sin embargo, a ningún civil le llamó la atención.

Tal como enseña el Santo Padre en la Carta Encíclica “Laudato Si’”, no puede ser real un sentimiento íntimo de unión sin ternura, compasión y, principalmente, preocupación por los seres humanos. Y acá faltó preocupación por el prójimo.

2.- La complicidad de los funcionarios policiales, que no sólo omitieron durante más de diez años toda investigación de esos centros de explotación, sino que, en un caso, hasta alertaron a los tratantes acerca de que se iba a realizar un allanamiento, frustrando el rescate de las víctimas.

3.- La complicidad de los funcionarios municipales que habilitaron los centros de explotación bajo falsos pseudónimos: whiskerías, bares, etc. Estamos obligados a que estas conductas no queden impunes, y para eso necesitamos mantener una lucha sincera y sin pausa contra todo acto de corrupción por parte de los funcionarios, tanto de los más bajos niveles, como de los más altos estamentos, pues la corrupción se roba y despoja de recursos a los más débiles.

IV. Estadísticas y Vulnerabilidad

Las estadísticas diseñadas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de víctimas del Ministerio de Justicia, indican que entre abril de 2008 y febrero de 2016, se han rescatado y/o asistido a un total de 10 052 víctimas.

Realmente es indignante que en estos tiempos ocurran situaciones así. Y si bien el rescate de víctimas es muy auspicioso, también nos conduce a considerar que aún existen muchas personas en la Argentina y en la región, que día tras día son explotadas y vejadas por organizaciones criminales, lo cual muestra la gravedad del cuadro.

En este sentido, los estudios empíricos llevados a cabo por la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal del Ministerio de Justicia, en el año 2012, indicaban que existían, por lo menos, 10 000 personas en el país sometidas a esclavitud sexual o laboral, en condiciones inhumanas y que ese cálculo podría incluso ser mayor.

A partir de este estudio es claro que la estrategia principal debiera centrarse, en primer lugar, en rescatar a las víctimas que aún se encuentran en esa situación y en brindarle la contención necesaria para que no sean captadas nuevamente por estas organizaciones.

Pero también, y sobre esto quiero profundizar un poco más, en evitar que estas mismas u otras víctimas sean alcanzadas por estas organizaciones en un futuro.

La práctica nos ha demostrado que la inmensa cantidad de víctimas, más del 90 %, son personas en extrema situación de vulnerabilidad, a quienes, ya sea por su corta edad, o porque provienen de contextos de desigualdad, pobreza, les es imposible oponerse a la explotación.

Esta situación de fragilidad es aprovechada por las organizaciones criminales, que justifican su acción en el perverso discurso de que el “trabajo” ofrecido ayuda a la subsistencia de la persona que fue abandonada por el propio Estado.

Lamentablemente, en parte ese discurso es cierto: “El Estado abandonó a esas personas”.

V. Estrategias de prevención: Prevención social

Esta circunstancia nos conduce a reflexionar sobre el papel del Estado frente a este grave delito, así también sobre cuál debería ser la estrategia más adecuada de prevención, pues todos los instrumentos internacionales coinciden en que la prevención es fundamental en la lucha contra la trata (Convención de Palermo en su artículo 31, el Protocolo complementario también).

El vocablo *prevenir* —del latín *praevenire*—, alude a la acción de anticiparse e impedir que algo ocurra. Entonces, la principal estrategia de política criminal que el Estado tiene que desarrollar es lo que yo llamo la prevención social.

Y me pregunto: ¿Qué es la prevención social?

La prevención social en la trata de personas y en la delincuencia organizada en general es cualquier tipo de acción que disminuya el riesgo de que los seres humanos sean captados por estas organizaciones. Se trata de neutralizar los factores sociales de los que se nutre el crimen organizado.

Entonces, una política criminal del Estado debiera focalizar los esfuerzos en las poblaciones más pobres, a los fines de reducir los bolsones de vulnerabilidad, que son aprovechados por estas organizaciones.

Es fundamental, entonces, realzar la calidad humana, evitar la marginalidad social, generando mejoras en la salud, en la educación, en el trabajo, en el desarrollo social de los habitantes, en la infraestructura.

En definitiva, mejorar la calidad de vida de los más frágiles, de los que más sufren por la violencia de la pobreza.

No creo que sea una casualidad que en países que tienen tasas bajísimas de desempleo, como es el caso de Noruega, que tiene aproximadamente un 3 %, o Finlandia, cuyo índice no alcanza el 6 % y, además, no tienen los problemas estructurales de pobreza que tiene nuestro país, el número de víctimas de trata se redujo significativamente durante los últimos años.

VI. Conclusión

Para ir cerrando esta exposición, quiero dejar clara la siguiente idea: una adecuada política criminal por parte del Estado, debiera centrar su misión principal en el respeto por los derechos humanos, que alcanzan a todas las personas sin distinción de sexo, etnia, edad, religión, o condición social, cultural o económica.

Estoy convencido de que el cabal cumplimiento de los derechos sociales por parte del Estado, evitando la exclusión y la desigualdad, es la herramienta más eficaz para combatir toda forma de esclavitud y para disminuir las formas de violencia de las organizaciones mafiosas.

Muchas gracias.

El Crimen Organizado. Una amenaza para el Sistema de Bienestar Sueco

Mari Heidenborg

Juez Presidente, Corte de Distrito de Solna, Suecia

Señoras y señores, colegas: Me siento honrada de haber sido invitada a hablar aquí hoy. Estos dos días hemos oído mucho sobre el crimen organizado y su implicación con las drogas y la prostitución. Tenemos, en cierta medida, estos problemas también en Suecia. Sin embargo, no voy a abordar estas cuestiones. En su lugar voy a hablar de otra área, que ha sido recientemente descubierta por elementos criminales como una mina de oro real, nuestro sistema de bienestar social. El tema también incluye aspectos de la trata y la esclavitud moderna.

Suecia, como la mayoría de otros países, tiene su parte de la delincuencia organizada. Sin embargo, hasta hace poco se concentraba en ciertos tipos de delitos como las drogas y la prostitución.

En los últimos años, el crimen organizado se ha desplazado hacia nuevas áreas, áreas que amenazan nuestra estructura social y nuestro sistema de bienestar. Lo que es también relevante es que implican a víctimas de la trata como mano de obra barata. Y no es sino hasta hace muy poco tiempo que descubrimos lo amenazante que este nuevo tipo de crimen es para nuestra sociedad.

Como ya sabrán, Suecia cuenta con una red de seguridad social altamente desarrollada. Este sistema de bienestar incluye, prestaciones de licencia parental, cuidado de salud subsidiada, desempleo y pensiones. Estos y otros beneficios en cantidades significativas.

La delincuencia organizada ha llegado a darse cuenta de lo fácil que es tomar ventaja de nuestro sistema de bienestar social. El criminal típico dentro de la delincuencia organizada roba bancos o vende drogas. Sin embargo, hoy en día, prefieren establecer un negocio, utilizando gente pobre como mano de obra barata y producir certificados falsos para reclamar beneficios de di-

ferentes programas de bienestar público. El riesgo de ser descubierto es casi inexistente ya que el sistema de control no es del todo eficaz. Y si alguien es atrapado la sentencia potencial es bastante baja.

Últimamente, varios incidentes de delitos contra el sistema de bienestar público han tenido lugar. En varios casos, los delincuentes han tenido éxito extrayendo grandes cantidades de los programas de asistencia a las personas enfermas, discapacitadas y mayores.

La forma en que se organiza este tipo de delitos difiere de un caso a otro. En algunos casos los inmigrantes pobres son llevados a Suecia de países por lo general fuera de Europa para ser aprovechados como parte del plan criminal. El centro de inteligencia nacional Sueca, NUC, publicó recientemente un informe sobre el uso de los inmigrantes por el crimen organizado para cometer delitos contra el sistema de bienestar público. Cuando los inmigrantes llegan a Suecia, se ven privados de sus pasaportes y obligados a trabajar, por ejemplo, como ayudantes para personas mayores o discapacitadas sin, en algunos casos, goce de sueldo o uno muy bajo. Mientras los autores intelectuales del crimen ganan grandes cantidades mediante la recopilación de los pagos de beneficios completos.

En otros casos, las personas discapacitadas o enfermas son llevadas a Suecia. Si se les otorga un beneficio, los criminales toman toda la cantidad y la persona enferma se queda sin ningún cuidado o tratamiento. En otras palabras, la delincuencia utiliza a los migrantes o extranjeros pobres como herramientas en su plan. Estas personas se utilizan de muchas maneras. Por un lado, los delincuentes exigen que los extranjeros les paguen el costo de obtener permisos de trabajo, o los gastos del viaje a Suecia. Por otro lado, la organización criminal los utiliza como mano de obra durante la percepción de los beneficios, percibiendo grandes ganancias. Estamos hablando de cantidades masivas, incluso comparables con las ganancias de narcóticos. Y este tipo de delitos son mucho más seguros de cometer.

Este tipo de delito constituye una amenaza para todo el sistema de Bienestar Social en Suecia. Los contribuyentes pueden considerarse a sí mismos contribuyentes del crimen organizado, que a la larga va a disminuir sus ganas de pagar impuestos. Este tipo de delito también hace que las personas en

necesidad real de las prestaciones no reciban la ayuda necesaria ya que los costos del sistema de bienestar son demasiado altos. Y, por supuesto, es otra área donde los criminales utilizan a las víctimas de la trata.

Así que, ¿cómo podemos llegar a término con este problema? Mi punto de vista personal es que los castigos más severos no son la solución apropiada. Sentencias duras no tienden a tener un efecto disuasorio sobre la delincuencia en este tipo de clientela. Una manera mucho más eficaz sería asegurar que el sistema judicial tenga los medios jurídicos adecuados para confiscar y sancionar las ganancias de las organizaciones criminales. Lo más importante es la necesidad de mejorar los sistemas de control y acciones conjuntas entre diferentes autoridades del gobierno si queremos detener a estos criminales.

Últimamente, el gobierno sueco ha llegado a comprender la gravedad de este nuevo tipo de crimen organizado. Durante el otoño de 2015 se nombró a un investigador especial para hacer una revisión de la capacidad del Estado para responder a la delincuencia organizada, sistemática y económicamente. La tarea del investigador especial es identificar los riesgos existentes en los programas de bienestar público con el fin de prevenir, y tomar medidas legales contra, los tipos de delitos que he descrito. Esta iniciativa, es muy positiva, no menos importante debido al hecho de que tales crímenes pueden conducir a consecuencias imprevistas cuando se trata de la capacidad del Estado para mantener y desarrollar aún más el sistema de bienestar en el futuro. Realmente espero que el investigador especial tenga éxito en su misión. Nuestro sistema de bienestar tiene que ser protegido. La gente en necesidad real de las prestaciones deben de obtener beneficios. Finalmente, tenemos que detener a los criminales que utilizan migrantes pobres y víctimas de la trata como herramientas en sus planes obteniendo beneficios ilícitamente. Gracias por escuchar.

Casos de Crimen Organizado: Balanceando Justicia y Misericordia

William S. Duffey, Jr.

EEUU

Quiero agradecer especialmente al papa Francisco por su estímulo ayer y a monseñor Sánchez Orondo por el extremo privilegio de asistir a la conferencia. A la Pontifica Academia de las ciencias sociales por su sabiduría para armar esta conferencia. A mis colegas de alrededor del mundo y a mis colegas en mi país por el raro privilegio de discutir problemas de proporción que rompen el corazón. La trata muestra el rompimiento de la tela de una sociedad civil que degrada la dignidad de la personas y para la cual tenemos recursos insuficientes para abordarla de una manera aceptable o significativa.

Una radiografía estadística de los casos de trafico sexual y de drogas en 2014 en los Estados Unidos únicamente revelan la gravedad de la posición establecida del crimen organizado en mi país. En 2014 interesantemente sólo hubo 190 casos federales de tráfico sexual en una población de 250 millones de personas. Más interesante es el hecho de que tenemos pocos problemas de trafico laboral. De los 250 millones de personas en el país, de 14 a 30 millones son ilegales y en la medida en que los trabajos no son tomados por americanos son tomados por los que han podido inmigrar a nuestro país y no tienen estatus. Eso explica el por qué de tan pocos casos de tráfico laboral, al menos estadísticamente.

En 2014 hubo 21 667 casos federales de tráfico de drogas. Estos no incluyen los casos llevados en los 50 estados del país. Debo decir que no sabemos, combinando juicios federales y estatales, el alcance del trafico ilegal de drogas en los Estados Unidos. El alcance es simplemente desconocido, pero todo el mundo sabe que es preocupante.

Hemos estado por unos días en una ciudad de maravillas arquitectónicas. Es un recordatorio, para mí, que por siglos esta ciudad ha puesto importancia en la representación que sus edificios tienen en la gente de la población. Nuestra edad no es de siglos, tenemos como 250 años de edad, pero sí tenemos

maravillas arquitectónicas ocasionales en nuestras ciudades. Una de la cuales es la Suprema Corte de los Estados Unidos de América. Esta se encuentra en Washington D.C. y fue diseñada por Cass Gilbert. La brillantez no está en lo que se muestra sino en su diseño y funcionamiento. Mientras te acercas al edificio tienes que ascender 44 escalones y eso cubre una bastante grande extensión que debe atravesarse antes de entrar al edificio y cuando lo haces tienes que pasar por un dicho que dice: *Justicia Igual Bajo la Ley*. Un estudioso de arquitectura describió así el edificio de la Suprema Corte de Estados Unidos “*te sientes humilde y elevado. Cass se las ingenio para hacerte sentir de inmediato la gravedad del pasado y la apertura del futuro, es una fuente de confort, refugio y de un sentido de posibilidad sabiamente considerado*”.

Para aquellos de ustedes que no son jueces, sé que hay algunos de ustedes y para los que no son jueces de Estados Unidos, que creo tienen una función diferente en nuestra democracia que la que tienen en otras democracias. Quiero que entiendan lo que es para mí ser un juez.

La pregunta para mí siempre ha sido ¿Que me ha sido confiado como miembro de nuestro sistema judicial? Ahora hablo de casos de crimen organizado, pero en cada caso que se me confía me hago esta pregunta. Los casos de crimen organizado son simplemente casos que son cometidos por gente que esta organizada. Este incluye tráfico sexual, laboral, tráfico organizado de narcóticos y virtualmente cualquier otro crimen en el que una organización está implicada.

Interesantemente, ha habido mucha discusión en los últimos días del proceso por el que tratamos de identificar, investigar, enjuiciar y procesar por medio de nuestros procesos judiciales. Así como lo que pasa al terminar el caso con enfoque en las víctimas. Las víctimas son importantes, pero mi responsabilidad primordial, y la de los colegas que están aquí conmigo, en mi país, es la obligación principal del gobierno, que consiste en proveer un lugar en una democracia para extender justicia a las personas que la buscan. La justicia se extiende a la víctimas y también a los acusados, esto es importante. Debemos ver al sistema de justicia desde todos los ángulos ya que tenemos dos importantes responsabilidades como jueces.

La primera es que para una democracia es esencial mantener la justicia e integridad del proceso judicial para que el cumplimiento de las leyes que se pasen

por la legislatura puedan ser llevadas a cabo. Justicia e integridad, toda democracia necesita eso. La gente necesita confiar en los jueces y en el sistema judicial que se les pone al alcance. Si no, la democracia fracasará. A través del establecimiento de un sistema de justicia justo y que opera con integridad, que refuerza y preserva para nosotros y probablemente para todos los jueces de todos los países la independencia judicial que es crítica para la democracia. Para concretar lo anterior hay un número de cosas que se deben hacer y eso incluye la extensión de dignidad a víctimas y acusados. Entendiendo el trauma de las víctimas y reconociendo que los acusados son gente viciada que debe ser responsabilizada por sus actos. La humanidad del sistema depende de la justicia e integridad del mismo, algo que nos ha sido particularmente confiado a nosotros.

Nuestra segunda responsabilidad es que haya resultados justos para aquellos que son responsables del crimen. Para nosotros eso es en gran medida manifestado en el proceso de sentencias y la sentencia misma. Para mí, la justicia es la determinación de una consecuencia impuesta sobre una conducta criminal específica de un acusado que se aparece frente a mí. Esto requiere balance entre la responsabilidad social a la comunidad, el daño a la víctima y la extensión de misericordia al acusado basada en sus circunstancias personales que explican la conducta criminal en la que se involucraron. Esto requiere y normalmente va acompañado de gran tensión al balancear estas igualmente importantes responsabilidades que tenemos al sentenciar. Tratamos de templar y asegurar justicia en nuestro sistema por medio de la promulgación de nuestra Comisión de Sentencias. Conformada por un grupo de jueces y ciudadanos de alrededor del país para crear aplicación uniforme y acorde a un tipo de sentencia recomendada que depende no sólo de la severidad del tipo de crimen cometido sino también de la manera en que es cometido. Generalmente incrementada la exposición del acusado si el crimen es cometido en una manera que lo hace más severo. Su propósito es asegurar la justicia y uniformidad en nuestro sistema de sentencias. Dos cosas que yo creo son clave de esta comisión es la percepción de aquellos que atraviesan el proceso y del público que observa más allá de si el sistema es justo o confiable.

Una responsabilidad fundamental en una corte al sentenciar es la idea de un castigo justo. La conducta criminal es inconsistente con ambos órdenes comunitarios, tanto secular como espiritual. Este concepto de justicia está

apoyado e incluido en la autoridad de la Biblia, hemos hablado bastante de Isaías aquí, y un verso dice “*Yo, el señor, amo la justicia odio el robo y el mal hacer*”. Para mí eso siempre ha sido una advertencia de dios que la justicia es un concepto que de hecho no está incluido y que requiere que castigemos y hagamos rendir cuentas a aquellos que cometen agravios contra gente o la comunidad.

Es importante reconocer el valor intrínseco de todos los individuos. Hay algunos cuya conducta y contexto son muy importantes y cuyo potencial de restauración es mínima por lo que el encarcelamiento es un resultado justo.

Todas las sentencias en las cortes de Estados Unidos reconocen, hasta en los casos más violentos y reincidentes, que hay una obligación para restaurar a las personas. Incluso una castigada severamente con encarcelamiento. Tratar de restaurar a lo acusados de manera productiva y legal para que sean miembros de la comunidad es prioritario. Esto se hace de dos maneras, ninguna de la cuales está bajo la jurisdicción de la Corte o mía. Programas restaurativos en prisión y supervisión de contacto una vez que las personas son liberadas si fueron enviadas a prisión o de los que están bajo la supervisión de la corte mientras llevan a cabo una sentencia no custodial.

Creo que la justicia y misericordia requieren la provisión de servicios para restaurar la dependencia que las une. Debe haber una voluntad más amplia del público y de nuestro gobierno, el de los Estados Unidos y de los gobiernos de los que ustedes dependen, para proporcionar recursos y proveer servicios de restauración después de la rendición de cuentas por los crímenes cometidos. Debe también haber recursos adecuados para las víctimas incluyendo aquellos de ofensas de trafico humano y sexual. Este es un tema de apoyo público por que hay y seguirá habiendo un robusto compromiso judicial a rehabilitar y restaurar dando apoyo a las víctimas y a esos encontrados culpables de las conductas criminales más atroces.

Déjenme contarles de lo difícil que es ejercer este balance, con un caso que yo presidí. Jesús Flores estaba al mando de un gran célula de trafico de drogas en el área de Atlanta. Como todas las células de tráfico de droga, en el área de Atlanta usaba el sistema interestatal de Estados Unidos para distribuir drogas que eran importadas por un cartel de México a Estados Unidos. Éstas lle-

gaban a Estados Unidos encubiertas pretendiendo ser lechuga o productos electrónicos u otro tipo de productos. De hecho, las drogas escondidas en estas cargas eran de un grupo diferente de personas que tenían la intención de que las usaran los consumidores, las víctimas del tráfico de drogas.

¿Saben?, yo tengo un hábito en todos los casos de hacer un organigrama de estas organizaciones para poder entender su funcionamiento. Se ven igual que las de cualquier otro negocio, por cierto. En este caso había principales responsables, tenientes, distribuidores, gerentes de almacenaje y conductores. Aproximadamente cinco niveles organizacionales. Todos fueron encontrados culpables o se asumieron culpables y todos fueron sentenciados. Sin embargo, fue mi responsabilidad entender el rol individual de cada persona en la estructura organizacional. Había un número de personas en la organización como un todo que era muy criminal, pero también había gente victimizada por la pobreza y la vulnerabilidad a ser explotados por otros criminales. Gente que está en los Estados Unidos y que es incapaz de proveer a sus familias, gente desesperada por hacer dinero que fue seducida a esta actividad para poder vivir la vida y no necesariamente una buena vida.

Como jueces, nuestro rol es ser justos y reconocer dónde debe de extenderse la misericordia. Ser justos y consistentes, pensativos y firmes en cómo respondemos a las víctimas de la actividad criminal; pero también a aquellos que son encontrados culpables de cometer crímenes. La justicia siempre requiere compasión y entendimiento de la gente y sus motivos. Al juzgar yo creo que es igualmente importante escuchar a nuestro corazón tanto como a nuestra cabeza. Ultimadamente para mí es mi compromiso al evangelio de Mateo del que ya hemos hablado hoy. Amar la justicia y ser misericordioso es mi responsabilidad personal. Me gustaría hacer una última exhortación de ese pasaje que habla de caminar humildemente con nuestro Dios.

Desde mi punto de vista esta es la principal responsabilidad que me ha sido otorgada en mis deberes y en los casos que me son asignados para buscar justicia, siendo misericordioso y caminando humildemente con mi padre celestial.

Una cosa final que me gustaría compartir es que, a veces vengo aquí a confortar en una conferencia como esta y me siento desalentado. Me he sentado muchas veces en mi banco observando personas que se han involucrado en

conductas deplorables. A aquellos que han usado a otros para llevar a cabo conductas horrendas y me he preguntado si en verdad hace la diferencia lo que hago. El papa Francisco me ha dicho que sí la hace. Cada enero puedo ver a través de mi ventana un campo de futbol americano donde hay 14000 jóvenes que se reúnen para atender a una conferencia con base espiritual que por años ha sido dedicada a poner fin a la esclavitud. Ellos son mi esperanza por que cuando la gente acude a mi hemos perdido. Pero creo que es la admonición y estímulo del papa Francisco y de esas 14000 personas que cada enero se presentan ahí y sus acciones diarias las que me convencen que el trabajo por hacer está en la cancha y no en la corte. Muchas gracias

Cooperación Internacional en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos

Vladimir Aras¹

Fiscal de Apelación Federal en Brasília, Brasil

No se puede negar que la corrupción y el crimen organizado están entrelazados. Por un lado, la corrupción puede ser identificada como uno de los factores subyacentes que afectan el estado de derecho y la lucha contra la delincuencia organizada, lo que socava las estrategias eficaces de aplicación. Por otro lado, las organizaciones criminales se benefician de la delincuencia: los políticos corruptos y los funcionarios públicos reciben sobornos para llevar a cabo tareas ilegales, lo que resulta en organizaciones criminales que hacen aún más dinero. A largo plazo, mientras el crimen organizado se vuelve más fuerte y más fuerte, el estado de derecho está en peligro, mientras que más personas son víctimas de él.

No hace falta decir, esta es una amenaza más grande que la jurisdicción de cualquier país y no puede ser manejada por sí sola, lo que significa que, en términos prácticos, el crimen organizado debe ser combatido en el plano internacional y en cooperación. Cabe destacar que el marco jurídico mundial es muy complejo e implica muchas convenciones importantes, tales como las siguientes, por citar solo algunos ejemplos:

- a) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (COT);
- b) Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (complementa COT);
- c) Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones (complementa COT);
- d) Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (complementa COT);

¹ Vladimir Aras es un Fiscal de Apelación Federal en Brasília, Brasil. Él es el responsable de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Oficina del Procurador General (SCI / PGR). Es también profesor de Derecho Penal en la Universidad Federal de Bahía (UFBA), en Salvador, y cuenta con una Maestría en Derecho Público de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE).

- e) Convenio sobre el trabajo forzado de la Organización Internacional del Trabajo;
- f) Convención del Consejo Europeo contra el tráfico de órganos humanos;
- g) Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA);
- h) Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (también conocida como la Convención de Viena);
- i) La Convención de Budapest sobre la Ciber-delincuencia (COE, CETS 185);
- j) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC);
- k) Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS);
- l) Instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas para combatir el terrorismo;²
- m) Convención de las Naciones Unidas sobre las Medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedades ilícitas y de bienes culturales, et al. (convenciones de la UNESCO, etc.).

Los tratados antes mencionados son de alta importancia para garantizar la efectividad de los casos de enjuiciamiento intrincados, especialmente cuando se trata de investigar las conexiones entre la corrupción, el tráfico de personas, el lavado de dinero y otras formas de crimen organizado. Los fiscales y jueces de todo el mundo pueden confiar en estos tratados y en las normativas internas con el fin de procesar a los criminales y proteger a las víctimas.

Como vivimos en una economía global, cada vez es más fácil viajar al extranjero, se pueden comprar bienes prácticamente en cualquier lugar, enviar dinero a otros países al instante, entre otras mercancías contemporáneas. La criminalidad ha hecho uso de estos recursos y tecnologías, y se ha vuelto global. Como resultado, la criminalidad debe ser combatida globalmente,

² La Convención de 1970 para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves; la Convención de 2010 sobre la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional; la Convención de 1973 sobre la prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas; la Convención Internacional de 1979 contra la toma de rehenes; la Convención de 1980 sobre la protección física de los materiales nucleares; la Convención de 1988 para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima; 1991 del Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección; la Convención Internacional de 1997 para la represión de los atentados terroristas; la Convención Internacional de 1999 para la represión de la financiación del terrorismo; y el Convenio Internacional para la represión de actos de terrorismo nuclear, et al 2005.

acatando el estado de derecho. Esto es exactamente por lo que los tratados antes mencionados son tan importantes.

Con el fin de luchar eficazmente contra la delincuencia internacional, estos cinco pilares, sobre los que las políticas penales deben regirse, se han diseñado:

- a) El derecho penal en cada nación debe estandarizarse a nivel mundial dentro de lo posible;
- b) Las técnicas especiales de investigación deben ser estipuladas por las leyes nacionales;
- c) Los jueces, fiscales y agentes de la ley deben someterse a programas especiales de formación y capacitación;
- d) La cooperación internacional en materia penal debe ser más amplia y más a menudo utilizada³;
- e) Los procedimientos penales deben seguir los estándares internacionales mínimos para proteger los derechos de las víctimas y los acusados.

Para que estos pilares puedan ser efectivos, los jueces y fiscales también deben cumplir con buenas prácticas tales como:

- a) Someterse a programas de capacitación y formación;
- b) Coordinar con el sector privado a fin de garantizar que la responsabilidad social corporativa (RSC) se lleva a cabo debidamente
- c) No detenerse en sus esfuerzos para mejorar el acceso a la justicia;
- d) Deben hacer su trabajo para que las instituciones legales (y otros agentes implicados en la cooperación,) se hagan más fuertes y se responsabilicen
- e) Deben respetar los derechos humanos;
- f) Desempeñar su papel en el fortalecimiento del reconocimiento mutuo de medidas judiciales.

La lucha por delante es larga y dura, pero hay que afrontarla con mucha diligencia y con la cabeza bien alta. Desanimarse por la corrupción es fácil, ya que es un medio que facilita el tráfico de seres humanos. La lucha contra el

³ Algunos objetos que pueden ser solicitados en los procedimientos de cooperación internacional son: a) la obtención de pruebas en el extranjero; b) la congelación y la recuperación de activos; c) la extradición de los criminales; d) la protección de las víctimas, et al.

soborno puede ser bastante desalentadora, ya que permite a los criminales comprar pasaportes y visas con bastante facilidad, dejándolos, cruzar fronteras y huir de la justicia. Puede parecer un trabajo ingrato a veces.

Esto me hace pensar en el paradigma de lucha contra la trata, que incluye tres tareas principales para la aplicación de la ley por parte de agentes, fiscales y jueces: i) la prevención del crimen; ii) la protección de las víctimas; iii) procesar, y condenar a los responsables. Para lograr este objetivo, la construcción de alianzas es de suma importancia: hay que construir y renovar constantemente los puentes con la aplicación de leyes extranjeras, fiscales extranjeros, y el sector privado (estos últimos, siempre y cuando sea apropiado). Las palabras claves aquí son alentar, establecer y mantener asociaciones. El instrumento que debe utilizarse es la cooperación jurídica internacional en materia penal.

Con el fin de ilustrar esta cooperación, mencionaré dos casos de trata de personas con los que me he encontrado en mi carrera: la primera se llama “princesas del interior de Brasil” (Operação Princesas do Sertão). Este fue el caso de 32 mujeres pobres y humildes que fueron atraídas a aceptar billetes de avión para emigrar a Italia y España bajo la promesa de una vida mejor. Lo que sucedió en vez, fue que estas mujeres fueron tomadas como rehenes de una organización criminal y forzadas a la prostitución después del viaje. Mientras, la policía brasileña estaba sobre un caso de desaparición de una adolescente, dieron con una banda criminal vinculada a la anterior y se desenmascaró el funcionamiento de tres grupos que explotaban a estas mujeres. Entre otros delitos, estos grupos cometieron fraude en contra de titulares de tarjetas de crédito con el fin de pagar los boletos de avión de las víctimas. Afortunadamente, las mujeres fueron encontradas y rescatadas y los delincuentes fueron procesados, condenados y sus activos confiscados. Este final feliz sólo fue posible gracias a la mutua cooperación entre Brasil, España e Italia.

El segundo caso tiene un nombre muy apropiado aunque espantoso (Operación bisturí o “Bisturí”), y se refiere a la explotación de 47 víctimas brasileñas de escasos recursos, que fueron trasladados a Sudáfrica con el fin de tener uno de sus riñones extraídos quirúrgicamente. La explotación de la miseria es evidente cuando se comprueba que un riñón humano tiene un precio de 150.000 dólares en el mercado internacional, mientras que estas víctimas fueron pagados entre 1.500 a 7.000 USD por sus órganos.

Los riñones de estos brasileños fueron trasplantados a cuerpos de pacientes israelíes enfermos a los que este esquema les pareció un buen negocio con el fin de resolver su problema de salud. Después de todo, el plan existió previamente en Israel, pero un riñón israelí era mucho más caro que los de los brasileños o rumanos, por lo que se eligieron estos nacionales para ser explotados en su lugar. El fraude era tan atroz que los documentos relacionados con las cirugías fueron forjados para que pareciera que el receptor del órgano y el donante eran familiares, que es un requisito legal en Sudáfrica. Por suerte, 32 personas fueron condenadas por estos delitos en tres países distintos (Brasil, Israel y Sudáfrica), mientras que uno de los delincuentes fue extraditado de Italia con el fin de pasar su tiempo de sentencia en la cárcel. Como se puede ver claramente, estos casos difíciles sólo pueden llegar a un final feliz (o, al menos, a que se haga justicia) si hay cooperación jurídica mutua.

Brasil ha estado haciendo su tarea con el fin de prepararse para luchar esta guerra. El gobierno brasileño, agencias, servicios y tribunales de enjuiciamiento independientes se han dado cita anual con el fin de establecer objetivos a alcanzar por cada institución. ENCCLA⁴ cuyas acciones incluyen proyectos de ley para la promulgación de una nueva legislación, planes de desarrollo de capacitación, y la coordinación de las fuerzas del orden. Además de eso⁵ AIAMP ha iniciado la campaña “La corrupción no”⁶ para promover el estado de derecho en las jurisdicciones de sus 21 países miembros.

Por otra parte, en esta materia, Brasil también se compromete a cumplir con la 17 metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS), especialmente la 8,7 (relativa al trabajo decente y crecimiento económico), que compromete a los países a “adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzado, terminar con la esclavitud moderna, la trata de personas y conseguir la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, como el reclutamiento y uso de niños soldados, para que en 2025 erradiquemos el trabajo infantil en todas sus formas”.

⁴ ENCCLA: Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero.

⁵ AIAMP: Asociación Interamericana de Servicios Públicos de Cargo.

⁶ Sitio web en español: <http://corrupcaonao.mpf.mp.br/es>; y en portugués brasileño: <http://corrupcaonao.mpf.mp.br/>.

Otros objetivos que vale la pena mencionar, relacionados con la idea de promover la paz, la justicia y fortalecer instituciones son:

- 16.2. “Acabar con el abuso, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura de niños”.
- 16.3. “Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional, y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”.
- 16.4 “Para el año 2030, reducir de manera significativa los flujos financieros y de armas ilícitos, fortalecer la recuperación y devolución de activos robados, y combatir todas las formas de crimen organizado”.
- 16.5 “Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas”.
- 16.11 “Fortalecer las instituciones nacionales relevantes, incluso mediante cooperación internacional, para desarrollar capacitación a todos niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y el crimen”.

El tiempo de esta Agenda 2030 sigue corriendo y agotándose. Como se mencionó antes, luchar contra la corrupción es fundamental para hacer frente a la delincuencia organizada de manera eficiente. Cuando uno mira hacia atrás en la historia de Brasil, no se puede pasar por alto el hecho de que millones de africanos fueron desplazados, esclavizados y enviados por la fuerza a Brasil y otros países de América del Sur. En esa diáspora, millones de vidas se perdieron o se cambiaron irremediamente.

El pasado no puede ser alterado. Lo que hay que tratar de hacer es tratar de cambiar el presente. En este sentido, los jueces, fiscales y agentes de la ley tienen que renovar sus votos para continuar su lucha y proteger el futuro de muchas generaciones por venir. Incluso si ese futuro parece sombrío, uno no puede perder la esperanza, muchos dependen de este trabajo, que no debe ni puede detenerse. Esperemos que las ruedas no dejen de girar. Yo aquí dejo mi caso, pero los fiscales, los jueces y la sociedad civil no puede descansar.

Un agradecimiento especial para el Sr. Nerrian Possamai por ayudarme a mejorar la traducción al inglés de este artículo, el cual fue presentado en la Cumbre del juez contra la trata de personas y la delincuencia organizada, que se llevó a cabo por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, en la Ciudad del Vaticano, en el 4 de junio de 2016.

Acciones Conjuntas y Cooperación del Poder Judicial - Una Respuesta al Crimen Organizado

Branko Hrvatin

Presidente del Tribunal Supremo de la República de Croacia

Introducción

El principio básico actual sobre la orientación de libre circulación de bienes, servicios, y dinero constituye todo un reto para la sociedad moderna. El mercado común, la comunidad sin las fronteras, y la globalización son los factores que facilitan la fluctuación de las personas. Estos factores proporcionan oportunidades para el desarrollo de los negocios, no sólo para los legales sino desafortunadamente para los ilegales y criminales también.

Los crímenes se volvieron más sofisticados, difundiendo sus actividades a través de las fronteras de un estado, quejándose del sistema gubernamental y dificultando la separación jurídica de los segmentos ilegales. Es imperativa una respuesta unísona de las autoridades judiciales de la sociedad moderna sobre esa situación.

La UE, así como la ONU, ya han construido un marco legal eficaz y potente para luchar contra el crimen. Esta actividad es un proceso en curso. Pero una tradición jurídica, filosofía y leyes complementarias existentes definen la integración de tales disposiciones en los sistemas jurídicos nacionales. No se pueden evitar fácilmente. El poner en el sombrero del animado juez puede ser más difícil de lo que puede parecer.

Marco Legal

Aprobar la leyes decir, el establecimiento del marco legal es sólo el primer paso, ya que las disposiciones tienen que aplicarse a un caso en particular. Por ende la importancia de los tribunales nacionales, especialmente de los más altos tribunales de los estados respectivos. Los tribunales supremos, más o menos, muestran orientación a los tribunales inferiores por la interpretación y / o explicación, así como mediante la aplicación de las disposiciones que

originan en los instrumentos jurídicos internacionales (convenciones, tratados, reglamentos, directivas). Esto es de suma importancia cuando los derechos humanos están en juego. Los más altos tribunales deben ser guardianes del sistema legal teniendo como punto de vista la protección de los derechos humanos.

Papel de los Tribunales

Aproximación de las opiniones legales y las normas de los tribunales supremos de los respectivos estados y la armonización de su jurisprudencia relativa a la protección de la sociedad de la delincuencia y también la preservación de los derechos humanos de los autores, debería ser su objetivo común. La respuesta unánime de los jueces de la delincuencia contribuye a la protección, la seguridad y, finalmente, a la paz en la comunidad mundial. La cooperación judicial es esencial.

Los fallos de los tribunales, incluso del más alto tribunal, que implican a los elementos transfronterizos, tienen efectos no sólo dentro del Estado miembro de que se trate, sino también fuera de sus fronteras. Los tribunales de un Estado deben ser capaces de reconocer y comprender la decisión de colegas de otros estados y consecuentemente cumpliendo sus decisiones. Los tribunales nacionales / jueces deben estar conscientes del hecho de que sus decisiones tienen efectos en una comunidad en general e inducir su responsabilidad por esos fallos.

Los más altos tribunales del estado están cargando una gran responsabilidad. Con esta perspectiva su cooperación y colaboración son esenciales e importantes. Estableciendo firmes lazos entre los tribunales supremos de los estados respectivos vinculándolos en una cooperación vertical es un camino hacia la comprensión mutua y la red eficaz. En consecuencia, esto contribuirá a la creación de herramientas eficaces y fuertes para luchar contra los crímenes nacionales e internacionales, salvaguardando al mismo tiempo los derechos humanos fundamentales.

Esta también es una manera de establecer la base sólida y firme para el aparato del principio de reconocimiento mutuo entre las autoridades judiciales de diferentes países en la práctica diaria. Es decir, en la UE el reconocimiento mutuo se promovió como pilar fundamental de la cooperación judicial en el Consejo Europeo

de Tampere en 1999 e introducida por el Tratado de Maastricht en el Título V (disposiciones sobre una política exterior y de seguridad común).

Reconocimiento Mutuo

Como se ha dicho, las fronteras abiertas fácilmente pueden ser mal utilizadas por el crimen organizado. Para luchar contra la propagación de un crimen organizado en varios países, o para llevar a la justicia a un delincuente que intenta ocultarse en algún país o para escuchar la declaración de un testigo que se encuentra en otro país, es necesaria la cooperación judicial.

Una cooperación tradicional por medio de una asistencia judicial mutua puede ser lenta y compleja a veces. Ya no corresponde a la realidad de hoy, donde la gente circula fácilmente. Se necesita una forma más avanzada de cooperación judicial y esto es reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales, un proceso por el cual se reconoce una decisión tomada por una autoridad judicial y es ejecutada por otro país como si fuera una decisión adoptada por las autoridades judiciales de este último país. Este es un concepto clave en el ámbito de la cooperación judicial, ya que ayuda a superar las dificultades derivadas de la diversidad de los sistemas judiciales.

La mejora del reconocimiento mutuo tiene como objetivo elevar la eficiencia de cooperación entre las autoridades. Se basa en la confianza mutua y el respeto común de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como están establecidas en los tratados. Mirándolo desde la perspectiva reconocida del juez de esta dimensión transnacional despierta no sólo cuestiones técnicas derivadas de las diferencias comparativas, sino también en las legales y en las políticas. Los problemas legales relacionados con la (in)compatibilidad de los sistemas jurídicos particulares, así como su capacidad de interacción, por otro lado se relacionan en un dilema político con el papel de los jueces en la jurisdicción del Estado respetado. El desarrollo y fortalecimiento de la libertad, la seguridad, la justicia y en consecuencia la paz, es uno de los objetivos principales de la sociedad moderna. Estos esfuerzos son necesarios para construir confianza mutua y el principio de legalidad. Al mismo tiempo, esta es la manera de dar un poder judicial sólido y un eficiente marco para que pueda cumplir con su deber.

Sin embargo, este marco debe estar puesto en manos de jueces competentes, independientes e imparciales. La trata de seres humanos, violando los derechos humanos y la corrupción presentan el cáncer de la sociedad moderna. Para el crimen organizado no existen zonas restringidas, no existen escrúpulos ni abstinencia de corromper a nadie y todo el mundo en la obtención de sus objetivos. Pero en el mundo de hoy en día hay pocas cosas peores que un juez corrupto y hay muy poco e incluso nada que se pueda hacer para solucionarlo. El juez y el poder judicial son los máximos santuarios jurídicos para las víctimas, heridos y personas impotentes. Si ese santuario se viera comprometido no hay oportunidad para la paz. La legislación vive sólo a través de la práctica y a través de resoluciones del poder judicial en casos particulares. El poder judicial, son aquellos jueces que en primera instancia son creadores de la justicia que se determina no sólo por su comprensión de algunas de las disposiciones y de su aplicación a casos particulares, sino también por su integridad y compromiso para llevar la justicia.

Agregando a lo que se ha enfatizado anteriormente, el fortalecimiento de las normas legales y la aproximación de la jurisprudencia aumentarán la confianza mutua en el sistema jurídico de cada uno y darían lugar a la mejora del principio de reconocimiento mutuo. Existe un consenso común que debe ser apoyado y ampliado más allá de las fronteras de la UE. Los esfuerzos deben estar especialmente concentrados en la búsqueda, incautación y confiscación de los activos del crimen organizado. El crimen organizado sólo entiende un lenguaje de dinero, hay que conseguir dinero es su interés final sin importar la situación. Desposeer el dinero es lo que más les duele, ya que su único propósito y esencia se refleja en la cantidad de dinero que “ganan”. Por otro lado, se deberían de confiscar los medios para aliviar el dolor y el sufrimiento de las víctimas del crimen organizado.

Con el fin de lograr una cooperación judicial más eficaz en materia penal en la lucha contra el crimen organizado, una evaluación de los instrumentos legales actuales puede abrir nuevas fronteras y dirigir nuevas propuestas legislativas para lograr un desarrollo eficaz de un espacio judicial común.

En un mundo constantemente cambiante, nuevos retos ya están en el horizonte. Sólo la creación de redes y la vinculación del poder judicial, especialmente los jueces de la cooperación vertical y horizontal, pueden dar una

respuesta a los desafíos que tenemos por delante. Se debe enfatizar fuertemente en la responsabilidad de los jueces, los profesionales que aplican la ley supera el sistema jurídico nacional y las fronteras del estado en cuestión. La comunidad da la seguridad y confianza a sus miembros, pero debe protegerse de cualquier criminal que ponga en peligro la seguridad con la cual se debería de vivir.

Los Esfuerzos Judiciales para Prevenir la Delincuencia Organizada en Corea del Sur

Sang-jin Oh

Juez presidente, Corte de Distrito de Changwon, Corea del Sur.

Sentencia de Confiscación de Un Edificio Utilizado para el Tráfico Sexual

En 2013, el Tribunal Superior de Corea rindió un juicio interesante confiscando un edificio utilizado como prostíbulo. El acusado había estado llevando en secreto un negocio de prostitución durante un año en un edificio de cinco pisos, con ganancias de 150 000 dólares en total. La Ley Penal de Corea establece que los objetos que han sido utilizados para la comisión de delitos pueden ser confiscados. Aunque la confiscación no es necesaria en todos los casos, el Tribunal Superior sostuvo en este caso, que era legítimo confiscar dicho edificio, tomando en cuenta la cantidad de producto, el valor neto del edificio, sus antecedentes penales, etc. Por otra parte, el tribunal decidió que el acusado debía renunciar a los ingresos generados a partir de la organización de tráfico sexual.

La Estrategia Tradicional para Luchar Contra el Crimen Organizado

Hace algunas décadas, el gobierno coreano decidió que la manera más eficaz para controlar el crimen organizado era tomando medidas enérgicas contra delitos específicos cometidos por el crimen organizado. Por ejemplo, en 1990, el sexto Presidente Roh Tae-woo declaró la guerra contra el crimen, fortaleciendo la represión de diversos delitos como crímenes de narcóticos, violencia organizada y tráfico de personas.

Por otra parte, la organización de un grupo delictivo fue en sí considerado un delito muy grave. De acuerdo con la Ley Penal, una persona que organiza un grupo criminal, o que se une a esos grupos, recibe el castigo específico de ese delito, aun cuando no se haya cometido ningún crimen. La Ley Especial sobre la Sanción de Violencias dice que el líder de un grupo delictivo organizado con el propósito de cometer crímenes violentos está sujeto a pena de muerte, cadena perpetua o por lo menos diez años, incluso sin ningún tipo de delitos concretos cometidos por el líder o sus miembros; a sus miembros

principales se les, encarcela de por vida o por lo menos siete años; y para los demás miembros el encarcelamiento es de dos años. Para el tráfico sexual, otra ley especial, la Ley de Sanción de Ordenación de tráfico sexual, impuso la misma pena que la ley especial al organizador de un grupo criminal destinado a cometer tráfico sexual.

En cuanto a la propiedad usada para un crimen, la Ley Penal estipula que un tribunal puede confiscar objetos que se han utilizado en la comisión de un delito.

El papel principal del poder judicial de Corea ha sido castigar severamente a los delincuentes y ejercer la confiscación, de acuerdo con medidas legislativas y administrativas estrictas. La estrategia ha sido considerada eficaz hasta cierto punto, las principales bandas criminales se derrumbaron y los índices de asesinato y violación disminuyeron en un 6% en dos años durante la guerra contra el crimen. La Ley Penal y esos dos actos especiales, que entraron en vigor en 1953, 1961 y 2004, respectivamente, siguen en vigor con modificaciones menores hechas.

Cambio hacia la Confiscación del Producto del Delito

Ya que la ganancia económica ha sido la razón principal para el crimen organizado moderno, la comunidad mundial se ha vuelto más consciente de la importancia de la prevención de formación de grupos criminales y de confiscar el producto del delito. Se firmaron varios convenios con la ONU y el gobierno de Corea adoptó las medidas correspondientes a esos convenios.

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 establece que cada parte debe adoptar medidas de confiscación de productos narcóticos o de propiedad por el valor de dicho producto. Un acto relevante de Corea, la Ley de Casos Especiales Relativos a la Prevención del Tráfico Ilícito de estupefacientes de 1995, establece que los productos generados por delitos contra la salud y los bienes obtenidos con dicho producto están sujetos a confiscación. El acto también se centra en la prevención del lavado de dinero, diciendo que cualquiera que acepte ese producto sabiendo que las ganancias son ilegales será objeto de sanción. En desarrollo de la asistencia judicial recíproca, la ley es-

tablece que el Gobierno podrá cooperar para la ejecución de la confiscación por la solicitud de otros países.

Después de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (COT) se adoptó el objetivo de promover la cooperación transfronteriza en la lucha contra el crimen organizado. En el año 2000, la Ley sobre el Reglamento y la Sanción Penal a ganancias fue promulgada en Corea del Sur. El contenido de la ley con respecto a la confiscación, el lavado de dinero, y la asistencia legal mutua son similares a las de la ley antes mencionada de Narcóticos, aunque la primera amplía su ámbito de aplicación a una variedad de delitos graves más allá de delitos contra la salud.

Por otra parte, antes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) que se firmó en el año 2003, la Ley sobre el castigo de los delitos con agravantes específicos que sigue en vigor impuso penas severas para el soborno. Si el monto del soborno aceptado es más de 80 000 dólares estadounidenses, la pena es de prisión, es de por vida o por lo menos diez años; entre 40 000-80 000 dólares estadounidenses, el encarcelamiento es durante al menos siete años; y entre 25 000-40 000 dólares estadounidenses, el encarcelamiento dura al menos cinco años. Además de la pena, el soborno es objeto de confiscación conforme a la Ley Penal, que es un esfuerzo legislativo congruente para frenar la posesión de ganancias ilegales por parte de delincuentes.

La necesidad de la Confiscación de Bienes y la Consideración del Derecho de Propiedad

Las actividades de la delincuencia organizada en Corea del Sur implican usura, prostitución, tráfico de drogas, extorsión, juego ilegal, manipulación de acciones, etc. El crimen organizado está motivado en gran medida por los beneficios económicos del delito, en Corea del Sur como en cualquier otro país.

La necesidad de confiscar las ganancias ilegales ha sido bien reconocida en el poder judicial coreano. El decomiso del producto del delito no ha despertado mucha controversia, ya que los beneficios se generan a partir de hechos delictivos y, por lo tanto, no hay ningún motivo legítimo para que el criminal se quede con las ganancias. El castigo al lavado de dinero ha sido menos

controversial, ya que la medida se considera un medio eficaz para hacer cumplir la confiscación del producto del delito.

La confiscación de los bienes utilizados para un crimen, sin embargo, ha sido a menudo objeto de debate. Como se mencionó anteriormente, un tribunal puede confiscar un objeto que se ha utilizado o haya tratado de ser utilizado en la comisión de un delito. Este tipo de confiscación a veces puede ser excesiva e infringir el derecho de propiedad, en especial cuando el valor del objeto utilizado para la ofensa es desproporcionadamente mayor que el valor de las ganancias o utilidad obtenida por el delito. Un edificio proporcionado para el juego, o un coche usado en conducir un borracho podría ser un ejemplo de ello.

El principio de proporcionalidad aplica aquí. El Tribunal Supremo de Corea sostuvo que todos los factores pertinentes, incluidos los siguientes, deben ser considerados para decidir la legitimidad de la confiscación: cómo se utilizó el objeto en la comisión del delito, qué tan esencial fue para la comisión del delito, qué tan grande fue el daño a la víctima, el papel y la responsabilidad del propietario del objeto, el motivo de la infracción y la posibilidad de reincidencia.

En la reciente sentencia mencionada al principio aplica el principio de proporcionalidad. Como se presume en el caso, la confiscación de la propiedad podría ser eficaz para la disuasión de un crimen. Es deber de los jueces, sin embargo, lograr un equilibrio entre la satisfacción de propósito criminológico y la protección del derecho de propiedad, al igual que el derecho del criminal a un proceso debe ser protegido, incluso cuando son crímenes fuertes y castigos duros.

Conclusión

Una polémica ley anti-corrupción entrará en vigor este mes de septiembre. La Ley Penal y la Ley de la Agravación de Sanciones de Delitos Específicos, limita el alcance de la pena de los delitos de corrupción a funcionarios públicos y al personal de las organizaciones públicas. La nueva ley de lucha contra la corrupción expande el alcance a periodistas y profesores. El gobierno está considerando la posibilidad de promulgar un decreto de aplicación corres-

pondiente, que impone una multa a cualquier persona que reciba un valor actual de más de 40 dólares estadounidenses con respecto a su trabajo. Este esfuerzo legislativo parece reflejar el deseo del público de medidas legales más fuertes para mejorar la integridad y la transparencia de la sociedad.

El poder judicial coreano en consecuencia continuará su esfuerzo por imponer castigos estrictos al crimen organizado, confiscando las ganancias ilegales y los bienes utilizados para la ofensiva, pero no a expensas de los derechos del acusado a obtener un procedimiento de justicia y de la propiedad.

***En Búsqueda de la Eficacia en la Lucha
Contra el Crimen Organizado Nacional y
Transaccional. Una Propuesta de Investigación***

Sandra Patricia Ramírez Montes

Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia

Fiscalía General de la Nación

Bogotá, Colombia

Extiendo un saludo de gratitud especial, en primer lugar, al Papa Francisco y a Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, por esta honrosa invitación, así como una felicitación a los demás organizadores de esta importante reunión en pro de la eficacia de la justicia.

A manera de introducción debo manifestar que si bien existe un acuerdo general orientado a señalar que las causas de los fenómenos de delincuencia organizada son exógenas al derecho penal como económicas en el caso del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y precursores químicos; o sociales, económicas y culturales como en el caso de la trata de personas y el tráfico de migrantes, también existe un consenso al señalar al derecho penal como instrumento de la prevención y represión de estas conductas.

Como fruto de la experiencia de las mejores prácticas en mi país, Colombia, principalmente derivadas de las investigaciones sobre organizaciones dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos y delitos conexos, y de organizaciones armadas al margen de la ley, relacionadas con crímenes de lesa humanidad, y la corrupción ligadas a todos estos fenómenos. He de manifestar: para que la lucha contra la delincuencia organizada sea eficaz en orden a la protección y reparación de la víctima y la neutralización y prevención de las actividades delictivas a través del derecho penal, deberá entonces requerirse de dos condiciones principales:

1. La primera de ellas **LA VOLUNTAD DEL ESTADO** en su persecución, la cual deberá ser absoluta e incondicional.
2. **La CAPACIDAD del sistema penal** para ser instrumento de la administración de justicia de manera efectiva y eficaz.

Me detendré en este segundo presupuesto y en particular orientaré esta exposición a la propuesta de una metodología global para la investigación y juzgamiento del crimen organizado, para lo cual abordaré tres temas principales:

1. El primero de ellos, la diferenciación de los contextos de violencia sistemática en la criminalidad organizada y el hecho global del crimen de lesa humanidad.
2. En segundo lugar, los objetivos de las investigaciones en ambos contextos.
3. Y en tercer lugar, la utilización de las técnicas especiales de investigación.

En cuanto al primer asunto he de precisar que la diferenciación del contexto de violencia sistemática en el crimen organizado y en el hecho global del crimen organizado no es una cuestión menor.

El Papa Francisco, en el acuerdo que en buena hora hemos adquirido todos nosotros el día de ayer, ha expuesto la necesidad del reconocimiento de la trata de personas como crimen de lesa humanidad.

Esta afirmación, sin duda, se encuentra soportada en el umbral de gravedad suficiente para dejar de ser consideradas estas conductas respecto a la afectación de bienes jurídicos individuales como la libertad, la libertad sexual, la vida o la integridad personal.

Esta afirmación requiere un cambio de enfoque orientada a la protección de intereses jurídicos universales, como la paz, la seguridad de los Estados y el Bienestar de la Humanidad.

Sin embargo, considero pertinente en este espacio, y únicamente con la intención de contribuir en la discusión, precisar técnicamente, cuando estos contextos efectivamente han mutado de la violencia sistemática del crimen organizado al hecho global del crimen de lesa humanidad.

Tomando como referencia el párrafo primero del artículo séptimo del Estatuto de Roma, el cual en varias de las legislaciones nacionales, ya ha sido adoptado a nivel interno, he de precisar algunos de sus elementos.

El concepto del ataque contra una población civil contiene:

“El ataque”, más allá de la consideración de la descripción de sus elementos como una línea de actos de conducta similar y conforme a la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, que ha precisado que se entiende por ATAQUE una campaña que tiene por objeto el ataque contra una población civil¹. Este elemento de la CAMPAÑA hace alusión a dos presupuestos principales:

- El primero un elemento ORGANIZACIONAL
- Y el segundo un elemento de PLANIFICACIÓN.

En cuanto al primer elemento de ORGANIZACIÓN, es claro respecto al desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, como en un principio se consideraba que sólo podían cometer crímenes de lesa humanidad, aquellas organizaciones que tenían relación con el Estado o con la política del Estado. Esto fue aclarado en el auto de apertura de investigación en la situación de la República de Kenia, del 31 de marzo de 2010, en donde la Corte Penal Internacional, precisó que no es necesario que la organización tenga una vinculación directa con el Estado, sino que basta que la organización tenga una política de ataque generalizada o sistemática contra una población civil².

¹ Corte Penal Internacional, Sala de Cuestiones Preliminares II, autorización de investigación en la República de Kenia, 31 de marzo de 2010, párrafo 80: “The meaning of the term ‘attack’, although not addressed in the Statute, is clarified by the Elements of Crimes, which state that, for the purposes of article 7(1) of the Statute, an attack is not restricted to a ‘military attack’.^^ Instead, the term refers to ‘a campaign or operation carried out against the civilian population’. As provided for in article 7(2)(a) of the Statute, an attack consists of a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in article 7(1).^^

² Corte Penal Internacional, Sala de Cuestiones Preliminares II, autorización de investigación en la República de Kenia, párrafo 83 y siguientes: “Further, article 7(2)(a) of the Statute imposes the additional requirement that the attack against any civilian population be committed ‘pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack’.^^ The Elements of Crimes offer further clarification in paragraph 3, in fine, of the Introduction to Crimes against humanity, where it is stated that: 77 is understood that ‘policy to commit such an attack’ requires that the State or organization actively promote or encourage such an attack against a civilian population; and in footnote 6 of the same Introduction to Crimes against Humanity, where it is stated that: [a] policy which has a civilian population as the object of the attack would be implemented by State or organizational action. Such a policy may, in exceptional circumstances, be implemented by a deliberate failure to take action, which is consciously aimed at encouraging such attack. The existence of such a policy cannot be inferred solely from the absence of governmental or organizational action. 84. The Chamber notes that the Statute does not provide definitions of the terms ‘policy’ or ‘State or organizational’. However, both this Chamber and Pre-Trial Chamber I have addressed the policy requirement in previous decisions. In the case against Katanga and Ngudjolo Chui, Pre-Trial Chamber I found that this requirement: [...] ensures that the attack, even if carried out over a large geographical area or directed against a large number of victims, must still be thoroughly organised and follow a regular pattern. It must also be conducted in furtherance of a common policy involving public or private resources. Such a policy may be made either by groups of persons who govern a specific territory or by any organisation with the capability to commit a widespread or systematic attack against a civilian population. The policy need not be explicitly defined by the organisational group. Indeed, an attack which is planned, directed or organised - as opposed to spontaneous or isolated acts of violence - will satisfy this criterion. 76 85. In the ‘Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo’, this Chamber also addressed the issue, stating that: [t]he requirement of ‘a State or organizational policy’ implies that the attack follows a regular pattern. Such a policy may be made by groups of person who govern a specific territory or by any organization with the capability to commit a widespread or systematic attack against a civilian population. The policy need not be formalised. 76 Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges, Indeed, an attack which is planned, directed or organized - as opposed to spontaneous or isolated acts of violence - will satisfy this criterion. 77 86. Regarding the meaning of the term ‘policy’, the Chamber will apply, in accordance with article 21(2) of the Statute, the definitions given in the abovementioned precedents. The Chamber also takes note of the jurisprudence of the ad hoc tribunals, and the work of the International Law Commission (the ‘ILC’).^^ While the Chamber is mindful of the jurisprudential evolution and the eventual abandonment of the policy requirement before the ad hoc tribunals,^^ it nevertheless deems it useful and thus appropriate to consider their definition of the concept in earlier cases”

Adicionalmente, en este mismo auto, se precisaron cuáles son los requisitos que debían tener estas organizaciones, y dentro de éstos se enumeraron varios, algunos de estos tienen relación con la creación de forma jerárquica o estructurada con división de poder dentro de la organización, (i) Que la organización tenga control sobre una parte o la totalidad del territorio. (ii) Que la organización tenga la capacidad logística o financiera para realizar el ataque, y por último (ii) que la organización tenga como objetivo el ataque contra una población civil³.

Ahora bien, el elemento que diferencia el contexto de lesa humanidad con un contexto de crimen organizado, es que en el primero el ataque va dirigido contra una población civil. Población civil que debe estar distinguida o seleccionada, es decir, una población civil que no sea escogida al azar. En esto se diferencia por ejemplo de los contextos de los crímenes de guerra. Según la autorización de investigación en la República de Costa de Marfil, la misma Corte Penal Internacional en el 2011⁴, indicó cuáles son los criterios dentro del contexto de lesa humanidad que se requieren para distinguir esta población civil, señalando la pertenencia de este grupo poblacional por su etnia, religión, nacionalidad, político o por otros factores diferenciadores, dentro de los cuales se pueden incluir factores sociales.

³ Corte Penal Internacional, Sala de Cuestiones Preliminares II, autorización de investigación en la República de Kenia, párrafo 93: *"In the view of the Chamber, the determination of whether a given group qualifies as an organization under the Statute must be made on a case-by-case basis. In making this determination, the Chamber may take into account a number of considerations, inter alia: (i) whether the group is under a responsible command, or has an established hierarchy;^^ (ii) whether the group possesses, in fact, the means to carry out a widespread or systematic 85 Yearbook of the International Law Commission 1991, which states that: individuals "with de facto power or organized in criminal gangs" are just as capable as State leaders of implementing a large-scale policy of terror and committing mass acts of violence." attack against a civilian population;^^ (iii) whether the group exercises control over part of the territory of a State;^^ (iv) whether the group has criminal activities against the civilian population as a primary purpose;^^ (v) whether the group articulates, explicitly or implicitly, an intention to attack a civilian population;^^ (vi) whether the group is part of a larger group, which fulfils some or all of the abovementioned criteria. It is important to clarify that, while these considerations may assist the Chamber in its determination, they do not constitute a rigid legal definition, and do not need to be exhaustively fulfilled."*

⁴ Corte Penal Internacional, Sala de Cuestiones Preliminares III, 23 de junio de 2011, párrafos 80 a 82: *"Furthermore, there is no need to establish that the entire civilian population of the geographical area in question was being targeted. However, the civilian population must be the primary object of the attack in question and cannot merely be an incidental victim. The term "civilian population" refers to persons 46 In the Katanga and Ngudjolo case, Pre-Trial Chamber I observed "as opposed to war crimes which are provided for in article 8 of the Statute, the term "civilian population" within the meaning of article 7 of the Statute affords rights and protections to "any civilian population" regardless of their nationality, ethnicity or other distinguishing feature" Decision on the Confirmation of Charges, 30 September 2008, ICC-01/04-01/07-717, para. 399 (emphasis added). In the Bemba case, Pre-Trial Chamber II similarly observed that "the potential civilian victims under article 7 of the Statute could be of any nationality, ethnicity or other distinguishing features"; Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 June 2009, ICC-01/05-01/08-424, para. 76 (emphasis added). However, in the Situation in Kenya, Pre-Trial Chamber II ruled "the potential civilian victims of a crime under article 7 of the Statute are groups distinguished by nationality, ethnicity or other distinguishing features"; Situation in the Republic of Kenya, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, ICC-01/09-19-Corr, 31 March 2010, ICC-01/09-19-Corr, para 81 (emphasis added). ICC-02/11-3 23-06-2011 29/80 EO PT No. ICC-02/11 30/80 23 June 2011 who are civilians, as opposed to members of armed forces and other legitimate combatants."*

En este caso, y este es el aporte en esta instancia, se propone que en los delitos de trata de personas, esclavitud, esclavitud sexual, prostitución forzada, la causal de distinción de la población civil, es social, la cual radica precisamente en la VULNERABILIDAD de esta población civil atacada. *Vulnerabilidad en la cual todos los expositores casi en un contexto general han estado de acuerdos en ello, debido a causas de exclusión sociales, económicas y culturales.*

Adicional a lo anterior, y una vez aclarado este primer aspecto, es importante indicar, que el operador judicial conjuntamente con sus funcionarios de policía judicial, deben realizar un diseño o plan de la investigación trazando los objetivos generales o específicos, en este orden lo primero que se debe hacer es, identificar el tipo de organización criminal a la cual se debe hacer frente.

Las tipologías de las organizaciones criminales mutan con facilidad, actualmente por ejemplo, en mi país han dejado de considerarse los esquemas de “cartel” o de vinculación jerárquica estandarizada para mutar a esquemas de organización flexible, donde diferentes redes criminales se especializan en ciertas partes de la división de la empresa criminal y prestan estos servicios a diferentes organizaciones, lo cual hacen más complejo y difícil el seguimiento y análisis de la organización.

Frente a los objetivos, es claro cómo en un principio, los mismos solamente se orientaban a la desarticulación de la organización, lo cual hacía que los resultados no redundaran precisamente en su eficacia.

Hoy en día, esos objetivos deben ser ampliados no solamente a la desarticulación de la organización y a la búsqueda de represión de su capacidad financiera y patrimonial a través de las medidas que los Estados han creado, por ejemplo, en mi país tenemos una acción de extinción del derecho de dominio, o en otros países que tienen leyes de confiscación; sino que además se debe extender a neutralizar la procuración logística en el futuro de estas organizaciones, a través de la ruptura de los nexos de corrupción y detectar, desde luego, las oportunidades de prevención.

En el desarrollo de estos objetivos, además se deberán tener en claro las actividades primarias y secundarias de la organización, porque ninguna de estas organizaciones se dedican, y no pueden por su naturaleza, a una sola modalidad delictiva.

La identificación de los roles de los autores y de los partícipes, y aquí nuevamente como consecuencia del aumento del umbral de gravedad de los crímenes relacionados con el tráfico de personas dentro de la perspectiva de lesa humanidad, deberán, en aras de evitar la impunidad, ampliarse a nuevas formas de coautoría y participación considerando dentro de ellas como formas de coautoría derivadas de las distintas modalidades de la *joint criminal enterprise* o de la empresa criminal conjunta, así como respecto a las modalidades de participación, éstas no pueden ser únicamente relacionadas con el encubrimiento, la complicidad o la instigación, también deben ser expuestas a todas las demás formas de contribución, entre estas se sugieren: la contribución por otros medios, el suministro de las armas para su comisión, y la contribución de algún otro modo a la intencionalidad del grupo. Estas últimas formas de participación, ya han tenido algún desarrollo a partir del artículo 25, literales b, c y d, del Estatuto de Roma.

Por último, es importante señalar, que en este modelo de investigación que se propone a nivel global, deben ser tenidas en cuenta las técnicas especiales de investigación, ya que son propias de la investigación de los fenómenos delictivos de criminalidad organizada, dentro de éstas se encuentran las vigilancias electrónicas, las interceptaciones telefónicas, el agente encubierto, las entregas controladas.

Para esto se deberán crear acuerdos entre los Estados que estimulen la cooperación internacional. Acuerdos como de compartición de bienes, cuando entre los Estados se comparte la información.

También se deben realizar acuerdos para la realización de estas mismas entregas vigiladas o controladas, así como de vigilancias electrónicas, pues en este momento no existen acuerdos tipo para las distintas regiones. Los acuerdos que se dan, son limitados de urgencia que deben establecerse a través de los mecanismos judiciales tradicionales.

De la misma manera deberán utilizarse las nuevas tecnologías, especialmente aquellas que brindan la posibilidad de análisis de información, utilizarse las herramientas de Big data, lo cual logra en tiempo real resultados en asociación en identificación de autores y de modos de operación criminal.

Gracias.

La Organización Criminal. Tratamiento Penal y Procesal en Brasil

Rômulo de Andrade Moreira

Procurador General de Justicia Adjunto para Asuntos
Jurídicos del Ministerio Público del Estado de Bahia, Brasil

Señoras y señores, colegas Jueces y Fiscales aquí presentes. Tengan todos Ustedes muy buenos días. Soy de Brasil, y voy a hablar sobre el tratamiento penal y procesal penal de las organizaciones criminales en mi País.

En Brasil, desde el año de 2013, hay una ley que define lo que es una organización criminal y reglamenta la investigación policial, los medios de obtención de pruebas y el procedimiento penal que se aplicará.

Según esta ley, constituye organización criminal la asociación de cuatro o más personas estructuralmente ordenadas que se caracterizan por la división de tareas, aunque de manera informal (y eso es un problema), con el fin de obtener, directa o indirectamente, ventajas de cualquier tipo, a través de la práctica de delitos cuyas penas máximas sean superiores a cuatro años, o que tengan un carácter transnacional y a las organizaciones terroristas.

Según esta ley, es posible la denominada “colaboración premiada” que, para nosotros, no es nada más que una delación premiada. De esta manera, el Juez podrá, a petición de las partes, conceder al delator el perdón judicial, reducir en hasta dos tercios la pena privativa de libertad o sustituirla por una pena restrictiva de derechos, desde que él haya colaborado efectivamente y de forma voluntaria con la investigación y siempre que de la delación se consiga uno o más de los siguientes resultados: 1) La identificación de los otros coautores y participantes de la organización criminal y de los crímenes practicados por ellos; 2) Revelación de la estructura jerárquica y la división de las tareas de la organización criminal; 3) La prevención de los delitos derivados de las actividades de la organización criminal; 4) La recuperación total o parcial del producto o beneficio de los crímenes cometidos por la organización criminal, y 5) La localización de una eventual víctima con su integridad física preservada.

La concesión del beneficio tendrá en cuenta la personalidad del delator, la naturaleza, las circunstancias, la gravedad, el impacto social del crimen y la eficacia de la delación. Dependiendo de la importancia de la delación premiada, tanto la Fiscalía como la Policía pueden solicitar al Juez el perdón judicial del delator, aunque este beneficio no haya sido previsto en la propuesta inicial del acuerdo de delación. La delación puede ser posterior a la sentencia condenatoria. En este caso, la ley dispone que la pena puede reducirse hasta la mitad. También, en la etapa del proceso de ejecución penal, el delator podrá obtener el beneficio de la progresión del régimen de prisión, régimen carcelario. Tras el acuerdo, debe redactarse un acta, la misma que, con las declaraciones del delator y la copia de la investigación, será enviada al Juez para su homologación, que deberá comprobar su regularidad, legalidad y voluntariedad, pudiendo, en sigilo, escuchar al delator en presencia de su abogado. El Juez podrá no homologar el acuerdo que no cumpla con los requisitos legales o adaptarla al caso concreto.

Obviamente, que esta posibilidad prevista en la ley brasileña, de facultar al Juez la modificación del acuerdo hecho por las partes, atenta contra el Sistema Procesal Penal Acusatorio y sus principios, especialmente el de la imparcialidad del juzgador.

Las partes pueden retractarse de la propuesta. En este caso, las pruebas presentadas por el delator (contra sí mismo) no podrán ser utilizadas en su contra. Esta acta de acuerdo deberá hacerse por escrito y contener: 1) El relato de la delación y sus posibles resultados; 2) Las condiciones de la propuesta de la Fiscalía o de la Policía; 3) La declaración de aceptación del delator y su defensor; 4) Las respectivas firmas y la especificación de medidas de protección al delator y su familia, en caso de que fuera necesario.

La solicitud de homologación del acuerdo será distribuida en sigilo, conteniendo únicamente las informaciones que no puedan identificar su contenido y al delator. Las informaciones detalladas de la delación serán enviadas directamente al respectivo Juez. El acceso a los autos estará restringido al Juez, a la Fiscalía y a la Policía, con el fin de garantizar el éxito de las investigaciones, permitiendo al abogado del delator, en relación al ejercicio del derecho de defensa, un amplio acceso a los elementos de las pruebas, salvo aquellos relativos a las investigaciones en curso. El acuerdo de la delación deja de ser sigiloso después de recibida la querella. A partir de ese momento el delator,

ahora en calidad de acusado, tendrá los siguientes derechos: 1) Disfrutar de las medidas de protección previstas en la ley específica, teniendo preservados sus datos personales y su imagen; 2) Ser juzgado separadamente de los otros coautores y participantes y asistir a las audiencias sin contacto visual con los otros reos; 3) No tener su identidad revelada por los medios de comunicación, ni ser fotografiado o filmado sin su previa autorización por escrito; 4) Cumplir la pena en un establecimiento penal diferente de otros condenados.

En este punto, es necesario hacer otra observación al respecto de lo que ocurre en mi país. No obstante esta previsión legal con relación a la necesaria preservación de la imagen y de los datos personales de los investigados, algunos órganos de la prensa brasileña han tenido amplio acceso a informaciones sigilosas contenidas en los acuerdos de delación premiada, publicando trechos de las declaraciones, así como colocando en sus páginas las fotografías de los delatores, en grave atentado a la ley y, también, a la Carta Magna brasileña.

Según la ley, en sus declaraciones, el delator renunciará, en presencia de su abogado, al derecho de permanecer en silencio y estará obligado a decir la verdad. Esta disposición de la ley brasileña atenta vergonzosamente contra el Pacto de San José de Costa Rica (o la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y contra el Pacto de Nueva York sobre Derechos Civiles y Políticos, así como contra la Constitución brasileña, que garantizan expresamente el derecho al silencio y el derecho de no producir prueba en su contra.

También está prevista la acción controlada, acto de investigación que consiste en retardar la intervención de la Policía, siempre y cuando se mantenga en observación y seguimiento, de modo que la intervención policial se concrete en el momento más efectivo para la formación de pruebas y obtención de informaciones. Ese retraso en la intervención policial será comunicado previamente al Juez competente que, en caso necesario, establecerá sus límites y lo informará a la Fiscalía. La comunicación debe ser distribuida en sigilo para que no pueda haber fuga de informaciones sobre la operación que está siendo ejecutada. Si la acción controlada implica en la transposición de fronteras, el retardo de la intervención policial sólo podrá ocurrir con la cooperación de las autoridades de los países que figuren como posibles destinos de los investigados, con el fin de reducir el riesgo de fugas y la pérdida del producto, objeto, instrumento o provecho del delito.

La ley brasileña también permite la infiltración de agentes de la Policía en las tareas de investigación. Este medio de investigación también debe ser solicitado por la Policía o la Fiscalía. Esta infiltración deberá ser precedida de una autorización judicial detallada, sigilosa y motivada, para establecer sus límites. En caso de que el pedido de infiltración haya sido hecho por la Policía, el Juez, antes de decidir, tendrá en cuenta el parecer por escrito de la Fiscalía. El pedido de la infiltración será distribuido sigilosamente, a fin de no contener informaciones que puedan perjudicar la operación o identificar al agente que será infiltrado. Deben ser tomadas todas las medidas necesarias para cumplir con éxito las investigaciones y dar protección al agente encubierto. Sólo se aceptará la infiltración si la prueba no puede ser producida por otros medios disponibles. El plazo será de hasta seis meses sin perjuicio de las prorrogaciones eventuales, demostrada su necesidad.

Vencido el plazo indicado anteriormente, el informe detallado será presentado al Juez competente, que comunicará inmediatamente a la Fiscalía. Los autos de la operación de infiltración acompañarán la querrela de la Fiscalía, cuando serán puestos a disposición de la defensa, garantizando la preservación de la identidad del agente infiltrado. Si hay indicios seguros de que el agente infiltrado sufre peligro inminente, la operación será suspendida a requerimiento de la Fiscalía o de la Policía, dando aviso inmediato al Juez.

La ley considera que no se puede penalizar la práctica de delitos por el agente encubierto, cuando no se pueda exigir una conducta diversa, excluyendo la culpabilidad y, por lo tanto, el crimen, según la tradicional dogmática penal. Sin embargo, el agente que no guarde en su conducta la debida proporcionalidad con el propósito de la investigación, deberá responder por los excesos cometidos. El agente puede rechazar o ponerle fin a la operación encubierta, tener su identidad alterada, hacer uso de medidas de protección para su integridad física, tener su nombre, su formación, su imagen, su voz y otras informaciones personales conservadas en sigilo, así como no ser identificado, ni fotografiado o filmado por los medios de comunicación, sin su consentimiento previo.

Para terminar, agradezco a todos por su atención y quiero aprovechar la oportunidad para manifestar mi preocupación sobre la lamentable situación política que vive mi País, ya que acabarán de apartar a la Presidenta de la República,

elegida legítimamente por el pueblo brasileño por dos periodos, sin que haya cualquier investigación contra ella por parte de la Fiscalía o de la Suprema Corte brasileña, poniéndose en el Poder un gobierno formado, en gran parte, por hombres, blancos y ricos, pues las mujeres también fueron apartadas del gobierno. Eso es mismo muy lamentable y preocupante para todos nosotros de Latinoamérica.

Muchísimas gracias

La Globalización del Crimen Organizado en Lituania

Dr. Aurelijus Gutauskas

Juez penal de la Suprema Corte de Lituania

En 2001, la Comisión Europea afirmó: “estructuras jerárquicas tradicionales están siendo reemplazadas por redes sueltas criminales.” En 2006 la Evaluación de Europol de Amenaza del Crimen Organizado señala: “grupos del crimen organizado también se están convirtiendo cada vez más heterogéneos y dinámicamente organizados en términos estructurales, moviéndose hacia redes flexibles en lugar de monolitos piramidales.”

Los grupos criminales no han perdido tiempo en abrazar la economía globalizada de hoy y la tecnología sofisticada que va con ella. Pero nuestros esfuerzos para luchar contra ellas han permanecido hasta ahora muy fragmentados y nuestras armas casi obsoletas. La intención de esta presentación es simplemente reconocer el mundo en el que vivimos, y el país en el que vivimos, que han cambiado en el tiempo desde que la transfronteriza comenzó por primera vez hace 10 años. Podemos vivir en el país, pero es lo más lejos que llegamos en cuanto a lo desconectados que estamos de la amenaza global del crimen organizado. La presentación identifica algunos de los problemas que enfrenta la sociedad decente en Lituania y las cuestiones que, sin duda, se crean para el cumplimiento de las leyes en los próximos años.

El crimen organizado está cambiando e incrementando su diversificación de métodos, estructuras de grupo e impactos en la sociedad. Esto representa un desarrollo notable a través de un alto rango de actividades distintas, desde la caza furtiva de elefantes en África central hasta rings de pornografía infantil en Europa del este. Un nuevo panorama penal está emergiendo, marcado por grupos móviles y flexibles que operan en múltiples jurisdicciones y sectores criminales, ayudados por el uso generalizado ilícito del internet.

En noviembre de 2000 se firmó el Acuerdo de Palermo. Formalmente conocido como la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, comprometió a los signatarios a una serie de requisitos. Esto fue el primer compromiso mundial en luchar contra la delin-

cuencia organizada a nivel pan-nacional en noviembre del 2000. Para el año 2004 había pasado por 147 países. En sus palabras de apertura Kofi Annan declaró que “la comunidad internacional demostró la voluntad política para responder a un desafío global con una respuesta global”.

Entonces, ¿cuál es el impacto de tales cambios en el mundo del crimen organizado y qué problemas pueden surgir para la comunidad de las fuerzas legales? Sugiero que puede haber 3 cambios debido a la influencia de la globalización: nuevas tecnologías, nuevos delitos y Pandillas de Nuevo Crimen Organizado.

Las nuevas tecnologías, Internet, teléfonos inteligentes, comunicaciones (Skype y programas similares de voz a través de Internet (VOIP)), y los dispositivos de fraude. La tecnología del Internet ha surgido como un facilitador clave para la gran mayoría de actividades fuera de línea del crimen organizado. Además de los delitos de alta tecnología de los delitos informáticos, el pago fraude de tarjetas, la distribución de material de abuso infantil, y la piratería audiovisual, el amplio uso de Internet ahora sustenta la síntesis de drogas ilícitas, extracción y distribución, el reclutamiento y la comercialización de las víctimas de la trata de seres humanos, la ayuda a la inmigración ilegal, el suministro de productos falsificados, tráfico de especies en peligro de extinción, y muchas otras actividades criminales. También se usa ampliamente como un seguro de comunicación y una herramienta de lavado de dinero de los grupos criminales.

Nuevos Crímenes: los nuevos crímenes de nuevas formas y dimensiones de la delincuencia organizada transnacional. Ciberdelincuencia: La participación de grupos delictivos organizados transnacionales es cada vez más evidente en una variedad de formas de ciberdelincuencia, incluyendo el funcionamiento de los “robots informáticos” globales, que están diseñados para obtener fraudulentamente tarjetas de crédito e información bancaria, y la producción y distribución de pornografía infantil a través de Internet.

Europol identifica la Internet como la creación de un ambiente rico para los grupos del crimen organizado que operan en la forma de: una herramienta de comunicación, una fuente de información, un mercado, un campo de reclutamiento y un servicio financiero. Europol ha sugerido que el Internet es un facilitador para delitos como el blanqueo de capitales, los sitios web de pago virtual, la extracción ilícita de drogas, la síntesis y el tráfico y la trata de seres hu-

manos, la inmigración ilegal, el Marketing Masivo de Fraude (MMF), MTIC (El Fraude de Comercial Desaparecido), Delitos de propiedad intelectual, el abuso sexual de los niños y el comercio de armas de fuego prohibidas.

Las nuevas formas y dimensiones de la delincuencia organizada transnacional: 1. Piratería marítima; 2. Delito ambiental; 3. Tráfico de bienes culturales; 4. Tráfico de órganos; 5. Medicamentos fraudulentos.

Nuevas bandas del crimen organizado. Cada vez más a menudo los miembros del mundo de la delincuencia están buscando las posibilidades de aplicar la actividad criminal en países de la Unión Europea. Una gran cantidad de miembros de grupos criminales están dejando el país para continuar con las actividades delictivas en el extranjero. El crimen organizado representa un gran problema y es el foco de varias personas del cuerpo legal de Lituania. Grupos del crimen organizado lituanos suelen estar involucrados en empresas tradicionales de apuestas, el contrabando y discotecas / bares y en las nuevas empresas como los delitos cibernéticos y esquemas financieros. Debido a su composición en el espacio Schengen y la ubicación entre Bielorrusia y Kaliningrado, que son fuentes importantes de la actividad delictiva, Lituania es un país de tránsito para la actividad de contrabando. El Servicio Estatal de Control Fronterizo ha registrado un aumento en la actividad de contrabando que consiste principalmente en cigarrillos, alcohol y gasolina en la frontera Kaliningrado-Lituania.

La ubicación geográfica de Lituania es favorable para la actividad internacional de los grupos delictivos organizados. Lituania es el cruce de rutas de transporte ilícitas en las direcciones internas y externas de la UE. La localidad de los grupos delictivos organizados condicionó previamente su especialización en el control de la frontera exterior separada de la UE. Algunos de ellos hacen uso de su influencia en la frontera bielorrusa y otros lo hacen en la frontera rusa. Existe cercanía en las relaciones internacionales en los países vecinos característicos de los grupos delictivos organizados locales en las fronteras internas de la UE con Letonia y Polonia.

¿Los desafíos? Colección de información (Lengua y Cultura). Por lo tanto, el área de la delincuencia organizada ha cambiado y el mundo es un lugar más pequeño ahora. La tecnología está fomentando la facilidad de nuevos

crímenes que son más difíciles de detectar. Los OCGS sofisticados son propensos a moverse a crímenes más complejos con un mayor rendimiento y un menor riesgo al utilizar el Internet. Nos enfrentaremos a nuevos delitos y nuevas bandas del crimen en el futuro. Y el futuro no está tan lejos. La colección de información será cada vez más difícil, ya que nos enfrentamos a nuevas bandas del crimen con idiomas a los que no estamos acostumbrados y culturas ajenas a nosotros. ¿Podemos usar las mismas tácticas encubiertas tan fácilmente contra esas bandas si no hablamos el mismo idioma?

¿Los desafíos? Complejidad de las investigaciones. Las investigaciones se volverán más complejas y llegarán a todo el mundo. Una investigación reciente de la OC involucraba a africanos occidentales, comenzó en Brasil, se trasladó a Alemania, Inglaterra y Lituania. Tres continentes, cuatro países, tres sistemas legales, cuatro idiomas. En la actualidad hay memorias USB ahora que tienen un terabyte de memoria que es de 1 000 gigabytes. Y se ha estimado que 1 gigabyte produce 84 000 páginas si se llegara a imprimir. Un terabyte es, por tanto, de 8.4 millones de páginas capaces de caber en tu bolsillo. ¿Cuáles son los desafíos para la aplicación de la ley, siempre y cuando el Crimen Organizado comience a utilizar este tipo de dispositivos para ocultar las pruebas de sus crímenes? ¿Cuánto tiempo tardarían nuestras unidades de e-crimen en examinar un par de esos? Las organizaciones criminales no dudan en explotar cualquier oportunidad para beneficiarse de sus actividades ilícitas, la identificación rápida y la adaptación de los avances en la tecnología, y la búsqueda y explotación de las debilidades en los sistemas y regímenes. Dada la relativa abundancia de poderosos grupos criminales, muchos Estados se encuentran careciendo de la capacidad para responder de la manera más eficaz.

Se necesitan estrategias globales para problemas globales. Tratar a los mercados transnacionales del crimen organizado requerirá de dos conjuntos de medidas paralelas. En primer lugar, hay una necesidad de fortalecer la resistencia global a la delincuencia organizada transnacional mediante la construcción de la capacidad nacional e internacional para realizar un seguimiento y responder al problema. Esto es algo así como fortalecer el sistema inmunológico, y representa un proyecto colectivo a largo plazo. En segundo lugar, existe la necesidad de crear estrategias globales para abordar colectivamente los problemas del crimen organizado transnacional que se han vuelto tan agudos que requieren una intervención especial. Esto es más como una

respuesta a una infección en particular, e implicaría la planificación estratégica internacional. En cualquier caso, la intervención debe ocurrir de forma sistémica, implicando a todo el organismo. Tanto la oferta y las medidas del lado de la demanda deben estar coordinadas, y el problema debe ser abordado a nivel mundial. Un marco jurídico facilitando la lucha contra el crimen organizado se ha elaborado y se aplica de forma eficiente ahora. Cumple con los objetivos estratégicos de la lucha contra el crimen organizado y tiene como objetivo crear una red de medidas preventivas y socavar la fuerza económica de los grupos delictivos organizados. Por lo tanto, la prevención y el control de la delincuencia organizada es considerada una de las direcciones prioritarias más importantes.

Ley de Control del Crimen Organizado. La ley establece la aplicación de medidas preventivas con respecto a una persona que por sus acciones pueden restringir los derechos y libertades de otras personas, crea las condiciones para la aparición y el desarrollo de condiciones sociales y económicas de la delincuencia organizada, y constituye una amenaza para la seguridad pública. Las siguientes medidas preventivas pueden ser aplicadas: advertencia oficial y mandamientos judiciales.

Bajo esta ley, el tribunal de justicia puede obligar a la persona bajo sospecha de participación en el crimen organizado, actividad con algunas restricciones. El tribunal puede obligar a la persona bajo sospecha a no mantener ningún contacto con personas mencionadas específicamente, directamente, a través de otras personas por medios técnicos o de otro tipo; para vivir en el lugar de residencia permanente designada por la persona y permanecer en el lugar de residencia en el tiempo señalado; no frecuentar los lugares indicados.

Las consecuencias de la falta de implementación de las acciones de cesación de la Corte. Una persona que haya violado los preceptos establecidos por el tribunal, será responsable de acuerdo con el procedimiento establecido por las leyes.

El Tribunal Supremo de Lituania es el único tribunal de instancia de casación para la revisión de las sentencias y resoluciones de los eficaces tribunales de jurisdicción general. Las sentencias y las decisiones del Tribunal Supremo son los precedentes legales más importantes y son fuente para el desarrollo

de una práctica judicial uniforme. Como juez de una División del Tribunal Penal Supremo de Lituania participo en la audiencia de casos penales y en su toma de decisiones.

Los problemas de las formas de complicidad en el derecho penal de Lituania. Se considera un grupo de cómplices a dos o más personas, en cualquier etapa de la comisión de un acto delictivo, que se unen con un propósito de cometer, continúan o completan un acto criminal. Se considera un grupo organizado a dos o más personas, en cualquier etapa de la comisión de un acto delictivo, que se unen con un propósito de cometer varios crímenes o un crimen grave o muy grave, y cada miembro de un grupo cumple una tarea o un papel diferente. Se considera una asociación criminal a tres o más personas que se unen con el propósito de llevar a cabo actividades criminales para cometer uno o varios delitos graves o muy graves, y hay relación constante entre los cómplices, así como la distribución de tareas y funciones entre ellos. Grupo Organizado= Delincuencia Organizada? Algunos científicos vinculan esta idea con el crimen organizado y plantean requisitos muy estrictos a esta noción. Los otros dicen que el crimen organizado y el grupo organizado son cosas muy diferentes, y que la noción de grupo organizado que se conoce en el derecho penal es de los viejos tiempos cuando no existía el crimen organizado. Recientemente, el Tribunal Supremo presentó su versión sobre este tema.

El Tribunal Supremo ha explicado que el grupo organizado es un grupo constante, fuertemente unido de un mínimo de dos personas. La característica principal de este grupo es el alto nivel de consolidación, lo que puede indicar signos tales como la estabilidad del grupo, la intensidad y la duración del acto criminal, la distribución de las funciones, y un acuerdo con otros grupos sobre la división de los territorios, de operación y así sucesivamente. Por lo tanto, el tribunal teniendo en cuenta la existencia o no existencia de estas señales, decide si el grupo está organizado.

Por lo tanto, la noción de asociación criminal tendría que reflejar el fenómeno de la delincuencia organizada, sin embargo, no lo refleja. ¿Qué vemos en la definición? *La asociación criminal* se considera como tres o más personas se unen con el propósito de llevar a cabo actividades criminales para cometer uno o varios delitos graves o muy graves, y hay relación constante entre los cómplices, así como la distribución de tareas y funciones entre ellos.

Formalmente, la asociación criminal tiene las siguientes características: 1. 3 o más personas; 2. un acuerdo para cometer delitos graves o muy graves; 3. Las relaciones consistentes entre cómplices; 4. la distribución de roles y tareas entre ellos.

La definición de Asociación criminal sigue siendo muy problemática, porque el legislador una vez más guardó los signos legales de la asociación criminal y una vez más dejó demasiado tiempo libre para la interpretación. La desproporción entre la definición y el fenómeno sigue siendo evidente. Tal ley deja posibilidad de que tal grupo, que no tiene nada que ver con el crimen organizado, será reconocido como una asociación criminal y sus miembros se verán fuertemente castigados. Eso no concuerda con los objetivos y principios de la ley penal. Esta situación se denominaba en la literatura como una desproporción evidente entre la definición y el fenómeno que esta definición debería de reflejar. Esta desproporción, por supuesto, ha dejado una gran libertad para interpretación, la discusión y la práctica judicial.

En el juicio, cuando las personas han sido acusadas de participar en una asociación criminal, los tribunales quieren pruebas adicionales para comparar con la definición legal de la asociación criminal. Los tribunales quieren la evidencia de que tal grupo tiene una estructura jerárquica y un líder, que operaban como una especie de unidad económica y que tenía su negocio criminal o territorio determinado controlado, que tenían tesoro del grupo, que utilizaban o que siempre estaban dispuestos a utilizar la violencia en sus actividades, que estaban armados y así sucesivamente. Esta desproporción en algunos aspectos contradice con el principio de legalidad en el derecho penal, ahora que el principio de legalidad significa que no hay delito sin ley. Por lo que el requisito es que todas las definiciones de delitos deben ser de carácter informativo y preciso. Tener una definición de asociación criminal como tal, pone en riesgo que la norma será utilizada contra los delincuentes que no son miembros del crimen organizado. Eso sería un muy buen consejo para los políticos, que podrían decir: “Hey, mira cómo luchamos contra el crimen organizado”. Sin embargo, esto está lejos de la realidad.

Es por ello que la definición formal de asociación criminal no puede ser el único criterio de reconocimiento de la unidad penal para ser una asociación criminal. Tanto en la teoría y en la práctica de la justicia se reconocen gene-

ralmente que la incriminación de la asociación criminal debe estar aterrizada no sólo con signos formales de la definición legal, sino también con los objetivos de la ley. Estos objetivos, como sabrán, están luchando con el fenómeno de la delincuencia organizada, lo que supone las actividades de los grupos del más alto nivel de la organización.

Esto puede demostrarse mediante el establecimiento de tales circunstancias como jerarquía, estructura, liderazgo, planificación de las actividades, rentabilidad de las actividades, fondo financiero conjunto del grupo, formas de disciplinar a los miembros, uso de equipos de telecomunicaciones, y el complejo de recurso de violencia física y mental en las actividades, posesión de armas y así sucesivamente. El reconocimiento de las unidades penales de ser asociación criminal no es frecuente en la práctica de la justicia, y esto no es malo. Sólo demuestra que los tribunales no abusan del uso del artículo en asociación criminal. En general, los tribunales suelen descartar los cargos de asociación criminal debido a las dificultades naturales para probar la existencia del tipo de mafiosos de la banda.

Cabe mencionar que la globalización tuvo un impacto enorme en la situación criminológica en todos los países. En Lituania se observó un aumento de los crímenes internacionales. Dado que el problema del crimen organizado es complejo, hay una necesidad de soluciones complejas. El conocimiento por parte de los actores políticos y el público en general es necesario para la movilización social que es necesaria para combatir este problema. Todos los niveles de la sociedad deben ser movilizados, de los padres y profesores de la escuela hasta los trabajadores sociales, políticos, policiales y aduanas. La creación de planes de acción de largo alcance contra la delincuencia organizada y sus actividades.

Es muy difícil el pronóstico de las tendencias en la evolución de la delincuencia organizada. Hasta el año 1993 la amenaza del crimen organizado era muy real en Lituania. Incluso nos planteamos la pregunta, quién asumiría el control de la situación en la justicia penal del país o el crimen organizado. Sin embargo, más tarde debido a las nuevas leyes dirigidas para la lucha contra el crimen organizado, debido al fortalecimiento de la posición del sistema de justicia penal, pocos juicios exitosos y condenas en los tribunales tuvieron lugar y la posición y la influencia del crimen organizado en Lituania se debi-

litaron. Sin embargo, la posición del crimen organizado en algunos campos de su actividad sigue siendo bastante fuerte. Pero creo que hay suficientes motivos para tener al crimen organizado bajo control.

Estas palabras fueron expuestas en solidaridad con Giovanni Falcone y Paolo Borsellino: “Usted no los mató: sus ideas caminan en nuestras piernas.”

¡Gracias por su atención!

Los Peligros que se Enfrentan en la Lucha Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado

Marcel Lemonde

Presidente Honorario de una cámara en la Corte de Apelación de París, ex juez internacional del CAC, Francia

No me gustaría minimizar la importancia de la lucha contra el crimen organizado. Pero me sentiría incómodo si esta asamblea se hiciera de la vista gorda ante un cierto número de excesos preocupantes en cuanto a cómo luchar contra estas formas de delincuencia.

En su artículo de introducción, Monseñor Sánchez Sorondo escribió: “El gran profeta Isaías ya había reconocido que el objetivo final del acto de juzgar era la paz social en lugar de la protección o la seguridad”. Hay que tener esto en cuenta y tengo que decir que estoy un poco preocupado de que nuestra declaración final permanece en silencio en relación con algunos de los peligros que, para mí, están muy presentes en nuestra sociedad actual; en particular en la lucha contra una forma específica del crimen organizado, me refiero a delitos de terrorismo. Es por eso que opté centrarme en este aspecto.

El procedimiento penal está en constante búsqueda de un equilibrio entre la eficacia de los ensayos y su imparcialidad.

Desde este punto de vista, en lo que respecta a la lucha contra la delincuencia organizada en general y el terrorismo, en particular, los requisitos son simples, claros y combinan dos aspectos:

- En primer lugar, todos los gobiernos tienen el deber de combatir eficazmente el flagelo del crimen organizado y proteger a la población de los actos terroristas (en este sentido, nadie discute que en todas partes la situación es más grave). Según lo declarado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), actividades terroristas “están en un claro desconocimiento de los derechos humanos”.¹

¹ ECHR, Ireland v. the United Kingdom, N° 5310/71, 18 Enero 1978, § 149.

- Pero por otra parte, también está claro que el combate contra el crimen organizado y el terrorismo es probable que erosionan un número importante de los derechos y las libertades individuales². Por lo tanto, el TEDH considera que los Estados se enfrentan a una doble responsabilidad: por un lado, que están bajo la obligación de combatir con eficacia el terrorismo; sin embargo, por el contrario, están bajo la obligación de respetar los derechos humanos al hacerlo. En otras palabras, mientras que la obligación de luchar contra el crimen organizado y el terrorismo justifica o requiere medidas preventivas y fiscales especiales, es esencial que dicha acción se pueda implementar de una manera completamente consistente con el estado de derecho.

Por desgracia, en este sentido existe una discrepancia significativa entre los objetivos declarados y la situación real. En particular, la lucha contra el terrorismo plantea gran preocupación y, desde este punto de vista, el ejemplo de los ataques del 11 de septiembre es iluminadora.

Legalmente hablando, estos ataques fueron sin duda un “*ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil*”³. Este ataque fue lanzado “*en virtud de o en cumplimiento de una [...] política organizacional por cometer esos ataques*”⁴. Por lo tanto, se trataba de un crimen contra la humanidad, por lo cual era posible reaccionar de una manera judicial e internacional. Sin embargo, Estados Unidos prefirió un enfoque bélico y puramente nacional: a raíz de la Ley Patriota de 25 de octubre de 2001, una orden presidencial del 13 de noviembre estableció tribunales militares especiales. El resto es historia: después de crear la idea de la “guerra contra el terrorismo”, un concepto legal en los Estados Unidos, el gobierno sancionó la noción de “combatientes enemigos ilegales”, es decir, personas que son enemigas que no tengan derecho a las garantías del derecho penal ni a la protección de las convenciones de Ginebra, porque no son prisioneros de guerra, sino combatientes ilegales. Por lo tanto, los ataques del 11 de septiembre han liberado, de alguna manera, a los legisladores de la obligación de respetar los límites del Estado de derecho. Como resultado, entre otras cosas, se creó el centro de detención

² ECHR (GC), *Soadi v. Italy*, N° 37201/06, 28 Febrero 2008.

³ Art. 7(1) del Estatuto Roma Penal Internacional de 1998.

⁴ Art. 7(2) Estatuto Roma.

de Guantánamo y se levantó la prohibición de la tortura en violación de dos principios, que se supone que son absolutos ya que no se admite excepción, incluso en circunstancias excepcionales:

- En primer lugar, el “principio de legalidad” que consiste en la exactitud de los cargos y no-retroactividad (*“nadie puede ser considerado culpable de un delito por actos u omisiones que no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional en el momento en que se cometió, ni se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento en que el delito se cometió”*⁵). Por el contrario, el criterio de actividades terroristas es amplio y vago y su aplicación es retroactiva.
- En segundo lugar, el “*principio de la dignidad*”, según el cual “*nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes*”⁶.

Con esta evolución existe el riesgo de que la guerra contra el crimen se convierta en una guerra contra los derechos humanos.⁷

Por otra parte, en los años siguientes, otros países que han tenido que enfrentar los mismos problemas que los Estados Unidos, adoptaron una actitud similar.

Sólo el Tribunal Constitucional alemán ha expresado su preocupación en una decisión con fecha del 20 de abril de 2016, parcialmente rescindiendo la ley sobre la lucha contra el terrorismo ya que socavaba la libertad individual de una manera desproporcionada. Pero ¿cuánto tiempo prevalecerá este análisis?

En todo el mundo una especie de procedimiento despectivo penal se desarrolló, y fue gradualmente invadiendo por completo el campo de acción.

En Francia, por ejemplo (donde 16 leyes antiterroristas se han adoptado desde hace más de 30 años), un estudio concluye que los procedimientos excepcionales se establecieron de manera poco sistemática en relación con el terrorismo, el tráfico de drogas y el proxenetismo; siempre a través de las mismas técnicas

⁵ Art.15, Pacto de la ONU de los derechos civiles y políticos, ratificados por E.U.Aen 1992.

⁶ Art. 7 UNCPR y la Convención de 1984 contra la tortura, ratificada por E.U.A en 1994.

⁷ D. Rose Guantánamo: America's war on human rights, Faber & Faber, 2004.

legislativas. En 2004, esta legislación se amplió con el crimen organizado antes de ser incluidos de manera explícita o implícitamente en la legislación penal ordinaria. Después de eso, con la creciente importancia que se da al concepto de “peligrosidad”, el foco cambió imperceptiblemente de la “prevención” a la “predicción”. Por ejemplo, la Ley del 25 de febrero del 2008 sobre la “retención de sûreté” (retención de seguridad) permite la retención de una persona condenada después de haber cumplido su condena por un período de un año, renovable indefinidamente en el único criterio de peligrosidad. Por lo tanto, el juez ya no participa en la determinación de la culpabilidad, sino que actúa sobre una probabilidad de que, por definición, se opone a cualquier evidencia contraria. Esta tendencia se ha acentuado a raíz de los ataques de París en 2015: en primer lugar, la legislación de emergencia fue aprobada con la proclamación de un estado de excepción que permite al Estado evitar la revisión judicial mediante la transferencia de los poderes del juez al ejecutivo y la policía; consecuentemente esta situación excepcional se extendió por unos cuantos meses; y finalmente, una nueva ley de procedimiento penal previste realizar medidas que serán exclusivamente un asunto para el estado de emergencia permanente.

Y esto se lleva a cabo en un Estado democrático por no hablar de lo que sucede en muchos otros países donde la definición de “terrorismo” es tan amplia que permite al Estado combatir todas las formas de oposición y restricción de libertades, incluyendo la libertad de expresión.

Penalistas contemporáneos se enfrentan a un número cada vez mayor de leyes contra los derechos humanos que se remontan a la legislación penal pre-moderna, donde la represión se extiende a la “preparación de la preparación” de un delito⁸, cuando se borra la revisión judicial, donde algunas pruebas se mantiene, en secreto de la defensa, donde meros informes de los servicios de inteligencia se les concede valor probatorio, donde su sentencia individualizada retrocede, y así sucesivamente.

En vista de esta evolución, se puede decir que gradualmente se está aplicando la doctrina del “derecho penal del enemigo” (*Feindstrafrecht*). ¿De qué se trata?

⁸ En las palabras del Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, sobre su opinión del borrador de la lucha en contra del terrorismo (25 September 2014).

Según el jurista alemán Günther Jakobs, hay una ley penal por el ciudadano, por el contrario y en contraste, hay una ley penal para el enemigo, ambas desde un punto de vista procedural y sustancial. En esta doctrina se le otorga a los ciudadanos, pero no al enemigo, el derecho a un juicio justo. Si la elección reside entre matar o morir, nada debería obstaculizar el poder del Estado: debe ser absoluto y cualquier obstáculo es una capitulación, o una traición a la causa de salvar la humanidad (o salvar a la nación, la sociedad, la raza, estilo de vida, etc.)

Ahora, como explica Eugenio Zaffaroni⁹: “No hay una posible conciliación entre el estado de derecho y la teoría del derecho penal del enemigo. Y el artículo N° 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no admite excepciones: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Por lo tanto, en estos tiempos difíciles, ¿qué vamos a hacer? ¿Debemos resignarnos a avanzar hacia una sociedad de miedo, una sociedad que construye muros en lugar de puentes, para citar al Papa Francisco?

Estamos viviendo un momento en el cual el Reino Unido, uno de los países fundadores de los derechos humanos, está considerando muy seriamente dejar el mecanismo de protección de los derechos humanos, establecido por la Convención Europea. Un momento en que los gobiernos de varios países, los Estados Miembros de la presente Convención, no dudan en renunciar a los valores fundamentales de la democracia. Un tiempo en dónde sólo una minoría de las personas se preocupa por la violación de las libertades individuales.

Todo el mundo tiene miedo empezando por los gobernantes que siempre quieren hacer más, por temor a ser acusado de no haber hecho lo suficiente, buscando opciones de cero riesgos inaccesibles. Después de cada ataque, no hacer nada es políticamente imposible. Tranquilizar a la población mediante la adopción de medidas inmediatas y visibles es obligatorio. Pero esto es ilusorio. No existe el riesgo cero. Si alguien ha decidido tomar su propia vida enviando al mismo tiempo a un máximo de personas a su muerte, es simplemente imposible impedirlo. Lo

⁹ Dans un Etat de droit, il n'y a que des délinquants, E. Zaffaroni, *Revue de Science Criminelle* 2009 p. 43.

que es efectivo (por ejemplo, en una perspectiva a largo plazo, la lucha contra la radicalización) no es espectacular, y por lo tanto no es políticamente popular. Por ende, los delirios de seguridad se configuran: mientras las medidas adoptadas no protejan a la sociedad, las violaciones de las libertades son reales.

A veces se dice, “No desarmemos la justicia en el nombre de los derechos humanos”. Un lenguaje más militarista. Si para defender la democracia hay que abandonar los valores del Estado de Derecho (precisamente los valores que Al Qaeda, Daesh y otros están combatiendo), si se debilitan esos valores, damos la victoria a estos terroristas que atacan principalmente a los débiles: es aquel quien tiene miedo del perro quien es mordido.

Como se ha señalado por un abogado francés en un ensayo de terroristas, “La democracia está menos amenazada por aquellos que la asaltan, que por aquellos que la corrompen con el pretexto de defenderla”.¹⁰

Debemos de tomar en cuenta el solemne recordatorio del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada inmediatamente después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial: “El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”. Y no hay que olvidar que estos actos de barbarie fueron cometidos por los llamados países civilizados. Como nos ha indicado Mireille Delmas-Marty, nos tomó siglos “transformar la visión dualista contrastando la civilizada (nosotros) con los bárbaros (ellos) en una visión universalizable (en sustitución de los bárbaros por cualquier barbaridad, incluyendo el nuestro)”¹¹. Por desgracia, no tomará siglos retroceder en cualquier momento a aquella visión dualista.

Gracias por su atención.

¹⁰ J-D Bredin, en *Action Directe* trial.

La Lucha contra la cultura del Tráfico de Drogas

Claudio Rodolfo Kishimoto

Argentina

Buenas tardes, en primer lugar saludaré a su santidad el Papa Francisco, a Monseñor Sánchez Orondo, a Gustavo Vera y a sus adátereos de la fundación por haberme invitado a concurrir a esta cumbre de jueces y fiscales.

Luego de escuchar atentamente a todos los representantes de la cumbre de Jueces y fiscales, estoy tratando de lograr una comprensión acerca de las diferentes inquietudes mostradas en todas estas charlas o exposiciones, por eso es que quiero hacer una breve cuestión de introducción al respecto. Se ha dicho acá, que determinados delitos, como la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral y en el narcotráfico, se encuentran vinculados en algún punto con la corrupción.

De mi experiencia dentro de una fiscalía federal de primera instancia en cuatro jurisdicciones distintas, desde hace 23 años, deslumbré que existe un notable aumento de bandas con que operan favorecidas por la corrupción, pondré un nombre a los diferentes delitos de esas bandas, que operaron con esas bandas narcotráfico, trata de personas, venta de armas etc. Creo que en este momento nos resultaría superficial, porque todo tiene un denominador común que es la corrupción, o sea, que el fenómeno que venimos trabajando en este caso, la trata de personas y el narcotráfico, tienen en común, el tema del dinero sucio, el motivo de mi locución es simplemente abordar críticamente este aspecto, en esta cuestión trato de mostrarme no sólo como fiscal, sino como docente de la carrera de derecho en la materia de criminología, por eso es que yo tengo un enfoque crítico sobre este punto. Yo creo que la corrupción es un sistema, a veces se encuentra relacionado con un delito, a veces con otro, pero en general estamos hablando de un sistema relacionado con el poder, ¿qué quiero decir con eso?, que la corrupción es un mal que opera sistemáticamente en dos direcciones al menos, hacia arriba con determinadas autoridades, que permiten la manipulación que genera desviar la vista de los agentes controladores y la de las personas que especulan este sistema que son los pequeños operadores. Aquellos en los que

la justicia está focalizada, lamentablemente hablo como una persona que ya está entrando a la etapa final de su carrera profesional, en la que como se dijo el día de ayer, no hubo grandes casos o grandes cantidades de casos denunciados para combatir la corrupción.

Entonces ¿qué es lo que esa pasando, que es lo que pasó para que lleguemos a este estadio. Lamentablemente una de las cuestiones de las que se habló ayer fue la de las famosa cifra negra, esa cifra de la que se dijo que podía tener una relación de uno sobre 20 respecto de los delitos investigados judicialmente, entonces acá es donde yo sino la crítica y mi crítica sobre el trabajo y es que estoy percibiendo que estamos trabajando mal, no estamos trabajando sobre sistemas, sino que estamos trabajando sobre fenómenos y eso no está bien, tenemos que profundizar el sistema de trabajo, es posible descubrir lo que está sucediendo allá afuera entonces, estamos permanentemente pegados a los informes que nos brindan las agencias policiales, los datos sobre crimen organizado son difíciles de encontrar y estudiar pero están mucho más disponibles de lo que podemos suponer. Todo lo que tenemos que hacer es salir a las calles, salir de nuestros despachos y ver lo que hay ahí, en un sentido figurado lo estoy diciendo.

Si bien esta visión que yo tengo es un tanto idílica en la investigación del crimen organizado, tomando como base el acceso a las fuentes inmediatas o primarias, ese tipo de enfoque está lejos de ser la solución final, las observaciones aparte de los problemas éticos que se pueden plantear sobre los riesgos en forma de peligro para poder acceder a estas fuentes primarias, pueden dar como resultado investigaciones muy agotadas, pero hay que tener en cuenta que el proceso de inmovilidad social ascendente dentro de un grupo criminal suele por lo general ser más rápido que las organizaciones legales, pero el acceso a los niveles Altos de la jerarquía delictiva implica un compromiso a largo plazo que con lleva la asunción de múltiples riesgos. En este enfoque el único camino a las fuentes primarias se reduce a los escalones más bajos de la organización o de una estructura o iniciativa que a menudo tiende a fantasear acerca de los procesos más complejos que ignoran.

Es muy problemático sacar de funcionamiento a algunos grupos a otros más apartados de una organización concreta o más aún entre diversas organizaciones criminales, porque la indiferencia es múltiple. Los niveles de calificaciones o los grados de compromiso personal con la organización o la protección que se

requiere del miembro clandestino, por poner solo tres ejemplos, varían enormemente dentro de los diversos apartados de los negocios criminales.

Otra fuente secundaria de información, que juega un papel importante en los estudios del crimen organizado, es la información publicada en los medios de comunicación de masa, la *mass media*, lo que en principio podría aparecer como un punto positivo que muestra proximidad temporal ante el análisis académico y el seguimiento más cercano a los hechos sociales es cubrir carencias importantes. Las publicaciones en los medios de comunicación suelen descansar de manera notable en informaciones procedentes de las agencias de seguridad o de los aparatos de justicia, con lo cual suelen presentar los mismos problemas antes referidos. Sin embargo, las dificultades para partir de estos datos fragmentados que en principio son útiles para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados, pero que no suelen demostrar una dimensión completa del funcionamiento de la organización criminal, se amplifican dada las características de los medios de comunicación.

En general, los objetivos de los medios de comunicación suelen en consecuencia tener objetivos muy distintos a la de la explicación académico-jurídica, tienden a centrarse en el componente de violencia que pueden utilizar estos grupos dejando de lado otros valores de tipo empresarial y organizativo, que resulta de más fácil asimilación para la opinión pública y son extremadamente sensibles exagerar o disminuir las relaciones entre el sistema político y el crimen organizado, por presiones a favor o en contra de diversos grupos del sistema político. Se utiliza así al crimen organizado como una arma de legitimación política del adversario mediante la presentación, a través de los medios de comunicación acorde con los objetivos propios de ciertos grupos políticos.

Es relativamente frecuente observar una línea de investigación que parte de la presentación de interesados de los poderes públicos, pasa por los medios de comunicación y finalmente es recogida por los investigadores, el ejemplo más clásico que hubo de este caso fue el del narcoterrorismo en términos de lo acuñado por un embajador en Colombia al calor de la toma del palacio de justicia en Bogotá, cuyos miembros habían sido asesinados por un grupo de terroristas en el 19, que sin pruebas contundentes, han sido constantemente repetido en los medios de comunicación y los artículos especializados. Quiere decir que en principio había que definir el tema de la cuestión del crimen organizado, es-

tos problemas de acceso a la fuente parecen estar en el origen de la escasez de estudio concreto sobre el origen del crimen organizado y también en la canicie de un aparato teórico importante, la naturaleza ilegal y altamente secreta del fenómeno implica enormemente dificultades para la obtención de información de primera mano sobre su funcionamiento y complicaciones para la realización del campo de trabajo, delito y crimen; son dos conceptos tanto memorables, como legales, cuya relación ha sido profusamente estudiada en diversos puntos de vista salvo contadas excepciones, todo crimen involucra cierto grado de organización y en consecuencia es organizado por naturaleza, determinar el límite de lo que constituye el crimen organizado no es una operación tan sencilla, porque el crimen organizado no existe como tipo ideal si o como un grado de actividad criminal o como un punto del espectro de ilegitimidad.

Buena parte de las confederaciones teóricas sobre el crimen organizado difieren como consecuencia del punto a partir del cual se realiza esta división, pero además la propia configuración del crimen organizado ha implicado una influencia importante en sus definiciones legales, esta suele tener una mayor eficacia a la hora de describir el fenómeno en un marco sistemático dado que al definir los tipos de delito como norma legal, de cierta manera configuran los resultados a ojo de la opinión pública.

Lo dijo hoy el doctor Colombo, que los ordenamientos jurídicos son aquellos que determinan o condenan las actividades ilícitas que realizan estos grupos de manera individualizada: tráfico de drogas, extorsión, blanqueo de capitales, y existen otros códigos penales donde se agravan las penas en función de la comisión de estos delitos. Es entonces que nosotros tenemos que hablar de las características del delito, del crimen organizado, tienen una serie de características que pueden ser definidas, éstas tienen que ver con la existencia de un grupo involucrado y las actividades delictivas a las que se dedican. Un grupo involucrado es un conjunto de personas que de manera constante y permanente cometen actos que son catalogados como delitos en la jurisdicción que uno refiera, ó sea que hay una estructura jerárquica, una división de tareas, grado de especialización, cierras reglas, sistema de premios y castigos, que rigen el comportamiento de la organización y son impuestas de manera coactiva.

¿Que diferencia hay con otras agrupaciones sencillas, pandillas juveniles, los maras?, la cuestión es que esta protección, esta jerarquía se obtiene a través de la

utilización de la violencia o la amenaza de usarla, la intimidación, y por otra parte la corrupción de los funcionarios públicos. Porque si bien, la característica es la violencia lo que le diferencia, de la violencia asociada con el crimen organizado, es que está estructurada y directa, el objetivo no facilitar la transferencia de recursos en un determinado momento, si no ampliar la posición del grupo de crimen organizado en un mercado concreto.

Dentro de esta gama de actividades en que la he referido, el crimen organizado puede ser extensa, puede tener tan diferentes variables, combinar uno o más mercados de carácter interno, internacional por lo tanto, ahí podemos hablar largo y tendido.

Los procesos a los que yo me estoy refiriendo en cuanto a la transnacionalidad, en la actualidad por la mundialización económica, la globalización, se refieren a que se ha permitido a esas organizaciones criminales de ámbitos restringidos en educación mundial, todos conocemos a qué se debe este tipo de globalización, este crecimiento del comercio mundial se vio acompañado de una revolución de redes financieras, el progreso tecnológico de las comunicaciones y los deseos de instituciones bancarias por desarrollar nuevas opciones que eviten la imposición estatal y satisfacer la creciente demanda de las empresas transnacionales con gran volumen de dinero circulante hace que favorezcan inmensamente el blanqueo de dinero de las grandes organizaciones criminales.

En el sentido que lo único que debería hablar y son dos plantas nada más acerca de los efectos del crimen organizado, como ya dije en su momento, es relativamente sencillo bucear o buscar en los niveles bajos entre medios del crimen organizado y su relación con la política local, ya de por sí es muy difícil ir a otros niveles porque el crimen organizado no es un grupo monolítico a nivel internacional, sino que más bien se presenta como un panorama diverso complejo multidimensional en el que la colaboración de los diferentes grupos criminales es más frecuente que la confrontación, es por ello que esto se torna totalmente y es muy dificultoso la investigación en este tipo de delitos.

Y para redondear lo que yo creo más imperante es que el crimen organizado incide en la cultura política de un país determinado, es decir, en conjunto incide en los valores y actitudes que informan acerca de una actividad ciudadana, esto es un punto muy importante porque si ustedes ven la relación de la influencia o la

aceptación a la naturalización del tema de la droga y el consumo, podríamos vislumbrar que acá hay un cambio intercultural de lo que ya existía en su momento. No quiero realizar conclusiones, si bien las tengo a nivel personal, porque esto es una cuestión que digamos que hay que elaborarla, discutirla, es como un sistema abierto de programación, hay que mejorarla, hay que ver, hay que prever, hay que sostener diferentes cuestiones y quiero terminar de alguna manera parafraseando a lo que sostuvo en su momento monseñor Romero y el Papa lo dijo en el día de ayer, que a raíz del compromiso que los solicita no podemos ya hacernos los distraídos acerca de estas cuestiones, nuestra obligación es justamente comprometernos con este punto.

Es todo lo que tengo que decir, gracias.

La Sociedad como Panóptico del Crimen Organizado

Ariel Oscar Lijo

Argentina

Bueno, muchas gracias, agradecer por supuesto de estar acá al Santo Padre, a Monseñor Marcelo Sánchez y muy especialmente a Gustavo Vera, con Gustavo cuando nos conocimos, nos peleábamos terriblemente, no es el lugar, pero todavía prometo que se los cuento.

La verdad es que estamos todos muy conmovidos por el mensaje del Papa y el sentimiento que nos embarga a todos desde ayer, es la emoción por su presencia y sobre todo por su mensaje jugado y profundo y después, como decía Messie Le Mond, es difícil a esta altura del simposio encontrar algún mensaje creativo que nos despierte del almuerzo, pero voy a hacer mi mejor intento.

La ciudad de Buenos Aires no es ajena frente los fenómenos mundiales de trata de personas, en los talleres clandestinos son moneda corriente en la mayoría de sus barrios céntricos y cobran visibilidad como consecuencia de accidentes habitualmente derivados de las pésimas condiciones de higiene y salubridad, muchas veces como víctimas mortales y hay muchos actores involucrados como son funcionarios del gobierno nacional, funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, los consulados, los dueños de los talleres y las grandes marcas indumentarias que tercerizan la producción en esos talleres. Las constantes en los talleres son por todos conocidos, todos son clandestinos, contratan, producen y venden lo que confeccionan fuera de toda habilitación o marco de regulación, con salarios ínfimos, restricción de movilidad, precariedad de las instalaciones, los trabajadores con sus familias que incluyen a sus niños que es la peor parte, viven en el mismo lugar donde trabajan, a menudo duermen en las habitaciones. Nosotros tuvimos casos que encontramos a gente durmiendo abajo de tanques de agua en 40 centímetros de altura desde el piso hasta el techo y muchos de los trabajadores fueron traídos de países limítrofes, en el caso de la Argentina por otros con nacionales mediante ofertas de trabajo que por supuesto que tienen objetos contractuales que no se respetan. En la mayoría de los casos existe en la convivencia de varios

actores con intereses en juego: la policía, los fabricantes de indumentaria, que son actores centrales desde mi punto de vista, incluso las inmobiliarias que lucran con alquileres desmedidos para la instalación de estos locales.

Yo pienso que más allá de los casos tradicionales hay una tensión importante, o sea, está puesto en que, la sociedad de consumo contribuye a la existencia de este tipo de situaciones, más que nada porque las demandas estéticas de las personas son abarcadas en gran parte por las empresas textiles, y a su vez estás buscan el mayor beneficio económico posible, de hecho la mayoría de la producción de la prenda de vestir está tercerizada fuera de sus empresas, generalmente en talleres y gran parte de esa producción en talleres clandestinos.

La modalidad en un contexto de informalidad, la mayoría de estos lugares no tienen leyes laborales, no respetan las leyes vigentes laborales y se ven las violaciones a los Derechos Humanos de las personas que así prestan funciones, los titulares de las marcas eligen a producir las prendas de esta manera porque en condiciones normales de trabajo no lograrían fabricar, ni la cantidad, ni el costo que el mercado le demanda, por lo tanto cuando contratan estos talleres se aseguran de cumplir con ambos objetivos, hay diversos trabajos realizados pero hay una fundación Alameda, muy interesante, que determinó que la distribución de la cadena de valor sigue un patrón altamente asimétrico, el fabricante paga el tallerista aproximadamente 3.12% del valor final de la prenda, de los cuales 1.8% lo percibe el trabajador, de acuerdo a estas estimaciones la materia prima equivale al 11%, el intermediario en caso de que lo hubiere se queda con el 19%, el concepto de impuesto se abona en un 22% y el alquiler alrededor del 10.4%, así que la ecuación es una ganancia para la marca del 54% y si hay un intermediario del 34%.

La existencia de estos talleres resulta la consecuencia directa de esta modalidad de contratación, donde sus principales responsables son las marcas, de las que los dueños deben responder criminalmente, los directivos de las marcas conocen o por lo menos deben conocer como decía Marcelo Colombo, en un concepto de duelo un poco más aggiormado la situación en la cual se encuentran sus trabajadores y en cuál es la cadena de producción del producto que tienen a la venta, que están exhibiendo.

El otro elemento en el que me parece que hay que hacer hincapié, es en la incidencia de la migración, con esta lógica es un punto que la producción

clandestina se nutre de la migración en la Argentina, a partir de la década del 50 tuvo la migración de los países vecinos y me parece que también tiene que ver con los métodos de producción y con el esquema económico de nuestra sociedad, porque antes los esclavos se compraban y vendían y ahora son gratis. Desde el punto de vista de la incorporación al mercado de trabajo, tanto las mujeres como los varones, quienes vienen de países limítrofes, tuvieron históricamente una inserción complementaria de la mano de obra nativa, en los lugares urbanos, los migrantes varones tienden a ocuparse en la construcción o en talleres de manufactura o en sectores de gastronomía y las mujeres a insertarse mayormente en el trabajo doméstico, en el cuidado de niños y ancianos. En la inmensa mayoría de los casos son puestos mal pagados en sectores informales que no cumplen con ninguna exigencia laboral.

Así que hay un vínculo perverso entre la migración y el trabajo precario, la relación entre estos términos es compleja y hay un hecho que es decididamente indiscutible, un migrante imposibilitado a regularizar su situación de documentos, sólo podrá insertarse en el mercado de trabajo informal o clandestino en el que muchas veces se montan los nichos étnicos, quienes trabajan en condiciones precarias son sin duda muchísimo más vulnerables pero quienes trabajan en condiciones precarias y además son extranjeros con situaciones irregulares están permanentemente y estructuralmente al borde de la explotación, si el migrante reside en condiciones irregulares del acceso a los derechos y su ejercicio acarrea siempre el fantasma de la amenaza de la prisión o la deportación. Desde esta perspectiva, la documentación sin duda es una medida necesaria que permite desarmar uno de los soportes principales de la vulnerabilidad de cualquier tipo de trata, de los recientes extranjeros pero no es suficiente, hay otras cuestiones que se ligan, que ligan a la migración con el trabajo precario, por un lado la obligación de remesar que tienen todos los migrantes, de mandar plata a sus países de origen, eso les impone fuertes presiones porque tienen que vivir o sobrevivir reduciendo sus gastos y allá de aquellos cuando llegan apelan a redes generalmente de parentesco o de amistad que les garantizan ocupación inmediata y minimizan los periodos de ocupación; y la conveniencia de los trabajos puertas adentro que les proveen vivienda, alimentación y protegen de la mirada del estado que para evitar la deportación. Esto es un fenómeno muy complejo, porque es un combo con el que el estado, por lo menos desde los tribunales, tampoco son los tribunales los que deberían hacerlo pero es muy difícil de competir con

esa oferta, porque tienen trabajo vivienda y por más que trabajan 16 horas, tienen un lugar dónde quedarse, entonces por más que uno les ofrezca salidas en pueblos textiles o trabajos formales, no están, no pueden hacer el ciclo hasta que cobran su primer salario.

Por otro lado, en la Argentina contemporánea la producción clandestina y el trabajo en condición de servidumbre no son aberraciones laborales o aisladas sino los últimos eslabones de una cadena forjada a la fragua de la desintervención, la desregulación y el descontrol de todos los factores de producción y que afecta aunque diversamente a nativos y extranjeros.

La puesta en foco de talleres de indumentaria, propiedad muchas veces de talleristas inmigrantes, que reclutan a inmigrantes para realizar un trabajo absolutamente precario y que ha sido denunciado como reducción a servidumbre, pero cuyo producto entra en el circuito legal pero sin dificultades, no hace más que resaltar los componentes más extremos de una cadenas de complicidad complejas, este es un fenómeno tan adicional porque el producto final de la organización criminal está en un mercado que es perfectamente lícito.

El gran desafío del momento es forjar una cadena de responsabilidades que permita la prevención y el control y la sanción efectiva de las complicidades descriptas. En palabras del Papa Francisco, los flujos migratorios son una realidad estructural y la primera cuestión que se impone es la superación de la fase de emergencia para dar espacios a programas que consideran las causas de las migraciones, de los cambios que se producen y de las consecuencias que imprimen rostros nuevos, a las sociedades y a los pueblos.

La indiferencia y el silencio dijo: “abren el camino a la complicidad, cuando vemos como espectadores a los muertos por sofocamiento, penurias, violencias y naufragios, sean grandes o pequeñas dimensiones siempre son tragedias cuando se pierde aunque sea una sola vida”, dijo el 12 de septiembre de 2015 a inmigrantes y refugiados, no se interpelan las respuestas al evangelio.

En Argentina hemos avanzado mucho en materia de legislación como en la mayoría de otros países, hay estándares altos como se dijo hoy en la mañana en materia de la prevención legal, me parece que hemos contribuido en ge-

neral a partir de la actividad de organizaciones intermedias de ONG, incluso de este tipo de encuentros a niveles locales, a hacer un poco más visible el problema de la trata, hemos avanzado también en algunas ideas innovadoras en el caso de la Argentina sin la legislación que nos respalde, en la reutilización de las incautaciones, de los equipos y de las máquinas, hemos montado ayuda entre los tribunales una ONG que es la Alameda y la CGT, que es la Corporación General del Trabajo, talleres para comunidades indígenas que no eran víctimas directas de este delito, pero son víctimas de muchos otros delitos y por supuesto que fuimos todos denunciados por hacer eso.

Y me parece que hay otro punto importante que a diferencia de otras entidades criminales no tenemos todos los diagnósticos, porque las asociaciones criminales mutan permanentemente, en general, en el derecho, a los que nos dedicamos a las investigaciones, abordamos un tema, en un tiempo razonable tenemos un diagnóstico bastante acabado y después nos dedicamos a los recursos, acá es una mutación permanente. Yo creo que debemos crear más conciencia en nuestra sociedad sobre lo que hace este flagelo, para romper con la indiferencia y nosotros que somos actores responsables debemos pasar acciones más enérgicas.

Miren, en inspiradoras palabras el santo Padre dijo: es buena la prudencia, pero la prudencia si se manifiesta como una, acción o parálisis, eso es temor, sigan adelante.

Muchas gracias,

Organizaciones Criminales y Tráfico Ilícito de Migrantes

Giovanni Salvi

Italia

Doy las gracias a la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales por la oportunidad que me ha dado para compartir con un público tan calificado mi experiencia de fiscal de Catania, durante el período en que en el distrito se dieron cerca de dos tercios de todo el flujo de migrantes por mar. Ayer, invitado por la presidencia holandesa, pude exponer, en la Haya, esta difícil realidad en el Foro General Consultivo de Fiscales Europeos de la Comisión Europea y en Eurojust. Esta es la razón por la cual no pude asistir a todas las sesiones de esta cumbre y me disculpo. Hoy me sumo a este trabajo con la presentación que hice ayer y en la que he descrito, con mayor amplitud en lo que es posible hoy en día, el compromiso de la acusación y de los tribunales italianos. Para castigar a las organizaciones que trafican migrantes ha sido necesario crear equipos especializados de ministerios públicos, darle directivas a la policía judicial, para llegar a acuerdos operacionales con la marina y otras fuerzas navales, para así garantizar que en las unidades del mar se tenga un equipo de policía judicial. Fue necesario, por encima de todo, desarrollar instrumentos legales apropiados para la novedad y la gravedad del desafío. Acaba de mencionar el representante argentino que cada vida cuenta. Eso es correcto. Es un principio ético esencial. Sólo en los procesos fiscales de Catania de 2013-2015, en un período de tres años, hubo más de 2 000 muertos o desaparecidos, número cuya magnitud real nunca se sabrá. Ante esta realidad impactante de Italia, la autoridad judicial y las fuerzas policiales reaccionaron y han logrado resultados que no dudo en llamar extraordinarios. Cientos de traficantes han sido condenados en los tribunales de Lecce, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Siracusa, Ragusa, Agrigento y otras ciudades.

Castigar a los contrabandistas es una obligación legal, impuesta por la ley. Castigar a los traficantes es también un deber político y moral. Voy a tratar de explicar por qué.

El mundo está teniendo migraciones colosales, debido a causas complejas: desde el cambio climático a los conflictos militares, étnicos y religiosos que

determinan el aumento de la inestabilidad en más y más áreas. Estas migraciones tienen sobre todo una dirección sur-sur, en posición horizontal, y, a su vez, provocan importantes problemas en los países que ya están en grave dificultad, que son fronteras de las zonas de riesgo. Una parte, no la más grande, de estos flujos vienen a Europa, donde las personas que huyen de la persecución y la guerra tratan de encontrar refugio y donde los que huyen de la miseria esperan encontrar un mejor mañana.

Estos flujos se rigen por las organizaciones criminales. Ellos tratan a los migrantes no como “bienes”, como se suele decir, sino como objetos de poco valor. Un lugar en el transporte hacia las orillas del Mediterráneo tiene un precio tan alto que estos migrantes, los más pobres entre los pobres, no pueden pagar y lo que pueden ofrecer es una cifra tan baja que a los ojos de los traficantes el valor económico del individuo es irrelevante.

Esto explica las terribles condiciones del viaje por tierra que deben enfrentar los que provienen de la cinta de África Central, antes de llegar a la costa de Libia.

Está documentado que los migrantes son abusados para maximizar el beneficio en cada momento del viaje por tierra. Una vez que llegan a la costa de Libia, se les encierra en barracas vigiladas por milicias brutales, que a veces los golpean hasta la muerte.

De Libia salen en embarcaciones no navegables, antiguos barcos de pesca o balsas construidas para llevar mercancía a lo largo de los ríos y no aptas para largas travesías en mar abierto.

La Procuraduría del distrito de Catania, junto con otros distritos que bordean el mar, Siracusa y Ragusa, se pusieron como objetivo el castigo de los organizadores de tráfico. Esto es requerido por la ley, que establece como delito grave la organización del tráfico de migrantes.

Castigar a los traficantes, sin embargo, es también un compromiso político: la capacidad de luchar contra el tráfico que de otro modo asegura grandes ganancias sin riesgos reales para los traficantes significa que los ciudadanos europeos comprendan la gravedad del fenómeno, y acepten recibir a los mi-

grantes como víctimas de la trata. Imaginen, los ciudadanos sirios que han buscado refugio en Europa por la vía que conduce a Italia desde Turquía y el Líbano han pagado en 2014 entre 4 000 y 6 000 por cada pasaje por mar (además de lo pagado para llegar a la costa). A Italia en 2014 llegaron unos 50 000 sirios, es fácil de entender la enorme ganancia que las organizaciones criminales obtienen.

Estas ganancias se extienden también a los países europeos, donde la acogida y el riesgo de asistencia se convierte en un negocio rentable. Un representante de la cadena italiana de “solidaridad”, que fue arrestado por ganancias ilícitas, declaró que con los migrantes se gana más que con las drogas.

Castigar es también una imperativa moral. Como fiscales estamos acostumbrados a ver cosas horribles todos los días, y tal vez corremos el riesgo de convertirnos en cínicos. Vemos niños abusados, mujeres violadas, personas muertas en las formas más brutales. Sin embargo, es difícil incluso para nosotros, observar impasibles a cientos de hombres, mujeres y niños que se enfrentan a la amenaza, el sufrimiento, y que han sido privados de todo bien, para alcanzar el objetivo de una vida digna de ser vivida.

Miles de inmigrantes han muerto en las últimas semanas en el canal de Sicilia. El 18 de abril del año pasado al menos 700 personas murieron cuando el barco en el que habían sido embarcados, sin posibilidad de escape, se volcó. Cientos de personas murieron en septiembre de 2014 frente a la costa de Creta, cuando se rebelaron contra los traficantes y hundieron el barco de manera voluntaria.

En los años 2013-2015 se lograron resultados significativos en identificar y procesar a los autores de las organizaciones criminales. En este trabajo, sobre todo, se planteó la cuestión de la jurisdicción nacional en alta mar. Los traficantes, de hecho, idearon un sistema que les permitía maximizar los beneficios y minimizar los riesgos de ser arrestados: utilizando grandes barcos y remolcando barcos más pequeños. Fuera de las aguas territoriales (incluso a 150-200 millas) se les obligaba a los migrantes a seguir la travesía en los barcos más pequeños e inseguros. Se les abandonaba y se les colocaba en grave peligro mientras el barco más grande regresaba a Egipto para traer más migrantes y hacer otro viaje.

El abogado de la República Italiana declaró que estos modos de tráfico eran castigables por la ley italiana, incluso si los traficantes se mantenían fuera de las aguas territoriales. Las naves nodrizas fueron capturadas y detenidas las tripulaciones. Se solicitó la extradición de los líderes de las organizaciones egipcias. Esto basado en la Convención de Palermo contra la delincuencia transnacional y su Protocolo adicional contra el tráfico ilícito de migrantes, el Convenio de Londres, que exige a los Estados miembros la obligación de rescate marítimo, junto con la Convención de Montego Bay que pide la inspección de los buques en alta mar. Este enfoque se consideró correcto por el Tribunal Superior y ha sido evaluado positivamente por las Naciones Unidas.

La dramática crisis en Libia ahora ha cambiado los métodos de funcionamiento de las organizaciones criminales. Estas organizaciones son, por naturaleza, oportunistas y se aprovecharon de la ausencia de un poder estatal efectivo en Libia. Los nuevos modos de tráfico son incluso peores que los de 2014-2015. Es claro que las organizaciones terroristas se aprovechan del tráfico. Las rutas migratorias están empezando a ser utilizadas para el tráfico de seres humanos. Por otra parte los traficantes cargan los barcos más allá de la capacidad de las embarcaciones, incapaces de mantenerse al mar, causando la muerte de cientos de personas, a pesar de los esfuerzos de la marina italiana, que apoya la misión europea EUNAVFOR MED con una misión, enfocada al salvamento: Mar Seguro.

La nueva situación plantea serios problemas a la posibilidad de obtener resultados reales en el castigo de los responsables. La presencia de buques militares de diferentes países de Europa, cerca de la costa de Libia, que participan en la misión EUNAVFOR MED, plantea cada vez con más fuerza la necesidad de un vínculo efectivo con fines judiciales, desde la primera intervención en el mar.

El intercambio de información recolectada, con fines de búsqueda de los bienes de las organizaciones criminales y el contraste del reciclaje de las ganancias, se encuentra ante la persistencia de diferentes sistemas legales e institucionales, que apenas se comunican entre sí.

La mayor parte del tráfico se lleva a cabo en las zonas donde no es posible ninguna cooperación judicial con el estado involucrado o la policía. Esto

plantea el problema de la existencia de crímenes contra la humanidad y la posibilidad de recurrir a ellos por la comunidad internacional.

Sancionar a los responsables de este tráfico es un imperativo moral para reafirmar que cada ser humano es un fin en sí mismo y no puede ser considerado un objeto de lucro. Castigar a los migrantes simplemente por migrar no tiene ningún fundamento y puede tener consecuencias negativas, empujándolos a la clandestinidad.

La clandestinidad es el lugar donde el migrante se hace más a menudo víctima de la explotación intensiva, tanto en la prostitución como en el empleo ilegal. Es muy preocupante lo que está sucediendo en Libia, donde la inestabilidad está permitiendo al país utilizar la ruta de migración para el tráfico de seres humanos, especialmente mujeres jóvenes para la prostitución.

La devolución (*refoulement*) es contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos, como se ha dicho en varias ocasiones por el Tribunal. La evaluación eficaz, en el corto plazo, de las condiciones que justifican una protección internacional, sin embargo, es esencial para asegurar a los que tienen derecho de iniciar una nueva vida en el lugar que deseen, liberándolos del limbo en el que se ven obligados a vivir y para dar rápidamente respuesta negativa a aquellos que no tienen este derecho.

Nuestra experiencia a lo largo de los años, en los que pudimos castigar a muchos traficantes, nos ha enseñado que la presión de la migración es tan fuerte que no existe una respuesta definitiva: una puerta se cierra y se abre inmediatamente otra.

Por tanto, es necesario que el discurso político sobre la migración sea de carácter estructural. Es una emergencia cotidiana destinada a durar. Es quizás una contradicción pero también representa la realidad. Utilizar instrumentalmente las preocupaciones legítimas de la opinión pública es muy peligroso y provoca reacciones que no se sabe si serán siempre controlables. Por tanto, es esencial que el discurso político sea racional. Esto es posible sin perder la eficacia de esta acción.

Basta pensar en el ejemplo de terrorismo. Agitar el espectro del terrorismo como una herramienta para oponerse a la inmigración no toma en cuenta la

realidad, las organizaciones terroristas operan de manera ya arraigada en la comunidad europea. El discurso racional debe dar la cara a verdaderos problemas, como el de la posible radicalización de los jóvenes de las zonas de conflicto y la necesidad absoluta de una identificación completa de todos los que entran en el territorio del Estado. Para que sea posible identificar, sin causar dificultades insuperables a los operadores, es necesario superar los egoísmos nacionales y abordar la cuestión de los acuerdos de Dublín.

El Jubileo de la misericordia es también el Jubileo de la Justicia, como Francesco ha señalado en repetidas ocasiones. La justicia es ciertamente algo compleja, que va mucho más allá de la sanción penal o de la concesión. Sin embargo, también, los operadores de la ley penal, podemos tener un pequeño papel en la restauración de los migrantes y la dignidad inviolable del ser humano.

En este sentido quiero mencionar que el Gobierno italiano, con el apoyo de los tribunales, está completando una operación costosa para la recuperación de los cuerpos de los migrantes que murieron en el hundimiento del 18 de abril de 2015. Tanto económica como emocionalmente para aquellos que trabajan ahí y a quien debemos agradecer. Esta operación no está diseñada para reunir pruebas para el juicio. Esto ya se ha hecho, también con el uso de robots capaces de operar a grandes profundidades. Los responsables ya están en juicio ante el Tribunal de Catania, a partir del mes después del naufragio. El objetivo de la operación es enterrar a los migrantes, para proteger su dignidad, y permitir la identificación de víctimas. Hasta el momento 198 cadáveres han sido recuperados a cientos de metros de profundidad. Las víctimas serán enterradas en Italia, algunos en el cementerio de Catania, una ciudad que dio la bienvenida a cadáveres en el pasado y que tiene un monumento dedicado a ellos, para que no se pierda su memoria.

Esto también es parte de la política de inmigración italiana, como advertencia, para que recordemos que todos fuimos en épocas lejanas o cercanas pueblos migrantes.

Mafia y la Corrupción

Franco Roberti

Italia

Me gustaría empezar mi intervención, sobre las mafias y la corrupción, empezando (aparentemente) desde lejos, y concretamente, en tres polos conceptuales complementarios —poder, justicia y verdad— que son, o deberían ser, funcionales entre sí: poder al servicio de la justicia, y esta última al servicio de la verdad. Y la verdad, por último, como un factor de confianza de los ciudadanos hacia el poder, premisa indispensable para contrarrestar efectivamente a todas las formas de delincuencia.

No puede haber ninguna verdad sin justicia: el estatuto de la verdad supone, en primer lugar, el rigor de la reconstrucción judicial. En este sentido, San Agustín dijo que la verdad debe “hacerse”, el tema fue retomado por J. Derrida en un ensayo sobre “La justicia, la ley y la interpretación.” El estatuto de la verdad presupone la asistencia de garantías, la investigación judicial, como una expresión de poder-servicio, en primer lugar debe proporcionarlas.

Para la doctrina social de la Iglesia, el poder es un servicio para el bien común, la justicia y la verdad encuentran su fuerza motriz, su razón de ser, en Cáritas, en el amor que lleva a las personas a comprometerse con valentía y generosidad para el desarrollo de cada ser humano y de toda la humanidad.

Como enseña Benedicto XVI en la encíclica *Caritas in veritate*, este principio adquiere forma operativa en criterios orientados a la moral. Partiendo del principio de justicia, ahora más que nunca cuestionada por los terribles desafíos de la delincuencia mundial: la mafia, el terrorismo, la corrupción, el tráfico de seres humanos.

“La caridad va más allá de la justicia —se lee en la introducción de la encíclica— porque amar es dar, ofrecer de lo « mío » al otro; pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al otro aquello que es «suyo», lo que le toca por razón de su ser y de su obrar. No puedo dar al otro de lo mío, sin antes darle en primer lugar lo que le compete según la justicia. Quien ama a otros con caridad es ante todo justo con ellos, la justicia es inseparable de la caridad, intrínseca a ella.”

Palabras que nos remontan al martirio de Rosario Livatino y el anatema contra los mafiosos, lanzadas por Juan Pablo II en el Valle de los Templos de Agrigento. Era el 9 de mayo de 1993 y el gran Papa, antes de dirigirse al Valle de los Templos, se había encontrado con los padres de Livatino. El espíritu de amor y dignidad, a pesar del inmenso dolor por la pérdida de su hijo que mostraron, lo conmovieron profundamente. Tanto así que, en el momento de la intervención, dejó de lado el texto escrito y pronunció aquellas palabras memorables para todo cristiano que quiera comprometerse realmente con la justicia.

Estas son palabras, pero la realidad es que las mafias —después de veintitrés años— siguen siendo fuertes gracias a sus relaciones “externas” con los representantes de las instituciones, la economía y la sociedad civil. Relaciones fundadas en bases corruptivas, sólo a veces asociadas con la intimidación violenta. Gracias a las cuales estas mafias han echado raíces mucho más allá de las fronteras de sus territorios de origen. Además, las mafias generan ocupación ilegal y criminal y distribuyen riquezas parasitarias (riqueza de cualquier forma). Tienden a surgir como poder sistémico —controlan la economía, las instituciones y a los hombres de la localidad— aprovechando la falta de respuesta de las instituciones republicanas y del mundo emprendedor a la demanda de trabajo legal. Consecuentemente, y lo que es peor, es que constituyen un impedimento para el desarrollo social cercano o alrededor de ellas.

Seguridad y justicia, son las condiciones esenciales para un desarrollo socio-económico correcto, la acción tendrá que ser una prioridad de cualquier gobierno europeo, a partir de la efectividad del principio de igualdad, que exige el Tratado de Lisboa, que compromete a la Unión Europea a “eliminar las desigualdades” (art. 8 del TFUE).

Las mafias aprovechan las desigualdades sociales, entre los ciudadanos fuertes y los débiles haciendo negocios con los primeros, aquellos que se sienten por encima de la ley, y contratando a los segundos como mano de obra, que bajo la ilusión de poder llegar a través de la ilegalidad y militancia mafiosa al progreso económico y social que creen sería imposible de alcanzar de otro modo. También toman ventaja del diferencial normativo y organizativo entre estados virtuosos y estados laxos, direccionando, por ejemplo, los flujos de capitales ilícitos a las jurisdicciones de baja tributación y con normas dé-

biles o complacientes con el lavado de dinero o a donde haya menor presión investigativa.

La Resolución del Parlamento Europeo de octubre de 2013, sobre el crimen organizado, la corrupción y el lavado de dinero se llevó a cabo —sobre la base de los hallazgos de investigaciones judiciales— el crimen organizado es cada vez más similar a un agente económico global, con una fuerte vocación empresarial y se especializa en la entrega simultánea de diferentes tipos de bienes y servicios ilegales - pero también de manera creciente legales- y cada vez tiene un rol más fuerte en la economía europea y mundial, con repercusiones significativas en los ingresos fiscales de los estados miembros de la Unión y que en su conjunto tiene un costo anual para la sociedad estimado de 670 millones de euros.

Para el crimen organizado, la corrupción de los funcionarios públicos e incluso de los actores privados es funcional para el tráfico ilícito en la medida en la que esta permite, entre otras cosas, el acceso a información confidencial, obtención de documentos falsos, manejar los procesos de evidencia pública, lavar sus ingresos y evadir las medidas de acción del poder judicial y la policía.

Desde la perspectiva del Parlamento Europeo, la corrupción —cuyo costo asciende a 120 millones de euros al año, o el 1% del PIB de la UE— más que una modalidad privilegiada de acción del crimen organizado, es un serio ataque a la ‘economía europea, ya que altera al libre mercado, impactando negativamente en la calidad de los servicios, sustrae masas financieras de la deducción de impuestos, desalienta la inversión (incluida la extranjera) y por lo tanto dificulta el desarrollo y el empleo.

La demanda creciente de contrarrestar la corrupción en el sector público está vinculada al costo del fenómeno: costos económicos, ya que ésta constituye un “impuesto oculto” en el comercio existente y un obstáculo para el ingreso de nuevas iniciativas económicas (pérdida de 16% de la inversión extranjera) y causa un aumento de costos en las obras públicas que es en definitiva, trasladada al cliente y, por lo tanto, cae directamente como gasto público, y costos de orden social incluyendo la pérdida de confianza pública en las instituciones y mecanismos de legitimidad democrática (el 88% de la corrupción y recomendaciones son a menudo la forma más fácil de acceder a de-

terminados servicios públicos, mientras que el 92% de las empresas italianas creen que el favoritismo y la corrupción impiden la competencia empresarial y comercial en Italia).

De acuerdo con un análisis realizado por el Banco Mundial en 2013, en términos de costo, cada punto de declive en la clasificación del ingreso de la corrupción, redactó *Transparency Internacional*, provoca la pérdida de 16% de las inversiones extranjeras. Un estudio reciente (2014) afirma que el fenómeno de la corrupción en Italia aumenta 20% el costo total de los contratos. Entre 2001 y 2011, la corrupción ha consumido 10 millones de euros al año, un PIB total de 100 mil millones en diez años. Las empresas que operan en un ambiente corrupto crecen en un promedio 25% menos que los competidores que operan en un marco legal. En particular, las pequeñas y medianas empresas tienen una tasa de crecimiento de ventas de 40% menor que las grandes.

Visto desde esta óptica, la corrupción no es sólo un delito contra la administración pública, sino uno de los crímenes más graves contra la economía.

Independientemente de la exactitud y fiabilidad de la estimación, es tristemente cierto que la corrupción es el nexo de unión entre la mafia, el lavado de dinero y la economía, como ya se había identificado en los artículos 8 y 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada (Palermo, diciembre de 2000) .

En realidad, la corrupción, la delincuencia económica y la mafia son tres caras de una misma realidad. La mafia está constantemente alimentada por los dos primeros.

Es estéril e ilusorio —para un poder al servicio del bien común— enfrentar a las mafias y la malversación organizada, cada vez más entrelazados entre sí, con un único reclamo a la cultura y los valores de legalidad, siempre proclamada mas poco practicada. Por encima de todo, es inútil continuar hablando a los jóvenes, si después el Estado en todos sus componentes no demuestra, de una vez por todas, con hechos concluyentes —lo que pidió Giovanni Falcone desde 1983— quién está a favor y quién está en contra de la mafia, dando a las magistraturas y a las fuerzas del orden las herramientas organizativas y normativas para afrontar el reto, para dismantelar las redes

del “mal hacer”, asegurando la transparencia y la actuación en legalidad de los poderes públicos, lo que garantizaría la recuperación para fines sociales de los bienes confiscados a las mafias.

Justicia pronta e igual para todos y una administración pública transparente y eficiente son en sí mismas la mejor afirmación de la cultura de la legalidad.

La lucha contra el crimen organizado necesita hechos, leyes y decisiones estratégicas prioritarias.

Necesitamos leyes justas, que actúen sobre los principios constitucionales y muestren a los jóvenes que respetar las leyes es más conveniente que infringirlas.

La crisis y las amenazas pueden ser una oportunidad. El término “crisis” en griego significa “elección”, significa que de cualquier situación de peligro se sale asumiendo una gran responsabilidad.

La plena realización de los principios de dignidad de los seres humanos, la libertad, la igualdad, el empleo, la educación y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, la defensa del estado de derecho y sus garantías son condiciones infalibles para el desarrollo económico y para tener democracia y paz social.

Para concluir, quisiera señalar que ninguna nación-estado puede resolver sus problemas por sí solo, son indisociables de contextos más amplios, ni puede dar sólo una contribución valiosa a los desafíos globales de nuestro tiempo.

La hora de la verdad está llamando a nuestras puertas, y nos llama a todos a un compromiso renovado por una sociedad libre de corrupción, de mafias y de terrorismo, a una democracia más respetuosa de la dignidad humana, más solidaria y más justa.

Migración Tráfico y Conflicto: Protegiendo los Derechos Humanos y la Esperanza Humana

María Grazia Giammarinaro

Italia

Gracias, antes que nada me gustaría agradecer a la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales por organizar este encuentro inspirador y personalmente déjenme agradecer a monseñor Sánchez Orondo por esta iniciativa. Estoy aquí como juez italiana pero también en mi capacidad como reportera especial de la ONU en tráfico de personas, especialmente mujeres y niños. Tuve el privilegio de participar hace 2 días en una sesión informativa del Consejo de Seguridad en Nueva York e informar al Consejo de Seguridad sobre la correlación entre el tráfico de personas y el conflicto. Enfocándonos en el vínculo entre la violencia sexual, la trata y los conflictos.

De hecho, es la primera vez después de la declaración presidencial de Estados Unidos de diciembre de 2015, que el Consejo de Seguridad establece una agenda concerniente al Tráfico Humano. La relación que hay entre tráfico y conflicto ha sido pasada por alto pero recientes reportes como aquel publicado por la Organización Internacional para la Migración y Caritas International muestran que la trata no es una mera posibilidad, un mero posible resultado de conflicto sino que más bien está asociado al conflicto en una base regular. ¿Por qué? Porque el colapso de la ley, la inestabilidad, el desplazamiento y todas las vulnerabilidades de los grupos minoritarios como mujeres y niños son exacerbados. Nuevas vulnerabilidades emergen y lo que observamos es que la trata es una consecuencia del conflicto en áreas de conflicto.

Con respecto a la gente que huye del conflicto y situaciones postconflicto hablaré más adelante. Un patrón reciente que ha sido discutido en el contexto del Consejo de Seguridad es el patrón de abducción de mujeres y niñas de sus casas o escuelas que subsecuentemente son forzadas a casarse o ser esclavas sexuales. Esta explotación que en algunos casos implica tráfico por matrimonio forzado y esclavitud sexual por grupos externos tales como ISIS, Boko Haram, Al Qaeda y sus afiliados que generan ingresos usando estas prácticas como estrategias para el reclutamiento, premiación y retención de sus tropas.

Sin mencionar que el viaje para las migrantes femeniles y niños sin compañía por el cuerno de África es particularmente peligroso. Millones han desaparecido, presumiblemente han sido secuestrados para la explotación, incluida la sexual. En otras palabras, la explotación sexual y la esclavitud además de ser una violación enorme de los derechos humanos se han convertido en una táctica de guerra y terrorismo. La trata de personas está ligada al conflicto en innumerables maneras y en todas estas circunstancias es imperativo proteger a las víctimas y acabar con la impunidad. Ambas, metas son igual de importantes.

Primeramente, niños son traficados al servicio militar y especialmente las niñas son usadas como esclavas sexuales para las tropas. En segundo lugar, las operaciones para mantener la paz desafortunadamente continúan siendo ocasiones para incidentes vergonzosos de violencia sexual, abuso y explotación que socava el rol vital de proteger a las comunidades, incluidas mujeres y niños de violencia y explotación que es un factor común en situaciones postconflicto. En tercer lugar, el tráfico de trabajadores migrantes hacia zonas de conflicto para explotarlos laboralmente es un asunto idéntico y aunque no todos los casos de contratación y subcontratación implican tráfico y explotación, ha habido muchos casos donde grandes empresas que tienen contratos primarios con estados y sus militares, contratan trabajadores migrantes a través de subcontratistas menores o agencias de empleo locales para labores tales como limpieza, construcción, cocina y servicio. El reclutamiento explotativo de migrantes del sur de Asia para prever servicio en sitios de trabajo militar en áreas de conflicto de medio oriente ha sido detectado. El subcontratista engaña a los trabajadores sobre el lugar, puesto y tipo de trabajo y la gente se ve atrapada en contenedores en condiciones laborales forzadas.

Las personas que huyen del conflicto también pueden ser vulnerables al tráfico de órganos. Hay evidencia que migrantes huyendo de Sudán estaban siendo explotados para cosecha de órganos en Egipto. Me gustaría mencionar en particular que la gente huyendo de zonas de conflicto no tiene acceso a opciones de migración segura y legal, lo que los fuerza a usar los servicios de facilitadores ilegales y su exposición a la explotación incluido el tráfico se incrementa. Para los millones de personas forzadas a huir de su país a causa de los conflictos armados, el viaje para escapar se ha vuelto cada vez más caro y peligroso como lo explicó Giovanni Salvi.

El conflicto sirio en particular está causando un éxodo masivo que debería ser visto como una crisis humanitaria global. Crisis, y cuando digo crisis no me refiero a que es un fenómeno de contingencia, durará desafortunadamente y es una crisis que requiere que se comparta la responsabilidad lo cual no se ha hecho hasta el momento.

Es lamentable ver la completa falta de empatía y solidaridad, o hasta compasión humana en el discursos público de tantos políticos y las reacciones de ciertas áreas de la opinión pública en países europeos.

Escuchamos hablar sobre muros y fronteras cerrados lo que significa que no hay esperanza para la gente que se ve forzada a dejar su casa y poner en riesgo su vida y la de sus hijos en busca de seguridad y sobrevivencia.

Cientos, incluyendo muchos niños, han perdido sus vidas en el mar mediterráneo y otros están en riesgo de perderla probablemente en este preciso momento. Para aquellos que sobreviven al peligroso viaje hay un riesgo tangible de tráfico relacionado con la explotación a lo largo del trayecto a su destino. Migrantes, incluyendo refugiados y aquellos que piden asilo que han vendido todas sus posesiones para pagar por su viaje, son altamente vulnerables a la violencia física, asalto sexual, extorsión y tráfico y explotación incluida la esclavitud o condiciones similares a la esclavitud. Me gustaría añadir que esto no es diferente de las personas sobre las que estamos discutiendo hoy, víctimas, aquellas que nos encontramos en juicios y cortes pueden tener estos antecedentes personales, esta base existencial de persecuciones, desalojo, tortura y nosotros tenemos que estar conscientes de eso como jueces y fiscales.

Estamos como jueces discutiendo este tema en un contexto muy preocupante a nivel europeo y global. Todas las estadísticas y fuentes indican una disminución en el procesamiento y convicciones de casos. Debemos discutir y establecer entre nosotros qué podemos hacer, qué podemos hacer mejor y qué más podemos hacer y desde este punto de vista permítanme darles algunas recomendaciones teniendo 20 años de experiencia en la prevención y lucha contra el tráfico humano.

Primero, creo que tenemos que estar conscientes de que la trata es un tema global socioeconómico, especialmente en su dimensión de tráfico laboral,

que sigue creciendo y que implica enormes intereses económicos además de ser un tema penal, de crimen organizado y que este tema esta profundamente ligado a la migración y a efectividad de respuesta de justicia criminal. En Italia lo sabemos gracias a una rica experiencia en combate de mafia y crimen organizado que ha sido evocado por mis colegas. Sabemos que la efectividad de la lucha contra el crimen organizado depende entre otra cosas de una correcta percepción de las características sociales e implicaciones del crimen.

Sin este tipo de conciencia no podemos entender por ejemplo el contexto de la víctima, y podemos malinterpretar grandemente su comportamiento y considerarlo como una situación consensual entre la víctima y el traficante, cuando por el contrario es una relación basada en abuso. Por ejemplo, el hecho de que los trabajadores explotados consideren a sus explotadores como alguien que los ayuda a sobrevivir y a evitar la deportación. Creo que es importante mencionar que cuando regresemos a casa tenemos un deber de propagar lo que hemos aprendido aquí hoy en términos de conocimiento y de las complejas propiedades de este crimen.

En segundo lugar, nosotros los jueces tenemos la obligación legal de interpretar la ley nacional a la luz de instrumentos y casos internacionales. En casi todos los países que he visitado he visto juicios que están legalmente hablando incorrectos, especialmente tomando en cuenta la evolución de la jurisprudencia internacional. Hablo de juicios basados en criterios de interpretación cuadrados que niegan la esclavitud o tráfico sólo porque la víctima no fue totalmente privada de su libertad de movimiento o porque inicialmente consintió a la migración ilegal. Criterios correctos de interpretación deben ser aplicados a través de capacitaciones y actividades que creen conciencia impulsadas por consejos judiciales, jueces y asociaciones.

Los procedimientos penales son a menudo la única oportunidad de poner en lugar medidas protectivas para las víctimas y esto no debería ser así. La asistencia y el soporte debería de ser incondicionalmente provisto a las víctimas de trata. Así lo menciona la convención del Consejo Europeo EU 2011. Sin embargo, el hecho es que en la gran mayoría de países la asistencia y apoyo a la víctima son condicionadas a su reporte policial o a su actuar como testigo. Debemos estar alerta, especialmente los fiscales, que es nuestro deber asegurar el respeto al derecho de las víctimas no sólo dentro del juicio sino

también desde el punto de vista social. En este respecto sugiero echar un ojo más a profundidad a la práctica italiana de memoranda de entendimiento entre fiscales anti mafia, policía y ONGs que proveen asistencia a las víctimas para coordinar acciones y acompañar a las víctimas de manera efectiva hacia la recuperación y proceso de reintegración. Me gustaría ,hablando de este tema, rendir tributo al Director nacional antimafia por su rol de liderazgo por muchos años.

La confiscación y embargo de bienes y dinero es la medida más efectiva al hablar de crimen organizado. Además, este asegura compensación a las víctimas. Ellas necesitan otra oportunidad para reconstruir sus vidas. Lo que significa que las investigaciones financieras deben ser usadas desde el principio de cualquier investigación relacionada a casos potenciales de tráfico y en especial aquellos de explotación laboral. En esta área debemos tener en cuenta que no sólo debemos taclear a los intermediarios sino también a los empleadores que son los principales beneficiados del trabajo forzado y trata de personas.

Hay un largo camino por recorrer, los números concernientes a los juicios llevados y números de victimas ayudadas francamente son deprimentes . Y este largo camino, como aquel de la histórica esclavitud, necesita que moviliemos no solamente recursos legales sino morales también. El liderazgo inspirador del Papa Francisco nos da esperanza de que la gente de buena voluntad se podrá unir a los esfuerzos con la base religiosa y secular para restaurar los derechos humanos, la dignidad humana y la justicia social.

Gracias.

Avances y Desafíos en la Persecución Penal Estratégica del Delito de Trata de Personas en Guatemala

Mynor Rolando Pinto Sánchez

Fiscal de Sección Adjunto, de la Fiscalía de Sección contra la Trata de Personas del Ministerio Público de Guatemala

La trata de Personas, denominado actualmente como la esclavitud del siglo XXI, es el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial, antecediéndole las Drogas y el Tráfico ilícito de Armas, y por ser un delito tan lucrativo para las organizaciones criminales, las personas que ven esta oportunidad, conforman estructuras criminales que desarrollan sus estrategias, a tal punto que los sectores más vulnerables (niños, niñas y adolescentes) son el blanco más fácil para poder comercializarlos.

A través de los Convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia de Derechos Humanos, se ha iniciado una campaña de sensibilización y concientización, para implementar acciones encaminadas a la modificación de las legislación interna de cada país, para la protección esencial de las víctimas de este flagelo.

Precisamente, Guatemala ha ratificado el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, cuyo objetivo es prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, considerando que se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los tratantes y proteger a las víctimas, amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Este protocolo, establece una serie de normativas dirigida a la modificación de sistemas judiciales y ejecutivos de cada país, para la prevención y sanción de hechos constitutivos de trata de personas en sus diferentes modalidades, la vulnerabilidad de sus víctimas y el carácter transnacional del delito, convierten en esta herramienta jurídica indispensable para cumplir con los objetivos trazados: 1) El marco jurídico para la penalización del delito; 2) El

cumplimiento de la ley y la actuación penal; 3) La identificación y protección de las víctimas.

Guatemala, un país multicultural, donde se acepta la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. Cohabitan pero influyen poco las unas sobre las otras y no suelen ser permeables a las demás. Las condiciones geográficas con las que cuenta actualmente Guatemala, lo hace fácil presa del Crimen organizado, ya que como país de Origen, Tránsito y Destino, y la permeabilidad de sus fronteras por el poco o nulo control fronterizo por parte del Estado, lo hacen propenso a la realización de delitos transnacionales como la comercialización de la droga y la Trata de Personas, condiciones dadas como resultado de nuestra historia cultural y política, especialmente los 36 años de conflicto armado interno que mantuvieron un retraso económico en el país.

El crimen organizado ha desarrollado habilidades delictivas para la obtención de un lucro económico de manera ilícita, desarrollando dichas acciones en total impunidad, debido a la incrustación de funcionarios corruptos en las instituciones del Estado, situación que hace necesaria la aplicación de herramientas jurídicas y técnicas para el combate de la Trata de Personas desde la perspectiva de la Persecución Penal Estratégica.

Puedo definir a, LA PERSECUCIÓN PENAL ESTRATÉGICA como el conjunto de acciones encaminadas a combatir la criminalidad organizada, a través de la desarticulación de manera parcial o total de las estructuras criminales, basadas en mecanismos que debiliten su funcionamiento y eviten la perpetuidad de las acciones ilícitas. Este conjunto de acciones se redefinen a través de 3 acciones importantes:

- Prevención
- Persecución y Sanción
- Reparación

LA PREVENCIÓN se desarrolla a través de 2 momentos importantes, pre y postcomisión del hecho criminal. El primero se desarrolla en el momento previo a la comisión de hechos criminales, basados en la difusión de mecanismos preventivos a la población, así como programas de prevención por

parte del Estado, informando los riesgos tendientes a las formas de acción y explotación. Luego, en el momento posterior a la comisión, se identifica la forma de operar de la estructura criminal, previniendo así a la población en relación a las acciones por parte de las estructuras criminal, dando a conocer el caso en particular, identificando los actores de la estructura criminal, los roles que juegan, etc. De esa cuenta la prevención viene a ser un disuasivo para las potenciales víctimas a no ser vulnerables ante las acciones delictivas.

La segunda acción se refiere a la PERSECUCIÓN Y SANCIÓN, utilizando para el efecto, todas aquellas herramientas jurídicas provistas en la ley y en las Convenciones ratificadas por Guatemala para el combate a la Trata de Personas, con el objeto de mermar y limitar todas las acciones delictivas a través de la obtención de pruebas para el procesamiento penal, logrando para el efecto tres condiciones importantes en la desarticulación de organizaciones criminales:

1. Limitar su libertad, a través de la identificación de cada una de las personas que conforman la estructura criminal, estableciendo forma de operar y jerarquía interna, establecer los roles que juegan cada una de las personas, y encuadran su actividad ilícita en normas jurídicas punibles asociadas a la ley contra la delincuencia organizada, establecida en Guatemala a partir del año 2006, utilizando herramientas jurídicas como la figura del colaborador eficaz, la interceptación, grabación y reproducción de comunicaciones, que desarrollan la prueba eficaz para poder procesar a la organización criminal, y por supuesto lograr la condena, asegurando su cumplimiento en prisión.
2. Limitar su poder, a través de acciones encaminadas a la incautación a favor del Estado, de todos los bienes y dinero, producto de la Trata de Personas, a través de la figura jurídica de la Extinción de Dominio, que regula la capacidad del Estado, de poder obtener en su propio beneficio, todo ese producto ilícito y convertirlo en apoyo a las instituciones que combaten el crimen organizado. La trata de Personas es uno de los delitos contemplados en la Ley de Extinción de Dominio donde se puede desarrollar la incautación a favor del Estado de todos aquellos bienes obtenidos por la comisión de este flagelo, y de esta manera, se limita la capacidad de la organización criminal del poder que pueda obtener producto de la compra de voluntades y la capacidad de corromper al Estado.

3. Limitar su impunidad, como consecuencia de la poca probabilidad de la organización criminal de comprar voluntades y corromper a funcionarios públicos que logren la impunidad de la organización criminal, pero sobre todo, el combate a la corrupción, poniendo funcionarios públicos que permitan en todos los niveles del Estado la impunidad de la realización de hechos delictivos relacionados al crimen organizado, estableciendo nexos probatorios que permitan llevar a la cárcel a funcionarios públicos, de esa forma, no sólo pierden el poder, sino que también pierden la impunidad. Guatemala ha sido testigo claro del combate a la impunidad, logrando avances significativos en el combate a la impunidad a través del procesamiento de funcionarios corruptos de todos los niveles del Estado, desde el presidente y vicepresidente, ministros, diputados, alcaldes, concejales, hasta empresarios, militares, entre otros.

La tercera acción la determina LA PROTECCIÓN Y REPARACIÓN, acción que complementa con las atribuciones que tiene el Estado con las víctimas de Trata de Personas, de resarcir el daño causado a través de la reparación digna por el hecho ilícito que recayó en la misma, provocando con ello la restitución de los derechos fundamentales vulnerados por los daños físicos, psicológicos y materiales que fueron provocados precisamente por el ilícito penal. La Reparación Digna sucede posterior a la condena que reciben los integrantes de estructuras criminales que están siendo procesados penalmente, en donde el tribunal emite una resolución donde le otorga a la víctima la restauración de ese derecho que fuera vulnerado, equiparado con una indemnización económica, entre otros. Es viable indicar que la protección de la víctima dentro del proceso penal, es otra de las prioridades de los responsables de la administración de justicia, toda vez que al momento que la víctima ingresa al sistema de justicia, probablemente exista una revictimización primaria y secundaria, debido a que el ente encargado de la persecución penal, al recabar las evidencias respectivas, en especial su declaración, en el peor de los casos, presentar a la víctima a declarar en juicio, los cuales, probablemente se lleven de 1 a 3 o 4 años. Es por eso que el Ministerio Público de Guatemala utiliza herramientas jurídicas disponibles para tomar la declaración de la víctima en anticipo de prueba en cámara Gessel, provocando con ello minimizar el impacto de la revictimización, y muy especial, sacar a la víctima dentro del proceso penal, y aun más, la ley provee proteger la identidad de la víctima para su protección por futuras represalias, es por eso que hoy por hoy, la protección de la víctima es fundamental.

Guerra y Trata de Personas en Colombia

Gabriel Bustamante Peña

Abogado de la Universidad del Cauca, Magister en Estudios
Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, Subdirector
de Participación de la Unidad para las Víctimas de Colombia

Colombia esta *ad portas* de poner fin a un conflicto armado de más de 50 años de duración, confrontación que deja una lamentable situación de crisis humanitaria donde se suman más de 8 millones de víctimas, de las cuales cerca de 7 millones son desplazados internos, más de 50 000 desaparecidos, cerca de 15 000 víctimas de violencia sexual declaradas, entidades como ACNUR¹ hablan de cerca de 400 000 colombianos refugiados en el exterior, y además, la condena a la miseria y el subdesarrollo de poblaciones enteras, pertenecientes a extensas zonas del territorio azotadas por la violencia histórica y la exclusión.

Por lo anterior, cualquier acercamiento a la realidad colombiana, necesariamente deberá estar cruzada por la guerra, por sus consecuencias y su degradación en el tiempo. Y con mayor razón, aquellas violaciones a los derechos humanos, como la trata de personas, que se entrelazan con el conflicto armado, se invisibilizan con el mismo y se potencian y diversifican con situaciones particulares en medio de la guerra.

Una confrontación armada tan extendida en el tiempo genera situaciones de degradación inimaginables en otros contextos. Así, la trata de personas, se convierten incluso en parte —ilegítima— de las acciones bélicas, alimentando las tropas del conflicto, financiando la guerra o convirtiéndose en parte de la degradación a la que llegan los combatientes. En este contexto, las conductas de mercantilización y explotación del ser humano se confunden con el conflicto armado hasta desaparecer por el pragmatismo de la guerra, lo cual invisibiliza la trata de personas y la hace más difícil de combatir en

¹ Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.

medio del caos de la violencia generalizada y el miedo paralizante que cubre poblaciones enteras. Además, la prioridad de las políticas centradas en el conflicto armado, hacen perder el foco de un delito como la trata de personas, que requiere una mirada particular del fenómeno dentro de la violencia en Colombia.

La trata de personas en medio del conflicto alcanza niveles de violación a los derechos humanos mucho mayores que en situaciones de ausencia de guerra, y los casos son tan aberrantes que es difícil demarcar si estamos hablando de trata de seres humanos contra seres humanos o de lo más abominable que puede esperarse de bestias sin control, sin límites imaginables de descomposición.

Los llamados “falsos positivos”, donde miles de jóvenes humildes, de sectores excluidos de Colombia fueron reclutados con una promesa de empleo, transportados a zonas lejanas, vendidos a militares, y torturados y ejecutados por estos para ser presentados como guerrilleros dados de baja en combate y poder así cobrar el dinero de las recompensas y acceder a ascensos militares y licencias. O casos como el presentado en el colegio Nuestra Señora del Rosario, del corregimiento el Riachuelo, en Charalá, Santander, donde por cerca de tres años, los paramilitares abusaron sexualmente de niñas de entre los 10 y los 14 años, que eran escogidas en reinados organizados por los propios comandantes, en complicidad con la rectora del plantel educativo, y donde además los niños fueron obligados a realizar actividades delictivas en el marco del conflicto armado, son situaciones que hoy hacen parte del paisaje de la guerra, y no se les mira desde la óptica de la trata de personas, como debería ser.

El conflicto armado ha generado millones de víctimas, donde la gran mayoría no sólo ha sufrido la pérdida de sus familiares, o el menoscabo físico de sus capacidades, o el dolor físico o psicológico de la guerra en su propio ser, sino que también les ocasionó la pérdida de sus lazos comunitarios, políticos, económicos y sociales, y los ha arrancado de sus contextos naturales, especialmente rurales, para expulsarlos a escenarios ajenos a su *modus vivendi*, donde de la noche a la mañana pasaron de vivir su cotidianidad a sobrevivir en medio de la miseria y la inseguridad de todo tipo. Dichas situaciones hacen que sean las víctimas del conflicto armado, las más susceptibles y vulnerables a ser nuevamente víctimas, pero esta vez de la trata de personas, en un círculo vicioso donde siempre es la guerra el hilo conductor de sus desgracias.

La guerra ha dejado cientos de miles de hogares destrozados, donde en la mayoría de los casos son los hombres quienes caen asesinados, son desaparecidos o simplemente huyen dejando sus hogares a cargo de las mujeres. Mujeres viudas o abandonadas a cargo de sus niños y niñas, y en muchas ocasiones, a cargo también de hogares con ancianos y personas en condición de discapacidad que huyen con ellas hacia lugares desconocidos, especialmente las grandes urbes colombianas. Dichas mujeres llegan a sobrevivir como sea, y es esta situación la que las hace, a ellas y sus familias, especialmente vulnerables a caer en las redes de los tratantes de personas, quienes mayoritariamente tienen fuertes vínculos con los actores de la guerra: guerrillas, paramilitares y, desgraciadamente, hasta algunos miembros de la fuerza pública.

Los “señores de la guerra”, además, son quienes manejan los “negocios” de explotación de seres humanos, especialmente de mujeres, niños y niñas, quienes son presas fáciles en territorios donde con mayor intensidad se desarrolla el conflicto armado, y terminan siendo reclutados, tanto para labores propias del combate (mensajeros, guardias, combatientes), como para esclavizarlos sexual o servilmente. Además, la trata de personas se suma a la serie de actividades ilícitas que financian la guerra, como el narcotráfico o el secuestro extorsivo, lo que hace que se potencie, en el marco del conflicto, la explotación a gran escala de seres humanos, situación que además se invisibiliza por el conflicto mismo.

Hoy en el marco del proceso de paz con las FARC y de las conversaciones previas al proceso con el ELN, por ejemplo, se habla de colaboración activa para desestructurar las redes del narcotráfico, o acabar con el delito del secuestro por parte de estas guerrillas, pero aparece invisible el tema de la trata de personas. Recientemente las FARC se comprometieron a no reclutar menores de edad y entregar a quienes hacen parte de sus filas, y a pesar de lo notorio de este hecho, nunca se ha hablado de trata de niños y niñas en medio del conflicto.

Mientras escribía estas líneas, la policía de Colombia ha puesto sus ojos sobre el Clan Usuga, temible banda paramilitar al cual acusa de explotar sexualmente niñas y mujeres en gran parte de Colombia, y hace pocos días, se llevó a cabo una operación entre el ejército y la policía de Colombia en el sector conocido como el Bronx, en todo el corazón de Bogotá, a unas pocas cuadras del Palacio de Nariño y de la Catedral, donde además de armas de todo tipo (pistolas, ametralladoras, granadas, etc), expendios de droga, se encontraron

personas secuestradas y lo más aberrante, más de 200 niños y niñas que estaban siendo explotados sexualmente.

Como dijimos, el problema de la trata se mezcla con el conflicto y se complejiza, por ejemplo, los paramilitares, hoy convertidos en bandas criminales, manejan bajo su poder militar y territorial a algunas poblaciones vulnerables, y parte de esa dominación la ejercen sobre mujeres y niñas, las cuales son tratadas como botín de guerra; o no es menos dicente el caso de muchos guerrilleros de las FARC, que fueron reclutados cuando niños, o sea son víctimas de trata, pero al cumplir la mayoría de edad pasan de ser víctimas a victimarios. Abordar el tema del conflicto, las medidas de desmovilización de combatientes, de desvinculación de menores, de colaboración con la justicia desde la perspectiva de la trata de personas, dará un vuelco total al tema de la guerra y las negociaciones de paz, y generará un marco de actuación más efectivo en la lucha contra las redes de tratantes que sobrevivirán a la guerra a través de otras formas de violencia, las bandas criminales, por ejemplo.

Acercamiento a la Política contra la Trata de Personas en Colombia

Colombia es hoy considerado el segundo país latinoamericano con mayor número de víctimas de trata transnacional, pero también país de tránsito y destino. Y hemos empezado a descubrir que el fenómeno de la trata interna es mucho mas grave de lo que se sospechaba. La OIM, por ejemplo, habla de 70 000 víctimas de trata al año en Colombia.

Colombia ha dado un paso muy grande al aceptar la existencia del fenómeno de la trata y comenzar a combatirlo. Al principio, sólo desde la óptica de ser un delito de la delincuencia organizada transnacional, que dio como resultado el fomento de mecanismos de cooperación bilateral y regional para combatir las redes de tratantes y asistir a las víctimas.

Bajo esta lógica de delito transnacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores logró suscribir 8 acuerdos bilaterales de cooperación para prevenir y enfrentar la trata de personas y asistir a las víctimas. Colombia es parte también de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y del Protocolo complementario para prevenir y reprimir la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.

En materia legislativa el país también cuenta con grandes avances: la misma Constitución Nacional, en su artículo 17 expresamente prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. En el año 2003 se aprueba la ley 800 que adopta la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada internacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas; en el año 2005 la ley 985 que trae medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas, crea el Comité Interinstitucional para la lucha contra la trata de personas, descentraliza la política por medio de los comités distritales, departamentales y municipales, exige la creación de una estrategia nacional contra la trata y programas de asistencia inmediata y mediata.

Pero a pesar de los actuales esfuerzos del gobierno colombiano por visibilizar la trata de personas, el camino para lograr acciones efectivas aún es muy largo. Por ejemplo, la trata interna no tiene hoy registros confiables, y basa su estadística en las denuncias penales, que son una inmensa minoría, y además, no se tiene aún un consenso entre los actores judiciales y otros organismos del Estado, de ¿en qué situaciones se está ante un posible caso de trata de personas?

A pesar de las recientes campañas pedagógicas al interior del país todavía hay mucha desinformación, tanto en funcionarios públicos que pueden ser claves en la lucha contra la trata, como de las mismas víctimas de trata, que ni saben que lo son, y una sociedad civil desentendida del fenómeno de la trata, que ni lo conoce, ni le importa. Tanto a la ley, como a la estrategia nacional y los planes territoriales les falta difusión y mayor participación ciudadana, los comités son aún muy débiles y no tienen presupuestos fuertes para la dimensión del problema, y lo más grave, ante el gran número de casos de trata son muy pocas las denuncias y mucho menos las condenas proferidas.

A esto, hay que agregar que Colombia, según el Banco Mundial (2016), es el segundo país más desigual de América Latina, después de Honduras, situación que también está intimamente ligada a esta guerra de más de 50 años, ya que, por ejemplo, la propiedad y concentración de la tierra, donde se calcula que el 77.6 % de la tierra está en manos de tan sólo el 13.7 % de la población (Ibañez 2010), ha sido fruto del aprovechamiento del conflicto armado, en el marco del cual, tan sólo en los últimos años, se despojaron más de seis millones de hectáreas a los campesinos, indígenas y pueblos afrodescendientes.

Situación que, entre otras, generó la necesidad de crear una ley de víctimas y de restitución de tierras, y que es el centro también del actual proceso de paz con las FARC, lo cual ha sido objeto de una oposición política, social y armada en el país (el ejército anti-restitución).

Los acuerdos de paz de la Habana, como mencionamos, aún no tienen como punto determinado y específico el tema de la trata de personas, pero sí han desarrollado todo un sistema integral que busca la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y compromisos muy importantes sobre derechos humanos de las víctimas, sistema que deberá involucrar la trata de personas en el marco del conflicto armado, con el fin de atacar las redes de tratantes que necesariamente actuaron en el contexto de la guerra, y que de no ser desarticuladas sobrevivirán al conflicto y mutarán hacia otras formas de violencia y de economía ilegal.

Por esto, es de suma importancia en la lucha contra la trata de personas que el proceso de paz reconozca a las víctimas como ciudadanos que deben gozar plenamente de sus derechos; reconozca la responsabilidad frente a las víctimas; permita su participación activa en la aplicación de los acuerdos; busque el esclarecimiento de la verdad no sólo en las causas y orígenes de la guerra, sino también en sus efectos (la trata de personas en el marco del conflicto, por ejemplo); persiga la reparación de las víctimas, el restablecimiento de sus derechos y la transformación de sus condiciones de vida; busque garantías de protección, seguridad y sobre todo de no repetición de las violaciones a los derechos humanos.

En este marco de garantías para las víctimas, los acuerdos de paz han generado acuerdos en la creación de instrumentos que pueden ser esenciales para la lucha contra la trata y la desarticulación de las redes de tratantes como son:

1. La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, en la cual debe existir un grupo de trabajo que analice los fenómenos de trata de personas en el marco del conflicto, señale responsabilidades, desnude las redes de tráfico de personas que se desarrollaron en el marco de la guerra o en ocasión de la misma, y genere un proceso de verdad histórica frente a este flagelo con el fin de prevenir que dichas redes sigan operando en el postconflicto, se proteja efectivamente a las

víctimas que queden vulnerables a ser nuevamente violentadas, especialmente mujeres, niños y niñas, para asegurar la no repetición de estos hechos de mercantilización de seres humanos.

2. La Unidad Especial para la búsqueda de personas dadas como desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, la cual se convierte en una herramienta fundamental para el proceso de rescate y atención de las víctimas que en el marco de la guerra estén aún bajo las redes de tratantes, vinculadas forzosamente a los grupos armados, o que murieron en el desarrollo de las acciones ocasionadas por la trata, sin que sus familias tengan noticias de ellas.
3. La Jurisdicción Especial para la Paz, que establece los términos en los cuales se desarrollarán mecanismos judiciales que permitan la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos, como la trata de personas, con mecanismos extrajudiciales que permitan esclarecer la verdad de lo sucedido, contribuyan a la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y busquen la reparación de las víctimas.
4. La Unidad de Investigación y Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, la cual se puede convertir en una herramienta clave para atacar las redes de tratantes vinculadas actualmente a los grupos armados: guerrillas, Bacrim y sus redes de apoyo y financiamiento; lo mismo que a elementos corruptos de la fuerza pública.

El fin del conflicto debe ayudar a garantizar que violaciones graves a los derechos humanos, como la trata de personas, cesen definitivamente y se de plena garantía a las víctimas en la satisfacción de sus derechos. Terminar la guerra, además, permitirá que las comunidades se expresen sin miedos, ni presiones armadas, que los responsables de violaciones a los derechos humanos asuman responsabilidades buscando que esto jamás vuelva a ocurrir.

Todo el sistema integral que trae los acuerdos de paz hace especial énfasis en la protección de las mujeres, y de los niños y niñas víctimas, que no pueden volver a caer nunca más en redes de explotación sexual o servilismo, pero esto sólo será posible si Colombia logra cerrar el ciclo de la guerra y toma consciencia que un país en paz sólo será posible cerrando las brechas de desigualdad social, que generan las vulnerabilidades de estas poblaciones, y siendo cero tolerante con la explotación y la trata de las personas.

Trata y Mercantilización de la Vida y del Ser Humano

Transversal a todo lo anterior, se encuentra la cultura de lo desechable (del descarte nos dice el Papa Francisco), junto a la mercantilización del mundo (incluido el ser humano), que hacen que poco o nada nos importe la vida y por eso socavamos el planeta al punto de ponerlo en riesgo y, de la misma forma, desechamos vidas humanas en nombre de la “estabilidad económica”, o permitimos que se den las formas de explotación de seres humanos tan degradantes como la trata de personas. Crímenes frenéticos contra el planeta y contra el ser humano que se conectan en comportamientos compulsivos guiados por el ánimo insaciable de lucro y el individualismo propio de la época.

De entrada deberíamos comprender que la mercantilización de las personas es un acto inaceptable desde todo punto de vista, tenemos que ser radicales en rechazar que la vida humana sea dispuesta como un bien de consumo, como una mercancía más puesta ante el frenesí del lucro económico.

El imperativo ético kantiano de la persona como fin en sí mismo, y nunca como medio, naufraga hoy bajo las leyes del mercado: mientras haya alguien dispuesto a comprar un ser humano, habrá quien quiera lucrarse y lo venderá. No puede el mundo permitirse esta aberración de poner la humanidad misma bajo las disposiciones de la oferta y la demanda. Y el remedio de fondo, como bien lo anota el Papa Francisco, es el cambio de actitud, avanzar hacia una nueva cultura de relacionamiento con la naturaleza, los demás y con nosotros mismos, hay que combatir de raíz el paradigma individualista y de la competencia sobre el cual se sienta el modelo económico actual, ya que sin lazos de solidaridad y fraternidad será imposible combatir ni la irracional explotación humana, ni la del medio ambiente.

Frente a lo anterior, el Papa Francisco nos advierte: *“la cultura del relativismo es la misma patología que impulsa a una persona a aprovecharse de otra y tratarla como mero objeto, obligándola a trabajos forzados o convirtiéndola en esclava a causa de una deuda. Es la misma lógica que lleva a la explotación sexual de los niños o al abandono de los ancianos que no sirven para los propios intereses”*.

Y frente a la conexión de este comportamiento en el marco de la actual compulsión económica de explotación de la vida, anota: *“es la lógica interna de*

*los que dicen: dejemos que las fuerzas invisibles del mercado regulen la economía, porque sus impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son inevitables". Y termina concluyendo: "Si no hay verdades objetivas, ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas: ¿Qué límites puede tener la trata de seres humanos, la criminalidad organizada, el narcotráfico?" [...] "¿No es la misma lógica relativista la que justifica la compra de órganos a los pobres con el fin de venderlos o utilizarlos para experimentación?" Respecto a la calidad de vida el *Laudato si'* nos dice claramente que: "la carencia extrema que se vive en algunos ambientes facilita la aparición de comportamientos inhumanos y la manipulación de las personas por parte de organizaciones criminales".*

Termino esta intervención dando nuevamente gracias al Papa Francisco por su compromiso con la paz de Colombia y tenga por seguro Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo que las valiosas reflexiones del *Laudato si'*, necesariamente las tendremos que tener en cuenta en este momento histórico que vive Colombia, con el proceso de paz actual, ya que, involucrar la perspectiva de la trata de personas podría hacer que el proceso de paz ayude enormemente a combatir este delito, genere acciones de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición para las víctimas de la trata, y lo más importante, parar la guerra puede significar acabar de raíz con los factores estructurales que sostienen los fenómenos de trata en Colombia, y avanzar hacia lo que nos enseñó Paulo VI: que la justicia social es el verdadero nombre de la paz.

Cumbre Sobre la Trata de Personas y el Crimen Organizado

David W. Rivkin

Presidente de la Asociación Internacional de Abogados, USA

Quiero agradecer a la Academia y al Monseñor Sánchez Sorondo por incluirnos en esta importante cumbre. La Asociación Internacional de Abogados es una organización global de abogados, con más de 100 000 miembros en 170 países y con 200 miembros de la asociación de abogados y de la sociedad de leyes. Somos capaces de centrarnos en el estado de derecho y los derechos humanos en todo el mundo debido a la fuerza de nuestra combinación de los miembros individuales y miembros de la asociación de abogados. Trabajamos de muchas maneras diferentes para promover el estado de derecho y para proteger los derechos humanos, en particular, algunos que afectan directamente a la finalidad de esta cumbre. Quiero describir algunas de las actividades que se interrelacionan, y que en gran medida se relacionan con el tema de la Cumbre.

En primer lugar, tenemos un Grupo de Trabajo Presidencial sobre la trata de personas. Estoy muy satisfecho de que nuestro Grupo de Trabajo está trabajando con el Comisario Hyland y otros en el Reino Unido en la organización y presentación de programas de formación de este año para los jueces, abogados, fiscales, policías y otros, gracias en parte a uno de nuestros oficiales, Gillian Ríos, que está también aquí hoy. También vamos a estar conduciendo capacitaciones en Singapur. El hilo común de ambos países es que tienen nuevas leyes de esclavitud moderna. Esperamos mejorar la aplicación de dichas leyes en esos países.

Muy importante, estaremos publicando este mes un informe de nuestro Grupo de Trabajo sobre el impacto de la corrupción sobre la trata de personas. El informe proporcionará los detalles y un esquema en muchas de las historias sobre el impacto de la corrupción que hemos escuchado en los últimos dos días. La corrupción es una característica endémica de la trata de personas. Creo que puede incluso ser justo decir que el tráfico de personas no podría existir sin corrupción. Un oficial de policía exige un soborno para

evitar la presencia de un niño en un burdel. Un funcionario de inmigración recibe el pago para proporcionar un pasaporte falso o mirar hacia otro lado. Un juez desestima un caso de trata a cambio de una parte de los beneficios del traficante. Un agente de policía deporta a la víctima del tráfico para evitar su testimonio contra un acusado. O un inspector de trabajo recibe un soborno para ignorar el trabajo forzoso en un sitio de trabajo. Estos escenarios se producen a diario en todo el mundo. Tenemos que encontrar y presentar más información acerca de estos problemas. Esperamos que nuestro informe proporcione un primer paso hacia ese objetivo.

Muchos estudios muestran una correlación directa entre la trata de personas y la corrupción y concluyen que los países con altos niveles de corrupción institucional son más propensos a tener altos niveles de tráfico de seres humanos dentro de su territorio. La OCDE comparó el informe de la Trata de Personas 2014 EE.UU. con el Índice de Percepción de Transparencia Internacional 2014 Corrupción, y no es sorprendente que había una correlación muy, muy fuerte. Estos resultados, por supuesto, son compatibles con las cuentas de las víctimas que corroboran la tesis de que la corrupción entre los funcionarios públicos facilita el tráfico de personas. Para los traficantes y aquellos que colaboren con ellos, que pagan o solicitan sobornos es alta recompensa y bajo riesgo. En una industria que se negocia a los seres humanos como mercancías, probablemente los sobornos constituyen el mayor coste general. Se reportó de un sindicato que gastó alrededor de 4.5 millones de dólares al mes para sobornar a funcionarios públicos y a fuerzas policiales. La corrupción también puede concretar lazos entre los traficantes y aquellos encargados de llevar a los criminales ante la justicia. Incluso la aparición de la corrupción puede dar a los traficantes el poder de manipular a sus víctimas. Los tratantes con frecuencia mantienen el control al convencer a las víctimas de que la policía es cómplice de su explotación.

Nuestro informe entra en detalles en cuanto a la manera en que los propios funcionarios públicos a menudo sirven como traficantes. Hay muchos informes sobre la participación directa tanto en el tráfico sexual y el tráfico de mano de obra. Usualmente, funcionarios públicos facilitan el tráfico en una variedad de maneras: a través víctimas de reclutamiento, a través de facilitar el transporte de las víctimas, a través de la organización de las entradas ilegales no autorizadas y salidas hacia y desde los países, y a través de la falsifica-

ción de documentos, entre otros. Lo más importante es que estamos viendo que los funcionarios públicos pueden servir como facilitadores de la impunidad. Los traficantes se enfrentan con poco o ningún riesgo, serán obligados a rendir cuentas por sus crímenes. Hemos visto esto a través de las historias que muchos oradores han dicho a lo largo de los últimos dos días. Sabemos que el número de enjuiciamientos de tráfico penales por año es patéticamente pequeño en comparación a los cálculos más conservadores del número de personas que están involucradas en el tráfico. Millones, tal vez decenas de millones, se mantienen en la esclavitud moderna en todo el mundo. A pesar de ello, la Trata de Personas EE.UU. para el 2014 informó que sólo había alrededor de diez mil enjuiciamientos de tráfico en todo el mundo durante ese año. Según la ONUDD, el 41% de los Estados, parte del Protocolo contra la trata, reportó menos de 10 condenas por trata por año. Los funcionarios públicos muchas veces reciben servicios gratuitos de los traficantes. Hemos incluido en las alegaciones del informe de corrupción dirigidas directamente a las unidades de lucha contra la trata. También hemos visto cómo una amplia inmunidad diplomática a menudo puede servir para proteger a algunos de los que se dedican a la trata de personas.

Como resultado, el informe hace una serie de recomendaciones que esperamos pueda ser seguido por muchas organizaciones diferentes. En primer lugar, como muestra esta conferencia, es importante fomentar una cultura de monitoreo y evaluaciones. Necesitamos desarrollar mejores datos sobre el tráfico y sobre cómo la corrupción le afecta; para mejorar la capacidad de los estados para luchar contra el tráfico y la corrupción relacionada; a tomar medidas como la reforma de los recursos humanos mediante la mejora de los sistemas de gestión de los sistemas de rotación o de tener cuatro ojos —dos personas— que sirven en funciones similares para evitar la corrupción; para mejorar la formación sobre señales de alerta de tráfico; para crear códigos de conducta; y para mejorar la relación entre la unidades de anti-tráfico y anti-corrupción del gobierno. Y sobre todo, tenemos que aumentar el castigo de aquellos que están involucrados en el tráfico, para que ya no siga siendo una ocupación con recompensa alta y riesgo bajo.

Una forma que impacta el tráfico es la corrupción en el poder judicial. Otro Grupo de Trabajo Presidencial IBA que he tenido el placer de comenzar se ha centrado en la integridad judicial y la corrupción judicial. Hemos publicado

un informe el mes pasado de una encuesta en todo el mundo que llevamos a cabo con el Instituto de Basilea de la gobernabilidad a través de nuestros miembros y a través de las organizaciones de apoyo como la Asociación Internacional de Juristas. Hemos recibido más de 3 000 respuestas de todo el mundo sobre cómo surge realmente la corrupción judicial. Pasamos tiempo hablando con las organizaciones que luchan contra la corrupción diariamente, como la ONUDD, la OCDE, Transparencia Internacional y otros, y se encontró que nadie tenía buena información sobre lo que realmente sucede cuando se corrompen jueces. Y, por supuesto, la corrupción judicial fomenta la trata de personas también. Por lo que el informe presenta los muy interesantes resultados de la encuesta; que están disponible en el sitio web de la IBA.

El informe mostró que las personas estaban preocupadas principalmente sobre dos áreas. Una de ellas es el soborno de los funcionarios judiciales; que incluye a los jueces, fiscales, secretarios judiciales y otros. Pero la gente estaba aún más preocupada por la influencia indebida en los sistemas políticos, influencia indebida sobre los jueces, fiscales y otros que les impiden hacer su trabajo. Mientras que las preocupaciones de soborno se centraron más en el mundo en desarrollo, las preocupaciones acerca de la influencia indebida y la interferencia política surgieron en todo el mundo, incluyendo países donde no se piensa que existe un fuerte estado de derecho.

Estamos utilizando esta encuesta y de pasar a una serie de proyectos adicionales en los que esperamos que la IBA —dado nuestro impacto en todo el mundo, teniendo en cuenta tanto a nuestros miembros individuales y nuestros miembros de la asociación de barras— puede ayudar a combatir la corrupción judicial y, para efectos de esta cumbre, ayudar a combatir la trata de personas mediante la reducción de la corrupción judicial. En primer lugar, nos vamos a centrar en mejores prácticas para fiscales y también para los colegios de abogados. Hay una serie de mejores prácticas publicadas por la UNODC y otras que se centran en los sistemas judiciales, pero nos dimos cuenta de que no son tampoco las mejores prácticas en los términos en el que los fiscales deberían de investigar instancias de corrupción judicial —especialmente teniendo en cuenta la necesidad de proteger la independencia judicial y no dejar que el enjuiciamiento o acusaciones de corrupción influyen a los jueces que quieren gobernar contra el gobierno en varios casos— o en la forma en como los fiscales deben interactuar con los abogados, con

terceros, y con los jueces y otras personas involucradas en el sistema con el fin de evitar la corrupción.

También vamos a mirar a la creación, con el Banco Mundial u otras organizaciones, de un proceso de certificación. Del mismo modo que las empresas pueden obtener la certificación que tienen lugar en los sistemas y procedimientos adecuados para evitar la corrupción, vamos a considerar si ese proceso se puede adaptar para desarrollar un sistema de certificación para los poderes judiciales que implanten sistemas adecuados para evitar la corrupción. Esperamos que esto realmente pueda conducir a la competencia entre los poderes judiciales de las partes del mundo que están tratando de atraer inversiones o tal vez que la certificación podría convertirse en un requisito obligatorio antes de la recepción de la financiación.

También vimos la necesidad de cambiar la expectativa sobre la corrupción. Vamos a trabajar por primera vez con una serie de países, incluyendo México, Argentina, Corea y Ghana, para crear una declaración contra la corrupción que puede ser firmada por los jueces, abogados, fiscales, y secretarios judiciales, que pueda ser publicada en la página web del colegio de abogados y que pueda certificar que estos individuos no vayan a participar en actividades corruptas. Esperamos que esta declaración vaya a cambiar las preguntas que el público puede pedir de ellos cuando, por ejemplo, una solicitud de dinero se hace con el fin de pagar un soborno. Y vamos a tomar una serie de otros pasos también, tanto a través de los comités de la IBA —tales como el Foro de Jueces, Crimen empresarial, Litigios y comités anti corrupción— como también por trabajar con otros como la Asociación Internacional de Juristas y la Internacional Comisión de Juristas.

En un proyecto muy relacionado, que hemos emitido la semana pasada la, Guía Práctica de la IBA sobre Empresas y Derechos Humanos. Esperamos que con la publicación de esta Guía Práctica podamos centrar a los abogados en el importante papel que desempeñan en la orientación de sus clientes y en el cumplimiento de sus propias responsabilidades en virtud de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, también conocidos como los Principios de Ruggie. Esperamos que al enfocar a los abogados de todo el mundo en estos principios, logren asesorar a sus clientes sobre cómo desarrollar los compromisos de política de derechos humanos, para asistir el impactos

de sus políticas de recursos humanos y sus políticas de derechos humanos, para evitar el tráfico, y para asegurarse de que están contratando involuntariamente a personas objeto de trata. Los abogados también deben tomar en cuenta la forma de proteger las cadenas de suministro de sus clientes, la forma de proveer los términos de sus contrato para nuevamente proporcionarlos con protección, cómo involucrar a las comunidades locales con el fin de evitar el tráfico y el impacto local, y cómo crear procesos de debida diligencia y remediación eficaces requeridos por los Principios Rectores de los Derechos Humanos. Creemos que los abogados no tienen una buena comprensión de las necesidades de sus clientes en este sentido. Hemos escuchado a sus clientes, desde las empresas, que están intensamente centrados en los UNGPs, las cuales ni siquiera son consideradas legislación blanda, sino más bien tan importante como cualquier otro requisito legal. Necesitan que sus abogados les ayuden a cumplir. Esperamos que a través de la publicación de esta Guía Práctica y un anexo de referencia mucho más largo que será publicado en el próximo mes o así, los abogados estén en mejores condiciones para proteger contra la trata de personas, así como otros impactos sobre los derechos humanos.

Por último, ayer Michael Gerrard habló sobre la relación entre el cambio climático y los derechos humanos. Un año antes de la encíclica del Papa, la IBA publicó nuestro informe sobre el Cambio Climático Justicia y Derechos Humanos. Nos hemos centrado en este tema, porque los impactos del cambio climático impactan a aquellos que son menos capaces de protegerse a ellos mismos y a sus derechos. Fuimos urgidos a hacerlo por Mary Robinson, que, como es sabido, ha dirigido los esfuerzos para incluir los derechos humanos en el tratado de la COP 21 que se firmó en París. Nos quedamos muy satisfechos de trabajar con su fundación y satisfechos de que el Tratado de París exige a los países a proteger los derechos humanos en su trabajo para cumplir con sus compromisos de la COP 21. El informe de la IBA se centra en cuestiones de justicia y de derechos humanos que se derivan del cambio climático. Sabemos que la trata de personas es uno de los resultados del cambio climático. Ofrecemos unas 50 recomendaciones diferentes a los gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y otros, y hemos estado trabajando durante los últimos dos años, tanto dentro de la IBA y fuera de ella con el fin de avanzar en todas las recomendaciones posibles.

Todos los informes —sobre la corrupción judicial, el cambio climático y la justicia y nuestro informe próximo a publicarse sobre la trata de perso-

nas—están disponibles en el sitio web de la IBA: www.ibanet.org. Espero que se tomen el tiempo para revisar estos informes, y si quieren que les envíe cualquiera de ellos, por favor háganmelo saber. Espero que esta presentación haya demostrado, que el derecho y la moral se cruzan. Y es responsabilidad de la IBA protegerlos a ambos.

Muchas gracias por su atención.

Crimen Organizado y la Investigación de la Trata de Personas en Paraguay

Francisco Javier Díaz Verón

Paraguay

Preparé, porque me pidieron hablar del crimen organizado, la investigación de la trata de personas en Paraguay, sin eludir esa responsabilidad, creo que las experiencias, manifestadas, expresadas, compartidas por los diferentes actores que estamos presentes hoy acá, creo que ya estamos de alguna manera persuadidos, concienciados de la problemática de la trata de personas y el crimen organizado.

No obstante, quiero decirles que Paraguay es un país pequeño, que está ubicado en el corazón de América del Sur, tiene como vecino a países muy grandes como: Brasil, Argentina, igualmente tiene como vecino a Bolivia, por tanto, ustedes podrán dimensionar su ubicación desde el punto de vista geopolítico y la vulnerabilidad que puede tener en el tema del crimen organizado.

La trata de personas en nuestro país es una realidad, una realidad que más que una cuestión penal, es una problemática social, producto de una inequidad social, una inequidad social que es producto igualmente de guerras, pero muy complicadas que tuvo mi país hace aproximadamente 50 años y de la que nos estamos recuperando.

Inequidad social que vuelve vulnerables principalmente a mujeres y hombres por sobre todas las cosas, para que las mismas bajo engaño sean llevadas y explotadas, ya sea desde el punto de vista laboral o sexual. En este sentido el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, es un órgano constitucional, tiene función autónoma, es autónoma administrativa y desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista legal, no dependemos de nadie, es titular de la acción penal pública, representa a la sociedad ante los organismos jurisdiccionales y tiene una participación directa en la elaboración de políticas de Estado en cuanto a la lucha contra la criminalidad.

Les decía que el tema de la trata de personas no es una cosa nueva para nosotros, es, por tanto, que al asumir nuestra responsabilidad hemos establecido

igualmente como titular de la acción penal pública, como responsables de la investigación, unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado. Así, tenemos unidades especializadas contra de lucha contra la trata de personas, lucha contra el narcotráfico, lucha contra el lavado de dinero, lucha contra el terrorismo, financiamiento de terrorismo, lucha anticorrupción, como flagelos, como lacras que tienen una existencia en nuestra sociedad.

¿Por qué son vulnerables las mujeres en mi país?, les decía por una cuestión económica a la que a la vez se suma un tema de educación. ¿Quiénes son víctimas de este flagelo de la trata de personas?, son personas económicamente complicadas en su existencia, su familia y de un nivel de educación inferior de haber terminado solamente la educación primaria, y esto es en un 75%.

De las mujeres que son víctimas de la trata de personas desde el punto de vista sexual, les puedo asegurar que en mi país el 100% de las personas que son explotadas en materia sexual, son mujeres. La forma en que son persuadidas para ser víctimas de la esclavitud moderna, es el engaño, engaño que es practicado por sus parientes sanguíneos, parientes políticos, amigos, vecinos.

En este sentido, podemos decirles, que sabemos ¿de dónde vienen? ¿a dónde van? y ¿para qué? les decía, que vienen de zonas rurales vulnerables, de una condición económica y de educación lacerante, y van, a donde existe la demanda, todas en busca de la posibilidad de tener una mejor vida, porque ellas van engañadas, no obstante, del otro lado está que, en la búsqueda del dinero, de lucro, lo llevan para que sean sometidas laboral o sexualmente.

En este sentido, el primer punto de aterrizaje de las mismas es: Argentina, Chile, Brasil, Europa, Asia, África. Hoy por hoy, nuestro país ostenta una legislación, la 47-88, integral de la trata de personas que es un instrumento importante para el Ministerio Público y para el sistema de Justicia poder combatir este flagelo, pero qué importa por sobre todas las cosas un compromiso y ese es, el compromiso que tenemos hoy, y por esa razón nos acompaña hoy la fiscal Teresa Martínez, Fiscal de Delitos contra la Trata de Personas, que más adelante tendrá oportunidad inclusive de conversar con ustedes sobre algunas casuísticas, igualmente la fiscal contra el ciberdelito, la Doctora Yarro, y la fiscal contra la lucha del narcotráfico, la Doctora Lorena Ledesma.

Les decía, todos hablaron, escuchamos, compartimos y fuimos persuadidos de vuestras experiencias de las problemáticas que suceden en nuestros países y qué inteligente la madre iglesia a través de su representante el Papa, el Monseñor Sánchez Orondo, al permitirnos hoy compartir y tocar estos temas, desde la visita del Papa. Después de haber escuchado tantas experiencias el día de ayer, me preguntaba principalmente, si tendría que hablar del tema preparado y tengo que reconocer que, por el cargo, por el trabajo que hacemos, solemos participar en encuentros, pero las mismas las reglas realizamos entre Fiscales generales de Sudamérica, de Iberoamérica, en las que compartimos experiencias.

Pero esto es un encuentro plural, en el que están Fiscales, jueces, la sociedad organizada que nos acompaña en este trabajo de luchar por la inequidad social que al mismo tiempo se convierte muchas veces en contralores de la actividad que realizamos las instituciones públicas, y a partir de ahí, dije que quería compartir con ustedes, ¿Quiénes somos? y ¿para que estamos acá? ¿Quiénes somos? Fiscales, jueces, sociedad organizada y ¿cuáles son nuestros desafíos?, todos hablaron de la problemática, del crimen organizado, el principal flagelo la trata de persona, que es la esclavitud moderna, que lleva al ser humano a la posición más lacerante de ser víctima de abusos en contra de su voluntad, que comparte el escenario con su hermano mayor que es el narcotráfico, el narcotráfico que destruye personas, familias, sociedades. Y quiero hacer una dimensión especial en el tema de trata de personas cuando tratamos de víctimas en nuestras regiones, porque nosotros no somos países receptores, sino por el contrario somos países de donde salen las víctimas y cuando tenemos la posibilidad de recuperarlos o recuperarlas principalmente, no es la problemática que se presenta en los países receptores para nosotros, es un tema de humanidad, un tema de problema social, porque no solamente tenemos que recuperar a la víctima, sino que tenemos que trabajar con su familia, por eso es que la trata de personas y el narcotráfico en nuestro país no solamente afecta un tema de seguridad, sino afecta a las personas, a su familia y a la sociedad.

El compromiso nuestro, es mayor, otro hecho punible del crimen organizado pero que siempre está al lado de estos crímenes, es el tráfico de armas, tráfico de armas que es el principal enemigo y amenaza para el don más preciado que tiene el ser humano, la vida, que redondeando este circuito del

crimen organizado llegamos a lavado del dinero. ¿Cómo meter en el sistema financiero el producto de estos crímenes, de estos hechos?.

Bueno, a partir de acá estas son cosas de todos conocidas y compartidas el día de ayer por nosotros, pero el día de ayer igualmente tuvimos el honor y quienes profesamos la fe católica nos sentimos más que halagados con la presencia del Papa Francisco, al hacer un llamado a jueces, fiscales, componentes del sistema de Justicia que cumplamos con nuestra misión, pero por sobre todas las cosas el Santo Padre, tan sabio por sobre todas las cosas, de nuestra realidad social, nos decían a fiscales, jueces, a operadores del sistema de justicia, lo siguiente: “Yo sé que ustedes sufren presiones, amenazas y sé que hoy día, ser un juez, ser un fiscal, es arriesgar el pellejo.” Nos hablaba de la presión, pero la presión que no solamente es política, de la presión que puede ser económica, cultural, familiar, de vecinos, de la presión que tiene un aliado principal que es la corrupción, la corrupción que no solamente es recibir dinero, la de no ir al despacho, o la de hacer investigaciones o sentencias que nos están acompañadas del compromiso que permite la impunidad, pero el papá nos trajo acá para conocernos, para sabernos importantes y que debemos cumplir una función importante en nuestra sociedad, ¿qué hizo el Papa? nos estimuló, nos dio ese combustible que necesitamos, y tan generosamente nos manifestó: “reconozco la valentía de ustedes para que sigan trabajando libremente, pero hace una salvedad, sigan trabajando en libertad, porque no es imposible entender, comprender, un sistema de justicia de una nación sin que se corrompa, es decir, compromiso de parte nuestra, y una vez más, ¿que piden de nosotros? piden de nosotros que los jueces y fiscales seamos idóneos, capaces probos, pero no solamente eso, que los operadores del sistema de justicia, seamos valientes, valientes a la hora de decidir, y no solamente de ser valiente, sino tener un alto grado de sensibilidad social, el humanismo, liderazgo como el Papa que nos estimula o el mismo liderazgo demostrado por Monseñor Sánchez Orondo al invitarnos para participar en esta oportunidad, para decirnos, necesitamos de operadores de justicia comprometidos, valientes, sensibles, que tengan que tratar al humano que aparece en su despacho de igual a igual.

Concluyendo, quisiera no acudir a una palabra célebre, sino la expresión de una víctima de trata de personas cuando lo recuperábamos de un país y nos decía que la misma fue engañada, que fue sometida en contra de su voluntad,

a 20 a 30 veces sexualmente y que eso la obligó a la adicción y decía: “hacía eso, para olvidarme de lo que estaba haciendo”. Con esa misma lacerabilidad, le pido hoy que esto nos sirva hoy por sobre todas las cosas de un estímulo, para ir, y ser valientes, y líderes como el Papa, como el Monseñor, para ser líderes con una conducta ejemplificadora y que podamos ser los agentes que pueden replicar estas conductas, estas experiencias en nuestras localidades, en nuestras comunidades, en nuestra ciudad, no pido aplausos que el aplauso sea para ustedes y que sea la muestra de nuestro compromiso contra el crimen organizado y a favor de las víctimas.

Trata de Personas: las Mujeres y los Niños Víctimas

Maria Monteleone

Italia

Doy las gracias a la Academia Pontificia de las Ciencias y a *Mons. Sánchez* por permitirme participar en este importante encuentro de dos días intensos de trabajo que podemos definir como realmente especiales y que nos permitirán volver a nuestro trabajo sin duda enriquecidos, personal y profesionalmente.

La trata de seres humanos (*trafficking of human beings*), es una de las actividades delictivas más comunes en el mundo, alimentada por las trágicas condiciones de vida en muchos países de África y Europa del Este, por las guerras en curso y, más recientemente, por el terrorismo islámico. Esto determina, la migración hacia el Oeste de miles de personas necesitadas y aterrorizadas, promoviendo así la creación de condiciones de sometimiento y postración, y un suelo fértil de oportunidades de “negocio” para las organizaciones criminales.

Todos los documentos elaborados por organizaciones internacionales, e incluso italianas, indican cifras, especialmente las relativas al número de víctimas son realmente impresionantes, señalando un fenómeno creciente, que evoluciona en paralelo con la crisis económica y el empeoramiento de las diferencias sociales, nivel de vida y bienestar que dividen a la población mundial.

Esta dramática situación que afecta a muchos países, millones de personas en todo el mundo, la mayoría mujeres y niños, obligados a vivir como esclavos, vendidos, transferidos, considerados nada más que “objetos”. La realidad cotidiana nos muestra que todo esto no ocurre sólo en países muy lejanos, ya que muchas víctimas son mujeres y niños de Europa del Este.

Las razones de una expansión tan preocupante de este delito están ligadas a la alta rentabilidad en la que las organizaciones criminales, principalmente extranjeras, se enfocan y asignan recursos y hombres disponibles.

Según FRONTEX (Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión), la

rentabilidad de la trata de seres humanos, incluyendo a las personas asignadas a la industria del sexo en Europa, es aún mayor que la del tráfico de armas y drogas, y es probable que aumente, dado el incremento de difusión por el uso impresionante de los traficantes de medios de comunicación social (Internet) para la publicidad y la atracción de miles de personas desesperadas con utilidad prometedora.

En este contexto, es muy difícil de superar la “brecha” entre el aumento de la delincuencia y la respuesta de las investigaciones y represalias que los estados son capaces de llevar a cabo en el campo, y esto no sólo debido a la complejidad y la delincuencia transnacional.

Los análisis de este fenómeno criminal, afirman que a la larga, las regulaciones que los estados usan para combatirlo, en poco tiempo se convierten en obsoletas e inadecuadas la capacidad particular de los delincuentes para “ajustar” sus estrategias de negocio al marco cambiante de las sanciones con el fin de escapar de la represión, adaptando su conducta a los procedimientos y métodos que les permiten escapar de cualquier posible acción de ejecución.

A nivel mundial, y en Italia también, el tráfico de seres humanos se caracteriza principalmente por utilizar a los sujetos más vulnerables e indefensos: mujeres y niños que vienen de países pobres, donde, ya vivían en condiciones de opresión y de dificultad.

El análisis de este fenómeno criminal, particularmente en Italia, revela que la víctima típica de explotación se ajusta a este perfil un/a joven, edad promedio de 25 años, el 75.2% de los casos son mujeres, la nacionalidad extranjera (principalmente Rumanía, 51.6% y Nigeria, 19%, 15.7% son menores de edad, y el 11.7% está sujeto a inferioridad física o mental (discapacidad). Más del 70% de los tratantes son hombres.

La experiencia italiana —septiembre del año 2015— comparte datos en línea con los de las organizaciones internacionales, y en términos absolutos, la prevalencia de imputados son de nacionalidad rumana.

La proveniencia neta de las víctimas a nivel europeo, Rumania, e internacionalmente Nigeria. Es preciso indicar cómo el fenómeno criminal ha sido

asumido en estos países de manera estructural y, sobre todo, es de gran importancia económica y esta consolidado por eso el fenómeno ha sobrevivido durante años a cada posible intervención represiva.

Varios motivos llevan a la gente a soportar: la extrema situación de necesidad y la falta de alternativas a condiciones inhumanas que, sin embargo, garantiza el mínimo de medios de sustento.

Me gustaría señalar que, en junio de 2015, Krisztina, una chica rumana, que acababa de llegar a la mayoría de edad, víctima de secuestro, trata y esclavitud, junto con su hermana y otro menor de edad, fue vendida como esposa en Roma por cerca de 300 000 euros. En la descripción de las condiciones en las que se ve obligada a vivir en nuestra ciudad, que le fueron impuestas por el hombre que la había comprado, con el que sólo podía salir a rebuscar en los contenedores de basura, declaró que: él la “trata bien [...] que Italia está bien y que no quiere volver a Rumania [...] porque allá era peor [...] también añadió que uno de los secuestradores era bueno porque le dio algo de comer y beber.”

Hay diferentes formas en las que las víctimas son abrumadas para ser “dominadas”.

En general, las mujeres de Europa del Este (principalmente rumanas, albanesas y búlgaras) son atraídas a Italia y luego entran en el mundo de la prostitución y son obligadas a sufrir violencia, mientras que las niñas nigerianas a menudo llegan amenazadas con ritos y prácticas locales.

En algunas interceptaciones telefónicas de una organización acusada de trata de niñas en Nigeria, descubrimos cómo se engendró terror en una niña obligada a prostituirse, de hecho, los interlocutores contaban cómo “el padre de la niña la llevó a hacer un juramento en un templo de vudú, le dieron de comer el corazón de un gallo y ella lo comió [...] jurando que, si ella no paga dentro de un año [...] ese espíritu atormentando [...] y los espíritus del vudú la matarían”.

Otro interlocutor afirmaba: “que quien está por debajo de la señora no tiene ninguna libertad”, añadiendo que “Happy se quedó embarazada cinco veces y siempre tomó las pastillas que siempre funcionan”.

Un hombre implicado en el tráfico de una joven mujer, en alusión a la “preparación” que ella tuvo antes de ser enviada a Italia, dijo que “antes de llevarse a la chica de Nigeria, la hizo dormir con tanta gente y que le hicieron tantas cosas”.

Nosotros, los que tenemos experiencia en la investigación de estos fenómenos, sabemos lo que puede haber significado esas “muchas cosas” que sufrió la pobre chica nigeriana.

Fenómeno de Género

La trata de seres humanos es esencialmente un fenómeno de “género”, ya que afecta principalmente a mujeres (49%) de las víctimas y niñas menores de edad (21%).

Es innegable que todo esto también se debe a un problema “cultural”, a la “normalización generalizada de la explotación sexual de niños y mujeres”.

El marco legal y político reconoce a la trata como un fenómeno de género, por lo que la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo adoptó un enfoque de género en el fenómeno de la trata, reconociendo que se alimenta y se extiende desde el interior, que mujeres, hombres, niñas y niños sufren la trata de formas diferentes y requieren de asistencia y apoyo con atención a la dimensión de género.

Por eso, las intervenciones se orientan en el sentido de promover y fortalecer la coordinación de las operaciones de los Estados miembros, en particular, en las siguientes cuestiones: recopilación de información, uso de investigaciones financieras, uso de Internet y nuevas tecnologías y trata de niños, en el conocimiento de que tales acciones deben tener como objetivo, por una parte contrarrestar y reprimir la delincuencia, pero considerando con igual importancia la prevención y protección de las víctimas.

No hay que subestimar que, en la mayoría de los casos, las políticas de control y los efectos represivos, desplegados por los diferentes países prevalecen por encima del enfoque a la tutela y protección efectiva de las víctimas. Se necesitan iniciativas e intervenciones que les ofrezcan un avance serio hacia la recuperación de su dignidad y la confianza en las instituciones.

Esto es difícil y debemos darnos cuenta que muy seguido las leyes y normativas mundiales no facilitan (mas bien obstaculizan) dichas intervenciones. Expresiones de hostilidad hacia los inmigrantes, prostitutas, personas con discapacidad son recurrentes.

Por lo que la línea en la que nos movemos es también la de cambiar el enfoque sobre la necesidad de proteger y asistir a las víctimas, para que cuando se retiren del circuito penal, de manera efectiva “se definían como supervivientes” como una especie de “veteranos”, que “vuelven a la vida.”

Reflexionemos de manera más profunda acerca de las consecuencias que este crimen horrible causa a las víctimas. Consecuencias que no se pueden eliminar, por que incluso el sistema de justicia más eficaz es capaz de curar los abusos y traumas que millones de víctimas de la esclavitud moderna han soportado.

El primer paso, aparentemente obvio, sigue siendo -encontrar a las víctimas y ponerlas fuera de peligro, incluso si parece muy difícil.

Y en este sentido, es necesario hacer hincapié en que los gobiernos no pueden estar a la espera de que las víctimas se presenten a denunciar, sino que deben analizar los sectores de alto riesgo, hacer una proyección de las poblaciones más vulnerables, y prever la capacitación permanente a las fuerzas del orden, jueces y también a los profesionales voluntarios que operan en la zona, que sean capaces de reconocer la trata de personas que vive y se alimenta ante nuestros propios ojos.

El legislador italiano en los últimos años se ha enfocado en el papel de la parte perjudicada en el proceso penal con intervenciones repetidas y normativas para, por un lado, poner en práctica una protección efectiva, y por el otro, asegurar el papel de los testigos participantes, las propias víctimas, sin dejar de contener al máximo los efectos de la c.d. “Victimización secundaria”.

Se actuó con base en la Convención de Lanzarote (relativo a la protección de los niños contra el abuso sexual), y la de Estambul (sobre la violencia de género y violencia doméstica) y la Directiva Europea relativa a la protección y asistencia a las personas perjudicadas por las infracciones.

Las principales líneas de acción son: el reconocimiento de un derecho general a la información de las víctimas individualizadas, el reconocimiento del derecho a solicitar medidas de protección y de asistencia jurídica a expensas del estado, ser escuchadas de modo protegido, si es necesario también con la ayuda de un psicólogo y con el apoyo emocional más apropiado, antes de la primera fase de la investigación, incluso antes de la interrogación de la policía judicial.

Se introdujo el estatuto de “víctimas especialmente vulnerables”, categoría en la que se inserta expresamente la persona que sufrió el delito de trata de personas.

Para las personas que no conozcan la lengua italiana fue reconocido un derecho generalizado a la asistencia gratuita de un intérprete para asegurar la participación consciente en el proceso, así como la traducción de los actos del proceso.

Con una legislación específica para las víctimas de trata (Decreto Legislativo, 4 de marzo de 2014, n. 24), se ha hecho hincapié en la especificidad de su condición con el reconocimiento del derecho a recibir una compensación fija de la cantidad de 1 500 00 euros, que será pagada a través de un fondo anual para las medidas de lucha contra la trata, que se espera sea alimentado con lo obtenido de la confiscación de bienes de los autores de los crímenes.

Reconocemos el “derecho a la compensación” a las víctimas de delitos comunes aunque no sean ciudadanos italianos, y esto se hace por un sistema que no proporciona un sistema generalizado de compensación por daños criminales.

En este contexto, consideramos que podría ser evaluado, con el evidente propósito de la reeducación, la viabilidad de una consecuencia jurídica que se imponga junto con la condena a los autores de trata de personas, en el que la remuneración del trabajo realizado durante el cumplimiento de la pena se atribuya (en su totalidad o en parte) a sus víctimas, o, en su defecto, al Fondo para todas las víctimas de la trata.

El 26 de febrero de, 2016, nuestro país adoptó el Plan Nacional Anti-trata, que también se caracteriza por un cambio aún más importante, ya que proporciona a las víctimas de la trata y reducidas a la esclavitud “un programa

único de emersión, asistencia e integración social”, (art. 18 del Decreto Legislativo n. 286/98 y art. 13 n. 228, de 2003). Constituye una herramienta útil para la protección de las víctimas extranjeras de trata y la explotación, potencialmente idóneo para promover la integración social efectiva de las víctimas.

La particularidad que hace del instituto un modelo interesante (aunque mejorable) en el contexto europeo e internacional para la protección de víctimas de trata es el hecho de que la protección social no está condicionada a la cooperación de la víctima con las autoridades judiciales y prevé, de manera transitoria, condiciones adecuadas de “alojamiento, alimentación y atención médica”, y sucesivamente da asistencia e integración social.

El único límite operativo es dado a los recursos financieros reales que se tienen de apoyo.

Se debe actuar, en cada caso, para promover un proceso “visible” del fenómeno, en el que una importante contribución pueda ser dada por las organizaciones C. D. tercer sector: asociaciones, a la cooperación social voluntaria, que han desarrollado una sensibilidad y una atención especial a las víctimas de la trata.

Debemos trabajar para que la víctima tenga confianza en los investigadores (fuerzas policiales o fiscales), y esté debidamente informada de sus derechos y de la trayectoria que se ofrece.

Las víctimas de la trata en 2015, que han sido aceptadas en nuestro país y asignadas a un programa de protección específico, han sido 712, de las cuales 599 son mujeres, 647 son adultos y 65 menores de edad, 361 son de Nigeria, 88 de Rumania, 50 de Marruecos, y 29 de Albania. La explotación sexual parece ser la razón principal, por lo que respecta a 497 personas.

También es importante favorecer el retorno voluntario asistido a los países de origen, es decir, la posibilidad de que los migrantes que no pueden o no quieren permanecer en el país de acogida y que deseen, de forma voluntaria y espontánea regresar a su país de origen, lo puedan hacer. Oportunidad que es implementada por el gobierno italiano en favor de los ciudadanos no comunitarios desde hace más de una década.

Pensamos que puede ser de interés la perspectiva de integración del “*programa único de emergencia, asistencia e integración social*”, de la que ya se ha hablado, previendo que puede tener un papel eficaz en promover la inclusión social y permitir que la víctima se reintegre a su país de origen, a través de programas específicos y de cooperación internacional con los países de origen.

En este sentido podría desempeñar un papel decisivo la cooperación con los países de origen de la trata, incluso con campañas de sensibilización y prevención, dirigida a la población y las administraciones públicas locales, también a través de programas de cooperación en el territorio, trabajo en las escuelas, en esencia, iniciativas específicas para mejorar las condiciones de vida en los mismos países de origen de las víctimas.

Conclusiones

Se debe reconocer que las víctimas de trata que viven en nuestras ciudades, son muchas y que están todos los días ante nuestros ojos, sin embargo, parecen, “invisibles”, por lo que debe haber un compromiso extraordinario para movilizar las conciencias de los hombres de buena voluntad:

- Porque son tantos los menores que llegan a nuestro territorio y desaparecen, y se les pierde el rastro;
- Porque son muchos, demasiados, los niños y niñas adolescentes que se prostituyen en nuestras calles;
- Porque no es aceptable que en nuestras ciudades sobrevivan tantos niños explotados, maltratados, esclavizados;
- Es necesario un despertar de conciencia, se debe desarrollar un sentido de fraternidad universal sobre el que construyamos un sentido global de justicia que va más allá del estado individual o país, debido a que las víctimas de la trata en todo el mundo son todas iguales.
- También recordamos como impartidores de justicia que no deberíamos siquiera parecernos al mal juez de la parábola del evangelista Lucas, uno “que no temía a Dios ni respetaba a nadie” y que decidió hacer justicia a la viuda sólo porque le “daba tantos problemas [...] y para que no lo importunara continuamente”.

Buenas Prácticas para Combatir la Trata en el Mundo

Guillermina Cabrera Figueroa

México

Estimado Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller de la Pontificia Academia de Ciencias, reciba un cordial saludo del Doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México y del Lic. Jaime Alejandro Gómez Sánchez, Procurador General de Justicia del Estado de México. Colegas ponentes, jueces, magistrados, y asistentes de todo el mundo; me siento honrada por participar en esta Cumbre para compartir mi visión y experiencias respecto a este flagelo que me ha tocado perseguir en México. Mi intención es exponer sobre lo que considero buenas prácticas para combatir el delito de trata de personas. Son pocas las oportunidades en las que se puede hablar sobre lo que sucede en campo y espero arrojar luz sobre este punto, según la visión del gran líder, su Santidad Papa Francisco.

Para esto, primero platicaré quién soy, qué hago, en dónde estoy, con quiénes trabajo y cuál es el contexto; para después compartir retos y buenas prácticas. Al final diré recomendaciones y situaciones por resolver con ayuda de ustedes y la comunidad internacional.

Introducción

Mi experiencia laboral se ha enmarcado en el Poder Ejecutivo, al realizar las funciones de procuración de justicia en tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Local. Actualmente soy Fiscal en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el cual es una de las 32 entidades federativas que componen a la República Mexicana. Su extensión es mayor a 22 mil km² (poco más grande que Eslovenia). Además, con una población de 15 millones, es la entidad más densamente poblada del país, con grandes tasas de desigualdad y una orografía accidentada. La fiscalía cuenta con un equipo de 30 personas para cumplir con sus funciones en todo este territorio, representando un verdadero reto en la procuración de justicia. No obstante, hemos podido realizar acciones positivas, mencionaré las más importantes.

Retos Personales

- a) Diferencias de género. Durante el desempeño de mi trabajo en las diversas fiscalías a las que he pertenecido, me he enfrentado con la desigualdad del trato con el género masculino, debido a conflictos de intereses y por las rivalidades que surgen al no entender en ocasiones que se deben unir talentos y esfuerzos para realizar el trabajo en conjunto y lograr los objetivos institucionales.
- b) Grupos de interés. Mi meta es siempre procurar justicia con profesionalismo, honestidad, principios y valores. Sin embargo, fui violentada por varones y mujeres con poder, entre ellos firmas de abogados influyentes, que buscaban disminuirme en el cumplimiento de mis funciones.
- c) Condición de género. El reto más grande que he enfrentado ha sido el ser mujer, esposa y madre, roles nada fáciles de combinar con la labor como fiscal que he desempeñado. Pues no se debe perder de vista que se necesita a la familia durante el desempeño de la función pública. Esta no debe hacerse de lado sino que debe mantenerse unida y en equilibrio porque es la que nos impulsa.

Retos y Buenas Prácticas en la Fiscalía

1. Empatía y sensibilidad. En el rescate de víctimas nos hemos topado con la resistencia de éstas hacia la autoridad. No cooperan con la información requerida ni quieren ser reubicadas para su recuperación, ya que no se identifican como tales. Gracias a esto reflexioné que previo a mi actual trabajo, combatí a la Delincuencia Organizada a nivel federal en la Procuraduría General de la República, en donde tenía contacto con integrantes de los grupos delictivos. Debía ser dura, eficaz, directa, y mantener en todo momento el objetivo de obtener información y resultados. Sin embargo, ahora como Fiscal contra la Trata de Personas, tuve que cambiar mi acercamiento como autoridad, aprendiendo a sensibilizarme y a mi equipo con el trato a la víctima, priorizando su rescate y bienestar, generando una esfera de confianza a través de una protección multidisciplinaria: psicólogos para sus terapias, médicos para atender su estado físico derivado del delito del cual fueron objeto, trabajadores sociales para ayudarles a realizar un proyecto de vida que sirva para su reintegración social. Esto me ha permitido, por un lado, poder obtener información

para las investigaciones que se desarrollan, y por otro, garantizar la recuperación de la víctima con base en los principios rectores enmarcados en la ley general y estatal sin algún tipo de discriminación.

2. Equipo de trabajo. Sin duda, tener un equipo fuerte permite mejores resultados. Cuando llegué a la Fiscalía, el personal que se encontraba no estaba especializado para combatir el delito ni atender a las víctimas, generando conflictos laborales y obteniendo resultados deficientes. Tuve que depurar e integrar mi equipo de trabajo en más de dos ocasiones; evaluando al personal y aprendiendo a fortalecer sus capacidades, para así obtener el perfil adecuado. Se ha capacitado al equipo con apoyo de instituciones nacionales y con la Embajada de Estados Unidos, aumentando sus competencias para mejorar y perfeccionar el trabajo cotidiano.
3. Recursos materiales. Se habla mucho de la adecuación óptima para perseguir el delito, sin embargo, al iniciar en la fiscalía contaba con infraestructura deficiente, por ejemplo, sólo contaba con 2 patrullas para nuestras funciones en todo el Estado, pero no me dejé vencer ni utilicé este vacío como excusa. Busqué apoyo dentro de la misma institución y con otras instituciones, logrando aumentar en 400% los recursos materiales necesarios para crear dicha infraestructura que hoy nos permite trabajar y entregar mejores resultados.
4. Cooperación interinstitucional. Hace falta mayor sensibilización en la materia tanto de jueces como de magistrados, quienes son los encargados de administrar justicia y velar por el respeto estricto de los derechos humanos. Uno de los casos a los que nos hemos enfrentado es el siguiente. Se tuvo conocimiento de que un grupo de personas explotaba a menores de edad. Se solicitó cateo para el rescate de los menores y la detención de los imputados, el cual fue otorgado. Se detuvo a una de las personas involucradas y se solicitó orden de aprehensión y fue concedida. Sin embargo, el mismo juez no vinculó a proceso, es decir la apertura a la investigación, porque consideró que no había delito, por lo que el imputado quedó en libertad y la familia del menor ha sufrido amenazas por denunciar. Como contexto, México se encuentra en una fase final de transición gradual de su sistema de justicia penal. Se adoptará este sistema en su totalidad en este mes, pero ya estaba implementado en el Estado de México cuando llegué en 2013. Ahora los juicios son bajo un sistema acusatorio,

adversarial y oral, regido por un código nacional, el cual permite garantizar en mayor medida los derechos fundamentales de las personas, entre los cuales se prioriza el interés superior de la infancia. Esto permitió facilitar la apelación de la resolución ante magistrados de la Sala Penal, los cuáles otorgaron la vinculación a proceso por trata en la modalidad de explotación laboral.

5. Reparación del daño. Este concepto aún resulta nuevo en México. En las primeras sentencias se enfocaba al castigo del imputado, pero no se solicitaba que se pagara o realizara acciones para reparar el daño a la víctima. Esto requiere una visión integral jurídica, no sólo apoyándonos con la ley que prevé el delito de Trata de Personas, sino utilizando leyes locales, federales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hemos peleado ferozmente para proteger y salvaguardar su identidad, no revictimizándoles, tomando sus declaraciones en compañía de personas de su confianza, representante legal, y personal especializado, respetando sus derechos, en especial cuando son niñas, niños y adolescentes, como lo establece la ley. Esto no ha sido fácil, pues muchos defensores han buscado que prevalezcan los derechos del imputado sobre los de las víctimas.
6. Técnicas de investigación. El delito de trata no es fácil de investigar ya que requiere de más tiempo que otros delitos, así como de labor de inteligencia. En el 2013, se incluyeron en el código de procedimientos penales del Estado de México diversas técnicas de investigación que han facilitado la obtención de otros datos de prueba. Desde la Fiscalía, hemos decidido hacer uso de esas técnicas para investigar este delito, obteniendo de ello pruebas lícitas, que permiten fortalecer el dicho de las víctimas, respetando en todo momento la legalidad y sin violentar los derechos humanos, entre ellas las siguientes:
 - a) La intervención de comunicaciones privadas,
 - b) La extracción de información en aparatos electrónicos,
 - c) Operaciones encubiertas en sus diferentes modalidades,
 - d) La infiltración de agentes,
 - e) El empleo de informantes,
 - f) El ofrecimiento de recompensas,
 - g) Uso de la figura del arrepentido, y
 - h) Programa de denuncia anónima.

Caso “Nena”

Ahora les presento el caso denominado “Nena”, el cual representa muy bien las acciones que hemos realizado en la Fiscalía.

“Nena” es una adolescente que fue rescatada en un operativo fuera de un hotel en el Estado de México.

- Cuando la encontramos, tenía 14 años y trabajaba brindando servicios sexuales, que dentro de la zona de explotación eran considerados como de los mejores porque ella ofrecía un servicio sexual con trato de “novios”, incluyendo besos, posiciones sexuales y penetración por donde lo decidiera el cliente por la cantidad de 1 500 (75 euros).
- Se le aplicó el protocolo establecido, pero se mostró renuente y no cooperó. Rindió una declaración escueta, omitiendo datos fundamentales para la investigación. Fue fiel a su tratante por considerar que él la protegía ya que le brindaba amor, atención y apoyo económico; condiciones de la que carecía en su hogar.
- Se buscó un lugar que garantizara atención integral y medios para su resocialización, el cual fue la Fundación “Camino a Casa”. A través de la atención que se le brindó, se logró la confianza de la víctima, recuperó su amor personal, la confianza en sí misma y su dignidad.
- En esta ocasión, cuando llegó el momento para declarar ante el Juez de Juicio Oral, refirió que en realidad ella entabló amistad con un conocido de su entonces novio, del cual estaba enamorada porque le prometió matrimonio. La relación terminó, pero “Nena” buscó al amigo para que le ayudara a regresar con el novio. Éste aprovechó la situación de vulnerabilidad y se ganó su confianza. A partir de esto, la ofreció a través de una página web, transportándola a los hoteles para después iniciarla en los servicios sexuales, sometiéndola a actos aberrantes. La vendía con clientes de hasta 60 años, la obligaba a tener relaciones con otras mujeres mientras él las observaba, y después de varios encuentros con los clientes, él le pedía que relatará todo a detalle. También solía pintarle el apodo de él por todo el cuerpo de ella y la grabó diciéndole “eres mía”. Gracias a su tiempo en la Fundación, se empoderó y se dio cuenta del daño que le causaba el sujeto.
- Con esta declaración, tenemos una de las pruebas contundentes para que un Juez la tome en consideración y pueda emitir sentencia; y “Nena” está en un buen camino para su resocialización.

Consideraciones y Recomendaciones

Los resultados que hemos obtenido me llenan de orgullo pues se ha logrado con apoyo de la Sociedad Civil, como la “Fundación Camino a Casa”, que las víctimas rompan el silencio de su historia de vida y nos refieran con verdad el sufrimiento que vivieron en manos de sus tratantes, en las diversas modalidades del delito. Debo señalar que el punto de inflexión fue cambiar la postura de la Fiscalía hacia la víctima, haciéndola el centro de protección.

Aun así, hay mucho por hacer frente a este problema. Por lo tanto, debo señalar dos situaciones que considero más relevantes para lograr mejores resultados.

En primer lugar, se deben desarrollar y compartir métodos para sistematizar la información criminal: En la procuración de justicia es prioridad obtener los datos que permitan conocer la incidencia delictiva por zona, el perfil de las víctimas, el perfil de los tratantes, entre otras variables criminológicas.

En segundo lugar, considero conveniente la sanción penal al consumidor de servicios sexuales para desalentar la demanda. En la Ley General de Trata de Personas aplicable en México se sanciona con pena de 2 a 40 años de prisión al que adquiere, use, compre, solicite o alquile servicios de una persona para cualquiera de los delitos previstos en esa ley, siempre que el consumidor tenga certeza de la situación de la víctima.

Por otra parte, existe evidencia en Suecia sobre los resultados positivos en cuanto a la disminución de la solicitud de servicios sexuales sancionando a los clientes. Esta propuesta prometedora podría expandirse a las demás modalidades que componen a la trata de personas. Sin embargo, aún se deben estudiar diversos casos y considerar sistemas jurídicos, condiciones estructurales y contexto internacional para poder saber el alcance de esta medida.

Finalmente, Monseñor Marcelo Sorondo y miembros de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, enfatizo que el combate a la trata de personas no se trata de cumplir con cifras, sino de devolverle la esperanza a una persona. Ustedes cuentan con una aliada y también cuentan con los mexicanos que firmamos esta declaración para que en México se cumplan los objetivos de la misma y que México sea parte de esa nueva historia.

Muchas gracias.

La Realidad de la Trata en el Perú

Janet Tello Gilardi

Perú

Situación de la Trata de Personas en el Perú

En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez más son las personas descartables, privadas de derechos humanos fundamentales, pobres, excluidas, discriminadas, explotadas, víctimas de violencia, y muchas veces, revictimizadas por parte del Estado, el llamado que nos hace el Papa Francisco, el Monseñor Sánchez Sorondo y la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, para reflexionar y compartir experiencias, así como para unir nuestros esfuerzos frente a estos flagelos que atacan a la humanidad, como es la trata de personas y el crimen organizado, se convierte en un compromiso prioritario de nosotros como Jueces y Juezas.

Este es un llamado, a efectos de tender puentes de solidaridad, de trabajo y de cooperación interna e internacional hacia el bien común que debe ser, sin ninguna duda, el respeto y la defensa de la persona humana y su dignidad como fin supremo del Estado y la sociedad, como lo señala el artículo 1° de la Constitución Política del Perú.

Por eso agradezco esta oportunidad única, histórica y privilegiada de encontrarme entre este grupo de Magistrados que nos hemos dado cita aquí en el Vaticano, y de aquí en adelante, para contribuir con nuestro trabajo a los cambios positivos que la sociedad globalizada demanda, despojándola de la cultura de la indiferencia frente a la realidad de quienes más necesitan.

Es así que venimos desde el Perú a reafirmar nuestro compromiso, a partir del rol que cumplimos como operadores del sistema de justicia en la prevención, investigación y sanción del delito de trata y en la recuperación y reparación de las víctimas.

En tal sentido, buscamos evitar la repetición de historias de terror judicial, de hace ya muchas décadas, cuando ciertos jueces no medían el trato que tenían hacia las víctimas, por ejemplo, en los interrogatorios a víctimas de

violencia sexual, formulando preguntas discriminatorias e indignas, llenas de prejuicios sexistas y estereotipos de género, consiguiendo que aquellas, por lo general mujeres, rompieran en llanto.

Ante esta situación, la mayoría de veces el Tribunal absolvía al imputado, ya que la agraviada *“no pudo mirarle a los ojos y enrostrarle el hecho de violencia denunciado”*, o quizás indicaba, que la *“agraviada bajando la mirada, guardó silencio”*. Felizmente este relato forma parte de la prehistoria judicial y en Perú hoy hemos avanzado de manera considerable y positiva en el abordaje legal y la judicialización y sanción de delitos que constituyen violencia de género, como es la trata de personas.

Sin embargo, es necesario resaltar que la impunidad sigue siendo un elemento favorecedor de esta espiral de violencia que se dirige contra millones de personas alrededor del mundo.

La absolución de un tratante, no hace sino invisibilizar aún más este flagelo y abonar en la naturalización de la violencia y la discriminación, así como en la perpetuación de las relaciones de poder que los hombres siempre han ejercido sobre las mujeres, generando incluso vínculos solidarios intragénero, que afortunadamente hoy, cada vez están menos presentes en los operadores del sistema de justicia en el Perú.

En este contexto, considero que la Trata de personas es una manifestación extrema de la violencia de género en el Perú, ya que si bien tanto hombres y mujeres son víctimas de este delito, lamentablemente de las estadísticas que se manejan resulta que la mayoría son mujeres y niñas de distintas edades. Dichas cifras no sólo se dan en el país, sino en muchos otros conforme a las exposiciones que hemos escuchado.

Así pues, de acuerdo al Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines (RETA) del Ministerio del Interior, se registraron 1835 víctimas durante el año 2015, siendo el 91.6% mujeres y niñas de distintas edades.

Análisis desde la Perspectiva de Género

Además, hay una doble vulneración a sus derechos, o mejor diremos que hasta triple, debido al impacto diferenciado que tiene el delito de trata respecto

a las mujeres frente a los hombres. Esto, por cuanto las niñas y mujeres que son víctimas de trata para explotación laboral, por lo general también lo son de explotación sexual. Y triple, porque además, pueden salir embarazadas contra su voluntad, llevando a costas un embarazo forzado o forzoso, así también pueden abortar contra su voluntad, y ser separadas de sus hijos, también en contra de su voluntad, siendo una clara afectación de sus derechos no solo en el ámbito sexual, sino también en sus derechos reproductivos.

Por ello, en todo diagnóstico del delito de trata y sus consecuencias, debe ser analizado desde la perspectiva de los derechos humanos y de género, por el impacto diferenciado que tiene en la vida y desarrollo de las víctimas mujeres. Cabe mencionar que por el tiempo con el que contamos, no será posible abordar otro aspecto muy importante en la comisión del delito de trata: cuál es la demanda de compra de seres humanos para su explotación. Esta demanda, por lo general es de varones para explotar sexualmente a las niñas y mujeres, lo cual es considerado como natural en una sociedad donde predomina el machismo, y los hombres se sienten superiores a las mujeres, con derechos sobre su cuerpo y su sexualidad, lo cual merece exposición aparte.

Otro aspecto que se revela a partir del diagnóstico del delito de trata desde la perspectiva de género, está relacionado con la figura del agresor o del tratante. En este delito, como en ningún otro, dicha figura también tiene rostro de mujer.

Como si viéramos los lados de una misma moneda, encontramos en ambos a mujeres: mujer tratante por una parte y mujer víctima por otra. Podríamos decir que se trata de un delito femenino, por la cantidad de mujeres involucradas como tratantes y tantas otras como víctimas, formando parte de una cadena de violencia en el que ella, son los eslabones principales.

Así, se denuncian y procesan a mujeres captadoras de víctimas, propietarias o conductoras de los bares donde se obliga a las mujeres y niñas a prostituirse o ser explotadas. Sin embargo, también se puede apreciar que se tratan de mujeres que exhiben un pasado de violencia o que también han sido víctimas de trata o de otro tipo de violencia, y que siguen siendo coaccionadas, y son condicionadas para que capten a nuevas víctimas, a cambio de la esperanza de una ansiada libertad.

Sobre el Contexto de Coerción en el Delito de Trata de Personas

De otro lado, en cuanto al consentimiento de la víctima, en el Perú, si se trata de niñas, niños o adolescentes, dicho consentimiento es evidentemente intrascendente, pues se entiende que este grupo humano se encuentran en situación constante de vulnerabilidad. Es por ello que el artículo 153° del Código Penal Peruano señala que en el caso de las víctimas menores de edad, se entenderá como delito de trata de personas, el secuestro, traslado o retención, y explotación aun cuando no haya existido algún sometimiento de su voluntad pues se entiende que existe un contexto de coerción.

Sin embargo, dicho tipo penal señala que para las víctimas mayores de edad, será necesario que se haya incurrido en alguna de las modalidades de sometimiento de la libertad, lo cual resulta perjudicial para las víctimas mujeres que sufren en igual o mayor intensidad que los niños y niñas, los efectos de este delito. Así pues, tanto una niña o una mujer joven o adulta se encuentran exactamente en la misma situación de vulnerabilidad y de afectación a sus derechos.

Tan solo analizar los medios que se emplean para la comisión del delito, como son la amenaza, la coacción, el engaño, el fraude, etc., todos estos ubican a la víctima en una situación de no poder expresar su voluntad de manera espontánea y libre. Se trata de una manifestación de voluntad inválida por el contexto en el que se brinda. Ello, es así, aunque la víctima lo pretenda negar. Queda claro, que no hay libertad posible que pueda fundamentar ese supuesto consentimiento.

Sobre el deber de Diligencia del Estado Frente al Delito de Trata de Personas

Por otro lado, con relación a la normativa al igual que otros países, Perú cuenta con una profusa legislación nacional que ha recogido las normas contenidas en los instrumentos internacionales de lucha contra la trata, como es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos adicionales: el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (denominado Protocolo de Palermo) y el Protocolo

contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Así también, ha asumido las obligaciones internacionales que corresponden al Estado frente a su deber de prevenir, investigar y sancionar así como al de rehabilitación y recuperación de las víctimas, lo que constituye la obligación de la debida diligencia.

En este aspecto, no cabe duda alguna, que el Perú ha avanzado en este plano formal, adecuando, por ejemplo, la legislación penal a las definiciones contenidas en dichos instrumentos internacionales, y por tanto tipificando el delito de trata y definiéndolo a partir de todas las conductas criminales que abarca, conforme lo podemos apreciar en el artículo 153 del Código Penal Peruano.

Antes, sólo se hablaba del delito de trata con la finalidad de la explotación sexual, y antes aún, todos recordaremos que sólo se identificaba al delito con la “Trata de Blancas”. Lo que sucedía es que sólo ofendía a la conciencia humana el tráfico de mujeres occidentales, ya que la esclavitud de las personas de raza negra o asiática era considerado lo natural y era permitido.

También desde el Estado se han adoptado políticas públicas que encontramos en planes nacionales de acción. El Plan Nacional de Lucha contra la Trata que va desde el año 2011 hasta el presente año, contiene una serie de objetivos y metas en la cuales se evidencia la participación activa del Poder Judicial. Actualmente, se viene trabajando para la continuación de este plan nacional para otro período similar.

Asimismo, existe el Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas (GTMPTP), en el cual están representados todos los sectores del Estado involucrados en la lucha contra la Trata, también hay representantes de la sociedad civil. Es una causa que bien merece la conjunción de esfuerzos desde el estado y los particulares, para erradicar este flagelo social.

Sin embargo, no se puede cantar victoria, pues aún estamos imbuidos en una sociedad tradicional, en la cual no se terminan de erradicar los prejuicios y estereotipos de género que llevan a considerar como natural la prostitución, la explotación laboral, la explotación sexual, etc., en general, la violencia contra las mujeres.

De allí que los operadores de justicia, policías, fiscales, jueces, requieran estar muy atentos a la aparición de estos prejuicios y estereotipos en el accionar cotidiano para evitar caer en actos abusivos o discriminatorios frente a las víctimas.

Por eso, aún se puede encontrar a un efectivo policial, ante la denuncia de desaparición que formula una madre respecto a su hija adolescente, contestando que no puede salir a investigar sino hasta después de 24 horas, y menos aun cuando “está en la edad de fugarse con el enamorado”. Esto es inconcebible, peor aún, si la denuncia se presenta en una zona como la selva del Perú, la cual es foco de trata.

En este contexto, no se puede esperar que pasen las 24 horas, ni 12, ni media ni un minuto, porque el patrón sistemático de violencia y trata nos está indicando que sólo con un accionar rápido y oportuno se puede recuperar a la persona. No queremos que el estado peruano termine siendo condenado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, como le sucedió al Estado Mexicano, en el caso Campo Algodonero, por la falta de la debida diligencia, ante la desaparición de tres jóvenes mujeres en Ciudad Juárez donde campeaba el feminicidio. Ello por la inactividad estatal de salir en su búsqueda ni bien se produjo la denuncia.

Con relación a la sanción del delito, vamos a ver que según las exposiciones, parecería que Perú es uno de los países que establece las penas más severas. Así, el primer caso que se sancionó a un tratante y violador en el Perú, se le impuso 30 años de pena privativa de libertad.

Al respecto, no se obtienen cambios estructurales con la sola elevación de las penas, si no se entiende y atiende a las condiciones sociales y económicas que favorecen a la trata, en especial en el plano de la familia.

Así, toda medida o política que se adopte debe mirar a la familia y el medio ambiente en el cual se desarrolla, como el centro prioritario de preocupación. Esto es así, por cuanto la familia es la célula básica de la sociedad, la misma que se entiende conformada por un conjunto de personas que se brindan mutuamente lazos de afecto, cuidado y protección, sin embargo, en este tipo de delitos, la mayoría de veces se constituye como el primer escalón en la cadena de vulneración de los derechos humanos de sus integrantes.

La familia se convierte en el eje articulador entre los tratantes y sus propios hijos e hijas, a quienes venden y colocan como víctimas, incluso a sabiendas que serán explotados denigrando su condición de personas y su dignidad.

Conviene referirnos a un caso que se presentó en la zona oriente del Perú que comparte frontera con Brasil y Colombia, donde los servicios básicos del Estado no llegan, por lo tanto la dotación policial se traslada hacia esos parajes solos sin su familia.

Allí, se tuvo noticias del caso de un padre que se presentó ante un efectivo de la policía a ofrecer a su hija a cambio de dinero por servicios sexuales. Cuando se concretó esta aberrante transacción y el policía abusó de la hija, el padre se presentó a chantajearlo con 50 000 soles para no denunciarlo, ya que la víctima tenía apenas 13 años de edad.

Un policía amigo justificó esta actitud de su colega, señalando que si el propio padre ofrecía a su hija, y ellos encima estaban solos en esos lugares olvidados por el Estado, pues: “qué se podía hacer”.

Así como este caso, vemos muchos otros más en los cuales, son los padres u otros miembros de la familia que se convierten en los iniciales violadores de derechos humanos de las víctimas al ofrecerlos en venta como si fueran cosas que se pueden negociar.

Por ello, el Estado debe incidir en la familia y el medio ambiente. Debe ser recuperada como ese espacio de protección y cuidado de sus miembros, como célula básica de la sociedad. Rescatar a esa familia que por desconocimiento, por necesidad de la propia subsistencia o porque también estuvo inmersa en la cultura de la indiferencia hacia sus propias necesidades en función a cada uno o una de sus integrantes, debe ser uno de los grandes objetivos de los Estados.

Si bien, la necesidad de subsistir es una necesidad vital, nada puede justificar que la persona pueda ser traficada. En el caso de los niños y niñas, por ejemplo, la apuesta debe ser por la erradicación del trabajo infantil, aunque suene a quimera. El derecho a la subsistencia a través del acceso al trabajo es la premisa, pero está sólo se completa frente a un trabajo digno.

Así pues, existe un caso clave para entender cómo el derecho a la subsistencia puede justificar la explotación y vejación de la dignidad de la persona humana, debido a la falta de ofertas laborales e inacción del Estado por asegurar el ejercicio de dicho derecho de manera digna y segura, así como a la naturalización de la violencia y reconocimiento de labores ilícitas como único medio de empleo.

Un padre tenía contrato de trabajo de su hija que fue llevada a la ciudad de Madre de Dios, un lugar en el Perú, donde existe la minería y la tala ilegal. En este lugar era explotada laboral y sexualmente. En dicho contrato se señalaba, que aquella iba a servir de mesera en un restaurante.

En un operativo policial realizado en un “*prostibar*” se encontró a la joven y se logró rescatarla. El padre indignado exhibió su contrato de trabajo, señalando que en un país donde prima la informalidad, el contar con uno era casi un privilegio, y tanto él como su hija lo tenían. Presentó una denuncia por abuso de autoridad alegando que le estaban privando a su hija de los medios de subsistencia y por ende a su familia. Su hija expuso de igual manera y negó todo tipo de explotación. El caso se archivó.

Por último, quisiera señalar, que en el Perú, aún resultan insuficientes los esfuerzos de las instituciones, y no son del todo eficientes. En ese sentido, a manera de ejemplo, ante determinados supuestos en los cuales se exigen pagos de tributos para la concesión de licencias municipales, a sabiendas o sospechas de tratarse de lugares donde se va a ejercer la prostitución forzada, es evidente que existe un vínculo de complicidad.

Por eso, se puede afirmar que el Estado se convierte muchas veces en negligente por estar inmerso en esa cultura de la indiferencia globalizada, cuando no, cómplice de este grave delito. En cualquier caso, no se quiere pensar que el Estado pudiera convertirse en el principal o uno de los proxenetas que más beneficios obtienen de mujeres, niños y niñas explotados.

La obligación de la debida diligencia del Estado, a la cual ya nos referimos antes, conlleva pues que nosotros como juezas, jueces y partes de un Poder del estado, nos comprometamos con garantizar la defensa y protección de los derechos humanos de las víctimas. Ese es nuestro rol comprometido y debemos estar dispuestos a cumplirlo.

*La Trata de Personas y los Avances Tecnológicos.
La Perspectiva de un Fiscal*

Yonette Sam-Buchana

USA

Buena noches. Gracias a la Academia por la invitación a participar en tan importante cumbre; es un honor estar aquí. Soy el Jefe de la Major Sección de Delitos de la Oficina del Fiscal Federal en Atlanta, Georgia. Yo proceso y superviso el procesamiento de casos de tráfico de personas que involucran la explotación de niños y adultos.

Hoy en día, enfoco mis observaciones sobre la victimización de los niños. Específicamente, el papel de nuevas tecnologías en donde los niños son objetivos más fáciles para los traficantes. Teléfonos móviles, tabletas, redes sociales y aplicaciones de teléfonos celulares son para los niños, especialmente para los adolescentes, lo que las muñecas y las canicas fueron para nosotros cuando éramos niños, juguetes. Para un traficante, estas nuevas tecnologías son elementos en su caja de herramientas. Tres casos procesados en Atlanta demuestran esto.

Hace algunos años, un individuo se presentó a sí mismo como un adolescente que entró en una sala de chat de Internet la cual limita los participantes a ser menores de edad, y continuamente publicaba mensajes invitando a las niñas a hablar con él y saber si estaban interesadas en recibir ciertos regalos y favores tales como arreglarse el cabello y las uñas. Niñas tan mayores como de 16 años de edad y tan jóvenes como de 11 años de edad respondieron. Cada vez que una chica respondía, el individuo, que en realidad era un hombre adulto, de inicio las animaba a enviarles fotografías reveladoras de sí mismas. Luego les pedía sus números telefónicos. Luego, utilizando la mensajería de texto, exigía a todas horas del día y la noche que se tomaran y le enviaran a él fotografías cada vez más sexuales reveladoras y videos de ellas mismas. Una vez recibidas, amenazaba con publicar las fotografías y los videos en los sitios web de sus escuelas, si no cumplían con sus requisitos, los cuales implicaban tener actividades sexuales con otros. Incluso amenazó a las niñas con violencia física y en contra de sus familias. A través del uso de estas tácticas, este

explotador incluso convenció a varias niñas de abusar sexualmente de sus hermanos pequeños y mostrarle esta conducta en vivo.

Toda esta actividad se llevó a cabo con los dispositivos móviles. Las fotografías al desnudo fueron tomadas con los teléfonos, los videos sexuales que el hombre exigió fueron registrados y transmitidos a través de los teléfonos móviles de las niñas, y la conducta sexual en vivo fue transmitida a él mediante una aplicación de teléfono móvil. En última instancia, este hombre conoció y violó a varias de las chicas que incluían una niña de 11 años de edad y dos de 13 años de edad. Quizás él nunca hubiese sido capturado a no ser que un padre vio el teléfono de su hija y miró el video de la chica abusando de su hermano más joven. Este padre llevó a su hija al departamento de la policía para que fuese detenida por abuso a menores suponiendo que la chica era la depredadora.

Más recientemente, un traficante ubicado en Atlanta utiliza Facebook y mensajes de texto para atraer a dos muchachas a la prostitución. Esto, lamentablemente, no es poco común. Lo que era diferente en nuestra experiencia, es que el traficante logró que una de las chicas, que estaba a cientos de kilómetros de distancia y que nunca lo había conocido en persona, que participara en actos sexuales para su beneficio comercial. Esta niña, que el hombre sabía que era menor de edad, nunca había sido prostituta antes. Utilizando su teléfono y la tableta, la convenció, manipuló y atrajo, de forma anónima, a publicar en Internet utilizando fotografías reveladoras que la animó a tomar con su teléfono y a enviárselas, fijando fechas, y luego la obligo a enviarle todo el dinero que ganó. Con el tiempo la convenció de viajar a Atlanta donde utilizó la violencia y las amenazas de violencia para llegar a ella y a una segunda adolescente para trabajar para él como prostitutas. Sin embargo, por un período de tiempo, por medio de la tecnología, fue capaz de explotar a una joven a cientos de kilómetros de distancia sin nunca haberla conocido en persona.

Y la tecnología está dificultando a las víctimas para que puedan escapar de sus agresores. En un caso que involucra a un traficante violento de ambas mujeres adultas y adolescentes, una víctima escapó y poco tiempo después se asomó a la ventana para verlo sentado en su coche esperando por ella en el lugar donde pensó que estaría a salvo. Ella escapó una y otra vez, y él siempre

era capaz de localizarla. También en este caso, el teléfono móvil que el traficante había dado a su víctima fue la herramienta que utilizó. Simplemente había instalado una aplicación en cada uno de los teléfonos que le dio a sus víctimas que le permitían no sólo ubicar sus paraderos, sino también ver todas sus comunicaciones, todo ello sin su conocimiento.

Estos casos reales demuestran que los avances en la tecnología permiten a los traficantes atrapar y esclavizar a los niños con relativa facilidad. Y que permiten que los traficantes operen con un anonimato casi total. Algunos sitios de Internet no solicitan ninguna información de identificación y los traficantes pueden publicar anuncios de servicios sexuales de manera anónima. Y, por supuesto, cualquiera puede asumir una identidad falsa en internet, incluyendo pretender ser un menor de edad. Por desgracia, los niños que son víctimas son aquellos que son los más vulnerables, los niños que ya han sido víctimas de alguna manera y son más susceptibles a las promesas de amor y comodidad ofrecidos por explotadores adultos, los niños que son discapacitados mentales, los niños de hogares rotos, los niños que no tienen hogar, los niños que están en riesgo. En dos de los casos que acabo de describir, algunas de las víctimas, un niño de once años de edad, un niño de trece años de edad y un adolescente de dieciséis años de edad, intentaron suicidio como resultado del trauma que sufrieron.

¿Qué podemos hacer como jueces y abogados? ¿Cómo se logra la justicia en este contexto? Considero que cuando los niños están involucrados nuestra atención debe centrarse en la prevención y protección. Esto requiere que asumamos roles que tal vez no son nuestros tradicionales. Una parte esencial de la educación de nuestros hijos debe ser necesariamente sobre los peligros de internet. Nuestra oficina tiene un coordinador de la explotación infantil, un abogado que visita las escuelas, junto con agentes de la ley para hablar con los niños acerca de estos peligros. Y nuestro coordinador de trata de personas y otros abogados en nuestra oficina gastan un porcentaje significativo de su tiempo hablando con los miembros de nuestra comunidad acerca de la trata de personas, aumentando así la sensibilización sobre el problema. Me atrevería a decir que como una generación mayor, quizás necesitamos educarnos sobre el uso de las nuevas tecnologías que para nuestra juventud es su segunda naturaleza. Tengo que reconocer que con cada uno de estos casos que enjuicio o superviso, siento que me he quedado atrás y que no he segui-

do el ritmo de las nuevas aplicaciones de telefonía móvil e incluso la lengua que nuestros adolescentes están usando para comunicarse. Los traficantes están bien versados en estas áreas y nosotros deberíamos de estarlo también.

Debemos entrenar a nuestros agentes de policía a identificar a las víctimas, porque sabemos que las víctimas adultas no se identifican a sí mismos, y, desde luego, los niños son aún más miedosos para hablar y buscar ayuda.

Debemos colaborar a través de las fronteras para facilitar el rescate de las víctimas y la identificación y el enjuiciamiento de sus explotadores. Por ejemplo, debemos establecer protocolos para el reconocimiento de un proceso legal a través de fronteras internacionales, y formar grupos de trabajo para mejorar la eficiencia y eficacia de las investigaciones de trata de personas; porque cuando los oficiales encargados de cumplir con la ley están en el proceso de intentar rescatar a un niño maltratado, o buscan impedir la victimización de un niño, cualquier día perdido en disputas burocrático es un día demasiado largo. En Atlanta, hemos tenido éxito en la obtención de información sobre los suscriptores de un proveedor de servicios de Internet en Canadá por el simple envío de una citación de dicha información. Esto nos ayuda a identificar rápidamente al usuario de una dirección IP en un sitio de mensajería que se utiliza comúnmente por igual por los niños y por los adultos acosadores, y nos lleva un paso más cerca de prevenir o detener el abuso de un niño. Este es el tipo de colaboración internacional que debe convertirse en una rutina. Debido a que las nuevas tecnologías han añadido una capa adicional de anonimato que los traficantes utilizan en su propio beneficio, hay que eliminar todas las barreras que nos impiden descubrir sus identidades y localizaciones, donde las puede haber.

Y hay que instituir leyes, en donde no existen actualmente, que prevén el castigo de aquellos que amenazan o de otra manera quieren intimidar a los testigos y a las víctimas, u obstruir la justicia durante el proceso judicial.

Lo más importante es que tenemos que ser muy conscientes al abordar los casos de niños y de la manipulación psicológica que han sufrido a manos de los traficantes adultos. En muchos casos, la evidencia presentada en la corte incluye expresiones de amor de las víctimas a sus traficantes. Esto es aún más probable que ocurra con los niños. La evidencia muchas veces in-

cluye la elección de la víctima de no escapar de su traficante de presentársele la oportunidad. Es aún menos probable que un niño víctima trate de huir, que una víctima adulta. El caso también puede incluir, como en otro caso reciente mío, la evidencia de que la víctima inició el contacto con el traficante. Considero que tal conducta por parte de una víctima que es menor de edad no constituye evidencia a favor del traficante. Una aparente lealtad de la víctima a su traficante no constituye una defensa viable de la conducta del traficante; no es evidencia incluso en la mitigación. Y esto es incluso más cuando la víctima es un niño. Más bien hay que ver estos hechos, o al menos considerar la posibilidad de que sean la evidencia de la necesidad que tiene el niño de estos servicios, de un apoyo incluyendo restitución, de tener acceso a servicios de asesoramiento y a veces asistencia más básica, como tener un lugar para vivir, alimentos y ropa. Centrándose en las necesidades de supervivencia y direccionándolas reduce las probabilidades de que él o ella sean víctimas nuevamente. Por lo tanto, las ONG y los gobiernos deben trabajar juntos para proporcionar estos servicios esenciales a los niños sobrevivientes y restablecer su dignidad, su confianza y sus libertades fundamentales.

En conclusión, como profesor, Sachs señaló al comienzo de nuestro programa, si podemos recordar esto poco entre nosotros podemos proteger a toda la humanidad. Los niños, simplemente por ser niños, son algunos de los ciudadanos más vulnerables de nuestro mundo. Los avances en la tecnología hacen que sea más fácil que nunca que puedan ser explotados. La educación, la colaboración internacional en investigaciones de tráfico, y un enfoque centrado en las víctimas de los casos que se presentan ante nosotros, son las herramientas en nuestra caja de herramientas. Debemos utilizarlas para luchar por la protección de nuestros hijos. Es imprescindible para la protección de la humanidad que nos encontramos con el objetivo de acabar con el abuso, la explotación y todas las formas de trata contra los niños. Muchas gracias.

Particularidades de la Trata de Personas en el Paraguay

Abg. Teresa Martínez Acosta

Fiscal coordinadora de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de personas y la Explotación Sexual Infantil de Paraguay

Las Sobrevivientes de la Trata

La Trata de Personas como uno de los crímenes del espectro de “Crimen Organizado”, si bien señalan las Naciones Unidas está en el Tercer Lugar en materia de producción de divisas para estos grupos criminales, podemos afirmar sin ningún temor a equivocarnos que por su naturaleza es el crimen que más daño provoca en sus víctimas, ataca lo central de nuestra condición humana —“la dignidad del ser humano” — utilizando los medios que sean necesarios para quebrantar y destruir esa condición humana para luego someter a la víctima a todo tipo de vejamen sin que ésta se resista. En este crimen atroz el objeto del ilícito y la víctima son la misma persona. La misma y única persona que recibe todo el impacto de este crimen. A diferencia de los crímenes comunes, que igual causan daño, por ejemplo en el *robo de un automotor*: el objeto del hecho criminoso es el automotor robado, y *la víctima es el dueño del automotor, se puede diferenciar claramente el objeto del crimen de la víctima*.

Esta particular característica de la trata de personas hace que necesariamente el principal foco de atención sea la persona afectada por el crimen a quien denominamos “víctima”, denominación poco feliz porque se deja a la persona en un sitio estático y de estigmatización del cual es sumamente difícil sacar, atenta esencialmente contra su reinserción social, debiéramos llamarlas personas afectadas por el crimen o directamente sobrevivientes. Si partimos de esta premisa es particularmente necesario que cada país conozca de las particularidades tanto de las personas afectadas como de los *modus operandi* para establecer un plan de acción a los efectos de su combate y atención a los/as sobrevivientes.

En este breve tiempo quiero hacer notar algunas de las particularidades de las personas afectadas por este crimen en Paraguay. Las víctimas de explo-

tación sexual son en un 100% personas de sexo femenino que comprende a adultas y adolescentes. En la trata laboral el 33% de las afectadas son mujeres y el 67% son de sexo masculino, tanto adultos como adolescentes.

Si nos abocamos solo a ver a las personas afectadas por la Explotación Sexual tenemos que sólo el 75% de las mismas llega a tener educación escolar básica, un 18% llega al nivel medio de educación, el 2% inició el nivel terciario y hay un 5% sin escolarización. Este es el resultado del estudio realizado sobre 83 personas afectadas directamente por la trata con fines de explotación sexual. Asimismo, en este mismo estudio se puede ver que la mayoría proviene de familias en extrema pobreza y con miembros numerosos, de 1 a 14 hermanos. Igualmente, se puede observar que el 42% de éstas son madres solteras.

De esta simple y superficial revisión se puede mínimamente concluir que estas personas antes de caer víctimas de este crimen tan atroz ya tenían conculcados sus derechos humanos de carácter económico social y cultural, de coberturas básicas y de preeminente responsabilidad Estatal.

Con esta visión de quienes son las personas afectadas por este crimen, es absolutamente entendible que tanta inequidad social y falta de oportunidades sean los factores determinantes de vulnerabilidad de las mismas. Quedan absolutamente vulnerables al engaño, a cualquier tipo de coacción para ser sometidas a la trata de personas, aprovechando la esperanza de las mismas de encontrar mejores oportunidades en el extranjero.

En nuestra experiencia como órgano azuzador, hacer visible la condición de las personas victimizadas antes de ser atrapadas por estas redes criminales ha servido para que los tribunales de sentencia al momento de realizarse los juicios orales no conviertan a las mismas en objeto de prueba, sólo las escuchan y ya no consideran siquiera interrogarlas por el presunto consentimiento, lo cual constituía una de las principales barreras para lograr la condena de los tratantes.

A través de esta modalidad el equipo técnico multidisciplinario que forma parte de la unidad especializada al realizar las evaluaciones psicológicas y sociales, incorporan en sus informes la dinámica de cómo ocurrieron los hechos, según las personas afectadas por este crimen, lo cual es valorado por los

jueces de sentencia y muchas de estas personas victimizadas ya no necesitan presentarse directamente a juicio evitándose de este modo su revictimización. Otra ventaja de visibilizar la situación anterior de estas sobrevivientes, es la posibilidad de cuantificar el daño sufrido por este crimen y exigir su reparación tanto a las autoridades del país de destino, como a los de su país de origen. Permite también al documentar la situación anterior de las sobrevivientes fortalecer la investigación de los países de destino acreditando el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad por parte de las redes criminales.

A partir de esta práctica hemos logrado sentencias condenatorias muy importantes sin que las sobrevivientes tengan que comparecer en juicio e incluso en aquellos casos en los que las mismas declaran por distintas razones a favor de sus tratantes.

Por la brevedad del tiempo otorgado, debemos concluir que debemos abandonar esa práctica de evaluar nuestro desempeño del país contra la trata a partir de las estadísticas, cuántas sentencias condenatorias, cuántas víctimas rescatadas, etc. Esto no traduce la realidad de un verdadero acceso a la justicia por parte de las sobrevivientes, la restitución de derecho es la vara de medición del acceso a la Justicia, no debemos perder la perspectiva de que estamos tratando con seres humanos y no con simples datos estadísticos. No es posible aceptar como exitosas a las prácticas que nos dan resultados de 100 condenas y 300 víctimas rescatadas, cuando las sobrevivientes simplemente son devueltas a la situación anterior a la captación por estas redes criminales, es decir al momento en que sus derechos esenciales estaban ya violados. No es posible que autoridades, de uno o más estados (gobiernos) pasen por ellas y luego queden en la misma situación en la que fueron captadas o peor aún por las deudas que han contraído para el viaje.

Es imperativo que sus derechos sean restituidos para lo cual es necesario que los programas de atención y las políticas de estado estén dirigidas a asistir a cabalidad a las sobrevivientes sin ningún otro requerimiento que el haber sido victimizadas por las redes criminales. Estas instituciones que no son de los órganos de persecución y juzgamiento deben trabajar de la mano con los mismos a fin lograr un real y efectivo cumplimiento de las normas restituyendo a las sobrevivientes sus derechos tan largamente conculcados.

***Crisis Planetaria, Trata de
Personas y Crimen Organizado***

Antonio Herman Benjamin

Brasil

Yo quisiera empezar con un agradecimiento muy especial de Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, que nos reúne aquí juntamente con toda la academia y creo, Monseñor, que la propuesta del Santo Papa ayer, de una Academia que tiene las manos en la tierra, usted y su grupo representan muy bien, no solamente en la teoría que nosotros entendemos como fundamental sino también la actividad práctica y todo lo que se escuchó aquí tuvimos de los dos, de la teoría y mucho también de la práctica.

Mi tema es la conexión entre la trata humana, el crimen organizado y la trata o los crímenes contra la naturaleza y la trata *wild life crime*, yo voy a empezar con las conexiones, primero la conexión ética y después la conexión que yo llamo estructural o estructurante criminal, y al final con dos conclusiones, una conclusión general y otra más específica.

Ya que estamos en una Academia y una academia es de ciencias sociales, vamos a empezar con la conexión ética entre la trata de especies, de la naturaleza y la trata humana. La primera pregunta que tenemos que hacer en este tema es ¿si es posible nosotros como profesionales del derecho pero también como filósofos, separar la protección de la vida de la protección de los fundamentos ecológicos de la vida? Esta es la pregunta fundamental, yo creo que en el *Laudato si'* el Papa ya nos indica prácticamente en todos los capítulos, que esta conexión es muy fuerte, es muy viva y es viva para todos nosotros, cristianos o no. El Papa ya en el primer párrafo del *Laudato si'* y ahí con una cita de San Francisco habla de la madre tierra y también nuestra hermana, una conexión familiar de aproximación no solamente poética, pero la naturaleza aquí hace parte de nosotros y nosotros hacemos parte de la naturaleza, la familia. Y más adelante el Papa, de nuevo y de una forma más fuerte, demuestra esta conexión que él llama inseparable, entre la preocupación por la naturaleza y atención en la justicia por los pobres y también por la paz interior, esto es

extraordinario porque nos conecta no solamente con la naturaleza, sino que conecta con la naturaleza con los más vulnerables, con los pobres.

Esta conexión ética, evidentemente como todas las conexiones éticas, representa muchos problemas para el derecho y aquí evidentemente no es la intención en 15 minutos de hablar de todos estos problemas, sino solamente llamar la atención para los dilemas que enfrentamos en la traducción del componente ético en figuras jurídicas o legales.

Aquí se habló mucho de la trata humana, del sistema de nuevos valores y cuando hablamos de naturaleza nos olvidemos un poco del *Laudato si'*, evidentemente aquí realmente estamos o tenemos un nuevo sistema y fue necesario el *Laudato si'* para hacer las conexiones más antiguas, más viejas, para demostrar aquí y esta conexión está con nosotros hace mucho tiempo, pero no en el derecho y esta es la dificultad, porque el derecho tiene una vinculación muy fuerte con la protección de la vida. Pero en verdad en derecho en toda su historia ha sido instrumento de destrucción de los fundamentos ecológicos de la vida, y por tanto, no es un cambio de incorporación del nuevo en el viejo, es un cambio absoluto de transformación del propio derecho del sentido de protección de las normas jurídicas.

Todos los daños ambientales que sufrimos, que la naturaleza, que la madre tierra, la hermana ha sufrido, ha sido por diseño del ordenamiento jurídico, mucho es por diseño, otras veces por omisión y otras veces por violación del sistema jurídico, pero en la gran mayoría es el propio diseño del ordenamiento jurídico el culpable de incorporar, de abrazar, estos valores que están tan vivos en *Laudato si'*.

Yo menciono un desafío presente en la trata humana, especialmente en el tema de la prostitución, es necesario trabajar la demanda y la oferta. Esto pasa en el mismo comercio internacional de especies amenazadas de extinción, porque no es suficiente trabajar la oferta, también tenemos que trabajar la demanda y como éste desafío hay otros tantos que son comunes a la trata humana, al tráfico y la trata internacional de especies amenazadas de extinción.

En conclusión, en esta parte de la conexión ética es importante reconocer el impacto en los procesos jurídicos y también en las prácticas judiciales de esta

preocupación en torno a la protección de los fundamentos ecológicos de la vida, cuándo y si queremos cambiar efectivamente el ordenamiento jurídico de nuestros países, y el propio ordenamiento jurídico internacional.

Vamos ahora a la parte más práctica de comparación, entre la trata humana y el comercio internacional de especies amenazadas de extinción. Ambos son fenómenos que mueven millones de dólares, en mi *paper* yo tengo los números, todas las estadísticas. En segundo lugar, es un fenómeno global y por eso necesita de cooperación internacional, tanto la trata humana como la trata de especies amenazadas de extinción y por eso aquí el Papa en *Laudato si'*, habla de la casa común, claro que podemos tener mil interpretaciones de la casa común, pero aquí es un sentido internacional, global, de toda esta preocupación con el planeta y con los fundamentos del planeta ecológico de la vida.

Además, en los dos casos hay una explotación de la pobreza y también de los más vulnerables y de nuevo *Laudato si'* va directamente al punto, porque nos dice que la tierra misma está y, miren por favor la expresión, está entre los más abandonados y maltratados de nuestros pobres. Yo no necesito decir más nada, porque no hay más nada que decir en esta conexión estructural, pero también criminal con los más vulnerables.

La trata de personas y el comercio internacional de especies amenazadas de extinción sacan a las personas de comunidades aquello que yo llamo la dignidad ecológica. Durante 2 días nosotros hablamos de la dignidad humana, pero es parte de la dignidad humana, la dignidad ecológica que viene con capital natural, que viene con una biohistoria. Cada uno de nosotros tiene su pequeña historia con los ecosistemas, dónde nacimos, a donde crecimos, y qué tragedia regresar donde nacimos: antes había un bosque y ahora no hay más; había una fuente de agua, ya no hay más. Y al hablar evidentemente de la herencia cultural, pensemos en los pueblos indígenas que dependen de la naturaleza y de esta biohistoria para su propia sobrevivencia y su dignidad.

Y termino con un grupo de otras conexiones. Primero tenemos una más jurídica, la conexión más cercana a nosotros. En los dos casos hay una disminución, una fragilización del Estado de derecho de la credibilidad y del prestigio del sistema judicial, los dos son dirigidos por el crimen organizado

y en verdad trabajan con los mismos esquemas, son las mismas *gangs* internacionales que muchas veces hacen, que lucran, con estos dos fenómenos.

Evidentemente, muchos problemas de *complex law enforcement*, el comercio internacional de especies amenazadas de extinción, y evidentemente, en conclusión de estas conexiones estructurantes de criminales, hay todo el tema de *good governance*, integridad de los jueces pero también del sistema público.

Mi primera conclusión, una conclusión estrecha, si quisiera hacerla superficial y tan obvia que no sé si es exactamente una conclusión pero a veces lo mejor es ser obvio para llamar la atención, es que nuestro sistema judicial en estos dos días, lo vimos, no está preparado para enfrentar estos tipos de ilícitos, la trata humana y la trata o comercio el internacional de especies amenazadas de extinción, en varios países en verdad no se quejen que esta transición así concluya.

Yo finalizó de nuevo, y no podría ser distinto, con la idea del Estado de derecho ambiental *enviromental rule of law*, que nosotros, estamos trabajando con esta idea y para de nuevo el *Laudato si'*, aquí no estamos en un romanticismo *naive*, no es visto que hablamos aquí, no somos utópicos, son muy pocos los jueces utópicos si es que existe alguno, aquí en verdad nosotros queremos hacer esta transformación, es que está aquí, lo habla el Papa y lo voy a leer en inglés porque no tengo mucho tiempo para la traducción, bueno voy a intentar hacer una traducción. Muchos esfuerzos para la crisis ambiental son inefectivos, no solamente porque hay oposición, sino porque muchas veces falta interés y falta de interés, Monseñor, no es exactamente lo que pasa aquí.

Muchas gracias.

CUMBRE DE LOS JUECES SOBRE LA TRATA DE PERSONAS Y EL CRIMEN ORGANIZADO



3-4 Junio 2016 • Casina Pio IV • Ciudad del Vaticano

Oradores

Miguel Eugenio Abásolo
Leslie J. Abrams
Daniel Eduardo Adler
Miguel Ángel Aguilar López
Syed Mansoor Ali Shah
Vladimir Aras
Antonio Herman Benjamin
Eber Omar Betanzos Torres
Gabriel Bustamante Peña
Elizabeth Butler-Sloss
Guillermina Cabrera Figueroa
Sebastián Casanella
Yves Charpenel
Jorge Chavarría Guzmán
Jonas Christoffersen
Marcelo Colombo
Susan Coppedge
Rômulo de Andrade Moreira

Corinne Dettmeijer-Vermeulen
Francisco Javier Díaz Verón
William S. Duffey, Jr.
Edgar Elías Azar
Julián Ercolini
Michael B. Gerrard
Maria Grazia Giammarinaro
Aurelijus Gutauskas
Carlos H.B. Haddad
Mari Heidenborg
Susumu Honda
Branko Hrvatin
Kevin Hyland
Antonio Ingroia
Santiago Inchausti
Virginia M. Kendall
Claudio Rodolfo Kishimoto
Marcel Lemonde

Antonis R. Liatsos	Mynor Rolando Pinto Sánchez
Ariel Oscar Lijo	Julio Piumato
Rosario López Wong	Margarita Popova
Ricardo Luis Lorenzetti	Christopher Prince
Diego Sebastián Luciani	Sandra Patricia Ramírez Montes
Beverly B. Martin	Rodolfo Fernando Ríos Garza
Teresa Martínez Acosta	David W. Rivkin
Susana Medina de Rizzo	Franco Roberti
Maria Monteleone	Giovanni Salvi
Richard S. Moultrie, Jr.	Yonette Sam-Buchanan
Christos Naintos	Alison Saunders
Ulrich Nachtlberger	María Romilda Servini de Cubria
Zunilda Niremperger	Anna Skarhed
Philip Norton of Louth	Richard W. Story
Sang-jin Oh	Janet Tello Gilardi
María Teresa Paredes Hernández	Sergio Gabriel Torres
Luis Alberto Petit Guerra	José Luis Vegas Roche
Zélia Luiza Pierdoná	Carlos Alberto Vera Barros

Observadores

- Guido Acquaviva | *European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EU-LEX), Italy*
- Kumai Bayang Akaahs | *Justice of the Supreme Court of Nigeria*
- Yanina Soledad Basílico | *Coordinadora del Comité Nacional contra la Trata de Personas, Argentina*
- Elisabetta Bettega | *Lawyer, Italy*
- Sor Eugenia Bonetti | *Presidente Slaves no more, Italy*
- Francesco Bruno | *Lawyer, Italy*
- Alberto Buriani | *Commissario della Legge, Republic of San Marino*
- Carlo Caponcello | *Sostituto Procuratore Nazionale, Italy*
- Jaqueline Corbelli | *Founder CEO-BrightLine, USA*
- Juan Pablo Curi | *Fiscal Federal de Primera Instancia, Argentina*
- Péter Dárak | *President of the Curia of Hungary*
- Maurizio de Lucia | *Sostituto Procuratore Nazionale, Italy*

- Barbara de Muro | *Lawyer, Italy*
- Gabriel de Vedia | *Fiscal, Argentina*
- Marco Del Gaudio | *Sostituto Procuratore Nazionale, Italy*
- Antonio del Moral García | *Magistrado, Spain*
- Fr. Tonio dell'Olio | *Libera-Associations, Names and Numbers Against Mafia, Italy*
- Mario Di Giulio | *Lawyer, Italy*
- Jaroslav Fenyk | *Vice-president of the Constitutional Court, Czech Republic*
- Stefano Fumarulo | *Direttore sezione politiche per le migrazioni e antimafia sociale, Regione Puglia, Italy*
- Giuseppe Giacomini | *Lawyer, Italy*
- Andrew Goledzinowski | *Ambassador for People Smuggling and Human Trafficking for Australia*
- Maria da Conceição Gomes | *Juíza de tribunal de apelação, Portugal*
- Samuel González Ruiz | *Profesor de derecho, México*
- Marcos Grabivker | *Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal y Económico, Argentina*
- Gloria Guzmán Duque | *Jueza, Colombia*
- Joseph Hadjigiovanni | *President of the Industrial Disputes Court, Cyprus*
- Elías Huerta Psihas | *Presidente de la ANDD, Mexico*
- Salim Joubran | *Justice of the Supreme Court of Israel*
- Antonio Laudati | *Sostituto Procuratore Nazionale, Italy*
- Luciano Homero Lauría Paz | *Juez, Argentina*
- Franca Maria Rita Imbergamo | *Sostituto Procuratore Nazionale, Italy*
- Lilian Lorena Ledesma Jara | *Agente Fiscal de Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Paraguay*
- Giovanni Lega | *Presidente ASLA, Italy*
- Irma Encarnación Llano Pereira | *Agente Fiscal de Unidad Especializada en Delitos Informáticos, Paraguay*
- Rory MacCabe | *Judge of the Circuit Court, Ireland*
- Francesco Mandoi | *Sostituto Procuratore Nazionale, Italy*
- José Midas Pasqual Marquez | *Court Administrator of the Philippines Supreme Court, Philippines*
- José Antonio Martín Pallín | *Fiscal, Spain*
- Michal Mikláš | *President of the Criminal Court, Czech Republic*
- Olimpia Monaco | *Judge – Unit for Legislative and International Affairs, Italy*
- Emanuele Montemarano | *Lawyer, Italy*

- Madai Morales Albino | *Law student and human trafficking survivor, México*
- Lorena Moroni | *Italy*
- Noemí Lara Muñoz | *Law student and human trafficking survivor, México*
- Ethan Nadelmann | *Executive Director Drug Policy Alliance, USA*
- Rosi Orozco | *President, United vs. Trafficking Commission, México*
- Nicoletta Parisi | *Consigliere Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Italy*
- Carlos Andrés Pérez Gallego | *UNODC, Colombia*
- Valeria Pierfelici | *Magistrato Dirigente del Tribunale, Repubblica di San Marino, Republic of San Marino*
- Eugenia Pontassuglia | *Sostituto Procuratore Nazionale, Italy*
- Laura Pronio | *Freshfields Bruckhaus Deringer, Italy*
- Elisabetta Pugliese | *Sostituto Procuratore Nazionale, Italy*
- William Fernando Quiroz Salazar | *Juez de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Perú*
- Gillian Rivers | *Co-Chair Anti-Slavery Commission, UK*
- Domingo Romano | *Lawyer, Argentina*
- Giovanni Russo | *Sostituto Procuratore Nazionale, Italy*
- Sonia Ehrlich Sachs | *Director, Center for Sustainable Development Columbia University, USA*
- Giustino Sciacchitano | *Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia, Italy*
- Tania Scivetti | *Advocate and Solicitor, Malaysia*
- Ottavio Sferlazza | *Procuratore della Repubblica di Palmi, Italy*
- Muhammad Shafee Abdullah | *Malaysian Representative Commissioner to ASEAN, Malaysia*
- Garrett Sheehan | *Court of Appeal, Ireland*
- Cesare Sirignano | *Sostituto Procuratore Nazionale, Italy*
- Steven Sprague | *Lawyer, Italy*
- Vittorio Turinetti | *Lawyer, Italy*
- Kappeyne van de Coppello | *Public Prosecutor, Netherlands*
- Anje van Delden | *Senior Dutch THB Judge, Netherlands*
- Adolfo Vannucci | *Presidente del Conservatorio di Santa Cecilia, Italy*
- Bill Vendley | *Secretary General Religions for Peace International, USA*
- Federico Hernan Villena | *Juez federal criminal y correccional de Lomas de Zamora, Argentina*
- Claudio Visco | *Lawyer, Italy*
- Juan Pedro Yllanes Suárez | *Diputado independiente en el Congreso, Spain*



Memoria

Cumbre de Jueces sobre Trata de Personas y Crimen Organizado

“ Los jueces están llamados hoy más que nunca a poner gran atención en las necesidades de las víctimas. Son las primeras que deben ser rehabilitadas y reintegradas en la sociedad y por ellas se debe perseguir sin cuartel a los traficantes y ‘carníferos’. ”

Papa Francisco

Bajo el liderazgo de SS. el Papa Francisco, la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, organizó el pasado mes de junio del 2016 la *Cumbre de los Jueces sobre la Trata de Personas y el Crimen Organizado* a la que acudieron jueces, fiscales y académicos de más de 50 países, para compartir sus experiencias y reflexiones en la defensa de la dignidad y libertad de hombres, mujeres, niños y niñas que han sido víctimas de trata y tráfico de personas y otras formas de esclavitud moderna.

La *Cumbre* fue inaugurada por el Papa Francisco, quien expresó su voluntad para perseguir y erradicar a todas estas nuevas formas de esclavitud y de criminalidad organizada, pidiendo a los jueces y fiscales del mundo que tomen consciencia de este desafío, para que juntos, “compartiendo experiencias y buenas prácticas, abran nuevos caminos de justicia en beneficio de la dignidad humana, de la libertad, de la responsabilidad, la solidaridad y la paz”. En esta dirección, bajo la conducción de Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller de la Academia, con la colaboración de la Universidad *Ius Semper* de México, se elaboró la presente edición en idioma español que contiene la totalidad de los trabajos de la *Cumbre*.



